

UNIVERSIDAD DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO



TESIS DOCTORAL

**La integración centro-americana en el derecho
constitucional hondureño**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Mario Ramón Padilla Ramirez

DIRECTOR:

Luis Sánchez Agesta

Madrid, 2015

Rd. 54.327

140

LA INTEGRACION CENTRO-AMERICANA EN EL

DERECHO CONSTITUCIONAL HONDUREÑO.

-O-



BIBLIOTECA
DE DERECHO

TESIS DOCTORAL DE

Mario Ramón Padilla Ramírez

Dirigida por el Profesor:

D. LUIS SANCHEZ AGESTA.

-O-

A mis padres, Leónidas y Berta;
A mis hermanos, Jorge, Delma, -
Leónidas y Roger.



CAPITULO, I

GEOPOLITICA DE HONDURAS

El Factor Económico
El Factor Político
Factores Sociales

DESARROLLO

La República de Honduras se encuentra enclavada en el corazón mismo de Centro-América, por lo que el espíritu Centro-Americanista se encuentra, de forma muy arraigado, en el pensar y sentir de sus habitantes y ello se debe a su posición geográfica. No en vano tiene fronteras con Nicaragua en la parte oriental, Guatemala en la parte occidental y con El Salvador, en el Sur, delimitando al Norte con el Océano Atlántico y al Sur con el Océano Pacífico.

El conocimiento de la realidad geográfica es fundamental para entender la realidad socio-económica del país en sus diferentes aspectos.

Aunque la superficie de Honduras sea aproximadamente de unos 113.000 kilómetros cuadrados, aunque no ha sido medido con exactitud; es decir que es uno de los países más grandes del istmo Centro-Américoano.

Honduras cuenta en el mar Caribe con unos 850 kilómetros de costa; en el Océano Pacífico sólo tiene unos 150 kilómetros. Todo ello comprende el Golfo de Fonseca.

Debe de tenerse en cuenta que la parte comprendida por el norte del país, es decir por el mar Caribe, se extiende a lo largo de una llanura costera, de unos 150 kilómetros, en algunos lugares como el Valle de Sula y la Mosquitia; en otros lugares es más estrecha, de apenas unos 10 kilómetros, como sucede en el Departamento de Atlántida, en la región comprendida entre la montaña de nombre de Dios y el mar Caribe; en la región de Mosquitia es más extensa, formada ésta por selvas vírgenes y sábanas.

Honduras se caracteriza por ser un país muy montañoso; dichas montañas son las que sirven de líneas divisorias como en el caso - de la Cordillera del Meredón con Guatemala y Dipiltón con Nicaragua. Con el Salvador por medio de Río Lempa y algunas montañas. Dado el gran número de montañas dentro del mismo país se ha marcado, de una forma peculiar el aislamiento de algunas regiones y ciudades, que solo, hasta el momento presente, la aviación, la radio y la televisión unen estrechamente.

La costa Atlántica es donde están ubicadas las grandes compañías fruteras, Stander Company y United ~~Fruit-Company~~. A pesar de - ser la región más calurosa del país es la más fértil, debido a que tiene las mejores tierras y llueve casi todos los días, por lo que es ideal para frutos tropicales. Dichas compañías han conseguido - sacar sólo de una parte la mayor producción de bananas del mundo, - pues de esta gran llanura solo está cultivada la mitad, ya que la otra, comprendida por la Mosquitia, es zona selvática, y está reconocida por las constituciones anteriores como territorio en reserva.

En la costa del Pacífico, a pesar de existir la llanura costera que llega a tener unos 50 kilómetros, la otra parte, de sólo 10

kilómetros, no es tan fértil. Sólo la parte de las vegas de algunos ríos, lo es no obstante no esta cultivada con los medios científicos y técnicos que tiene la parte norte del país. Pero los propietarios de la tierra son hondureños y ésta es la región más densamente poblada del país.

Debe de tenerse en cuenta que las costas son las regiones de penetración, en las cuales, dado el fácil acceso por sus planicies y la buena comunicación marítima, fluvial y terrestre, son el punto idóneo para el comercio exterior, ya que un barco que sale de Puerto Cortez, llega a New York en dos días. Esto es un factor determinante y de influencia en aquellas poblaciones que allí laboran, tanto en el comercio como en la cosa pública.

Los ríos desarrollan su caudal en ambas llanuras costeras, - siendo navegables algunos como el Ulua y Segovia, antes de su confluencia con el Océano.

La situación montañosa, aparte de hacer más difícil el transporte por tierra, dada su costa, no tiene las planicies que tiene Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Dichas montañas -

5.-

se caracterizan por que son sumamente escarpadas, siendo al mismo tiempo, las montañas idóneas para el cultivo del café y otros cultivos en que se tengan que hacer grandes talas de árboles. Esto - producen la esación.

Son precisamente las llanuras costeras donde está localizada la mayor densidad de población, donde se encuentran las mayores - ciudades, dado al mayor desarrollo mercantil. Con relación a las - vías de comunicación, sólo posee cerca de 3.500 kilómetros para - el transporte, en los cuales están incluidos unos 1.300 kilóme- - tros de vías férreas de las que sólo unos 130 kilómetros son estatales; los restantes pertenecen a las compañías fruteras, que - - principalmente los utilizan para el transporte de sus productos - a lo largo de la costa Atlántica, es decir, que no contribuyen en mayor grado a la penetración en el interior del país.

El clima de Honduras está en gran parte determinado por los vientos solarios, que soplan del Atlántico al Pacífico, lo que hace que la temperatura del país sea agradable todo el año. A pesar de que en el verano los rayos del sol caigan perpendicularmente, - éstas no calientan tanto, debido a que lo impiden dichos vientos- (1).

6.-

La temperatura varía según las regiones del país. En las regiones altas el clima es fresco y llega, a veces, a 10 grados centígrados y hasta menos, y en las regiones bajas es ardiente, completamente tropical. La temperatura media anual en las costas del Atlántico y del Pacífico es de un poco más de 27 grados centígrados; en la zona central de 24 grados y en las zonas elevadas del país alrededor de 15 grados.

En lo que se refiere a la cantidad de lluvia, es alrededor de 254 centímetros en la Costa Norte, disminuyendo en el interior del país, en la zona central y de 152 centímetros en la región del sur del país.

En Tegucigalpa la máxima es de 32° en mayo y la mínima de 10° en diciembre. La estación lluviosa ("invierno") es de junio a noviembre.

No obstante existen gran cantidad de montañas en el interior y también fértiles valles, al mismo tiempo que grandes sabanas.

El nombre de Honduras viene de que Cristobal Colón al llegar a la costa norte de Honduras en la desembocadura del río Coco o Segovia, dijo: "¡Gracias a Dios que hemos salido de estas Honduras!".

De aquí el nombre de Honduras. Además se le ha llamado Higueras por la cantidad de higueras existentes. Pero el nombre real lo dió Colón en su cuarto y último viaje.

Lo que determina de una forma especial la idiosincrasia hondureña son las montañas de su suelo, ya que no solo son la causa del aislamiento de unas ciudades con otras, sino que impiden de esta forma unas relaciones estrechas entre los diferentes grupos humanos. Mientras en la parte norte, especialmente en las Islas de la Bahía, que fueron ocupadas por los piratas en tiempos del reinado de Carlos III, tienen aún no sólo las costumbres inglesas sino que también usan el idioma inglés, el español se usa oficialmente. Otro tanto ocurre en la costa norte de las plantaciones y puertos donde son corrientes los dos idiomas. La influencia norteamericana está muy marcada, pero basta pasar cualquiera de las montañas y nos encontraremos con la realidad entrañable hondureña, auténticamente hispánica. Cualquier pueblo nos recuerda la herencia hispana en sus usos y costumbres, así como el color blanco de los pueblos de Castilla. No obstante, en las ciudades hondas del interior se nota el cambio dado, la actividad comercial, y lo mismo en la costa del Pacífico.

El aislamiento de los pueblos, teniendo una economía netamente agrícola, y los deficientes medios de transportes y de cultura hacen que aquí la cantidad de analfabetos sea de un 65% como consecuencia del verdadero estado de abandono en que se encuentra la educación primaria, aunque este fenómeno sea totalmente distinto en las ciudades.

Otra de las muchas causas que impidió el desarrollo del país durante el período colonial, es que Honduras no era sitio atractivo para hidalgos españoles; pues no siendo un Centro-Administrador de importancia, sólo individuos de poca educación iban a radicarse allí, en busca de oro y plata. Esta circunstancia facilitó la mezcla de las razas autóctonas con la europea. Pero en cambio impidió que se desplegara una nueva vida cultural, hecho que retardó la organización Política del país.

Determina de una forma vital su peculiar geografía el que la región sur, se encuentra densamente poblada, y por esto, la llanura costera del Océano Pacífico, tiene una participación estrecha en la vida económica de los demás países del Istmo Centro-Americano, debido a que por allí pasa la carretera Panamericana, además de la eficiente red de vías de penetración por tierra y la vía marítima

ma, la cual repercute de forma trascendente en los demás sectores de la actividad económica, así como en el aspecto socio-económico y político.

El crecimiento demográfico de los últimos años se debe a la efectividad en el tratamiento de las enfermedades, lo cual de la densidad de la población en la zona sur del país, que es de 54 - personas por Km². la densidad de población para todo el país es - de 15 personas por Km².

La peculiar geografía de Honduras en relación con Centro-América, hace que de una forma dinámica repercutan los acontecimientos de los países hermanos, como lo demuestra nuestra agitada historia política, la que le tocó pasar a todo el istmo Centro-Americano.

EL FACTOR ECONOMICO

La influencia que tiene el factor económico sobre el factor-político, es determinante para saber el estado de desarrollo o subdesarrollo en que se encuentra un país en un momento determinado. Honduras dado su especial geografía y la forma en como dentro de ésta se encuentran distribuidos los grupos humanos, es una eco

nomía netamente agrícola, ya que una gran parte de la población se dedica a la agricultura. A ella lo hacen un 66,7%; a servicios un 13,7%; a industrias un 9,7%; al comercio un 4,8% y a otras actividades un 5,1%.

La mayor fuente de riqueza viene de la agricultura. Debe distinguirse especialmente aquella agricultura que constituye un patrimonio familiar y que en la mayoría de los casos es una fuente de subsistencia para la familia campesina, en la mayoría de los casos aislada de los mercados nacionales y Centro-Americanos donde se venden los productos siendo generalmente de donde salen los mejores soldados en defensa de su patria, así como la cuna de los libertadores de su pueblo.

Una economía agrícola hace que en ella, políticamente hablando, se afiancen los partidos políticos tradicionales, a diferencia de las grandes empresas en las ciudades, donde el cambio de un partido a otro se da en proporción a la organización y atractivo que presentan sus líderes. En gran parte se debe en muchos casos a que el índice de analfabetos es mayor en el campo que en la ciudad.

Debe de tenerse en cuenta aquel sector de la economía que labora en las compañías modernas, las minas e industrias, ya que és-

te es un sector laboral, que dada la magnitud de dichas empresas, tiene carácter de monopolio, y se le dá especial interés en defensa de sus trabajadores. Estos son agricultores, algunos cualificados, que están formando la mayor parte del proletariado del país; y esto se debe a que siendo agrícolas llegará a ellos algo tarde la organización sindical, y legislación laboral. Muchos de los problemas políticos y sociales que presenta el país, se deben a que no han sabido enfocar la evolucion dentro del país de una forma realista, cuando nuevos medios de vida en las regiones aún sin cultivar & a que el Estado se ha limitado a guardar el orden, dejando lo demás a la propia dinámica de la situación de cada uno de ellos.

El problema agrario existe en las regiones densamente pobladas donde las tierras del interior son del peculio familiar. Debe destacarse el sistema de cultivo de las explotaciones de las grandes plantaciones con medios técnicos modernos, a diferencia del interior, donde aún en la actualidad, no se usa el arado pero que aún así se obtienen tres cultivos al año.

(2) Las dos terceras partes del país están despobladas. Se caracterizan estas tierras por que no hay medios de comunicación haciendo falta una auténtica colonización de tierras científicamente

ordenadas, para favorecer al trabajador del campo y a su familia. La mano de obra es barata en las compañías extranjeras y el que no tiene tierras del interior, ayuda para que mejore la situación ya que el exceso que hay del campo a la ciudad se debe a la situación difícil de la vida en el campo, donde además se une el problema de las migraciones, mal orientadas dentro del mercado común ya que el obrero salvadoreño, al competir con el hondureño, se plantea el problema de aquel que viene del campo, y del que viene de la ciudad con todos los males y virtudes. Lo defectuoso de ello es no haber previsto los suficientes puestos de trabajo ni haber sido orientados ni programados (promocionados) aquellos sectores de la actividad económica donde hacen falta.

Partiendo de enero de 1960 y suponiendo que se considera a la ~~persona~~ económicamente activa a partir de los diez años de la población total, vemos un 66,4% del total, constituye la fuerza de trabajo del país, y que, de ese total, 74,6% son hoy el 58,3% mujeres.

Aunque es probable que el número de hombres registrados como económicamente activos sea muy bajo, el problema es el gran núme-

ro de mujeres declaradas económicamente activas. El problema estriba en que los empleados censados fueron demasiado generales y tendiendo a inclinarse como trabajadores familiares o asalariados (en agricultura o en cualquier otra actividad) a todas las personas — que de alguna forma contribuyeron a la empresa familiar sin recibir retribuciones.

PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS POR CIENTO TOTAL DE LOS 10 AÑOS 0

MAS DE EDAD EN 1950

<u>País</u>	<u>Total</u>	<u>Hombres</u>	<u>Mujeres</u>
Honduras	66,9	74,6	58,3
Costa Rica	49,7	84,8	15,2
El Salvador	49,7	84,5	16,2
Guatemala	48,9	84,1	12,5
Nicaragua	47,4	85,1	13,0
Panamá	50,7	78,6	20,3
México	48,7	82,9	12,5

La densidad de población corre paralela a las ciudades notándose especial desarrollo en el sector agrícola, que dado el mercado— que hay en aquélla tiene una actividad económica mayor repercutien—

do en beneficio de éste. Así, en los lugares aislados del país los precios son en algunas ocasiones cuatro veces más bajos. Esto ocurre, por ejemplo, con el café, donde dicho producto está más próximo a los mercados de exportación y da progreso a la villa donde -- aquél se produce. Ello es significativo, porque la producción de este producto, está en manos de nacionales y no de monopolios extranjeros. Lo cual influye de forma eficiente en el progreso y promoción de cada una de aquellas ciudades a diferencia de aquellas otras que están aisladas y que carecen del impulso que da el progreso mate- -- rial. Esto lleva consigo también las mejoras sociales y florecimiento de los pueblos, a diferencia de las otras que permanecen estables, produciéndose un éxodo progresivo sobre las ciudades, por no haber en estos lugares las fuentes de trabajos idóneos.

Al mismo tiempo, en la llanura costera, tanto del Atlántico como del Pacífico, en especial los lugares mejor comunicados, desde -- los centros de producción hasta los mercados, tienen un índice de -- crecimiento mucho mayor en todos los aspectos; en el humano, la preparación colectiva de sus habitantes es mayor y prácticamente ha desaparecido en estos lugares el analfabetismo.

Otro tanto sucede en los lugares fronterizos. En especial, - los logros conseguidos por el mercado común se hacen aquí una rea lidad, no llegando, por consiguiente, a los lugares del interior, que carecen por consiguiente de medios de transporte adecuados pa ra el desarrollo.

Especial interés para el conocimiento de la estructura econó mica hondureña es el eterno desequilibrio en nuestra balanza, de- pagos. Ello se debe a que la importación es mayor que la exporta- ción. Por una parte se debe a la cantidad de maquinaria que el país necesita, por otra en el éxodo de capital que proviene de la agri cultura dado que, como no es nacional, ésta, una vez vendida la - materia prima que se saca del sector agrícola o minero, se queda- fuera del país. A bien seguro en maquinaria o bienes de equipo pa- ra aquéllas explotaciones. Las compañías como la United Frit Com- pany son grupos de presión, más si se tiene en cuenta lo que en - un país de mono-cultivo como Honduras, que depende de determinados productos, cualquier anomalía que se produzca en estos lobbys (gru pos de presión) representa en toda la economía, bien sea una huel- ga o deficiencia por parte de los monopolios y en su venta en los mercados mundiales.

Por que no está dignificada nuestra economía. Y por eso, cuando se crean nuevos centros de producción y otros mercados no solo son nuevos puestos de trabajo, sino que se afianzan con ello la independencia con relación a estos grupos de presión, que dada su — fuerza económica y organización de hecho imponen una determinada — política, unas veces a favor de ellos y otras en contra, como en — la agitada vida política del país ha quedado bien patente, pero — que nunca o pocas veces, están de acuerdo con los intereses supremos de la patria, sino de los grupos minoritarios que los patrocinan.

A la dignificación de nuestra economía, en especial a aquellos sectores más atrasados y que constituyen la mayor parte de la población laboral, debe el Estado dedicar especial atención, ya — que, nuestro atraso, en el quehacer humano, está determinado por — ello. Nuestras leyes de rango constitucional y las leyes generales, dan a ella especial atención en la última década.

Uno de los caminos para hacer realidad la integración es a — través del mercado común, pues éste debe de llegar al pueblo, para que de esta forma se identifiquen los Centro-Americanos entre sí.— Pero, al mismo tiempo, los intereses, tienen que ser lo suficienteme

mente fuertes, y colectivamente deben de responder a las necesidades de cada país y a la del istmo en general.

Se debe estimular lo que une a los pueblos, no a fomentar viajas rencillas con las que, en todo tiempo, son los propios pueblos los que han salido perjudicados, debido al mal conocimiento de estos entre sí.

Honduras, en especial aquellas de sus regiones fronterizas de fácil acceso, deben de tener relaciones con los otros mercados centro-americanos, no sólo por responder a un deseo sociológico de los propios pueblos de Centro-América, sino porque será el camino para que con él todo el país y los demás del istmo, se identifiquen, se conozcan mejor y se complementen mutuamente, en aquellos aspectos de la actividad económica a que cada uno le es posible, y de acuerdo con sus propias posibilidades.

No se debe tratar sólo a nivel del Estado sino también al alcance de los particulares, ya que no depende de unos cuantos la integración, sino de toda la colectividad nacional de cada uno de los pueblos respectivos.

EL FACTOR POLITICO

La característica de la vida política patria, está determinada y claramente definida por la participación que han tenido ellos los dos grandes partidos políticos, a saber: Partido Liberal y Partido Nacional.

Ello se debe a que en un país como Honduras, que es esencialmente agrícola, la vida rural en lo político acentúa la forma tradicional de los dos partidos. Si además se tiene en cuenta la rivalidad y continuas luchas partidistas a lo largo de nuestra historia, encontramos que es precisamente en las pequeñas ciudades, en la vida departamental, donde se nutrieron y se estructuraron los dos partidos.

En la vida local, que es esencialmente agrícola con una economía familiar, en un principio la lucha fue continua por ser de uno o de otro partido y al elegir el candidato se fijaron más en la persona que, en el programa de gobierno que aquel representaba, si se tiene en cuenta el contacto directo entre el elector y los elegidos, la solidaridad es aún mayor.

Cuando los que son liberales o bien nacionalistas, eligen su candidato tratan de que responda éste a los intereses de su instituto político, no solo para conseguir el triunfo sino para censurar a éste.

Una vez que llegan al poder, uno u otro grupo político, tratan de formar el gobierno y a distintos niveles en la administración con cuadros de su propio partido.

Este es el origen de una lucha por el poder violenta, sorda e inflexiva, ya que no se atienen al mejor acierto, ni a los éxitos del contrario, sino a los de su propio partido, según si se encuentra éste en la oposición o en el poder.

Pero el crecido número de analfabetos en otros tiempos fue la hoguera que contra cualquiera de los dos partidos trataron los políticos de turno, en el poder o en la oposición, de hacer suya, a través de la demagogia o bien de líderes sin escrúpulos que pensaban más en su prestigio y fortaleza personal que en la patria. Por ello, estas masas, una vez defraudadas, se lanzan a la violencia hasta que a partir de 1932 se terminó de una vez con los grupos armados, que uno y otro grupo político tenían entre sus partidarios en los pueblos.

Las nuevas formas de comunicación social: la radio, la televisión, hacen que llegue la palabra a los diferentes sectores sociales. Aunque anteriormente la prensa fué claramente el cuarto poder ésta dejó sentir siempre una gran influencia en la vida pública — del país, ya que si bien, antes de 1932, las malas vías de comunicación, hacían que ésta fuera esencialmente local siempre existió — desde la independencia una información periodística y una orientación adecuada entre los diferentes grupos políticos que tienen sus propios periódicos, existiendo otros, al margen de la lucha entre los dos grupos.

Por ello, en las ciudades, dada la formación que poco a poco — llegan al obrero y al campesino, se trató por todos los medios de captarse a los demás grupos humanos no comprometidos en favor de — los dos partidos.

Tanto el partido Liberal como el Partido Nacional tienen elementos en su seno de todas las tendencias políticas, tanto de extrema derecha, como de extrema izquierda, lo que se debe a que el hombre del campo no mira la tendencia sino el partido. En la última d'ecada los partidos han perdido su atractivo político aunque no su —

prestigio y sus poderes, lo que se debe a sus propios dirigentes, - que no han sabido canalizar los ideales y aspiraciones de las masas liberales, así como del campesino, la dinámica de los propios acuerdos de ambos partidos. No han experimentado cambios de personas - - idóneas ni de mentalidad que capten más justamente la dinámica política de la patria, ya ésta crisis se debe al resurgimiento de otros grupos no comprometidos, como el ejército, por la propia intransigencia de los dirigentes de ambos partidos.

La impericia de ciertos políticos para superar los cambios que la propia dinámica política tiene consigo ha hecho que poco a poco se note este desconocimiento en la vida institucional. A partir de la Administración de Juan Manuel Gálvez se crean, con gran acierto, varias instituciones con carácter totalmente apolítico, pero que — han tenido una gran trascendencia en la vida pública. Al organizarse la Banca, se da un paso adelante en el desarrollo del país, al mismo tiempo que el ejército se moderniza y se crean nuevos cuerpos totalmente despolitizados, no comprometidos con ninguno de los dos grupos que, a largo plazo y dada la propia ineficacia de los partidos, dará fuerza a estas otras fuerzas que junto con el movimiento-

sindical y las asociaciones tienen gran incremento en la vida ciudadana.

No obstante, el sector agrícola que es la fuerza sobre la que gira toda la vida política del país, su eficacia también llega, aun que hace falta una mayor participación de todos los sectores, que haría, al mismo tiempo, que se regeneren los propios institutos — políticos tradicionales para una mayor comprensión y solución del devenir político patrio.

De la vida local, que es la mayor parte de la población, en — el sector rural de la creación de asociaciones, y la propia inspiración de los dirigentes en instituciones fuera de nuestras fronteras, especialmente en algunos países del Istmo, se ha ido poco a — poco a una centralización, la cual es contraproducente si se tiene en cuenta que está hecha de acuerdo con el presidente de turno y — sus partidarios, que se olvidan lamentablemente de la gran masa rural del país y que muchos de ellos ignoran, por completo, los problemas del campo creando con ello un abismo mucho mayor al no darles mayor participación en la representación local, ya que se han suprimido las elecciones de alcaldes por los distritos, que no son

elegidos, sino nombrados por el propio gobierno, siendo estos, hace una década el termómetro político de las elecciones presidenciales y de las aspiraciones de la mayoría del pueblo.

Todo ello ha sido la causa del desprestigio de los propios — partidos unido al desacierto e impopularidad en la solución de los propios problemas. Los militares surgen como consecuencia de llegar a un entendimiento ambos grupos políticos. Dado el propio desarrollo del país y los problemas externos en la vida Centro-Américana, no podía retrocederse a la situación anárquica de tiempos pasados. Hoy se trata de llegar a una armonía entre el campo y la ciudad, pero no obstante, son los dos partidos tradicionales los grupos que tienen aún la voz cantante, siempre y cuando lleguen a compenetrarse con los diferentes grupos sociales.

(4) A tenor de la definición que el artículo 4 de la constitución vigente, que dice: "El Gobierno es republicano, democrático y representativo: se ejerce por poderes complementarios e independientes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y se fundamenta en el principio de integración nacional".

La integración implica la participación de todos los sectores

políticos, económicos y sociales en la administración pública, principio éste que las autoridades deben respetar a fin de asegurar y fortalecer la nacionalidad hondureña y hacer viable el progreso de Honduras, basado en la estabilidad política y la conciliación nacional.

La Constitución de 1965 de forma clara establece los tres poderes que rigen la vida de la nación. El poder ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, elegido por voto popular por un período de seis años; lo asesora un gabinete de diez ministros (de Gobernación, Relaciones Exteriores, de Defensa y Seguridad Pública, de Educación Nacional, Economía y Hacienda, de Comunicaciones y Obras Públicas y Asistencia Social, de Trabajo y Previsión Social, de recursos Naturales, de Estado en los despachos de la Presidencia). El Legislativo es únicamente y está compuesto por el Congreso Nacional.

El poder Judicial lo compone la Corte Suprema de Justicia (cinco Magistrados elegidos por el Congreso Nacional por seis años); hay cuatro Cortes de Apelaciones, y los Juzgados de Letras y de Paz. La Corte Suprema nombra los Jueces y los Magistrados de los tribunales inferiores.

El sufragio es obligatorio para los varones mayores de edad; las mujeres pueden votar a los veinte y un años (la casada a los-18). El territorio está dividido en dieciocho departamentos (cuyo Gobernador es nombrado por el Presidente) y 31 municipios. El servicio militar es obligatorio.

FACTORES SOCIALES

La mayor parte de la población es rural. Aunque en la última década se ha producido un aumento considerable de la población de las ciudades, en especial de Tegucigalpa y San Pedro Sala, se debe a las condiciones de vida, Tienen en ellas más futuro. Si bien se han intensificado por medio de los diversos planes quinquenales y de desarrollo, las mejoras de los diversos medios de comunicación, debido a que en muchas zonas rurales la población es escasa, no se aprecian estas de una forma notoria.

Es quizá el café uno de los productos típicos del país, cultivado exclusivamente por hondureños. Se da el caso de que dentro del mismo país tenga cuatro precios diferentes, oscilando en los-

puestos y en los lugares de exportación en el doble de lo que se — paga por él en la parte interior del país y de difícil medio de — transporte, donde es básico para la economía agraria de aquellas — personas que viven de dicho producto en el campo, y que de forma — trascendente nutre el peculio familiar.

La diferencia se acentua cuando se comparan los salarios de las zonas de exportación y más pobladas, con los del interior y de be de considerarse que están en relación con el poder adquisitivo en cada lugar.

Influyen de gran manera para la educación de la población, ya que es precisamente en el agro, donde se da el mayor índice de — — analfabetismo, pues por lo general, el campesino ocupa a todos sus hijos en la faena del campo, y está su casa tan aislada del centro urbano donde existen escuelas que le llevaría todo el día el lle— gar allí; no obstante se ha tratado por todos los medios de que se acabe con dicho estado de cosas, poniendo el Estado todos los me— dios a su alcance.

Los Sindicatos en Honduras son recientes, ya que es a partir de 1950 cuando en la Costa Norte se comienzan a organizar, por las compañías fruteras. Por ser también agrícolas no tenían los traba—

jadores la posibilidad que tienen los productores de la industria de las ciudades que tienen un nivel cultural superior. Los otros eran campesinos del interior, por lo general analfabetos. No obstante, ha habido una pequeña minoría consciente de sus derechos y de la trágica situación que se les planteó.

No se puede tratar el origen del sindicalismo hondureño sin tener de cerca la relación con el movimiento sindical Centro-Americano ya que es precisamente animado por éste, y a todos los niveles, como se introduce el primer Código del Trabajo. Debe hacerse notar que los progresos en esta materia han sido grandes. Aunque es precisamente en Honduras donde hoy existen las mejores prestaciones sociales para los trabajadores, estas no se aplican quedando los seguros circunscritos a las ciudades y regiones más pobladas.

Aún el campesino del interior, que es la mayor parte de la población no le llegan dichas reformas sociales. Aunque si ha llegado a él hasta ahora la reforma agraria, lo que hace falta es colonizar todo el territorio rural que constituye la tercera parte del país, en la región nor-oriental.

Las ciudades sí han experimentado un rápido crecimiento urbano. En el campo industrial, las ventas de sus productos junto con los que se producen en el mercado común Centro-Americano, resultan en muchos casos desfavorables para los productos patrios por lo cual se han tenido que proteger en el seno del mercado común por medio del sistema de lista. Por el transporte resulta incluso mucho más económico traerlos de algunos países del mercado común, por existir una gran proximidad si están cerca de la frontera, y por las buenas vías de comunicación, este es el caso con El Salvador, ya que entre algunas poblaciones hondureñas tiene que hacerse por vía aérea.

Junto a las ciudades se encuentra una vida cultural intensa y ello se debe, no solo a los medios informativos; la radio, la televisión que, en muchos casos, es local, sino a los periodicos y demás círculos culturales. Alrededor de ellos gira también la vida mercantil del país.

Quizá uno de los campos donde mejores frutos se han cosechado es en el de la salud pública. Se ha logrado acabar con muchas enfermedades que venían afligiendo al pueblo hondureño, entre ellas,

el paludismo. Se han triplicado los servicios sanitarios, en especial a las zonas rurales. No obstante, aún hace falta acumular muchos esfuerzos para consolidar los éxitos logrados hasta el presente, pues el funcionamiento de los seguros es efectivo solo en las ciudades o zonas más pobladas del país y es de notar que la mayoría de los médicos especialistas del país están precisamente aglomerados en las grandes ciudades. Pensando precisamente en este problema, se han creado zonas rurales que cubren aquellos lugares menos poblados y aislados por lo general del resto del país. Hoy en día funcionan en el país treinta hospitales generales (casas de salud, clínicas, etc.), dos sanatorios para tuberculosos y un hospital neuropsiquiátrico. Además, funcionan para atender enfermos fuera de los hospitales, seis centros y treinta y dos sub-centros de salud, veinte clínicas de materno-infantiles y once puestos de salud.

La vida periodística hondureña tiene una gran tradición. Uno de los diarios más antiguos de América es "La Gaceta". En la actualidad es un diario oficial. Existen otros periódicos como "El Día", "El Cronista", "El Pueblo en Tegucigalpa", "La Ceiba", "El Atlántico",

"San Pedro Sula", "El Correo del Norte".

Es de notar que en las ciudades la prensa, la radio y la televisión mantienen una información y distribución adecuada; no — así en el medio rural, en la vida departamental, debido a la poca fluidez en las cosas de distribución y al aislamiento de los pueblos.

Es quizá la prensa de los partidos Liberal y Nacionalistas — la que mantiene un contacto más directo con sus parciales. No obstante a medida que aumenta el nivel cultural del pueblo en general, la tirada de los periódicos tienen un aumento progresivo. — Debe de tenerse en cuenta que en Honduras la enseñanza primaria — es obligatoria desde hace varias legislaturas, pero no se había — dispuesto de los medios idóneos que nos dé la ciencia y la técnica moderna para hacerla llegar hasta los últimos rincones de la — patria.

Es por lo que en ese proceso de desarrollo se le da una especial atención a la enseñanza, para liberar al pueblo de la pesada cadena de la ignorancia. Se pone cada vez mayor dinamismo, haciendo que se reduzca progresivamente el analfabetismo. Y esto en una

economía rural como la hondureña, se refleja de una forma muy marcada sobre la vida y desarrollo del campesino que constituye el mayor número de la población del país.

BIBLIOGRAFIA

- (1) Anuario Estadístico. Tegucigalpa. D.C. Honduras, Dirección General de Estadística y Censos 1960, pág. 22 y 55.
- (2) José Angel Bobadilla. El Transporte en Honduras. Tegucigalpa, D.C. Honduras. Consejo Nacional de Economía, 1960, pág. 5 y 55.
- (3) Luis Ducott. Los Recursos humanos de Centro-América. Panamá y - México en 1950 - 1980 y sus relaciones con algunos aspectos del Desarrollo Económico (Naciones Unidas, CEPAL, 1954, pág. 248).
- (4) Constitución Política de 3 de Junio de 1965, art. 4.

CAPITULO, II

HISTORIA DEL CONSTITUCIONALISMO DE CENTROAMERICA EN HONDURAS.

La Constitución de Cádiz de 1812
Acta de Independencia de 1821
Anexión de Centro-América a México
Provincias unidas del Centro de América.

DESARROLLO

Los antecedentes de la vida constitucional patria, tienen su origen en la vida constitucional Centro-Americana, ya que Honduras es por aquél entonces una de las provincias que componen la - Capitanía General de Guatemala, formando junto con Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica una sola unidad política y jurídica. Es justo aquí dónde se dan los primeros pasos por el sendero luminoso de la legalidad constitucional, ya que son los cinco- estados hermanos, unidos, los que aprendieron y pusieron en práctiu

ca la enseñanza recibida de la Madre Patria (1), por medio de sus leyes, sus instituciones y formas, dándoles el solar patrio, el espíritu y el campo del ordenamiento jurídico. De aquellas fechas hasta ahora, mucho han andado los países hispanos, apuntando realidades que a través de los diferentes vicisitudes han sabido -- afrontar, dando al mismo tiempo un sello propio y característico, que les identifica, no siendo para nuestros pueblos la constitución una reliquia histórica, sino que ésta ha respondido a la realidad política, social, económica y cultural de nuestros pueblos -- en cada uno de los momentos históricos.

Tampoco se han regido por un sistema flexible de leyes como Inglaterra, sino por leyes positivas, en las cuales es la Constitución la norma de normas. Siguiendo la doctrina Kelseniana, es -- en la Constitución, donde reside la garantía de todo el ordenamiento jurídico. Todos los principios fundamentales, tienen que -- responder de forma adecuada a la realidad, hacia la cual están encaminados a regir sus destinos. Dice, Don Luis Sánchez Agesta: -- "que la Constitución es como un traje que cubre la figura de la -- persona", así la Constitución cubre la desnudez de los demás leyes, pero es la realidad política, la dinamicidad interna que lle

van consigo los acontecimientos políticos, los que darán brillo y por los senderos de la legalidad harán relucir con mayor relieve— ya que el espíritu que la norma constitucional tiene, es el que — tiene cada pueblo, puesto que está plenamente identificado con — sus usos, costumbres, raza, lengua y religión.

En Centro-América la evolución constitucional de los diferentes países, ha regido sus propios destinos. No obstante y a pesar de tener cada uno de los distintos países del istmo, su propia y arraigada personalidad, tienen una mútua relación e influencia — en los diferentes ordenamientos jurídicos en determinadas etapas— de su historia, debido, no sólo a la raíz, disposición común, que es el más fuerte eslabón de unión entre los diferentes pueblos,— sinó también a la labor de los próceres, que por haber trascendi— do fuera de las fronteras patrias, dejaron su huella imperecedera. Esto es un al común destino histórico, que en la hora presente — hace que se identifiquen, aún más las horas existentes, para po— der defender mejor su patrimonio cultural, su soberanía, así como poder hacer realidad, con instituciones y realidades de nuestro — tiempo, los problemas humanos que plantea la dinámica política de

nuestro tiempo con fórmulas nuevas, y que responden a los anhelos y realidades del presente, cara al futuro.

Por ello, el Derecho Constitucional hondureño ha respondido, siempre con formulas nuevas, así como recibiendo en su seno, aquellas influencias Centro-americanistas, que tienden a la comprensión entendimiento y hermanamiento de naciones hermanas, que la adversidad e intereses de todo tipo, han querido a lo largo de los ciento cincuenta años de vida independiente, dividir y enfrentar para sacar de ello provecho, intereses imperialistas ajenos a nuestra cultura y estirpe. Por lo que sólo en la médula de nuestro derecho, en la norma de normas, se encuentra la garantía más sólida para la — convivencia armónica de pueblos soberanos.

Por que en el ordenamiento constitucional del istmo se encuentran fórmulas constitucionales que son comunes en los diferentes — países. Y fué precisamente el Dercho Constitucional Federal Centro americano, pese a todos sus errores y desaciertos, dada la improvisación y el apasionamiento que cegó a los representantes Centro-Ame- ricanos el primero en dar un paso al frente en la defensa de los — derechos de la persona humana, prohibiendo la esclavitud, así como

decretando la libertad a cualquier esclavo que pisase tierra Centro-americana.

LAS CORTES DE CADIZ DE 1812

Las Cortes de Cádiz tienen en la historia constitucional patria una importancia trascendente, ya que ésta es la primera Constitución que tienen los pueblos hispánicos. En el caso concreto - de Honduras en relación con los demás países Centro-americanos, que en aquel entonces forman la capitanía general de Guatemala, no solo es la primera constitución, sino que es un puente de unión entre los diferentes países del istmo y la Madre Patria ya que será de ella de donde se formará todo el proceso constitucional, hasta nuestros días (2).

Pero desde el punto de vista unionista, no sólo representa - la línea de lo auténticamente legado por la Madre Patria, sino - que, es la base de patrimonio cultural que, de cara a la realidad política, le tocó regir a los diferentes pueblos, los cuales a su vez tomaron conciencia de sus derechos, dando origen a otras nuevas constituciones, que como fruto de la dinámica política que in-

forma a todos los hechos políticos, de los diferentes pueblos hispánicos, de acuerdo con su propia idiosincrasia, acusan nuevas fórmulas que responden a la realidad de cada momento histórico.

Pero que tendrán una base común, una toma de conciencia, frente a los acontecimientos políticos, que tiene su origen en la -- constitución gaditana. En el caso de Centro-américa su problemática fué al principio de aplicación, dado que no se había preparado adecuadamente a los pueblos para ello, al mismo tiempo fué la semilla bien plantada ante la historia, que se perfilaba en los ordenamientos constitucionales de los diferentes pueblos.

Como certeramente y científicamente sostiene Don Luis Sánchez Agesta: "los antecedentes nacionales y los principios de la revolución francesa, en las constituciones que nacieron la Constitución de Cádiz, se encuentran amalgamados. Este es el caso de -- Honduras, que, junto con las demás naciones del istmo, se informan de ella.

Los Diputados por Honduras que participaron en las Cortes de Cádiz fueron: D. José Francisco Morejón, ya que D. José Santiago-Milla, que también fué electo para aquella, llegó cuando ésta ya -- se había disuelto.

El alcalde mayor y el Consejo de Justicia y Regimiento de la Villa, recibieron la Constitución del 10 de octubre y el 13 fue publicada, leyéndola en alta voz el alcalde 2º en lo alto del portal de la plaza, ante el Ayuntamiento y las demás autoridades y vecin^{os}; y el domingo 18, en la iglesia parroquial, en la misa de - Espíritu Santo que se celebró, se tomó al pueblo el juramento por el alcalde mayor Marquez, quién pregunt'andole: "Juráis por Dios - y los Santos Evangelios, guardar la Constitución política de la - Monarquía Española, sancionada por las Cortes Generales y Extraordinarias de la nación y ser fieles al rey"? el pueblo contestó: - "Si, juramos". Concluyó el acto cantándose el "Tedeum".

En el artículo 10 de la Constitución de Cádiz se describe el territorio diciéndose que comprende: En la América Septentrional, Nueva España con la Nueva Galicia y Península de Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente e internas de Occidente. Cuba con las de Florida, la parte española de Santo Domingo, Puerto Rico y sus islas adyacentes. En la América Meridional: Nueva Granada, Venezuela, Perú, Chile, Rio de la Plata con Asia, y con las de Filipinas y las que dependen de su gobierno (3).

El 22 de septiembre de 1812 se recibió en Tegucigalpa por correo extraordinario dirigido por Bustamante, la Constitución de la monarquía española, decretado por las Cortes de Cádiz el 19 de mayo del mismo año, con ella se recibió las reales cédulas que prescribían el orden y solemnidad de su publicación, un decreto de indulto y otro sobre ayuntamientos.

En el momento de recibirse la Constitución de Cádiz, Honduras, pertenece políticamente a la Capitanía General de Guatemala, teniendo como capital de la provincia a Comayagua. En aquellos entonces, ya se había trasladado, la jurisdicción de los puertos de San Fernando de Omoa y de Trujillo a Guatemala. La capitalidad de la provincia la discutía Tegucigalpa, junto con Comayagua y esto es precisamente uno de los problemas que plantean los delegados a la Corona, ya que la defensa de la Costa del Caribe desde Guatemala resulta demasiado difícil por no ser S. Fernando y Trujillo puertos naturales de Guatemala. Dichos puertos están en la costa norte del país, y han pertenecido siempre a Honduras.

Ya en aquél entonces se plantea el problema de la rivalidad local, entre Tegucigalpa y Comayagua; la primera es una región mi

nera floreciente, mientras que Comayagua es una región agrícola, pero culturalmente más adelantada que Tegucigalpa. El problema se plantea con relación a la división política del país que unas veces comprende una jurisdicción y otras veces, según la ~~residencia~~ de la capital otra.

Los delegados centroamericanos en las Cortes de Cádiz, hacen hincapié en que la Constitución debe ser práctica, para que la edcaación de aquella pueda hacerse sin grandes problemas.

Tanto a España como a Centro-América, han llegado libros y folletos de la revolución francesa. Las obras de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, son conocidas y comentadas en los círculos intelectuales de Guatemala. Dichas obras circulan por la Capitania General, al igual que la Constitución de los Estados Unidos. Han calado tan profundamente las ideas liberales, que incluso en el clero joven se ha planteado un problema públicamente y se ha manifestado en favor de aquellas. Es precisamente en las profesiones liberales, abogados y médicos donde se encuentran los mejores defensores del ideal constitucionalista.

Debe tenerse en cuenta en las Cortes de Cádiz la actitud fir

me de los delegados centroamericanos en favor del Habeas Corpus, - como un sólido medio de garantía de los derechos inalienables de la persona humana. En éste aspecto de las garantías es Alcalá Galiano uno de los más ardorosos defensores con el que se identifican los delegados centroamericanos.

En Honduras pronto se hace notar la Constitución de Cádiz, - en lo que se refiere no sólo a las garantías, a la libertad de prensa y de palabra, sinó que se llega a hacer realidad principios - que en España se encuentran recogidos en la Constitución histórica, mucho antes que en las Cortes de Inglaterra; en la de León se establece que no debe juzgarse a nadie, si no hay una ley positiva que establece el delito y el derecho inalienable que tiene el pueblo, a través de su representante, de darse sus propias leyes. Las Cortes de Cádiz harán que se tome conciencia de los derechos ciudadanos.

El mérito que tiene la Constitución de Cádiz, es que el pueblo hondureño, por medio de ella adquiere conciencia de sus derechos ciudadanos, en especial, del derecho al voto, dando con ello carta de naturaleza al derecho de representación, teniendo éste -

sobre todo en la vida local, una importancia de gran trascendencia, ya que el pueblo por él, al ejercer dicho derecho lo hace suyo, al mismo tiempo, que forma a éste, alineándolo al lado de la vida democrática. Aunque al principio tuvo que plantearse el problema de la adecuación de las nuevas instituciones, es digno de loar la labor que en todos los ayuntamientos se da sobre los preceptos contenidos en la Constitución, que hace que se tome conciencia de dichos derechos teniendo que plantear problemas de todo tipo, ya que no existían precedentes, y por parte de alguna minoría hostil, que se encuentra en la propia administración que es reacia a aplicar aquella.

En la lucha por la conquista de la libertad y la dinamicidad y ética de las ideas políticas en este período histórico, hacen que, por medio de la prensa, sobre todo por el editor constitucional - Pedro de Molina de Guatemala, se tengan noticias de los acontecimientos que en Europa, se producen, así como "La Gaceta" y, sobre todo "El Amigo de la Patria", son una idea de la trayectoria, pese que las minorías y el pueblo se liberen de la pesada cadena que pesa sobre la libertad. Por ello que en la vida local de los ayunta-

mientos, se llega al pueblo eminentemente agrícola, con el sonido de la campana de la libertad.

El gran momento de la Constitución de Cádiz, es cuando el pueblo al dialogar, aprende y toma conciencia de sus derechos y hace sobre todo que las diferencias que ya se habían planteado sean conocidas por todos, evitando con ello que se produzca un rompimiento violento. Por otra parte, se trata de encontrar el remedio más idóneo al problema que se plantea. Contra ello, se encuentran grandes barreras, que dada la forma colonial en que se han implantado será solo la dinámica política, acondicionada aquella realidad social, lo que las hará caer por su propio peso, ya que es el propio espíritu del siglo XIX, el que dará validez a los principios en pró de la libertad de los derechos inalienables de la persona humana; de propiedad del derecho de reunión y asociación, petición, obtención de cargos públicos, libertad de cultos, profesión, enseñanza, inviolabilidad de domicilio y correspondencia proclamados por la Constitución gaditana.

Los principios constitucionales contenidos en la Constitución de Cádiz, transmitieron su sentido liberal a las diferentes-

constituciones hondureñas, tendiendo sobre todo a garantizar al ciudadano el ejercicio y respeto de sus derechos, con respecto al poder, para como dice éste: "Aquí la igualdad. Que debe ser la misma para todos, la facultad de hacer cada uno lo que no daña los derechos de otro, la seguridad, la protección concedida por la sociedad a cada uno de sus miembros y sus propiedades, la propiedad, el derecho que pertenece a todo ciudadano, el goce y la libre disposición de sus bienes y rentas".

La importancia de la Constitución de Cádiz, hace que el pueblo, tome parte en la negociación pública, lo cual da como resultado, que los grupos intransigentes y anacrónicos, den paso a las nuevas ideas liberales, que se irán arraigando poco a poco, en la vida constitucional de los diferentes pueblos del istmo. José Cecilio del Valle, editor del "Amigo de la Patria" (4), en el artículo de las familias como el las llamará, dice: "En la época anterior, cuando el pueblo no tenía el derecho a elegir, que le ha dado la Constitución, todos los ojos vieron en el ayuntamiento sucederse, los hermanos a los hermanos, los primos a los primos, los sobrinos a los tios, los parientes a los parientes.

Por todo ello se desprende que la Constitución de Cádiz de 1812, constituye una interesante experiencia constitucional, que si bien tuvo poca vida, dejó una profunda huella, como bien afirma D. Luis Sánchez Agesta, en Historia del Constitucionalismo Español (pág. 46). (5) "La Constitución no solo ha pasado en toda la historia constitucional de España, en la que opera como un sugestivo mito político, sino en la de Europa y América. La Constitución de 1812, caso único en la historia constitucional, llegó a aceptarse en bloque, como constitución propia, por varios pueblos americanos y europeos".

Tiene además un espíritu universalista, ya que es precisamente en ella, donde se recogen las ideas imperantes en la Europa, de su tiempo, ideas proclamadas en los derechos del hombre, del ciudadano y de la Constitución Francesa, D. Marcelino Meléndez y Pelayo. Historia de los heterodoxos españoles (tomo VI, pág. 47)-(6), dice que "es una Constitución abstracta e inaplicable, democrática en su esencia, pero democracia a la francesa, bien se puede apreciar en ella una fuerte vinculación a la tradición histórica española".

Vista desde Honduras, la Constitución de Cádiz, ha tenido una influencia profunda, no sólo en los primeros textos constitucionales, sino que su espíritu y esencia ha llegado hasta nuestros días. Es un fuerte elemento de unión, con los demás pueblos centroamericanos, ya que todos son partes del mismo tronco común, aunque la evolución propia de cada pueblo le ha dado una característica peculiar, sobre todo en su fórmula, basada en la soberanía nacional; es un elemento de coexistencia y unión en los pueblos, sobrepasando las fronteras patrias, incorporando a los pueblos a la ley del espíritu y de la libertad.

La Constitución de Cádiz de 1812, estuvo en vigencia del 24 de septiembre de 1812 hasta el 31 de septiembre de 1814. Restaurándose tras la sublevación de Riego, se jura en Guatemala el 10 de Julio de 1820.

EL ACTA DE INDEPENDENCIA DE 1821

La característica fundamental de la proclamación de la independencia, por parte de Centro-América en relación con España, es que ésta se produce de forma pacífica, a diferencia de otros paí—

ses hispánicos. En aquél entonces los países que componen hoy el Istmo Centro-Américoano, estaban integrados en la Capitanía General de Guatemala.

La noticia de que los ayuntamientos constitucionales de Ciudad Real, Comitán y Trujillo, habían proclamado la independencia exaltó los animos en la Capitanía General, y a los siete dias de aquella proclamación, esto es el quince de Septiembre de 1821 en el palacio de los Capitanes Generales de Guatemala, que en ese momento cambió de nombre por el palacio Nacional, se hizo la declaración de que la independencia del gobierno español es la voluntad del pueblo de Guatemala, sin perjuicio de lo que determine acerca de ella el Congreso que habia de reunirse con representantes de las provincias que constituían la Capitanía General de Guatemala, a cuyas elecciones se mandó convocar para que ésta se reuniera el 1º de marzo de 1882.

Tal declaración se hizo por una Junta presidida por el Gobernador y Capitán General, Don Gabino Goinza, formada por individuos de la Diputación Provincial, los Ayuntamientos, Colegios de Abogados, los Arzobispos, Prelados regulares, jefes y funcio-

narios públicos, el venerable señor Deán y Cabildo catedralicio, reunidos todos en el salón y oído el clamor de ¡Viva la Independencia!, que repetía de continuo el pueblo, que se había congregado en las calles, patio y corredores y ante la sala de aquel edificio.

José Cecilio del Valle, redactó el acta de independencia, - aunque en principio estaba en contra de ella ya que considera que Centroamérica no se encontraba preparada para ello. Como funcionario legal a la corona española trató de hacer, antes y después de la independencia, que los animos extremistas siguieran todos unidos, laborando en común por el nuevo estado, trató de que no se produjera un trauma, antes bien una evolución, y para ello entre otras cosas pide, que las autoridades establecidas seguirán ejerciendo sus funciones con arreglo a la Constitución de Cádiz, de 1812, que en aquél momento está vigente, y demás decretos y leyes, hasta que el Congreso determinara lo justo y benéfico, y que Goínza continuara con el gobierno superior, político y militar, asistido de una Junta Provincial consultiva; ésta se forma con los funcionarios de la Diputación Provincial y los señores - José Cecilio del Valle, por la provincia de Comayagua, Miguel -

Larcanazaga por la de León y el Marqués de Coucineno por la de -
Quexalterrango, Dr. P. José Valdez por Solola y Chimalterrango,-
el Dr. Angel Maria Condina por Sansonete y el Sic. Antonio Robles
por Ciudad Real. Las personas del nuevo gobierno prestaron el ju-
ramento acordado (7).

D. José Gregorio Tinoco de Contreras, Gobernador Intendente
General y Jefe político Supremo de la provincia de Comayagua, re-
cibió el 28 de septiembre a las ocho de la mañana el Acta de Inde-
pendencia, firmada en Guatemala y un manifiesto de Gainza relati-
vo a ella. Inmediatamente, reunió a la Diputación Provincial, al
Ayuntamiento y después de discutir sobre el Acta y el manifiesto
de Ciudad Real, a presencia del pueblo que ocupaba la galería se
acordó jurar y se juró la independencia de la provincia de Comaya-
gua, con la precisa condición de que debía quedar sujeta únicamen-
te al Gobierno Supremo que se establecería en la capital de Méxi-
co, en todas sus ramas: Públicas, militar, de Hacienda y eclesiás-
tico. Se regiría siguiendo la Constitución Española y continua-
rían en sus cargos las autoridades existentes.

En la tarde del mismo día 28, se recibieron en la Villa de -

Tegucigalpa, los pliegos que contenian el acta de Guatemala. Era -
alcalde de la villa D. Tomás Medina por la muerte del Sic. Narciso
Mollo1 y reunidos el ayuntamiento y otras autoridades, se dió lec-
tura a los pliegos y se acordó jurar y se juró la independencia, -
comprometiéndose todos a reconocer al gobierno que se organizaría-
en Guatemala y a "contribuir a la independencia por cuantos medios
estuvieran a su alcance, incluso a sacrificar sus vidas, si ello -
fuese preciso". El Acta fue redactada por D. Dionisio de Herrera y
en el mismo sentido que Tegucigalpa, se pronunciaron las demás pro-
vincias.

Previno primero al Ayuntamiento de Tegucigalpa que dejaría -
de obedecer a ninguna autoridad de Guatemala.

Tegucigalpa, que en los últimos dias del gobierno colonial ha-
bía quedado sujeta a Comayagua en lo militar, contestó que obedecer-
ría a las autoridades de Guatemala y Comayagua, en todo aquello -
que fuese conforme a las atribuciones de cada una, y que no fuesen
contrarias a las leyes que acababan de jurar. Esta respuesta desa-
gradó a Comayagua.

Con el Acta de Independencia de 1821, los pueblos entran a formar parte de la vida independiente, siendo además el comienzo de la vida institucional. Debe tenerse en cuenta, que tanto desde el punto de vista del clero, de las autoridades y de sus representantes, se trató de evitar toda clase de extremismos. No obstante, la independencia había llegado en un momento en el que la burguesía local y las ideas liberales, tienen plena conciencia de sus derechos y obligaciones. Por ello, en esos momentos deben existir las bases para una coerción de intereses de todo tipo para el desarrollo de la vida pública. Valle, sabía cual era la situación social en aquél momento histórico, en contra de algunos autores que eran de los que decían que la libertad, sólo se consigue con sangre y fuego. Esta libertad debe ser realidad en las mismas relaciones humanas, para lo cual hay que presuponer una cultura que responda a cada instante. Es una gloria para la Madre Patria, que se haya producido la independencia de forma pacífica, en contra de lo que será después de ella. No debe menospreciarse la influencia que tuvo el clero que, ya que es el que ha llegado a lo más profundo del alma patria. De ello nos dan la idea los preceptos constitucionales, que después de la Independencia se pronun-

cian en ese sentido. Igual sucede en las demás naciones Centroamé-
ricanas, dando hoy como ayer, un poderoso elemento de unión y de-
cristiana comprensión entre los demás pueblos hermanos. Evitó que
se produjeran o sacarán a relucir disputas o rencores que tenían-
mada más que la destrucción entre los miembros de la misma familia.

LA ANEXION DE CENTROAMERICA A MEXICO.

La importancia que ha tenido México en los asuntos Centro -
americanos, tiene una influencia trascendente, debido a que, en
tiempos de la Colonia ya era México la Nueva España. En realidad,
la Capitanía General de Guatemala nunca llegó a tener la importan-
cia de un Vireynato, debido a que, por sí solos, los estados Cen-
tro-americanos, en la vida independiente, se encuentran con una -
serie de problemas en relación con sus jurisdicción que en reali-
dad datan del período colonial. Con la incorporación a México, se
pone de relieve la importancia trascendente de los hechos acaeci-
dos en México en pro de la independencia.

El "grito" que el poder Hidalgo lanzó en Guadalajara (México)
y demás hechos acaecidos allí tienen resonancia en la vida del —

istmo, que hacen que exista una conciencia mesoamericana, hacia los que durante éste período se producen:

Gainza había participado a Iturbide la proclamación de la independencia en Guatemala. Iturbide le contestó el 19 de octubre - objetandole el artículo 2 del Acta del 15 de septiembre relativo- a la convocatoria del Congreso soberano, bajo el sistema representativo de un diputado por cada 15.000 habitantes, y manifestando- que el interés de Guatemala y México era tan idéntico e indivisi- ble, que no podían erigirse en naciones separadas e independien- tes sin aventurar su seguridad y existencia; que habrá de adoptar las principios de la monarquía moderada, y que sin pretensión de- someter al pueblo a su voluntad, que no era otra que su felicidad y bienestar, había hecho marchar ya y en breve tocaría la fronte- ra de Guatemala, una división numerosa y bien disciplinada que -- evitaría la violencia.

El 23 de diciembre de 1821 se celebró en Tegucigalpa, el ca bildo abierto. Tegucigalpa votó en el sentido de aceptar la ane- xión. En idéntico sentido se proclamó Comayagua a ello. Siendo, - el 2 de diciembre de 1821, dirigió una circular firmada por los-

Alcaldes y Regidores. "Este pueblo unió su juramento de independencia al imperio mexicano en el cual reconocerá por soberano a Fernando VII o alguno de sus familiares".

El plan de iguala por Iturbide el 24 de febrero de 1821 establecía que: Nueva España era independiente, su religión sería la católica y que su gobierno sería el de la monarquía constitucional, - que regiría como emperador Fernando VII o alguno de su familia que- aceptaría el Congreso.

Entre tanto había una junta gubernativa o Regencia y éste gobierno sería sostenido por el Ejército, de las tres garantías. El - teniente general D. Juan de O'Fanjú, nombrado virey de México, desembarcó en Veracruz a fines de julio y en vista de las circunstancias, conferenció en Córdoba con Iturbide el 23, firmando allí un convenio en el que se aceptaba el plan de iguala, y notificado en - el sentido de que decidieran las Cortes que habían de reunirse en México, ya que solo ellas tenían la facultad de elegir emperador,- aunque la persona elegida no perteneciera a ninguna de las dinas-
tías reinantes en Europa.

Tras éste convenio había entrado Iturbide en México, el 27 -

de septiembre y presidida por él se organizó la regencia.

Las Cortes de España habían rechazado el tratado de Córdoba, y el Congreso de México se había incorporado el 24 de febrero. Eligió el 19 de mayo, bajo los comienzos de un pueblo desenfrenado y la presión de pronunciamientos militares que nombró emperador constitucional del imperio mexicano a Don Agustín de Iturbide, General en Jefe del Ejército de las tres garantías. Se coronó solemnemente el 21 de junio, con el nombre de Agustín I.

El diputado D. José Cecilio del Valle, había salido de Guatemala el 7 de mayo y llegó a México el 28 de julio, incorporándose al Congreso el 3 de agosto y el 5 se le nombró miembro de la comisión constitucional. A continuación el 24 de le nombró vicepresidente de la asamblea, pero sus triunfos en ella, oponiéndose a las iniciativas despóticas del poder ejecutivo, fuerpn delitos ante este, y dos días después, con otros diputados militares y paisanos, fué preso y recluso en el convento de Santo Domingo.

La Constitución del Imperio, que se esperaba, no había de dictarse.

El emperador, después del atentado que había hecho a la sobe-

ranía nacional con la prisión de Valle, y otros diputados cometió otro mayor: disolvió al Congreso por decreto de 3 de octubre y se declaró monarca absoluto (8).

Don José del Valle, preso el 22 de febrero fué nombrado secretario de estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Se negó a aceptar el nombramiento del emperador pero Iturbide insistió de tal forma, que aceptó. La labor de Valle se redujo a procurar — que la tremenda crisis que amenazaba el imperio se resolviera, honerosa y beneficiosamente evitando así la guerra civil. Iturbide abdicó la corona el 20 de marzo y salió del país. Centroamérica — se declara independiente de México.

Las características geopolíticas que presenta mesoamérica deben de tenerse en cuenta, la gran extensión de territorio que comprendió el imperio de Iturbide, desde Texas a California y Panamá, teniendo ya entonces, Centroamérica unas características propias. Un gobierno absoluto sin tener en cuenta la evolución de éstos — pueblos, traería consigo a corto plazo, que se agudizaran más los problemas. En este sentido se pronunció Valle en el Congreso Mexicano, abogando por la libertad de pensamiento y por la prohibi-

ción de lectura de obras perjudiciales a la religión católica; en favor de la distribución de tierras por parte del Imperio Mexicano. (9)

Se ofrece a los extranjeros asilo inviolable en su persona y propiedades. Todo extranjero será admitido por las autoridades locales. El Ayuntamiento anotará en su libro de censo el nombre del extranjero, con razón de su procedencia, edad, estado y oficio, eligiendo libremente su domicilio.

En la presencia de tropas mexicanas en territorio Centroamericano, así como por no haberse tomado en cuenta los factores particulares de cada país, Valle se opone a que se realice la anexión a México, si no se dan los pasos adecuados que garanticen a los pueblos sus derechos soberanos que ya la Constitución de Cádiz había enarbolado, al mismo tiempo que el funcionamiento de los tres poderes, ya que Iturbide con el ejército de las tres garantías -- los había monopolizado en favor del ejecutivo.

Debe tenerse en cuenta, que el abuso de poder, por parte de unos y el anarquismo por parte de otros, hizo que si bien en la época que se realizó la independencia con respecto a España, se -

tomó conciencia de los derechos de cada provincia Centro-americana fué debido a que, mientras en la vida local se conocía a los representantes, éstos a su vez tenían que defender sus derechos locales, frente al poder central, y a grupos de sectores que estaban contra los intereses del pueblo soberano, el cual nunca se valoró en cabal medida, excepto por Valle. El hecho mismo de que las tropas mexicanas invadían Centroamérica, dió lugar a que se desborden los acontecimientos políticos en el istmo en pró de la independencia - que recientemente habían adquirido, incluso dentro de la misma Centroamérica. Se trata de reparar definitivamente los miembros de la antigua Capitanía General.

En la propia Honduras, mientras Guatemala y Comayagua mantienen relaciones estrechas, Tegucigalpa se solidariza con los rebeldes salvadoreños, planteándose incluso ya en la época colonial, el problema de jurisdicciones, por que algunos puntos de la costa del Caribe, Don Fernando de Omaa y Trujillo, dependían de Guatemala. El incumplimiento de los preceptos constitucionales dió al traste con la anexión que por otra parte el propio Iturbide, al proclamar un gobierno absoluto, insta en contra del espíritu liberal del pueblo Centroamericano. El 1 de julio de 1823, Centroamérica se proclama-

independiente, de México o de cualquier otra nación. El acta tiene un gran valor para el Derecho Constitucional centroamericano, ya que es el punto de partida de éste.

PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMERICA.

La Constitución de 1824 fué dada en Guatemala, por la Asamblea Nacional Constituyente de los pueblos centroamericanos conocidos al efecto. Dicha constitución tiene un total de 211 artículos y en ella se puede apreciar la gran influencia que tuvo la Constitución de Cádiz de 1812, en todos aquellos preceptos que no se opusieran a la integridad y soberanía de Centroamérica.

En la asamblea se acordó al mismo tiempo cambiar ciertos ~~tr~~atamientos de origen monárquico por otros, netamente ~~re~~publicanos. En vez de Magistral, Alteza, Excelencia, Señoría, ahora se dice - "Don" y en lugar de "Dios guarde a usted muchos años" se dice: - "Dios, unión y libertad".

Deben notarse algunos logros positivos y de carácter netamente centroamericano, que además, universalmente, se apartaron por

los pueblos centroamericanos allí reunidos, en especial como pueblos multi-sociales y de raigambre hispánica. El 17 de abril de 1824, queda abolida la esclavitud. La libertad es para todos los esclavos de uno y otro sexo, y nadie podía reconocer esclavos, ante dicha abolición que se hizo 24 años antes que en Francia, 65 antes que en el Brasil, 39 antes que en Rusia y Estados Unidos, y 9 antes que Inglaterra.

La Constitución Federal de 1824 tiene gran influencia en la Constitución norteamericana. Con ella aparece la institución del Senado por primera vez en Centroamérica. Hay que hacer notar que en el seno de la Constituyente, hay profundas divisiones de tipo ideológico. Han aparecido ya los clásicos partidos liberal y conservador. A ello se adhiere la profunda división en relación con la Iglesia. Aunque se admite como religión única la religión católica, la idea del laicismo ya había tomado carta de naturaleza en la Constitución mexicana y norteamericana. Se plantearon en Centroamérica las ideas que imperaron durante la redacción de la -- constitución de 1824, que permanecerían latentes durante todo el siglo XIX.

La verdad es que la obra de Alexis Torqueville "La democracia en América", ha dejado una profunda huella en ciertos parlamentarios. De ello se hace eco Pedro de Molina, que no encuentra todos los remedios de los males de Centroamérica en la constitución norteamericana. Sobre todo para anudar el efecto de las leyes inconstitucionales. Un remedio eficaz y sin los inconvenientes gravísimos del ejecutivo, es que se haga superior el cuerpo legislativo. Si los jueces y tribunales, en cada caso a reclamación de parte, juzgan por la Constitución y no por la ley contraria a ella, ¿no podemos nosotros hacer lo mismo cuando hemos querido imitar las instituciones del norte?

Nada más erróneo que querer aplicar las normas constitucionales norte-americanas sin tener en cuenta la idiosincrasia de nuestros pueblos. Todo intento en éste sentido está condenado de antemano al fracaso, ya que la historia de raza, la geografía, la religión, la forma de sentir y pensar deben de ser tenidas en cuenta.

José Cecilio del Valle en el "Amigo de la Patria" dice que la constitución española, respetando nuestros derechos, declara -

que la soberanía reside esencialmente en la nación, que los pueblos son los que deben elegir sus representaciones en Cortes, sus diputados provinciales, sus alcaldes, regidores; reivindicarles a los representantes del pueblo, el poder legislativo, y procuraba la unidad de la nación estableciendo la de las Cortes. Daba a los Ayuntamientos el gobierno del interior de los pueblos y el de las provincias a las Diputaciones Provinciales y jefes políticos. No concedía a unos pueblos más derechos que a otros. En el acto grande de la elección los declara iguales a todos, porque todos están compuestos de hombres y los hombres son iguales ante la ley.

Se plantea de inmediato, los conflictos en el seno mismo del poder legislativo, ya que a la constitución federal, en la mayoría de los casos, la pueden vetar los estados. El Senado centroamericano a diferencia del norteamericano, es más ejecutivo que legislativo.

La Constitución de Cádiz fortalece en gran medida los derechos del pueblo, sobre todo en lo que se refiere a la vida local, Si bien en el seno de la federación hay una serie de desaciertos de todo tipo, en la vida local se va fortaleciendo. A partir de cero,

las provincias que luego serán estados, pronto toman conciencia de sus derechos. En la época de crisis se afirma y agudiza el sentido político de los pueblos, con relación a Honduras. Dionisio de Herrera primer presidente de Honduras en relación con las provincias unidas del Centro de América (10), dice, en su discurso ante el Congreso el 7 de agosto de 1823, que "deseando proporcionar los medios más aptos para la ilustración, se extienda y generalice a todas las clases del estado, que los pueblos conozcan sus derechos, que la opinión sea uniforme y que todos los ciudadanos adquieran las aptitudes necesarias para el desempeño de los derechos, que la sociedad les imponga". Había tertulias patrióticas, que estaban bajo la imposición de las municipalidades.

"Las tertulias patrióticas son asociaciones de ciudadanos", decía el decretó, que se reunían para tratar todo género de materias políticas, conferencias sobre las medidas de intereses generales, - manifestar la ineficiencia e inconveniente de las que hayan adoptado, indicar las reformas necesarias en todos los ramos y discutir - en consecuencia acerca de los principios reconocidos de los políticos y legisladores de las naciones cultas.

La Constitución Federal centroamericana, es un claro exponente de las ideas imperantes en su momento histórico. En ella se sigue claramente la influencia francesa, en especial las ideas de - Rousseau, Voltaire, Montesquieu, y demás imperantes durante la revolución francesa, y, posteriormente de los doctrinarios que se - encuentran en ella. Así se tiende a mantener una adecuada divi- - sión de poderes. En él no existe predominio de ninguna de ellas - (11).

Al garantizar los derechos inalienables del ciudadano, en especial, se aprecia la influencia predominante en su tiempo, de mirar con cierta reserva al poder ejecutivo. Esto unido a una clara influencia norteamericana, en la cual se introduce el renovado, - que incluso tiene facultades propias de aquél, fué la causa del - fracaso de la constitución federal, al no solarizar en cabal medida la situación socio-económica imperante en Centroamérica, tomando y valorando adecuadamente el estado de las relaciones internas y externas en cada una de las provincias.

Se creén que con traer fórmulas constitucionales que en realidad han tenido éxito allende las fronteras del istmo Centroame-
ricano, estos podían imperar en él rol centroamericano.

Se establecen además los signos que van a distinguir la Patria Grande centroamericana; su escudo, su bandera, los modernos atributos dada la expresión soberana del pueblo por ella constituido, estableciéndose que el gobierno federal era popular, representativo y federal (art. 8).

Los próceres que participan en la redacción de la Constitución Federal, con verdadero cuidado, tratan de que se garanticen a ultranza los derechos del pueblo, ya que los redactores de la constitución habían padecido privaciones políticas. Deseaban exterminar totalmente, sin dejar el más leve resquicio para fundar un pretexto de oposición, y se le dá especial atención a la fórmula de representación, siguiendo lo establecido en la constitución de Cádiz de 1812 (art. 34 á 103).

Con respecto al poder legislativo habrá un diputado por cada 30.000 habitantes. En cambio en la Constitución de Cádiz era por cada 60.000 habitantes. Además de dar senadores por cada estado (art. 98 al 106), "El poder legislativo de la federación, reside en el Congreso", y omite deliberadamente la subdivisión de las Cámaras.

El Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente de la República y, en su ausencia, el vicepresidente. Su período es de cuatro años y puede ser reelegido, debiendo tener por lo menos treinta años de edad, haber sido siempre ciudadano, ser de estado seglar y hallarse en ejercicio de sus derechos.

Dado el predominio y funciones que ejerce el senado, se mira con cierto recelo al poder Ejecutivo, sin duda por que en aquél momento se ha experimentado monopolio del poder en favor de una persona determinada. Se establece que los designatarios del poder ejecutivo, tienen que ser libremente elegidos por el pueblo.

(12) Con relación al poder judicial, José Cecilio del Valle, dijo que era tal el poder de la soberanía popular que "eligiendo a un hombre lo hace al mismo tiempo un magistrado y legista", ya que el poder judicial residía en la suprema corte de justicia, compuesta de cinco a siete individuos elegidos por el pueblo y cuyo cuerpo era renovado cada tres años. Se apreciaba aquí la influencia de Bentham, que pretende que cada hombre sea su propio abogado, para con ello, conseguir la mayor felicidad, dentro de la comunidad con la participación del mayor número.

En la Constitución Federal de 1824 aparecen las bases democráticas, que regirán la vida Centroamericana. No obstante, cada estado aplicará dicha Constitución, que incluso hoy, es un elemento de común armonía de los diferentes ordenamientos constitucionales del istmo centroamericano (13).

BIBLIOGRAFIA

=====

- 1 - FRANCISCO MORAZAN: "Manifiesto de David, Nueva Granada, 16 de Julio de 1841.
- 2 - AGUSTIN ARGUELLES: "Exámen histórico de la Reforma Constitucional. Londres 1835. 1 I, 6 y 32.
- 3 - Constitución de Cádiz, de 1812. - art. 10.
- 4 - JOSE CECILIO DEL VALLE: "Periódico "El Amigo de la Patria", del 16 de octubre de 1821 al 15 de abril de 1822. Reimpreso en Guatemala por Manuel Arévalo. 1950.
- 5 - LUIS SANCHEZ AGESTA: "Historia del Constitucionalismo español" Segunda edición. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1964.
- 6 - D. MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO: "Historia de los heterodoxos españoles". Tomo VI, pág. 47. Edición Nacional de Obras Completas de Marcelino Menéndez y Pelayo, por Miguel Artigas y Angel Gómez Palencia, ediciones preparadas por Enrique Sánchez Reyes, Santander Aldos, S.A. 1948-1949.

- 7 - JOHN BOWNING: "The Works of Jeremy Bentham (Edinburgh 1845)
Tomo X - pág. 558 y sig.
- 8 - ALEJANDRO MAURA: "Bosquejo histórico de las revoluciones Centro-Americanas. Pág. 43 y sig. Tipografía El Progreso. Guatemala la 1877.
- 9 - RAFAEL HELIODORO VALLE: "Biografía de José Cecilio del Valle".
Pág. 1755. Ministerio de Educación. México D.F.
- 10 - DIONISIO DE HERRERA: "Discurso ante el Congreso de Honduras",-
el 17 de agosto de 1833. Publicado por la Cuesta, Comoyagua.
Honduras.
- 11 - RODRIGUEZ BETETA: "Ideología de la Independencia", pág. 133 y
sig. París, 1926.
- 12 - RAFAEL HELIODORO VALLE: "Cartas de Bentham a José Cecilio del
Valle". Editorial Cultura. México 1942.
- 13 - ALEJANDRO MAURRE: Efémérides de los hechos más notables acaecidos en la República de Centro-América. Desde el año 1821 a 1842.
Editado por el Ministerio de Educación Pública. Vol IX - 213.
pág. 9/ss. Guatemala de 1956.

CAPITULO, III

José Cecilio del Valle
 Precursor de la Sociología en
 Centro-América.
 El Panamericanismo en Valle.
 El Pensamiento de Valle a través de
 la historia Constitucional de Honduras.
 "El Amigo de la Patria".

DESARROLLO

José Cecilio del Valle nació en Choluteca, el 22 de noviembre de 1780, aunque entró en la escena política Centro-América en — Guatemala, ciudad donde reside, en aquél momento, la capitania general, y que es la que rige la vida política de los pueblos del — istmo Centro-Americano.

Es en Guatemala donde reside la "Elité" cultural Centro-América, ya que allí se encuentra la Universidad de San Carlos Berro-

meo, que será la fragua donde se formará Valle. Al mismo tiempo — Berromeo es de allí de donde salen las luces para el resto del — istmo, ya que es el núcleo cultural más importante que por aquel- entonces existía en Centro-América.

En Guatemala es donde Valle entra en contacto con ese núcleo adquiriendo una formación sólida, que en aquél tiempo es de un — ilustrado. Estudia Minerología, Botánica, Sociología, Física y — Química y tiene iniciaciones en las Ciencias Exactas, Estadística, Geografía, Historia, lo que hace exclamar al norteamericano Wibesley, de Resone Coen, que Valle es más que un sabio.

La obra de Valle es esencialmente humanística, como jurista- en los campos del Derecho Constitucional, Civil, Penal e Interna- cional.

El Derecho que dió la Madre Patria al nuevo mando encuentra- en él un intérprete, que, como elemento dinámico, de la sociedad- de su tiempo, no se limita a templanarla, sino que toma las ideas y las adopta a la idiosincrasia del nuevo mundo, creando con ellas- otras realidades jurídicas. Su capacidad de estadística, orador,-

periodista, prócer y vidente está fuera de toda duda (1).

Valle es el creador de la "Doctrina de Valle" que consiste en unos doce puntos del sistema americano, que, luego analiza "in extenso" para demostrar que sus postulados son la profetización de la organización de Estados Americanos y la consagración de los que hoy conocemos como doctrinas de la convivencia pacífica en el continente, a través de diez reuniones de las Naciones Americanas.

Las repúblicas de América para ser felices y no entorpecer su marcha política deben respetar el derecho de Gentes que decía: "Que el destino de América sea la consecución del derecho y del progreso, incesa su preludio y también su mañana. Soñaba el abad San Pedro, siendo su pensamiento el primero en la doctrina del Pan Americanismo y del Derecho Internacional Americano ya que solo por el camino moderno de la justicia, es por donde se puede cimentar la base del entendimiento mutuo entre los pueblos".

Valle, economista, fue al fundador de la cátedra de Economía-política en 1812 y precursor de un avanzado liberalismo social y económico (2).

Tenía plena conciencia Valle de lo que España significa para Centro-América. Sabía que la desintegración de la Patria Grande sería una realidad, al no establecerse los vínculos que unieren a los diferentes pueblos del istmo. El mayor problema que superar fueron todos los factores negativos que surgieron contra la unión, la poca preparación política en que se encontraba Centro-América en el momento de la independencia.

Valle comprendió perfectamente que en medio de la efervescencia comenzaba a dibujarse la manera más efectiva de sobresalir personalmente y la de servir los intereses de la carrera de la independencia al aceptar los efectos de la corona. Con lo primero lograba la nombradía y la autoridad necesarias para utilizarlas cuando el movimiento separatista cobrara suficiente vigor; y con lo segundo, tenía en sus manos la oportunidad de desvincular los procedimientos usados por el arcaico régimen observando de cerca sus graves definiciones y sus puntos débiles, forjando al mismo tiempo, las más temibles armas para efectuar el ataque.

En este orden de cosas, tenemos que en 1805, recae en su persona el nombramiento de diputado interino de la comisión Gubernativa-

de Consolidación, de Defensa de Obras Pías y Censos de la Gaceta. Más tarde, fué Asesor del Consulado de Guatemala en 1807; fiscal - de juzgado de los Reales Cuerpos de Artillería e Ingenieros del - Reino y, luego, asesor de los mismos cuerpos. La mayoría de los - cargos fueron desempeñados gratuitamente, pues antes que todo, lo que le movía, en su entusiasmo y el conocimiento de las cuestiones administrativas, dejando constancia en cada uno de sus cargos de - su labor en pró de la independencia. Como fiscal sus dictámenes - se ajustaron siempre a las necesidades de Centro-América y lo mis - mo como Censor de la "Gaceta" donde dejó pasar toda la idea de - aquellos que animaban furiosamente la independencia patria, ya - que sabía que sólo con una conciencia colectiva que respaldara es - ta ideas podían llegar pronto las luces al istmo.

Precursor de la Sociología en Centro-América.

La obra de Valle en el Derecho Internacional, Constitucional y -
humanidades.

Como jurista la obra de Valle es inmensa. Se gradúa de aboga - do a los veinte años y desde entonces se afirman que en las cla - ses letradas, sus grandes capacidades en la disciplina de Justi -

niano.

En el Derecho Internacional su obra fué la siguiente: "Nuestra soberanía y el derecho de no intervención", "Nulidad de la — Anexión de Centro-América a México", etc.

En el Derecho Constitucional redactó el acta de Independencia y el Código Legislativo, que debe integrar los tres poderes:— el de nombramiento de jueces y Magistrados del Supremo Tribunal — de Justicia, contra la unanimidad de votar para condenar a un diputado; la Constitución Federal y otras.

En el Derecho Penal; "Contra la pena de Azotes", "Como puede evitarse la Pena de muerte"; "Proyecto de ley sobre delitos contra la Seguridad exterior de la República", etc.

Legislación Militar: "Las leyes militares y el Derecho de Resusación".

"La legislación de España... permitenme decirlo, dice Valle:

"Tulio no agravió a Roma criticando sus leyes, ni Mariana — ofendió a Castilla censurando las suyas. La legislación que España dió a América ha hallado el santo derecho de propiedad, prohibiendo al propietario el uso de exportación libre de sus frutos;—

ha hallado el Derecho sagrado de igualdad cuando había esclavos - en beneficio de encomendadores, mineros y señores; ha hallado el derecho de libertad prohibiendo (más de lo que dicta la razón), la de pensar, hablar y escribir, que se deriva del mismo principio, - de donde se deduce la de ver, oír y moverse".

Comienzan sus análisis de las guerras que tenían los partidos y dice:

"Dar el siglo XV a las leyes del siglo XIII, sujetar la América a las leyes de España, era violentar la naturaleza, transformar las relaciones".

Y enseguida expone: "De la jurisprudencia de Roma se dedujeron las leues que plagaron a España de sutilezas, definiciones y etimologías; las que sustituyeron en lugar de los fueros de la nación, las disposiciones de Código y Digesto Romano; los que quitaron al hombre el derecho sagrado de constituirse apoderado en las causas que más le interesan; las que multiplicaron los curiales que en todo país laborioso deben ser reducidos al mínimo posible; las que hallaron los derechos del hombre dando a los padres la facultad de empeñar y vender a sus hijos, la que forman nomen-

clatura depresiva de las que nacen fuera del matrimonio; las que dividen en clases más o menos degradadas y privadas de los derechos que conceden a los demás, los envilecieron con injusticia, los alejaron del gobierno y la separaron de las demás clases; las que informan a los hijos inocentes por el delito de sus padres, rees de traición; las que dijeron al fisco y quitaron a los herederos que no han delinquido los bienes del traidor; las que horrorizan a la naturaleza, a la razón mandando a que se atormenten a los testigos para que declarasen y a los acusados o confiesen en el tormento; las que complican los temas sencillos de los pactos, haciendo que las obligaciones, multiplicaran los pleitos y dieran armas al espíritu de cavilación".

Al igual que Jovellanos, pretende Valle que deben de garantizarse los derechos inalienables de los ciudadanos, por medio de leyes que ellos mismos establecen, para lo cual, debe de haber una auténtica separación de poderes, según la doctrina de Montesquieu contenida en el "Espíritu de las leyes" la cual debe regirse por el pacto social, que no es otro que el de Rousseau. Dicha doctrina ha sido recogida por la declaración de los Derechos del-

Hombre y del Ciudadano y por la Constitución de Cádiz de 1812. Hay datos de la relación por vía epistolar que existió entre Flores Estrada y Valle. Flores Estrada publicó la obra titulada "En defensa de las Cortes", haciéndose eco de los "Fueros y de las antiguas libertades que tuvo Castilla", en las cuales se defiende la libertad del pueblo, ya que son estas Cortes las que se dan en sus propios fueros.

Sostuvo Valle, al mismo tiempo, correspondencia con sabios americanos y europeos como: Jeremán, Bentham, El Conde Bechio, el Conde Sock, Vicente Cervantes, Barón de Humbolt, José Joaquín de Mora, Andrés Manuel del Río y otros.

Precursor de la Sociología en Centro-América.

Valle está en contra de la independencia de Centro-América, porque sabe que los diferentes pueblos del istmo, no han madurado lo suficiente para poder vivir independientes, en el momento histórico en que él vive. Esto se hace notar en la fuerza que tiene el localismo, quedaría como resultado el resquebrajamiento de la propia unidad de Centro-América, debido a que no existen factores o

intereses, superiores a los locales, que hagan efectiva la unión y mirando como España, es la única que por el momento, garantiza esa unión de forma efectiva, siendo, como el vínculo común, entre los distintos pueblos y sólo con una adecuada evolución de la administración colonial.

Debe de considerarse, sobre todo, que Valle se encuentra a caballo entre dos épocas históricas, que sirven de eslabón; la Ilustración que llegó a Centro-América, y las luces de la Revolución Francesa, que estaban en boga en su tiempo. Se produce la independencia y con ella, la Federación y la separación de las diferentes países del istmo.

A Valle le tocó vivir y ser elemento dinámico en todo ello,-- Sólo después de ciento cincuenta años de vida independiente, se puede ver la vigencia o inspiración para las futuras generaciones de su pensamiento. Es, por tanto, un hombre que para sus contemporáneos tuvo el calificativo de sabio, debido a la solvencia de su pensamiento e integridad, a toda prueba, de sus ideas.

Al servir a España, considera que hay que aportar lo mejor -- de sí mismo, para lo cual, en contra de los que, de forma solapa-

da, tratan de encubrir los postulados contenidos en la Constitución de Cádiz para tergiversar el sentido de ésta, tiene conciencia no sólo su responsabilidad e historicidad, sino de su papel dentro de la realidad social, imperante en el istmo. Considera que España ha aportado unos valores espirituales que tienen carta de naturaleza en el pueblo Centro-Américoano, pero que, al mismo tiempo, hay una serie de grupos que solo quieren su beneficio particular, sin importarles las consecuencias de la obra que se han realizado.

Como ilustrado, considera que la única forma es partir de arriba a ir, poco a poco, paso a paso, ya que los pueblos del istmo en el momento de la independencia no se encuentran preparados para ello, debido a que el pueblo no se ha formado adecuadamente y los demagogos llevarían en corto plazo al caos la federación; gracias a su habilidad la independencia de Centro-América se produce sin derramamiento de sangre.

No por ello dejó de ser Valle un auténtico revolucionario. Lo fué, pero no de los que toman el fusil al hombro, para ir a luchar a la sierra. Considera que solo por el camino de la justicia,

en todo el sentido de la palabra, aplicándola a cada instante por hombres que conocen su papel, dentro de la sociedad, es por donde se encuentra la unidad entre los pueblos; representados estos por hombres que los mismos pueblos designen para regir sus destinos.

En la España eterna ha encontrado que es en las propias Cortes, donde los pueblos con sus propios fueros y con una adecuada administración y competencia de los diferentes poderes (como Locke lo había previsto ya en Inglaterra, y Montesquieu en Francia), - donde se podía garantizar la buena marcha del estado, pero para - ello debía de existir una adecuada inspiración de sus dignatarios y así, poder llevar el bien común y la felicidad a todos los ciudadanos.

Conocedor de la idiosincrasia de nuestros pueblos, al hacerse la anexión de Centro-América a México, Iturbide la detiene, luego le saca de la cárcel y le nombra ministro de Asuntos Exteriores, Iturbide se proclama emperador.

Valle sabe que la clave de la unidad de España reside en la corona, pero debe de ser llevada por un rey, de sangre y por derecho propio, lo cual no era aconsejable en México, después de la -

independencia, aunque tuviesen mucha fuerza los grupos políticos - que propugnaron dicha idea. En México a diferencia de Centro-América se había conseguido la independencia por la violencia. Los mismos que estaban en el gobierno habían estado con la administración anterior, lo cual hacía latentes fricciones de todo tipo en el seno del gobierno. Por el contrario, había que salvar la labor de España, conservando aquellas cosas, que por justas son las mejores - vías para unir a los pueblos, y no dejando, al margen, a las clases populares (3).

Valle, como sociólogo conocía las leyes que solidarizan a la sociedad humana, que la verdadera fuerza de un país está en la cultura del pueblo, en la solidaridad de los diferentes grupos sociales. Conocía Antropología y sabía que el gran problema que se planteó en aquel instante fue el indio, dejando a suerte lo que sería factor de inestabilidad. En la misión de los diferentes pueblos, - pronto los mismos grupos locales actuarían por su propia cuenta, al no haber una adecuada unión de ellos dentro del imperio, ya que de no ser así les estaría contra la historia de los propios pueblos.

Los pueblos de la misma cultura deben aportar lo mejor de sí mismos, en áreas del progreso, basado en la justicia y mucho antes

que Benito Juárez dijera que el respeto al derecho ajeno es la - Paz, el eje que labora porque impere esta entre los pueblos, por el derecho inalienable que tiene cada pueblo, a decidir su propio destino. Y mucho antes, de que Centro-América pasara por todas las peripecias históricas que han vivido durante el período de vida independiente, Valle vió todas sus consecuencias e hizo todo lo que pudo por ellas. La ética que rigió su vida política es el mejor ejemplo para la unidad de los diferentes pueblos del istmo.

Tuvo conciencia de la realidad sociológica, como factor determinante en la vida del istmo, no sólo desde el punto de vista interno sino también del externo. Los pueblos no se podían inhi- bir de la responsabilidad histórica dentro de la cultura occiden- tal, tenían que responder a torno con su realidad geográfica, con su idiosincrasia, de acuerdo con su forma de pensar y apartando- soluciones a los problemas, que no sólo tendrían después de la - independencia, sino que, como consecuencia de la dinámica de la- vida política; tenían que encontrar la forma idónea de conviven- cia entre los diferentes grupos humanos, para sentar las bases,-

uniran por encima de localismos o de sus ideas trasnochadas de - demagogos, ávidos de poder para beneficio exclusivo de sus propios intereses. Y la clave de todo ello estaba en el mismo pueblo, que tenía que preparar de forma adecuada para tal empresa.

Por ello, se hace eco de la cultura, como medio de unión entre los pueblos. El idioma es una de las formas de unión más poderosas. La prensa, debe de llegar a todos los rincones de la patria. Por medio de ella, no sólo se conocen los acontecimientos mundiales, sino que debe de formarse de forma sistemática y adecuada la participación del pueblo en la vida ciudadana. De esto se hace eco en el "Amigo de la Patria".

Valle llega a lo más hondo del pensamiento de nuestro pueblo al liberar de las tinieblas a los espíritus del bien que están encadenados por el mal. Con ello nos da una idea al estudiar algunos tipos sociales como el pícaro, el indio, el sabio, con los que tiene una aguda penetración sociológica. Los trabajos que, además, publica en la prensa dan a conocer la realidad social de nuestro pueblo, que además, se puede encontrar en sus discursos parlamentarios y en las exposiciones docentes. Del sabio nos dice: "En

la escala de los seres, el hombre es el primero; en la escala de los hombres, el sabio es el más grande. El sabio es el que más se aproxima a la divinidad. El que da honor a la especie y luces a la tierra".

Con respecto al pícaro considera que en todas partes hay gobiernos, leyes, penas, premios, moral, cadalsos, verdugos y en todas partes hay pícaros siempre en número mayor que el hombre de bien. "El pícaro de transmónta". Su ciencia no ha podido ser en tantos siglos discurrir un sistema que produzca efectos contrarios. El pícaro será superior a la filosofía?, ¿será más poderoso que todo el poder?

Considera que los malos gobiernos, las leyes mal calculadas, las falsas religiones, los usos, las costumbres, los idiomas, las opiniones, los empleados, los oficios, el espíritu de corporación, el calor, el frío, la humedad, la sequedad, la atmósfera, el sistema físico de cada país influye en la producción de tantos bichos, con respecto a los pícaros. En la figura del pícaro nos da una idea de la desigualdad que de por sí tiene la persona humana. Por ello, la justicia tiene que estar por encima de todos los hombres, en aras de la armonía entre ellos.

EL PANAMERICANISMO EN VALLE

=====

(4) El 23 de febrero de 1822, Valle publicó su ideario intitulado "Soñaba el Abad de San Pedro y yo también sé soñar", donde — están contenidos los principios jurídicos, políticos, económicos — sociales y culturales del Panamericanismo.

A la doctrina de Valle, está comprendida en doce puntos que — informan sobre la conducta política de América.

1º.- Celebración de Congresos donde se discutan los intereses vitales de los pueblos.

2º.- Federación de Estados Americanos.

3º.- Planes eficientes para que los Estados Americanos no sean presa de invasiones externas ni víctimas de divisiones internas.

4º.- Cooperación económica y financiera, fomento del comercio y desarrollo de la Marina Mercante.

5º.- Compromiso de socorro mútuo en caso de agresión extracontinental.

6º.- No intervención de unos estados en los asuntos de otros.

7º.- Sociedad de amigos de la Paz, encargados de elaborar planes y proyectos ~~de~~ su especialidad.

8º.- Elevación del nivel económico y social de los obreros - que son coproductores de la riqueza y merecen todo género de consideración por parte del Estado.

9º.- Incorporación del indio a la vida económica, política,- social y cultural.

10.- Capacidad intelectual de la mujer como paso preliminar en el proceso de su capacitación integral.

11.- Libertad de pensamiento, de trabajo y toda actividad en general, como fin supremo de la democracia continental.

12.- Educación al pueblo sobre bases democráticas.

Pronto el pensamiento de Valle, iluminado por el sol de su - ideal magnífico, llegó al seno del Congreso Federal y este Augus- to Cuerpo, interpretándolo en su justa airación emitió el 6 de noviembre de 1822, un ~~de~~creto convocando a los pueblos de América a un Congreso General para afianzar la vida y la seguridad del --

continente en sus distintos órdenes. Su texto dice:

"La Asamblea Nacional Constituyente de las provincias unidas del Centro de América penetrado de que el interés general y esencial de las repúblicas del nuevo mundo, consiste en mantener su - Independencia, Paz y Libertad, y que nada conduciría tanto a ese importante fin como la reunión de todos los estados independientes del Continente Americano por medio de un Congreso de Representantes, ha tenido a bien dictar y decretar: (5).

Que se excite a los Cuerpos Deliberantes de ambas Américas a una conferencia general, debiendo reunirse sus diputados en el — punto que ellos mismos se sirvan designar.

El Supremo Poder Ejecutivo, al anunciar a las mismas potencias los deseos de éstas provincias, propondrá a la Alta consideración de todos los gobiernos, los siguientes objetos.

Representar unida a la gran familia Americana; garantizar la independencia y libertad de sus estados; auxiliares, mantenerlas - en la paz; resistir las invasiones del extranjero; revisar los - tratados de las diferentes Repúblicas entre sí y con el mundo an-

tiguo, crear y sostener una competencia Marina; hacer común el -
comercio a todos los Estados, arreglando el giro y los derechos y
además, acordar medidas que la sabiduría de los representantes -
crea oportunas para la prosperidad de los Estados.

Comuníquese al Supremo Poder Ejecutivo para su cumplimiento
y que lo haga imprimir, publicar y circular. Dado en Guatemala a
seis ~~das~~ de noviembre de mil ochocientos. Juan Francisco de Sosa,
presidente, Juan Esteban Murillo, diputado secretario. José Anto-
nio Azmitia, diputado secretario. El Supremo Poder Ejecutivo. Por
tanto mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas sus partes. Lo
tendrá etendido el secretario del despacho y hará que se imprima
publiquey circule, Juan Vicente Villacorta, presidente, José San-
tiago Milla. Tomás O. Herán".

El presente documento fué ampliamente difundido a través de
"Hemisferio" y hay razones para creer que era conocido de los —
Ilustres Americanistas que asistieron al Congreso de Bolivia.

El pensamiento de Valle está impregnado de un auténtico pana
mericanismo, y en su figura se ven hechas realidad, las ideas y
la acción, como Ministro de Asuntos Exteriores del Imperio de Ituru

bide, un territorio que va desde Téxas a California y Costa Rica. Hace realidad esas ideas, fortaleciendo las bases entre los distintos pueblos del continente. Sus pensamientos está impregnado de - las de Suárez, Mariana, Molina y demás teólogos españoles. Trató - en primer lugar, de conservar la obra creadora de España, en lo que ella tiene de eterno, y para ello, evita que se produzca lucha sangrienta por la independencia en Centro América, Y en México - trata de encontrar una armonía para la buena marcha de la vida - del imperio, ya que sólo con compensación de los de abajo y evitando todo abuso de poder por parte de los de arriba, se puede - llegar a la buena marcha del Estado, desenmascarando a muchos llamados apóstoles, pues un fuerte porcentaje de los guerreros de la independencia eran dictadores en potencia. Prueba fehaciente de - ello es que, luego de consumada la obra de liberación, se establecieron algunas oprobiosas tiranías que fueron la vergüenza de América.

Valle pretende que todos los estados de América se encuentren representados en el Congreso Panamericano, con plenos poderes para las grandes asuntos que deben ser objeto de la reunión y que en -

en dicho Congreso se trace un plan más eficaz para elevar las — provincias de América al grado y poder a que puedan subir.

Se reunieron sabios que, teniendo a la vista el mapa económico y político de cada provincia, podían meditar, plenar y discutir medidas de bien para todas las provincias en particular y para América en general. Se estrecharon en dicho Congreso las relaciones de los pueblos de América unidos en una sola y gran familia, identificando sus intereses y se comenzó a crear el sistema americano, o sea la colección ordenada de principios que debía formar la conducta política de América.

("Oh Patria cara, donde nacieron los seres que más amé. Tus derechos son los míos, los de mis amigos y de mis paisanos; yo, juro sostenerlos mientras viva; yo, juro cuando muera; Hijos de ~~ferdad~~ a la América").

Las jóvenes ~~naciones~~ no habían delimitado sus fronteras geográficas ni espirituales. El "uti possideti", nació justamente — para sofocar las ambiciones fomentadas por algunos caudillos improvisados. Los legítimos padres de la nacionalidad se considerababan ciudadanos de América, su ideal no estaba circunscrito a inte

reses inmediatos. Imperaba el concepto de fraternidad de nuestros pueblos, hermanos por la tradición y las aspiraciones.

Esta era la idea de los próceres de América. Valle pensaba en la suerte que correría América después de la independencia, al mismo tiempo que quería que todas las razas pudieran encontrar digno refugio en ella. Sabía que en ello se encontraba la clave de todo, en que todos comulgasen en igual medida en el trabajo diario, en el progreso cotidiano, no sólo por la Paz, sino para conseguir un futuro luminoso.

El pensamiento de Valle a través de la historia constitucional de Honduras.

La figura de Valle se ha ido proyectando cada vez, con mayor dimensión y luminosidad, dentro de la historia patria. Esto se debe a que su pensamiento es fiel reflejo de la realidad social y política de nuestra patria. Y dado el profundo conocimiento que tenía de nuestro pueblo, de las ciencias y las diversas ramas del saber humano, está vigente en cada uno de los pasos que ha ido dando la agitada vida política del istmo. Respondiendo su pensa—

samiento a los hechos, por estar de protagonista y figura central, en relación con la vida institucional, mucho antes que nuestra patria se constituyera en estado, vivió de cerca al problema de la aplicación de la constitución de Cádiz, dándose cuenta de que tenía que recorrer un largo camino para hacer realidad los principios democráticos, a los que fue fiel toda su vida. Luchó por que se hicieran realidad no sólo la palabra, o por la prensa, sino por sus discursos parlamentarios.

Para ello, en una sociedad que se encuentra en embrión se requiere, en primer lugar, que pueblo y gobierno se encuentren plenamente identificados, para conseguir unos objetivos claros, prefijados de antemano y que el pueblo esté bien respaldado por sus dirigentes, ya que es ese pueblo soberano, el que se dá los gobiernos - que él mismo quiere, siempre por mayoría.

Para lo cual deben de garantizarse los derechos de la mayoría común sistema de leyes justas, que sean fiel reflejo de la realidad en cada país, en todos los campos, económico, político y social, frente a cualquier demanda que pueda tener lugar dentro de cada estado (6).

Valle, lucha porque se respeten con la debida garantía esos-
derechos de cada persona y de la colectividad frente al estado, pa-
ra que de esta forma pueda el hombre cumplir sus sueños, dando se-
guridad a la persona humana, dando el pueblo la garantía oportuna
para que pueda llevar a la vida práctica el normal desarrollo de
una actividad, donde impere la ley de la mayoría. Por ello las --
leyes deben de ser conocidas por todos, pero que cada hombre pueda
por sí mismo ser su propio abogado, se debe dar por tanto la máxi-
ma publicidad a las leyes, que las conozcan el mayor número posi-
ble y se tenga mas conciencia de la armonía entre los bienes del-
estado y de la colectividad, para felicidad de cada pueblo (7).

Se deben de garantizar especialmente, la libertad frente a --
cualquier abuso, debiendo estar en guardia el Estado, para cuidar
sin desmayo por los intereses privados y colectivos de tal forma-
que sean el vehículo que refuerce la armonía entre ellos. Pero, --
para que la norma positiva tenga validez, necesita un poder que --
la haga cumplir.

Se debe de garantizar el derecho de propiedad, donde se con-
sigue el patrimonio de Estado, de la colectividad, y donde se ci-

menta la libertad, debido a que sólo de ésta forma se evita que no se produzca la armonía entre los intereses públicos y privados.

Así como, también se debe garantizar el ejercicio de los derechos políticos adecuadamente, por medio de la Constitución que es la base donde se cimenta todo el ordenamiento jurídico. Dicho principio fué recogido siempre, por los diferentes Constituciones hondureñas.

Valle tiene conciencia de su tiempo y de la realidad americana.

Su pensamiento está de acuerdo con sus acciones. Y así, cuando redacta el acta de independencia, sabe cuál es el camino para que no se produzca ningún trauma en el normal desenvolvimiento de los ciudadanos, los cuales tienen que tener garantizados sus derechos en la norma denormas de la constitución en la que deben - estar garantizadas también, de forma clara, las obligaciones de aquellos para el mejor cumplimiento de la Ley.

Debe de garantizarse este ejercicio. A un hombre no se le puede privar de su libertad, sin haber una causa justa que así - lo establezca, el "obeo corpus", debe ser ejercida en partes por igual, sin que existan privilegios de ningún tipo, ni para nadie.

Lo fundamental es el hombre mismo, puesto que Dios lo ha hecho a su imagen y semejanza.

La colaboración en la vida institucional en América Central, y de América toda, hace que la vigencia de su pensamiento sea meta y guía de legislador hondureño, no sólo para el orden interno, e institucional, sino de los derechos de la persona humana. Su doctrina y principios no sólo han sido recogidos por el legislador, por la Constituyente, por el Congreso, en todas las épocas - sino que sigue vigente su pensamiento, como salvaguarda de los intereses de la persona humana.

Adquiere Valle el primer contexto con la realidad económica y social del istmo al ser miembro de la "Sociedad Económica de - Amigos del País ", la cual sigue las directivas de las que con éxito se habían fundado en España. Pone su empeño en hacer realidad los principios de aquella, pero muy pronto, se dá cuenta, de que una cosa son los principios y, otra, la aplicación de estos - en Guatemala, donde la realidad social, tan distinta a la De España, hace que las mismas autoridades sean las que incumplan las ordenanzas de las cuales dá cuenta. Dado su esmero y diligencia,

pronto adquiere experiencia, en el trato directo con el indio y - las demás clases sociales, pero, mayores serán sus conocimientos - con la llegada de la Constitución de Cádiz, de la cual es admirador, aunque comprende los grandes obstáculos que hay que recorrer para hacer realidad aquellos principios. Da cuenta de ello también en sus escritos y discursos, tratando de hacer conciencia - democrática, al mismo tiempo que trata de que la adaptación de - éstos principios, no produzca un istmo en la vida del istmo. Tiene plena conciencia de los movimientos que se están produciendo en la vida local, donde a la llegada de las noticias de la Revolución Francesa e Independencia Norte-América, hay algunas repercusiones, que serán mayores con la entrada en vigor de la - - Constitución de Cádiz, y que harán que los Ayuntamientos, que es - tán más vinculados a las diferentes clases sociales, tomen conciencia de los principios liberales. Por eso, al proclamar la In - dependencia, al pueblo sigue la evolución de los acontecimientos de forma pacífica.

Valle conoce ese paso que se está dando y aunque después - de la Independencia continúan las mismas autoridades no obstante, se dan los pasos para consolidar aquella.

Valle consideró que la clave de la unidad y de la buena marcha de la Federación depende de la representación cultural del pueblo, siendo la cultura uno de los elementos esenciales para el progreso de los pueblos. La ciencia y la técnica son el camino que llevan la dicha y la felicidad, cogidas de la mano de la formación del espíritu. La cultura debe ser integral, para la adecuada formación del hombre. (8)

Gran amigo y admirador de la ciencia, lo es también de la naturaleza. Considera un crimen el dejar en abandono las grandes cantidades de terreno, con una belleza natural incomparable. Debe de explotarse éstas racionalmente, para que sus frutos lleguen al pueblo, al mismo tiempo que debe intensificarse, y de forma científica y técnica, el sacar los frutos de la minería, de las entrañas de la tierra. Las Fauna debe cuidarse y evitar que sea pasto de los grandes incendios, que en aquel momento lo eran todos los días. Mejorar la calidad de la cabaña agrícola y gnadera, seleccionando ésta. Pero para todo ello debe haber una colaboración estrecha entre el pueblo y el gobierno y laborar todos los ciudadanos en armonía, bajo un mismo suelo.

(9) Ramón Rosa dice de Valle: "Su pensamiento era el nervio - de aquel gobierno provincial Centro-Américoano, no vivía para su fa milia, ni atendía a sus intereses; no se limitaba a hacer lo que— era estricta obligación; trabajó como individuo el poder ejecutivo trabajó como secretario, dictando algunas notas para auxiliar al - ministerio, trabajó en fin, como redactor de "La Gaceta del Gobierno Supremo" de Guatemala, periódico que siempre debe consultarse,— pues es una fuente de grandes y provechosas enseñanzas políticas y administrativas.

Decretó la abolición de la esclavitud, dando seguidamente otra orden que la complementaba. La asamblea decretó el día 23 de abril de 1824, que todo hombre libre es en la República, y que no puede ser esclavo, el que llegue a tocar el territorio de Centro-América, ni será ciudadano Centro-Américoano el que trafique en esclavos. Su espíritu es recogido a lo largo de nuestro Derecho Constitucional, dando éste todas las garantías para que la persona humana pueda - ejercer sus derechos en cabal medida, y no pueda ser mermada su - personalidad, por el ejercicio arbitrario de las mismas. Dicho le gado ha permanecido incólumne ante el altar de la Patria y es faro que alumbra a las generaciones que lo han precedido" (10).

Valle tenía plena conciencia de el estado en que se encontraba el pueblo, estaba plenamente identificado con él, en particular no solo de que, se debe formarle adecuadamente, participando en los distintos Ayuntamientos en charlas políticas, sinó de la importancia que tiene la participación en el momento de la elección y después de ella que se debe tener paso a la elaboración de las constitucionales de la Federación y que todos los que se den entre los distintos pueblos, debe ser contando con el pueblo, y con los representantes libremente elegidos. Valle, se opone, en un principio, a la unión de Centro-América a México, porque conoce perfectamente el estado en que se encuentra la Federación, y el imperio en la vida local; la oposición que se encuentra latente en cierta parte del clero y de la burguesía local; y los factores geográficos que están en contra de una revolución a corto plazo. Todos estos problemas darían como resultado el que se interviniera militarmente y el que surgiera aún más fuerte, el estado de desunión, producido por la impericia de unos pueblos, al intervenir en los asuntos de otros. Por ello, el único camino es, que la representación sea de todas las fuerzas vivas para que así hagan oír sus aspiraciones y deseos entre pueblos y hermanos. Una vez

rota la anexión de Centro-América a México, Valle es candidato a la presidencia de la Federación junto al general Manuel José Arce. Dicha elección se practicó en las provincias, conforme la ley de 5 de mayo de 1924. En cuanto a la Constitución Federal de 22 de noviembre del mismo año, no fué sancionada hasta el 29 de agosto de 1825. Arce, habiendo sido elegido el 21 de abril anterior, no podía beneficiarse del régimen y de la reglamentación establecida en el artículo 47 de esta Constitución (11).

Todo ello tiene una importancia trascendente si se toma en cuenta que son los primeros pasos que darán nuestros próceres, hacia la vida institucional de nuestros pueblos. Por otra parte, hasta la misma Iglesia, se encuentra dividida y no obstante, es ella la que, dada la inexperiencia y el fervor católico de nuestro pueblo, hace que se siga sin el desenfreno en que se encuentra ya entonces. La rivalidad entre conservadores y liberales, geográficamente, parte de la Capitanía General de Guatemala, la provincia de Chiapas, se había anexionado a México. Hay que tener en cuenta que la influencia de potencias ajenas a la región, intervienen de forma directa en los asuntos internos de Centro-

América, y así dados los deseos logistas que presenta el istmo, y, como medio de un camino seguro entre los dos océanos, Inglaterra- tiene un interés muy marcado en todos los acontecimientos de la - vida pública.

La inexperiencia e improvisación, así como las pocas luces del general Manuel José Arce, no obstante ser un gran patriota, hizo - que al no tener "quorum" en el gobierno demorase anticipadamente- la asamblea y violase la carta federal, lo que dió como resultado que se rompiese el orden público al producirse la caída de aquel- gobierno. Era ya tarde, cuando fué nombrado Valle presidente, por que el gérmen de la descomposición, habia minado ya la propia existencia de la Federación y que no se llegaba a tener toda la soberanía y dominio sobre las diferentes provincias del istmo (12).

EL AMIGO DE LA PATRIA

La Constitución de Cádiz de 1812, como bien lo ha definido - Don Luis Sánchez Agesta, es la que enseñó a los pueblos del nuevo mundo a dar los primeros pasos hacia la vida institucional. La -- llegada de la Constitución de 1812, trajo como consecuencia que - se introdujera la libertad de imprenta, que surgieran los prime-- ros diarios. A ellos se debe la difusión de las ideas y el que se-- den cuenta de los problemas que surgen en el mundo de aquél enton-- ces.

Valle se da cuenta de los problemas de tipo estructural que-- acusa la Capitanía General, por su conocimiento, de los problemas desde la administración. Nos llega a decir el Arzobispo de Guate-- mala, Casus, a José Cecilio del Valle, como modelo de su lealtad: En efecto, sé lo que une a los pueblos; y que ésta está, por enci-- ma de todas las rivalidades económicas, políticas, religiosas y - locales".

"El Amigo de la Patria" es el periódico en el que del 16 de-- octubre de 1821, en que lo funda Valle, al 15 de abril de 1822, no

se tiene otro fin que un servir del pueblo. Gracias a la Constitución de Cádiz, restaurada, Valle, encuentra el momento oportuno - para convertirse en paladín social y enriquecer las dimensiones - de su pensamiento. Más tarde, en "La Gaceta del Supremo Gobierno- de Guatemala" y en "El Redactor General" en 1825, puso al servi- cio de los ciudadanos las doctrinas renovadoras, discurrió sobre los problemas palpitantes e incitó a honesta meditación (13).

En éste se dió cuenta de la importancia de los problemas - - humanos especialmente del Indio, que por ser el más numeroso, se- encontraba al mismo tiempo, menos atendido, siendo precisamente - el que daba ser tratado con más realismo, de ello, se hará eco al escribir "El indio después de tres siglos, no sabe hallar el idio- ma de Castilla, por dos razones:

1º) Porque la ley le ha alejado de los que podían enseñarle.

2º) Porque no ha tenido confianza en los ladinos, y cuando - no hay confianza, se inventa o conserva una lengua que haga impe- netrable la expresión de los sentimientos. Merezcamos la confian- za del indio; acérquense a él las clases; reúnanse en los Ayunta- mientos de los pueblos, los indios y los ladinos, y entonces, nues

tra protección avanzará en cultura, aprenderá el idioma que debe unirnos a todos y será más feliz".

De ésta noticia al formarse el Ayuntamiento constitucional de Colón en Guatemala, integrado por indios. Es imposible que haya felicidad en una nación, donde no toma parte el mayor número (14).

La Constitución Española, respetando nuestros derechos, declaraba que la soberanía reside esencialmente en la nación, que los pueblos son los que deben elegir su propio representante en las Cortes, sus diputados provinciales, sus aliados, seguidores y síndicos. Reservaba a los representantes de los pueblos el poder legislativo y procuraba la unidad de la nación, estableciendo la de los pueblos. Daba el de las provincias a los Diputaciones Provinciales y Jefes políticos. No concedía a unos pueblos más derechos que a otros. En el acto grande de la elección, les declaraba iguales a todos, porque todos son compuestos de hombres, y los hombres son iguales ante la ley.

El lema que orienta toda la vida de Valle y que pone el servicio de los demás, es la verdad, la felicidad y la virtud y no la da a entender en solo dos artículos que escriba, sino en la la-

bor que realizó; es también, desde aquí, de donde debe partir el código legislativo para hacer que sean todos socios los individuos de la sociedad.

Leed los códigos de los pueblos libres. El de Pensilvania, en el artículo 35, abandona expresamente las leyes a la discusión pública. La libertad de imprenta, dice la declaración de derechos que precede a la Constitución de Virginia, no puede ser restringida, sin ver los actos, operaciones de gobierno en servir a la patria y a la libertad. Tal es la máxima tutela de los ingleses. La censura de aquellos actos fué también expresamente autorizada por la primera Constitución de Francia.

Podría haber peligro contra una Constitución un Gobierno — cuando una sola clase se encuentra, o, si se quiere, un sólo partido tuviese el derecho de publicar sus opiniones y pensamientos. Sí, pero si éste derecho es universal, debe ceder todo temor. El mal que la Imprenta pudiese hacer se destruye entonces por la felicidad de curarla (15).

Cuando el cuerpo legislativo o el gobierno prohíben o restringen la libertad de imprenta, la prohibición o restricción so-

lo es relativa a los ciudadanos. Los poderes legislativo y ejecutivo conservan aquellas libertades y si llegan a atacar los derechos del pueblo. ¿Qué se levantará, en tal caso, para reanudarlos?

Valle, tomó conciencia del espíritu religioso del pueblo y dijo que la religión no debe ser confundida con la política ni — con los asuntos a que debe extenderse la libertad de imprenta. La religión es un objeto sagrado y sus dignos ministros merecen nuestros respetos. Que no sean nuestras manos las que toquen la religión. Su influencia es benéfica. Su moral es divina. ¿Puede haber filantropía más sublime que la de identificar a todos los hombres, haciendo que en el mismo semejante vea el otro yo?

Valle tenía plena conciencia del poder que tiene la prensa, — pero ésta debe llegar a todo el pueblo. Se le debe informar de — forma veraz, real, orientarla en todos aquellos pasos de honda — trascendencia para la nación, así como también éste debe tener — conciencia del año que puede hacer toda tergiversación de la información, para la conciencia colectiva. La vida institucional es un continuo movimiento de circunstancias, en las que comulgan, — quieran o no todos los grupos humanos. En la armonía entre ellos, —

está el secreto que, no es otro que la justicia, el bien común y la participación del mayor número. Nace suyo aquel precepto, que nos manda nuestro Señor Jesucristo: "Ama a tu prójimo como a tí mismo".

Eso fué la obra de Valle en el peregrinar por este mundo.

Es verdad, no era muy grande la tirada que tenía "El amigo de la Patria", ya que Centro América solo contaba en aquel entonces con dos millones de habitantes. Si lo era, cuando éste llega a las personas que forman la "élite" más dinámica de la sociedad de entonces, a las profesiones liberales, clero, así como a instituciones y asociaciones de todo tipo que había en la Federación. De aquí que sea conocido por los primeros actores de nuestra vida institucional.

"El amigo de la Patria" va orientando hacia la juventud, a la cual dedicó todas sus preocupaciones.

En verdad nuestros pueblos son jóvenes, y será la juventud a la cual le tocará recoger la semilla que, en aquel momento, echarán al surco, para Valle la juventud es como el indio; buena ma-

dera, pero será recto y sabrá responder si se forma educadamente. Por eso encuentra en la educación el factor más importante no solo en la vida ciudadana, a la hora de defender las libertades, sino en la cátedra, en la escuela del pueblo o en la montaña. Debe llegar a todos por igual, no importa su retiro o condición.

Mucho antes de que se le diera por los femenistas el voto a la mujer, Valle considera que la mujer, al igual que el hombre - tiene un papel de gran trascendencia, no solo en el hogar sino - en la vida ciudadana.

A esto van orientados sus artículos, a la formación adecuada del pueblo, a crear conciencia de la gravedad y trascendencia del momento histórico que les ha tocado vivir, criticando la poca solidaridad, el poco espíritu comunitario, el localismo y el individualismo de ciertos grupos que sólo miran el interés propio en detrimento del colectivo.

BIBLIOGRAFIA

=====

- 1 - RAFAEL HELIODORO VALLE: "Biografía de José Cecilio del Valle".
pág. 75 y sig. Ministerio de Educación. México, D.F. 1943.
- 2 - JOSE CECILIO DEL VALLE: "Economía Política". Guatemala, 14 de
marzo de 1812.
- 3 - RAFAEL HELIODORO VALLE: "La anexión de Centro-América a Méxi-
co (Documentos y Escritos) Tomos I, II, III, publicado por Ar
chivo Histórico y Diplomático de México. Tomo II, pág. 1355.
- 4 - JOSE CECILIO DEL VALLE: "Soñaba el abad de San Pedro y yo tam-
bién sé soñar". Guatemala 23 de febrero de 1823.
- 5 - JOSE DEL VALLE Y JORGE DEL VALLE MATHEU: "Obras completas de
José Cecilio del Valle". Tomos I y II. Tomo I. pág. 127 y sig.
Guatemala 1929.
- 6 - JOHN BOWRING: "The works of Jeremy Benthan (Edinburgh 1845).
X pág. 558 y sig.
- 7 - RAFAEL HELIODORO VALLE: "Cartas de Benthan a José Cecilio del
Valle". Editorial Cultura. México D.F. de 1942.

- 8 - VALLE, JOSE CECILIO: "Discursos en el Congreso Federal de 1826"
Tegucigalpa D.C. Honduras, Tipografía Nacional 1897 pág. 8 y sig.
- 9 - RAMON ROSA: "Biografía de José Cecilio del Valle". Tomo I, pág.
22 y sig. Publicación hecha por Marco Cavia Reyes. Secretario
Privado de la Presidencia de la República. Talleres Tipográficos
Aristón. Tegucigalpa, D.C. Honduras 1943.
- 10 - FRANKLIN DALLAS: "José Cecilio del Valle", and the establemaent
of the Central American Confederation. Pág. 1055, publicado por
la Universidad de Honduras. Talleres Tipográficos Nacionales
1954. Tegucigalpa D.C. Honduras C.A.
- 11 - ROMULO DURON CAMERO: "Bosquejo histórico de Honduras, pág.237
Tipografía El Comercio, San Pedro S. Honduras.
- 12 - ROMULO DURAN: "Obras de José Cecilio del Valle". Escritos Po-
líticos". Tegucigalpa, Honduras 1914.
- 13 - JOSE CECILIO DEL VALLE: "Periódico "El Amigo de la Patria" del
16 de octubre de 1821 al 15 de abril de 1822. Reimpreso en Gua-
temala, por Manuel Azevalo 1930.

- 13 - ELISEO PEREZ CADALSO: "Valle, apóstol de América, pág. 81 y
sig. Tegucigalpa, Honduras C.A.
- 15 - MEDINA: "La Imprenta en Guatemala", pág. 19 y sig.

CAPITULO IV

=====

FRANCISCO MORAZAN

EL PENSAMIENTO DE MORAZAN

Morazán y la Federación
El Manifiesto de David
El Testamento de Morazán.

DESARROLLO

Quedaría incompleto el pensamiento Centro-Americano, sin la figura del hombre de acción, palabra y obra, que luchó por llegar a hacer realidad la unión Centro-Americana, dentro de la legalidad que marcó la Constitución Federal.

Morazán guiado por sus ideales liberales que serían la fragua que, a lo largo de su vida, identificó y vigorizó su pensamiento, y por otra, por evitar que se desmoronase para siempre (1).

Montesquieu dice: "Cuando los traidores a la Patria ejercen los primeros destinos el Gobierno es opresor".

Se inspira Morazán en el pensamiento de su época, de la que le tocó vivir. Claramente lo demuestran sus discursos y proclamas. Es un orador fogoso que supo animar con su espíritu de lucha a sus soldados en pro de la libertad y que en la vida política siguió - fiel a sus ideas, tocándole vivir los últimos momentos de la Federación, habiéndose formado en un período de crisis.

En Tegucigalpa tomó contacto con esa crisis y después de Guatemala, por entonces capital de la Federación, vió como las fuerzas de la reacción minaban, poco a poco, los lazos que unían a — los pueblos del istmo Centro-Americano.

Nos da una idea Alejandro Maure, en "Bosquejo histórico de — las Revoluciones de Centro-América" de los manejos que en aquel — momento histórico se hacen de la Federación, en Guatemala.

1º.- Beltranenas y Pavones usufructúan los puestos claves de la Federación en su beneficio.

2º.- Un sector del clero aliado con Aycinena es el obstáculo más grande para encontrar una base que consolide la Federación.

La fe que, desde su juventud tiene Morazán en los principios y liberales le hace un devoto admirador de Rousseau y de Montesquieu. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, será su bandera de lucha por la libertad y por hacer realidad en la práctica estos principios. En aquel momento, sí, de una parte existe la Federación poca preparación por parte de la administración, de otra parte, el pueblo, dada su incultura y su imperfección, es un elemento pasivo que es explotado por la reacción para conseguir sus fines exclusivamente personalistas. Contra ellos, reacciona Morazán en defensa de la libertad del pueblo Centro-Americano y serán los soldados nicaraguenses, hondureños y salvadoreños, los hombres con los cuales se cubra de gloria en varias batallas, así como logra hacer frente al ciclón que haga pedazos la federación. Mantiene esta hasta el último momento en que fué fusilado en San José de Costa Rica, perdiéndose con él, no solo la federación, sino para siempre la unidad política.

A través de su peregrinar por este mundo, Morazán se preocupa de superarse constantemente.

Es precisamente en sus años mozos cuando en la vida local se

plantean ya en Honduras los conflictos de jurisdicciones, por los que se disputan la capitalidad, Tegucigalpa y Comayagua... El Congreso que tenía que reunirse en Comayagua, para evitar un roce — entre las dos ciudades, lo hace en Cedros.

Pero Morazán sigue fiel a su lucha por la libertad, por la libertad, para lo cual trata de conocer los hombres pensadores que por ella lucharon a Montesquieu, a Voltaire, a Turgot, Condorcet, Tocqueville, Payne, ya que, como Pascal, considera que la humanidad es un hombre que vive siempre y progresa constantemente en la dinamicidad de las ideas. Ve que son muchas las cadenas que atan a los hombres, que solo por el camino de la justicia se puede mantener unidos a los pueblos.

Lord Acton, en su ensayo sobre la nacionalidad, nos dice que son sustancialmente perfectos aquellos estados que incluyen dis— tintas nacionalidades sin oprimirlas.

La Constitución Federal debe garantizar las diferentes Cons— tituciones que tienen los Estados del istmo, pero respetando és— tas a aquella, para evitar que se produzca la anarquía, por lo — que la lucha por la libertad tiene que hacerse en todos los terrere

nos de la crisis, pues dado lo profundo de ésta, solo se puede conseguir la unidad teniendo un poder federal fuerte. Pero debe garantizarse la libertad en todos los sentidos de la palabra, en defensa de la democracia política y económica; la intervención del estado en favor de todas las clases oprimidas, el derecho de resistencia contra los gobiernos despóticos, la equitativa distribución de la riqueza, la difusión de la cultura, la soberanía como expresión de la voluntad popular y el incremento de las relaciones con los demás países de América.

Para ello puede hacerse realidad, hay que hacer que predomine la legalidad, que salgan los pueblos del oscurantismo, dando una adecuada educación a la juventud.

Para que predomine la ley sobre la fuerza, que siguiendo el pensamiento de Pascal incapaz de fortalecer la justicia, han justificado el poder, de modo que lo justo y lo fuerte, deberían unirse & haber paz, que es el fin supremo.

La lucha de Morazán es por conseguir esa paz y esa justicia en el marco de la Constitución Federal armonizando los intereses de la Federación con cada uno de los Estados.

Sabe a través de sus quince años en la lucha política que los primeros pasos de unos Estados, son los más difíciles, como los de un niño aprendiendo a caminar, que hace falta que se consoliden una serie de instituciones de la federación.

A Morazán le tocó vivir un período de crisis que fué minando la Federación poco a poco. Esta crisis tiene sus orígenes en los tiempos de la Colonia. Y trató de encontrar aquella fórmula que - junto con la acción uniese a los pueblos del istmo. Pero dadas las fuerzas poderosas de todo tipo que han minado la Federación con el fusilamiento del paladín Centro-Americano, terminó para siempre la vida de la misma Federación.

Como Víctor Hugo, Morazán nos dirá que "el hecho es la fuerza, el hecho es siempre feo, y al final tiene que dar resultados deleznales. Nada bueno ni duradero se puede hacer sin razón, sin derecho y sin justicia" porque solo espropio del derecho permanecer eternamente bello".

Por eso, Morazán luchó por la Constitución Federal, porque - fuera respetada en un período de crisis que minó el alma misma de la Federación en parte por la impericia y la inexperiencia e impo

tencia del gobierno frente al gobierno local que en muchos casos están abiertamente en contra del gobierno federal. La crisis que poco a poco iba minándole no dependía ya en su solución de Mecejón. El ejército federal era minoritario puesto que en parte dependía de la colaboración efectiva de los estados.

El nombre de Provincias Unidas de Centro-América es el que tenía la Constitución Federal, y de hecho los Estados tiene su propia constitución, pero dados los errores que se cometieran en un principio en la Federación, llegaron a ponerse abiertamente en contra de aquella. Sólo un puñado de hombres, valerosos, pero desorganizados, luchan por tornar a la normalidad de la Federación. Morazán trató y sostuvo la Federación, pero con su muerte se reaquebraja ésta definitivamente.

MORAZAN Y LA FEDERACION

Para Morazán el respeto a la Carta Magna, como garantía de las libertades ciudadanas, fué su lucha en unas realidades históricas que por miopia de unos y por intereses personales de -- otros frustraría la Federación Centro-Americana. Cree Morazán --

que las libertades no se regalan. Las libertades se conquistan por los pueblos y cree que, como el pueblo de los Estados Unidos y demás naciones de la tierra, que se han dado su propia Constitución, es el pueblo el llamado a defender sus propias libertades. Para - ello nos dirá en el "Manifiesto de David" y demás proclamas que ha hecho al pueblo, que ha luchado sin interés particular de ningún - tipo, que sólo le mueve el amor a la Patria y es con el pueblo soberano de Centro América con el que escribe su propia historia. - Por ello se le identifica con Tocqueville cuando dice sobre la base en que reposan los Estados Unidos: "Es la sociedad Civil y la - sociedad política, el padre de familia, la aplica a su hijo, el amo a su sirviente, la municipalidad a sus administradores, al poder - a la Municipalidad, el Estado a las Provincias, la Unión a los Es tados". Ante esta máxima el conjunto de la Federación llega a ser un dogma de la soberanía del pueblo y, por eso, por los hábitos del conjunto de las ideas dominantes, y por el contrario, es preciso mirarla como el último anillo de la cadena de opiniones que une - al mundo anglosajón todo entero.

Considera el mismo tiempo que debe regirse por sus propios -

fueros, que tiene su personalidad propia. Admira, cómo no, la Constitución Federal de Norteamérica, pero dada la propia personalidad Centroamericana con sus peculiares problemas y su raíz hispánica - considera como Valle, que se deben perfeccionar los logros conseguidos en su lucha por la democracia, pero siguiendo su propio camino. Que el hacer transplantes que en otras naciones han tenido - logros dignos de loa, bajo el sol centroamericano, no solo resultan perjudiciales y ponen en peligro todo el camino que, hasta entonces, se ha recorrido, sino la propia existencia de la Federación.

En el camino de la libertad, lo que importa es el hombre. Para Morazán es este hombre. Y la protección de sus derechos fundamentales adecuadamente. Por ello, debe garantizarse, frente al - abuso de poder por parte del estado, con una adecuada división de poderes, tal como lo había leído en Locke ("El Gobierno Civil") ,en Montesquieu, ("El espíritu de las leyes") y como Payne dijo, con - relación a Arquímedes: "que las fuerzas mecánicas pueden aplicarse a la razón y a la libertad: Si tuviéramos un punto de apoyo podemos levantar el mundo".

El Estado en que Centro América se independizó de España se caracterizó por haberse hecho sin violencias. La participación de los hechos de armas fué nula, pero la dinámica política, tuvo muchos avatares por la evolución de la Federación y por una lucha fratricida que se mantiene, unas veces por el poder local, de tipo personalista, y por la preparación del pueblo es mínima, aunque ha ido tomando conciencia de sus derechos constitucionales.

Debe de tenerse en cuenta que la participación de algunos jefes de estado sembró con facilidad ideas anárquicas entre las masas indígenas, halagándolas con promesas que no tenían la menor intención de cumplir ni de poner en ejecución.

Y debido al mal uso que por la impericia se hizo de la libertad de prensa por parte de demagogos sin escrúpulos, que no se conformaron con ir minando poco a poco las instituciones federales, sino que alentaron a los propios estados a que violasen la Constitución Federal.

Los partidos tradicionales, conservador y liberal, bien pronto pasaron de lleno a manos de la oligarquía, que para sus propios fines explota esta situación sin atender lo más mínimo la situa—

ción de las masas, sobre todo de las indígenas, que, por otra parte, serán las mejores aliadas de Morazán en la defensa de los derechos ciudadanos. Pero la crisis había calado muy profundo. Había minado el nervio fundamental que mantenía unidos a los pueblos de Centro-América. Esta es, la Iglesia Católica que también se encuentra dividida en liberales y conservadores. Y esto es fundamental, ya que es la única que, en pueblos eminentemente cristianos puede mantenerlos unidos. Por su obra, con la catequización de las masas indígenas, se redujo considerablemente.

No se puede negar que la Federación se convirtió en una fuerza poco vigente y efectiva sobre los Estados. Su ejército era minoritario. Incluso los mismos estados miraban con recelo a éste, y no se le permitió ser muy numeroso, contando con que deben ser los propios estados los que tienen que dar el visto bueno para — sostener la Federación.

Otras causas de la crisis son el aislamiento natural que presentan las montañas, la falta de vías de comunicación adecuadas, la falta de una opinión pública, para que el pueblo conozca sus propios problemas, una prensa que llegue sistemáticamente a todos

los rincones de la Federación, y que esta tenga suficientemente — solvencia moral, orientando a los pueblos en cabal medida para la comprensión y superación de los problemas en que se encuentran.

Para ello se requiere una base ética. Sin existir un mínimo — de eticidad no puede la política ir minando el espíritu religioso — que es como si fuera mirando, poco a poco, la base misma de la Patria.

La política de fraternidad que existía al principio de la Federación, con una mentalidad europea que nos había legado la Madre Patria, da paso a una política feroz y selvática entre los de la Federación y los contrarios a ella. La miopía era tal que no les — permitió ver la realidad, ya que la pasión de los sentimientos — más bajos se impone contra los nobles ideales de la Federación fomentado esto por intereses personalistas de verdaderos caciques de la vida local.

Como consecuencia de la anarquía reinante, surgen enfermedades, peste, la erupción del volcán de Casigua. Todo ello, se suma a la crisis económica, por la que pasa la Federación. Economicamente

te se ha llamado a ésta la crisis del añil, ya que es por este -
producto básico, monocultivo, del cual depende económicamente la
Federación. Las minas habían sido cerradas, en la mayor parte, -
como consecuencia de la guerra civil, haciendo que la marejada
política que defendían los partidos tradicionales se hicieran -
irreconciliables.

Ya se habían planteado algunos conatos por parte de Ingla-
terra, al querer apoderarse del Río Tinto, al Río San Juan en -
Costa Rica, en el mar Caribe, para anexionarse esta parte. No -
obstante, interviene eficazmente la Federación y pone coto a ta-
les aspiraciones. Todo fué debido a la lucha interna en que se-
encuentran enfrentados unos contra otros, de forma sorda y ra-
cional, y al llegar un momento en que las propias provincias -
que constituyen la Federación se proclaman en estados y luchan-
entre sí.

Morazón en sus "Memorias" nos da una idea del caos reinan-
te dentro de la Federación. Era tal que ni siquiera podían poner-
se de acuerdo entre sí los estados para establecer un distrito -
federal que fuera la sede de la Federación.

Merazán por su genuina identificación con el pensamiento liberal, que le caracterizó a través de toda su vida en el respeto a la voluntad soberana del pueblo en la lección de sus gobernantes, en la garantía y salvaguarda de los derechos del pueblo-soberano, por darle sus propias leyes, respetó siempre aún en el caos en que se encontraba la Federación el adecuado cumplimiento de la Constitución Federal (3).

No se prestó nunca a turbios manejos de la cosa pública, cuando tantos funcionarios había sin escrúpulos. Si figura no solo humana, sino también ética e incorruptible, hizo que aquel hombre se creara enemigos que serían los culpables del hundimiento de la Federación.

El mismo nos da una idea en su "Manifiesto al Pueblo Centro Americano" antes de dirigirse hacia el exilio en Perú, el 5 de abril de 1840, a bordo del "Izalco" (4).

"Me alejo, pues, no por cobardía, sin por el mismo sagrado-deber con que el destino tiene atado el hilo de mi existencia al porvenir de Centro-América. Allá en mi destierro voluntario, sabré

esperar el tiempo necesario para que mis enemigos se muestren con los hechos de la sinceridad, de sus propósitos de construir bajo mejores bases la unidad de Centro-América. Yo, mientras tanto, bajo otras playas y otro cielo, velaré por el destino de la Patria que llevo dentro de mi corazón como algo que le es inseparable, y que no puede terminar sino con mi muerte. Si mi destino, la pudiera engrandecer tal como lo he soñado en mis delirios, pueden los que me persiguen seguir al frente de sus destinos, mientras mis mortales restos descansan en playas extranjeras. Pero si mi ausencia, tan deseada por tan implacables enemigos, solo sirviera para prolongar aún más el reinado de las sombras, el martirio de los pueblos, y para perpetuar la obra inícuca de los perversos, entonces no podré permanecer indiferente ante esa obra de perversión y de nuevo volveré a tocar estas playas de mi amor, para llevar a feliz término la nueva cruzada de redención que habré de darnos patria, asegurándonos nuestros derechos y libertad interiores, así como nuestra independencia y respeto en el exterior.

Dejo en este, en los demás Estados, innumerables amigos, que perfectamente identificados con las ideas que sostengo, sabrán velar

como yo, en mi ausencia, para que en la hora de la llamada general estén todos en el puesto que el deber los tenga señalados. Mientras tanto, dejo mi promesa de volver a este suelo queridísimo, si el bien de la patria lo necesita. yo respetaré su voz sagrada, y, con mi palabra, os dejo la expresión sincera de gratitud para este pueblo cuyo amor me llevará la tumba si no vuelvo a verla".

(5) Ramón Rosa, (Tomo I. Escritos Políticos. Tegucigalpa, - 1906, pág. 24 y 25), dice con respecto a la Federación: 1ª) La - Constitución Federal, de 22 de noviembre de 1824, era muy avanzada, y no podía aplicarse a los pueblos de Centro-América por la falta de preparación.

2ª) El sistema federal que se estableció rompió la unidad - histórica de Centro-América dada por la dominación española, cuando el sistema de gobierno era difícil de practicar, por falta de vías de Comunicación en Centro-América, y sobre todo de educación política y recursos económicos.

3ª) Conforme a la Constitución Federal se constituye un poder nacional instituido de suficientes y vigorosas atribuciones, lo -

que produjo como consecuencia graves conflictos entre el gobierno federal y los estados.

4º) El sistema Federal implantado sembró en un pueblo inquieto, apasionado, de raza meridional e inflexible, el sentimiento de la guerra civil.

"EL MANIFIESTO DE DAVID"

El espíritu creador del hombre se pone de manifiesto una vez más haciendo frente a la crisis que tan profundo mina la vida política centroamericana.

Dicha crisis, ha llegado a dejar de hacer realidad los ideales de fraternidad entre la familia centroamericana, que de una parte se encuentra cansada de tantos años de lucha, sin que existan ningún remedio para poner fin a tal estado de cosas.

Los pueblos son impotentes de garantizar el orden interno y, a su vez, estos no dejan que la Federación intervengan al mismo tiempo que las propias autoridades Federales violan la Constitución.

Morezán en "El Manifiesto de David" denuncia los turbios manejos y abusos de poder de que se había valido Manuel José Arce para ser elegido presidente de la República, sin tener en cuenta la voluntad del pueblo soberano (6).

De esta forma, ganó las elecciones el ciudadano Manuel José Arce a José Cecilio del Valle, logrando la reacción de los amigos de la libertad, y dando al pueblo centro-americano su voto para que se consolidase de una vez la dignidad, la fraternidad, la justicia y la libertad.

La elección en que triunfó Arce se practicó en las provincias conforme a la ley de 5 de mayo de 1824, y la ley de la Constitución Federal de 22 de noviembre de 1824 no fué sancionada sino hasta el 29 de agosto de 1825, por lo que Arce, habiéndose sido elegido el 21 de abril anterior, no podía beneficiarse del régimen y de la reglamentación establecida por el artículo 47 de esta Constitución que permitía al Congreso encargarse, con poder discrecional, del gobierno, a los ciudadanos que hubieran obtenido una mayoría de votos relativa.

A Arce no le importó esto, y por si fuera poco, él mismo introdujo una serie de reformas en la Constitución, inspiradas en la de los Estados Unidos, lo que no podía ser más erróneo. Estas reformas, en las que se creía ver el remedio para todos los males, al no tener en cuenta la idiosincrasia de nuestro pueblo, no hicieron más que aumentar la crisis que, ya la poca preparación de nuestros gobernantes, había provocado.

(7) Refiriéndose a ello, el Presidente Arce: "Yo acababa de estudiar en Washington y en los principales estados anglo-americanos, el sistema federal; había penetrado en su origen, había pulsado sus enlaces: enterándome de sus ventajas y me hice cargo de sus defectos. Todo esto es necesario decirlo, se obró en pocos días y sin conocimiento del idioma inglés".

Pero lo que es más grave aún es el poco tacto que se tuvo en tratar los problemas de la Federación, introduciéndose en los asuntos internos de los Estados, sin tener en cuenta el artículo 10 de la Constitución Federal, que dice:

"Cada uno de los Estados que componen la Federación, es libre e independiente en todo lo que concierne a la Federación".

Mecejón sabe perfectamente que los enemigos de la libertad, antes como ahora, siguen conspirando contra el pueblo soberano, y así dice textualmente en el "Manifiesto de David":

"No es vuestra Patria, porque cuando triunfaron las ideas de la libertad en la metrópoli, cuando los patriotas españoles quitaron algunos eslabones a la pesada cadena de nuestra esclavitud, rebelándonos de este modo lo que eramos y lo que podíamos ser, vosotros conspirastéis contra el gobierno constitucional que se establecía en toda la Monarquía. Como enemigos de las luces, cooperastéis, en todo aquello que pretendía entonces indeendizarse del gobierno de las Cortes de Cádiz, y trasladar a América el gobierno absoluto de los Borbones.

Por una disposición de la providencia, esos enemigos de la independencia de la España constitucional, se unieron con los independientes de ambos gobiernos y proclamaron a la reparación de la antigua metrópoli el 15 de septiembre de 1821".

Morazón sabe, también, que la Constitución de Cádiz de 1812, había creado en el pueblo una conciencia de sus derechos, y que la -

independencia de Centro-América se había hecho de forma pacífica, y que solo los grupos sectarios, los que habían ido minando la la bor que se había realizado, con el abandono y el estado de explotación demagógica a que tenían sometido al pueblo algunos gobernantes, fueron los que condujeron a Centro-América a la guerra Ci vil, por su ansia de poder y ambición personal.

Como hombre de espada, como paladín de la Federación, a Mora zán, no le quedó más remedio que defender con las escasas fuerzas que tenía ya, la unidad de Centro-América.

El "Manifiesto de David" fué escrito por Mecejón al pueblo - de Centro-América en el exilio, haciendo votos por defender sus - ideales de la libertad y el progreso. Para luchar por la unidad - de ésta, este "Manifisto" es escrito en David (Nueva Granada) el 16 de julio de 1841, y en él se denuncian los atropellos que ha— bía sido objeto de la Federación y la inactividad de la misma, de— bido a que los enemigos, no sólo la dividieron, sino que en cada - uno de los Estados, gobernantes sin escrúpulos, al margen de toda legalidad constitucional, amparados en la ignorancia del pæbulo - indígena y sostenidos por malhechores, condujeron a Centro-Améri-

ca a la anarquía, a la desunión y al caos.

No fué muy prolífero Morazán como escritor. Toda la obra que nos legó se conoce por su "Memoria" y por su "Manifiesto". Fué — más que todo, estratega. El hervor de la Federación. Al desaparecer él de la escena política, automáticamente dejó de existir la Federación.

Mecejón no claudicó nunca de sus ideas de unidad del pueblo-centro-americano, dentro de la más estricta legalidad constitucional. Pide que la voluntad del pueblo libremente manifestada, por medio del sufragio se respete y que no se traicione la idiosincrasia de nuestro pueblo, ya que son los gobernantes los que tienen que ajustarse a la voluntad popular, y no como maquivelicamente — han hecho algunos gobernantes de los Estados para sostenerse en — el poder.

Mecejón dice en el "Manifiesto de David":

Ni el oro de Guayape, ni las perlas del golfo de Nicoya, vol verán a adornar la corona del marqués de Aycinena, ni el pueblo — centroamericano verá más esta señal oprobiosa de su antigua escla

vitudo, pero si alguna vez, vé ese símbolo de la aristocracia, será blanco de los tiros de un soldado republicano, ya que es Aycinena uno de los dirigentes del partido conservador que ha tratado por todos los medios de impedir que se introduzcan las luces y - que exista una auténtica libertad de prensa en la Federación",

La lucha por la cual Morazán llama al pueblo centro-americano, es para redimirle de la injusticia, para hacer una auténtica justicia social, ya que el marqués de Aycinena era un auténtico aliado del clero alto y de los terratenientes que son los dueños de la mayor parte de Centro-América.

En Morazán están acrisoladas las auténticas virtudes del soldado centro-americano por su nobleza en lucha, en buena lid, y en respeto a la opinión de sus opositores (9).

Morazán, defensor de las instituciones democráticas, cierta vez que los enemigos le tomaron a la familia como rehenes, expresó algo así como esto:

"Los rehenes que los enemigos tienen en su poder son para mí sagrados y llaman vehementemente a mi corazón. Pero soy jefe de estado, y mi deber es atacar".

Y tomó la plaza logrando salvar, sanos y salvos, a sus queridos deudos.

EL TESTAMENTO DE MORAZAN

Morazán no podía permanecer exilado en el Perú. Sus mejores días, su obra, su vida, las había entregado al servicio de la patria, a la unidad de Centro-América. Sabía que sus enemigos eran muchos y numerosos. Sólo esperaba que en el istmo soplasen mejores vientos para volver a luchar por todo aquello, y que la bandera de la Federación ondeara nuevamente en el altar de la Patria.

Así fué como Mecejón, llamado por su fé en los ideales, con otros patriotas, se traslada a Costa Rica, pero en Cartago fueron rodeados por un ejército de este país; junto con varios patriotas que querían luchar por la Federación, Morazán es conducido preso a San José de Costa Rica, ante el temor de que se produjera un levantamiento. Al general Saguet, que se encontraba en la costa del Pacífico, con parte del ejército Federal, se le dieron tres horas para disponer la muerte de Morazán.

Su testamento dice así:

"San José de Costa Rica, 15 de septiembre de 1842. Día del aniversario de la Independencia cuya integridad he tratado de — mantener. En nombre del autor del Universo, y en cuya religión— muero:

"Declaro: que soy casado, y dejo a mi mujer como única albacea.

"Declaro: que todos los intereses que poseía míos y de mi— esposa, los he gastado en dar un gobierno de leyes a Costa Rica, lo mismo que 18.000 pesos y sus réditos que adeudo al señor general Pedro Bermúdez.

"Declaro: que no he merecido la muerte, porque no he cometido más falta que dar libertad a Costa Rica y proclamar la paz de la República. Por consiguiente, mi muerte es un asesinato — tanto más agravante, porque no se me ha juzgado ni oído. Yo no he hecho más que cumplir las órdenes de la Asamblea, en consonancia con mis deseos de organizar una República. Protesto de — que la reunión de soldados que hoy ocasiona mi muerte lo ha he—

cho únicamente para defender el departamento de Guanacaste, perteneciente al estado amenazado, según las comunicaciones del comandante de dicho Departamento por fuerzas del Estado de Nicaragua, y que si ha tenido lugar en mis deseos usar después alguna de estas fuerzas para pacificar la República, solo era tomando a aquellos que voluntariamente quisieran marchar porque jamás se impone una obra semejante a hombres forzados.

Declaro: Que el asesinato, que se ha unido a la falta de palabra que dió el comandante Spinar de Cartago, de salvarme la vida; que, el amor a Centro-América muere conmigo, y exijo a la juventud, que es la llamada a dar vida a este país que dejo con sentimiento por quedar anarquizado, que imite mi ejemplo de morir — con firmeza antes de dejarle abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra.

"Declaro, que no tengo enemigos, ni el menor rencor llevo al sepulcro contra mis asesinos, a quienes perdono y deseo el mejor bien posible.

"Muero con el sentimiento de haber causado males a mi país, aunque con el justo deseo de procurarles el bien, y este senti—

miento se aumenta porque habia sacrificado mis opiniones en política, en la carrera de la revolución y creia hacer el bien que me habia prometido para salvarnos de este modo de aquellas faltas - que me quitan la vida injustamente. El desorden con que escribo, por no haberme dado más que unas horas para morir, me habia hecho olvidar que tengo cuentas con casa de Mr. Marcial Benet, con resultados del corte de madera en la costa norte y en la que considero alcanzar la cantidad de diez o doce mil pesos, que corresponden a mi mujer como retribución de las pérdidas que ha tenido en sus bienes, pertenecientes a la hacienda de Cucuara, y tengo - - otras deudas además, que no ignoro, con el señor Cruz Lozano. - Quiero que este testamento, en la parte que tiene relación con - mi muerte y los negocios públicos.

Francisco Morazán".

Nota: Por cláusula verbal, dictada desde el patíbulo legó - sus restos mortales al pueblo de El Salvador en prueba de su predilección y reconocimiento a su valor y entusiasmo por la defensa de la libertad y de las instituciones republicanas. (10)".

Para Marco Aurelio Soto, uno de los Presidentes más importantes de Honduras, el testamento de Mecejón es la cartilla donde deben aprender a leer los niños de Centro-América. Morazán dice la última frase: "Queridos amigos: la posteridad nos hará justicia".

El pelotón encargado del fusilamiento esperó órdenes. Era Morazán quien debía darlas, por haberlo pedido así a sus verdugos. El héroe se acercó a los soldados para darlas. Inexpertos ciudadanos, con rifle en las manos. Con la orden de "¡Fuego"! ganó su última batalla, y abandonó la prisión terrena para convertirse en ángel titilar de los pueblos.

La vida de Mecejón puede simbolizarse con relámpagos, tormentas, huracanes, montañas y abismos. Su vida política duró 15 años, pero su nombre llenaría los siglos con estrépito glorioso.

BIBLIOGRAFIA

=====

1 - Efemerides de Honduras. Publicada en veinte números por la Revista de la Universidad de Honduras.

Tegucigalpa. Tomos III, IV.

2 - ALEJANDRO MAURE: "Bosquejo histórico de la Revolución Centro-Americana. Tomo I - pág. 200 y sig. Paris 1913.

3 - ROMULO DURON, E.: "Bosquejo histórico de Honduras. Tipografía. El Comercio, San Pedro 1927. Honduras, pág. 231 y sig.

4 - FRANCISCO MORAZAN: "Manifiesto al pueblo Centro-Americano de 5 de abril de 1910.

5 - RAMON ROSA: Escritos Políticos. Tegucigalpa 1906 - pág. 24 y ss.

6 - "Manifiesto de David". pág. 7 y sig.

7 - "Memoria del ex-presidente MANUEL JOSE ARCO, publicada en México B.F. pág. 11 y sig.

8 - MILLA: "Historia de Centro-América: Documentos.

9 - RAFAEL REYES: "Vida de Morazán, pág. 45 y sig.

10 - "El Testamento de Morazán". San José de Costa Rica, sept. 1842.

CAPITULO, V

Constitución de 1825
Constitución de 1839
Constitución de 1848
Constitución de 1864
Constitución de 1873
Constitución de 1880
Constitución de 1894
Constitución de 1904
Constitución de 1924
Constitución de 1936
Constitución de 1957
Constitución de 1965

DESARROLLOLA CONSTITUCION DE 1825
=====

Como sostiene Don Luis Sánchez Agesta, los antecedentes naciounales y los principios de la Revolución Francesa y las Constituciounes que nacieron a su influjo, se encuentran amalgamadas en la - - constitución gaditana. La verdad, es que en Centro-América la Consutitución de Cádiz, no sólo dejó sentir su paso dentro de la vida -

institucional, sino que dió carta de naturaleza a nuestro desarrollo y a su ámparo surgieron las instituciones, que hoy rigen la vida Centro-Americana. Con ella, los pueblos organizan su vida política, dando origen a los partidos que hoy tiene. No solamente con ella llegan las luces a nuestros pueblos, sino que se toma conciencia de los derechos del hombre y del ciudadano que habian sido proclamados por la Revolución Francesa.

Además de esto, la Constitución de Cádiz de 1812, es un - elemento de integración en la vida democrática de Centro-América, pero su vigencia no se aplicó en cabal medida, como debiera haber sido, debido a que, cuando llegó a Centro-América, encontró la oposición en las propias autoridades coloniales. "No es de extrañar, que sean los mismos que la respalden, los primeros que la violen. Por ello por parte de nuestros próceres no encuentra su defensa", dice Valle, quien en el "Amigo de la Patria" en Guatemala, entonces capital de las provincias unidas - de Centro-América, se declara en su defensa como meta para conseguir que sean realidad los postulados que en ella se encuentran.

Valle es uno de los autores más preclaros de la Constitución de 1825. Se trata en ella de seguir la línea de la Constitución federal de Centro-América, como medio de conseguir una unidad política, al mismo tiempo que se respetan las respectivas instituciones, que ya son realidad en los diferentes Estados. Conocedor Valle de la idiosincrasia patria, trata de que se mantengan aquellos principios, que no se opongan a la vida Constitucional para que no exista un detrimento en la vida soberana de los diferentes países.

Debe de tenerse en cuenta que en Honduras se plantea el problema más agudo por la rivalidad local, que data desde la época española. Esto es debido, a que, dentro del obispado de Honduras, hay dos entidades administrativas autónomas, una en Comoyagua, que es donde está el gobierno y la alcaldía mayor de Tegucigalpa, estando, dentro de ella, la región misma del Centro del país. Sur y Oriente.

Por otra parte, tienen las dos ciudades la misma población, y por tanto, ambas la misma importancia relativa, destacándose Tegucigalpa, por su riqueza minera. En cambio, Comoyagua, era la ciu-

dad, en torno a la cual estaba la vida artística y cultural del país, siendo además un centro religioso y administrativo, lo cuál dió lugar a una rivalidad entre las dos ciudades, no resuelta hasta el año 1880 en que quedó la capital definitivamente, en Tegucigalpa (1).

El localismo, es uno de los factores que obstaculiza la unión de Centro-América y el desarrollo de la vida de la Federación, después de la Independencia. Debe tenerse en cuenta que en estas ciudades, existe una burquesía próspera, que no tiene nada que ver con las demás ciudades del istmo. Así si bien Guatemala fué la capital después de la Independencia, no es una ciudad lo suficientemente grande, como para que los demás grupos hermanos, giren en torno a ella. Debe añadirse el factor de las vías de comunicación, ya que no existen caminos en buenas condiciones para que puedan ir diligencias con rapidez, siendo viable el tránsito sólo en la estación seca, y hay que tomar en consideración que, en Centro-América, hay seis meses de invierno y seis de verano, invierno cuando llueve y verano cuando no llueve. Todo unido, por otra parte, a los obstáculos naturales que presentan las montañas, ha hecho que,

en Honduras, las comunicaciones no se hayan desarrollado siendo - llamada por ello, la Suiza Centro-América. Todo esto, hizo que la vida local tuviera tanta fuerza. De ello, tuvo conciencia Valle que, proponía que se le dieran importancia a las vías de comunicación como medio de acercamiento entre los diferentes pueblos Centro Americanos. Al ser nulas fue esto un factor negativo para la unión de los distintos Estados.

La Constitución Federal emitió un decreto el 5 de mayo de 1824, disponiendo que las provincias Centro-Americanas que iban a convertirse en Estados, convocaran Congresos Constituyentes y designasen los jefes y vice-jefes que debían ejercer provisionalmente el poder ejecutivo. Dada la rivalidad existente en Honduras entre Comayagua y Tegucigalpa, la Asamblea Nacional Constituyentes tuvo que reunirse en Cederos, a igual distancia entre ambas ciudades, hacia el Norte. Luego, se reunieron en Tegucigalpa, y, por último en Comayagua.

La característica de la Constitución de 1825, es que las diferentes Constituciones de los Estados Centro-Americanos, tienen una gran similitud y sobre todo, siguen las directrices de la - -

Constitución Federal. Hay que tener en cuenta sobre todo la que - tiene con la Constitución de Cádiz. Con ello, el legislador hondureño, quiere dejar abierta una vía democrática hacia la integración siempre y cuando se respeten los principios ya plasmados en las - distintas Constituciones de los diferentes Estados.

Hay que tener en cuenta que ésta Constitución, se caracteriza porque en ella se encuentra unida la iglesia, al estado. Así lo manifiesta el Art. 5.

"El Estado de Honduras profesa y profesará siempre la religión Católica, sin permitir mezcla de otra alguna, para lo cual la protegerá el estado con leyes sabias y justas".

Art. 6. También con leyes sabias y justas protegerá el estado "la libertad, la propiedad y la igualdad". Teniendo como camino — firme, la garantía de éstos derechos, que serán, por otra parte, - los mismos que están contenidos en la Constitución Federal.

Una de las características de ésta Constitución, es la que - establece un sistema bicameral, compuesto por la Asamblea del Estado y por un Consejo representativo, cuya jurisdicción, poderes y -

procedimientos seguirán fielmente el de los órganos federales, según lo establecido en la Constitución de 1824. La Asamblea contará de un mínimo de veintiún diputados, y el Consejo representativo, - de uno por departamento, siete a la sazón, que durarán en el cargo tres años, renovándose cada año un tercio de los escaños. Los representantes son los de: Santa Barbara, Yoro, Trujillo, Nacaome, Comayagua, Choluteca, Gracias.

Obra de las características de la Constitución jondureña, al igual que las demás Centro-Américas, es que su organización política, en vez de por provincias es por departamentos, al frente de los cuales se encuentra un gobernador, que es el que representa al Ministerio del Interior, en algunos países, y en otros Ministerio de la Gobernación.

Siguiendo la Constitución de Cádiz, se da gran importancia al sistema local. El Alcalde tiene un papel trascendente en la vida - ciudadana. Es éste quizá uno de los puntos más acertados, para la toma de conciencia del pueblo en la vida política, principalmente en los pueblos aislados, donde la economía agraria, era el único - medio de vida y un índice muy grande de analfabetismo, pero que, a

la hora de elegir, aciertan a proponer el más idóneo, debido a que, por su tamaño y el factor de la vida local, dá lugar a que compene tren y conozcan mejor los problemas de su comarca.

Son momentos dramáticos. El conflicto de jurisdicciones entre los Estados está a la orden del día, y poco a poco, son mayores debido a las luchas internas. En el castillo de San Fernando de Omoa, la guarnición se ha pronunciado a favor de España. Dada la zona - estratégica de ésta, dominando todo el golfo de Honduras, toda la costa de Guatemala, construída especialmente, junto a otras fortificaciones que se hicieron por todo el Caribe para la lucha eficaz contra los piratas, hace que se organice una fuerza para luchar - contra la guarnición del Castillo. Pero la zona selvática, las - arenas movedizas, el paludismo, fieras, etc. diezmaron gran parte de esta fuerza, que logró coronar con éxito a su misión. Lo del - Castillo fué un pronunciamiento aislado, lo mismo que sucedió en algunos pueblos que no sabían a qué gobierno seguir, si al Federal o al mero Estado. Por lo demás, toda la organización está en embrión.

Se plantea el problema de que no se les ha pagado, a las - -

viudas ni a los mutilados en las diferentes guerras, los empleados del gobierno no cobran con puntualidad, y el problema económico, - se agudiza mucho más cuando el añil, que era el producto del cual dependía la economía, entró en crisis, en éste período en los mercados mundiales, lo que hizo que se produjere un malestar social,- que acentuó el problema político.

LA CONSTITUCION DE 1839

La característica de nuestra historia política, es de improvisación, ya que Honduras, cuando surgió a la vida independiente era una de las provincias de Centro-América. Al repasar cada una de las provincias y constituirse en Estados, lo hacían sin haber estado preparadas para ello, e incluso la propia Centro-América, en aquel momento histórico, Valle preconizó que no lo estaba aún. Por eso, nuestra primera Constitución, tenía grandes ambigüedades y contrariedades. La dinámica de los propios acontecimientos políticos haría que pronto se dejase sentir su reforma.

La característica de éste período, es que el ordenamiento Constitucional, sigue paralelo a la Constitución Federal, Honduras ha sido el país que ha rendido culto a la unidad Centro-Americana, y a nuestros próceres, que, por todas las medidas humanamente posibles, trataron de encontrar la unión perdida del istmo Centro-Americano. Se mantiene entre todas las Constituciones del istmo Centro-Americano. Se mantiene entre todas las Constituciones del istmo una gran similitud. Hay que tener en cuenta, que todos -

ellos vienen del tronco común que es la Constitución de Cádiz, pero no obstante, frente a la Constitución Federal, cada país tiene algunos preceptos que le son particulares, y que la identifican al mismo tiempo que su propio ordenamiento jurídico, que se encuentra informado por el Derecho Español. Algunas leyes de las siete Partidas, continúan en vigor, así como el Derecho Mercantil son "Las ordenanzas de Bilbao".

Este texto sigue las directrices del Congreso Federal, ya que el 30 de mayo de 1838, desnegado el título XII de la Constitución federal relativa a la organización, les dejaba en libertad para — constituirse en la forma que considerasen más idónea, comenzando la forma republicana y representativa y la división de poderes.

Por ello el Gobierno hondureño por decreto del 5 de noviembre de 1838, luego recogido en la Constitución, declaró que "El Estado libre y soberano de Honduras es independiente del gobierno federal del de los demás estados, y de otros gobiernos o potencias extran- jeras".

El artículo 2 establece que "El Estado de Honduras, será uno de los Federados de Centro-América, cuando acuerde con otros Esta

dos el pacto que los unía". En éste artículo se recoge el deseo - ferviente de integrar en la Patria Grande.

Mayormente meritorio, es éste sacrificio unionista y sin rencores, a pesar de que, el propio suelo patrio, ha sido objeto de muchas batallas, por parte de los ejércitos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, ~~que~~ con ella lucharon tanto al lado de un bando como del otro. Hay que tener en cuenta la figura de Morazán, ya - que él es uno de los inspiradores de ésta Constitución. Uno de - los hombres, que ha dejado sentir el influjo de su egregia figura, para sus contemporáneos, al tratar de unir Centro-América, con un exiguo ejército, solo contando con su hidalga figura, y sin me - dios. Eso así, alumbrado por un ideal, que ha legado a las generaciones futuras, como llama que ilumina a éstas. Fruto de ~~esta~~ esta lu-cha, la situación social, política y económica se hace más críti-ca. (2)

Se tiene especial interés en garantizar los derechos individuales, por medio de una adecuada división de poderes. El legis-lativo, pasa a ser unicameral y el poder ejecutivo está representado por el Presidente de la República. En caso de ausencia o fa

llecimiento, en vez de hacerse cargo el vicepresidente, sería reemplazado por tres suplentes, entre los cuales elegiría el Congreso al que se ocuparía del poder ejecutivo, lo cual denota la influencia que tiene de la Constitución Federal. Debe de considerarse, no obstante, que poco a poco, y después de grandes sacrificios, sólo debido a la realidad social de nuestro pueblo, que no era muy poblado, pudo superarse éste trauma. En el momento actual, un conflicto de este tipo sería inaudito y de consecuencias imprevisibles.

No obstante al Presidente de la República se le conceden amplios poderes administrativos, el de convocar el congreso en sesión especial y el veto. Su período se reduce a dos años, siendo elegible una sola vez, debido a que el general Ferrera, tenía gran prestigio personal, y a la situación en que se encuentra el país, en aquel momento histórico.

El poder judicial depende de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte son nombrados por el Congreso.

LA CONSTITUCION DE 1848

=====

El proceso institucional patrio se ha ido perfilando, con fórmulas propias y originales. Con vivencias no obstante lo agitado - de nuestra vida pública. De no ser nuestro medio social, esencialmente moral, las reformas que se hicieron al texto constitucional, hubieran sido reflejo de la dinámica política imperante en el seno mismo de la patria, en otro país que fuese solo exclusivamente — ciudadano.

Me refiero a que la vida pública gira en torno a una gran — ciudad, las crisis serían un axioma, y, en parte, se pudieron soportar, por que no existían tampoco grandes masas proletarias. Las mismas permanecían aún cerradas, por lo que en toda la economía — era de consumo y dependía de la agricultura.

Encontramos ya, claramente definidos, los dos grandes partidos, tradicionales hasta hoy, en toda la vida institucional de Honduras. Dichos partidos son: el nacional y el liberal, cuando la — Constitución de 1848, está en el poder el partido liberal. En ge-

neral, se puede decir que los dos partidos sólo se diferencian en el nombre, ya que los programas y acción, cuando llegan al poder son idénticas caracterizándose sólo porque orientan su lucha por la conquista del poder (3).

La característica de la Constitución de 1848 está en que en ella se definen más claramente la jurisdicción de nuestra soberanía, ya que los primeros pasos de nuestra vida institucional funcionaron sin estar claramente delimitada la de cada uno de los estados del istmo.

Se mantiene y se da especial importancia, a los derechos y garantías individuales, aunque esto solo esta de hecho en la letra de la Constitución, ya que se incumplen con frecuencia, debido a la guerra civil, sin cuartel que mantienen ambos bandos políticos que hace que no sea efectiva llevar éstas en forma adecuada en la práctica.

El espíritu Centro-Americanista se encuentra fuertemente arraigado y no obstante el fracaso de la unión donde la ingenuidad fué fruto de la improvisación, se aprecia la influencia de Inglaterra, dentro de los asuntos del istmo, ya que tenía interés en extender

extender sus tentáculos, para controlar la economía de aquellos - países con miras a su propio mercado, y, sobre todo, una vía marí tima que les permitiría el fácil acceso entre el Atlántico y el - Pacífico. Por otra parte, dada la ~~an~~arquía reinante y la inmadurez en que en aquél momento se encuentran los pueblos, dando sus pri meros pasos, Inglaterra tenía en su poder desde el reinado de Car los III, las Islas de la Bahía, punto clave en el Golfo de Hondu - ras, a través del cual se controlan todos los puertos Centro-Ame - ricanos del mar Caribe.

LA CONSTITUCION DE 1864

El espíritu Morazánico que ha inspirado al ordenamiento constitucional hondureño, se hace patente en la evolución en la ideación integracionista, de la que Morazán fué paladín, puesto que a la situación reinante en Centro-América, no le quedó otra alternativa - que tratar de imponerla por medio de las armas, si bien no contó con la fuerza necesaria, dado que era exígua, en el ejército federal. La oposición así como los intereses personalistas en la vida local, hacen que en realidad, sea ineficaz el propio funcionamiento de la Federación (4).

Era tal la fuerza del localismo, que fué imposible establecer la sede de un distrito federal. También existía una ciudad, que, - geográfica y políticamente hiciera esto eficaz, de forma que, en - torno a ésta ciudad, girara la vida del istmo.

Se aprecia en la Constitución de 1864, que fué hecha durante - la presidencia de Don José María Medina, el 29 de septiembre de - 1865, un sentido más realista de lo que debe ser la unión, no obs-

tante aparecer designada Honduras como república en su Art. I.

El pueblo hondureño se constituye en República, al mismo tiempo que, aparece claramente definido su territorio. Los fracasos — de intento de unión entre los pueblos, han llevado a que se delimite, de modo claro, la jurisdicción de los respectivos gobiernos, ya que ello ha sido la causa de conflictos entre los diferentes países. Igualmente se establecen los emblemas nacionales, la bandera hondureña, que será azul cielo, con dos franjas que simbolizan las dos océanos, por los que está bañada y una franja de color blanco con cinco estrellas de color azul que son los cinco estados de — Centro-América. Una prueba más de los anhelos, Centro-Americanistas, pero por el camino de los postulados del Derecho y la Justicia.

Así, respecto a los derechos y obligaciones de los hondureños se hace una clara enumeración de ellos, siguiendo la corriente que la Constitución de Cádiz, hizo realidad en nuestra Patria.

Se introduce la costumbre unitaria, que tiene su origen en — la Constitución francesa, por la cual se debe tener determinada —

cantidad de dinero para optar a determinados cargos públicos mil - pesos para diputado y cinco mil pesos para presidente.

Se mantiene la división de los tres poderes, siguiendo la doctrina de Montesquieu. El legislativo, que compone el Congreso, que se reúne cada dos años. El ejecutivo que corresponde al Presidente de la República, y el judicial o la Corte Suprema de Justicia. Se da especial fuerza al ejecutivo, donde se autoriza al Presidente - para que concorra a cualquier Congreso a fin de conseguir la unidad del istmo. Este principio está inspirado en la corriente Morazánica, de intento de unidad, siempre que sea posible.

LA CONSTITUCION DE 1873

Una de las características de las Constituciones del siglo XIX en Honduras, es que se tiene especial interés en anunciar que es una nación católica, apostólica y romana, con exclusión de -- ejercicio público de cualquier otra, porque el sentido unionista -- que tiene la religión, está por encima de todas las demás, por -- otra parte, el Estado la protege con todas las fuerzas de que dispone.

(5) La Constitución de 1864, estuvo en vigor sólo ocho años. Ello nos da la idea de la agitada vida política de nuestra Patria, proclamándose una nueva Constitución que entra en vigor el 23 de diciembre de 1873, en la ciudad de Comayagua, en aquel instante -- capital de la República. El general Medina fué depuesto del poder y preso. El nuevo presidente liberal Celso Arias, después de incendiar la misma capital, que se hizo cargo del poder, mandó que se eligieran diputados y que se reuniera la Asamblea Nacional -- Constituyente, para proclamar el nuevo texto de la misma.

Se debe tener especialmente en cuenta, en lo que se refiere - a la vida local, que la familia hondureña se encuentra dividida, en dos grandes partidos: nacional y liberal. Esto debe tenerse en - - cuenta ya que dada la anarquía reinante, ha aumentado el analfabetismo, e incluso al calor de las ideas partidaristas en la vida - departamental, el indio, analfabeto e inculto, presionado por la - soldadesca, se transforma en la peor de las bestias. Igualmente, el hombre de las ciudades es fanatizado y por las rivalidades locales, los ejércitos de El Salvador y Guatemala invaden Honduras.

Los partidos no sólo tienen su trascendencia en la vida local, sino que, en los demás Estados del istmo, existen otras idénticas. En Guatemala, ha llegado al poder Justo Rufino Barrios, insigne hombre político Centro-Americanista, pero que, al interponer a Poncia no Lucio, comisionario negro en Choluteca, no hace más que empeorar el entendimiento entre pueblos hermanos y como consecuencia de - ello, un retroceso en todos los campos y en los mismos pueblos. Son potencias extranjeras las que, al final, dominan aún más a los - - propios pueblos.

La nueva Constitución, sigue las directrices de la de 1865, -

aunque es más confusa, en cuanto a las atribuciones del poder judicial, que contradice la buena marcha de la división de poderes, ya que, en tiempo de guerra, puede censurar las proclamadas por los congresos. Se debe esto a que el Congreso se reúne cada dos años, a la falta de vías de comunicaciones, y anarquía reinante, lo cual dá al poder ejecutivo mayor fuerza, para que en aquel estado de cosas pueda hacer efectiva la Constitución y las leyes.

Luisa Ponciano, logró poner sitio a Comayagua en enero de — 1874. Arias, preso y vencido, fué desterrado y al reunirse la Con vención Nacional declaró Presidente a Luisa, y, en vigor, la Cons titución del anterior.

LA CONSTITUCION DE 1880

La Constitución de 1880 tiene una característica peculiar: que no es tan extensa. Tiene solo 85 artículos, en realidad. Dada su brevedad, tiene además otra característica ~~myy~~ importante y es que junto a ello, se encuentra su eficacia. Al promulgarse era Presidente de Honduras Marco Aurelio Soto, que había estudiado en París, y estaba extrañamente influido, de un liberalismo de carácter renovador. Dentro del istmo sucede igual con otros liberales Centro-Americanos. A la escasez que tenía el país, pretendió imponer el "patrón plata" de igual manera, que se hizo en Europa en la "Unión latina". Lo primero que hizo fué pacificar el país, reconstruirlo y sacarlo del estado de anarquía en que se encontraba.

Es también esta la época de las grandes reformas jurídicas- Marco Aurelio Soto, se rodeó de un grupo de juristas jóvenes, - dinámicos y de espíritu renovador que no existieron en los regímenes anteriores.

El 1 de noviembre de 1880 se emite una Constitución que fué - promulgada en la misma fecha. Dicha Constitución reconoce la garantía de "Habeus Corpus" y garantizaba la seguridad individual. Pero no incluyó en el texto constitucional ninguna ley de amparo, que - regulase el ejercicio de las acciones para hacer efectivas dichas- garantías.

(6) A éste respecto el Dr. Don José María Sandoval, en su - - obra, "Comentarios a la ley de los tribunales", expresa:

"El Código de procedimiento de 1880 tenía el recurso de ampa- ro como uno de los incidentes del juicio criminal, pues disponía - en el art. 947: "Presa o cohibida cualquier persona en ejercicio - de su libertad de poder y en virtud de la garantía de "habeus cor- pus", acudía al Tribunal Superior, al fin de que amparase, prote- jiese o decretase su libertad". Pero tal recurso era deficiente - porque solía utilizarse contra las arbitrariedades del tribunal de justicia, y no contra las autoridades y funcionarios públicos, ni en otro orden, comprendía todas las actas relatorias y las garan- tías constitucionales, que requieren pronta e inmediata reposición".

Durante esta Constitución, por primera vez, se separa la Igle

sia del Estado, se establece la tolerancia de cultos, y garantiza el estado su adecuada práctica, en libertad (7).

Se fijó como capital definitiva de la República de Honduras a Tegucigalpa; se trató de reorganizar el país. En el departamento de Colón, la región selvática de la Mosquitia fué declarada territorio en reserva, siendo obligatorio por el Estado la obligación de construcción de vías de comunicación. Se establecieron - instituciones de crédito, al mismo tiempo que se traían capitales extranjeros. En Honduras, la "Rosario Mining Company" monopolizaba la extracción de oro y plata a partir de entonces, siendo ésta la primera inversión de capital extranjero. Se pusieron los - primeros cables telegráficos y el país ingresó en la unión postal universal.

Con relación a la unidad Centro-América, se intentó colaborar de un modo más serio siendo esta fórmula más eficaz y de más-garantía, para el desarrollo progresivo, advirtiendo al mismo - - tiempo, que para alcanzar la unión esta Constitución podía ser reformada o abolida por el Congreso.

La Constitución de 1880 se encuentra dividida en tres secciones. La parte primera, relativa a la declaración de principios, de rechos y garantías fundamentales: la segunda al gobierno en sus — tres poderes y la tercera a la organización municipal.

CONSTITUCION DE 1894

=====

La similitud y características de la Constitución de 1880 con la de 1894 es evidente. En ellas, se ofrecía una gran influencia, sobre todo de la Constitución Norte-Americana y Mexicana, por un lado, al admitirse la libertad de cultos en la de 1880 y continuaba en la de 1894 al establecer el jurado, para aquellas poblaciones donde hubiera jueces seccionales y departamentales, fórmula tomada del Derecho Anglosajón. En verdad, éste jurado no llegó a tener fuerza, debido a que nuestro sistema, impregnado hasta lo más hondo por el espíritu de la Constitución de Cádiz, y por el propio derecho patrio, es una institución extraña, que controla así misma la experiencia histórica, y no la cual no se pueden hacer trasplantes, sin encontrarse con que el pueblo, responda de acuerdo a su forma de ver y sentir.

Con respecto a la religión se prohíbe que se someta al estado civil de las personas a creencias religiosas determinadas, se prohí

be el establecimiento de asociaciones monásticas y vinculaciones a favor del establecimientos religiosos.

La Constitución emitida el 14 de octubre de 1894 por la Asamblea Nacional Constituyente entró en vigor el 1 de Enero de 1895, y derogó: la del 1º de noviembre de 1880; es el código fundamental de más larga duración de la República.

(8) Refiriéndose a ella el escritor Don Augusto C. Cuello, en la nota preliminar del Decreto constitucional de Honduras expresó:

"La Constitución de 1894 representa, evidentemente, la reforma de nuestro Derecho Constitucional en el sentido ideológico, en los principios orgánicos constitucionales del poder público, inviolabilidad de la vida humana, etc."

Dicha constitución en el artículo 162 estableció como leyes constitutivas la de Imprenta, la ley de estado de sitio, la ley de amparo y de Elecciones.

Conforme el artículo 163 la reforma de dicha Constitución so lo podía acordarse por derecho de votos de los representantes al

Congreso Nacional, sesión ordinaria, determinando el articulado, lo que neces-itaría reformarse; o si la ley reformadora había de ser absoluta el Congreso debía convocar una Asamblea Constituyente, debiéndose incluir el decreto de la convocatoria, que contendría la reforma presentada.

En ningún caso podía decretarse la reforma de los artículos constitucionales que prohíben la reelección de Presidente, o de lo que le sustituyera a efectos en su período, o en el siguiente:

El Presidente en este período es Don Policarpo Bonilla, que fué depuesto en 1891, Gracias al apoyo incondicional nicaraguense llegó al poder en 1894. Durante esta Constitución se considera a los demás Centro e hispano-Americanos los cuales pueden adquirir la nacionalidad hondureña como naturalizados; hay muchosexiliados de los países hermanos, entre ellos Estrada Palma, primer presidente de Cuba, que ocupó en Honduras la dirección de cauces y comunicaciones: el futuro Presidente del Ecuador Eloy Alfonso, etc.

Una de las peculiaridades de esta Constitución en diferencia

con las demás, es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son elegidos directamente por el pueblo, pudiendo incluso declarar inconstitucionalmente las leyes.

LA CONSTITUCION DE 1904

=====

La agitada vida política Centro-Americana durante todo el -
siglo XIX, a pesar de sus incongruencias, mantuvo muchos elemen-
tos en común. No cabe duda, que en Honduras, el espíritu de Valle,
Morazán y Cabañas dió su fruto. Lo malo de unos y otros partidos,
que se turnan en el poder, es que son guiados por intereses per-
sonales de una parte, y de otra porque en aquellos momentos de -
mayor gloria, han creído, que la madurez política se consigue de
un sólo golpe, lo que hace que los progresos obtenidos tengan -
después un gran retraso. En verdad, hay que partir de que sólo -
con un proceso lento, pero seguro, se puede verificar la unión,-
ya que llevados por ésta gran idea, no se toman en cuenta las -
fuerzas internas, locales y de otro tipo que dejaron la puerta -
abierta a intereses extraños al istmo, que, en alianza con las -
fuerzas más reaccionarias, mantienen el caos y la anarquía, para
de esta forma explotar mejor, sus intereses económicos. La barre-
ra que separa, a la vida rural y ciudadana por factores de tipo-

cultural, económico y social, y la buena fé de unos hizo que, en algunos instantes, se dejasen llevar a aventuras militares, y a la larga fueron los propios pueblos los que salieron perjudicados, fomentando de esta forma el odio e incompresión donde los lobos con piel de oveja, son los que sacan el mejor partido a tal estado de cosas.

La Constitución de 1904 es obra personal del General Bonilla. Supo sacar partido al estado de cosas que pasaron en el país en aquel momento histórico. La Constitución de 1906 es menos liberal que la de 1894. Los artículos relacionados con la reforma de la misma tienen menos amplitud, aunque en dicha Constitución de 1906, se establece la elección directa por el pueblo del Presidente de la República, la Asamblea Nacional Constituyente se reservó el derecho a elegir para el primer período constitucional al encabezado por el General Manuel Bonilla. Esta práctica ha sido perniciosa para los intereses del país y para la pureza de su régimen constitucional. El pueblo elige diputados para emitir una Constitución y no para organizar los poderes

constituidos, cuya estructura y funcionamiento debe determinar, ta
xativamente la Constitución.

El pacto de Amapala, fué un intento digno de los para reali-
zar la unión Centro-Americana y tiene una característica fundamen-
tal. La de que, por razones políticas imperantes en aquel momento
en el istmo, sólo acuden a dicha reunión los representantes de Hon-
duras, Nicaragua y El Salvador. Fruto de dicha conferencia es la-
creación de la "República Mayor de Centro-América" que adoptó Hon-
duras el 8 de septiembre de 1895, estableciéndose que la Constitu-
ción Federal estaba por encima de la Nacional. Al presenciarse el
general Regalado en el Salvador, puso fin a dicho intento de - -
unión.

El General Sierra sucede, como candidato oficial de su parti-
do, Policarpo Bonilla, que, a su vez impone a Juan Angel Arias.

Concurren a las elecciones Manuel Bonilla, Juan Angel Arias,
y el ex-presidente Soto no obtiene mayoría, pero sale victorioso
en el campo de batalla, obligando a exiliarse a Arias. Se encara-
después a Policarpo Bonilla que le había hecho una dura oposición.

Al negar el Congreso a aprobar el presupuesto, es disuelto. Al mismo tiempo convoca la Constituyente y es proclamado Presidente por sus partidarios, que aprobaron la nueva Constitución de 2 de septiembre de 1906. En dicha constituyente se decretaron leyes secundarias en armonía con ella, Ley de Amparo y Policía y los códigos Civil, Penal y de Procedimientos (9).

El artículo 26 dispone que la pena de muerte queda abolida en Honduras, y "mientras se estableciera el sistema penitenciario sólo podía aplicarse, en los casos que determine próximamente la ley, al parricida, al asesino, a los autores de delitos militares de carácter grave y a los piratas.

El poder legislativo se ejerce por el Congreso que se reúne cada dos años del 1 al 15 de enero sin necesidad de convocatoria.

Se caracteriza esta constitución en que no existe vicepresidente. En caso de impedimento temporal del Presidente, este depositaba el poder en el Consejo de secretarios de Estado, o en cualquiera de ellos a su elección. Si la falta era absoluta el Ejecutivo quedaba a cargo de los Secretarios de Estado, quie

nes, inmediatamente, convocaban a elecciones de presidente, las cuales deberían efectuarse un mes después de ocurrida la vacante.

LA CONSTITUCION DE 1924

Ernesto Renán cuando definió a la nación como plebiscito cons
tante y continuo de los ciudadanos todos los días no dió la clave
del problema integracionista. En relación con la coexistencia de -
los diferentes ordenamientos constitucionales de los pueblos que -
ejercieron y siguen ejerciendo su soberanía, estos coexisten en —
un ordenamiento superior, que, dado el ímpetu, el furor, el apasiou
namiento de aquellos momentos no tuvieron en cuenta los factores -
vitales que condujeron a la unión Centro-Americana, donde, al mis-
mo tiempo, detrás del ideal unionista, encontramos planteados con-
flictos de jurisdicciones, como en el caso de Honduras, Nicaragua y
Guatemala.

La crisis que venía padeciendo el país desde el siglo pasado,
continuó acusándose progresivamente, debido a los odios políticos,
que han causado los gobernantes de turno y a los conflictos inte-
riores entre ellos mismos, ya que ambos partidos poseen una verdau

dera fuerza armada gracias al apoyo exterior que tienen, lo que hace aún más grave la solución, por vía pacífica.

En 1921 se cumplen cien años de vida independiente, no tomándose en cuenta los problemas que, antaño, se plantearon continuamente por el camino de la improvisación, de fatídicas consecuencias, en nuestro panorama político. Debido a lo apasionado e intransigentes que se encuentran los mismos en los diferentes grupos, que el conflicto bélico ha hecho aún más viejos, para un entendimiento razonable, creen encontrar en el campo de batalla la solución justa, lo cual es aún peor.

La presencia de tropas extranjeras en el suelo patrio, hace que la reacción de los ánimos moderados se desborden, por lo cual, se declaró Presidente a Tovar, después que el ejército hondureño-nicaragüano, derribó a Manuel Bonilla en 1907. Se convocó el 26 de octubre de 1907 la Asamblea Nacional Constituyente que, el 8 de febrero de 1908 declaró en vigor la Constitución de 1894, que seguiría hasta 1924. (10)

Esto dió como resultado una ruptura del orden constitucional

por falta de declaratoria de elección de las autoridades supremas, hasta el año 1923 en que se realizan elecciones. No habiendo mayoría absoluta, necesaria para ocupar el solio presidencia, continuó la lucha sangrienta. En plena guerra civil, intervienen los Estados Unidos, por medio del enviado especial del presidente Coodige Sr. Sommer Weller, verificandose una conferencia a bordo del "Milwakee" en Amapala, donde se encontraba dicho crucero. Los representantes de ambos bandos en pugna, eligieron al general Torta, quien una de las primeras medidas que tomó fué convocar la Asamblea Nacional Constituyente siguiendo el modelo de 1894.

El peor camino para encontrar la unión es el de que no exista una base sólida y un mútuo respeto de la soberanía de los diversos estados, y ello fué una de las consecuencias de los pactos de -- -- unión de San José de Costa Rica del 19 de enero de 1921. Coincidiendo con los cien años de vida independiente, se proclama a Tegucigalpa, distrito federal de Centro-América. Reunida en dicha capital la Constituyente Federal, no están representadas ni Costa Rica, ni Nicaragua, por lo que no recibió el nuevo pacto de los dos tercios necesarios para su aprobación el traslado de la capital de Te

gucigalpa a Comoyagua. Esta Constitución es de vida efímera, del 9 de septiembre de 1921 al 6 de diciembre, en que se dió un golpe de Estado en Guatemala al presidente Herrera, lo que trajo — como consecuencia la separación de Guatemala. Ello no fué óbice para que no siguiera Honduras el ideal unionista, enturbiado después por conflictos posteriores que son los que han dado a nuestras fronteras el título de Malditas, ya que intereses egoístas fueron los que motivaron dichas disputas, que Honduras ha resuelto amparada siempre en la justicia y no en las armas, ya que la fuerza es el derecho de las bestias.

La Constitución de 1924 está inspirada en la Constitución — de 1844, teniendo algunas novedades en lo que se refiere a la — inviolabilidad del domicilio; queda establecida como pena máxima la de doce años de prisión y abolida la pena de muerte.

Recogió este texto los principios sociales expuestos en la Constitución Federal de 1921 y que corresponde al título XX sobre "Cooperación Social y Trabajo". Se pretende con ello "armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo", se establece

el Instituto de Reformas Sociales", se establece la jornada de --
ocho horas, la responsabilidad por accidentes de trabajo, por el --
patrono, se reglamenta el trabajo de los niños, de las mujeres y --
de las condiciones idóneas que deben reunir los lugares de traba--
jo,

Se garantizó el adecuado funcionamiento del Estado, por el --
principio recogido en nuestras tierras, que hizo suyo la Constitu--
ción de Cádiz de la división de poderes de Montesquieu, El poder --
legislativo en la Constitución de 1924 tiene extraordinaria impor--
tancia, ya que se establece una comisión permanente del Congreso--
que en lugar de éste, podía investigar y acusar al Presidente y Vi--
cepresidente de la República, preparar proyectos de ley, para la --
legislatura siguiente, recibir todas las acusaciones relativas a --
la violación del texto constitucional y convocar el Congreso en se--
siones extraordinarias cuando las circunstancias lo exigieran. El
Congreso podía exigir la renuncia de los ministros del gabinete por
un voto de censura. Al mismo tiempo, en lo que toca al poder judi--
cial, el Congreso nombra los magistrados de la Corte Suprema.

A falta de Presidente de la República, le sustituirá en el ejercicio del poder ejecutivo el Vicepresidente. En su defecto, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y, acaso de faltar éste, el Presidente del Congreso.

LA CONSTITUCION DE 1936

La Ciencia Política, se ha caracterizado en todo el mundo, durante la primera mitad del siglo XX, en que al ser comparada con la ciencia y la técnica, ésta se mueve muy despacio a paso de tortuga, mientras la técnica tiene un ritmo de vuelo igual al de las águilas. ¿Qué ha pasado en Honduras entonces? Ha surgido una nueva fuerza que es la acción, se caracteriza esta por que los militantes de los partidos han tenido en sus cuadros elementos militares de todos los grados. No obstante, los dos grandes partidos, son grupos organizados para la conquista del poder. Con la acción se plantea el problema de que ha de ser además un cuerpo técnico, de mayor cultura que el arma de Infantería, el que intervenga en términos colectivos, de mayor trascendencia social en la vida nacional, en un país donde abundan las montañas, las regiones selváticas, los malos caminos y son las alas de la aviación, las que llevan los víveres, la cultura, los hombres y las luces de la civilización, dando al traste con el aislamiento de las ciudades y como

arma, hace que se controle todo el territorio nacional de una forma eficaz. Para derrocar un gobierno se necesita que intervenga: una fuerza igual a ella, es decir, tiene que ser otro Estado y no puede hacerse sin ir contra las normas de la Organización de Estados Americanos, pues si un país invade a otro, se entiende que ha agredido a los demás miembros del sistema Interamericano, con lo cual se mantiene un "modus vivendi" con respecto al conflicto de soberanía en relación con los límites.

Después de la gran represión de los Estados Unidos, en el Caribe, aparecen, en casi todos los países, gobiernos fuertes que garantizan la tranquilidad que se mantiene por el desarrollo económico, que, paulatinamente, tiene la gran industria Norteamericana, y con ella sus intereses económicos. No es de extrañar que sea la fuerza aérea hondureña una de las primeras y mejor organizadas del Caribe, Al frente de ella se encuentra el mariscal y poeta Carlos Isagire, que desde las páginas del "Cronista" será uno de los más influyentes del partido nacional y de la reforma del texto constitucional.

Si se hace un análisis de la situación interna de Honduras,-

desde la independencia (1821) hasta 1832, se verá que son como -
cásis en el desierto los contados periodos de Paz. Es precisamente,
con el gobierno dirigido por el Dr. y general Tiburcio Carrias
Andino, cuando ésta se consolida. Hombre que ha militado en am-
bos partidos conoce la guerra y virtudes de su pueblo. Es quizás
el hombre más europeo de su época, ha ganado tres veces las elec-
ciones a la presidencia y las tres no se la entregaron. A partir
de 1932, se hizo los tres periodos lo cual fué criticado por la-
oposición y terminó con los pronunciamientos, que no dejaban en-
paz a la vida local.

En una economía que tiene el 89% de la población en el sec-
tor agrario, se tiene el pensamiento político tradicional, en el
cual han calado los partidos en lo más hondo de la vida ciudada-
na. Si a ello se agrega, que hay un 95% de analfabetismo, es im-
posible cambiar tal estado de cosas. Sólo el ser un millón de ha-
bitantes repartidos en una extensa geografía, hizo posible que -
se pudiera subsistir en aquel caos, debido a que el transporte -
era a lomo de mula, pudo resistir el país y a que, al guerra ci-
vil, tardó igual que los elementos que en ella tomaron parte en-

llegar a Occidente.

En el panorama del istmo Centro-Americano, surge como consecuencia, la oposición de gobiernos fuertes. La característica de estos, es que tendrán en su seno una gran tradición castrense, fruto de las luchas que se han ido dando en el país, bien por pronunciamientos, o bien por luchas externas frente a otros Estados. Este es el caso patrio. Por ello, éste tipo de gobierno al surgir - por igual en los diferentes Estados del istmo, hizo que se identificarán más estrechamente que entre los anteriores, al existir un entendimiento mútuo entre sus gobiernos.

El general Casias al hacerse cargo de la presidencia, lo primero que hizo fué reformar la Constitución, para acabar con el estado de caos reinante en los gobiernos interiores. A tal efecto, - el 9 de enero de 1936 el Congreso acordó convocar una constituyente para lo cual se designó un comité compuesto por los diputados. Plutarco Muñoz Pineda, Viente Cáceres y Salomón Paredes, tras cortas discusiones fue promulgado el 28 de marzo de 1936.

La característica de la Constitución de 1936 es que sigue la

Constitución de 1924 apartándose de ella en todo lo que tiende a hacer más eficaz el ejecutivo y en su marcado predominio del legislativo. No obstante, el período de los diputados se amplió a seis años.

El poder ejecutivo se refuerza aún más, ya que el Presidente puede suspender las garantías constitucionales, por un período de 60 días, al mismo tiempo que se amplía su período de mandato a — seis años. El poder ejecutivo residía en el Presidente de la Repú**u**blica a quien le sustituía el vicepresidente de los casos de au—sencia o incapacidad temporal o definitiva. (11)

Al poder judicial correspondía la elección de Presidente en el caso de que no tuviera mayoría absoluta y de que el Congreso — no seleccionase el vencedor en el plazo de veinte días.

Con relación a la unión Centro-Americana, después de los tro**u**piezos que ha tenido ~~ésta~~, se declare dentro de la Constitución de 1936, en el artículo 88: "Para los tratados que puedan celebrarse con once o más secciones de la Antigua República de Centro-Améri**u**ca, con el fin de volver a la unión se admite el ius sanguinis, — además del "ius soli".

Coincide el mandato del presidente Casias con la crisis mundial y al igual que los demás gobernantes del istmo hizo frente a ésta con autoridad. Por lo que refiere a la integración, se convive pero de una forma más realista y en verdadera colaboración efectiva entre los países hermanos del istmo.

Una de las características de los gobiernos fuertes, es que en la Constitución se encuentra claramente definida la división de poderes. Al mismo tiempo, se hace una enumeración amplia de una serie de garantías y derechos, dedicada a normalizar las relaciones entre el capital y el trabajo que existía en la Constitución de 1924, dedicándole ahora importancia al trabajo y a la familia. Se regula la protección del trabajo de las mujeres de los niños, e igualmente, se establecen la jornada de trabajo de ocho horas, la semana de seis días y la responsabilidad paternal por accidentes de trabajo y de derechos de los trabajadores, ley agraria, ley de estado de sitio, ley de imprenta, ley de elecciones, ley de amparo.

LA CONSTITUCION DE 1957

La Constitución de 1957 es proclamada por la segunda República. Su característica principal es que sigue muy de cerca, a la Constitución de 1924, aunque se aparte sustancialmente de aquella. No obstante, la época, los factores humanos que tienen parte en la esfera política son totalmente diferentes. Si bien se le da prioridad al poder legislativo, se debe, sencillamente, a que el partido liberal ha ganado las elecciones con mayoría absoluta, lo cual significa que no tiene una oposición fuerte en el Congreso. A la hora de repartir el poder, liberales y nacionalistas se parecen en que hacen el monopolio del poder sólo dentro de sus partidarios. En lo que al proceso político del país se refiere, la impericia y la improvisación, hace que los buenos propósitos, se vean pronto desbordados por los hechos lo cual lleva al Presidente, contando con sus parciales, a una concentración de poder superior al que había tenido hasta esa fecha cualquier dictador patrio.

Con respecto a la integración es, precisamente, con la Constitución de 1936 tan parca en artículos y declaraciones la que de una forma categorica el gobierno de D. Juan Manuel Salez da los - pasos en la O.D.E.C.A. (Organización de Estados Centro-Americanos) con miras a la integración económica de estos. En la Constitución de 1957 se considera a Honduras como una parte disgregada de Centro-América y se admite como fin la unión al mismo tiempo que se permite la creación de un partido que ayude a dicha unión, lo - - cual nos lleva al estado de la Constitución de 1924, donde el partido de turno en el poder, trata de aliarse en el istmo con otros, pero, para fines exclusivos suyos y no en beneficio del pueblo.- El resultado es que se canaliza el istmo de grupos de tendencias, identificadas con los dignatarios y se produce un roce dentro del istmo, lo cual va contra los intereses del pueblo que está por encima de estos grupos políticos de presión.

Se han establecido industrias que están repartidas en los — cinco Estados, precisamente para evitar los tropezones de antaño, cuando no había unos intereses fuertes que unieran a los pueblos, quedando a merced del partido de turno, que era quien dictaba la

pauta, sin tener en cuenta las necesidades de la Patria, sagradas y, por encima de todos los partidarios.

La Constitución de 1957 es la Constitución más extensa que ha tenido Honduras en toda su historia constitucional. Tiene 335 artículos, caracterizándose, en que no tiene como los demás una división de poderes, en legislativo, ejecutivo y judicial. Pero si una declaración, de tanto arraigo en el Derecho Constitucional hispanoamericano, como en el Derecho de insurrección popular, admitido en el art. 5, que establece:

"La alternatibilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La violación de esta norma da derecho a la insurrección popular".

La Constitución de 1957, contiene disposiciones obscuras e innecesarias, como los artículos 12 y 129. El artículo 16 es una definición sociológica de la nacionalidad, pero no es un precepto jurídico y la división de nacionalidad no es bipartita como lo declara el artículo 16, y en el 18 se agrega a los hondureños, por nacimiento, y por naturalización a los naturales, grupo al que pertenecen los Centro-Americanos.

Con respecto al poder legislativo la Constitución de 1957, permite a los diputados ejercer cargos públicos, cómo secretarios de Estado y empleos en el ejecutivo. Con respecto al Jefe de las Fuerzas Armadas, le nombra el Congrso igual que el Magistrado del Consejo Nacional de Elecciones Y Procurador General (12).

El Presidente de la República es el jefe del poder ejecutivo, siendo él, quién nombra a los ministros.

El poder judicial reside en la Corte Suprema de Justicia, compuesta por cinco Magistrados, elegidos por el Congreso Nacional, - El Presidente será su Magistrado, alternándose cada año en el orden de elección.

Regula ampliamente, las relaciones entre el capital y el trabajo, Código de trabajo, establece los principales derechos laborales, salario, jornada, mínima, vacaciones anuales, protección del trabajo de las mujeres y de los menores, prohibición de despido injustificado, los derechos de huelga y paro, se declaran protegidos los trabajadores a domicilio, domésticos e intelectuales y ley de seguridad social y usura.

LA CONSTITUCION DE 1965

El presidente Ramón Villeda Morales fué derribado, por un golpe militar en 1963. En 1965 fué elegido como presidente constitucional de Honduras, el General Oswaldo López Arellano, (que había ejercido el mando interinamente) para el periodo 1965-71). La Constitución que rige en la actualidad los destinos de la Patria entra en vigor el 3 de junio de 1965, culminando así un proceso iniciado en las Cortes de Cádiz al firmar la Constitución Española de 1812 el diputado intendente de Honduras, Don José - - Francisco Morazán.

En la vieja pugna existente entre los dos partidos tradicionales por el poder durante la vigencia de la Constitución de 1957, el partido liberal, poco a poco en un conato de pronunciamiento - logró sustituir la policía nacional por la guardia civil, formada por elementos de su partido, los cuales, una vez convocadas las elecciones, pretenden imponer el candidato oficial del partido - en el poder, pero no pudo sustituir al Ejército, debido a que es-

ta es un cuerpo apolítico, que se mantuvo al margen de todo conflicto. En virtud del estado de caos, fué derrocado el presidente Villedo, el mismo día de las elecciones presidenciales, ocupando la presidencia desde esa fecha el General Oswaldo López Arellano, dos años después del golpe de Estado, convoca elecciones y se proclama presidente constitucional en 1965.

La característica del nuevo texto constitucional, es que es presidencialista por excelencia, frente al de 1957 donde había un predominio de poder legislativo, habiendo algunas lagunas, en lo que se refiere a la marcada ingerencia del poder legislativo en atribuciones del poder ejecutivo. En la nueva Constitución es el Presidente el Jefe máximo de las Fuerzas Armadas.

La nueva Constitución, no obstante, sigue la línea Centro - Americanista, en el artículo 9.

"Honduras es un Estado disgregado de la República Federal de Centro-América; en consecuencia reconoce como necesidad primordial, volver a la unión con uno o más estados de la antigua Federación. A éste efecto queda facultado el poder legislativo, para

cualquier tratado que tienda a realizarle parcial o totalmente, - siempre que se proponga de manera justa y democrática".

La Constitución tiene, en total, 347 artículos en los cuales delimita la forma clara, las atribuciones de los tres poderes: eje cutivo, a cuyo frente esté el Presidente de la República; legisla- tivo con el Congreso Nacional, y judicial, con la Corte Suprema - de Justicia.

Dentro del espíritu del texto constitucional se encuentra - también un marcado carácter Centro-Américoano en el plano económi- co, declarando que, la integración en este aspecto, es una de las directrices de la Política Económica nacional, al mismo tiempo, - que, en el capítulo dedicado a ella sienta las bases para una co- laboración recíproca, entre los diferentes países del istmo.

En la Constitución se prohíbe la formación y funcionamiento de partidos políticos con vinculaciones internacionales. Se exclu- yen de dicha medida aquellas organizaciones que propugnen la unión Centro-Américaana.

Se reconoce el derecho de los naturales de las demás repúbli- cas Hispano-Américaanas a optar a la calidad de hondureños, siempre

que residan, más de un año, en el país y exista reciprocidad. Debe de tenerse en cuenta que un 10% de la población que reside en Honduras en la actualidad, es de El Salvador, estableciéndose para los trabajadores Hispanoamericanos, los mismos derechos de los trabajadores hondureños en las empresas, igual que el capital Centro-Americano, en ciertos sectores de la producción, no está sujeto a restricciones.

Otra de las características del texto constitucional, es — que contiene una larga y marcada señalización de los límites nacionales y la base jurídica de los mismos.

La Constitución de 1965 tiene gran similitud con la de 1957 en lo que se refiere a la familia. Respecto al trabajo y a la justicia social, pone especial interés en hacer efectivas dichos — principios, pero no por ello debe clasificarse como una Constitución socialista. Trata, en especial, de la fundición social, reconociendo la coexistencia armónica del capital y del trabajo en el seno del Estado, y con respecto a la propiedad reconoce el — fin social de ésta, haciendo alusiones a la reforma agraria, con expropiación y limitaciones de la propiedad. Hay que tener en —

cuenta que dada la época en que se ha promulgado con el estado - de cosas interno por la impericia del gobierno anterior, al querer aplicar y dejar de aplicar sus programas en el aspecto social y teniendo éste un fin exclusivamente demagógico, lo que se trata de hacer realidad con mayor fuerza con los postulados de justicia social. Desde el punto de vista externo, no solo la influencia de la llegada del castrismo en Cuba, por una parte, sino la alianza para el progreso por otra, ha hecho que en el seno del Mercado Común, llegara a tener Honduras las mejores y más completas prestaciones sociales de Centro-América.

Dado lo agitada que ha sido la vida política hondureña, ha ido tomando carta de naturaleza a través de las diferentes guerras civiles, cambios de gobierno y la institucionalización, una base sólida. De ello nos da ejemplo la Banca Hondureña, ya que es el único país hispanoamericano que desde 1.900 ha tenido la moneda estable. Por ello, en la Constitución se dió fuerza a las instituciones internas, para que puedan hacer frente al caldeado ambiente político patrio, a la fiscalización. En la Presidencia general de la República es nombrado su presidencia por el poder legislativo, lo mismo que en las instituciones autónomas, caracte-

rizando a la actual Constitución, la especial atención que dá a la vida departamental. La Constitución de Cádiz dió vida a los Ayuntamientos, y a la elección de autoridades locales. Dada la falta de vías de comunicación, la pequeñez de estos, departamentos es quizá la mejor fragua, donde se forman los buenos patriotas y donde tiene sus bases la vida cívica y democrática. Al contrario de la constitución anterior que los redujo, grandemente, al crear distritos dependientes del ejecutivo. También se ha creado el Banco Municipal, para que, en lo económico, proceda a hacer frente a lo débil, de su economía y sirva de orientación técnica, desde el punto de — vista económico para su progreso.

BIBLIOGRAFIA

- 1.- ROMULO DURON GAMERO: Bosquejo histórico de Honduras. Pág. 231 y sig. Editado por tipografía EL COMERCIO. San Pedro Sula, Honduras.
- 2.- TOMO 41, folio 40 al 106, ARCHIVO NACIONAL.
- 3.- PRESBITERIO ANTONIO R. VALLEJO: Compendio de Historia de Honduras. Pág. 320 sig. Tomo I, 2ª ed. Tipografía Nacional. Tegucigalpa D.C. 1925.
- 4.- SALVADOR MENDIETA: La Enfermedad de Centro-América, Barcelona, - vol. I. pág. 46.
- 5.- ROMULO E. DURON: "Gobernantes de Honduras". Revista de la Universidad Central (Nov. Dic. 1910) pág. 73.
- 6.- JOSE MARIA SANDOVAL: "Comentario a la Ley de Organización y atribución de los Tribunales"., pág. 15 y sig. Tipografía Nacional, - 1929. Tegucigalpa, Honduras.
- 7.- MARIÑAS OTERO: Las Constituciones de Honduras, pág. 17 y sig. Editado por Cultura Hispánica. Madrid, 1962.

- 8.- AUGUSTO C. COELLO: Digesto Constitucional de Honduras. 1824-1921. Pág. 140 y sig. Tipografía Nacional. Primera edición - 1923. Tegucigalpa. Honduras.
- 9.- ADOLFO ZUÑIGA: "Proyecto de Constitución". En Revista del Archivo y Biblioteca Nacional. Marzo 25 del 1909, pág. 183.
- 10.- RODOLFO BARON CASTRO: Unión y dispersión de Centro-América. Foro Hondureño, Oct. 31-1935.
- 11.- WILLIAMS S. STOCKES: Honduras en are study in Governement, pág. 98 y sig. Madison U.S.A. 1956.
- 12.- RAMON E. CRUZ. Derecho interno y Derecho internacional de Honduras. Historia Constitucional e Institucional de Honduras. Pág. 15 y sig. Tegucigalpa, 1964. Imprenta López.

CAPITULO VI

CONSTANTE HISTORICA DE LA IDEOLOGIA DE LA

INTEGRACION EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL-

HONDUREÑO.

La ideología y la realidad sociológica.
Elementos sociológicos y jurídicos.
La acción social y los gobernantes.
Las "Elitės" políticas y militares.

DESARROLLO

La constante histórica de la ideología de la integración ha --
permanecido latente en el Derecho Constitucional hondureño, siguien--
do con ello el espíritu de Valle y Morazán. Dada la realidad histó--
rica en que fueron promulgadas las respectivas constituciones, tie--
nen un énfasis sobre las ideas predominantes en aquel momento his--
tórico, aunque el espíritu que las anima, tiene un profundo senti--
do centro-americanista; lo cual no quiere decir en modo alguno que
se aparte del camino marcado por nuestros próceres. Cada país cen-

tro-americano le ha dado un matiz peculiar producto de su idiosincrasia, una aportación propia y una vivienda histórica, efecto del ejercicio de sus derechos de pueblo soberano.

A través de todo el ordenamiento constitucional, la corriente de ideas imperantes, han dejado sus huellas. Y no obstante la esencia misma del alma patria, se han conservado inalienables, a través de todos los movimientos históricos como acervo cultural y espiritual que rige una línea histórica. Son por esencia constituciones integracionistas que responden al testimonio que dejó Mecejón, para el pueblo Centro-Americano en su afán de unidad.

La dinámica de los acontecimientos políticos, es la que da carta de naturaleza a la idea, establece la solidez de las instituciones a lo largo del proceso histórico que rige la vida de los pueblos. El pueblo soberano, que, a lo largo del proceso histórico establece la constitución ideal, que rige sus destinos es el portavoz de las ideas de sus representantes que siguen el legado de nuestros próceres.

Cada pueblo tiene su propia idiosincrasia, la cual se encuentra reflejada en sus instituciones políticas, pero, en nuestro De-

recho Constitucional, al comparar su proceso histórico, hay unas características que le son propicias, las cuales son fiel reflejo de su geografía, raza, lengua, religión e ideas, imperantes, en cada uno de los momentos en que fueron promulgadas las respectivas Constituciones. Pero, sobre todo, las figuras de nuestros próceres se hacen más grandes, a través de la historia, ya que sus ideas son la pauta y la antorcha que siguen las generaciones posteriores, no sin que, por ello no aporten sus propios valores dando así mayor validez, forjando más profundas las bases que solamente dentro del marco de la legalidad constitucional, iluminan todo el ordenamiento jurídico patrio; y dando con ello numerosas experiencias, fruto del esfuerzo creador y de la realidad del día en que cada una de las Constituciones rigió los destinos de la Patria.

LA IDEOLOGIA Y LA REALIDAD SOCIOLOGICA

Las ideologías no constituyen nunca un sistema creador que -
hubiese podido nacer en el espíritu de sus autores fuera de cual-
quier condicionamiento y medio social y de la historia; siempre -
están, por el contrario, con relación con el lugar, la época, la-
estructura social, imperante en cada momento histórico. La base de
todo el proceso histórico del Derecho Constitucional hondureño, es
producto de la realidad social imperante, en los momentos en que-
las Constituciones fueron promulgadas, tipificando de esta forma
la idiosincrasia que caracteriza a nuestro pueblo. La ideología -
de la integración, sigue el camino glorioso que imprimieron nues-
tros próceres, siendo como una aportación, que trasladó al marco-
constitucional unos caracteres propios, que son la salvaguardia -
de los valores espirituales más nobles del alma de nuestro pueblo,
y a que son la expresión genuina y nítida de su forma de pensar y
sentir, y que hacen de nuestra historia, la expresión de las - -
ideas que fueron el alma de cada uno de los movimientos naciona-
les, los cuales respondieron a tono con la realidad política de -

cada momento histórico. Son, por tanto, un patrimonio que cada una de las generaciones pasadas ha ido aportando al Derecho Constitucional patrio.

El sabio José Cecilio del Valle, penetró en lo más profundo del pensamiento hispano. Conocía que España significa la unidad, y que - los cimientos de ésta unidad se encuentran en las costumbres, en la lengua, en la religión. Comprendía que, dado a que las leyes han - logrado un poder fuerte, se ha mantenido dicha unidad. Por si misma, por encima de todos los intereses personales y de grupo, sólo se podía conseguir ésta unidad cuando los pueblos exijan sus derechos, por lo cual en el momento histórico de la independencia, no se encuentran preparados aún (1).

Pero las bases que guían al pronunciamiento continental se encuentran reflejadas, en Centro-América, como unidad geopolítica. Y en Honduras, se ha seguido la corriente democrática. Ya en el pensamiento de Valle, en la correspondencia que mantiene con Benthán se refiere a ello, pero, de manera clara, quedó expresado en el "Amigo de la Patria" que se editó en Guatemala, en 1820. Estas ideas -

fueron recogidas por los diferentes textos constitucionales hasta nuestros días, en lo que se refiere a la forma de representación, a la propiedad y a los derechos inalienables de la persona humana. La vía integracionista dentro del Derecho Constitucional Hondureño, ha estado latente, dentro de nuestras Cartas Magnas, donde es fiel reflejo de la idiosincrasia patria, de la realidad social.

El sabio José Cecilio del Valle, penetró en lo más profundo - del pensamiento hispano. Conocía que España significa la unidad, y que los cimientos de ésta unidad se encuentran en las costumbres, - en la lengua, en la religión; comprendía que, dado a que las leyes han logrado un poder fuerte, se ha mantenido dicha unidad. Por sí misma, por encima de todos los intereses personales y de grupo sólo se podía conseguir ésta unidad cuando los pueblos exijan sus derechos, por lo cual en el momento histórico de la independencia, - no se encuentran preparados aún (1).

Pero las bases que guían al pensamiento continental se encuentran reflejadas en Centro-América, como unidad geopolítica. Y en Honduras, se ha seguido la corriente democrática. Ya en el pensamiento de Valle, en la correspondencia que mantiene con Benthan, -

se refiere a ello, pero, de manera clara, quedó expresado en el "Amigo de la Patria" que se editó en Guatemala en 1820. Estas ideas fueron recogidas por los diferentes textos constitucionales hasta nuestros días, en lo que se refiere a la forma de representación, a la propiedad y a los derechos inalienables en la persona humana. La vía integracionista dentro del Derecho Constitucional Hondureño, ha estado latente, dentro de nuestras Cartas Magnas, donde es fiel reflejo de la idiosincrasia patria, de la realidad social.

(2) Curvitch dice que la comunidad no es un grupo social, sino una ley estructural de la que pueden participar algunos grupos sociales, a los cuales clasifica con arreglo a una lista de criterios. Admitiendo que en el patrimonio común de todas las manifestaciones del lenguaje, tradición, costumbres, mitos, religión, filosofía y derecho, y aún en su seno se introducen determinadas diferencias naturales, propias de la persona humana, hasta llegar, a imponer una situación de dominio de unas sobre otras.

La base sobre la cual gira la ideología de Valle es el respeto al derecho que tienen los pueblos a darse al gobierno que con-

siderase más idóneo y, de esta forma, decidir sus propios destinos. La unidad de los pueblos, está en relación con el poder soberano, en el cual la comunidad es el nervio fundamental, siguiendo las ideas de Toennies (3), en el esquema de "Comunidad" o "Sociedad", en los cuales encontramos ideología al gobierno, al marco constitucional; en las relaciones entre los pueblos, ya que la constitución más perfecta es aquella que expresa los deseos de los pueblos, identificándose mutuamente las aspiraciones. La realidad sociológica y la ideología, no son más que el producto de la armonía en las ideas de -- nuestros próceres, por formar la patria grande, que es Centro-América. Pero, de acuerdo con la legalidad Constitucional es la armonía conforme con la norma de normas, fiel reflejo de la idiosincrasia, de unos pueblos soberanos, que, la misma dinámica de los acontecimientos políticos, ha hecho que maduren, para que, de esta forma, aporten una serie de experiencias a pueblos de nuestra estirpe, que, por ser mayores, no han participado de las peripecias de los países pequeños. Por este hecho, hay una participación más activa, por parte de los pueblos, que son los que, a través de la realidad actual cada día adquieren más conocimientos y se identifican en super-na-

cionalismo, sin renunciar a sus derechos. Aún más. Por esta vía se consolida su soberanía, dentro del mundo moderno, siendo la ideología delimitada por la propia realidad sociológica, ya que no se pueden admitir patronos políticos, diferentes como en otras épocas, - de la historia, sino aquellos moldes que son producto de la idiosincrasia de nuestros pueblos.

Cualquier experiencia política contraria a la vivencia histórica, sería un grave error sin considerar la realidad geopolítica, social, institucional de nuestros pueblos, porque automáticamente chocaría con la realidad social de los demás pueblos Centro-Americanos y, con ellos, con las corrientes continentales.

Nuestro derecho constitucional es un fiel reflejo de estas - corrientes, y de los obstáculos que tuvieron que superar en determinadas épocas históricas, para consolidar su soberanía, dado a - que no supieron valorar bien la realidad social. La evolución política de nuestra patria, está en que las genuinas ideologías de nuestros próceres han permanecido vigentes. Al mismo tiempo que están recogidas por el ordenamiento constitucional, son vivo ejemplo para las generaciones futuras, y de hermandad entre los pueblos.

ELEMENTOS SOCIOLOGICOS Y JURIDICOS

El ordenamiento constitucional de cada pueblo es un orden - vivo, que rige los destinos del mismo con plena identidad de cri terios, de acuerdo con una ideología a seguir, respondiendo a la realidad social, y tratando de ser la fiel exposición del modo - de sentir y pensar de cada pueblo. El legislador trata a la hora de establecer la norma, de que esta sea la fiel exposición de la comunidad, a la cual va encomendada.

Teniendo como fuente de inspiración, de acuerdo con los de- rechos inalienables de la persona humana, sobre todo la espera - de actuación de ese hombre dentro de la sociedad, la patria, y - la comunidad internacional; teniendo como factor determinante y divisorio la ideología que mueve a los grupos humanos, Malinosky, aporta la teoría cédular, al considerar que los grupos humanos, - son una imagen de la misión de la cédula en el cuerpo humano, és ta vez aplicado al cuerpo social (4).

En el caso hondureño se considera a Centro-América como un todo en un principio. Pero la Patria, desde su embrión a la vez -

ha ido tomando su propia forma peculiar, sin dejar por ello, en su esencia de tener una base común, unos orígenes comunes, determinados por la misma realidad geográfica. Ello tiene como consecuencia una convivencia estrecha entre los diferentes grupos humanos, de los países, de los países limítrofes, vinculándose cada vez más, dada la evolución de los medios de comunicación, de la economía, de mercado, de las corrientes de ideas y creencias, que hacen que, a su vez, esto repercuta en el Derecho Constitucional, al aportar fórmulas nuevas, que se diferencian radicalmente de las del siglo XIX, pero sin que por ello, dejen de tener los valores y la raigambre que insñiraron aquellas. Lo que sucede es que estas son formas de la realidad actual, que hacen a su vez que la dinámica política sea ahora diferente, por ser más ciudadana la vida actual, en vez de rural, como lo fué antes. Los valores de las ideas de la libertad, están ahora condicionados, cada vez más, por factores de intereses de todo tipo, para lo cual se tienen que tomar las medidas a tono con la sociedad, con las corrientes actuales.

Siendo la población un factor determinante, sobre las ventajas del sistema federativo, para encontrar la libertad política,-

y para evitar que se establezca la tiranía en una pequeña nación, para el celebre apologista de la Constitución norteamericana Alexis Toqueville, no desmentido aún hasta la fecha, las pequeñas naciones han sido en todo tiempo la causa de la libertad política y si luego pierden una libertad, es porque ella radica en la pequeñez - del pueblo, y no en el pueblo mismo. Todas las pasiones fatales a la república crecen con la extensión del territorio, en tanto que - las virtudes que le sirven de apoyo, no se acrecientan en la misma medida, lo que no impide a su autor admitir, como es indiscutible, que los Estados Unidos tienen sin embargo ventajas que le son pecu-liares y que son precisas reconocer.

Hubiera sido indispensable que los autores de la Constitución Federal Centro-Americana de 1824 hubieran tenido en sus manos toda una serie de datos que les permitiesen conocer con evidencia, cuales eran los sentimientos y las necesidades de cada una de las provincias. No bastó, como es natural que recurrieran a las enseñanzas de las Cortes de Cádiz, proclamadas en un momento histórico tan particular para la metrópoli española como era su propia guerra de Independencia. El Tampoco Texto Constifucional de los Estados Unidos tampoco debió ser transplantado a nuestras latitudes, si no, antes

de haberlo estudiado en forma detallada, como los mismos próceres confesaron que luego lo habían hecho. Pero, parcialmente, cuando ya era muy tarde para nosotros y cuando sus órdenes políticas corrían, el riesgo de no ser acatadas por las diversas provincias, como sucedió, efectivamente, con el fracasado intento de la Encomienda Legislativa que debía efectuarse en Centro-América en 1835.

Se ha repetido que la Constitución de los Estados Unidos se - parece a una bella creación de la industria humana, que colma de - gloria y bienes a los que la inventaron, pero permanece estéril en otras manos. Y en ese sentido, cita el caso de la República Mexicana, que, si bien trasplantó la letra de la Ley, no transplantó el espíritu que la significa. Bien pronto surgieron allí como en Centro-América, las competencias de soberanías, las cuales se inva- - dían cada día mutuamente, Las instituciones creadas en vez de coadyuvar en beneficio de la nación, se estorbaban sin cesar, entre - los engranajes de su noble gobierno, mirando así las naciones latinas de la anarquía al despotismo militar, y del despotismo militar a la anarquía. Esto debido a que se ha actuado sin antes contar con la realidad social, a espaldas de la idiosincrasia patria, sin

formar éstas adecuadamente.

Porque las instituciones son el genuino modo de sentir, de pensar de los pueblos a través de la historia, ya que la que dará carta de naturaleza y no los sentimientos personalistas de un grupo, o partido, que cuando surge sinceramente, trata de echar por la borda lo que no se puede anular, de aquellas, porque fué más constructivo. Hay que buscar la misma fuerza de normas jurídicas en la realidad social, que el pueblo no las sienta, porque son a su medida, porque han surgido de acuerdo con sus ideas y creencias en la realidad histórica. Por ello, en nuestro Derecho Constitucional, ha habido algunos logros, que la dinámica del tiempo consagrado, y es el camino a seguir, como norma de vida institucional interna y externa - por el ordenamiento constitucional patrio, siguiendo la idea durkeniana de que el derecho es una institución Horion. El derecho está ligado a todas las manifestaciones de la vida social, y por tanto no puede estar fuera de ésta (6).

LA ACCION SOCIAL Y LOS GOBERNANTES

La ideología de la integración, es en sus comienzos, cuando se encuentra plenamente identificada, con el pensamiento vivo de nuestros próceres. Sobre todo, porque dentro de la acción social realizan y están encaminadas de acuerdo con sus ideas. Valle comprendió que (7) al proclamarse la independencia el 15 de septiembre de 1821, debía de existir una fuerza superior para mantenerla unidad, ya que, dentro de cada provincia, reclamaron para si su autonomía. Lo que sucede es que, dada una serie de intereses de todo tipo, en primer lugar, surgieron rivalidades locales, las cuales condujeron a un anarquismo dado lo poco eficaz de la Federación para hacer efectiva la paz.

No obstante, el caso desesperado de Morazán, para producir la unidad por medio de las armas, es ya demasiado tarde, dada la propia dinámica de los acontecimientos políticos. De ello, ha quedado como reliquia histórica ante el altar de la Patria, el testamento de Morazán donde su ideología está plenamente identificada con la unión. No obstante, al ir tomando cuerpo, las bases de —

los mismos grupos por la misma situación política y social imperante, se ha considerado por un lado la razón de estado para imponer la ley y el orden. Una vez conseguido esto, se trata de mantener - las instituciones establecidas por dicho orden de cosas.

El proceso histórico no siempre ha sido el mismo en determinadas épocas. El poder ha estado identificado a una persona o grupo político, trascendiendo dichas ideas al sistema institucional. Paradójicamente se reflejan con singular analogía, en las otras instituciones del país vecino de la antigua federación, y, al igual, - que sucede en otros momentos, prevalece la idiosincrasia, tanto de los unos como de los otros. Se han ido perfilando a través de la - dinámica propia de los acontecimientos políticos, lo cual da el - sistema institucional una madurez, gracias a las ideas que permanecen inalterables. Los mismos pueblos, logran solidez a través de - las diferentes constituciones, para poder así estar al corriente - de la realidad histórica de cada momento. La introducción de los - medios modernos de transporte, que llevan consigo grandes núcleos de población de un país a otro; la radio, la televisión hacen que los pueblos se conozcan mejor, exigiendo a sus gobernantes, formu-

lando otros nuevos, los cuales a su vez ven la soberanía de su propio poder en peligro, por los "trust" o grupos de presión económica y de todo tipo, que actúan, incluso, desde dentro de sus propias fronteras. Sólo a través del sistema institucional, el pueblo va garantizados sus derechos, frente al estado mismo y los particulares.

Los vehículos que orientan la acción social, tienen que estar de acuerdo con la idiosincrasia de la Patria, en cada momento, así como los gobernantes, actúan de acuerdo a la realidad histórica,- El honor al destino común de los pueblos, a través de todo el sistema constitucional, se establece la pauta a seguir, en el camino integracionista. Se ha creído en determinados momentos, que con improvisar determinadas formas se conseguirá la unidad, cosa bastante difícil, ya que la experiencia ha demostrado que solo con la cooperación de los diferentes pueblos sobre una base sólida, y, poco a poco, se pueden conseguir resultados positivos.

Por ello, al analizar las diferentes constituciones hoddureñas, y en un afán integracionista a largo plazo, se han ido perfilando conceptos que son fondo de cada momento histórico, y a los-

que los diferentes cambios políticos y de instituciones no han hecho nada más que dar solidez histórica. En ella, no solo se asegura la soberanía, sino que es su mejor garantía dentro del mundo — moderno, existiendo a su vez una interrelación entre la acción social y los gobernants, porque actúan de acuerdo con la constitución dentro de dicho marco legítimo. La razón de estado aconseja que — debe mantenerse dicho orden por encima de los intereses personales de partido, o de grupo: que es el pueblo soberano el único que de cide a través de sus representantes, elegidos por voto directo y secreto, los cuales son la expresión de su sentir y los que, en — cada momento, rigen sus destinos. Por ello, las instituciones están en relación, en cada una de las etapas, del proceso histórico de que sirve cada pueblo, que al alcanzar nuevas metas, hace a su — vez, que las instituciones respondan en cabal medida, de acuerdo con sus necesidades. La acción social, va encaminada a conseguir — dentro del marco constitucional, de las disposiciones legales y ad ministrativas, la armonía para estas participaciones entre gobernantes y gobernados.

LAS "ELITES" POLITICAS Y MILITARES

En todas las diferentes constituciones hondureñas, distintos grupos humanos han dejado su huella, teniendo para la sociología de aquellos períodos históricos, como para la vida misma de la patria importancia trascendente.

Wifredo Pareto al referirse a las "Elités", dice que, aunque las verídicas son comunes a todas las sociedades y tiempos están desigualmente distinguidas entre los individuos y su frecuencia es relativa en todas las sociedades y épocas diferentes. Las "Elités" están formadas por individuos de alta capacidad en sus respectivos campos. Hay dos clases principales de "Elités": una "Elité" gobernante que comprende a los individuos que, directa o indirectamente, representan un papel importante en la manipulación del poder político; y una "Elité" no gobernante formada por hombres competentes que no ejercen el poder político, y que a su vez se dividen en dos tipos de hombres, a los que se les llama respectivamente: especulador y rentista. Cuando la "Elité" gobernante está dominada por especuladores, la sociedad está sometida

a cambios relativamente rápidos cuando predominan los rentistas, los cambios se producen lentamente. Existe una tendencia de los dos tipos a alternarse mutuamente en los puestos del poder político. Cuando una "Elité" de un tipo ha gobernado durante algún tiempo, en la clase gobernada se acumulan elementos superiores e, inversamente, en las clases gobernantes, se desarrollan elementos inferiores. En consecuencia, una "Elité" formada de especuladores, por ejemplo, comete errores que abren el camino al ascenso de los rentistas; pero después de haberse consolidado éstos en su puesto, también cometen errores y abren la puerta a los especuladores. Los "Elités" en el proceso histórico hondureño, han estado plenamente identificados, con los dos grandes partidos políticos: liberales y nacionalistas, los cuales a través de la historia presentan diferentes programas políticos y según la "Elité" dirigente y circunstancias históricas en que se encuentran, sea en la oposición o bien en el poder, pasando a su partido oficial, el monopolio político han traído consigo conflictos frecuentes, quedando ello reflejado en las diferentes constituciones, aunque sólo se produce, en la lucha por el poder político.

Nunca, analizando la gran cantidad de presidentes han durado estos su período completo, con rarísimas excepciones históricas;- un promedio de cuatro años por mandato presidencial. No obstante, más de uno o de otro grupo político, han aportado ideas integracionistas y dado carta de naturaleza, lo que, de por sí, la da una soberanía que cada temporal fortalece más con los ideales de Valle y Morazán. Si se mira todo este proceso de las "Elites" en un comentario, la historia de los que han ido sucediéndose unos tras otros, pasando el poder de manos de liberales a nacionalistas, teniendo en cada uno de los periodos históricos distintos métodos, ideologías fines, en la lucha por el poder político, se desprende que según sea el ideario así será su trascendencia, ya que, al degenerar éstas pasan a formar una oligarquía, y es cuando desaparece, por su propia inercia, del mapa político (8).

En las "Elités" entran todas las fuerzas vivas del país, con sus cuadros más idóneos. En las "Elités" intelectuales, la Universidad tiene un papel decisivo en la formación de los líderes, ya que, dado a que solo hay una, es la Universidad Central, todas las luces salen de ella, y es de dónde se nutren las diferentes -

partidos de la vida política del país, pero la verdadera importancia de uno y otros grupos se encuentra en el campo, ya que Honduras es un país esencialmente agrícola, habiendo grandes problemas porque el analfabetismo, es uno de los mayores males, para la participación del pueblo (9).

Las "Elités" políticas están en mútua relación con las "Elités" militares, Morazán es el máximo héroe militar, en el altar - de la patria. Aunque la Unión, no contó con los efectivos suficientes para llegar a hacerlo, sólo su sabiduría personal y su espíritu hicieron, ya demasiado tarde, lo imposible por conseguir la - unión de Centro-América. La grandeza de sus ideas es paralela con su obra.

Una vez que se dirigió la Federación, las Fuerzas Armadas, han sido las defensoras de la soberanía, a cada instante nutridas siempre en sus filas de elementos campesinos, quienes son los mejores soldados a la hora de la defensa de la Patria.

El elemento humano, es espolítico, pero en excepcionales - circunstancias, y dada la gravedad de la situación tienen que intervenir. Si contemplamos la geografía patria, con sus dos mares:

Pacífico y Atlántico, y en el mismo Centro de América, los acontecimientos continentales se reflejan de forma singular en los asuntos domésticos. Dada la geopolítica del país, un punto logístico - de primer orden, en épocas históricas, el ejército se dividió en - los dos cual hizo que dada la circunstancia económica reinante, ca da vez fuera más dramática la situación, ya que los mares al ser - marados por demagogos y dada la impreparación de éstos, producían, una situación anárquica, por lo que en cada departamento había gru pos de partidarios. Fue solo (10) hasta 1932 con el general Corias Andino, cuando las fuerzas armadas se modernizan, ya que la introducción de la aviación, hace que, desde entonces, no se produzcan más revueltas. Y en lo militar han de tener más preparación los - elementos dinámicos de la vida política, que, en un momento, han - de asumir, dejando el partido tradicional, que por falta de prestigio fué cediendo terreno con las corrientes actuales, aunque la dinámica de las "Elités" será la que las vivificará dentro del - marco integracionista. Estas crisis tienen lugar en un periodo geo nómico trascendente. Y es ahora, cuando se notan las bases para - la estructura económica Centro-americana, cuando los grandes "trust" económicos llegan a su cénit de poder dentro de los asuntos inter-

internos (11).

Para comprender la situación actual incluso dentro de la vida dinámica de las ciudades, no se puede formar una idea clara, sino a través de la vida departamental, desde los órganos mismos de la patria. Valle estimaba que no se (12) exigiera a los funcionarios competentes de la Suprema Corte de Justicia que poseyeran virtudes, de Justicia que poseyeran virtudes especiales en Jurisprudencia, por considerar que tanto era el poder emanado de la soberanía popular, que al elegir a un hombre lo hace a un tiempo magistrado y legislador, Alexis Tocqueville, el (13) máximo escudriñador de la Constitución del Norte, observar, en cambio, que los jueces federales no deben solamente ser buenos ciudadanos, - hombres instruidos y probos, cualidades necesarias en todos los hombres políticos, sino que, es preciso encontrar en ellos verdaderos hombres de estado, de acuerdo con el espíritu de su tiempo para que de esta forma puedan sortear los obstáculos que se encuentran en su camino, y se aparten de la corriente cuando el oleaje amenaza arrebatarse, junto con ellos, la soberanía de la Unión y la obediencia debida a las Leyes.

No nos engañemos los Centro-Americanos. El origen de todos - nuestros males, no sólo durante la vida de la federación, sino después de ella, estriba en la poca o nula influencia que en la vida nacional, han poseído nuestras Cortes Supremas de Justicia, y de- trás de ellas los ~~Tri~~bunales inferiores. Releamos una y mil veces nuestros textos de historia, y observaremos como el más simple comandante de armas departamental, o el más oscuro gobernador local, son citados por sus hechos, sus intenciones, o sus proezas, como - un estribillo, como si de ellas dependiesen tanto nuestros buenos- pasos, como nuestros tropiezos. No hace falta decir que el Caudillo máxino, hombre de espada o pluma, de bisturí o de teodolito en su profesión particular sobresale cien codos sobre los pobres magis- trados y jueces que corren sobre los pobres a la zaga, y que temen caer en desgraciade un día para otro, pues sabe que sus funciones yacen escritas en el agua o en un simple papel subsanable. Al - - primer arranque de ira por parte del jefe máximo, el Magister Dexit de la nación, el señor Presidente, inmortalizado por Miguel Angel Asturias, estos buenos funcionarios cesan en sus funciones. Por ello, sólo la dinámica misma de la realidad política, hace que las Elités sean cada vez mas puras y funcionen de acuerdo con la

idiosincrasia de la Patria.

La dinámica propia que lleva consigo la realidad política - ha demostrado a lo largo de nuestra historia constitucional, que ha sido el poder legislativo el que ha tenido la voz cantante. - Pero es quizás el ejemplo más elocuente, el proyecto de unión de 1850 por medio de un Congreso Centro-Americano. Aunque si bien - tenía una gran fuerza moral, gracias a la proyección de ver culminada la unidad política, esto no pudo ser realidad, debido a la división, existente dentro de las mismas naciones, de grupos políticos inconsciliables, y a que si quiso hacer, repetidamente, - sin tener en cuenta, los obstáculos que presentan los factores - internacionales determinantes por nuestra posición geográfica y - sus conexiones con los grupos nacionales. Para ello se deben tener unos intereses sólidos, que hagan que los diferentes pueblos se compenetren más aún, y sociales, que respalden con una adecuada circulación de las "Elités", de acuerdo a la dinámica política y social imperante en cada momento. No obstante, ha dejado - unas bases, que, al paso de las diferentes reformas, van quedando más arraigadas, en el ordenamiento constitucional hondureño y

es el pueblo soberano, el que marca la pauta por donde, se deben - guiar los pasos para la integración, claramente definida por nuestras cartas magnas. El largo camino ya recorrido es el fruto de experiencias que definen una realidad política, dinámica y que trata de responder a la exigencia de nuestro momento histórico.

Con frecuencia los corderos se comen a los rebaños, así ocurre dentro del "hinterland" hondureño, a los apóstoles que en un principio, se presentaron así al pueblo. Luego, se transforman porque, al llegar al poder no saben o actúan sin ninguna cortapisa, ya que como dice Mendieta: "La Presidencia al estilo centro-americano es una menocracia, omnisolvente y impotente, de manera que si el que lo ocupa es un estadista, puede realizar prodigios, pero si no es, anula a los hombres superiores que se le acerquen y en consecuencia, la cooperación de estos tienen que ser a medidas, desprovista de iniciativas y arrestos, sujeta al buen o mal humor del Presidente, o a sus deseos más caprichoso y a sus digestiones más o menos fáciles o laboriosas".

Esto se debe en gran parte a que en determinados periodos de la Historia, ha habido por parte del Presidente una tendencia a -

concentrar el Poder, que también se puede dar en beneficio propio. Hoy en día tienen que tener un apoyo internacional; dentro del — "interland" Centro Americano, o un medio de mejorar las vías de — comunicación de las masas. No sólo hay una dinámica en las "Eli— tes" sino que el poder fuerte u omnipotente se hace más llevadero debido a que la vida cada vez resulta más ciudadana y se hacen — más efectivos los frutos de la democracia por la vía de la integra— ción, además de conseguir colectivamente mejores logros en todos — los campos de la actividad humana.

BIBLIOGRAFIA

=====

- 1 - JOSE CECILIO DEL VALLE: "El Amigo de la Patria". 6 de oct.1820
a 30 de abril de 1821. Guatemala.Editado por Manuel Arévalo en
1930.
- 2 - GUR-VICH: "le vocation actuelle de la sociologie". pág. 288 y
sig.
- 3 - TOENNIES: "Comunidad y sociedad". Buenos Aires, Avellaneda y An
segline 1947.
- 4 - MALINOWSKY B. "A scientific Theory of Culture". pág. 39 y 40.
- 5 - ALEXIS TOCQUEVILLE: "La democracia en América" pág. 148 y 153
editado por el Fondo de Cultura Económica en 1957.
- 6 - MAURICE HORIAU: "Derecho constitucional".
- 7 - "Acta de independencia de centro-américa". Guatemala, 1821.
- 8 - MOSK: "Pathology of Democracy in latin American". Loc. Cit. pág.
124.
- 9 - KARL MENHIEIN : "Libertad y planificación". pág. 45 y sig. Edi-
tado por el Fondo de Cultura Económica. México.

- 10 - EDWIN LUWIN: "Arms and politics in Latin American". Nueva York
1960. pág. 59 y sig.
- 11 - K.H. SILVER: "Nationalism in Latin American". pág. 9 y sig.
(Latin American nationalistic revolutions. "The Annals". Cit.
Vol. 234 marzo 1961.
- 12 - JOSE CECILIO DEL VALLE: "Obras completas", por Jorge del Valle
Matheu. Tomo I. pág. 257 y sig.
- 13 - ALEXIS TOCQUEVILLE: "La Democracia en América", pág. 139 y 141.
Fondo de Cultura Económica. México D.F. 1957.

CAPITULO VII

LA SOBERANIA NACIONAL Y LA INTEGRACION

Formación de la conciencia nacional
y el Centro-Americanismo a través -
de la Constitución.

Los problemas fronterizos.

La orientación de los diferentes -
grupos políticos y la Unión.

La legalidad constitucional como me-
dio de coexistencia entre pueblos -
soberanos.

DESARROLLO

La soberanía nacional es la base esencial, sobre la que se de-
be cimentar la integración, ya que la idiosincrasia de nuestro pue-
blo se encuentra retratada en ella. El ordenamiento constitucional
históricamente considerado, la guardó en su seno. Es el pueblo mis-
mo, pero el ordenamiento constitucional patrio tiene identidad de-
criterios en relación con los demás ordenamientos constitucionales

Centro-Americanos. Dada nuestra realidad geográfica, política, so
cial, todas las constituciones hondureñas lo recogen y perfilan-
con miras a la integración y partiendo del respeto a la soberanía,
como camino seguro, para armonizar las diferentes constituciones.

Es sólo dentro del marco constitucional, donde se encuentra-
la más sólida garantía para su defensa, y es la soberanía nacional
el patrimonio común que todos los ciudadanos defienden, ya que es
la nación misma, y por eso, ella reside en el pueblo y sólo así -
los pueblos soberanos de la misma estirpe pueden tratar de encon-
trar una vía, que, de acuerdo, a la realidad actual, responda a -
la exigencia de nuestro momento histórico, y para que de una for-
ma realista se pueda defender mejor, la soberanía, frente a los -
intereses internos y externos de todo tipo, ya que, a medida que -
crece la población, dado que la posición geográfica, cultural, so
cial, económica y política se encuentra condicionada por la misma
realidad geográfica e histórica, casi todas las constituciones —
Centro-Americanas, reflejan su carencia de una nacionalidad parti-
cular, cuando constantemente se refieren a considerar como una —
"parte disgregada de las repúblicas de Centro-américa", o se pro-

ponen organizar un "gobierno nacional cuando las circunstancias lo permitan"; cuando "reconocen como una necesidad primordial salvar la unión con las demás naciones de la república disuelta", o de —
claran que su "principal deber y su más urgente necesidad es salvar a la unión con las demás secciones de la república disuelta"; o —
cuando, ellas mismas admiten que la "reconstrucción nacional de —
Centro-América es el capital objeto", que se propone alcanzar mediante
te sus respectivas constituciones. Aunque Centro-América posee una
unidad geográfica, no tiene una unidad política, puesto que su te-
rritorio está dividido en cinco repúblicas. Dichas soberanías han-
adquirido no sólo la madurez necesaria, sino que tratan de aportar
nuevas ideas, que con sus experiencias, o historia, pueden encon-
trar el camino de la integración.

(2) La soberanía nacional se encuentra regulada para mayor gara
rantía, dentro del marco constitucional, en el espíritu mismo de —
la patria, como aportación histórica, de las diferentes generacio-
nes de nuestros mayores, y de las vicisitudes en que cada una de —
las constituciones rigieron la vida del país y han dejado las ca-
racterísticas propias, fruto del sistema e ideas imperantes, en el

período en que fueron redactadas. Teniendo como meta la protección de la soberanía nacional, no por ello se ha postrado nuestro ordenamiento constitucional con las ideas de Valle y Morazán y Cabañas. Parece que se proyectan, no solo como padres de la Patria, sino - precursores de la Patria Grande, en Centro-América. Solo sobre - el respeto a la soberanía nacional se puede conseguir la integración. Desde el mismo nacionalismo se consigue el supranacionalismo, en la defensa de nuestro suelo, pueblo e instituciones, y no a través de una serie de desaciertos, de anarquismo y demagogia, - como males de un período anterior a nuestra patria. Se comprende - que ello dé mayor fuerza a los principios constitucionales que la denominación historicista han dado ya carta de naturaleza y los - cuales con la mayor garantía para dentro del marco de la legalidad, hacer realidad las ideas de nuestros próceres.

FORMACION DE LA CONCIENCIA NACIONAL Y EL CENTRO AMERICANISMO A TRAVES DE LA CONSTITUCION.

El origen de nuestro ordenamiento constitucional, solo se puede comprender atendiendo al proceso histórico, que es el que dará al mismo tiempo personalidad propia, identificándola, a cada instante, con la idiosincrasia de nuestro pueblo. Las raíces mismas - de esta ordenamiento se remontan, a la declaración de Derechos del Hombre, proclamada por la Revolución Francesa. Estas, a su vez, son recogidas en su espíritu, por la Constitución de Cádiz de 1812, que es la que dará, una verdadera Constitución, aunque a su llegada a Centro-América, se planteará el problema de su aplicación, dado - que tiene no pocos enemigos por parte del mismo Estado.

Será en el acto de Independencia donde el mismo pueblo dé - - cuenta, sin violencias de ningún tipo, de la validez de los principios vigentes en toda América Central, de la Constitución de Cádiz. Y también dará una forma propia al sistema institucional posterior hasta nuestros días, ya que en él se encuentran contenidos los - principios y formas políticas, que dieron vida a aquella, como es

el sistema de partidos, voto, división de poderes, propiedad, religión, etc. recogidos por el ordenamiento constitucional patrio, por la realidad política, y que la dinámica propia de ésta, ha ido adoptando al acontecer de cada día, hasta hoy.

(3) El proceso constitucional, visto a través de la Historia está determinado por la realidad política misma, a la cual se va a regir sin destinos, ya que es ahí mismo donde se identifica la - constituci'on con la conciencia nacional de cada pueblo. Así en - Inglaterra, el proceso histórico está plenamente identificado. Tie - ne que ser un dato histórico concreto y, a su vez, un sentido diná - mico, de continuidad y transformación, si lo puede lograr a partir de un análisis histórico. En este se incluye el estudio de las -- grandes transformaciones sociales como base para la política el - enraizamiento de sus formas en la manera de ver del pueblo, y, en fin, lo que todos los grandes monstruos de la ciencia política: - Aristóteles, Maquiavelo, Montesquieu, Tocqueville, Hegel, Valle, Mozarán, Cabañas, han practicado en una u otra forma.

El problema político es un problema de "fuerzas políticas" y éstas aparecen y toman fuerza, históricamente en el marco de una -

sociedad que, como la hondureña se ha visto en su propia área geográfica, una serie de vicisitudes, que, al mismo tiempo, han definido la personalidad de nuestro pueblo en cada instante.

Dice Nieztsche que las grandes ideas hacen tanto daño como - las malas, porque sirven de antifaz a las peores causas. En Honduras, la aplicación de esta verdad ha sido un hecho histórico, y lo mismo en América Central, pues son incontables los sucesos históricos, en tal sentido y, desgraciadamente, los daños que ha provocado en más variados aspectos de nuestra vida republicana. Todavía nos comportamos con la esperanza de que algún día desaparezcan con la experiencia y la cultura progresiva de los moros, que comienzan a descubrir los errores y a dar la espalda a esos apóstoles del engaño, que nos predicán la unión en sus discursos y — practican el odio separatista en sus acciones. Por ello, se debe — formar la conciencia de los moros, y de ser dentro del marco del ordenamiento constitucional, siguiendo las directrices de este, y no solamente se protege la soberanía de la Patria, sino que, también, se fomenta, el auténtico centro-americanismo de nuestros próceres. El camino es más largo, pero seguro, ya que uno de los ma-

yores errores ha sido creer que de un solo golpe se puede conseguir lo que otras generaciones no han podido. Es un tremendo error sí, no solo por encontrarnos fuera de la realidad, sino porque se entorpece el desarrollo que la dinámica inicial lleva dentro de sí, y que ella misma le impone, pero sin claudicar, en ninguno de los derechos eternos e inalienables de nuestra patria, sino dentro de un espíritu auténticamente nacionalista, pero de acuerdo con las ideas de nuestro siglo XX.

Se pensó en el siglo XIX que la Constitución debía de llenar una serie de características, para que pudiera ser mejor conocida por todos: desde tener un determinado tamaño, que pudiera llevarse consigo en el bolsillo, así como una determinada cantidad de línea de exposición. De ello nos dá cuenta nuestro derecho Constitucional Hondureño, pero lo que es más, dada la influencia, contraria a nuestra idiosincrasia, esta reforma que a decir verdad ha sido parcial, no ha tenido repercusión histórica. Pero sí han permanecido principios que la han confirmado. Esto nos demuestra que el auténtico centro-americanismo debe de partir de una gran solvencia moral y que este principio esté lleno de ética, de ciu-

dadania y de patriotismo. Sólo dentro del mismo respeto de los - principios, contenidos en nuestra Carta Magna, se pueden poner las fases de la integración, respondiendo así al ideal de nuestros próceres, sin regir rectorismos e intereses personalistas o de grupo, ya que ello solo entorpece el normal curso de los hechos. En determinadas épocas históricas, se ha apreciado una gran dinamicidad en este sentido, para dar lugar después a periodos de marcha para - - atras. Y ello se debe a que no se ha sabido marchar, de acuerdo a la realidad, por actuar desvinculadas de la realidad social, que es la que dicta la pauta a seguir. El auténtico legislador debe sentir el pulso de los acontecimientos y saberles dar vuelo al compás de los tiempos (4).

El espíritu de las diferentes constituciones ha sido en mayor o menor medida el fiel reflejo de las ideas imperantes en cada momento histórico. Y sólo por medio del hilo de oro que es el ordenamiento constitucional, se mantiene la armonía entre los diferentes grupos políticos en la asamblea nacional constituyente que le dió vida, y es por el camino de la legalidad constitucional, por el que todos, armónicamente unidos, laboran por el bien de la Patria. Con

ello no solo se garantiza el normal desarrollo de la vida cívica y ciudadana de cada pueblo, sino que, al mismo tiempo, la tarea encomendada, debe ser la imagen real, de las aspiraciones y creencias de nuestro pueblo. Y la mejor defensa se encuentra en el camino recto y luminoso de la legalidad constitucional, no sólo la garantía de esta soberanía, sino en el camino para hacerla efectiva a través de la norma positiva que nos dicta la Carta Magna y que todas las demás leyes se encargan de regular en la forma que se estime más idónea; en el camino a seguir con paso firme y seguro para la integración.

Sólo en el respeto a las instituciones, que garantizan a la persona, está el normal desarrollo de la vida pública y privada.- Es también para las naciones soberanas, el cumplimiento adecuado a sus respectivas constituciones a medio y a largo plazo, para poder confirmar la dinámica de su propia idiosincrasia; ir remendando su traje, constitucional, de acuerdo a las existencias sociales de cada momento histórico, en el plano interno, ya que son los propios pueblos, los que rigen su destino histórico. La Constitución es la que da validez, carta de naturaleza, legalidad a todo-

el ordenamiento jurídico, ya que regula la actividad de los diferentes poderes. Viendo la expresión de nuestra soberanía que sólo partiendo de ella, se puede llegar a un auténtico espíritu de integración, siguieron más lento, menos demagógico, pero más seguro y firme, debido a nuestros tropiezos de ciento cincuenta años de vida independiente.

Se ha creído que era la mejor medicina para nuestra enfermedad transportar ideas diferentes a nuestro solar patrio, la cual es, no sólo una negación a nuestra historia, sino que, al no responder a nuestra idiosincrasia caen por su propio peso; es por lo que el Centro-Americanismo, que sólo es una realidad geopolítica, sino también económica y social, respondiendo al pensamiento de nuestros próceres, ha permanecido a través de las diferentes creencias constitucionales inalterables, pero sobre todo, acrecentando aquellos principios que son la imagen y semejanza de nuestro pasado histórico y que laten en la conciencia de cada ciudadano hondureño, como mejor respaldo de nuestra soberanía, como catecismo político, que recoge las diferentes tendencias políticas imperantes, pero que hace efectivos sus programas políticos sin ingerencia extranjera

ra que lesione nuestra soberanía y viole nuestra Constitución. La integración es el camino más seguro para navegar por una auténtica democracia, siguiendo, así, las ideas que han madurado dentro del istmo, y por las cuales luchó Valle y también Morazán.

En la vida ciudadana el papel que cumple la constitución es vital, ya que de ella misma no solo depende el estado de derecho, sino la garantía de los derechos más sagrados de la persona humana. No solo se está haciendo política sino que se pretende, también formar a las generaciones para la vida democrática. El tener conciencia de ello, no sólo da una mayor humanidad y justicia, en el cumplimiento de los derechos y deberes, que de la constitución emanan, sino también se toma conciencia de la Patria, como realidad histórica. En Centro-América, esto debe ser una realidad en todos los sectores sociales, ya que sólo en la política de pueblo a pueblo, y no de personas aisladas, Sólo por éste entendimiento entre pueblos humanos no pueden hacer realidad las ideas integracionistas. Escasas, ya que en vez de avanzar se retrocede puesto que los logros alcanzados no estarían respaldados por la realidad.

LOS PROBLEMAS FRONTERIZOS

Al instaurarse la independencia de Centro-América el 15 de septiembre de 1821, el territorio del Estado de Honduras, comprendía el que correspondía a la gobernación de Comayagua, y la diócesis de Honduras. La primera Constitución de Honduras, del 11 de diciembre de 1825, dispuso:

Cap. I, del Estado. Art. 4. "Su territorio comprende todo lo que corresponde y ha correspondido siempre al obispado de Honduras; una ley demarcará sus fronteras, sus límites y arreglará sus departamentos" (5).

La primera Constitución Política de Honduras como estado independiente del 11 de enero de 1834, en su sección II art. 4 declara: "El Estado de Honduras comprende todo el territorio que en — tiempo del gobierno español, se ha conocido con el nombre de provincia, circunscrita por los límites siguientes: Por el Oeste con el estado de Guatemala, por el Sur, Sudoeste y Oeste con el Salvador, por el Sur con la ensenada de Conchagua, en el mar Pacifico,

por el Este y Sudeste, y Sur con el estado de Nicaragua. Por el -
Este, Noroeste y con el océano Atlántico y las islas adyacentes -
de sus costas, de ambos mares. Cuando cómodamente se pueda, se de
marcarán de un modo preciso los límites que la separan de los de-
más Estados" (6).

La declaración anterior se encuentra repetidamente en la - -
Constitución de 1848, 1865 y 1873.

No se volvió a delimitación del territorio en la Constitu- -
ción hasta en la Carta de 1957 y 1963, señalando el límite con Ni
caragua por "Comisión mixta de 1900 y 1901 y por el feudo del rey
de España de 1906 y con Guatemala por el feudo de Washington de-
enero de 1933.

En relación con los límites pendientes con El Salvador, la-
Constitución de 1957, dispuso que se fijaran con arreglo directo-
con el país vecino o por medio de arbitraje.

(7) La Constitución vigente en su art. 5 en uno de sus párra-
fos dice: "Con la República de El Salvador de la línea fronteri-
za se determinará por arreglos de las partes o cualquiera de los-

procedimientos establecidos en el tratado americano de soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá y en el Derecho Internacional que será más apreciado a la solución definitiva del problema limítrofe, sirviendo de base la documentación colonial existente hasta el 15 de septiembre de 1821, y la posterior, relacionada con la revolución de los terrenos fronterizos que aclara los linderos de los terrenos a que se refieren los titulares coloniales.

En relación con el territorio nacional, el referido Art. 5 - de la Constitución vigente preceptúa: "Pertenece a Honduras:

1º) Los territorios situados en tierra firme de los límites territoriales y los islotes y cayos en el Golfo de Fonseca, cuya posesión está respaldada con títulos expedidos durante el régimen colonial español.

2º) Las islas de la Bahía, las islas del Cisne (Swen Island) llamadas también Santanilla o Santillana, Viciosas, Misteriosas y la Cayo Gorda, Bivillo, Cajones, Becerra, Cocorrocuma, Caratasca, Falso, Gracias a Dios, la Cayos Pichones, Palo de Campeche, - y los demás situados en el Atlántico, que históricamente lo corresponden".

Un inciso agregado al número dos del mencionado art. 5 establece:

"En los casos que se refieren los tres párrafos anteriores, el denominado de la nación es inalienable e imprescindible".

La defensa del territorio nacional ha sido preocupación constante de la estadística de Honduras desde el siglo pasado. Durante la administración del General José María Medina y en vista del expediente de medida del terreno de "Punta Sol", cerrado a solicitud del general don Castro Almodo, el ejecutivo con fecha 17 de enero de 1867, dictó el acuerdo que prohíbe la denuncia y venta de las islas que tienen situación en el litoral de ambos mares.

El acuerdo en su número 1º declara nulo y sin efecto la medida practicada por el intendente de Yoro, la solicitud del general Almodo y en su Art. 2º preceptúa: "Se prohíbe la demarcación de nuestras islas y del litoral de ambos mares dentro de una legua y sólo se podrá dar cuando el gobierno lo considera útil y conveniente2.

Este acuerdo que prohíbe la demarcación y venta de Coyos e islas y de terreno en el litoral de ambos mares, se declara vigen

te en el decreto nº 28 remitido por el Congreso Nacional.

El art. 31 de la ley Constitutiva agraria de 1924 disponía:

"Se prohíbe la enajenación del dominio pleno, excepto por lotes de familia de los terrenos del estado que a continuación se —
examinan:

1º) Los de las zonas límites a Estados vecinos situados en —
el litoral de ambos mares, a una extensión de 40 kilómetros hacia
el interior del país.

2º) Los de ejidor, pueblos y aldeas.

3º) Las de Cuyos, arrecifes, islas, Maderas, escollos, ban—
cos de arena e islas y los lugares donde haya vecinos de antiguas
poblaciones".

Este artículo fué reproducido íntegro y pasa a ser el 155 de
la Constitución de Honduras de 1956.

La comisión de estudios territoriales de Honduras, en sesión
celebrada el 6 de junio de 1955, resolvió solicitar a la Secretaria de Relaciones Exteriores, la unión de un decreto ley en consejo
de Ministros prohibiendo la enajenación a extranjeros del domini

nio pleno y útil en los terrenos situados a 40 kilómetros hacia el interior del país, de nuestras fronteras, y en el litoral de ambos mares y la de las islas, coyos, arrecifes, escollos, etc., en el cual se prohíbe la enajenación por cualquier título de terrenos ejidados o de propiedad particular. Y su dominio pleno o útil, a los situados en una faja de 40 kilómetros de ancho, excepto a hondureños de nacimiento.

El artículo 3º encierra la nulidad de enajenaciones de tales terrenos.

La Constitución vigente es el cap. VI que versa sobre la - propiedad, en el art. 101 dispone:

"Los terrenos del Estado, Ejidos, comunidad o de propiedad-privada, situados en las zonas limítrofes a los citados vecinos, los situados en el litoral de ambos mares, en una extensión de - 10 kilómetros, hacia el interior del país y las islas Cayos, arrecifes, escolladeros, peñones, islotes, bancos de arena, solo podrán ser adquiridos por sociedades integradas en su totalidad — por hondureños y por Bancos de Estado, bajo pena de nulidad.

Se prohíbe a los registradores de la propiedad la inscripción de documentos que contengan esta disposición".

Se exceptúan los bienes en favor".

Hemos hecho un somero estudio de nuestra integración territorial, y de los problemas fronterizos que ello ha planteado dentro de nuestro ordenamiento constitucional, en la actualidad, las fronteras con Nicaragua y Guatemala, han sido definidas (8).

Queda el problema de los límites con El Salvador.

Como buen hondureño y Centro-Americano, creo que este problema debe ser resuelto por medio de un arreglo directo de las partes, que deben someter al procedimiento judicial sobre una base de estricto derecho.

La legitimidad de Honduras está garantizada por títulos coloniales, hasta la fecha de la proclamación de la independencia. Los títulos existentes con posterioridad a dicha fecha, serán admitidos si son aclaratorios, en los terrenos colindantes de uno y otro país. Deben servir de fundamento, a una solución de estricto derecho, que ambas partes deben acatar un error en la ar-

monía, la justicia y sobre todo la confraternidad Centro-Americana.

El papel que han desempeñado los problemas fronterizos ha sido la piedra en la cual, han tropezado una y otra vez los estados del itmo, que por ser pequeño deben a su vez servir de ejemplo - para los demás países hermanos, ya que por su pequeñez los problemas no han sido mayores, pero si lo suficientemente para despertar la desunión, mal entendimiento y desconfianza entre los pueblos,- que en última instancia son los que pagan las mayores consecuencias. De aquí que en Centro-América se lo llama "Frontera Maldita" En verdad se han prestado (9) en el pasado al juego maquiavélico de los propios gobernantes, que acuden a originar problemas externos cuando no son capaces de solucionar los problemas internos, ya que desde un principio se ha previsto la solución pacífica de los problemas internacionales, siguiendo el pensamiento de Vitoria, Suárez, Vázquez de Menchaca, Soto y Molina, que tanto testimoniaron en el pensamiento de Valle, padre del panamericanismo. En nuestro ordenamiento constitucional, se ha seguido firme en la idea de la integración, sin ninguna pretensión territorial, sino en honor de un auténtico espíritu cívico, por los ideales de una patria grande, de acuerdo con el destino común, que queramos o no, tienen -

que cumplir unidos los pueblos centro-americanos, que por ser -
pequeños han pasado una odisea, que deben tener en cuenta para -
evitar tropiezos; son los propios pueblos los que deben conocer-
mejor su historia para evitar que se repitan los mismos lamenta-
bles errores.

Ya en el siglo XVII se plantean problemas fronterizos aun-
que en aquel entonces Centro-América estaba encuadrada dentro de
la Capitanía General de Guatemala; en verdad, no son conflictos-
fronterizos en el sentido literal de palabra. Son problemas de -
competencia entre las diferentes diócesis. Aunque entonces no --
llegó la gota de agua a rebasar el vaso, si se planteó el proble-
ma de jurisdicción, que gracias al espíritu jerárquico de la Igles
ia Católica, no tuvo mayor trascendencia. El problema en sí, a
lo largo de los cientos cincuenta años de vida independiente, es
de los intereses de grupo, razón de estado, razón histórica, y -
dada la dinámica de nuestra vida política, se transformaron en -
algunos periodos históricos los estados de Centro-América en --
unos Balcanes. Y solo hasta la época bien reciente no se han da-
do cuenta que para llegar a una unión es necesario preparar el -

camino adecuadamente, para lo cual se necesita integrar el sistema político, económico, cultural, etc. y formar ante los demás estados una entidad soberana con igualdad de derechos para cada individuo y comunidad. Pero no opinamos que la confusión de dere- -chos y la supresión de límites, jurisdiccionales con un medio adecuado para integrarnos en una sola república Centro-Américana.

LA ORIENTACION DE LOS DIFERENTES GRUPOS POLITICOS Y LA UNION

En el pensamiento de Valle se encuentra una etapa clara del pensamiento ilustrado. Lo característico de esto es que la resolución se debe hacer desde arriba, o mejor dicho, de arriba a abajo, al igual que en la península, en el istmo hay un grupo de — hombres minoritarios, pero bien preparados, que están al corriente de los acontecimientos mundiales. Tienen un gran amor y cultivan con afán las ciencias y las artes. Tal es el grado de "La Sociedad de amigos del País", que en Guatemala, la ciudad más adelantada y foco cultural de Centro-América, todos acuden allí. Los Centro-Americanos se ilustran (10) y además una actividad literaria no sólo en Guatemala, sino en la provincia, Valle dirige el "amigo de la Patria". La verdad es que la independencia no cogió preparada a Centro-América. Valle sabía que la provincia tomaría pronto distinto rumbo, dado el localismo de una parte, el deseo de poder de los que lo detentan, y la impericia de otro, darían lugar a un estado de cosas anárquico, donde la federación claudicaría, por no tener la suficiente fuerza para unir a todos los grupos locales, en una tarea común.

.

En Honduras desde un principio aparece la clásica división entre liberales y nacionalistas aunque no se puede decir que -- exista una división radical entre ellos. Son los que canalicen la vida política del país. En verdad, el fin de los partidos es la conquista del poder. Cuando están en la oposición son los que man tienen y preconizan grandes reformas, cuando están en él tratan de concursar el poder por cualquier medio, ya que es un país pequeño donde no son los méritos, sino los votos que tenga a la hora de ganar las elecciones lo que cuentan. Al ser una economía -- agraria con grupos humanos muy numerosos y analfabetos, dió lugar a que se produjera, durante los 150 años de vida independiente y hasta el año 1932, un pequeño período de paz.

Esto se aumenta con el respaldo efectivo que los partidos -- tienen del extranjero, ya que en determinados países dependen -- del respaldo de los gobiernos afines para poder controlar los -- grupos internos, lo que dá lugar a influencias en los ordenamientos que han producido las más variadas formas, y al igual que después de marcharse las campañas Españolas, surgen otras que tratan de sacar máximo partido a tal estado de cosas.

No obstante, en ambos partidos se trata de organizarlas, de imponer un mínimo de eticidad, ya que la enfermedad había calado en lo más hondo de la médula dela Patria. Son familias divididas irremisiblemente, hasta la etapa reciente de los hombres fuertes, que han tratado de poner las cosas en su sitio.

Los pueblos de Centro-América no estaban preparados como - tampoco lo están ahora, ni dispuestos, de buen grado, la unión.- No existían entonces, como no existen ahora, los intereses positivos que sirviesen de enlace entre los estados. Afirman lo contrario a despecho del mobilísimo ideal unionista, lo que equivale a cerrar voluntariamente los ojos a la realidad histórica, para soñar con optimismos que pueden parecer bellos, pero que son falsos, Partiendo de ésta premisa se considera que para los grandes males hay grandes remedios, y hay que partir de realidades,- que lleguen al pueblo, pues no solo en él, está el fin material, la defensa de nuestra soberanía, sino la fuerza que hará que surja el ideal unionista, como necesidad fisiológica, sin que por - ello se lesionen en lo más mínimo, intereses materiales y espirituales de la Patria, ya que serán los mismos, sino que, con mayor repercusión fuera de nuestro suelo.

Desde que se proclamó la independencia, han surgido en diferentes etapas de la historia en Honduras, movimientos unionistas, pero dado el respaldo efectivo que tienen estos, en los países de una parte, en los partidos tradicionales de otra, no han podido llegar a trascender históricamente, ya que no han contado con una - progresiva fase que de modo trascendente muestre respaldo. Dentro de los partidos tradicionales por un lado se ha debido a que han - querido hacer reformas desviándolo de la realidad ~~por~~ otro, lo que, dado nuestro sistema presidencialista y de partido, al dejar de - ejercer el poder, el partido contrario lo primero que hace es regir por sus propios postulados, contrarios al anterior, de tal forma que aquellas reformas que se hicieron, dejaron de existir.

Al no haber continuidad, carecen de validez las reformas que se introducen, si no tienen un respaldo social sólido, económico y político, que les permita aportar sus propios frutos, ya que de esta forma trasciende por sí sola, dentro de los grupos políticos. - Por eso, los programas de cada partido, según la época, toman una actitud en la cual se sienten garantizados sus portadores. La vía constitucional no es otra que la de la patria, ya que no distingue

banderas políticas de ningún tipo con respecto a la unión y en ella debe haber una integración progresiva, teniendo en cuenta la idea predominante de cada momento histórico.

Cecil Jane dice: "La confianza en el ideal y la fe son dos factores que dominan la actitud de los hispanoamericanos en todas las cuestiones políticas. Creen que la perfección es asequible y no se contentan con nada que no alcance a ser perfecto; tienen fe en sí mismos y en el futuro, una fe a prueba de todos los desengaños y de toda desilusión del período de independencia. Porque tiene esa fe no les gusta ningún régimen que no les dé, a la vez el máximo de libertad y el máximo de eficiencia. Cosas que creen naturales y simultáneas, y continúan frente al problema de su realización, sinceramente convencidos en su intención de que se alcanzará una solución.

No parece que tengan ninguna razón para ese convencimiento. Se creía que la libertad a que aspiran no es más que desorden y la eficacia nada más que despotismo. Se creía que la historia de todos los países es nuestra, que en este imperfecto mundo los hombres tienen que contentarse con algo menos que el ideal. Se creía que su -

esperanza es la causa y la fe es vana. Pero los Centro-Americanos tienen que permanecer fieles a quien no a su convicción, a su esperanza y a su fé. Porque nacen del idealismo político que es inherente a la raza.

Cada país tiene su propia estructura.

La constitución es ese traje hecho a medida que la historia ha ido confeccionando. En él, entran los diferentes grupos políticos, y está la garantía no sólo de la lucha y defensa, sino de la soberanía de cada estado en respecto de su constitución y de sus leyes y deseando hacerlas más efectivas de acuerdo con la idiosincrasia de cada pueblo, la realidad geográfica y los factores humanos, igual que en el pasado, se ha intentado por diferentes vías. Debe de ser ésta progresivo, para llegar a formar en los diferentes países las fuerzas que hagan que los pueblos se unan en el — trabajo y en la cultura. Pero que las gentes de buena voluntad — vean en cada país un hermano, otro pueblo que lucha como ellos por un mañana mejor.

Cada grupo político tiene que circunscribirse a su propio país dentro del respeto a la propia idiosincrasia de cada pueblo, ya -

que de lo contrario, la historia ha demostrado, que, al reunirse todos los representantes para elevar una Constitución Centro - Americana, se plantea el problema de los eternos partidos irreconciliables, que, estimulados por potencias ajenas al área, hacen retroceder todo lo que de práctico se ha logrado en principio en aquellas, reconociendo nuestro grado de desarrollo. Esto trae como consecuencia que el pueblo, víctima inocente, sea el que soporte la parte peor, por la habilidad de unos demagogos sin escrúpulos.

La ideología del integracionismo no debe confundirse con intereses de grupo o partidismo.

El ideal de nuestros próceres es la llama viva de la Patria, y sólo en el respeto de la propia soberanía, se puede llegar a un entendimiento mutuo, entre los pueblos. El mercado Común Centro-Américoano no es más que un paso más en camino hacia la unión, respondiendo a las necesidades de la vida presente, - aportando soluciones que son propias de nuestra realidad geográfica. Solo una vez que las fuerzas económicas están así creadas, puede seguirse por un camino político firme. Lo mismo que con —

fórmulas originales, que son más factibles de poner en práctica en país pequeño, que en países grandes, no solo por la distancia, que encierra su propia geopolítica, sino porque las causas que se producen son mayores (11).

El derecho Hondureño ha tenido conciencia de su realidad - histórica y se ha mantenido a la vanguardia en cuanto al integracionismo se refiere, inspirado en los postulados de la raza, la-justicia, la lengua y la cultura común.

Hoy más que nunca, dada la situación política reinante en - el universo, nuestros pueblos deben de tener fé, verdadero motor que les dará la fuerza necesaria para encontrar su común destino. Sólo de esta forma se puede llegar al desarrollo, ya que una nación, para que pueda crecer debe de tener fé, sin ella no hay crecimiento. Debe existir, al mismo tiempo, un gobierno fuerte como condición viva para el desarrollo, y, dada nuestra tradición política, deben existir diferentes grupos políticos, pero - con la suficiente garantía dentro del ordenamiento institucional para que los problemas de la política, a la hora de las grandes-decisiones, no se vean comprometidos. Por ello, se debe descartar

toda política de exclusión. La política es para todos y todos los talentos necesitados y aislados deben encontrar cabida en su amplio seno.

Carl. J. Fiedrich dice: "Un partido político es un grupo de seres humanos que tienen una organización establecida con el objetivo de conseguir o mantener para sus líderes, el control del gobierno y con el objetivo ulterior de darle a los miembros del partido, y por intermedio de tal control, beneficios y ventajas, - - ideales y materiales".

Los elementos políticos se diferencian de otras agrupaciones, de las facciones políticas y clases sociales. Por su estabilidad, todo partido tiende a la aceptación de nuevos adherentes con el fin de aumentar y obtener el poder político que es la finalidad, - de toda la colectividad. Los partidos se basan en un "reclutamiento formalmente libre". Esto es lo, que permite a todo el mundo - poder ingresar en ellos.

Max Weber introdujo este criterio para diferenciar los partidos políticos de las facciones aristocráticas o de otros grupos - afines.

Los elementos que animan a los diferentes grupos políticos - deben de responder a las exigencias de hoy, en sus respectivos - programas, y tener la suficiente ética, para descartar los errores que en el pasado se han cometido, debido a que no supieron - mantenerse vigentes en la dinámica que planteó la política en el quehacer de cada día.

Esto nos lleva a poner en peligro la existencia misma de la Patria, y en última instancia del pueblo soberano.

(12) Los factores que determinan la actuación de los dos — partidos liberales nacionalistas, en cuyo seno se agrupan todas las tendencias, son:

- a) El creminato demográfico.
- b) La aparición de nuevos grupos sociales
(sobre todo urbanos)
- c) La transformación económica y entrada de capital extranjero.
- d) El crecimiento enorme de las comunicaciones y de los medios de difusión.

Lo cual, predispone a encontrar por parte de los diferentes partidos, soluciones a corto plazo y de forma realista. Como el problema tiene características similares en los demás países - del istmo, dá como resultado que, frente a ello, los pueblos tomen conciencia de sus problemas y se solidaricen, lo que redunda, en beneficio de ellos, y hace que se pase a una vida ciudadana, - pues el sector agrícola, es el mayor, por lo que, en torno a él, gira la vida del país con el crecimiento de los ciudadanos y dan mayor predominio a estos.

En parte uno de los factores que han restaurado la unión, - se han debido a que no ha habido una ciudad lo suficientemente grande, que repercuta en la vida del istmo.

Ello significa que la fuerza de los grupos tradicionales, - que tienen más fuerza en el medio rural, en la ciudad tienen - que llegar a la masa, con ideas nuevas. Así como los líderes que se incorporaron a los diferentes grupos, están más identificados dentro del istmo, lo que hace realidad, cada vez más, el ideal - de nuestros próceres, puesto que los gobiernos se sienten obliga

dos a reformar, no sólo las instituciones, sino también a hacer -
desaparecer las formas jurídicas, que obstaculizan la integración.

LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL COMO MEDIO DE COEXISTENCIA ENTRE
PUEBLOS SOBERANOS.

La Constitución es la norma de normas sobre la cual gira todo el ordenamiento jurídico patrio.

Este principio de legalidad se encuentra inscrito en sí mismo, no sólo en el derecho positivo donde la ley toma vida, sino — que, al mismo tiempo tiene el espíritu para garantía de todo el — orden jurídico. La armonía perfecta del estado con su división — de poderes: en legislativo, ejecutivo, y judicial, se encuentra — regulada en ella para garantía de los derechos fundamentales de — la persona humana, de tal forma que en la Constitución, el traje que cubre el cuerpo, en este caso la desnudez de las demás leyes, sea la misión que el derecho objetivo tiene plasmado en ella.

"La concreta situación del derecho objetivo con la finalidad de tutelar especifican derechos e intereses relativos a la materia constitucional, y por ello, funcionan en el sentido subjetivo".

Los órganos diferentes de la magistratura ordinaria son los que ejercen aquellas funciones.

La Constitución es la que da legalidad a todas las leyes en ella amparadas, para mejor garantía de la norma jurídica, de la patria, de la soberanía nacional. Para ello, los demás países del istmo, en todo lo que ha sido posible, se han ido armonizando las diferentes Constituciones, sin que por ello se lesionen en lo más mínimo su soberanía nacional; antes bien, se defienden mejor, debido a que los problemas que hoy se plantean, muchos de ellos existen en el ámbito nacional, y solo a través de la sólida garantía que da la Constitución, se puede hacer frente a ellos sin comprometer el orden establecido, ni los intereses de ningún tipo, que dentro de la Patria y fuera de ella se desarrollan.

Al mismo tiempo, se tiende a dar con ello mayor efectividad al control de la constitucionalidad de las leyes y a los actos a ellas equiparados. Debe ~~de~~ haber también una armonía que sólo la legalidad constitucional puede dar. En los diferentes países va existiendo una conciencia clara, en dicho sentido, que a través de los diferentes cambios porque pasa el istmo, cobra mayor fuerza, ya que no sólo se ven protegidos los intereses de la patria, sino que dan marcha al entendimiento entre los diferentes pueblos, lo mismo

frente a los intereses lesionados de los particulares, que frente al mismo criticismo político, que frente al mismo criticismo político, que quiere imponer determinado grupo político, y de esta forma, se evita que surja el abuso del poder, por parte de alguno de ellos, especialmente del ejecutivo, ya que al ser éste - fuerte debe de estar reglado en cabal medida en el ordenamiento - constitucional, para su buena marcha.

Y con ello conseguir una auténtica democracia, la cual sólo puede ser posible a través de una actuación plena y racionalizada de los principios democráticos. Su adecuado funcionamiento debe de estar amparado en el ordenamiento constitucional, como - - principios de garantía. La habilidad del legislador está en saber captar las diferentes corrientes imperantes dentro de Honduras, - ya que son el respaldo que encuentran estos principios en la realidad social, los que lo darán verdadera efectividad. Después de la segunda guerra mundial, ha habido un profundo cambio en el - universo, el cual ha repercutido también dentro de la realidad - política del istmo, dando paso con la ~~creación~~ creación del mercado común a una progresiva, pero sólida, equiparación, más estrecha de la-

diferentes constituciones, ya que éstas no podrían quedar al margen. Después de llegar a los diferentes campos del derecho, al Código Mercantil, Civil, Penal, Procesal, Administrativo, Trabajo, etc. éstas fórmulas jurídicas tienen como base el expresar nuevas realidades: económicas, políticas y sociales. Se teme que el paso de las grandes masas a la vida pública, ha producido como un despertar, una verdadera conmoción en el campo jurídico.

Este proceso de renovación que se observa en otras latitudes obviamente tenía que dejarse sentir en nuestro país, y en los demás países del istmo, que viven en iguales circunstancias de evolución y cambio, gracias a la dinámica de la vida política, determinada por la propia realidad geográfica, que hace que exista una renovación constante de ideas. Estas, dan aún más fuerza a la corriente integracionista, por ser un patrimonio cultural común, — adaptándola a las corrientes actuales. Este proceso ha llevado a efectivas reformas al ordenamiento constitucional hondureño, debido, en parte, al subdesarrollo en que se encuentra el país, y a los profundos cambios sociales en que se encuentra Centro-América matizados por el atraso económico y rigidez de las instituciones-
(13).

Para la promoción de las inversiones privadas extranjeras en los países Centro-Americanos, en el rango constitucional, se han introducido determinadas reformas que se refieren, directa e indirectamente, a ello. A saber:

- a) Sobre las riquezas naturales del país.
- b) Sobre la condición de los extranjeros.
- c) Sobre el recurso a la vía diplomática.
- d) Sobre el régimen de propiedad (expropiación, nacionalización, y confiscación).
- e) Sobre el régimen de correcciones.

La lectura de las normas referentes a la expropiación permite ver una uniformidad de criterios en cuanto los siguientes aspectos de la institución.

a) Toda medida de expropiación motivada en necesidad de utilidad pública", o alguna constitución Centro-Americana usan el término de "utilidad colectiva, beneficio social o interés público, "interés social" o "necesidad y utilidad pública", que tienen sustancialmente un mismo contenido y significado, por cuanto especifican que todo acto de expropiación debe fundarse en una necesidad colectiva.

b) Se requiere una ley que determine el acto; se ha sacado - así de la acción del Poder Ejecutivo una decisión sobre algo que- significa una excepción importante al régimen de la propiedad, exi giéndose que haya una acción legislativa.

c) Se establece que debe de haber una reparación o compensa- ción por una afectación de la propiedad o hace apropiación el es- tado de un bien que pertenece a una persona. Por ello, se estable ce que debe haber una indemnización justa, un precio real que de- be determinarse por el procedimiento que algunas constituciones, - como la de Guatemala estableciera:

a) La indemnización debe ser "juridicamente abonada".

Esto está regulado por el ordenamiento constitucional, desa- rrollándose luego por las demás leyes y decretos que para el efec to se han dictado.

La equiparación en las cinco Repúblicas de Centro-América, en lo que se refiere al Mercado Común ha hecho que se llegue ya a una integración de los diferentes sistemas, ampli'andolos e los demás campos del derecho.

BIBLIOGRAFIA

- 1 - "Constitución de la República de Honduras" de 3 de junio de 1965.
art. 9.
- 2 - "Constitución de la República de Honduras" de 3 de junio de 1965.
art. 1 y 2.
- 3 - ICAZA TEJERINO: "El nacionalismo hispanoamericano y sus problemas". Revista de Estudios Políticos, num. 88 - pág. 157.
- 4 - RICHARD N. ADAMS y otros: "Social change in latin american to-day"
New York 1960. pág. 177 y sig.
- 5 - "Constitución de la República de Honduras" de 11 de diciembre de
1825. Cap. I - art. 4.
- 6 - "Constitución de la República de Honduras" de 11 de enero de 1834.
Sec. II - art. 4.
- 7 - "Constitución vigente" de 3 de junio de 1965. art. 5.
- 8 - RAMON E. CRUZ. "Historia constitucional e institucional de Honduras". Derecho interno y Derecho Internacional". Tegucigalpa, D.C.
1964. Imprenta López, pág. 5 y sig.

- 9 - VIEIRA ALTAMIRANO: "Fronteras malditas", ediciones "Diario de hoy". San Salvador, pág. 10 y sig.
- 10 - STORTZEN, CARLOS: "El influjo del utilitarismo inglés en América latina". Revista de Estudios Políticos, num. 143 - sept. oct. 1965. pág. 89 y sig.
- 11 - HERRARTE, ALBERTO: "La Unión centro-americana: tragedia y esperanza". (Ensayo Político-Social sobre la realidad centroamericana). Editado por el Ministerio de Educación. Guatemala - 1955 - pág. 471 y sig.
- 12 - TEJERINO ROJAS, AGUSTIN: "Proceso Político-Social de la Unión centro-americana". Revista de Estudios Políticos, num. 4 - pág. 136, marzo y abril de 1949.
- 13 - REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE CHIHUAHUA (México). "Lectura Jurídica", núm. 15. "La promoción de las inversiones extranjeras en la legislación de los países latinoamericanos". "Derechos constitucionales".

CAPITULO, VIII

=====

EL MODERNO DERECHO CONSTITUCIONAL

La Realidad Actual

La corriente Centroamericanista en el
Derecho Constitucional hondureño.

Realidades Políticas, Sociales, Econó-
micas y medios de contacto de los gru-
pos humanos en Centro América.

Corrientes continentales aportación -
y experiencias dentro del Derecho - -
Constitucional hondureño.

DESARROLLO

EL MODERNO DERECHO CONSTITUCIONAL

La hora presente, en que el acercamiento entre los pueblos es
cada vez mauor en todos los niveles, se caracteriza por las grandes
masas humanas, que, cada día, se identifican en sus comunes aspira-
ciones.

No podía permanecer indiferente el Derecho Constitucional pa
trio, por llegar a forjar una auténtica democracia, ya que los —
pueblos del istmo Centro-Américoano, al tener un común origen tra-
tan también de llegar juntos a conseguir un ideal común. Para ello
tiende a superar dentro del marco de la legalidad constitucional,
aquellas diferencias, que en los diferentes campos de la actividad
humana les han dividido.

Los medios de comunicación social que son difíciles entre —
las diferentes regiones de la patria, dada su peculiar geografía,
Se hacen rápido, y de forma más eficaz, con los demás países her-
manos.

Por ello, al nombrar estos departamentos sus representantes—
en el Congreso, se toman en cuenta la ~~ex~~periencia y logros de los—
demás estados, en su lucha por la garantía de los derechos ciuda-
danos.

Así en corto plazo se deja sentir, cualquier cambio que tienu
da a una evolución dentro de la dinámica que caracteriza la lucha
humana, en un momento histórico determinado. Por eso, los males,—

que afligen a nuestro pueblo no dependen de sus habitantes y si -
de las constituciones que los rigen, por lo que es necesario que
las que se den a los pueblos estén en armonía con su grado de in-
titucionalización, educación, hábitat y géneros de vida.

Las constituciones de los diferentes pueblos de la tierra son
fiel reflejo de su propia idiosincrasia y así, una constitución -
que es perfecta para un país anglosajón, no puede ser idónea para
un país de origen latino.

19) Maurice Duverger en "Las instituciones políticas y el Dere
cho Constitucional² (pág. 187) dice: ("En América Latina, en --
donde los regímenes políticos imitan generalmente al sistema de -
los Estados Unidos de América, el régimen presidencial tiende a -
deformarse: el presidente domina el parlamento, llegando así a una
semidictadura").

Por eso, dada la variedad de situaciones por las que ha ido
pasando el Derecho Constitucional patrio, se debe de tener en --
cuenta, cada vez con mayor cuidado, por otra parte del legislador
el que las conquistas progresivas, que llegan hasta el marco consti
tucional, sean el fiel reflejo de nuestra realidad social, y -

que estén respaldadas por el pueblo, ya que sólo así se puede ir de acuerdo con nuestra propia idiosincrasia.

El Derecho Constitucional al ser la médula de todo el sistema jurídico imperante en una sociedad de una determinada época al informar sus principios a todo el Derecho positivo, tiene que tener el respaldo y calor del pueblo, que será el que, al cumplir sus propios fueros, los defienda y sostenga vigentes, al mismo tiempo — que, con su fuerza dogmática, los haga permanecer inalterables.

La Constitución, siguiendo la pirámide Lelseniana, es la fase de todo el sistema jurídico que trata de ser la expresión viva de lo que en ella se expresa.

La realidad socio-económica de nuestro tiempo, así como todo lo relacionado con lo que sea el patrimonio de su cultura, lengua-tradición, encuentra defensa bajo su mente, frente a los avatares que, la misma realidad de cada día, les imponga.

Pero estas normas tienen que ser la fuente inspiradora que anime y vivifique al pueblo soberano, en su nible empeño de superación constante por alcanzar nuevas metas, por conseguir un futuro — mejor, más digno, más justo, que pueda ser legado a las generaciones venideras.

2º) Harol J. Laski en "El Estado Moderno", pág. 352, dice: -
 "Las consecuencias son más graves y profundas, cuanto se trata de -
 normas legales que se mantienen a retaguardia de las necesidades -
 de una generación. Por eso, es precisa descubrir una serie de me-
 didas donde se deduzcan las necesarias transformaciones jurídicas,
 de una manera continua y definida, a fin de que se produzca lo -
 más rápidamente posible la adaptación de los cambios legales a -
 las necesidades variables de la vida".

Ya que sobre la permanencia y eficacia de las normas consti-
 tucionales se está de acuerdo, y responden al sentir de nuestro -
 pueblo, ir contra los deseos del mismo, carece de fundamento, de-
 jando así de identificarse, de seguir siendo y cumpliendo con la -
 misión de normas que tiene la Constitución.

3º) Según Carl Schmitt ("Teoría de la Constitución", pág.4)
 "El contenido de la Constitución es el deseo del pueblo soberano
 para que la acción del Estado y la conducta de los ciudadanos, se
 ejercite conforme a determinadas ideas filosóficas, políticas, eco-
 nómicas y sociales, queridas y aceptadas por él. Las cuales ver-
 tidas y materializadas en el articulado constitucional, se erigen

en las normas jurídicas fundamentales que regirán a un Estado dado".

La dinámica que caracteriza a todos los acontecimientos políticos, hace que estas estén de acuerdo con las ideas y creencias imperantes en una sociedad determinada, con su forma de sentir y de — pensar, así como con las etapas que el pueblo atraviesa en cada momento de la historia. Esto, se traduce y deja sentir en todo el ordenamiento jurídico.

4º) Para A. Esmein: ("Elements de Droit Constitucional" pág. 408) "Resulta, desde luego, una cierta inmutabilidad jurídica de — las leyes constitucionales. Más esta inmutabilidad no podría ser ab soluta, pues, la soberanía nacional implica necesariamente que la nación siempre puede cambiar la constitución. Decretar esa inmovilidad sería por otra parte volverse contra las leyes de la histo— ria y el invencible paso del progreso".

El Derecho Constitucional patrio, lleva en su seno la lucha — que el pueblo mantiene por liberarse para siempre de la ignorancia del obscurantismo, por conseguir una vida más digna, donde en su — marco se protejan con mayor eficiencia los derechos del pueblo soberano.

Porque el "bien común" y la fórmula idónea que identifique el progreso del hombre con su medio, de acuerdo a su peculiar característica, está en tratar de encontrar un marco en el cual los supremos intereses de la Patria, hallen su mejor defensa y garantía. Este camino solo se puede encontrar dentro de la legalidad constitucional.

Pero entrando por éstas los problemas humanos, tienen su mejor defensa y fuente de inspiración, en el mundo moderno, sobreponiéndose por encima de todos los intereses de grupos, políticos, económicos y sociales, y siguiendo el camino que sirva de guía, y de soporte a todo el ordenamiento jurídico.

Con su lenguaje claro, sencillez, contundente y plasmado en la norma positiva, identifica y se hace portavoz la constitución de todo el pueblo, sin dirigir motines ni sectarismos de ningún tipo. Por esto, la evolución del pensamiento humano por una vida mejor, tiene que estar de acuerdo con el sentir de cada época, y así, el ordenamiento constitucional patrio no podía permanecer al margen de la realidad política de nuestros días.

La Corriente Centro-Americanista en el Derecho Constitucional hondureño.

El derecho Constitucional patrio ha seguido fiel a su común -
estirpe hispánica, lazo común de los diferentes pueblos del istmo-
Centro-Americano, como meta para llegar a una unión entre las dife-
rentes naciones.

A partir de tan largo paréntesis de historia de diferentes -
vicisitudes, se ha ido perfeccionando, a través de infinidad de si-
tuaciones, el espíritu creador del hombre. Ha encontrado fórmulas-
que le permiten sortear todos los obstáculos que, por la improvisa-
ción, por ese querer hacer y buscar una solución, han sido el ma-
yor error.

Por eso, la Constitución del presente siglo quizá, no ya con
miras tan ambiciosas, si dá con el camino para establecer unas vin-
culaciones eficaces, que soprtén todos los problemas que se le - -
planteen, aunque para ello se prevee que se deben de encontrar los
medios idóneos que conduzcan a ellos, por medio de un contacto más
estrecho, por medio de negociaciones, a todos los niveles que sean
fructíferos, que traten de crear una armonía entre los diferentes

/

pueblos, a escala regional, creando organizaciones, fomentando el entendimiento.

5º) El artículo 9 de la Constitución actual establece que — "Honduras es un Estado disgregado de la República Federal de Centro-América".

En consecuencia, reconoce como una necesidad primordial volver a la unión con uno o más Estados de la antigua Federación. A este efecto, queda facultado al Poder Legislativo para ratificar los tratados que tiendan a realizarla parcial o totalmente, siempre que se propongan de manera justa y democrática.

A tenor de lo expresado en el Art. 9 del poder Constitucional que dictó la actual Constitución el 3 de junio de 1965, ha querido identificarse con la tradición constitucional, que ya posee carta de naturaleza, en el derecho patrio y de llegar por todos los caminos que son idóneos a conseguir una auténtica unión entre los pueblos del istmo Centro-Americano.

Quizás por no ser demasiado pretenciosa, un poco moderada, pero, no obstante, eficaz trata de sentar las bases sólidas para es

te entendimiento, ya que, primero, se deben encontrar y fomentar, al mismo tiempo que encauzar aquellas causas comunes, que por ser sentidas por los pueblos, les unen más, creando aquellos intereses e ideales que hagan que los mismos se solidaricen en el trabajo - creador de cada día.

Se ha tropezado a lo largo de la historia con muchos obstáculos, y es porque a la hora de las auténticas decisiones, de trascendencia histórica, no se han encontrado intereses sólidos que - puedan frenar las tormentas contrarias a la integración. Por ello - se han visto frustrados estos intentos, que, tan notablemente, defendieron Valle y Morazán.

En el mundo de nuestros días, y dentro del marco del Derecho Constitucional, se cimenta la base de un auténtico entendimiento entre los pueblos hermanos, sin que ello disminuya su soberanía.- Por el contrario, dados los grandes grupos de presión, que en el mundo actual existen, no queda más remedio que, en esta lucha, los pueblos se unan y traten de identificarse aún más creando los medios que conduzcan a ello. Ya que las realidades que, a lo largo de la historia de la humanidad, se han planteado, han hecho que los -

grupos humanos tomen unas determinadas directrices para defender mejor su cultura.

Así, nos dice:

6º) J.J. Chevalier: (Grandes Textos Políticos desde Maquiavelo hasta nuestros días. Pág. 178). "La pasión es igualitaria - en el fin. Ella acababa de levantar a los burgueses contra los nobles, pero quizá no era más que el comienzo o la continuación de un proceso histórico destinado a desenvolverse hasta el fin - de la vinculación total. El porvenir dirá si esta pasión de la nivelación igualitaria no era más poderosa en el corazón del hombre que la pasión de la libertad".

Los pueblos al tratar de encontrar nuevos caminos intentan superar los problemas que el subdesarrollo, ante la escasez de medios plantea en todos los niveles y crean otras estructuras — que les permitan a corto plazo liberarse no sólo del neo-colonialismo, sino de fomentar y responder con nuevas fórmulas a un auténtico patrimonio cultural común.

Pero, por ser una tarea a la que tiene que responderse con fórmulas de nuestros días, que lleguen a todas las ramas del De-

recho Administrativo, Penal, Laboral, Mercantil, Procesal, Internacional, Público y Privado, etc., se debe de partir primeramente del Derecho Constitucional, ya que es el que lleva la antorcha que ilumina a las demás ramas del Derecho.

Sólo cuando es fomentada esta conciencia entre los pueblos, es cuando se puede salir para siempre de la ignorancia y del subdesarrollo.

7º) Raymon Aron, dice en "La Paz y guerra entre las naciones" (pág. 17): La nación "equivale a cualquiera colectividad política territorial organizada" abarcando así indistintamente, las ciudades griegas, el imperio romano o egipcio, las monarquías europeas las repúblicas burguesas o las democracias populares.

8º) El Capítulo IV de la Constitución vigente que se refiere a los Partidos Políticos, dice en el Art. 39: "No se permitirá la formación, inscripción y funcionamiento de partidos políticos que proclamen o practiquen doctrinas contrarias al espíritu democrático del pueblo hondureño, o que actúen de acuerdo o en subordinación a una organización internacional o extranjera, cuyos programas

ideológicos atenten contra la soberanía del Estado. No quedan — comprendidos en esta prohibición las organizaciones que propugnen por la unión Centro-América, por las doctrinas panamericanistas o la solidaridad continental".

Se trata de encontrar una verdadera compenetración entre — los diferentes pueblos para que puedan eliminar sus diferencias y crear aquellas bases que les permitan trabajar por una auténtica Paz. Sólo mediante el respeto a la legalidad y siguiendo el espíritu democrático de los pueblos del istmo se pueden crear nuevos objetivos, que quizá, en los países que por ser geográficamente — pequeños se pueden realizar a corto plazo, en otros mayores, (geográficamente hablando) sin de la misma estirpe serían impracticables y los resultados más difíciles de conseguir.

Por ello, se debe partir con fórmulas propias que estén de — acuerdo con nuestra propia idiosincrasia, es decir, partir de la realidad misma, lo que permitirá actuar sobre ella y orientarla — en el sentido definido. Por el hecho de que algo venga ocurriendo no cabe inducir, sin más, que no pueda o no deba dejar de ser, — sobre la base de nuevas condiciones. A su vez, el "deber ser" ac-

túa en el sentido de acercarlo a sus imperativos. Las convicciones de los hombres acerca de lo que debe ser, son un ingrediente de la realidad, y han de ser tenidas en cuenta como factor operante.

Para llegar a un entendimiento entre los pueblos del istmo, se deben armonizar las ideas, de acuerdo con la propia naturaleza racional del hombre, como diría Kant en "Ensayo sobre la Paz perpetua".

Así, el mecanismo de la naturaleza, actuando a través de las pretensiones egoístas del hombre (que, desde luego, se contrarrestan unas contra otras, en sus efectos últimos o externos) puede ser utilizado por la razón como medio para abrir el camino a la realización de su propio fin, el imperio del Estado.

Promover y asegurar en esta forma la paz interna, así como la externa, podemos decir, pues, que en el deseo insustituible de la naturaleza y que el bien alcance, al fin, la supremacía.

Es precisamente, sólo por el camino del entendimiento entre los pueblos, como se puede llegar de una forma democrática a asegurar la paz, la libertad, ya que cualquier fórmula disfrazada de —

Maquiavelismo, como ha sucedido en ciertas épocas, no sólo ha -
frenado los buenos deseos, sino que echa por tierra todos los log
ros positivos, que, hasta aquel momento, se habian conseguido,-
dando lugar a un retroceso que, unas veces, por pasión, otras —
por impericia, no se supo superar a su debido tiempo.

Por eso, las fórmulas deben ser creadas de acuerdo con nues-
tra propia realidad, y teniendo en cuenta esa corteza inmensa de
resultados fallidos, aún de buena voluntad, que, por la sagacidad
de una parte, como la poca pericia de otra han repercutido de for-
ma tan funesta sobre el pueblo, que pasivamente ha soportado todas
las tempestades.

A pesar de todos los avatares de los que la Historia patria
nos da fe, Honduras sigue fiel a su tradición centro-americanista.
Un fiel reflejo de ello nos lo dá nuestra Carta Magna, al facul-
tar al poder legislativo para ratificar todos los tratados que con-
duzcan a dicho fin.

Esto, tiene una doble importancia puesto que es un principio
consagrado de rango constitucional, que, a su vez, se desarrolla
en otras disposiciones de menor rango.

Ellos en la época presente, van dando la pauta, en terreno firme y progresivo, así como acumulando experiencia para llegar cada vez más a un entendimiento recíproco, en bien no solo de los pueblos del istmo, sino de los demás pueblos hermanos, ya que son experiencias, que han ido cristalizando a través de todo un proceso histórico.

El ideal de nuestros próceres de respeto a la soberanía de cada uno de los pueblos, para que de esta forma puedan seguir su destino de la forma que ellos quieran, de acuerdo a la tradición democrática, es uno de los pilares sobre el que se asienta el Derecho Constitucional patrio, al hacer realidad los postulados — inspirados en una auténtica justicia social y en la dignidad de la persona humana.

Realidades políticas, sociales, económicas y medios de contacto
de los grupos humanos en Centro-América.

La característica esencial de la realidad política es que - está es producto de la actividad humana, que se desarrolla en un momento determinado. Por ser esencialmente humana, responde de - acuerdo a unas necesidades de todo tipo, que hace que los grupos se unan para poder de esta forma, conseguir una vida mejor.

Para conseguir un mayor acercamiento entre sí, los pueblos- del istmo se encuentran condicionados de forma especial, por las realidades que imperan, en un momento determinado, en la esfera política.

Dada la dinámica de ésta, se aprecia la colaboración que se da entre gobiernos, surgidos de la voluntad popular, los cuales- se apoyan a ultranza, igual que sucede con los gobiernos fuertes que tratan de sostener sus posiciones, encontrando u n apoyo mayor a su propia causa, en los gobiernos de su propia condición.

La experiencia, que en el suelo Centro-Americano se ha he- cho con miras a conseguir la integración desde el punto de vista

constitucional, fue una fórmula que fracasó. Se intentó de cumplirse el primer centenario de la Independencia de Centro-América.

Pero ésta no está en introducir fórmulas nuevas, sino en encontrar nuevos caminos que respondan de forma eficaz a la realidad del mundo de nuestros días.

No se puede aspirar a conseguir a que se realice la integración de la noche a la mañana, se debe ir por etapas. Así, la integración económica es una fórmula que se puede conseguir a corto plazo; por el contrario, la integración política se consigue a largo plazo, ya que se requiere que primero tomen carta de naturaleza las instituciones tendentes a realizar aquellas.

No quiere decir esto que la integración esté desvinculada de integración política, puesto que está encaminada a realizar una integración de grupos humanos, a todas las escalas, en cada uno de los países.

Esto es fundamental, conveniente, puesto que requiere el calor de estos grupos para que respondan a la realidad del momento actual, y deben llenar unas aspiraciones políticas, un mínimo de

eticidad, para permitir no solo un cambio de estructuras, sino con seguir otras metas, en todos los campos, que un solo país, por sí solo no podría realizar. Para llevar a cabo una integración de acuerdo - con nuestros días.

La tecnificación, que la ciencia pone al alcance del hombre - de nuestros días, debe también llegar a la política, por una prepa ración adecuada, sin que por ello tenga que identificarse con gru- pos políticos o con los partidos tradicionales, que solo aspiran a la conquista del poder para usufructuarlo en su propio beneficio,- ni con sectores determinados de la producción o de la Banca, empre- sas que no harán más que parcializar retardar y despersonificar el entendimiento entre los pueblos del istmo.

A lo que se aspira es a encontrar una forma nueva de unir a los pueblos, sin identificarse con banderías de ningún tipo, solo- por el engrandecimiento de la patria.

Los partidos políticos, así como las demás asociaciones que- por su trascendencia dentro de la vida nacional, jiuegan un impor- tante papel, son estructuras que deben flexibilizarse para poder- cubrir todas las etapas del proceso integracionista.

El contrato entre los grupos humanos debe ser tenido en cuenta, en el proceso integracionista, ya que los contactos de gobierno a gobierno, están movidos por la "razón de Estado" en algunos casos, y en otras, por el interés oligarquico, y debe darse - paso a la política de pueblo a pueblo, para lo cual se necesita - una oposición pública bien informada.

En el momento presente, en muchos casos, intereses oligarquicos, están en contra de los supremos intereses de la Patria, deformando a los ojos de las masas populares, la realidad de la situación, lo cual entorpece el proceso integracionista.

La integración flexibiliza, enormemente, los intereses y permite adoptar formulas operativas, que las montes foralistas rechazan o, en todo caso, les es difícil comprender y aceptar. Esta es una de las cuestiones más importantes para la contribución de los juristas en el proceso de integración.

En la actualidad, dada la fluidez de las vías de comunicación y de los medios sociales, radio, televisión, prensa, estos - deben actuar en armonía con el grado de cultura de los pueblos. -

No se puede dejar que los intereses de los propios estados, sean orientados a merced de miras personalistas, o en contra de la soberanía de los propios Estados del istmo en beneficio de un nacionalismo miope, que a la larga acaba minando no solo la soberanía del Estado en cuestión, sino la de toda la colectividad, repitiéndose así, el anarquismo, que caracterizó en el siglo pasado a las relaciones de los Estados del istmo Centro Americano y condujo, indirectamente, al sostenimiento de los intereses oligarquicos en contra de los intereses populares.

Tiene pleno rigor lo que su Santidad el Papa Juan XXIII, dijo en su Encíclica "Mater et Magistra"; "Responde en cambio a lo que pide la justicia, el que los poderes públicos se apliquen eficientemente a favor de los valores humanos de dichas minorías, especialmente su lengua, cultura, tradición, recursos e iniciativa económica".

Ha de advertirse, no obstante, que los miembros de tales minorías, quizá por el recuerdo de sucesos pasados no pueden dejarse llevar a insistir más de lo justo, en los propios elementos étni-

cos hasta ponerlos por encima de los valores humanos en dichas minorías, especialmente su lengua, cultura, tradición, recursos e -
iniciativa económica".

Ha de advertirse, no obstante, que los miembros de tales minorías, quizá por el recuerdo de sucesos pasados no pueden dejarse llevar, o insistir más de lo justo, en los propios elementos étnicos hasta ponerlos por encima de los valores humanos, como si el bien de la familia humana entera hubiera de subordinarse al bien de este pueblo. Y, es razonable que ellos mismos sepan reconocer - también ciertas ventajas que esa especial situación les trae, pues contribuye mucho a su perfeccionamiento humano, el contacto permanente con una cultura distinta de la suya, cuyos valores podrían - así ir poco a poco asimilando. Pero esto, se obtendrá, únicamente amigablemente en los usos y tradiciones del pueblo que los circunda y no cuando, por el contrario, fomenten grandes pérdidas que - traen al atraso a la nación.

Por esto, debe de tenerse en cuenta la situación en que se - encuentra en el ámbito de lo social, el pueblo hondureño, por una -

parte, pues en otros países de Centro-América, el florecimiento de su industria se ha debido a las ciudades, donde lo primero — que se ha formado ha sido el capital y la industria privada. En Honduras, ha sido tardío, por que las ciudades son pequeñas, no tienen grandes núcleos humanos y fabriles, que giran en torno a ellas, o toda la economía del país, en torno a la capital, como ocurre en los demás países de Centro-América.

En Honduras, las dos ciudades, San Pedro Sula y Tegucigalpa una industrial y la otra administrativa, tienen el predominio sobre las demás del país, donde la economía es local. Por ello, su trascendencia, dentro del proceso integracionista de los grupos humanos en Centro-América, es relativo. Además la posición geográfica y los medios de transporte, hacen que los precios de los productos resulten competitivos.

Debe de orientarse la actividad económica a una mayor participación de los grupos sociales, para acabar con todas las taras del subdesarrollo, analfabetismo y desnutrición. Los bienes tienen que ser repartidos más equitativamente para que los logros — de la actividad económica lleguen a todos por igual.

Con ello, no sólo se le dan nuevos brillos a la integración, sino que, al complementarse la economía de los pueblos del istmo, a través de esa unidad económica se fortalece la unión política, - pues entre ambas, existe una mútua relación.

La integración no se puede identificar con intereses particulares, ya que, los Estados Centro-Americanos aspiren a un ideal de jasticia, que, por medio de la legalidad constitucional, y del respeto a la autodeterminación de los pueblos del istmo, trata de replantear la realidad del mundo actual, protegiendo de esta forma la propia soberanía que no se puede conseguir si se va a espaldas de los intereses del pueblo.

La experiencia, a través del mercado Común, y el proceso que éste atraviesa, ha hecho reformas, cada vez de mayor envergadura, en el sistema jurídico, unión aduanera, luego, unidad monetaria; reformas muchas de ellas, que en otros países Ibero americanos, - no se pudieron hacer sin producirse un tema social, dadas las — proporciones que tenía.

Dicha experiencia patria, unida al camino ha andado, debe — tomarse en consideración, para evitar el tropiezo en la misma pie

piedra.

Los países pequeños tienen que dar a los demás países hermanos unos logros positivos, que se traducen en realidades jurídicas, económicas y sociales, surgidas del costado de la dinámica que impone el mundo de hoy a los grupos humanos.

Por ello, se tiende a la integración para conseguir una vida más digna, más justa, donde se vean garantizados y protegidos los derechos individuales, para constituir una auténtica vida ciudadana que haga realidad los más altos ideales democráticos.

Corrientes continentales: aportación y experiencias dentro del -
Derecho Constitucional hondureño.

La realidad geopolítica en que se encuentra Centro-América y, de manera particular, Honduras, en el Centro mismo del continente, bañada por los dos Océanos, con fácil acceso del exterior, mucho más quizás que del interior, le da unas peculiares características geográficas, que se han hecho patentes a través de su historia.

Pero, en la hora presente, la trascendencia de la vida continental tiene tal peso, que ning'un gobierno puede menospreciarlo, ya que, sin con el apoyo del pueblo, llega al poder, debe tener también la comparación decidida de los demás gobiernos, que al estar integrados en una cultura, son parte dinámica de ella.

9º) Andrés Bello, al referirse al Congreso Panamericano de 1844, dijo "La experiencia de cada uno puede servir a los otros, el contacto recíproco de los pueblos, aún más extraños entre sí, aún ligados por lazos menos estrechos, ha sido siempre uno de los medios de extender y hacer circular la civilización. Las dis-

tintas naciones de América han estado hasta ahora, demasiado separadas entre sí. Sus intereses comunes convidan a asociar y nada de lo que pueda contribuir a este noble fin desmerece la consideración de los gobiernos, de los hombres de estado y de los amigos de la humanidad". Andrés Bello, en esta ocasión, terminaba preguntándose si no sería digno por todos títulos que intentáramos, por medios más difíciles que los exigidos por la reunión de un Congreso de plenipotenciarios, que la comunidad de lengua añadiera el lazo de las instituciones análogas, el de la cooperación de todos los Estados a la conservación de la paz y la administración de la justicia de cada uno, y hoy sabemos bien, como ayer lo intuyeron, Valle, Mecejón y nuestros grandes conductores, que la conservación de la paz es indispensable en la lucha contra la miseria y la justicia, que al hacer desiguales a los hombres y a las naciones y frenar el desarrollo de los países y el bienestar general de los pueblos del mundo, crea tensiones sociales que conspiran contra su mantenimiento, tanto en el orden interno como en el internacional.

Todas las Constituciones, que en los diferentes momentos de la historia de la patria han existido, han hecho acto de fé, de es

píritu unionista y de fidelidad a nuestros próceres.

Al mismo tiempo, se pretendía encontrar, por parte del legislador, la fórmula mágica que acabará para siempre con los — problemas imperantes en su momento histórico, así como también,— encontrar, de una vez y para siempre, el camino de la unidad — de Centro-América. Para ello, se hizo marco de fórmulas nuevas, ajenas a la propia idiosincrasia del pueblo.

Nada más erróneo, dado que los pocos pasos que se habianda— do por los gobiernos anteriores, en el sentido positivo, no solo se mandaron, sino que se negaron a tal extremo, y parecía que — cada gobierno, con u n nuevo texto constitucional, hecho a la — medida del gobernantes de turno, era el ideal a seguir.

Pero el fortalecimiento de las relaciones internacionales, el resurgimiento de una clase media, más numerosa, de una nueva generación mejor formada, hace que se siga una línea, aunque no con la rapidez, con que se pretende conseguir la integración, si lo bastante sólida, para soportar, las marejadas que la dinámica de la historia imponga.

Quizás por tener menos cantidad de población, los problemas se orientan dada la necesidad, cada vez con mayor intensidad, llegando así a todas las clases sociales, a una participación activa en los acontecimientos futuros.

Lo demuestra la experiencia con reformas al sistema tributario, a la producción de determinados artículos, que afectan a toda una gama de la economía nacional, y que en países mayores del continente, producirían un caos económico, una auténtica revolución social. Sólo en ese ideal centro-americanista, el pueblo hondureño lo ha respetado con dignidad y entrega.

Cualquier reforma que se realice en los demás países hermanos, es tenida en cuenta, pero en muchos casos, no se prepara el terreno adecuadamente, lo que hace que se produzcan resultados contrarios a los apetecidos. Así ha pasado cuando se pretendía, contra todo pronóstico, y sin tener en cuenta la voz soberana del pueblo, imponer reformas, que unos pocos, al final explotaron en beneficio propio. Esto se debe a la falta de preparación y de toma de conciencia ciudadana para reformar y dar mayor agilidad a lo logrado con tantos sacrificios.

Dado que la garantía que ofrece la norma constitucional, está allí, iluminando el resto del ordenamiento jurídico, al ser — fruto de todas las fuerzas vivas de la patria, con su serena actitud frente al apasionado espíritu de nuestro pueblo, no sólo da la pauta a seguir, sino que es la vía moderada, para evitar todas las traumas y peripecias, que a lo largo de su agitada vida pública, ha padecido la patria, al tener que cuenta que, antes, hay que ma durar los proyectos de acuerdo con la realidad política. Para que con ello, se pueda conseguir una adecuada evolución de las estruc+ turas que se han creado.

De lo económico se va a lo político. Esto es una realidad, — pero también lo es que, tanto lo económico como lo político tienen que responder al compás del calor humano, ya que, son los hom bres los que hacen la historia de los pueblos.

En la hora presente hay que tener en cuenta también el espíritu democrático de la constitución, que con la integración, hacen realidad el ideal unionista, sin menospreciar a la soberanía nacional. Por el contrario, salir en su defensa con ideas que —

responden a la realidad del mundo de hoy.

Aunque la integración llega a todos los ramos de la actividad jurídica, dada la experiencia histórica que nos legaron nuestros próceres y la propia realidad política, para evitar los tropiezos pasados, aconsejaron desarrollar prioritariamente los puntos en común, para que, ellos mismos, repercutan sobre todo en el campo social.

Con ello, no solo se consolidan los ideales democráticos -- sino que al mismo tiempo los pueblos hacen una vida mejor, más -- justa, colaborando a un fructífero entendimiento entre ellos.

En el mundo político de nuestros días, a Honduras le han llegado demasiado tarde las corrientes mundiales, debido a que dada nuestra peculiar idiosincrasia los grupos políticos, canalizados en los dos grandes partidos, más que nada se han interesado por -- la conquista del poder en el sentido maquiavélico del término.

Esto, ha hecho que, si en cuatro períodos se va a la cabeza en reformas e innovaciones al poder del Estado, en otros, por el contrario, se ha producido una gran concentración de poderes, que

a partir de la segunda "Guerra Mundial", se le suele llamar en el Istmo Centro-americano, "gobiernos fuertes". Los liberales en sí, sólo por el término, han ido progresivamente fortaleciendo el Eje cutivo.

En la vida institucional esto repercute debido a que la improvisación va a la par, en muchos casos con la concentración del poder. No obstante, la creación e internacionalización de las estructuras, hace más llevadero éste, que

10) Miskime Guetzevich denominó "racionalización del poder". (Les nouvelles tendances de Droit Constitutionnel", Paris, 1951, - cap. I).

El poder político en la esfera interna se consolida plenamente, así, con relación al exterior aportando sus propios logros, - para poder cumplir adecuadamente en todos los campos económicos y sociales.

La propia "Carta Magna", ha dejado la puerta abierta para un entendimiento, sin que se menoscabe la soberanía nacional, para - que no se repita la volcanización de los países del istmo, como -

sucedió en Honduras hasta 1932.

Si bien en ciertos logros se consolida la democracia en cualquiera de los países del istmo, y a corto plazo, repercute en los demás, se debe a la aproximación, en todos los niveles, entre los respectivos estados, y no a que, de forma unilateral, sea uno determinado el que los aporte, ya que por distintos caminos todos van a parar a un solo destino: la integración.

Pero, solo el de la legalidad constitucional, con el respeto a los derechos ciudadanos, y haciendo realidad la justicia en todo el sentido de la palabra, es el más idóneo y la base para conseguir un entendimiento recíproco, sin menospreciar la personalidad de cada pueblo ni su espíritu creador, para no caer en los errores del pasado.

El presente se tiene que hacer conociendo el pasado, para — que el futuro sea luminoso, para que dentro de la sociedad exista una originalidad, que haga que los propios pueblos se superen en conseguir mejores frutos, esto ha sido posible y fácil de captar en países pequeños, ya que la dinámica política trasciende más

a todos los niveles, que en las naciones de mayor cantidadde población, aunque más institucionalizadas y canalizadas en estructuras. También por tanto su experiencia debe ser tomada en cuenta, pero el remedio no puede ser igual para todas las personas, o para los Estados, a la hora de tratarlos.

Pero si lo es en cuanto al hombre se refiere, en cuanto a — sus relaciones colectivas, para una vida más digna, donde la libertad y la democracia sean el patrón común para todos los ciudadanos.

Esto es igual para los propios Estados dentro del istmo Centro-Americano, y por ello, en el articulado de la Constitución y — con carácter muy especial se atiende al factor económico, tratando de armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo, las relaciones internacionales, la educación dentro del mercado común y los problemas sociales y políticos dentro de la dogmática constitucional. Se aspira no sólo a garantizar, por la super-legalidad de sus normas, sino por su sentir, el patrimonio histórico de la patria y el camino para llegar a constituir la Patria grande.

El devenir histórico, a lo largo de toda la vida institucional, responde al sentir y pensar de los pueblos, a los cuales, la norma constitucional rige los destinos. No se pueden imponer a una generación, toda la vida fórmulas, que en otro siglo fueron - idóneas, sin que se afecte a la Constitución.

Las reformas que ha experimentado están de acuerdo en cada-periodo histórico, según las etapas por las cuales ha pasado la-vida institucional. Esto tiene singular importancia ya que desde el punto de vista del ordenamiento constitucional sigue en pie - el ideal integracionista, pero adecuado a las realidades de nuestra época, y al mismo tiempo, da la pauta al ordenamiento jurídico, para con base sólida, poder ir poco a poco fomentando el entendimiento y llegar a solidificar los vínculos integracionistas.

Con anterioridad, los fracasos no son más que, vistos desde el ángulo constitucional, experiencias que deben ser tenidas en - cuenta en el futuro, para responder de acuerdo con el espíritu que la norma constitucional nos manda, ya que está así prevista y sin

menoscabar en nada la soberanía nacional que por el contrario, se fortalece. Se responde en su defensa, de acuerdo con las necesidades de nuestro mundo de hoy, que van encaminadas hacia - el bien común del pueblo hondureño en particular y del istmo - Centro-americano en general.

Sólo la super-legalidad constitucional, bajo cuyo nombre - se protege la participación política activa de todos los miembros de la colectividad, llega a la constitucionalización de - los derechos sociales, a la extensión de la democracia, a la - tecnificación del poder. En ella, se lucha por consolidar un - futuro mejor, al mismo tiempo que cada una de las naciones del istmo de Centro-América fortalecen su soberanía.

En ese marco constitucional está la base más sólida para el entendimiento, y desarrollo de los pueblos sin perder su propia personalidad y dentro del proceso integracionista, al tocar prácticamente todos los campos de la actividad humana en los - sólidos principios plasmados en nuestra "Carta Magna" está la mejor garantía para una integración progresiva, así como el me-

dio más idóneo, para que la justicia social, o los derechos fun
damentales de las personas, sean tenidas en cuenta consiguiendo
con ello armonizar las experiencias con los demás pueblos de - -
América.

BIBLIOGRAFIA

- 1 - MAURICE DUVERGER: "Las instituciones políticas y el derecho Constitucional", pág. 187, 4ª edición, 1959.
- 2 - HAROLD J. L. ASKI: El estado moderno, pág. 352, Barcelona, 1932.
- 3 - CARL SCHITT: Teoría de la Constitución, pág. 4.
- 4 - A. ESMEIN: Elementos de Droit Constitutionnel Francais et comparé, 8ª ed. pág. 408.
- 5 - CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS de 3 de Junio de 1966, art. 9.
- 6 - J.J. CHEVALIER: Grandes textos políticos desde Maquiavelo, hasta nuestros dias. Pág. 178. Madrid. Aguilar, 1955.
- 7 - RAYMOND AREN: La paix et la guerre entre nations. Pág. 47.
- 8 - CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS de 3 de Junio de 1965, cap. IV, art. 39.
- 9 - ANDRES BELLO: Congreso Panamericano en Panamá reunido en 1844.

313.-

10 - MISKINE GUETZEVICH: Racionalización del poder (les nouvelles
tendances de Droit Constitutionnel. Paris, 1951, cap. I.

--oOo--

CAPITULO IX

~~XXXXXXXXXX~~

LA NACIONALIDAD Y LA INTEGRACION

CENTRO-AMERICANA

~~XX~~

Sociología de la nacionalidad.
Nacionalismo y supra-nacionalismo
Nacionalismo y Comunidad.
Federalismo y Supra-nacionalismo.

DESARROLLO

LA NACIONALIDAD Y LA INTEGRACION CENTRO-AMERICANA

La nacionalidad vincula a la persona de una forma determinada ya que, cada pueblo tiene unas características que le son propias, y que son como un legado que ha recibido la persona humana del pasado histórico, pero que, en la lucha de cada día, toma autenticidad dentro del Estado y hace que se acrisole con mayor solidez - la relación entre los hombres, puesto que al identificarse con-

su idioma, religión, costumbres y actitudes frente a la vida, son como un producto de su familia. Así, al participar de forma activa con el Estado en las diferentes etapas de su historia, toma conciencia de su destino histórico.

Las características similares que tienen los pueblos del istmo centro-americano al ser origen hispánico el punto de partida de su actual nacionalidad, una vez que han andado su propia vida pública, siguen conservándolos. Por ello, las nacionalidades de cada pueblo es el mejor camino para aunar los esfuerzos integracionistas, ya que están encaminados no sólo a garantizar la propia personalidad de los pertenecientes al istmo, sino que tratan al mismo tiempo de hacer un entendimiento fructífero entre las propias naciones.

Las organizaciones políticas pueden poseer algunos aspectos de la vida nacional (lenguaje, raza, religión, etapas de su historia, etc.) en común. En unos, la Comunidad no llega a perder su identidad. Es admisible que los súbditos de cualquiera de sus estados pueden llegar a adquirir la nacionalidad de otro estado, sin perder el vínculo primero. Los afectados por esto tienen la posi-

bilidad, una vez que establezcan contacto con otra de las nacionalidades comprendidas en dicho rango, de ostentar características comunes. El título nacional es propio de una permanencia real. El factor común de los pueblos del istmo, mantener la unión entre ellos, hace superar la imposible división del sujeto y da pie a nuevos rasgos comunitarios: proteger y regular la persona y la actuación de los individuos que forman la población de dichos pueblos.

Al mismo tiempo, cada Estado tiene su propia esfera interna, sacrosanta, que debe respetarse en sus asuntos domésticos y jurisdicción.

Se adquiere la nueva nacionalidad, una vez que se llenen los requisitos que cada nación establece en su propio ordenamiento jurídico y esa nacionalidad, tiene importancia trascendente a la hora de la integración, pues como fenómeno surgido para hacer frente a la realidad de nuestros días, trata de agrupar a los pueblos para que puedan hacer frente a realidades de todo tipo, cosa que ellos por sí solos no podían llevar a cabo. Pero sin perder su propia personalidad. Por el contrario, tratando de en-

contrar puntos comunes para consolidar los lazos que llevan a un entendimiento fructífero para todos.

En la nacionalidad una de estas condiciones es que capacita al sujeto para numerosos derechos y obligaciones. Otra cualidad, le concede un nuevo "status", entendiendo por tal la situación de una persona dentro de una comunidad jurídica. Además de la nacionalidad se considera "status" la condición familiar, profesional el sexo, etc. El término "status" se aplica, exclusivamente por un sector de la doctrina, a la situación del individuo dentro de una comunidad necesaria, familiar o nacional, en cuanto elemento personal de dicha organización, dotado de un ordenamiento particular. La capacidad del sujeto sin identificarse con él influye en la nacionalidad (1) ya que según Penna Marinho en "Tratado sobre la Nacionalidad" (1957, volumen I, página 40), "la nacionalidad es el lazo jurídico político que une al individuo a un Estado".

La base de la ordenación política del individuo al estar — identificado con unos caracteres sociológicos (psicológicos y materiales comunes) es la mejor garantía para el Estado, ya que tie

ne una estructura sólida nacional (Bourdeau: "Traite de Science Politique" Paris, 1943, Pág. 108) (2).

Lo más idóneo para un Estado es tener a la familia nacional unida lo más homogeneamente posible, ya que al estar identificados el pueblo y el gobierno no solo se consigue desarrollar una política propia sino que sus recursos se ven mejor garantizados al mismo tiempo que con ello se refuerza la tradición, depósito de valores patrios en la unidad centro-americana. Esto es compatible ya que no existe oposición entre presente y pasado. Lo único que se refuerza con ello es el alma de la nación, para dar lugar a la Patria grande que es Centro-América, siendo aún más fructífera si se consigue por un entendimiento claro y reflexivo de los diferentes Estados que la integran.

La nacionalidad, a lo largo de siglo y medio de vida independiente, no sólo ha tomado ya carta de naturaleza, sino que hay que garantizarla dentro de la realidad actual, siguiendo el camino de la tradición. El ordenamiento jurídico prevalece, sin que por ello se vean afectados los sagrados intereses de la Patria. Y tiene que estar garantizada, en cabal medida, la base física del

Estado, ya que como definición Mancini en la lección inaugural del curso de 1851 sobre "Derecho internacional y Marítimo" en la Universidad de Turin": "Nacionalidad es una sociedad natural del - hombre con una unidad territorial de común origen, de costumbres en lengua, con una comunidad de vida y de conciencia social". - (Pascuale Stanislao Mancini: "Dilla nationalité fomento del Diritto Di Genti", Milán 1851) (3).

La base de vinculación del individuo al Estado, por el hecho mismo de ser el hombre un ser social por naturaleza, tiene transcendencia política, por lo que el ordenamiento constitucional - de cada país centro-americano recoge en sus textos la nacionalidad, ampliándolo, pero solo ampliándolo en escasos artículos en lo que se refiere a las relaciones privadas de las persona en el Código Civil.

Esto es altamente significativo, pues con ello y siguiendo la definición de D. Federico de Castro y Bravo en "La legislación sobre la nacionalidad y el sentido nacional" (An. Asociación Francisco de Vitoria, VI, pág. 234) (4), el individuo participa en la vida de la nación con una garantía jurídico-política que -

el propio Estado establece y regula, ya que el individuo al ser - persona humana tiene en sí mismo, en su propio fuero interno, personalidad jurídica que el Estado reconoce. Pero mucho mayor alcance tiene la hora presente si se mira el gran movimiento de individuos de un país a otro, lo que no quiere decir que la esfera - misma de la nacionalidad se vea afectada en cada uno de los estados.

El Estado tiende a integrarse, a asegurar su propia actividad estableciendo dentro de su régimen interno, los requisitos condicionales que tiene que llenar para poder participar en la vida pública, al mismo tiempo que se garantizan los derechos, deberes y obligaciones, que contraigan dentro de su territorio, en igualdad de condiciones con relación a las nacionales, al igual que en los - demás estados del istmo centro-americano.

LA SOCIOLOGIA DEL NACIONALISMO

La persona humana, al pertenecer a una nación, encuentra en ella protegidos sus derechos, igual que se hace acreedora a obligaciones, las cuales, tiene una gran trascendencia en la vida comunitaria, no solo para llegar a cumplir una serie de aspiraciones y deseos, sino para desarrollarlos con ese dón maravilloso que Dios ha dado a sus criaturas: el espíritu creador.

Al agruparse los hombres bajo la protección de una bandera al pertenecer a una comunidad que tiene tradición, éstos viven todas las peripecias que la vida de la Patria tenga, haciéndose acreedores y siendo parte dinámica de los acontecimientos, ya que la nación constituye una comunidad de cultura por lo cual nos sentimos unidos a un grupo humano y separados del resto. Sus raíces psicológicas son tan profundas como las de la vida misma: la nación como fenómeno cultural está presente, desde el primer momento, en la existencia del individuo, pues, penetra en la estructura familiar, matizándola del modo más sensible, y prestando la parte sustancial de su contenido de cultura, desde el idioma y costumbres primarias, hasta las formas más sutiles del ca-

rácter y rasgos de expresión que, tenidos por individuales o domésticos, revelan un insospechado sello nacional, al ser comparado con el extranjero.

La nacionalidad, en relación con la integración centro-americana, se encuentra sólidamente reforzada al existir unas características regionales, que hacen que geográficamente, se encuentren los pueblos y enlazados, desde los comienzos y por tradiciones históricas. De estos avatares, se ha hecho eco la historia patria a lo largo de sus ciento cincuenta años de vida independiente, - de glorias y de desastres, por conseguir el ideal de la Patria grande. Dicha comunidad solo puede ser posible si se respeta y - al mismo tiempo, se alienta, todos los buenos que tiene el espíritu creador de los pueblos, ya que aquellos caracteres comunes - son compartibles dichos esfuerzos por la unidad del istmo.

Estas formas de nacionalismo político son las que hemos visto desarrollarse en muchos países y adquieren una explicación sociológica, a través del pensamiento del filósofo español Ortega y Gasset cuando sostiene que el poder creador de las naciones es un "quid dividum", un genio y un talento peculiar, como la música.

ca, poesía y la intención religiosa, que consite en saber querer y en saber mandar. Sostiene, además de este pensamiento que el es píritu de las naciones es obra de las minorías. Parece como si el esquema de la formación del espíritu de nuestras nacionalidades - hubiere tenido por musa el ideal capital de las mInorías selectas, cuando expresa que, dentro de cada grupo, ~~se~~ destacan ciertos individuos en quienes las cualidades propias del grupo aparecen - - acrisoladas; agrega, además, que una nación no podría nutrir sus- pensamientos históricas si estuviera atendiendo a un solo tipo de excelencia, acentuando que, hace falta junto a los eminentes sa- bios y artistas, el militar ejemplar, el industrial perfecto, el obrero modelo y aún el genial hombre de mundo. Finalmente, afirma su pensamiento diciendo que, para la formación de una nacionalidad se necesitan mujeres sensibles, y que la nación es una "empresa - gloriosa o humilde, el proyecto sugestivo de la vida en común". - (Ortega y Gasset". La rebelión de las masas". Pág. XIX, 7 y sig.) (5).

El hecho nacional centroamericano fué el que posibilitó por medio de sus minorías selectas la organización del estado como - instrumento realizador del estilo vital de cada uno de los pueblos.

Cada uno de ellos, viven su propia personalidad, que han ido forjando en la lucha, por consolidar la democracia en su propio - fuero.

Por eso, cuando perdemos el derecho a ser diferentes, hemos perdido el derecho a ser libres, ya que la unidad está en la iden tidad, en la historia y en la propia concepción de la vida (García Morente. "Ideas para una Filosofía de la Historia de España", 1941 (pág. 41,77). (6).

El nacionalismo impulsa al hombre en una comunidad a identi ficarse en la lucha de la defensa por la Patria, en cada uno de - los acontecimientos de la vida colectiva para que, con su esfuerzo y como un solo brazo, queda hacer realidad sus objetivos.

La participación popular se encuentra, quizá mucho más marca da, en aquellos países donde por su propia densidad de población - se participa de los asuntos de Estado a la orden del día. Pero no puede dejarse al margen aquellos datos altamente significativos que han existido desde la "polis" griega. En los pequeños estados es donde se plantean momentos y experiencias de la humanidad en su -

peregrinar por este mundo, y esto se debe en gran parte, a que la nacionalidad tiene a su vez un gran significado socio-político, ya que para afrontar una serie de problemas en un número reducido de población, los pueblos se sienten mucho más solitarios. Y hace que sus hombres, dejando a un lado sus diferencias ideológicas de intereses de todo tipo, sientan en su corazón el amor a la Patria, el cual se transmite de generación en generación, de padres a hijas, en pasado y presente, en la realidad de cada día. Por ello está siempre presente.

Así, los ideales de los próceres, la consigna de Morazán y Valle sigue presente en las generaciones de hondureños, que saben que el amor a la Patria es el camino más seguro para llegar a — formar esa otra Patria Grande que es Centro-América. Siempre que esté presente el respecto a los derechos de cada pueblo, todos juntos, unidos, armonizados por la justicia, pueden hacer realidad la integración.

La unidad sociológica, dentro de cada grupo nacional, dentro de la familia y de cada estado, es el mejor camino para que cada una de las comunidades nacionales, con pasos firmes, continúen su

marcha hacia el futuro. Sólo con la unidad monolítica de cada uno de los pueblos se pueden afrontar grandes empresas, pasar toda la suerte que la propia dinámica de los acontecimientos sociales imponga a cada una de sus habitantes, miembros de la comunidad, en sus diferentes etapas.

La unidad geográfica, también es un factor determinante en la vida de los pueblos. No solo en su acercamiento regional, sino también, en su forma de pensar, de sentir, en el carácter de sus habitantes. Esto se debe en gran parte al clima. Otra característica de los pueblos centro-americanos, al ser pueblos meridionales, es su similitud de comportamientos temperamentales — que hace que por su común origen hispánico, tengan cada uno su personalidad, pero al mismo tiempo tienen un tronco común, que les ha permitido identificarse con el acontecer histórico y encontrarse en la hora presente.

Para Littré, partiendo de la base sociológica, la nacionalidad está determinada por unos caracteres étnicos, comunes, ya — que su principio es el de la participación de una raza de hombres pendientes de construir de un cuerpo político.

Durkheim, en 1915, ha escrito que con la nacionalidad, como aquellos hombres, miembros de un grupo, determinado por razones étnicas o simplemente históricas, viven regulados por las mismas leyes y forman un mismo estado. Se pone de manifiesto la voluntad como factor determinante y como factor histórico. Esto se ve solidamente acrisolado cuando son pueblos, como los centroamericanos que tienen unos sentimientos religiosos idénticos, ya - que la profesión católica es la que profesan y al mismo tiempo - ha hecho que se identifiquen en el sentir y en el pensar.

El nacionalismo se encuentra reflejado en la cultura. En la escuela donde se aprenden las primeras letras, se fortalece el espíritu nacional, el amor a la Patria y se forman mejores ciudadanos. Al conocerse la cultura común y la idéntica civilización se da un paso adelante en el entendimiento de los pueblos. Askin, "Sociología de la Nacionalité", pág. 23) (7).

En la medida que los pueblos hispanoamericanos se encuentran a sí mismos, no solo se exalta los valores de la Patria, exponen te de nuestro temperamento, de nuestro paisaje y de la cultura común, sino que se fortalece la convivencia nacional haciendo -

que se encuentren nuevas fórmulas, sin que los pueblos pierdan su propia personalidad, para una vida auténticamente democrática. - (León Duguit: "Souveranité et liberté". Paris, 1926, pág. 68 y - del mismo autor "Traite de Droit Constitucional", 3ª ed. T.I. ed. p. 648, s.p. (8).

La soberanía, al residir en el propio pueblo, es una gran - fuerza que reside dentro de él, y, por tanto, una gran voluntad - en sí misma ya que se dá su propia forma de gobierno. Es, por eso, un fundamento socio-político, que ha permitido, dentro de su propia idiosincrasia, conservar su propio ser identificarse a si mismo, al decidir su propio destino.

NACIONALISMO Y SUPRANACIONALISMO.

La formación de la nacionalidad patria a través de todas sus vicisitudes históricas, es patrimonio común de todo el pueblo, que ha sabido escribirla con letras de oro. En el hacer de la historia nuestros próceres, por lo general hombres de acción, no tuvieron tiempo de dejar constancia, pero si dejaron su ejemplo de sacrificio y dignidad, como mejor ejemplo para dar por la Patria todo lo más noble que anida dentro de la persona humana y para que, como seres cristianos, podamos ser dignos de nuestros antepasados. Todo, siguiendo el pensamiento de Renan expresado en su libro "¿Qué es una nación?" y sintetizado así: "Tener glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente, haber hecho juntos grandes cosas, querer hacer otras más; he aquí las condiciones esenciales para hacer un pueblo... En el pasado, como herencia de la gloria y remordimiento, en el porvenir, un mismo programa que realizar. La existencia de la nación es un plebiscito cotidiano" Pi y Margall, en "Clásico de los Estudios Políticos" y como autor de las "Nacionalidades", pone de relieve la concepción nacional de este modo:

"La unidad en la variedad y no otra, es lo posible en la organización de las sociedades. La sociedad, después de todo, sería locura empeñarse en olvidarla, a pesar de las invasiones de la - mezcla de razas, de los esfuerzos por borrar diferencias entre - los pueblos, donde falta la adverdad, queda la de usos y costum- bres. Separa a todos los pueblos no solo de la naturaleza sino — también de la Historia".

Oswald Spenger, conocido autor de "La Decadencia de Occi- dente" otro de los teorizantes del espíritu de la nación, ha ex- presado.

"La nación está fundada sobre una idea. Estas corrientes de una existencia conjunta mantienen una profunda relación en su si no con el tiempo, con la historia; relación que, en cada caso — particular, es distinta, y determina también la del pueblo, raza, idioma, país, estado y religión. Una nación es la humanidad redu- cida a la fuerza viviente".

La personalidad de una nación se materializa en una serie de actitudes, de estilos, de formas de vida en común, que han si do heredadas a través de su propia civilización. Orientando su -

propia forma de pensar, de acuerdo a sus valores éticos, religiosos se logran unas peculiaridades propias, también que hacen, a su vez, a sus habitantes, portadores de la soberanía y que se identifique, con las demás comunidades hermanas sin que por ello pierdan su isiosincrasia (9). (Carré de Malberg: "Teoría General de Estado". Trad. Española. Lion Depetro. México, 1948, pág. 32). "El estado no es otro que la nación misma".

Por eso, el nacionalismo, al cimentarse de acuerdo con el alma de cada pueblo, una vez que está madurado y se tiene plena conciencia de ello, es el mejor vehículo para que encuentre la nación su propio destino histórico.

El nacionalismo y supranacionalismo del istmo-centro-americano no son más que, el haber superado, tras una serie de avatares que han pasado sus diferentes pueblos por caminos propios, - que han recorrido sin perder su propia autenticidad nacional. Se ponen de acuerdo con fórmulas más audaces conforme a la realidad presente, y de cada a ello, hacer frente al resto que plantea la vida moderna, pero, de acuerdo a nuestra tradición histórica. Es una fórmula de identificarse a si mismo, haciendo votos de autenticidad nacional.

Así, igual que la familia es la célula donde se forjan los mejores ciudadanos para la nación, en el supranacionalismo son los mejores hijos de la Patria los que, a través de una serie de avatares, tratan de conseguir una auténtica integración por caminos de equidad y justicia y por conseguir un mundo mejor para toda la colectividad nacional.

(10) Sir Alfred Zimmean: ("The Study of Int. Teli" (Pág. 8) - considera así que el estudio de las relaciones internacionales se ría prácticamente idéntico al estudio de la sociología en su mayor amplitud. La única diferencia sería el acento. La sociología hace hincapié en la unidad de la sociedad humana, mientras que, las relaciones internacionales, lo hacen en la diversidad de los distin tos grupos y en la necesidad de estudiar su intervención. Al irse forjando las relaciones entre los pueblos y dejarse al entendimiento el encontrar idénticas formas de sentir y pensar, junto a su - historia y origen común, deben de tenerse en cuenta esta paúta e ir paulatinamente, para evitar, como en el caso centroamericano - tropezar con la misma piedra otra vez. Por ello, en la unidad de cada uno de los estados, su espíritu cívico, es requisito indis-

pensable para llegar dentro de la Patria Grande a un entendimiento, que según Schwarzenberger: ("Poder político. "Fondo de Cultura económico, pág. 4) "las relaciones entre los grupos, entre los individuos, afectan a la sociedad internacional en cuanto a tal".

La experiencia aconseja, pues, que el mejor respaldo que - - puede encontrarse para armonizar las relaciones entre los mismos pueblos es identificarse con el alma patria, teniendo en cuenta - las realidades de cada momento histórico. La soberanía, al estar regulada por el ordenamiento constitucional como indivisible e - inalienable, el Estado Hondureño, en sus relaciones con los demás estados hermanos, haciéndose eco, de los poderes que la Constitución establece, trata dentro de ese marco, de encontrar de acuerdo con los demás, aquellas bases que tiendan a una integración en tre los diferentes pueblos del istmo. Para sólo dentro del respeto a los derechos de cada estado, de la forma que se considera - idónea para encontrar el camino y aquellos factores que sean comú nes, e ir dando paso a la realidad supranacional, que, al mismo tiempo, responde y esté, en relación interna, con la realidad social de cada Estado. Muchos de los fracasos que el entendimiento

entre los estados centro-americanos ha planteado, han sido sólo por el poder ejecutivo que tenía el presidente de turno, quedando sin vigor al cambiar de titular, a lo que se puede añadir la importancia, cada vez mayor que tiene el ejecutivo sobre los demás poderes. Pero el legislativo al hacerse portavoz de la opinión pública, en cuanto a la nacionalidad, ha querido regularla en la constitución política, poniendo una vez más de relieve la importancia de dicha materia, al mismo tiempo que, dentro del propio marco constitucional, se establecen las bases para garantizar la supranacionalidad de una manera justa y democrática, que asegura al pueblo una mayor participación en las diferentes facetas de la actividad humana.

Por esto, en la integración se va hacia interés nacional, - por fortalecer y perfeccionar aquellas actitudes que cada uno de los estados del istmo considera que deben fortalecerse a escala nacional, para poder mejorar hacer frente a las realidades que cada día se plantean, sin que por ello se vean afectados los vitales intereses de cada uno, ya que, como entidad soberana, - pueden denunciarla, si va contra el interés de alguno de ellos,

estableciéndose un procedimiento armónico con el derecho interno y externo de cada uno de los países de Centro-América.

Bertand de Jovenel ha dicho en una de sus obras que al — crearse unas nuevas funciones se crea un poder centralizador — que las ejecute, teniendo la voluntad de que ello redunde en — el bien común de las partes y que sea eficaz en su funcionamiento. Al crearse dentro del mercado común centroamericano, cualquier organismo lo que se busca es que responda a las necesidades de toda la comunidad, y no como beneficio de uno solo de los Estados miembros de dicha Asociación, ya que esto estaría en — contra de los propósitos y principios que les animan.

El nacionalismo, bien entendido en todo el sentido de la — palabra "es la base del ~~supra~~supranacionalismo" ya que se dá, por — supuesto, que solo la soberanía es la que puede tener una decisión. La constitución de cada país centroamericano establece — como se debe hacer la integración, ya que, en los 150 años de — vida independiente, se ha llegado a una madurez del nacionalismo para ir dando paso al supranacionalismo y ello, sin olvidar los errores que condujeron a la anarquía. Para ello, se debe —

dar interés especial al conocimiento humano de los pueblos evitando malos entendidos, al mismo tiempo que, se tratan de encontrar formas que respondan a las necesidades sociales de nuestros días, pero dinámicas y llenas de calor popular, para que la política a -
|
seguir llegue a forjar una auténtica democracia.

Al dejar los poderes burocráticos al margen de la realidad, lo único que se logra es que, los problemas que tiene cada país, en vez de solucionarse con la integración, traen su solución por el desconocimiento de las realidades de cada país. Por eso el nacionalismo no se opone al supranacionalismo. Todo lo contrario. Se complementa, porque el supranacionalismo tiene que informarse en aquel.

NACIONALISMO Y COMUNIDAD

Cada pueblo soberano debe decidir, en la forma que estime - conveniente sus asuntos internos, de acuerdo con las necesidades de cada momento y, por consiguiente, de las etapas por las que pasa su situación política.

El nacionalismo tiene que saber responder a la forma de ser de cada pueblo, armonizando todas las corrientes ideológicas que se planteen, en un momento determinado, en cada uno de los Estados, ya que, se aspira a unir a toda la familia nacional, por encima de los intereses partidistas, que puedan imperar en cada uno de ellos. Por eso, dentro de su seno, se presupone un cierto grado de eticidad, que será al mismo tiempo, el que le dará fuerza y cohesión para ser portavoz adecuado de cada pueblo.

Al tener cada uno de los Estados igualdad de Derecho, como - entidad soberana, sin predominio de ninguna de las partes, en pleno de igualdad, tratan de encontrar la integración y la fórmula que les permita una armonización de las respectivas políticas nacionales.

Por este camino, se trata de hallar también una auténtica Comunidad de pueblos libres, que hagan honra a su pasado histórico— Pero, el esfuerzo común de cada uno de los Estados tiene que es— tar íntimamente relacionado con cada uno de los otros, con las — realidades que predomine en cada etapa histórica, por lo cual tie— ne que tener la suficiente dinamicidad, que le permita adecuarse— a las realidades sociales imperantes y por las que pase el desa— rrollo de cada pueblo en un determinado momento histórico.

Por encima de todas estas cosas, están los intereses sobera— nos de cada pueblo dentro de la Comunidad, que aspiran a armonizar la política nacionales y a crear un clima idóneo que les permita— solucionar la situación de sus desarrollos, o fortalecer el conocimiento entre ellos, de tal forma, que desaparezca los malos en— tendidos o el nacionalismo chauvinista que conduciría solo al fra— caso de la Comunidad Internacional así creada.

(12) Don Luis Sánchez Agesta: ("El concepto de nación". Re— vista de Legislación, año LXXXVI, julio-agosto, 1941, núm. 1,2,2ª época, tomo II, 170, de la colección, pág. 543) al referirse al —

pensamiento de Donoso Cortés dice que el concepto de "nación" hay que buscarlo dentro de una teoría general de la Sociedad.

Su interpretación social se basa en la doctrina católica, de la solidaridad. Con ello quiere ofrecer Donoso una interpretación de las formas sociales, que comprende desde la Comunidad universal humana hasta la más restringida de las Comunidades naturales, la familia.

La solidaridad no es una teoría suelta para explicación del fenómeno social. Esta encuadrada en una concepción grandiosa, en un sugestivo intento de restablecer la ciencia política en la ciencia teológica. Dicha concepción tiene su base en una consideración de la nación como forma social histórica.

La idea de Donoso considera "si no hay un vínculo de unión - entre los tiempos pasados, los tiempos presentes y los futuros, lo que se deduce es que el hombre no vive sino en el momento presente, pero esta separación está claro que es más bien fenomenal que real. Si no vivo en el pasado, porque pasó y porque no hay unidad entre lo presente y lo pasado; sino vivo en el futuro porque el futuro no es, y cuando voy a afirmar su existencia ya es pasado, resulta

que mi existencia es más bien teoría que práctica, porque en la realidad, sino vivo en los tiempos, no existe en tiempo ninguno. Yo no concibo el tiempo si no entre formas reunidas y no puedo - concebirlo cuando lo separo. ¿Qué es el pasado, si no una cosa - que no es ya? ¿Qué es el futuro, si no es una cosa que existe to davía? ¿Y quién detiene, sino una cosa que existe todavía? ¿Quien detiene lo presente el tiempo necesario para afirmarle, después de haber sabido de lo futuro y antes de convertirse en lo pasado?

Luego, Donoso afirma la existencia del hombre, niega la unidad de los tiempos, especula y tiene fin en el punto matemático (13) (Donoso Cortés: "Ensayos sobre catolicismo, liberalismo y - socialismo" (Obras 1903, vol. 1º, pág. 46 y sig. "Consideraciones sobre la Diplomacia" Escritos escogidos, pág. 16 y sig. Tomo I, editado por Solas).

Donoso pone de relieve el principio de identidad, y asegura que hay comunidad de méritos y desméritos, de glorias y desastres de talentos y actitudes entre las generaciones pasadas y las presentes, entre las presentes y las futuras.

El nacionalismo en cada país representa la idiosincrasia de

una nación. En el caso de Centro-América, cada uno de los países ha madurado tanto originalidad a la propia vivencia histórica na
cionalista.

Al tener caracteres propios los países son diferentes; al -
ser diferentes, son libres para elegir sus propios destinos. Al
mismo tiempo, al encontrarse en la historia es porque la historia
los unifica, ya que tienen un pasado común, unos mismos vínculos
de tradición y costumbres, de raza y de idioma, etc. Esto hace -
que al tomar conciencia de ello, se fortalezcan las relaciones y
se refuercen de tal forma, que se llegue a un mejor conocimiento
mútuo, forjando un auténtico espíritu comunitario. Son los pro-
pios pueblos los que escriben su historia. Por eso no se pueden -
descuidar todos aquellos elementos socio-económicos que quieren -
consolidar los lazos de la unidad. Los caracteres comunes del --
azar, son un hecho real, que está en la esencia misma de la pa-
tria.

(14) Rafael Heliodoro Valle ("Historia de las Ideas contem-
poráneas en Centro-América". Fondo de Cultura, México, 1960, pág.
146) dice que es posible que el estado español puede llegar a ser

uno de los más importantes elementos de amalgamación de los cinco países.

La O.D.E.C.A. (Organización de estos Centro-Americanos) constituye en nuestro tiempo uno de los lazos más positivos dentro de la integración centro-americana, ya que, al tratar de llegar a un acercamiento, por medio del diálogo constructivo de los países - del istmo centro americano, no solo sigue fiel a los postulados - establecidos por nuestros próceres, sino que al mismo tiempo, hace realidad el ideal unionista, siendo de interés excepcional para todos los pueblos hispanoamericanos, dentro y fuera del istmo.

Dentro del espíritu comunitario que anima a la integración - al estar encaminada a la unión de los países centro-americanos, - es un capítulo fundamental en el camino a recorrer para llegar — a aquel fin.

Por eso debe de llegar su actividad al pueblo de cada uno de los países, para que se conozcan mejor, tratando en lo posible, de evitar que se burocratice anacrónicamente. Debe orientarse, en todo lo posible, a los diferentes gobiernos para armonizar y conseguir un diálogo práctico y profundo en aras del espíritu comunitario.

La integración está dirigida a un plano regional, ya que es ahí donde la nacionalidad de los pueblos que forman Centro-América por su común origen histórico, se puede hacer realidad aportando soluciones que respondan a las necesidades del mundo de hoy.

Si bien el territorio y las facilidades de los medios de comunicación unidos a los progresos de la ciencia y de la técnica en el mundo de hoy, favorecen para un entendimiento. La vía que redime a los pueblos de la ignorancia, del hambre y del subdesarrollo es el trabajo en equipo. Hombres de buena voluntad, hombres libres, que luchan por gozar con su trabajo un mundo mejor incluso más allá de las fronteras nacionales. Solo la solidaridad creada sobre bases sólidas puede crear una comunidad capaz de marchar con paso firme y seguro hacia el futuro.

Las nobles causas no se han hecho realidades de un día para otro. Es el paso del tiempo quien las ha hecho madurar y la razón es la mente de los hombres, unida a su inteligencia, quien ha sido la mejor defensa de la democracia.

La comunidad es una gran aliada del nacionalismo, si esta responde al pensar y sentir de cada país soberano. En el caso de-

Centro-América hay que ir tejiendo poco a poco los hilos que pongan en contacto directo a los pueblos, ya que en la sociedad de masas se espira a una participación de todos ellos, para darle calor humano a las instituciones, y que sean la mejor garantía para la salvaguarda de la soberanía nacional. Todo ello, sin que se vea disminuida su esfera dentro de la jurisdicción de cada Estado, ya que, un adecuado conocimiento de los pueblos de la Comunidad, así como la flexibilidad de las insituciones, la permite adaptarse a la dinámica de la vida política sin que por ello pierda el ritmo que conduce a la integracion de la Patria Grande.

FEDERALISMO Y SUPRANACIONALISMO.

El hombre en todas las sociedades humanas está influido por unas ideas que responden a una época histórica, a una realidad social.

Al producirse la independencia de Centro-América, el pensamiento que anima a los próceres, es, genuinamente, liberal. Y el Federalismo es un principio también liberal. Por ello, fue tomado como una fórmula idónea para aplicarse en Centro-América.

Sin tener en cuenta la tradición o el grado de preparación - en que se encontraba el pueblo en esa época, hace suyo el principio federal que tan buenos logros había dado en los Estados Unidos, donde, a diferencia de Centro-América, existían unas comunidades anglosajonas que laboraban de acuerdo a sus respectivos credos religiosos y armonizando las diferentes creencias religiosas, de los diversos Estados. Nada podía ser más tentador para nuestros hombres de leyes, que se limitaron a copiar aquello. Fue quizá uno de los mayores errores que pudieron cometer nuestros legisladores, ya que no se tomaron la molestia de conocer la realidad-

en que se iban a practicar aquellos principios, quizá teniendo en cuenta que la independencia centro-americana se realizó de forma pacífica, por ser pueblos católicos que teniendo idénticas costumbres.

El pensamiento que hizo realidad a la Revolución Francesa y con ella, la declaración de los derechos del Hombre, llegó a Centro-América al mismo tiempo que se tenían noticias por la prensa, de los acontecimientos que estaban acaeciendo en los EE.UU. Bien pronto se noto la formación de los partidos conservadores y liberales.

Se pretendió por medio del Federalismo, garantizar la participación del pueblo en el poder político, y desvincularlo al poder fuertemente concentrado, ya que creían que podían garantizar mejor las ideas de igualdad, libertad y fraternidad. Todo ello, sin tener en cuenta la madurez política del pueblo en aquel momento.

José Cecilio del Valle dice: "El entusiasmo del patriotismo -no quiero pensar en la humildad de nuestras actividades"- voló a un bello, a un hermoso e imaginario, a un perfecto ideal. Del mis

mo modo salió el decreto que arobó las tertulias patrióticas en los pueblos más estúpidos de indígenas, para que en ellas se - discutiesen los principios políticos de las naciones más ilustradas de Europa, salió también la Constitución de la Capitanía General de Guatemala. Creó una República Federal y cinco estados soberanos, un Congreso y cinco Asambleas, la Legislatura, un Senado y cinco consejeros de Estado, un Presidente de la República y un Vicepresidente, una Corte Suprema y cinco Cortes Supiores de Justicia, 21 Secretarías para todas estas autoridades y la multitud de funcionarios que exigían seis Gobiernos Supremos- establecidos en una sola República" (15) (Julio Icaza Tejerino: "Sociología de la política hispanoamericana", pág. 241).

El Estado Federal cuesta a Centro-América mares de sangre, quince años de guerra fratricida, y, al terminar la deja dividida en cinco miserables Repúblicas, débiles, política y económicamente y divididas, internamente, en bandos irreconciliables,- que traerían sobre su historia males sin cuento, producto de la anarquía de las luchas y de la intervención de imperialismos extranjeros que las aprovechan para sus fines de conquista y explotación.

Carlos Pereira, en su "Breve Historia de América" ha sintetizado en pocas palabras el fracaso del Federalismo Centro-Americano: "El problema planteado por el sistema Federal era insoluble de todo punto. Consistía en sostener un cacique máximo sobre los hombres agitados de cinco caciques provinciales. Como el "sumo imperante", debía salir necesariamente de alguna de las Provincias - unidas, esta tenía, por todo lo tanto, que entrar en lucha contra las otras para sostenerle. El hecho por otra parte de que Guatemala, fuera centro de la Federación y Provincia Independiente, creaba en su seno, una dualidad caciquil extraordinariamente peligrosa. El cacique máximo tendría como enemigo al cacique local, y así - fué. Los acontecimientos se encargaron de patentizar lo absurdo del sistema".

En el Federalismo se vió la solución de todos los males de Centro-América, pero, la verdad, fué que condujo a la anarquía - interna y externa entre los Estados.

Debe de tenerse en cuenta que aún pasados cinco años de vida independiente, todavía se aspira llegar a la unión por medio del - sistema federal. Con relación a la nacionalidad se ha mantenido -

el criterio de una nacionalidad común, a pesar de todos los cambios que ha habido, como meta para llegar a esa unión. El federalismo es mirado con buenos ojos por los amantes de la democracia en los diferentes países centroamericanos. Admiran en él, una forma idónea de proteger los derechos individuales y la libertad, al mismo tiempo, que ven como ha sido recogido este principio, especialmente en Méjico y en EE.UU. así como en otros países de América.

Pero, la propia geopolítica de Centro-América, al estar bañada por dos océanos, entre mares y por tanto, fácil acceso para las influencias exteriores de todo tipo; la dificultad de las vías de comunicación entre los mismos países del istmo en el momento de la independencia, los conflictos de jurisdicciones que se plantearon internamente entre los Estados al crearse la Federación, hacen, por otra parte, que los ánimos más serenos miren en el Estado Federal con cierta desconfianza, dada la inmadurez para aplicar este sistema.

(16) Angel Zúñiga Huete: "Morazán", pág. 320, Editorial Botas, México), dice: "El paladín de la Federación Francisco Morazán que con su espada hizo todo lo posible para sostener ésta, una vez

que regresó a Costa Rica para intentar hacer realidad la misma, al desembarcar de su exilio en 1839, anunció al Centralismo o nacionalismo según se diga, como aglutinante de la entidad que meditaba reconstruir en concepto de caudillo. La República unitaria y un gobierno central fuerte, liberal y social, era una necesidad imperiosa en aquel momento histórico, para mantener la cohesión el orden en la frontera y el respeto y la consideración del exterior. Al haberse consolidado muy pronto el principio de la nacionalidad, que lleva a compartir la soberanía con los demás países del istmo, quizá llevados por el apasionamiento político e interesante de todo tipo, la Federación llega a lo más hondo del alma patria". Al pasar un siglo de haberse realizado la independencia, y, a lo largo de este período histórico, después de una serie de peripecias de todo tipo, siempre han existido partidarios en favor del Federalismo, sin tener en cuenta todo el camino andado y la realidad histórica del nacionalismo latente en cada Estado.

Se pretendió que el 15 de septiembre de 1921 era la fecha idónea para realizar la unión de Centro-América. Para ello se realizó una intensa campaña a su favor en todos los niveles. Contando con el apoyo de todos los sectores sociales y teniendo, al mis

mo tiempo, buena acogida por parte de los gobiernos de los diferentes países, el 24 de junio de 1920, el gobierno de El Salvador, dirigió un telegrama cablegráfico a los de las demás Repúblicas, proponiendo realizar una conferencia de plenipotenciarios que deberían reunirse al 15 de septiembre siguiente. En otro mensaje posterior, la Cancillería salvadoreña expresaba su deseo de establecer la Patria grande, como homenaje a los próceres centroamericanos, para lo cual debían celebrar, en pie de igualdad, las cinco Repúblicas. Se señaló la fecha del 1 de diciembre de 1920 y la ciudad de San José de Costa Rica, como sede de la conferencia. El 30 de Octubre de ese mismo año, la Cancillería de El Salvador participó a la Oficina Internacional que, atendiendo a las sugerencias de importantes Asociaciones Unionistas de su país, proponía se limitará el programa a los puntos siguientes:

1º.- Tratado de Unión centroamericano.

2º.- Caso de no ser posible llevar a cabo la unión de los 5 estados, que se pactara ésta entre los Estados que no tuvieron inconveniente en suscribir el nuevo Convenio.

Para ello, se reúnen los ministros plenipotenciarios al 19

de enero de 1921, siendo representante por Guatemala, Don Salvador Fayó, por la república de El Salvador, Reyes Anita Rossi por Honduras, D. Alberto Uclés, por parte de Costa Rica, Licenciado D. Alejandro Quirós, y por parte de Nicaragua D. Ramón Castillo.

Se estipula en el preámbulo de la Conferencia o del Pacto que el establecimiento de la República de Centroamérica constituye un deber patriótico para todos los centroamericanos. Consta además de 21 artículos que los autores acostumbran a distribuir entre grupos, pero de los cuales, a nosotros sólo nos interesan algunos de ellos.

Las rectificaciones deberían ser inmediatamente notificadas a la Oficina Internacional Centroamericana (art.21).

El cumplimiento del Pacto instituyó, desde luego, un Consejo Provisional compuesto de un Delegado por cada Estado. La Asamblea Nacional Constituyente se componía de cuatro delegados por cada uno de los Estados elegidos por el respectivo Congreso, al mismo tiempo que su delegado Consejero provisional; el "quorum" de la Asamblea lo formarían las 3/5 partes de los diputados. Las votaciones se harían por los Estados y si hubiera divergencia de vo-

tos entre los Diputados de un Estado, se tendría como voto de un Estado el de la mayoría de los Diputados. En caso de empate, el que estuviera de acuerdo con la mayoría de votos de los otros Estados. Y si entre estos hubiera, así mismo empate, el que fuera conforme con la mayoría de votos personales de diputados. Las decisiones de la Asamblea se tomarían por la mayoría de los Estados (art. 7).

El día 13 de junio de 1921 se instaló en Tegucigalpa el Consejo Federal Provisional integrado por los Estados que habían -- aprobado el Pacto. En Tegucigalpa se inauguraron las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente el día 20 de Julio, y así pudo promulgar la Constitución Federal de 9 de septiembre de 1921.

El Gobierno nicaraguense mostró ciertas reservas, en relación al pacto de Unión. No obstante se logró muy hábilmente, superar éstas. Atentamente significativo es el discurso pronunciado por el ministro plenipotenciario D. Alberto Uclés que, entre -- otras cosas, dijo: "La Unión no se había hecho porque no ha habido cinco gobernantes que quieran hacerla. Los pueblos no se -- oponen, como he tenido ocasión de decir... ¿Por qué no se ha hecho

la unión? Hay que decirlo con franqueza: los pueblos quieren la unión, los que no la quieren son los gobernantes porque no quieren mermar sus facultades. No se hace por falta de patriotismo - de las clases directivas. De modo que todos los aplazamientos no entrañan más que dificultar la unión, que pudo haber sido hecha en 1839... La cuestión de los preparativos creo que son sofismas demasiado preparados. Tampoco los estábamos para la Independencia de Centroamérica y en una hora se hizo... Si somos unionistas, - vamos a la Unión. Si no somos unionistas, hay que decirlo claro. El secreto está en que no queremos bajar del poder los que estamos en él, y en que, los que quieren subir quieren encontrarlo - entero... Es el feudalismo crudo" (17) (Del libro de Salvador - Mendieta", *Alrededor del problema unionista de Centroamérica*", - tomo II, pág. 133-138).

El golpe de estado que derrocó al Presidente de Guatemala - el 3 de diciembre de 1921, fué realizado por tres generales. Dicho triunvirato que derribó a un gobierno elegido constitucionalmente, desde el principio se pronunció en contra del pacto de la Unión, lo cual dió como resultado que al reitrar su representan-

te de jaran sin vigor dicho Pacto. La experiencia que tiene el - pueblo centro-americano, es que, como resultado de los proyectos de Federación, una de las más nobles causas, solo ha encontrado conflictos de todo tipo, debido al maquiavelismo, el manejo de - intereses imperialistas o ambiciones personales de todo tipo, que solo buscan una forma de perpetuarse en el poder.

La diferencia que existe entre el federalismo y el supranacionalismo, es que, al primero, al estar completamente politizado lleva consigo los problemas que internamente se plantean los Estados, insmicuyéndose en ellos y articulando la reacción de uno - con la reaccion de otros. En cambio, el supra-nacionalismo, al ser más reciente, ha superado este problema, y trata de encontrar los elementos que son comunes, para integrarlos, formando con ello una conciencia común y sólida, con objeto de que los propios pueblos superen las diferencias o malos entendidos que pueda haber.

Lo que ha actuado negativamente en contra de la integración es el pretender que, de un plumazo, se puede arreglar todo, sin - haber puesto las bases que hagan que perdure toda la estructura del edificio construido. Por ello, lo que se tiene que hacer, se

debe ir haciendo poco a poco (18) (Rudolf Stamler: "Doctrina moderna sobre el derecho y el Estado, Pág. 175, Compañía General - Editora, México). Todo concepto económico supone ciertas instituciones jurídicas, con cuya supresión desaparecería aquél inevitablemente. En cambio, no sucede lo mismo a la inversa: En esta cantidad de derechos, la fórmula (modalidad lógica condicionante) es la presentación y la economía, la materia (pensamiento lógicamente condicionado en la cooperación de la vida social del hombre). Ambas están contenidas en el concepto de cooperación y aparecen por sí mismas y simultáneamente. Pero se encuentran desde el punto de vista lógico, en relación jerárquica arriba mencionado.

En el caso de Centro-América, como antes ha dicho, el supranacionalismo aparece como la fórmula para lograr la unidad centroamericana. En su primera época, fué posible hacerlo realidad; lo que ya no podía ser el consolidarse los respectivos gobiernos en cada una de las Repúblicas. Una vez que se han sentado las bases del nacionalismo, el camino para hacer realidad la integración es el supranacionalismo, contando con las nacionalidades establecidas, para de esta forma, no tener los obstáculos que, a lo largo - de cincuenta años de vida independiente, se han planteado.

La supranacionalidad responde a una realidad del mundo de hoy. Tiende a conseguir realizaciones de actividades orientadas al bien común de las comunidades nacionales, a las que ellas mismas, por su propio impulso natural, no podrían hacer frente, mientras que si pueden si actúan coordinando sus políticas, lo que da como resultado una administración más eficaz.

Con ello, está en armonía el nacionalismo de cada uno de los Estados ya que, al no tratar de reestructurar el poder, actúa más científicamente, con menos apasionamiento político que el Federalismo, y es por medio de los logros que en la práctica se realizan, como se llega a la realidad social de cada Estado. Así el pueblo de un país determinado se siente solidario del otro país, encontrándose en ambos idénticos intereses y aspiraciones.

BIBLIOGRAFIA

- 1 - PENNA MARINHO: "Tratado sobre la Nacionalidad", 1957, Vol. I, pág. 40.
- 2 - BURDEAU: "Traité de Science Politique", Paris, 1953, pág. 108.
- 3 - PASCUALE STANISLAO MANCINI: "Dilla nacionalité fomento del Diritto de genti", Milán 1851.
- 4 - FEDERICO DE CASTRO: "La legislación sobre la nacionalidad y el sentido nacional". An. Asoc. Francisco de Vitoria, VI, pág. 234.
- 5 - ORTEGA Y GASSET: "La rebelión de las masas", P. XIX, 7 y 55.
- 6 - GARCIA MORANTE: "Ideas para una filosofía de la Historia de España", 1942, Pág. 41-77.
- 7 - ASKIN: "Sociología de la Nacionalidad", pág. 23.
- 8 - LEON DUGUIT: "Souveranité et liberté", Paris, 1926, pág. 68, y del mismo autor: "Traite de Droit Constitutionnel", 3º id. T., 1º. Pág. 648 y sig.

- 9 - CARRE DE MALBERG: "Teoría general del Estado", trad. española, León Dipetra, México, 1948, pág. 32..
- 10 - SIR ALFRED ZIMMEAN: "The Study of Int. Rli", cit. pág. 8.
- 11 - SCHAWARZENBERGER: "Poder político", Fondo de Cultura económica, pág. 4..
- 12 - D. LUIS SANCHEZ AGESTA: "El concepto de Nacionalidad", "Revista de Legislación y Jurisprudencia", Año LXXXVI, Julio-Agosto 1941, nº 1-2, segunda época, tomo II, 170, de la edición, pag.543.
- 13 - DONOSO CORTES: "Ensayo sobre el catolicismo, liberalismo y el socialismo". (Obras 1903, vol. I, pág. 1655) "Consideraciones sobre la diplomacia". Escritos escogidos, tomo I, pág. 16 y sig. Ed. Solas).
- 14 - RAFAEL HELIODORO VALLE: "Historia de las Ideas contemporáneas en Centro-América. Fondo de Cultura de México, 1960, pág. 146..
- 15 - JULIO ICAZA TEJERINO: Sociología de la política hispanoamericana", pág. 241.
- 16 - ANGEL ZUÑIGA HUETE: "Morazán", pág. 320. Editorial Botas. México..

360.-

- 17 - SALVADOR MENDIETA: "Alrededor del problema unionista de Centro-América", tomo II, pág. 133 y sig.
- 18 - RUDOLF STAMLER: "Doctrina moderna sobre el Derecho y el Estado", pág. 175. Compañía General Editora, México.

B I B L I O G R A F I A

=====

AZBRON, CHARLES: Que sais je? "L'Amerique Centrale.

ALEJANDRO MAURE: Bosquejo de las Revoluciones de Centro-américa.

A. RON y OTROS: Las ideologías y sus aplicaciones en el siglo XX.

AGUSTIN C. COELLO: Anotaciones sobre la Constitución de Honduras.

ARCAYA, D.M. Memorias.

ALBA, V.: Esquema histórico del movimiento obrero en América Latina.

ANUNATEGUI, COBRIL: "Manual del Derecho Constitucional". Edit.

Jurídica. Santiago de Chile, 1950.

MIGUEL ANGEL ASTURIAS: Obras Completas, editorial Aguilar, 1968.

ARGUELLES, AGUSTIN: Exámen de la Reforma constitucional, Londres, 1835.

AZKIN, BENJAMIN: Estado y Nación.

ROYMON ANON: "La science politique contemporaine"

LORD ACTON: "Ensayo sobre la Nacionalidad.

AKSIN: La Sociología de la nacionalite.

BETETA RODRIGUEZ: Ideología de la Independencia, París, 1926.

MARIO HERNANDEZ SANCHEZ BARBA: Una generación de Intelectuales ante el futuro político de Hispanoamérica: (1902) Rev. Estudios Políticos, nº 111.

MIGUEL PAZ BARAHONA: Estamos enfermos de teorías, manifiesto al pueblo hondureño, aparecido en la Gaceta, Tegucigalpa 16-2-1925.

BOARTH, HANS. Verdad e ideología (Fondo Cultura Económica, 1951)

BORKENAUT, F. Pareto (F.C.E. 1941).

BALLESTEROS: "Historia de América".

BARENTS JOÁN: "La democracia en los países subdesarrollados".

MARIO BERMASHIANA: G. "Manual de Derecho Constitucional" Editorial Jurídica, Santiago de Chile, 1948.

MARIO HERNANDEZ SANCHEZ BARBA: "El movimiento ideológico hispanoamericano".

JOSEPH BARTHELEMY: "Pricis de Droit" constitutional, 4ª ed. Librairie Pasloz, París, 1948.

BURDEAU, GEORGES: "Curs de Droit constitutionnel" Edit. Librairie Generale de Droit y de Jurisprudence, París, 1943.
Le pouvoir politique et l'Etat".

RAFAEL BIELSA: "Derecho constitucional", 3ª edición, Editorial Roque, de Palma, Buenos Aires 1959.

JUAN N. BURCHES: Ciencia política y Derecho constitucional comparado". Ed. La España Moderna, Madrid.

JAMES BRYCE: Constituciones flexibles y constituciones rígidas". Instituto Estudios Políticos. Colección Civitas, Madrid, 1952.

JUAN BENEYTO: Historia de las doctrinas económicas. Ed. Aguilar, 3ª edición, Madrid, 1948.

CRANE BRITON: Anatomía de la Revolución. Ed. Aguilar, Madrid, 1958.

BOLA BASSA: Teoría de la integración económica. Ed. Uteha.

JOHN BOWRING: The works of Jeromy Bentham, Edimburgh 1843.

BUSTILLO PEDRO J. "Honduras".

BETETÉ: "Morazán y la Federación".

JOSE ANGEL BOBADILLA: "El Transporte en Honduras". Consejo Nacional de Economía". Tegucigalpa.

POLICARPO BONILLA: "La Unión centroamericana".

ANTONIO BATRES EUREGUI: "La América Central ante la Historia".

C. G. BROWMENY T.S. KOEN: "El estudio del liderazgo".

Z. BERBU: "Psicología de la democracia y de la dictadura".

ROBERT BARDY: "La riqueza tras el poder", México 1945.

FRANCISCO BETANCOURTH ARISTEGUI: "Nacionalizas, naturalización y ciudadanía hispanoamericana".

BAUCHER: *Traté de depolitique et de science Sociales.*

BERGER Y OTROS: "El Federalismo".

JUAN BENEYTO: *Historia social de España y de América.*

BERNARD BAUBER: *Estratificación social.*

CERECEDA, RAUL: "Las instituciones políticas de América Latina",
Preburgo, Bogotá, 1964.

CASTRO A. "Iberoamérica".

CASTRO J. *Geopolítica del Hombre.*

CRUZ E. RAMON: *El individuo ante las jurisdicciones internacionales. Boletín del Instituto Centroamericano de Derecho comprado*, núm. 1 y 2. Pág. 31. Facultad de Derecho, Tegucigalpa,-
Honduras.

CRUZ, RENE: "Las sociedades anónimas en el moderno Código de Comercio que tendrá Honduras". (Boletín del Comercio e Industria, núm. 2 pág. 17).

CASTRO S. CATANGA: "Honduras en la primera centuria 1821 a 1921".
Tipografías y grabados nacionales, Tegucigalpa, Honduras, 1921.

CARD SCHMITT: *Teoría de la Constitución* Trad. de F.C.O. de Ayala.
Ed. Revista de Derecho Privado. Madrid, 1934.

"La defensa de la Constitución".

- JOSE CARDONA: "Convención unionista de Santana", San José, 1921.
- ALBERTO LLERAS CAMARGO: "Toward centroamerican Unión" América IV, April, 1951.
- CECIL JANE: "Libertad y despotismo en América hispánica". Buenos Aires, 1942.
- FEDERICO DE CASTRO: "La ciudadanía común".
- FERMIN PRIETO CASTRO: "La nacionalidad múltiple".
- CECIL VINCENT: "Honduras a problem in Economic development" New York.
- CAS TAN COBEÑAS: Horizontes actuales de la unificación supranacionalidad del Derecho.
- CARRE DE MALBERG: Teoría General del Estado.
- ARMAND CUVILLIER: "Manual de sociología".
- MAURICE DUBERGER: "Derecho constitucional y ciencia política".
- L. DUGUIT: "Manual de derecho constitucional", Editado por Fco. Beltrán, Madrid, 1926.
- ROMULO E. DURON: Noticias históricas en la obra de José Cecilio - del Valle, Tomo I, Estudios Políticos, Tegucigalpa, 1906.
- JORGE FIDEL DURON: Bosquejo histórico de Honduras". "Historia de Honduras".
- "Ultimos días de Morazán".

- DURON, ROMULO: "Los gobernantes de Honduras".
- DURON Y VENTOSA, LUIS: "La esencia del naturalismo".
- HENRY DRATOVA: Diccionario de sociología.
- DUGUIT: Soberanía y libertad.
- ESTRADA, RAFAEL: "Como los comerciantes extranjeros abusan de nues
tra soberanía".
- EVANS J.H.: "The ideal of nacionales latin american".
- A. ESMEIN: Elementos de derecho Constitucional.
- FACIO RODRIGO: "Trayectoria y crisis de la Federación Centroameri-
cana". "Planificación económica y régimen democrático".
- FERRETER CALVETO: "Politica nacionalista" II Forum Sindical inter-
americano sobre problemas económicos y sociales.
- "Los partidos políticos y las organizaciones obreras en la -
integración centroa-mericana. (U.N.A.N.) México.
- JUAN NEPOMUCENO FERNANDEZ LINDO: Abogado de la Excm^a. Audiencia Im-
perial de México y Jefe Supremo Político de la provincia de
Honduras, suscribe en dicha ciudad un manifiesto (Manifesta-
ciones de un pueblo libre).
- FRAGA IRIBARNE, MANUEL: "Sociedad política y gobierno en Hispanoau
mérica.

- FURTADO, CELSO: "Dialéctica del desarrollo" (F.C.E.)
- FRAGA IRIBARNE, MANUEL: "El método de la teoría del Estado, en la teoría del derecho constitucional. Una interpretación sociológica. Pág. 59 y sig.
- GEORGES O. FISEBACH: "Derecho político general y constitucional - comparado". "Teoría general del Estado".
- FERNANDEZ GUARDIOLA, RICARDO: "Morazán y Costa Rica".
- MARY P. HOLLERAN: "Church and state in Guatemala, New York, 1949.
- HARS BOARTH: "Verdad e ideología" F.C.E. 1951.
- HERRERO VICENTE: Organización constitucional iberoamericana.
- HOYOS: "The historical evolution of moderns nationalism"
- HOVELAQUE: "Langues, races nationalites. Ed. Leceaux, Paris.
- HAUSER: "Le principes de nationalités".
- HANS FREYER: Introducción a la sociología.
- FRANCISCO MARIA IGLESIAS: Pro Patria.
- GARCIA, ENRIQUE: "Ensayo geopolítico de Centroamérica".
- GARCIA V. "América, hoy".
- MANUEL GARCIA PELYO: "Derecho constitucional comparado" 3ª ed. Revista de Occidente, Madrid, 1950.
- GIUSSEPPE D'EUGEMIA: "Le Costituzione", Roma, 1944.

RICARDO GALLARDO: Las Constituciones de las Repúblicas Federal -
centroamericana".

"Derecho constitucional comparado".

GURBISCH: Elementos de sociología.

La idea del derecho Social.

GARCIA PERCHER, ROBERTO: Los dominios americanos y su relación con
la Junta Suprema.

R.W. GOLBER: Estructura financiera y crédito.

GARCIA MORANTE: "Los orígenes del nacionalismo español".

G. JELLINECK: Teoría del Estado, Barcelona 1934.

BERTRAND DE JOUVENEL: El Poder.

KLINEBERG, OTTO: "Raza y psicología".

HANS KELSEN: "Teoría pura del Derecho".

MANUEL KANT: "Ensayo de la paz perpetua".

LAMBERT, JACQUES: "América latina: estructuras sociales e institu-
ciones políticas".

LAMERT, HEINEA: "La elite obrera en América Latina".

"La evolución, elite y desarrollo en América Latina".

LINDSEY A.D. "El estado democrático moderno". P.C.E.

IGNACIO LOJENDIO: "El derecho de revolución". Revista de Derecho
Privado, Madrid, 1941.

HAROLD LA SKY : "El estado moderno y las instituciones políticas y económicas, Ed. Bosch, Barcelona, 1932.

"Derecho y política".

A CANEIRO: "Pensamiento y acción".

HAROLD LASKY: Studies and the problems of sovereignty.

J. W. LAPIERRE: "Le pouvoir politique".

ENRIQUE MARTIN LOPEZ: "Sociología general".

MARIÑAS OTERO: "Las Constituciones de Honduras".

KARL MENNHEIN: Ideología y utopía".

El hombre en la sociedad en época de crisis".

Perspectivas de una política científica.

MAEZTU: "Defensa de la Hispanidad".

LAUDENIO MORENO: "Historia de las relaciones interestatales de los Centroamérica".

MONTALBAN, LEONARDO: Historia de la literatura de América Central".

SALVADOR MENDIETA: Exposición presentada a la Asamblea Nacional - constituyente de la República Centroamericana, Managua, 1921.

"Alrededor del problema unionista de Centroamérica".

"La enfermedad de Centroamérica".

JOSE MIRANDA: "Reformas y tendencias constitucionales en América Latina".

MELADO RUBIO, ADOLFO: "Geografía de Honduras".

MIRDAL: "Solidaridad o desintegración".

MAURRE, ALEJANDRO: "Bosquejo histórico de las revoluciones de Centroamérica desde 1811 a 1834".

MAC IVER: Community.

MADARIAGA, SALVADOR: Memorias de un Federalista.

ARTURO MEJIA NIETO: Honduras.

NICOLAS MAQUIAVELO: "El Príncipe".

VITTORIO MARAME: "Política económica de los países subdesarrollados."

MAC KINE GROTZIVITCH: Sources constitucionales de la nacionalidad.

MAC IVER: "Sociología".

ROBERT K. MERGTON: "Teoría de la estructura social".

C WRIGHT MILLS: "La elite del poder".

MIGUEL NAVARRO: Geografía de Centroamérica.

ORTEGA Y GASSET: "La revolución de las masas".

"La Historia como sistema"

"Obras Completas": Revista de Occidente.

OLLERO, CARLOS: "Derecho constitucional de la post-guerra.

R. PREBISCH: "Hacia una dinámica del desarrollo latino-americano".

THOMAS PAYNE: "Derechos del hombre".

F. PARAVICINE: "Política constitucional". México, Editado por
Beatriz Silva, en 1925.

PRIMO DE RIVERA: "Ensayo sobre el nacionalismo".

R. PENIKER: "El objeto del patriotismo: la Patria". Política IV
Tomo.

PEREZ SERRANO: Concepto de soberanía y su revisión actual.

El poder constituyente.

La evolución de la declaración de derechos.

POSADA, ADOLFO: "Tratado de derecho político. Instituciones políticas americanas.

JOSEPH PINICUS: "The five Central American Economic Integrations.
The central American common Market.

RAFAEL PEREZ RIVERA: Estado actual y perspectivas de algunos aspectos de la infraestructura centroamericana.

PAREDES, JUAN FRANCISCO: Derecho interamericano, arbitraje amplio y obligatorio.

PENNA, MARINHO: "Tratado sobre la Nacionalidades" Rio de Janeiro,
1947, tomos I, II y IV.

PI Y MARGALL: "Las Nacionalidades".

MANUEL JIMENEZ DE PARGA: "Los regímenes políticos contemporáneos."

QUINTANILLA: "Bergeonismo y Política". F.C.E. 1953.

OTTO HINZE: "Historia de las formas políticas".

ROCKER, RUDOLF: "Nacionalismo", F.C.E.

RAFAEL ROBEU: "Derecho Constitucional comparado".

R. MOOZEF: "Historia de la América Latina".

RAMOS J.A. "La América Latina": un país.

RUBIO J. L.: "La revolución mestiza".

RUIZ GARCIA, E.: "Iberoamérica entre el bisonte y el toro".

P. REUTER: "Derecho internacional público".

RAYMOUND HARRIS: "Problemas económicos de la América Latina. México, 1945."

ROBERTO RAMIREZ: "La conception de droit commercial dans le nouveau Project de Code de Commerce du Honduras. "Cahiers de Legislation et Bibliographie Juridique de Amerique Latine, nº 1, 1947."

ROBERTO RAMIREZ: "Historia del Derecho Constitucional Hondureño".

RAFAEL REYES: "Vida de Francisco Morazán", San Salvador, 1925.

RAMON ROSA: "Bibliografía de José Cecilio del Valle".

REA, L.: "América Latina ante la Historia".

ROUSSEAU: "El contrato social".

RENAN : ¿Qu'est-ce qu'une nation? Discours et conference, Sorbonne,
Marzo 1962.

SILVA BUSCUÑA, ALEJANDRO: "Tratado de Derecho constitucional dos
tomos. Editorial Jurídica de Chile, Santiago 1968.

SALGADO: Historia de Honduras".

SEYMON MARTIN LISEP: "Elite y desarrollo en América Latina".

SCHOWONZENBER: "La política y el poder".

SAROQUIN, PIETRI: Social and culture dynamics.

K.H. SILVENT: Nacionalismo y política del desarrollo.

F. STROVSKY: "Nationalisme ou Patriotisme".

LUIS SANCHEZ AGESTA: Curso de Derecho Constitucional. Derecho constitucional comparado. Teoría y realidad en el conocimiento político.

FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ. Estructura social.

SALVADOR JOSE: "José Cecilio del Valle, precursor de la sociología".

RECASENS, SITGES: La acción sociológica.

SANCHEZ AGESTA, LUIS: "Lecciones de Derecho Político".

"Principios de teoría política".

Principios cristianos en el orden político".

SANDOVAL, JOSE MARIA: "Comentario a la ley de organización de los Tribunales".

RUDORLF STANLEY: Doctrinas modernas sobre el derecho y el estado".

STOCHES, WILLIAMS: "Honduras en area study in government. The universitu of Wiscosin, Madison 1950.

MAX SCHELLER: Sociología del Saber. Revista de Occidente. Buenos Aires, 1957.

G. SABINE: Historia de la teoría política.

FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ: "Sociología de la acción.

LUIS MERCIER DE LA VEGA: "Mecanismo de poder en América Latina.

HELIODORO DEL VALLE: "Cartas de Bergtham a José Cecilio del Valle", México, 1942:

"Biografía de José Cecilio del Valle".

V. KIGNEY SOOTHELL: "El imperio del banano". Editorial Caribe, - México 1949.

RAMON VILLENA MORALES: "Problema social de la Medicina en Honduras".

"Problema de la alimentación en Honduras.

VILLACORTA, A.J. "Guatemala en las Cortes de Cádiz".

VIEGNEAD, PIERRE: "L'ideo de la nacionalite".

PRESBITERO ANTONIO R. VALLEJO: Compendio de Historia de Honduras.

WIENZECK, MIGUEL S. Integración de América Latina.

Experiencias y perspectivas.

WHITLESEY DARWENT. Geografía política.

WALLACE A. THOMPSON: Rainbow countries of Central América.

WALKER IS WILLIAMS O. SUGGARS: Filibusters and Financiers".

MERY W. WILLIAMS: Ecclesiastical policy of Morazán" And other

liborals. Hispanic American Historical Review III Mayo 1920.

Anglo American Isthmian diplomacy, Washington, 1946.

WHITAKER, ARTHUR. Nationalisme Contemporany Latin Americana.

TEIHARDE, CHARDIN, "L'espirit de la terre".

NICHOLAS S. TIMACHEFF. "La teoría sociológica".

R E V I S T A S

BOLETIN DEL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE DERECHO COMPARADO, Núm. 1

y 2, junio y julio 1962. Tegucigalpa. Honduras.

PEOREUX F. "L'économies de jeunes nations, industrializations y

groupements de nation. Instituto para la integración de la

América Latina. Buenos Aires.

CUADERNOS HISPANOAMERICANOS: Núm. 151. Carlos Hidalgo, Honduras.

REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS, 1954, nº 77.

FURY J. Geneología y sociologismo.

EMILIO MASA: "El control de la legalidad de los actos comunitarios.

Proyectos y posibilidades del mercado común centroamericano.

Nº 159.

SANTE INTER J.J. "Regulación constitucional de las fuerzas arma-

das. Núm. 139. (R.E.P.)

RAUL CHAVARRI PORPETA: Libertad y despotismo en Hispanoamerica.

Revista de Estudios Políticos, núm. 129 y 130.

REVISTA DE JURISPRUDENCIA ARGENTINA I, IV, Buenos Aires, 1959, pág.

64.

CARLOS FAYT: "Los grupos de interés y su técnica con relación al poder".

JULIAN S. DUNCAN: "Demographic sector and economic integration en Central America, Journal of inter American Studio". Vol. V, nº 4, Greinville, Florida, 1964.

LECTURA JURIDICA nº 15. Universidad de Chihuahua, Escuela de Derecho, 1963, México: "El derecho constitucional 1 y la promoción de las inversiones extranjeras en los países latino-americanos.

REVISTA MEJICANA DE DERECHO DEL TRABAJO: Marzo 1967, nº 1, El artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mejicanos y su concordancia con las legislaciones de los países latino-americanos. Trimestre Económico, núm. 131. México. "Hacia una ideología del Desarrollo". "Desarrollo de un proyecto conjunto sobre estrategia regional". Trimestre económico, nº 29. La estructura social y el desarrollo latino americano. República ~~elaboratoria~~ del nuevo contrato social. W.W. Rostow. Trimestre Económico nº 91: Evolución del pensamiento económico, en el último cuarto de siglo en América Latina.

ASPECTOS SOCIALES Y POLITICOS DE LA INTEGRACION CENTRO AMERICANA,- por Francisco Villagrán Cremer. Universidad de San Carlos LXVI,

Guatemala, mayo junio, julio y agosto de 1965.

ESTHER ERMEITE: "Movilidad social en una comunidad bicultural. Revista de sociología nº 68.

SUSANA PRATES: Los intelectuales y la transformación política de América Latina. Revista Latina Americana, de Sociología nº 66.

GINO GERMANI: Asimilación de inmigrantes en el medio urbano: notas metodológicas. Revista Latino Americana, nº 65, de sociología.

ALLEN ROUQUIE: Le rôle politique des forces armées de American Latin. Etats du Travaux, pág. 862. Revue Française de sciences Politiques. Vol. XIX, nº 4, agosto 1969.

REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA: Año 3 XXX, Vol. XXX, nº 4, 1968.

TORCUATO D. TELLA: Cinco áreas teóricas de América Latina.

DENISE LAMBERT: "La repartición de los ingresos y las desigualdades sociales en América Latina".

ANTONIO GARCIA: "Las clases Medias y el sistema de Poderes en América Latina".

I N D I C E

	<u>Página</u>
CAPITULO I.- GEOPOLITICA DE HONDURAS	1
El Factor Económico	9
El Factor Político	18
Factores sociales	25
Bibliografía	32
CAPITULO II.-HISTORIA DEL CONSTITUCIONALISMO DE CENTRO-AMERICA	
EN HONDURAS.....	33
Las Cortes de Cádiz de 1812	37
El acta de independencia de 1841	47
La anexión de Centro-América a México	53
Provincias Unidas del Centro de América	60
Bibliografía	69
CAPITULO III.JOSE CECILIO DEL VALLE	71
Precursor de la sociología en Centro-América.....	79
El Panamericanismo en Valle	87
El pensamiento de Valle a traves de la historia	
constitucional de Honduras	93
El Amigo de la Patria	104
Bibliografía	111
CAPITULO IV.-EL PENSAMIENTO DE MORAZAN	114
Morazán y la Federación	120
El manifiesto de David	130
El testamento de Morazán	137
Bibliografía	142
CAPITULO V.- LA CONSTITUCION DE 1825	143
LA CONSTITUCION DE 1839	152
LA CONSTITUCION DE 1848	156
LA CONSTITUCION DE 1864	159
LA CONSTITUCION DE 1873	162
LA CONSTITUCION DE 1880	165
LA CONSTITUCION DE 1894	169
LA CONSTITUCION DE 1924	173
LA CONSTITUCION DE 1936	184
LA CONSTITUCION DE 1957	190
LA CONSTITUCION DE 1965	194
Bibliografía	200

Página

CAPITULO VI.-	CONSTANTE HISTORICA DE LA IDEOLOGIA DE LA INTEGRACION EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL-HONDUREÑO	202
	La ideología y la realidad sociológica...	205
	Elementos sociológicos y jurídicos.....	211
	La acción social y los gobernantes	216
	Las "Elites" Políticas y militares.....	220
	Bibliografía	230
CAPITULO VII.-	LA SOBERANIA Y LA INTEGRACION	232
	Formación de la conciencia nacional y el centro americanismo a través de la constitución	236
	Los problemas fronterizos	244
	La orientación de los diferentes grupos políticos y la union.....	254
	La legalidad constitucional como medios de coexistencia entre pueblos soberanos.....	266
	Bibliografía	272
CAPITULO VIII.-	EL MODERNO DERECHO CONSTITUCIONAL	274
	La corriente centroamericanista en el derecho constitucional hondureño	282
	Realidades políticas, sociales, económicas y medios de contacto de los grupos humanos en Centro-América	291
	Corrientes continentales: Aportación y experiencias dentro del derecho constitucional hondureño	300
	Bibliografía	312
CAPITULO IX.-	LA NACIONALIDAD Y LA INTEGRACION CENTRO-AMERICANA	314
	La sociología del nacionalismo	321
	Nacionalismo y supranacionalismo	329
	Nacionalismo y comunidad	337
	Federalismo y spranacinalismo	345
	Bibliografía	358
BIBLIOGRAFIA		361
REVISTAS		376

TEXTO N: I

LAS ACTAS DE INDEPENDENCIA Y LOS PRIMEROS DECRETOS CONSTITUCIONALES

ACTA DE INDEPENDENCIA DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1.821

Palacio Nacional de Guatemala, quince de septiembre, de mil ochocientos veintiuno.

Siendo públicas e indudables los deseos de independencia del Gobierno Español, que por escrito y de palabra ha manifestado el pueblo de esta capital: recibidos por el último correo diversos oficios de los Ayuntamientos Constitucionales de Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, en que comunican haber proclamado y jurado dicha independencia y excitan a que se haga lo mismo en esta ciudad: siendo positivo que han circulado iguales oficios a otros Ayuntamientos: determinado, de acuerdo con la Excelentísima Diputación Provincial, que para tratar de asunto tan grave se reunisen en uno de los salones de este Palacio la misma Diputación Provincial, el Ilustrísimo Sr. Arzobispo, los Señores individuos que diputasen la Excelentísima Audiencia Territorial, el Venerable Sr. Dean y Cabildo Eclesiástico, el Excelentísimo Ayuntamiento, el M.I. Claustro, el Consulado y el M.I. Colegio de Abogados, los Prelados Regulares, Jefes y funcionarios públicos: congregados todos en el mismo salón: leídos los oficios expresados: discutido y meditado detenidamente el asunto; y oído el clamor de "Viva la Independencia", que repetía de continuo el pueblo que se veía reunido en las calles, plaza, patio, corredores y ante-sala de este palacio, se acordó por esta Diputación e individuos del Excelentísimo Ayuntamiento:

1º Que siendo la independencia del Gobierno Español la voluntad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el Sr. Jefe Político la mande publicar, para prevenir las consecuencias, que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo.

2º Que desde luego se circulen oficios a las provincias, por correos extraordinarios, para que, sin demora alguna, se sirvan proceder a elegir Diputados o Representantes suyos y éstos concurren a esta capital, a formar el Congreso que debe decidir el punto de independencia general y absoluta, y fijar, en caso de acordarla, la forma de gobierno y ley fundamental que deba regir.

3º Que para facilitar el nombramiento de Diputados, se sirvan hacerlo las mismas juntas electorales de provincia, que hicieron o debieron hacer las elecciones de los últimos Diputados a Cortes.

4º Que el número de estos Diputados sea, en proporción, de uno por cada quince mil individuos, sin excluir de la ciudadanía a los originarios de Africa.

5º Que las mismas juntas electorales de provincia, teniendo presentes los últimos censos, se sirvan determinar, según esta base, el número de Diputados o Representantes que deban elegir.

6º Que en atención a la gravedad y urgencia del asunto, se -

sirvan hacer las elecciones, de modo que el día primero de marzo del año próximo de 1.822, estén reunidos en esta capital todos los Diputados.

7º Que, entre tanto, no habiéndose novedad en las autoridades establecidas, sigan éstas ejerciendo sus atribuciones respectivas, - con arreglo a la Constitución, decretos y leyes, hasta que el Congreso indicado determine lo que sea más justo y benéfico.

8º Que el señor Jefe Político, Brigadier, don Gabino Gaínza, continúe con el gobierno superior político y militar; y para que éste tenga el carácter que parece propio de las circunstancias, se forme una Junta Provisional Consultiva, compuesta de los Señores individuos actuales de esta Diputación Provincial y de los Señores don Miguel - Larreynaga, Ministro de esta Audiencia; don José del Valle, Auditor de Guerra; Marqués de Aycinena; Dr. don José Valdez, Tesorero de esta - Santa Iglesia; Doctor don Angel María Candina; y Licenciado don Antonio Robles, Alcalde 3º constitucional; el primero por la provincia - de León, el segundo por la de Comayagua, el tercero por Quetzaltenango, el cuarto de Sololá y Chimaltenango, el quinto por Sanseñate y el sexto por Ciudad Real de Chiapa.

9º Que esta Junta provisional consulte al Señor Jefe Político en todos los asuntos económicos y gubernativos dignos de su atención.

10. que la religión católica, que hemos profesado en los siglos anteriores y profesaremos en los siglos sucesivos, se conserve pura e inalterable, manteniendo vivo el espíritu de religión que ha distinguido siempre a Guatemala, respetando a los Ministros eclesiásticos seculares y regulares y protegiéndoles en sus personas y - propiedades.

11. Que se pase oficio a los dignos Prelados de las comunidades religiosas para que cooperando a la paz y sosiego, que es la primera necesidad de los pueblos cuando pasan de un gobierno a otro, digan a sus individuos exhorten a la fraternidad y concordia a los que estando unidos en el sentimiento general de la independencia, de ban estando también en todo lo demás, sofocando pasiones individuales, que dividen los ánimos y producen funestas consecuencias.

12. que el Excelentísimo Ayuntamiento, a quien corresponde la conservación del orden y tranquilidad, tome las medidas más activas para mantenerla imperturbable en toda esta capital y pueblos inmediatos.

13. Que el Sr. Jefe Político publique un manifiesto haciendo notorios, a la faz de todos, los sentimientos generales del pueblo, la opinión de las autoridades y corporaciones, las medidas de este Gobierno, las causas y circunstancias que lo decidieron a prestar en manos del Sr. Alcalde 1.º, a pedimento del pueblo, el juramento de independencia y fidelidad al Gobierno Americano que se establezca.

14. Que igual juramento presta la Junta Provisional, el Excelentísimo Ayuntamiento, el Ilustrísimo Sr. Arzobispo, los Tribunales, Jefes políticos y militares, los Prelados regulares, sus comunidades religiosas, Jefes y empleados en las rentas, autoridades, corporaciones y tropas de las respectivas guarniciones.

15. Que el Sr. Jefe Político, de acuerdo con el Excelentísimo Ayuntamiento, disponga la solemnidad y señale el día en que el pueblo

deba hacer la proclamación y juramento expresado de independencia.

16. Que el Excelentísimo Ayuntamiento acuerde la acuñación de una medalla, que perpetúe en los siglos la memoria del día quince de septiembre de mil ochocientos veintiuno, en que se proclamó su feliz independencia.

17. Que imprimiéndose esta acta y el manifiesto expresado, se circule a las Excelentísimas Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos Constitucionales y demás autoridades eclesiásticas regulares, seculares y militares, para que siendo acordes en los mismos sentimientos -- que ha manifestado este pueblo, se sirvan obrar con arreglo a todo lo expuesto.

18. Que se cante, el día que designe el Sr. Jefe Político, -- una misa solemne de gracias, con asistencia de la Junta Provisional, de todas las autoridades, corporaciones y jefes, haciéndose salvas de artillería y tres días de iluminación.

Palacio nacional de Guatemala, setiembre 15 de 1.821.- Gabino Gaínas, Mariano de Beltranena. José Mariano Calderón. José Matías Delgado. Manuel Antonio Molina. Mariano de Larraive. Antonio de Rivera. -- José Antonio de Larraive. Isidoro de Valle y Castriciones. Mariano de Aycinena. Pedro de Arroyave (1). Lorenzo de Romaña, Secretario. Domingo Diéguez, Secretario.

(1) Reproducción del texto "Recopilación de las Leyes del Salvador en Centroamérica", por el Sr. Presbítero Dr. y Licenciado D. Isidoro Menéndez, 1ª edición, tomo I, págs. 13 y 14. Tanto en esta edición como en la segunda de las obras de Menéndez, publicada en San Salvador en 1.956, se omite por error el nombre de D. Pedro de Arroyave, quien, efectivamente, compareció y suscribió el Acta de Independencia.

Ruégase al lector acudir a la lectura del tit. I, cap. I, nota (13) de la presente obra, para comprender el sentido y la portada de la corrección que ejecutamos en la numeración del articulado de esta Acta memorable; ella no contiene ninguna variación fundamental.

TEXTO N.º II

DECRETO DE INDEPENDENCIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, DE 1 DE JULIO DE 1.823

Los Representantes de las Provincias Unidas del Centro de América, congregados a virtud de la convocatoria, dada en esta ciudad, a 15 de setiembre de 1.821, y renovada en 29 de marzo del corriente año, con el importante objeto de pronunciar sobre la independencia y libertad de los pueblos, nuestros cointerantes: sobre su recíproca unión, sobre su gobierno y sobre todos los demás puntos contenidos en la memorable acta del citado día 15 de setiembre, — que adoptó entonces la mayoría de los pueblos de esta vasto territorio, y a que se han adherido posteriormente todos los demás, que hoy se hallan representados en esta Asamblea general.

Después de examinar, con todo el detenimiento y madurez — que exige la delicadeza y entidad de los objetos con que somos congregados, así la acta expresada de setiembre de 21 y la de 5 de enero de 1.822, como también el decreto del Gobierno Provisorio de esta provincia, de 29 de marzo último, y todos los documentos concernientes al objeto mismo de nuestra reunión,

Después de traer a la vista todos los datos necesarios para conocer el estado de la población, riqueza, recursos, situación local, extensión y demás circunstancias de los pueblos que ocupan el territorio antes llamado reino de Guatemala.

Habiendo discutido la materia: oído el informe de las diversas comisiones que han trabajado para acumular y presentar a esta Asamblea todas las luces posibles acerca de los puntos indicados: teniendo presente cuanto pueda requerirse para el establecimiento de un nuevo Estado; y tomando en consideración:

1.º Que la Independencia del Gobierno Español ha sido y es necesaria en las circunstancias de aquella Nación y las de toda la América; que era y es justa en sí misma y esencialmente conforme a los derechos sagrados de la naturaleza, que la demandaban imperiosamente las luces del siglo, las necesidades del Nuevo Mundo y todos los más caros intereses de los pueblos que lo habitan.

Que la naturaleza misma resiste la dependencia de esta parte del globo, separada por un oceano inmenso de la que fue su metrópoli, y con la cual le es imposible mantener la inmediata y frecuente comunicación, indispensable entre pueblos que forman un solo Estado.

Que la experiencia de más de trescientos años manifestó a la América que su felicidad era del todo incompatible con la nuli-

dad a que la reducía la triste condición de colonia de una pequeña parte de la Europa.

Que la arbitrariedad con que fue gobernada por la Nación Española, y la conducta que ésta observó constantemente, desde la conquista, excitaron en los pueblos el más ardiente deseo de recobrar sus derechos usurpados.

Que, a impulsos de tan justos sentimientos, todas las Provincias de América sacudieron el yugo que las oprimió por espacio de tres siglos; que las que pueblan el antiguo reino de Guatemala proclamaron gloriosamente su Independencia en los últimos meses del año de 1.821; y que la resolución de conservarla y sostenerla es el voto general y uniforme de todos sus habitantes.

2º Considerando, por otra parte, que la incorporación de estas provincias al extinguido Imperio Mejicano, verificada solo de hecho en fines de 1.821 y principios de 1.822, fue una expresión violenta, arrancada por medios viciosos e ilegales.

Que no fue acordada ni pronunciada por órganos ni por medios legítimos, que por estos principios la Representación Nacional del Estado Mejicano jamás la aceptó expresamente, ni pudo con derecho aceptarla; y que las providencias, que acerca de esta unión dictó y expidió don Agustín de Iturbide, fueron nulas.

Que la expresada agregación ha sido y es contraria a los intereses y a los derechos sagrados de los pueblos, nuestros comitentes, que es opuesta a su voluntad; y que un concurso de circunstancias tan poderosas e irresistibles exigen que las Provincias del antiguo Reino de Guatemala se constituyen por sí mismas y con separación del Estado Mejicano.

Nosotros, por tanto, los Representantes de dichas Provincias, en su nombre, con su autoridad y conformes en todo con sus votos, declaramos solemnemente:

1º Que las expresadas Provincias, representadas en esta Asamblea, son libres e independientes de la antigua España, de Meji-co y de cualquiera otra potencia, así del antiguo, como del Nuevo Mundo; y que no son ni deben ser el patrimonio de persona ni familia alguna.

2º Que, en consecuencia, son y forman Nación Soberana, con derecho y aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones ejercen y celebran los otros pueblos libres de la tierra.

3º Que las Provincias sobredichas, representadas en esta Asamblea (y las demás que espontáneamente se agreguen de las que componían el antiguo Reino de Guatemala) se llamarán, por ahora, y sin perjuicio de lo que se resuelva en la Constitución que ha de --

formarse, PROVINCIAS UNIDAS DEL CENTRO DE AMERICA.

Y mandamos que esta declaratoria y la acta de nuestra instalación se publiquen con la debida solemnidad en este pueblo de Guatemala, y en todos y cada uno de los que se hallan representados en esta Asamblea; que se impriman y circulen; que se comuniquen a las Provincias de León, Granada, Costa Rica y Chiapas; y que en la forma y modo, que se acordará oportunamente, se comuniquen también a los Gobiernos de España, de Mejico y de todos los demás Estados independientes de ambas Américas.

Dado en Guatemala, a primero de julio de mil ochocientos -- veintitres.- José Matías Delgado, Diputado por San Salvador, Presidente; Fernando Antonio Davila, Diputado por Sacatepéquez, Vicepresidente; Pedro Molina, Diputado por Guatemala; José Domingo Estrada Diputado por Chimaltenango; José Francisco Cordova, Diputado por -- Santa Ana; Antonio José Cañas, Diputado por Cojutepeque; José Antonio Jimenez, Diputado por San Salcador; Mariano Beltranena, Diputado suplente por San Miguel; J. Domingo Diéguez, Diputado suplente -- por Sacatepéquez; Juan Miguel Beltranena, Diputado por Cobán; Isidro Menendez, Diputado por Sonsonate; Marcelino Menendez, Diputado por Santa Ana; José María Herrarte, Diputado suplente por Totonicapán; Simeon Cañas, Diputado por Chimaltenango; José Francisco Barrundia, Diputado por Guatemala; Felipe Marquez, Diputado suplente por Chimaltenango; Felipe Vega, Diputado por Sonsonate; Pedro Campo Arpa, Diputado por Sonsonate; Cirilo Flores, Diputado por Quezaltenango; Francisco Flores, Diputado por Quezaltenango; Juan Vicente Villacorta, Diputado por San Vicente; José María Castilla, Diputado por Cobán; Luis Barrutia, Diputado por Chimaltenango; José Antonio Amittia, Diputado suplente por Guatemala; Julián Castro, Diputado -- por Sacatepéquez; José Antonio Alcayaga, Diputado por Sacatepéquez; Serapio Sánchez, Diputado por Totonicapán; Leoncio Domínguez, Diputado por San Miguel; José Antonio Peña, Diputado por Quezaltenango; Francisco Aguirre, Diputado por Olancho; José Beteta, Diputado por Salama; José María Ponce, Diputado por Escuintla; Francisco Benavente, Diputado suplente por Quezaltenango; Miguel Ordoñez, Diputado -- por San Agustín; Pedro José Cuellar, Diputado suplente por San Salvador; Francisco Javier Valenzuela, Diputado por Jalapa; José Antonio Larrave, Diputado suplente por Esquipulas; Lazaro Herrarte, Diputado por Suchitepéquez; Juan Francisco de Sosa, Diputado suplente por San Salvador, Secretario; Mariano Gálvez, Diputado por Totonicapán, Secretario; Mariano Cordova, Diputado por Güegüetenango, Secretario; Simón Vasconcelos, Diputado suplente por San Vicente, Secretario.

Comuníquese al Supremo Poder Ejecutivo a primero de julio -- de mil ochocientos veintitres.

José Matías Delgado, Presidente; Juan Francisco Sosa, Diputado Secretario; Mariano Gálvez, Diputado Secretario; Al Supremo Poder Ejecutivo.

Por tanto, mandamos se guarde, cumpla y ejecute en todas sus

partes.

Lo tendrá entendido el Secretario del Despacho, y hará se imprima, publique y circule.

Palacio Nacional de Guatemala, julio 11 de 1.823.

Pedro Molina, Presidente; Juan Vicente Villacorta; Antonio Rivera.

TEXTO N° III

DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, DE 1 DE OCTUBRE DE 1.823, RATIFICANDO EL DE INDEPENDENCIA DE 1 DE JULIO DEL MISMO AÑO.

La Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América, teniendo presente:

Que al pronunciar en 1 de julio último, la declaración solemne de su absoluta Independencia y libertad, aun no se hallaban representadas las Provincias de Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Que lo están ya las dos primeras por la mayoría del número de Diputados que a cada una corresponden.

Que si no lo está la de Costa Rica, son repetidos y muy terminantes los testimonios de la heroica decisión de aquellos pueblos a ser libres; que por formal declaración de su Congreso Provincial está ya unida dicha Provincia a las demás que constituyen este nuevo Estado; que la retardación de este solemne pronunciamiento de unión fue nacida de que la expresada Provincia esperó, para verificarlo, a que la división militar mejicana evacuase nuestro territorio; y que aun antes de la convocatoria a Asamblea Nacional, dada en 29 de marzo de este año, Costa Rica había ya resuelto unirse a las Provincias del antiguo Reino de Guatemala tan pronto como ellas recobrasen sus derechos y entrasen al goce de su libertad.

Y considerando muy conveniente y necesario que la representación de todas las Provincias Unidas ratifique la declaración de su Independencia absoluta.

Por tanto, la Asamblea Nacional Constituyente, en nombre y con la autoridad de todas las Provincias que en ella están representadas, confirma y ratifica solemnemente, y por unanimidad de sufragios, la declaración de independencia absoluta y libertad de las Provincias Unidas del Centro de América, pronunciada en 1 de julio de este año.

Dado en Guatemala a 1º de octubre de 1.823.- Cirilo Flores, Diputado por Quezaltenango, Presidente. Francisco Marquez, Diputado por Tegucigalpa, Vicepresidente; José Barrundia, Diputado por Guatemala; José Antonio Alcayaga, Diputado por Sacatepéquez; Julián Castro, Diputado por Sacatepéquez; José Domingo Diéguez, Diputado por Sacatepéquez; José Valdez, Diputado por Sololá; Simeón Cañas, Diputado por Chimaltenango; José Francisco Córdova, Diputado por Santa Ana; Ciriaco Villacorta, Diputado por San Vicente; Juan Miguel Beltranena, Diputado por Cobán; José María Castilla, Diputado por Cobán; José Beteta, Diputado por Salamá; Mariano de Córdova, Diputado por Huehuetenango; Felipe Vega, Diputado por Sonsonate; Francisco Flores, Diputado por Quezaltenango; Serapio Sánchez, Diputado por Totoncapán; Leoncio Dominguez, Diputado por San Miguel; Mariano Beltranena, Diputado por Goera; José Antonio Larraive, Diputado suplente por Esquipulas; José Geronimo Zelaya, Diputado por Gracias; Miguel Pineda, Diputado por Gracias; Francisco Aguirre, Diputado por Olancho; José María Ponce, Diputado por Escuintla; Francisco Javier Valenzuela, Diputado por Jalapa; Mariano Navarrete, Diputado suplente por Sacatecoluca; Filadelfo Benavente, Diputado por Matagalpa; Manuel Berberena, Diputado por León; Francisco Quiñónez, Diputado por León; José Toribio Argüello, Diputado por León; Antonio José Cañas, Diputado por Cojutepeque; Benito Rosales, Diputado por Granada; Pío José Castellón, Diputado por Segovia; Joaquín Lindo, Diputado por Comayagua; José Francisco Zelaya, Diputado por Comayagua; Valerio Coronado, Diputado suplente por Conguaco; Tomás Muñoz, Diputado por Masaya; José Matías Delgado, Diputado por San Salvador; Juan Francisco de Sosa, Diputado suplente por San Salvador; Pedro José Cuellar, Diputado suplente por San Salvador; Antonio Gonzalez, Diputado suplente por Sololá; José Domingo Estrada, Diputado por Chimaltenango; Luis Barrutia, Diputado por Chimaltenango; Felipe Marquez, Diputado suplente por Chimaltenango; Marcelino Menendez, Diputado por Santa Ana; Basilio Chavarrria, Diputado suplente por Salamá; Isidro Menendez, Diputado por Sonsonate; Pedro Campo Arpa, Diputado por Sonsonate; Norberto Morán, Diputado suplente por Sonsonate; José Antonio Peña, Diputado por Quezaltenango; Francisco Benavente, Diputado suplente por Quezaltenango; José María Agüero, Diputado por Totoncapán; José María Herrarte, Diputado suplente por Totoncapán; José Bernardo Escobar, Diputado suplente por Chiquimula; Toribio Rldán, Diputado por San Miguel; Simón Vasconcelos, Diputado por San Vicente, Secretario; Juan Esteban Milla, Diputado por Gracias, Secretario; Juan Hernández, Diputado por León, Secretario; José Antonio Armitia, Diputado por Guatemala, Secretario.

TEXTO N.º IV

DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, DE 2 DE JULIO DE 1.823, DECLARÁNDOSE LEGITIMAMENTE CONSTITUIDA Y DIVIDIENDO LOS PODERES.

Los Representantes de las Provincias Unidas de Centroamérica, en consecuencia de la solemne declaración que hemos pronunciado en la del corriente, confirmando y sancionando el inconcuso e imprescriptible derecho de los pueblos, nuestros comitentes, a su absoluta libertad e independencia de todo extraño poder; en el nombre y por autoridad de los mismos pueblos, nos declaramos legitimamente constituidos en Asamblea Nacional Constituyente y que en ella reside el ejercicio de la soberanía.

Declaramos igualmente:

1.º Que los altos poderes de este Estado deben ser y son divididos en la manera que sigue:

Residirá en esta Asamblea indivisiblemente el ejercicio del Poder Legislativo.

El del Poder Ejecutivo en la persona, o personas en quienes se delegare y conforme al reglamento que al efecto se expedirá.

El del Poder Judicial en los tribunales y juzgados establecidos o que se establezcan.

2.º Que la religión de las Provincias Unidas, es la Católica, Apostólica, Romana. En cuya consecuencia, se manifestará oportunamente a la Santa Sede Apostólica, por una misión especial, o del modo que mas convenga: que nuestra separación de la antigua España en nada perjudica ni debilita nuestra unión a la Santa Sede, en todo lo concerniente a la Religión Santa de Jesucristo.

3.º Que el Gobierno de las propias Provincias será el que designe la Constitución que ha de formarse.

4.º Que los Diputados de esta Asamblea son inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni por autoridad alguna podrán ser molestados no reconvenidos por las que durante su encargo manifestaren de palabra o por escrito.

5.º Que las Provincias Unidas reconocerán la deuda pública nacional, y la Asamblea hipotecará, para garantizar los capitales y el pago de los intereses, los ramos de rentas y fincas que se acuerde, luego que esté formada la liquidación de dicha deuda.

6º **Habilitamos y confirmamos por ahora a todas las autoridades existentes, civiles, militares y eclesiásticas, para que continúen en el libre ejercicio de sus respectivos cargos y funciones.**

7º **Ratificamos y confirmamos el acuerdo de 15 de setiembre 1.821, que dispuso se continuase observando la Constitución, decretos y leyes de la antigua España, en todo lo que no sean opuestos a la independencia y libertad de los pueblos, nuestros comitentes, y en todo lo que sea adaptable, con arreglo a los principios sancionados en la declaración solemne, pronunciada en 1º de mes del corriente y en el presente decreto; entendiéndose todo por ahora y mientras la Asamblea no disponga otra cosa.**

TEXTO N.º VII

DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, DE 21 DE AGOSTO DE 1.823, ANULANDO LOS ACTOS DEL IMPERIO MEJICANO.

La Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América, a consecuencia del decreto de primero de julio de este año, en que se declara nula agregación de estas Provincias al Imperio Mejicano, ha tenido a bien decretar, y decreta:

A.1º Los decretos y órdenes que el Gobierno de Méjico comunicó a estas provincias, en el tiempo de su agregación, quedan desde ahora sin valor ni fuerza alguna.

A.2º No podrán abrirse los juicios fenecidos con arreglo a disposiciones de Méjico, en la misma época de la incorporación de estas Provincias a aquel Imperio; entendiéndose subsanadas por virtud de esta ley cualesquiera defectos de las causas, aun el de ilegitimidad de los tribunales y juzgados, y revalidados los procedimientos de unos y otros, siempre que no hayan sido opuestos a la independencia de este Estado ni a la Constitución y leyes de España, adoptadas provisionalmente.

A.3º Se declaran subsistentes las calificaciones de indultos, hechas por los jueces y tribunales respectivos, en virtud del que concedió la Junta Gubernativa de Méjico, en decreto de veintitres de Octubre de mil ochocientos veintiuno.

A.4º A los reos que, en el tiempo prefinido en el mismo decreto se hayan presentado implorandolo, podrá aplicarse la gracia con arreglo a él.

A.5º Los reos que, sin presentarse voluntariamente, hayan sido presos por el ministerio de las autoridades, después de la publicación de aquella gracia, no podrán gozar de otra que de la concedida por esta Asamblea en diez y ocho de julio último.

A.6º Si algunos de los tribunales existentes juzga conveniente que se adopte en estas Provincias Unidas cualquiera de los decretos de Méjico, que por lo dispuesto en el artículo primero deben quedar sin efecto, lo hará presente por medio del Supremo Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional, para que lo examine y resuelva.

A.7º Cualquier ciudadano, que tenga interés en el cumplimiento de alguno de los mismos decretos, podrá solicitar su revalidación ante el Supremo Poder Ejecutivo, que la concederá, si la estimare justa y propia de sus atribuciones, o consultará a la Asamblea Nacional, si correspondiere al Poder Legislativo.

TEXTO Nº IX

DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, DE 5 DE MAYO DE 1.824, MANDANDO REUNIR LAS PRIMERAS ASAMBLEAS DE LOS ESTADOS.

La Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América, considerando que la pronta reunión de los Congresos de los Estados de la Federación, conforme a las bases decretadas en diez y siete de diciembre de 1.823, es de la primera importancia la Organización y prosperidad de los mismos Estados, "que el de San Salvador lo tiene ya reunido, y que es igualmente importante evitar pronunciamientos que, fuera de la ley, expondrán la tranquilidad de la Nación.

Ha tenido a bien decretar, y decreta:

Tendrán, por ahora, Congresos Guatemala, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

TEXTO Nº X

DECRETO DE 31 DE ENERO DE 1.824, DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, PARA QUE LOS HIJOS ILEGITIMOS PUEDAN OBTENER EMPLEOS Y BENEFICIOS.

La Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América, ha tenido a bien decretar, y decreta lo siguiente:

1º Para la provisión de empleos solo se atenderá en los sucesivos a la aptitud, mérito y virtud del sujeto.

2º En consecuencia, se derogan las disposiciones civiles que exigian la cualidad de haber nacido de legítimo matrimonio, para po-

der servir algunos empleos civiles, y obtener ciertos oficios, beneficios, dignidades y prelacías eclesiásticas.

3.º Se ruega y encarga a los Padres Arzobispos, Obispos, Cabildos y demás Autoridades eclesiásticas, se arreglen al espíritu de este decreto y usen de sus facultades ordinarias y extraordinarias en lo respectivo a las disposiciones canónicas que obran en el particular.

TEXTO N.º XII

TERTULIAS PATRIOTICAS

LEY UNICA

DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE 8 DE AGOSTO DE 1823 SOBRE TERTULIAS PATRIOTICAS.

La Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América, deseando proporcionar los medios más oportunos para que la ilustración se extienda y generalice a todas las clases del Estado: que los pueblos conozcan sus derechos, que la opinión se uniforme y consolide, y que los ciudadanos adquirieran la aptitud necesaria para el desempeño de los deberes que la sociedad les impone; y considerando que nada es tan conducente a llenar estos objetos como las tertulias patrióticas, ha tenido a bien decretar, y decreta:

Art. 1.º Podrán establecerse tertulias patrióticas en las poblaciones que tengan Municipalidades, las que cuidarán de promover su establecimiento donde para ello hubiere proporcion. En las poblaciones numerosas podrá haber más de una tertulia, pero en ningún caso más de cuatro.

Art. 2.º Estas tertulias estarán en cada lugar bajo la protección de la Municipalidad respectiva y, en especial, bajo la de los Alcaldes Constitucionales.

Art. 3.º Las tertulias patrióticas son asociaciones de ciudadanos, que se reúnen para tratar de todo género de materias políticas, conferenciar sobre las medidas de interés general, manifestar la insuficiencia o inconvenientes de las que e hayan adoptado, indicar las reformas necesarias en todos los ramos y discurrir, en consecuencia, acerca de los principios reconocidos de los políticos y legisladores de las naciones cultas, y conviviendo que las que por este decreto se establecen, observen un regimen que asegure su utilidad, orden y conservación, se fijan para su gobierno las siguientes reglas:

1.º Como la estabilidad de estas tertulias pende de las ventajas que ofrezcan al público y a los asociados, éstos se inscribieran en

un libro de matrícula. Los inscritos en él, al tiempo de la apertura de cada tertulia, serán reputados fundadores de ella, sin que por eso tengan privilegio alguno sobre los que en adelante se inscriban.

2º Los matriculados en cada tertulia asistirán a ellas en las noches señaladas para las sesiones, alternandose entre sí, cuando todos no puedan asistir, a fin de que nunca falte concurrencia.

3º Para que haya en la sociedad el orden debido, sus individuos nombrarán, a pluralidad absoluta de votos, entre los concurrentes, un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Vicesecretario, dos Censores y un Economo. La duración de estos oficios será de tres meses, y ninguno podrá ser reelecto para el mismo ni para otro, hasta después de otros tres. El Vicepresidente y Vicesecretario son suplentes de sus principales. En falta de Vicepresidente, presidirá el primer Censor.

4º Las sesiones serán siempre públicas; todo ciudadano puede concurrir a ellas. El Presidente las abrirá y terminará por medio de una campanilla u otra señal, dividiendo el tiempo de cada una según las materias que hayan de tratarse; hará guardar el orden; impedirá se interrumpa al que ha pedido la palabra; y si alguna vez entrare en alguna discusión acalorada y tumultuaria, podrá suspender o levantar la sesión. Propondrá también las materias que deban tratarse, si la mayoría no presentare otras de mayor interés.

5º Las sesiones comenzarán por la lectura de la acta de la noche anterior, en seguida se leerán los decretos y órdenes que se hubiesen dado por la Asamblea o el Supremo Poder Ejecutivo, los diarios de la misma Asamblea y los papeles públicos, nacionales y extranjeros; luego se leerán los discursos que se presentaren y, por último, se entrará a las discusiones que se ofrezcan, y se designarán puntos para la sesión inmediata.

6º El Secretario, tomando apuntamientos de lo que se haya discutido dará una idea general de las cuestiones y asentará todo lo resuelto en una acta, que firmarán el Presidente y el mismo Secretario. Los Censores revisarán los discursos que se hubiesen leído, harán, sobre la materia y estilo en que estén concebidos, todas las observaciones convenientes y las presentarán a la tertulia en la sesión siguiente. El examen será más serio y más escrupuloso respecto de los discursos que se destinen a la prensa.

7º Los discursos que se lleven escritos irán firmados por sus autores y quedarán archivados en la tertulia a cargo del Secretario.

8º El Economo cuidará de todos los gastos; propondrá los medios para subvenirlos; presentará cada mes al Presidente y Secretario cuenta exacta de su inversión, y aquellos, con su visto bueno, la publicarán en la tertulia.

9º Habrá dos sesiones a la semana, en los días que señalará la tertulia, y cuando éstos se impidieren, serán propuestos con noti-

cia de la autoridad respectiva. Las sesiones durarán de las siete a las diez de la noche; pero en los pueblos, cuyas circunstancias no permitan la reunión de los vecinos en las horas indicadas, las sesiones serán en las que señale la misma tertulia, con noticia de la Municipalidad respectiva.

10. Es del todo ajeno de estas sociedades tratar asuntos tocantes a la religión o al dogma y exponer al público la conducta privada de ningún ciudadano, bajo cualquier pretexto. Los Censores velarán sobre la observancia de esta regla; es de su más estrecho deber dar parte al Presidente de la menor contravención que adviertan. Mas estas prohibiciones no limitan la libertad de censurar los abusos, faltas o excesos, que cometan los funcionarios públicos en el desempeño de sus atribuciones, siempre que se guarde el respeto debido a la autoridad.

11. En el momento que algún concurrente comience a tratar de los asuntos expresados en la anterior regla, el Presidente, por sí o excitado por los Censores, o por alguno de los concurrentes, lo llamará al orden; si requerido por tres veces no obedece, se le despedirá; y si esto no bastase, se observará en el caso lo prevenido por la regla 4ª. Si alguno fuera despedido de la tertulia en los terminos, y por los motivos expresados, y, presentandose de nuevo en ella, reincidiese en la propia falta, no podrá volver en medio año. Si, pasado este tiempo, aun volviera a presentarse y reincidiera por segunda vez, en el mismo exceso, será para siempre despedido y borrado de la matrícula, caso de estar inscrito en ella.

12. El Presidente de la tertulia será responsable de los excesos que en ella se cometan, por omisión, descuido o condescendencia.

13. Si, en observancia de lo que queda prevenido, el Presidente, para obviar las malas consecuencias de una discusión acalorada o contener los excesos que quieran cometerse, ha mandado levantar la sesión, y los concurrentes rehusasen retirarse, lo avisará al Juez o al Alcalde Constitucional, para que éstos disuelvan la reunión, procediendo, en caso necesario a lo demás que corresponda con arreglo a las leyes.

14. Fuera de este caso, o de un aviso fundado de alguno de los socios, los Jueces y Alcaldes no se presentarán en la tertulia bajo este concepto, sino como simples particulares.

15. La tertulia, por sí, no podrá disolverse del todo sin dar parte antes de su disolución a la Municipalidad respectiva, manifestando individualmente las causas que la mativan.

16. Habrá en cada tertulia un libro, rubricado por el Presidente y Secretario, en que se inscriba el nombre de los ciudadanos concurrentes, que sobresalgan por sus luces, patriotismo y adhesión a la causa pública; se hará en él mención de los discursos elocuen-

tes, proyectos útiles y acciones recomendables; que hayan distinguido a cada socio; y este libro se conservará bajo la custodia del Secretario, sin confiarse a persona alguna.

17. Será obligación del Presidente pasar cada seis meses una nómina de los ciudadanos, que estén inscritos en dicho libro, a la Municipalidad Constitucional, a fin de que, recomendando el mérito y las virtudes de los contenidos en la nómina, se les tenga presentes para lo que se les considere aptos, y sean honrados con la preferencia que exigen el mérito y la virtud acreditados.

18. Podrá en todo tiempo cualquier ciudadano pedirle la tertulia un atestado de lo que constase en el libro de que hablan las reglas anteriores.

19. Cuando un ciudadano mereciere ser inscrito en dicho libro, por alguno de los motivos expresados, el Secretario publicará la inscripción, como el premio que concede la tertulia al individuo, cuyo discurso merezca la luz pública, o cuya ilustración y acciones meritorias lo hagan acreedor de esta distinción. Los Censores podrán, en virtud de su oficio, pedir para otro, pero no obtener para sí ningún premio durante el ejercicio de su encargo. Igual prohibición comprende al Presidente, Secretario y suplentes.

Art. 4º Este reglamento regirá provisionalmente, mientras la experiencia no exija su alteración o reforma.

Art. 5º Si, establecidas las tertulias patrióticas, se conociese que su continuación es contraria a los fines que la ley se propone en su establecimiento, el Gobierno dará cuenta a la Asamblea, cerrando, desde luego, aquella que diese motivo a esta urgente medida.

TEXTO N° XIII

CONSTITUCION FEDERAL DE 1824

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA FEDERAL DE CENTROAMERICA, EN EL NOMBRE DEL SER SUPREMO, AUTOR DE LAS SOCIEDADES Y LEGISLADOR DEL UNIVERSO.

Congregados en Asamblea Nacional Constituyente, nosotros los representantes del pueblo de Centroamérica, cumpliendo con sus deseos, y en uso de sus soberanos derechos, decretamos la siguiente constitución para promover su felicidad; sostenerle en el mayor goce posible de sus facultades; afianzar los derechos del hombre los principios inalterables de igualdad, seguridad y propiedad; establecer el orden público y formar una perfecta federación

TITULO I
DE LA NACION Y SU TERRITORIO

SECCION 1
DE LA NACION

Art. 1. El pueblo de la República Federal de Centroamérica es soberano e independiente.

Art. 2. Es esencial al soberano y su primer objeto la conservación de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad.

Art. 3. Están obligados a obedecer y respetar la ley, a servir y defender la patria con las armas y a contribuir proporcionalmente para los gastos públicos sin exención ni privilegio alguno.

SECCION 2
DEL TERRITORIO

Art. 5. El territorio de la República es el mismo que antes comprendía al antiguo reino de Guatemala, a excepción, por ahora, de la provincia de Chiapas.

Art. 6. La Federación se compone de cinco estados, que son: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. La provincia de Chiapas se tendrá por estado en la Federación cuando libremente se una.

Art. 7. La demarcación de territorio de los estados se hará por una ley constitucional con presencia de los datos necesarios.

TITULO II
DEL GOBIERNO, DE LA RELIGION Y DE LOS CIUDADANOS.

SECCION 1
DEL GOBIERNO Y DE LA RELIGION

Art. 8. El gobierno de la República es: popular, representativo, federal.

Art. 9. La República se denomina: Federación de Centroamérica.

Art. 10. Cada uno de los estados que la componen es libre e independiente en su gobierno y administración interior; y les corres

ponde todo el poder que por la constitución no estuviere conferido a las autoridades federales.

Art. 11. Su religión es: la católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra.

Art. 12. La República es un asilo sagrado para todo extranjero, y la patria de todo el que quiera residir en su territorio.

SECCION 2

DE LOS CIUDADANOS

Art. 13. Todo hombre es libre en la República. No puede ser esclavo el que se acoja a sus leyes, ni ciudadano el que trafique en esclavos.

Art. 14. Son ciudadanos todos los habitantes de la República, naturales del país, o naturalizados en él, que fueren casados, o mayores de diez y ocho años, siempre que ejerzan alguna profesión útil, o tengan medios conocidos de subsistencia.

Art. 15. El Congreso concederá cartas de naturaleza a los extranjeros que manifiesten a la autoridad local designio de radicarse en la República:

1º Por servicios relevantes hechos a la nación y designados por ley.

2º Por cualquier invención útil, y por ejercicio de alguna ciencia, arte u oficio no establecidos aún en el país, o mejora notable de una industria conocida.

3º Por vecindad de cinco años.

4º Por la de tres, a los que vinieren a radicarse con sus familias, a los que contrajeran matrimonio en la República, y a los que adquirieren bienes raíces del valor y clase que determine la ley.

Art. 16. También son naturales los nacidos en país extranjero de ciudadanos de Centroamérica, siempre que sus padres estén al servicio de la República, o cuando su ausencia no pasare de cinco años y fuere con noticia del gobierno.

Art. 17. Son naturalizados los españoles y cualesquiera extranjeros que, hallándose radicados en algún punto del territorio de la República, al proclamar su independencia la hubieren jurado.

Art. 18. Todo el que fuere nacido en las repúblicas de América y viniere a radicarse a la Federación, se tendrá por naturalizado en ella desde el momento en que manifieste su designio, ante la autoridad local.

Art. 19. Los ciudadanos de un estado tienen expedito el ejercicio de la ciudadanía en cualquiera otro de la Federación.

Art. 20. Pierden la calidad de ciudadanos:

1º Los que admitieren empleo, o aceptaren pensiones, distin

tivos o títulos hereditarios de otro gobierno, o personales, sin li
cencia del Congreso.

2º Los sentenciados por delitos que según la ley merezcan
pena más que correccional, si no obtuvieren rehabilitación.

Art. 21 Se suspenden los derechos de ciudadanos:

1º Por proceso criminal en que se haya proveído auto de pri
sión por delito que según la ley merezca pena mas que correccional.

2º Por ser deudor fraudulento declarado, o deudor a las ren
tas públicas y judicialmente requerido de pago.

3º Por conducta notoriamente viciada.

4º Por incapacidad física o moral, judicialmente calificada.

5º Por el estado de sirviente domestico cerca de la persona.

Art. 22 Sólo los ciudadanos en ejercicio pueden obtener ser
vicios en la República.

TITULO III

DE LA ELECCION DE LAS SUPREMAS AUTORIDADES FEDERALES.

SECCION 1

DE LAS ELECCIONES EN GENERAL

Art. 23 Las Asambleas de los Estados dividirán su población
con la posible exactitud y comodidad en juntas populares, en distri
tos y en departamentos.

Art. 24 Las juntas populares se componen de ciudadanos en el
ejercicio de sus derechos: las juntas de distrito, de los electores
nombrados por las juntas popularmente; y las juntas de departamento,
de los electores nombrados por las juntas de distrito.

Art. 25 Toda junta será organizada por un directorio compuesto
de un presidente, dos secretarios y dos escrutadores, elegidos por
ella misma.

Art. 26 Las acusaciones sobre fuerza, cohecho o soborno en
los sufragantes, hechas en el acto de la elección, serán determina-
das por el directorio con cuatro hombres buenos nombrados entre los
ciudadanos presentes por el acusador y el acisado, para el solo efecto
de desechar, por aquella vez, los votos tachados o el del calumniador
en su caso. En lo demás, estos juicios serán seguidos y terminados en
los tribunales comunes.

Art. 27 Los recursos sobre nulidad en elecciones de las jun-
tas populares serán definitivamente resueltos en las juntas de distri
to; y los que se entablen contra éstas, en las de departamentos. Los

cuerpos legislativos que verifican las elecciones, deciden de las calidades de los últimos electos cuando sean tachados, y de los reclamos sobre nulidad en los actos de las juntas de departamento.

Art. 28 Los electores de distrito y de departamento no son responsables por su ejercicio electoral. Las leyes acordarán las garantías necesarias para que, libre y puntualmente, verifiquen su encargo.

Art. 29 En las épocas de elección constitucional, se celebrarán el último domingo de octubre las juntas populares; el segundo domingo de noviembre las de distrito; y el primer domingo de diciembre las de departamento.

Art. 30 Ningún ciudadano podrá escusarse del cargo de elector por motivo ni pretexto alguno.

Art. 31 Nadie puede presentarse con armas a los actos de elección no votarse a sí mismo.

Art. 32 Las juntas no podrán deliberar si no sobre objetos designados por la ley. Es nulo todo acto que esté fuera de su legal intervención.

SECCION 2

DE LAS JUNTAS POPULARES

Art. 33 La base menor de una junta popular será de doscientos cincuenta habitantes; la mayor de dos mil y quinientos.

Art. 34 Se formarán registros de los ciudadanos que resulten de la base de cada junta, y los inscritos en ellos únicamente, tendrán voto activo y pasivo.

Art. 35 Las juntas nombrarán un elector primario por cada doscientos cincuenta habitantes. La que tuviere un residuo de ciento veinte y seis nombrará un elector más.

SECCION 3

DE LAS JUNTAS DE DISTRITO

Art. 36 Los electores primarios se reunirán en las cabeceras de los distritos que las Asambleas designen.

Art. 37 Reunidos por lo menos las dos terceras partes de los electos primarios, se forma la Junta y nombra por mayoría absoluta un elector de distrito por cada diez electores primarios de los que le corresponden.

SECCION 4

DE LAS JUNTAS DEPARTAMENTALES

Art. 38. Un departamento constará fijamente de doce electores de distrito por cada representante que haya de nombrar.

Art. 39. Los electores de distritos se reunirán en las cabeceras de departamento que las Asambleas designen.

Art. 40. Reunidas por lo menos las dos terceras partes de los electores de distrito, se forma la Junta de departamnto y elige por mayoría absoluta los representantes y suplentes que le corresponden para el Congreso.

Art. 41. Nombrados los representantes y suplentes, se despachará a cada uno por credencial, copia autorizada del acta en que conste su nombramiento.

Art. 42. En la renovación del Presidente y Vicepresidente de la República, individuos de la Suprema Corte de Justicia y Senadores del Estado, los electores sufragarán para estos funcionarios en actos diversos, y cada voto será registrado con separación.

Art. 43. Las Juntas de departamento formarán de cada acto de elección, listas de los electores con expresión de sus votos.

Art. 44. Las listas relativas a la elección del Presidente y Vicepresidente de la República e individuos de la Suprema Corte de Justicia, deberán fármarse por los electores, y remitirse cerradas y selladas al Congreso. También se dirigirá en la propia forma una copia de ellas, con la votación para Senadores, a la Asamblea del Estado respectivo.

SECCION 5

DE LA REGULACION DE VOTOS Y MODO DE VERIFICAR LA ELECCION DE LAS SUPREMAS AUTORIDADES FEDERALES.

Art. 45. Reunidas las listas de las Juntas departamentales de cada Estado, su Asamblea hará un escrutinio de ellas, y en la forma prescrita en el artículo anterior, lo remitirá con las mismas listas al Congreso, reservándose las que contienen la elección de Senadores.

Art. 46. Reunidos los pliegos que contienen las listas de todas las juntas de departamento y su escrutinio formado por las Asambleas, el Congreso los abrirá y regulará la votación por el número de electores de distrito, y no por el de las juntas de departamento.

Art. 47. Siempre que resulte mayoría absoluta de sufragios la

elección está hecha. Si no la hubiere, y algunos ciudadanos reunieran cuarenta o más votos, el Congreso, por mayoría absoluta, elegirá sólo entre ellos. Si esto no se verificase, nombrará entre los que tuvieran de quince votos arriba; y no resultando los suficientes para ninguno de estos casos, elegirá entre los que obtengan cualquier número.

Art. 48. Las Asambleas de los Estados sobre las mismas reglas y en proporción semejante, verificarán la elección de Senadores, si no resultare hecha por los votos de los electores de distrito.

Art. 49. En un mismo sujeto la elección de propietario con -- cualquier número de votos prefiere a la de suplente.

Art. 50. En caso que un mismo ciudadano, obtenga dos o mas -- elecciones, preferirá la que se haya efectuado con mayor número de votos populares; y siendo éstos iguales se determinará por la voluntad del electo.

Art. 51. Los ciudadanos que hayan servido por el término constitucional cualquier destino electivo de la Federación, no serán obligados a admitir otro diverso sin que haya transcurrido el intervalo -- de un año.

Art. 52. Las elecciones de las Supremas Autoridades Federales se publicarán por un decreto del Cuerpo Legislativo que las haya verificado.

Art. 53. Todos los actos de elección, desde las juntas populares hasta los escrutinios del Congreso y de las Asambleas, deberán -- ser públicos para ser válidos.

Art. 54. La Ley reglamentará estas elecciones sobre las bases establecidas.

TITULO IV

DEL PODER LEGISLATIVO Y SUS ATRIBUCIONES

SECCION 1.

DE LA ORGANIZACION DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 55. El Poder Legislativo de la Federación reside en un -- Congreso compuesto de representantes popularmente elegidos en razón de uno por cada treinta mil habitantes.

Art. 56. Por cada tres representantes se elegirá un suplente. Pero si a alguna junta no le correspondiere elegir más que uno o dos propietarios, nombra, sin embargo, un suplente.

Art. 57. Los suplentes concurrirán por falta de los propieta

rios en caso de muerte o imposibilidad, a juicio del Congreso.

Art. 58. El Congreso se renovará por mitad cada año, y los mismos representantes podrán ser reelegidos una vez sin intervalo alguno.

Art. 59. La primera Legislatura decidirá, por suerte, los representantes que deben renovarse en el año siguiente; en adelante la renovación se verificará saliendo dos de nombramiento más antiguo.

Art. 60. La primera vez calificará las elecciones y credenciales de los representantes, una junta preparatoria compuesta de ellos mismos; en lo sucesivo, mientras no se hubieren abierto las sesiones, toca esta calificación a los representantes que continúan, en unión de las nuevamente electos.

Art. 61. Para ser representante se necesita tener la edad de veintitres años, haber sido cinco ciudadano, bien sea de estado seglar o del eclesiástico secular, y hallarse en actual ejercicio de sus derechos. En los naturalizados, se requiere además de un año de residencia no interrumpida e inmediata a la elección, sino es que hayan estado ausentes en servicio a la República.

Art. 62. Los empleados del Gobierno de la Federación o de los Estados no podrán ser representantes en el Congreso, ni en las Asambleas por el territorio en que ejercen su cargo; ni los representantes serán empleados por estos Gobiernos durante sus funciones, ni -- obtendrán ascenso que no sea de rigurosa escala.

Art. 63. En ningún tiempo, ni con motivo alguno, los representantes pueden ser responsables por proposición, discurso o debate en el Congreso o fuera de él, sobre asuntos relativos a su encargo. Y durante las sesiones y un mes después no podrán ser demandados civilmente, ni ejecutados por deudas.

Art. 64. El Congreso resolverá en cada legislatura, el lugar de su residencia; pero tanto el Congreso como las demás autoridades federales no ejercerán otras facultades sobre la población donde residan, que las concernientes a mantener el orden y tranquilidad pública para asegurarse en el libre y decoroso ejercicio de sus funciones.

Art. 65. Cuando las circunstancias de la Nación lo permitan se construirá una ciudad para residencia de las Autoridades Federales, las que ejercerán en ella una jurisdicción exclusiva.

Art. 66. El Congreso se reunirá todos los años el día primero de marzo y sus sesiones durarán tres meses.

Art. 67. La primera Legislatura podrá prorrogarse el tiempo que juzgue necesario; las siguientes no podrán hacerlo por más de un mes.

Art. 68. Para toda resolución se necesita la concurrencia de la mayoría absoluta de los representantes, y el acuerdo de la mitad y uno más de los que se hallaren presentes; pero un número menor puede obligar a concurrir a los ausentes del modo y bajo las penas que se designen en el reglamento interior del Congreso.

SECCION 2

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO

Art. 69. Corresponde al Congreso:

- 1º Hacer las leyes, que mantienen la Federación, y aquellas en cuya uniformidad tiene un interés directo y conocido cada uno de los Estados.
- 2º Levantar y sostener el ejército y armada nacional.
- 3º Formar la ordenanza general de una y otra fuerza.
- 4º Autorizar al Poder Ejecutivo para emplear la milicia de los Estados, cuando lo exija la ejecución de la ley, o sea necesario contener insurrecciones o repeler invasiones.
- 5º Conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias - expresamente detalladas y por un tiempo limitado, en caso de guerra contra la independencia nacional.
- 6º Fijar los gastos de la administración general.
- 7º Decretar y designar rentas generales para cubrirlos; y no siendo bastantes, señalar el cupo correspondiente a cada Estado según su población y riqueza.
- 8º Arreglar la administración de las rentas generales; velar sobre su inversión y tomar cuentas de ella al Poder Ejecutivo.
- 9º Decretar en caso extraordinario pedidos, préstamos o impuestos extraordinarios.
- 10 Calificar y reconocer la deuda nacional.
- 11 Destinar los fondos necesarios para su amortización y réditos.
- 12 Contraer deudas sobre el erario nacional.
- 13 Suministrar empréstitos a otras naciones.
- 14 Dirigir la educación, estableciendo los principios generales mas con formes al sistema popular y al progreso de las artes útiles y de las ciencias; y asegurar a los inventores por el tiempo que se considere justo el derecho exclusivo en sus descubrimientos.
- 15 Arreglar y proteger el derecho de petición.
- 16 Declarar la guerra, y hacer la paz con presencia de los informes y preliminares que le comunique el Poder Ejecutivo.
- 17 Ratificar los tratados y negociaciones que haya ajustado el Poder Ejecutivo.
- 18 Conceder o negar la introducción de tropas extranjeras en la República.
- 19 Arreglar el comercio con las naciones extranjeras y entre los Estados de la Federación; y hacer leyes uniformes sobre las bancarrotas.
- 20 Habilitar puertos y establecer aduanas maritimas.
- 21 Determinar el valor, ley, tipo y peso de la moneda nacional, y el precio de la extranjera; fijar uniformemente los pesos y medidas; y decretar penas contra los falsificadores.

22. Abrir los grandes caminos y canales de comunicación; establecer y dirigir postas y correos generales de la República.

23. Formar la ordenanza del corzo: dar leyes sobre el modo de juzgar las pitaterias, y decretar las penas contra éste y otros atentados cometidos en alta mar y con infracción del derecho de gentes.

24. Conceder amnistías o indultos generales en el caso que designa el art. 118.

25. Crear tribunales inferiores que conozcan en asuntos propios de la Federación.

26. Calificar las elecciones populares de las autoridades federales a excepción de las del Senado.

27. Admitir por dos terceras partes de votos las renunciaciones que por causas graves hagan de sus oficios los representantes en el Congreso, el Presidente y Vicepresidente de la República, los Senadores después que hayan tomado posesión y los individuos de la Suprema Corte de Justicia.

28. Señalar los sueldos de los representantes en el Congreso, del Presidente y Vicepresidente, de los Senadores, de los individuos de la Suprema Corte y de los demás agentes de la Federación.

29. Velar especialmente sobre la observación de los artículos contenidos en los Títulos 10 y 11 y anular, sin las formalidades prevenidas en el Art. 194, toda disposición legislativa que los contrarie.

30. Conceder permiso para obtener de otra nación pensiones, distintivos o títulos personales, siendo compatibles con el sistema de Gobierno de la República.

31. Resolver sobre la formación y admisión de nuevos Estados.

Art. 70. Cuando el Congreso fuere convocado extraordinariamente, sólo tratafa de aquellos asuntos que hubieren dado motivo a la convocatoria.

TITULO V

DE LA FORMACION, SANCION Y PROMULGACION DE LA LEY.

SECCION 1.

DE LA FORMACION DE LA LEY

Art. 71. Todo proyecto de ley debe presentarse por escrito, y sólo tienen facultad de presentarlo al Congreso, los Representantes y los Secretarios del Despacho; pero estos últimos no podrán hacer proposiciones sobre ninguna clase de impuestos.

Art. 72. El proyecto de ley debe leerse por dos veces en días diferentes antes de resolver si se admite o no a discusión.

Art. 73. Admitido, deberá pasar a una Comisión que lo examinará detenidamente y no podrá presentarlo sino después de tres días.

El informe que diese tendrá también dos lecturas en días diversos y señalado el de su discusión con el intervalo a lo menos de otros tres, no podrá diferirse más tiempo sin acuerdo del Congreso.

Art. 74. La ley sobre formación de nuevos Estados se hará - según lo prevenido en el Título 14.

Art. 75. No admitido a discusión, o desechado un proyecto de ley, no podrá volver a proponerse sino hasta el año siguiente.

Art. 76. Si se adoptare el proyecto, se extenderá por triplicado en forma de ley: se leerá en el Congreso, y, firmado los tres originales por el Presidente y dos Secretarios, se remitirán al Senado.

SECCION 2

DE LA SANCION DE LA LEY

Art. 77. Todas las resoluciones del Congreso dictadas en uso de las atribuciones que le designa la Constitución, necesitan para ser válidas tener la sanción del Senado, exceptuando únicamente las que fueren:

- 1º. Sobre su regimen interior, lugar y prórroga de sus sesiones.
- 2º Sobre calificación de elecciones y renuncia de los elegidos.
- 3º Sobre concesión de cartas de naturaleza.
- 4º Sobre declaratoria de haber lugar a la formación de causa contra cualquier funcionario.

Art. 78. El Senado dará la sanción por mayoría absoluta de votos con esta fórmula: "Al Poder Ejecutivo"; y la negará con esta otra: "Vuelva al Congreso".

Art. 79. Para dar o negar la sanción tomará desde luego informes del Poder Ejecutivo, que deberá darlos en el termino de ocho días.

Art. 80. El Senado dará o negará la sanción entre los diez días inmediatos. Si pasado este término no la hubiere dado o negado, la resolución la obtiene por el mismo hecho.

Art. 81. El Senado deberá negarla, cuando la resolución sea en cualquier manera contraria a la Constitución, o cuando juzgare que su observancia no es conveniente a la República. En estos dos casos devolverá al Congreso uno de los originales con la formula correspondiente, puntualizando por separado las razones en que funde su opinión. El Congreso las examinará y discutirá de nuevo la resolución de vuelta. Si fuere ratificada por dos terceras partes de votos, la sanción se tendrá por dada, y en efecto, la dará el Senado. En caso contrario

trario no podrá proponerse de nuevo sino hasta el año siguiente.

Art. 82. Cuando la resolución fuere sobre contribuciones de cualquier clase que sean, y el Senado rehusare sancionarla, se necesita el acuerdo de las tres cuartas partes del Congreso para su ratificación. Ratificada que sea, se observará en lo demás lo prevenido en el artículo anterior.

Art. 83. Cuando el Senado rehusare sancionar una resolución del Congreso por ser contraria a los títulos 10 y 11, se requiere también para ratificarla el acuerdo de las tres cuartas partes del Congreso, y debe pasar segunda vez al Senado para que dé o niegue la sanción.

Art. 84. Si aun así, no la obtuviere, o si la resolución no hubiere sido ratificada, no puede volver a proponerse sino hasta el año siguiente, debiendo entonces sancionarse o ratificarse según las reglas comunes a toda resolución.

Art. 85. Cuando la mayoría de los Estados reclamare las resoluciones del Congreso en el caso del Art. 83, deberán ser inmediatamente revisadas sin perjuicio de su observancia, y recibir nueva sanción por los tramites prevenidos en el mismo artículo, procediéndose en lo demás conforme al 84.

Art. 86. Dada la sanción constitucionalmente, el senado devuelve con ella al Congreso un original, y pasa otro al Poder Ejecutivo para su ejecución.

SECCION 3

DE LA PROMULGACION DE LA LEY

Art. 87. El Poder Ejecutivo luego que reciba una resolución sancionada, o de las que trata el Art. 77 debe bajo la más estrecha responsabilidad, ordenar su cumplimiento; disponer entre quince días lo necesario a su ejecución; y publicarla y circularla, pidiendo al Congreso prorrogar del termino si en algún caso fuere necesaria.

Art. 88. La promulgación se hará en esta forma: "Por cuanto el Congreso decreta y el senado sanciona lo siguiente (el texto literal), por tanto: ejecutese".

TITULO VI

DEL SENADO Y SUS ATRIBUCIONES

SECCION 1

DEL SENADO

Art. 89. Habrá un Senado compuesto de miembros elegidos popularmente en razón de dos por cada Estado: se renovará anualmente por tercios, pudiendo sus individuos ser reelectos una vez sin intervalo alguno.

Art. 90. Para ser senador se requiere, naturaleza en la República, tener treinta años cumplidos, haber sido siete ciudadano, bien ser del estado seglar o eclesiástico secular y estar en actual ejercicio de sus derechos.

Art. 91. Nombrará cada Estado un suplente, que tenga las mismas calidades, para los casos de muerte, o imposibilidad declarada por el mismo Senado.

Art. 92. Uno solo de los senadores que nombre cada Estado podrá ser eclesiástico..

Art. 93. El Senado en su primera sesión se dividirá por suerte con la igualdad posible en tres partes, las que sucesivamente se renovarán cada año.

Art. 94. El Vicepresidente de la República presidirá el Senado, y sólo sufragará en caso de empate.

Art. 95. En su falta nombrará el Senado entre sus individuos un presidente, que deberá tener las calidades que se requieren para Presidente de la República.

Art. 96. El Vicepresidente se apartará del Senado cuando éste nombre los individuos del Tribunal que establece el artículo 147.

Art. 97. Las sesiones del Senado durarán todo el año en la forma que prevenga su reglamento.

SECCION 2

DE LAS ATRIBUCIONES DEL SENADO

Art. 98. El Senado tiene la sanción de todas las resoluciones del Congreso en la forma que se establece en la Sección 2, Tít. V.

Art. 99. Cuidará de sostener la Constitución; velará sobre el cumplimiento de las leyes generales, y sobre la conducta de los funcionarios del Gobierno Federal.

Art. 100. Dará consejo al Poder Ejecutivo:

1º Acerca de las dudas que ofrezca la ejecución de las resoluciones del Congreso.

2º En los asuntos que provengan de las relaciones y tratados con potencias extranjeras.

3º En los de gobierno interior de la República.

4º En los de guerra o insurrección.

Art. 101. Convocará al Congreso en casos extraordinarios, citando a los suplentes de los representantes que hubieren fallecido durante el receso.

Art. 102. Propondrá ternas al Poder Ejecutivo para el nombramiento de los diplomáticos, del comandante de las armas de la Federación, de todos los oficiales del ejército del coronel inclusive arriba, de los comandantes de los puertos y fronteras, de los Ministros de la Tesorería General y de los Jefes de las rentas generales.

Art. 103. Declarará cuando ha lugar a la formación de causa contra los Ministros Diplomáticos y Cónsules en todo género de delitos; y contra los Secretarios del Despacho, el Comandante de armas de la Federación, los Comandantes de los puertos y fronteras, los Ministros de la Tesorería General, y los Jefes de las Rentas generales, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, quedando sujetos en todo lo demás a los tribunales comunes.

Art. 104. Intervendrá en las controversias que designa el artículo 194; y nombrará en sus primeras sesiones el tribunal que establece el Art. 147.

Art. 105. Reveerá las sentencias de que habla el Art. 137.

TITULO VII

DEL PODER EJECUTIVO, DE SUS ATRIBUCIONES, Y DE LOS SECRETARIOS DE DESPACHO.

SECCION 1

DEL PODER EJECUTIVO

Art. 106. El Poder Ejecutivo se ejercerá por un Presidente nombrado por el pueblo de todos los Estados de la Federación.

Art. 107. En su falta hará sus veces un Vicepresidente, - nombrado igualmente por el pueblo.

Art. 108. En falta de uno y otro, el Congreso nombrará un senador de las calidades que designa el Art. 110. Si el impedimento no fuere temporal, y faltare más de un año para la renovación periódica, dispondrá se proceda a una nueva elección, la que deberá hacerse desde las juntas populares hasta su complemento. El que así fuere electo durará en sus funciones el tiempo designado en el Art. 111.

Art. 109. Cuando la falta de que habla el artículo anterior, ocurra no hallándose reunido el Congreso, se convocará extraordinariamente; y entretanto ejercerá el poder ejecutivo el que presida el Senado.

Art. 110. Para ser Presidente y Vicepresidente se requiere naturalidad en la República, tener treinta años cumplidos, haber sido siete ciudadano, ser del estado seglar y hallarse en actual ejercicio de sus derechos.

Art. 111. La duración del Presidente y Vicepresidente será por cuatro años, y podrán ser reelegidos una vez sin intervalo alguno.

Art. 112. El Presidente no podrá recibir de ningún Estado, autoridad o persona particular emolumentos o dádivas de ninguna especie; ni sus sueldos serán alterados durante su encargo.

SECCION 2

DE LAS ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO

Art. 113. El Poder Ejecutivo publicará la ley, cuidará de su observancia y del orden público.

Art. 114. Consultará al Congreso de la ley, y al Senado sobre las dudas y dificultades que ofrezca su ejecución. Debe en este caso conformarse con su dictamen y cesa su responsabilidad.

Art. 115. Entablará, consultando al Senado, las negociaciones y tratados con las potencias extranjeras; le consultará, asimismo, sobre los negocios que provengan de estas relaciones; pero en ninguno de los dos casos está obligado a conformarse con su dictamen.

Art. 116. Podrá consultar al Senado en los negocios graves del gobierno interior de la República, y en los de guerra o insurrección.

Art. 117. Nombrará los funcionarios de la República que designa el Art. 102, a propuesta del Senado, los que designa el artículo 139, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia; y los subalternos de unos y otros, y los oficiales de la fuerza permanente, que no llegaren a la graduación de Coronel, por igual propuesta de sus Jefes o superiores respectivos.

Art. 118. Cuando por algún grave acontecimiento peligre la salud de la patria y convenga usar de amnistia o indulto, el Presidente lo pondrá al Congreso.

Art. 119. Dirigirá toda la fuerza armada de la Federación; podrá reunir la cívica y disponer de ella cuando se halle en servicio activo de la República, y mandar en persona el Ejército con -- aprobación del Senado, en cuyo caso recaerá el gobierno en el Vice presidente.

Art. 120. Podrá usar de la fuerza para repeler invasiones o contener insurrecciones, dando cuenta inmediatamente al Congreso, o en su receso al Senado.

Art. 121. Concederá con aprobación del Senado, los premios honoríficos compatibles con el sistema de Gobierno de la Nación.

Art. 122. Podrá separar libremente y sin necesidad de instrucción de causa, a los Secretarios del Despacho, trasladar, con arreglo a las leyes, a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Federal, suspenderlos por seis meses y deponerlos con pruebas justificativas de ineptitud o desobediencia y con acuerdo, en vista de ellas, de las dos terceras partes del Senado.

Art. 123. Presentará por medio de los Secretarios del Despacho al abrir sus sesiones, un detalle circunstanciado del estado de todos los ramos de la Administración pública y del Ejército y - Marina, con los proyectos que juzgue más oportunos para su conservación o mejora; y una cuenta exacta de los gastos hechos, con el presupuesto de los venideros y medios para cubrirlos.

Art. 124. Dará al Congreso y al Senado los informes que le pidieren y cuando sean sobre asuntos de reserva, lo expondrá así - para que el Congreso o el Senado le dispensen de su manifestación, o se le exijan, si el caso lo requiere. Mas no estará obligado a - manifestar los planes de guerra ni las negociaciones de alta política pendientes con las potencias extranjeras.

Art. 125. En caso de que los informes sean necesarios para exigir la responsabilidad al Presidente, no podrá rehusarse por -- ningún motivo, ni reservarse los documentos después que se haya de clarado haber lugar a la formación de causa.

Art. 126. No podrá el Presidente sin licencia del Congreso separarse del lugar en que éste reside; ni salir del territorio de la República hasta seis meses después de concluido su encargo.

Art. 127. Cuando el Presidente sea informado de alguna conspiración o traición a la República y de que la amenaza un proximo riesgo, podrá dar órdenes de arresto e interrogar a los que presuma reos; pero en el término de tres días los pondrá, precisamente, a disposición del Juez respectivo.

Art. 128. Comunicará a los Jefes de los Estados las leyes y disposiciones generales, y les prevendrá lo conveniente en todo cuanto concierna al servicio de la Federación y no estuviere encargado a sus agentes particulares.

SECCION 3

DE LOS SECRETARIOS DEL DESPACHO

Art. 129. El Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, designará el número de los Secretarios del Despacho; organizará las Secretarías, y fijará los negocios que a cada una corresponden.

Art. 130. Para ser Secretario del Despacho se necesita ser americano de origen, ciudadano en el ejercicio de sus derechos y mayor de veinticinco años.

Art. 131. Las órdenes del Poder Ejecutivo se expedirán por medio del Secretario del ramo a que corresponden; y las que de otra suerte se expedieren no deben ser obedecidas.

TITULO VIII

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y DE SUS ATRIBUCIONES.

SECCION 1.

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

Art. 132. Habrá una Suprema Corte de Justicia que según disponga la ley se compondrá de cinco a siete individuos: serán elegidos por el pueblo, se renovarán por tercios cada dos años y podrán siempre ser reelegidos.

Art. 133. Para ser individuo de la Suprema Corte se requiere ser americano de origen, con siete años de residencia no interrumpida e inmediata a la elección, ciudadano en el ejercicio de sus derechos, del estado seglar y mayor de treinta años.

Art. 134. En falta de algún individuo de la Suprema Corte hará sus veces uno de tres suplentes que tendrán las mismas calidades y serán elegidos por el pueblo después del nombramiento de los propietarios.

Art. 135. La Suprema Corte designará, en su caso, el suplente que deba concurrir.

SECCION 2

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

Art. 136. Conocerá en última instancia, con las limitaciones y arreglo que hiciere el Congreso en los emanados de la Constitución, de las leyes generales, de los tratados hechos por la República, de jurisdicción marítima, y de competencia sobre jurisdicción en controversia de ciudadanos o habitantes de diferentes Estados.

Art. 137. En los casos de contienda en que sea parte toda la República, uno o más Estados, con alguno o algunos otros, o con extranjeros o habitantes de la República, la Corte Suprema de justicia hará nombren arbitros para la primera instancia, conocerá en la segunda, y la sentencia que diere será llevada en revista al Senado, caso de no conformarse las partes con el primero y el segundo juicio, y de haber lugar a ella, según la ley.

Art. 138. Conocerá originariamente con arreglo a las leyes en las causas civiles de los Ministros Diplomáticos y Cónsules; y en las criminales de todos los funcionarios en que declara el Senado, según el Art. 103, haber lugar a la formación de causa.

Art. 139. Propondrá ternas al Poder Ejecutivo para que nombre los Jueces que deben componer los tribunales inferiores de que habla el Art. 69, número 25.

TITULO IX

DE LA RESPONSABILIDAD Y MODO DE PROCEDER EN LAS CAUSAS DE LAS SUPREMAS AUTORIDADES FEDERALES.

Sección Unica.

Art. 141. Los funcionarios de la Federación, antes de posesionarse de sus destinos, prestarán juramento de ser fieles a la República y de sostener con toda su autoridad la Constitución y las leyes.

Art. 142. Todo funcionario público es responsable, con arreglo a la ley, del ejercicio de sus funciones.

Art. 143. Deberá declararse que ha lugar a la formación de causa contra los representantes en el Congreso por traición, venalidad, falta grave en el desempeño de sus funciones y delitos comunes que merezcan pena más que correccional.

Art. 144. En todos estos casos, y en los de infracción de causa contra los individuos del Senado, de la Corte Suprema de Justicia, contra el Presidente u Vicepresidente de la República y Secretario del Despacho.

Art. 145. Todo acusado queda suspenso en el acto de declararse que ha lugar a la formación de causa; depuesto siempre que resulte reo; e inhabilitado para todo cargo público si la causa diere mérito, según la ley. En los demás a que hubiere lugar se sujetarán al orden y tribunales comunes.

Art. 146. Los delitos mencionados producen acción popular, y las acciones de cualquier ciudadano o habitante de la República deben ser atendidas.

Art. 147. Habrá un tribunal compuesto de cinco individuos que nombrará el Senado entre los suplentes del mismo o del Congreso, que no hayan entrado al ejercicio de sus funciones. Sus facultades se determinan en los artículos 149 y 150.

Art. 148. En las acusaciones contra individuos del Congreso, declarará éste cuando ha lugar a la formación de causa, la que será seguida y terminada, según la ley de su régimen interior.

Art. 149. En las acusaciones contra el Presidente y Vicepresidente, si ha hecho sus veces, declarará el Congreso cuando ha lugar a la formación de causa, juzgará la Suprema Corte, y conocerá en apelación el Tribunal que establece el artículo 147.

Art. 150. En las acusaciones contra los individuos de la Suprema Corte, el Congreso declarará cuando ha lugar a la formación de causa, y juzgará el Tribunal que establece el artículo 147.

Art. 151. En las acusaciones contra los Senadores y Vicepresidente, declarará el Congreso cuando ha lugar a la formación de causa, y juzgará la Suprema Corte.

TITULO X

GARANTIAS DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL

Sección Unica

Art. 152. No podrá imponerse pena de muerte, sino en los delitos que atenten directamente contra el orden público, y en el de asesinato, homicidio premeditado o seguro.

Art. 153. Todos los ciudadanos y habitantes de la República - sin distinción alguna, estarán sometidos al mismo orden de procedimientos y de juicios que determinen las leyes.

Art. 154. Las Asambleas, tan luego como sea posible, establecerán el sistema de jurados.

Art. 155. Nadie puede ser preso sino en virtud de orden escri-

a de autoridad competente para darla.

Art. 156. No podrá librarse esta orden sin que preceda justificación de que se ha cometido un delito que merezca pena más que correccional, y sin que resulte, al menos por el dicho de un testigo, quien es el delincuente.

Art. 157. Pueden ser detenidos: 1º., el delincuente, cuya fuga se tema con fundamento; 2º., el que sea encontrado en el acto de delinquir, y en este caso todos pueden aprehenderle para llevarle al Juez.

Art. 158. La detención de que habla el artículo anterior no podrá durar más de cuarenta y ocho horas, y durante este término deberá la autoridad que la haya ordenado, practicar lo prevenido en el artículo 156, y librar por escrito la orden de prisión o poner en libertad al detenido.

Art. 159. El alcaide no puede recibir ni detener en la cárcel a ninguna persona, sin transcribir en su registro de presos o detenidos la orden de prisión o detención.

Art. 160. Todo preso debe ser interrogado dentro de cuarenta y ocho horas; y el Juez está obligado a decretar la libertad o permanencia en la prisión, dentro de las veinticuatro horas siguientes, según el mérito de lo actuado.

Art. 161. Puede, sin embargo, imponerse arresto por pena correccional, previas las formalidades que establezca el Código de cada Estado.

Art. 162. El arresto por pena correccional no puede pasar de un mes.

Art. 163. Las personas aprehendidas por la autoridad no podrán ser llevadas a otros lugares de prisión, detención o arresto, que a los que estén legalmente y públicamente destinados al efecto.

Art. 164. Cuando algún reo no estuviere incomunicado por orden del juez transcrita en el registro del alcaide, no podrá impedir su comunicación con persona alguna.

Art. 165. Todo el que no estando autorizado por la ley expediere, firmare, ejecutare o hiciere ejecutar la prisión, detención o arresto autorizado por la ley, condujere, recibiere o retuviere al reo en lugar que no sea de los señalados pública y legalmente, y todo alcaide que contraviniere las disposiciones precedentes, es reo de detención arbitraria.

Art. 166. No podrá ser llevado ni detenido en la cárcel el que diere fianza en los casos que la ley expresamente no la prohíba.

Art. 167. Las Asambleas dispondrán que haya visitas de cárceles para toda clase de presos, detenidos o arrestados.

Art. 168. Ninguna casa puede ser registrada, sino por mandato escrito de autoridad competente, dado en virtud de dos disposiciones formales que presten motivo al allanamiento, el cual deberá efectuarse de día. También podrá registrarse a toda hora por un agente de la autoridad pública: 1º, en persecución actual de un delincuente; 2º, por un desorden o escándalo que exija pronto remedio; 3º, por reclamación hecha del interior de la casa. Mas hecho el registro, se comprobará con dos disposiciones que se hizo por algunos de los motivos indicados.

Art. 169. Sólo en los delitos de traición se pueden ocupar los papeles de los habitantes de la República; y unicamente podrá practicarse su examen cuando sea indispensable para la averiguación de la verdad, y a presencia del interesado, devolviéndole en el acto cuantos no tengan relación con lo que se indaga.

Art. 170. La policía de seguridad no podrá ser confiada sino a las autoridades civiles, en la forma en que la ley determine.

Art. 171. Ningún juicio civil o sobre injurias podrá entablarse sin hacer constar que se ha intentado antes el medio de conciliación.

Art. 172. La facultad de nombrar arbitros en cualquier estado del pleito es inherente a toda persona: la sentencia que los árbitros dieren es inapelable, si las partes comprometidas no se reservaren este derecho.

Art. 173. Unos mismo jueces no pueden serlo en dos diversas instancias.

Art. 174. Ninguna ley del Congreso ni de las Asambleas pueden contrariar las garantías contenidas en este título pero si ampliarlas y dar otras nuevas.

TITULO XI

DISPOSICIONES GENERALES

Sección Unica

Art. 175. No podrán el Congreso, las Asambleas, ni las demás autoridades:

1º Coartar, en ningún caso ni por pretexto alguno, la libertad del pensamiento, la de la palabra, la de la escritura y la de la imprenta.

2º Suspender el derecho de peticiones de palabra o por escrito.

3º Prohibir a los ciudadanos o habitantes de la República libres de responsabilidad, la emigración a país extranjero.

4º Tomar la propiedad de ninguna persona, ni turbarle en el libre uso de sus bienes, sino en favor del público cuando lo exija una grave urgencia legalmente comprobada; y garantizándose previamente la justa indemnización.

5º Establecer vinculaciones; dar títulos de nobleza; ni pensiones, condecoraciones o distintivos que sean hereditarios; ni con sentir sean admitidos por ciudadanos de Centroamérica los que otras naciones pudieran concederles.

6º Permitir el uso del tormento y los apremios; imponer con fiscación de bienes, azotes y penas crueles.

7º Conceder, por tiempo ilimitado, privilegios exclusivos a o compañías de comercio o corporaciones industriales.

8º Dar leyes de proscripción, retroactivas, ni que hagan -- trascendental la infancia.

Art. 176. No podrán, sino en el caso de tumulto, rebelión o ataque con fuerza armada a las autoridades constituidas:

1º Desarmar a ninguna población, ni despojar a persona alguna de cualquier clase de armas que tengan en su casa o de la que lleve ilícitamente.

2º Impedir las reuniones populares que tengan por objeto un placer honesto, o discutir sobre política y examinar la conducta pública de los funcionarios.

3º Dispensar las formalidades sagradas de la ley para allanar la casa de algún ciudadano o habitante, registrar su correspondencia privada, reducirlo a prisión o detenerlo.

4º Formar comisiones o tribunales especiales para conocer -- en determinados delitos, o para alguna clase de ciudadanos o habitantes.

TITULO XII

DEL PODER LEGISLATIVO, DEL CONSEJO REPRESENTATIVO, DEL PODER EJECUTIVO Y DEL JUDICIARIO DE LOS ESTADOS.

SECCION 1.

DEL PODER LEGISLATIVO

Art. 177. El Poder Legislativo de cada Estado reside en una Asamblea de representantes elegidos por el pueblo que no podrán ser menos de once ni más de veintiuno.

Art. 178. Corresponde a las primeras Legislaturas: formar la Constitución particular del Estado conforme a la Constitución Federal.

Y corresponde a todas:

1º Hacer sus leyes, ordenanzas y reglamentos.

2º Determinar el gasto de su administración y decretar los impuestos de todas clases necesarios para llenar éste, y el cupo que les corresponda en los gastos generales; mas sin consentimiento del Congreso no podrán imponer contribuciones de entrada y salida en el comercio con los extranjeros ni en el de los estados entre sí.

3º Fijar periódicamente la fuerza de línea, si se necesita-se en tiempo de paz, con acuerdo del Congreso; crear la civil y le-vantar toda la que les corresponda en tiempo de guerra.

4º Elegir los establecimientos que se consideren convenientes para el mejor orden en justicia, economía, instrucción pública y en todos los ramos de la administración.

5º Admitir por dos terceras partes de votos las renunciaciones - que antes de posesionarse y por causas graves hagan de sus oficios - los Senadores..

SECCION 2.

DEL CONSEJO REPRESENTATIVO DE LOS ESTADOS.

Art. 179. Habrá un Consejo representativo compuesto de representantes elegidos popularmente en razón de uno por cada sección territorial del Estado, según la división que haga su Asamblea.

Art. 180. Corresponde al Consejo representativo:

1º Dar sanción a la ley.

2º Aconsejar al Poder Ejecutivo, siempre que sea consultado.

3º Proponerle para el nombramiento de los primeros funcionarios.

4º Cuidar su conducta y declarar cuando ha lugar a la formación de causa.

SECCION 3.

DEL PODER EJECUTIVO DE LOS ESTADOS.

Art. 181. El Poder Ejecutivo reside en un jefe nombrado por el pueblo del Estado.

Art. 182. Está a su cargo:

1º Ejecutar la ley y cuidar el orden público.

2º Nombrar los primeros funcionarios del Estado a propuesta en terna del Congreso, y los subalternos a propuesta igual de sus jefes.

32 Disponer de la fuerza armada del Estado y usar de ella para su defensa en caso de invasión repentina, comunicandolo inmediatamente a la Asamblea o en su receso al Consejo, para que den cuenta al Congreso.

Art. 183. En falta del Jefe del Estado, hará sus veces un segundo jefe, igualmente nombrado por el pueblo.

Art. 184. El segundo Jefe será Presidente del Consejo y sólo votará en caso de empate.

Art. 185. En falta del Presidente lo elegirá el Consejo de, entre sus individuos.

Art. 186. El segundo Jefe no asistirá al Consejo en los mismos casos en que el Vicepresidente de la República debe separarse del Senado.

Art. 187. El Jefe y segundo Jefe del Estado durarán en sus funciones cuatro años, y podrán sin intervalo alguno ser una vez reelegidos.

Art. 188. Responderán al Estado del buen desempeño en el ejercicio de sus funciones.

SECCION 4.

DEL PODER JUDICIAL DE LOS ESTADOS.

Art. 189. Habrá una Corte superior compuesta de jueces elegidos popularmente, que se renovarán por periodos.

Art. 190. Será el Tribunal de última instancia.

Art. 191. El orden de procedimientos en las causas contra los representantes en la Asamblea, contra el Poder Ejecutivo y contra los individuos del Consejo y de la Corte Superior de cada Estado, se establecerá en la forma y bajo las reglas designadas para las autoridades federales.

TITULO XIII

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS ESTADOS.

Sección Unica.

Art. 192. Los Estados deben entregarse mutuamente los reos que se reclamaren.

Art. 193. Los actos legales y jurídicos de un Estado serán reconocidos en todos los demás.

Art. 194. En caso de que algún Estado o autoridades constituidas reclamen de otro el haber traspasado su Asamblea los límites constitucionales, tomará el Senado los informes convenientes entre sí o la Asamblea de quien se reclama no se conformare con su juicio, el negocio será llevado al Congreso, y su decisión será la terminante.

Art. 195. Pueden ser elegidos representantes, senadores, jefes, consejeros e individuos de la Corte Superior de Justicia de cada uno de los Estados los ciudadanos hábiles de los otros; pero no son obligados a admitir estos oficios.

TITULO XIV

DE LA FORMACION Y ADMISION DE NUEVOS ESTADOS.

Sección Unica.

Art. 196. Podrán formarse en lo sucesivo nuevos Estados y admitirse otros en la Federación.

Art. 197. No podrá formarse nuevo Estado en el interior de otro Estado. Tampoco podrá formarse por la unión de dos o más Estados, o partes de ellos, si no estuvieren en contacto, y sin el consentimiento de las Asambleas respectivas.

Art. 198. Todo proyecto de ley sobre la formación de nuevo Estado debe ser propuesto al Congreso por la mayoría de los representantes de los pueblos que han de formarlo y apoyado en los precisos datos de tener una población de cien mil o más habitantes, y de que el Estado de que se separa queda con igual población y en capacidad de subsistir.

TITULO XV

DE LAS REFORMAS Y DE LA SANCION DE ESTA CONSTITUCION.

SECCION 1.

DE LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCION.

Art. 199. Para poder discutirse un proyecto en que se reforme o adiciones esta Constitución, debe presentarse firmado al menos por seis representantes en el Congreso, o ser propuesto por alguna Asamblea de los Estados.

Art. 200. Los proyectos que se presenten en esta forma si no fueren admitidos a discusión, no podrán volver a proponerse sino has ta el año siguiente.

Art. 201. Los que fueren admitidos a discusión, puestos en estado de votarse, necesitan para ser acordados las dos terceras par-tes de los votos.

Art. 202. Acordada la reforma o adición debe para ser constitucional, aceptarse por la mayoría absoluta de los Estados con las - terceras partes de la votación de sus Asambleas.

Art. 203. Cuando la reforma o adición versare sobre algún punto que altere en lo esencial la forma de gobierno adoptada, el Congreso, después de la aceptación de los Estados, convocará una Asamblea - nacional constituyente para que definitivamente resuelva.

SECCION 2.

DE LA SANCION

Art. 204. Sancionará esta Constitución el primer Congreso Fede ral.

Art. 205. La sanción recaerá sobre toda la Constitución y sobre alguno o algunos artículos.

Art. 206. La sanción será dada nominalmente por la mayoría -- absoluta y nagada por las dos terceras partes de votos del Congreso.

Art. 207. Si no concurriere la mayoría a dar la sanción ni las terceras partes a negarla, se discutirá de nuevo por espacio de - ocho días, al fin de los cuales se votará precisamente.

Art. 208. Si de la segunda votación aún no resultare acuerdo, serán llamados al Congreso los Senadores, y concurrirán como represen- tantes a resolver sobre la sanción.

Art. 209. Incorporados los Senadores en el Congreso se abrirá por tercera vez la discusión, que no podrá prolongarse más de quince días; y si después de votarse no resultare la mayoría de los votos pa- ra dar la sanción, ni las dos terceras partes para negarla, la Consti- tución queda sancionada en virtud de este artículo constitucional.

Art. 210. Dada la sanción, se publicará con la mayor solemnidad; negada, el Congreso convocará sin demora una Asamblea Nacioanl constituyente.

Art. 211. Esta Constitución, aún antes de sancionarse, regirá en toda su fuerza y vigor, como su publicación, mientras fuere sancionada.

Dada en la ciudad de Guatemala, a veintidos de noviembre de mil ochocientos veinticuatro.

Fernando Antonio Dávila, Diputado por el Estado de Guatemala, Presidente; José Nicolás Irujo, Diputado por el Estado de Honduras, Vicepresidentes.

Representantes por el Estado de Costa Rica:

José Antonio Alvarado, Juan de los Santos Madriz, Luciano Alvarado, Pablo Alvarado.

Representantes por el Estado de Nicaragua:

Toribio Argüello, Francisco Quiñones, Tomás Muñoz, Manuel Barberena, Benito Rosales, Manuel Mendoza, Juan Modesto Hernández, Filadelfo Benavent.

Representantes por el Estado de Honduras:

Juan Miguel Fiallos, Miguel Antonio Pineda, Juan Esteban Milla, José Jerónimo Zelaya, Joaquín Lindo, Pío José Castellón, Francisco Márquez, Próspero de Herrera, Francisco Aguirre, José Francisco Zelaya.

Representantes por el Estado de El Salvador:

José Matías Delgado, Juan Vicente Villacorta, Mariano de Beltrama, Ciríaco Villacorta, José Ignacio de Marticorena, Joaquín de Letona, José Francisco de Córdova, Isidro Méndez, Leoncio Domínguez, Marcelino Menéndez, Pedro José Cuellar, Mariano Navarrete.

Representantes por el Estado de Guatemala:

José Barrundia, Antonio Rivera, José Antonio Alcazaga, Cirilo Flores, José Antonio Amittia, Francisco Flores, Juan Miguel de Beltrama, Julián de Castro, José Simón Cañas, José María Agüero, Luis Barritia, José María Herrera, Eusebio Arzate, José Ignacio Grijalva, José Serapio Sánchez, Miguel Ordóñez, Mariano Gilves, Francisco Xavier Valenzuela, Francisco Carrascal, Mariano Zenteno, Antonio González, - Basilio Chavarría, Juan Nepomuceno Fuentes, José Domingo Estrada, José Antonio de Larrave, Diputado por el Estado de Guatemala, Secretario; Juan Francisco de Sosa, Diputado por el Estado de El Salvador, Secretario; Mariano de Córdova, Diputado por el Estado de Guatemala, Secretario; José Batista, Diputado por el Estado de Guatemala, Secretario.

Palacio Nacional del Supremo Poder Ejecutivo de la República Federal de Centroamérica, en Guatemala, a veintidos de noviembre de mil ochocientos veinticuatro.

Ejecútense.- Firmado de nuestra mano, sellado con el sello de

444

424

de la República y refrendado por el Secretario Interior del Estado y
del Despacho de Relaciones Exteriores.

José Manuel de la Cerda, Tomás O. Horán, José del Valle.-
El Secretario de Estado, Manuel J. Ibarra.

C O N S T I T U C I O N
D E L E S T A D O D E H O N D U R A S

CONSTITUCION DE 1.825

NOSOTROS LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS DEL ESTADO DE HONDURAS, REUNIDOS EN LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, A VIRTUD DE LOS PLENOS PODERES CON QUE SE NOS HA AUTORIZADO, CON ARREGLO A LAS BASES CONSTITUCIONALES, DECRETADAS POR LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, IMPLORANDO LA PROTECCION DE DIOS PARA EL ACIERTO, ORDENAMOS, DECRETAMOS Y SANCIONAMOS LA SIGUIENTE CONSTITUCION:

CAPITULO 1

Del Estado.

Art. 1.- El Estado de Honduras es libre é independiente de toda potencia ó gobierno extranjero, y no será jamas patrimonio de ninguna familia ni persona.

Art. 2.- Es uno de los federales de la República de Centro América.

Art. 3.- El es libre é independiente en su interior administración y gobierno.

Art. 4.- Su territorio comprende todo lo que corresponde, y ha correspondido siempre al obispado de Honduras. Una ley demarcará sus limites, y arreglará sus departamentos.

CAPITULO II

De la Religión.

Art. 5.- El Estado de Honduras profesa, y profesará, siempre, - inviolablemente la Religión cristiana, apostólica, romana, sin permitir mezcla de otra alguna.

Art. 6.- El Estado la protegerá con leyes sabias y justas; y no consentirá, se hagan alteraciones en la disciplina eclesiastica, - sin consultar a la Silla Apostólica.

Art. 7.- Todo ciudadano, y principalmente los que ejercen jurisdicción velarán sobre las observancias de los artículos anteriores. Las leyes designaran las penas que merecen los infractores.

CAPITULO III

De los Derechos y Obligaciones de los hondureños y del Gobierno - del Estado.

Art. 8.- Todos los Hondureños son libres, y ciudadanos los que tengan la edad, y demas condiciones que establece la Constitución de la República.

Art. 9.- El Estado protege con leyes sabias y justas la libertad la propiedad, y la igualdad; viviendo sujetos a la Constitución y la ley; respetando a las autoridades; contribuyendo con proporción a sus facultades para los gastos del Estado y federación, para sostener la independendencia, su integridad y seguridad; y tomando las armas para defender la patria, cuando fueren llamados por la ley.

Art. 10.- El gobierno del Estado es popular representativo, y en la federación que ha acordado, fija su felicidad y prosperidad.

Art. 11.- El Supremo Poder estará dividido en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; aunque estos dos últimos, la Asamblea del Estado, podrá hacer alteración, por medio de una ley, en las autoridades subalternas, segun lo exijan las circunstancias y localidad.

Art. 12. Los pueblos que componen el Estado, ni por sí, ni por autoridad alguna, pueden ser despojados de la soberanía, que reside en todos, no podrán ejercerla sino unicamente en las elecciones primarias, practicandolas en la forma que prescribe la Constitución federal.

Art. 13.- Los habitantes del Estado de Honduras tienen el derecho de petición y la libertad de imprenta para publicar sus discursos, proponer medios útiles al Estado, y censurar con decoro la conducta de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, y el de velar sobre el cumplimiento de las leyes, que se dicten sobre los objetos indicados en este artículo.

CAPITULO IV

De la Elección de los Supremos Poderes del Estado.

Art. 14.- La elección de los Supremos Poderes del Estado se verificará guardando las formalidades que previene el artículo 3º. de la Constitución federal para la de las Supremas autoridades federales, con solo la variación que contienen los artículos siguientes:

Art. 15.- En el tiempo de elecciones constitucionales, las jun--

tas populares se celebrarán siempre el primer domingo del mes de Octubre: las de distrito en el tercero del mismo mes; y las de departamentos el segundo domingo del mes de Noviembre.

Art. 16.- La regulación de votos para la elección de Senadores y Supremas autoridades del Estado, de que tratan los artículos 47 y -48 de la Constitución federal, se verificarán en la forma siguiente.- Los pliegos que compongan el registro de los votos, que dieren los electores de las juntas de departamento se abrirán en sesión pública y el Presidente, Secretario y dos Escrutadores, nombrados al efecto procederán a computar los votos de todos y cada uno de los electores que hayan sufragado en dichas juntas.- Cuando algun ciudadano reunie re la mayoría de votos escrutados, la Asamblea publicará la elección. En caso contrario lo verificará entre los que hubieren obtenido diez o mas, y si faltare éste número, la Asamblea elegirá entre todos los designados por las juntas.

Art. 17.- La Asamblea luego que reuna los datos necesarios, dividirá la población del Estado con la posible exáctitud y comodidad en las juntas populares, en distritos y departamentos.

Art. 18.- La base para la representación será por ahora la de un diputado por cada quince mil almas.

Aumentandose la población de modo que exceda el número de diputados al de veinte y uno, podrán las Asambleas futuras hacer las reformas que crean necesarias.

CAPITULO V

Del Poder Legislativo.

Art. 19.- La Asamblea del Estado se compondrá por ahora de once -diputados; y nunca podrá bajar de este número, ni subir de veinte y uno.

Art. 20.- La Asamblea se renovará por mitad cada año, y los mismos representantes podrán ser reelegidos una vez sin intervalo alguno.

Art. 21.- La primera legislatura decidirá por suerte los representantes que deben renovarse en el año siguiente: en adelante la renovación se verificará en los de nombramiento más antiguo.

Art. 22.- Las sesiones darán principio en cada año el día dos de Enero a cuyo efecto los diputados deberán hallarse reunidos en el lugar que se celebre el día veinticuatro de Diciembre para las juntas preparatorias, previas a las sesiones.

Art. 23.- La Asamblea ordinaria continuará reunida por sesenta -- días, y cuando mas por noventa; a excepción de la primera que puede prorrogarse todo el tiempo que juzgue necesario; se volverá a reunir en sus recesos si el consejo la convocare, para uno o más asuntos urgentes del Estado no pudiendo tratar de otro en esta reunión.

Art. 24.- La residencia de la Asamblea será la capital del Estado;

puendiendola variar, cuando lo estime conveniente con mayoría absoluta de votos.

Art. 25.- Para que haya Asamblea se necesitan las dos terceras partes de los diputados; pero tres podrán compeler a los demás a reunirse en el tiempo designado para las Legislaturas ordinarias, y para las extraordinarias que hayan de celebrarse a juicio del -- consejo.

Art. 26.- Para la formación de tal ley, se observará todo lo -- prevenido en los artículos 71, 72, 73, 75, y 76, de la sección 1ª. del título 5º. de la Constitución federal.

Art. 27.- Aprobado un proyecto de ley por la Asamblea, pasará al consejo directivo para la sanción, y dada la pasará al Gefe Supremo del Estado para la publicación y ejecución.

Art. 28.- En caso de que el Consejo niegue la sanción, devolvera el proyecto entre diez días a la Asamblea, informando los fundamentos que tenga para la negativa; y examinada ésta por la Asamblea, -- si las dos terceras partes de ella la desaprobasen.

Art. 29.- La forma de que usará el Consejo para la sanción será; Pase al Jefe Supremo del Estado: cuando la niegue: vuelva a la Asamblea: Por sancionada: Pase al Jefe Supremo del Estado.

Art. 30.- La derogación de las leyes vigentes se hará por los -- mismos tramites que se decretaron las del Estado.

Art. 31.- Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por autoridad alguna podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales que contra ellos se in-- tente, no podrán ser juzgados, sino por el tribunal de la Asamblea en los terminos que prescribe el reglamento de su gobierno interior. Durante las sesiones, y un mes después, los diputados no podrán ser demandados, ni ejecutados por deudas.

Art. 32.- Son atribuciones de la Asamblea --1ª. dictar las leyes del Estado en consonancia con las de la federación, en la parte que tenga tendencia con ellas i interpretar las que diere-. 2ª. Formar el código civil y criminal; su reglamento interior y el de los otros poderes.- 3ª. Aprobar los estatutos de otras corporaciones.- 4ª. Dar las ordenanzas a la milicia activa y cívica, conciliandolas con las del Ejército permanente de la federación.- 5ª. Acordar con el Congreso federal la fuerza de línea que debe tener el Estado.- 6ª. Decretar en tiempo de guerra el aumento de fuerza que conforme al cupo le señale el Congreso federal.- 7ª. Formar la estadística del Estado por medio de los jefes municipales o del modo que lo permitan las cir--cunstancias.- 8ª. Decretar las contribuciones ó impuestos para los -- gastos necesarios del Estado, y para el cupo conforme el actual pre supuesto, y los sucesivos.- 9ª. Aumentar o disminuir las contribu--ciones con proporción a las necesidades del Estado.- 10ª. Reclamar las leyes impracticables o perjudiciales al Estado, o no conformes con sus circunstancias locales.- 11. Erigir los establecimientos, -- corporaciones y tribunales inferiores para el mejor orden en justicia, economía, o instrucción pública.- 12. Conmutar las penas de la

ley, o perdonar los delitos que por las leyes federales no estén sujetos a ellas.- 13. Detallar los sueldos de los funcionarios públicos aumentarlos o disminuirlos según las circunstancias.- 14. Aprobar los tratados que el Jefe Supremo del Estado, previamente autorizado, celebre con los otros de la federación.- 15. Sentenciar en los casos que previene el artículo 194 título 13 de la Constitución de la República.- 16. Contraer deudas sobre el crédito del Estado con los ~~demas~~ de la República, o con particulares, o extranjeros, con hipotecas, de sus respectivas rentas.- 17. Dar reglamento para el comercio interior del Estado.- 18. Admitir por dos terceras partes de votos las denuncias que por causas graves hagan de sus oficios los diputados a la Asamblea el Jefe y Vice-jefe del Estado, los Consejeros y Ministros de la Corte Superior de justicia y las de Senadores, antes de posesionarse.

CAPITULO VI

Del Consejo Representativo.

Art. 33.- Habrá un Consejo, compuesto de un representante por cada departamento elegido por sus respectivos pueblos.

Art. 34.- Para ser Consejero se necesita naturaleza en la República: residencia en el Estado, lo menos de cinco años: ser mayor de treinta años en el ejercicio de la ciudadanía; del estado seglar o del eclesiástico secular; y de conocida adhesión al sistema constitucional adoptado.

Art. 35.- Cada departamento elegirá un suplente que reuna las mismas calidades del propietario, para los casos de muerte, imposibilidad declarada por el Consejo.

Art. 36.- El Consejo durará tres años; renovándose por tercios en cada uno, pudiendo ser reelegidos sus individuos una vez, y la suerte decidirá en el primero y segundo años los que deban mudarse.

Art. 37.- El Consejo celebrará diariamente sus sesiones en el tiempo de las de la Asamblea y dos veces cada semana en el resto del año, y cuando extraordinariamente lo convoque el Jefe Supremo del Estado.

Art. 38.- Son atribuciones del Consejo:- 1º. Sancionar las leyes de la Asamblea del Estado con arreglo a los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 86, del título 5º. de la Constitución de la República.- 2º. Dictaminar sobre la derogación de la ley en los mismos terminos que debe negar la sanción, oyendo en ambos casos al Jefe Supremo de Estado.- 3º. Resolver las dudas que le consulte el Jefe; sobre la inteligencia de alguna ley en los recesos de la Asamblea y su resolución será ejecutada.- 4º. Aconsejar al Jefe Supremo en los casos que le consulte y darle dictamen en los negocios diplomáticos que ocurran entre el Gobierno del Estado y el federal, o con los ~~demas~~ Estados.- 5. Proponer en terna al Jefe Supremo, el Comandante general o primer jefe militar, el Intendente Tesorero general de hacienda pública, Factor de tabacos y los jefes primeros de departamento.- 6. Velar sobre la -

conducta de los funcionarios nombrados en éste artículo, declarando en su caso cuando ha lugar a formación de causa.- 7. Nombrar Presidente de su seno, cuando estuviere impédido el designado por la Constitución.- 8. Nombrar Secretario, fuera de su seno, al que podrá suspender por dos meses; pero no removerle sin conocimiento de causa.- 9. Convocar a la Asamblea en los casos extraordinarios.- 10. Nombrar en sus primeras sesiones el tribunal que establece el artículo 62.- 11.-Velar sobre la observancia de la Constitución y leyes del Estado y dar cuenta a la Legislatura de las infracciones que haya notado o de que esté informado.

CAPITULO VII

Del Poder Ejecutivo

Art. 39.- El Poder Ejecutivo reside en un jefe nombrado por todos los pueblos, que componen el Estado, como lo determine la ley.

Art. 40.- Al tiempo de esta elección se nombrará otro en los mismos términos que le subrogue, o supla en ausencia, enfermedad, muerte o suspensión.

Art. 41.- El Jefe Supremo del Estado y Vice-Jefe lo serán únicamente por cuatro años, y solo podrán ser reelectos una vez.

Art. 42.- El Vice-Jefe Presidirá el Consejo sin voto, y solo lo tendrá para decidir en caso de empate.

Art. 43.- No asistirá al Consejo cuando halla de nombrarse el tribunal que establece el artículo 62.

Art. 44.- Son atribuciones del Jefe Supremo del Estado: Publicar la ley y hacer se publique en el Estado dentro del término de treinta días. La retardación de este acto le hace responsable, después de cumplido el término señalado.- 2ª. Cuidar de la ejecución de la ley, del orden público y del exacto cumplimiento de los funcionarios, en sus respectivos cargos.- 3ª. Nombrar los primeros magistrados de que habla el artículo 38 en el párrafo 5º a propuesta del Senado, y a los subalternos a igual propuesta de sus inmediatos jefes.- 4ª. Disponer de la fuerza armada del Estado, y usar de ella en su defensa en caso de invasión repentina: pedir auxilio en el mismo caso a los demás Estados, y subministrarlo cuando ellos lo pidan; dando cuenta a la Asamblea para que ella lo verifique al Congreso de la Federación.- 5ª. Formar reglamentos para el fácil cumplimiento y ejecución de las leyes.- 6ª. Nombrar interinamente los empleados en casos de suspensión, enfermedad o ausencia de los propietarios.- 7ª. Convocar el Consejo en casos extraordinarios, cuando necesite consultarle.

Art. 45.- El Jefe Supremo tendrá y nombrará un Ministro general para el despacho de los negocios, el cual será sustituido en casos de suspensión, enfermedad o ausencia, por el oficial primero del mismo Ministro.

Art. 46.- Estará a cargo del Ministro: 1ª. Formar la planta de la secretaría, que el Jefe Supremo del Estado presentará con su informe a la Asamblea.- 2ª. Autorizar las ordenes, decretos y despachos del Jefe Supremo y comunicarlos a las primeras autoridades del Estado.- 3ª. Entablar las relaciones y comunicaciones que determine el Jefe Supremo con los Estados de la República.

Art. 47.- El Ministro será responsable con las penas a que de lugar el proceso, si autorizase ordenes y decretos contra ley o constitución.

Art. 48.- El Jefe Supremo podrá suspender al Ministro general por un mes, sin necesidad de formación de causa, y deponerlo con pruebas justificativas de ineptitud o desobediencia, con acuerdo en vista de ellas de las dos terceras partes del Consejo.

CAPITULO VIII

Del Poder Judicial

Art. 49.- El Poder Judicial es independiente en sus atribuciones del legislativo y ejecutivo: a él exclusivamente pertenece la aplicación de las leyes en las causas civiles y criminales.

Art. 50.- La Corte Superior de justicia se compondrá por ahora de un Presidente, dos Ministros y un Fiscal; debiendo ser precisamente letrados el Presidente y el Fiscal: serán elegidos popularmente: se renovarán por mitad cada dos años, y podrán siempre ser reelegidos quedando a su arbitrio la admisión. En los dos años primeros la suerte decidirá los que deban salir, y en los siguientes los de nombramiento más antiguo.

Art. 51.- Para ser Ministro de Corte de Justicia, se requiere ser ciudadano, en el ejercicio de sus derechos, mayor de treinta años, del estado secular, y con instrucción a lo menos, en el derecho público.

Art. 52.- Será la Corte Superior de Justicia el tribunal de última instancia, y por una ley se arreglará el orden de nombrarse con jueces en los casos de recusación en que haya lugar a ella, conforme a las leyes.

Art. 53.- Conocerá de los recursos de nulidad y de los de fuerza con arreglo a las leyes.

Art. 54.- Juzgará a los primeros funcionarios del Estado, después que la Asamblea, o el Congreso hayan declarado que ha lugar a la formación de causa.

Art. 55.- La Corte Superior de Justicia y demás juzgados inferiores son responsables, con arreglo a la ley, del ejercicio de sus funciones.

Art. 56.- La infracción de Constitución y de leyes, el cohecho, soborno y prevaricación, produce acción popular.

Art. 57.- La Corte Superior de Justicia decidirá las dudas, que se le presenten por los jueces y autoridades inferiores, sobre la inteligencia de las leyes, consultando en su caso, con la Asamblea; cuando esta se halle en receso, con el Consejo.

Art. 58.- Conocerá la Corte de Justicia de las causas de residencia de los empleados públicos con arreglo a la ley, que sobre esta materia se dicte.

Art. 59.- Examinará las listas de las causas civiles y criminales, pendientes en ella misma y en los juzgados inferiores.

Art. 60.- Propondrá ternas para el nombramiento de los jueces inferiores, y velará en el cumplimiento en el ejercicio de sus funciones.

Art. 61.- La Corte Superior de Justicia decidirá las competencias que se susciten entre los juzgados inferiores.

Art. 62.- Para Juzgar con apelación a los funcionarios de que habla el artículo 54, se formará un tribunal compuesto de tres individuos, nombrados por el Consejo, entre los suplentes del mismo y de la Asamblea, que no hayan funcionado.

Art. 63.- Este tribunal juzgará de las acusaciones contra los individuos de la Corte Superior de Justicia; y en apelación conocerá otro tribunal que nombre la Asamblea, entre los que tuvieran votos para la misma Corte.

Art. 64.- Habrá otro tribunal que conozca en segunda instancia de todas las causas comunes, que deberá formarse del modo y circunstancias que determine la ley.

CAPITULO IX

De la Administración de Justicia en lo Civil.

Art. 65.- Habrán jueces de 1ª. instancia, que a mas de las circunstancias que deben concurrir en ellos para el desempeño en el ejercicio de sus funciones, deben ser mayores de veinte y cinco años.

Art. 66.- En los pueblos en particular se administrará justicia por el Alcalde, o Alcaldes, bajo los límites y términos que la ley señale.

Art. 67.- A ninguno se le prohíbe comprometerse en arbitros para terminar sus diferencias: el compromiso será una ley que hará ejecutoria la sentencia de los arbitros, que no será apelable, si las partes no se reservaren este derecho.

Art. 68.- Los Alcaldes de los pueblos ejercen en ellos oficios de conciladores en las demandas civiles, y sobre injurias que deben establecerse en juicio escrito.

Art. 69.- Sin que haya precedido este juicio conciliatorio, no se podrá establecer pleito alguno.

CAPITULO X

Del Crimen

Art. 70.- Ninguno podrá ser preso, si no es por delito que merezca pena mas que correccional; y en nongun caso sin previo mandamiento por escrito de juez competente.

Art. 71.- Intimado el asunto de prisión, debe ser cumplido; y por su desobediencia incurrirá en la pena que señale la ley.

Art. 72.- Cuando sea la resistencia con armas de cualquiera especie y se temiere la fuga, se usará de la fuerza para asegurar la persona.

Art. 73.- Todo delincuente en el acto de cometer el delito, puede -- ser arrestado o detenido por cualquier persona y entregado al juez; mas no podrá usarse de fuerza que ponga en peligro la vida de los ejecutores o del delincuente.

Art. 74.- No se admitirán acusaciones de ninguna clase sin que se -- firme o conste por formal diligencia quien es el acusador. Las denuncias secretas y delaciones guardarán la misma forma. Unos y otros, en su caso serán responsables en el de salir falsas.

Art. 75.- Toda autoridad, corporación, o empleado que por el orden de informe acuse algún delito, quedará sujeto a la prueba y la responsabilidad que las leyes detallan.

Art. 76.- En ningún caso, ni por delito alguno habrá confiscación de bienes; y solo podrán embargarse cuando haya responsabilidad pecunaria, en la cantidad que la cubra.

Art. 77.- Los infractores de los artículos del título 10 y 11 de la - Constitución, federal, se sujetarán a la pena que la ley prescriba.

CAPITULO XI

Del Gobierno Interior en cada partido o departamento.

Art. 78.- Habrá en cada departamento un Jefe político Intendente, a cuyo cargo estará el gobierno político y de hacienda bajo el orden que -- disponga la ley, la cual arreglará la cantidad con que debe afianzar.

Art. 79.- El ramo gubernativo de los pueblos será a cargo del Alcalde que el jefe de departamento designe en cada parroquia al cual estarán subordinados las demas municipalidades y pueblos de la misma parroquia. -- Una ley particular designará las atribuciones al Jefe Intendente.

Art. 80.- En la cabeza del departamento, el Jefe político intendente desempeñará iguales atribuciones en el distrito de la parroquia que resida.

Art. 81.- La duración de los Jefes Políticos Intendentes será la de -- cuatro años, pudiendo continuar y ser promovidos a otro destino, justificada que sea su solvencia y buen desempeño.

CAPITULO XII

Del Gobierno Interior y Policia de cada pueblo.

Art. 82.- En cada pueblo que su comarca tenga de quinientas almas arriba habrá municipalidad elegida popularmente. Una ley designará el número de individuos de que deba componerse cada uno y sus atribuciones.

Art. 83.- Los pueblos, reducciones y valles que no lleguen al número de quinientos habitantes se gobernarán por un Alcalde auxiliar nombrado por la municipalidad a que corresponda, y sus atribuciones serán las - que le designa la ley.

Art. 84.- Cada municipalidad formará bajo su responsabilidad matricula de los ciudadanos de su comprensión que reúnan las circunstancias y cualidades que previene el artículo 14 del título 2º. de la Constitución federal.

Art. 85.- Se formará cada año con presencia de esta matricula una relación de los ciudadanos que se hallen en el ejercicio de sus derechos, y no estén comprendidos en lo que previene el artículo 20 del mismo título.

Art. 86.- Esta relación se tendrá presente para recibir las votaciones en toda elección.

Art. 87.- Solo los ciudadanos que estén en ejercicio pueden obtener - empleo en la República.

CAPITULO XIII

De la Hacienda Pública y su Administración en General.

Art. 88.- Habrá un Intendente general del Estado a quien inmediatamente estarán subordinados todos los empleados de hacienda. Su duración será de cuatro años, pudiéndose prorrogar ~~todo~~ el tiempo que se tenga por conveniente, a vista de su exacto cumplimiento y adelantamiento que noten en la hacienda pública.

Art. 89.- El Jefe Supremo del Estado tomando los datos que sean necesarios, propondrá a la Asamblea el número de empleados que debe tener cada ramo.

Art. 90.- El Intendente afianzará su responsabilidad con la cantidad que la ley le declare.

Art. 91.- Los ramos que deben componer la hacienda pública los arreglará una ley especial, que dictar a la Asamblea, continuando por ahora las rentas establecidas y contribuciones.

Art. 92.- Habrá un Tribunal de cuentas, que examinará anualmente las de la Tesorería general y se publicará cada año un estado de cargo y data de caudales de hacienda pública.

CAPITULO XIV

De la Observancia de la Constitución y leyes.

Art. 93.- Todo funcionario público está obligado a guardar, cumplir, y ejecutar la Constitución y leyes; deberán jurarlo así al tomar posesión de sus empleos y su infracción exige responsabilidad.

Art. 94.- Todo ciudadano a habitante pueden representar a la Asamblea al Jefe Supremo, Consejo representativo y jueces de la primera - instancia, la infracción de Constitución y leyes.

Art. 95.- La Asamblea por cada seis meses pedirá relaciones especiales a la corte de Justicia de las causas de infracciones de Constitución y leyes, y en su visita provera la conveniente.

Art. 96.- La Constitución del Estado no podrá sufrir alteración en aquellos artículos que no tenga una relación inmediata con los de la federación, sino es hasta pasados cuatro años de hallarse en practica y en los que tengan, en ningun tiempo.

Art. 97.- Las leyes y disposiciones que actualmente rigen, y que no se opongan a la Constitución federal, y a la particular del Estado quedando en su vigor y fuerza.

Dada en la Ciudad de Comayagua a once de Diciembre de mil - ochocientos veinte y cinco.

MANUEL JACINTO DOBLADO
Diputado por Yoro, Vice-Presidente.

JOSE MARIA DEL CAMPO
Diputado por Nacaome.

ANGEL FRANCISCO DEL VALLE
Diputado por Cantarrana

JOSE MARIA DONAYRE
Diputado por Gracias, Secretario

MIGUEL RAFAEL VALLADARES,
Diputado Suplente por Tegucigalpa, Secretario.

Comoyagua Diciembre once de mil ochocientos veinte y cinco
Ejecutese: firmada de mi mano, y refrendada por el Secretario del --
Despacho general.

DIONICIO DE HERRERA.

El Secretario general del Gobierno Supremo del Estado

FRANCISCO MORAZAN

PROYECTO DE CONSTITUCION DE 1.831

CONSTITUCION POLITICA

DADA EN COMAYAGUA A 26 DE NOVIEMBRE DE 1.831

CONSTITUCION DE HONDURAS

Preámbulo.

El objeto de las instituciones políticas, es el de mantener - la administración de su Gobierno, el de asegurar la existencia del cuerpo político, proteger y proporcionar a los individuos que lo componen - la facultad de gozar con seguridad, confianza y tranquilidad sus derechos naturales. Todas las veces que las constituciones no llenan estos grandes objetos, por no haber sido formadas bajo de estos principios o porque hallan perdido su responsabilidad, por infracciones que se hallan hecho de ellas quedandose impunes, el Pueblo debe establecer otras que le den seguridad.

Los Cuerpos políticos se forman por una asociación voluntaria de sus individuos: es un contrato social que celebra cada individuo con el Pueblo entero, y el Pueblo entero con cada individuo, conviniéndose en que todos serán gobernados por unas mismas leyes y que han de tener por objeto el bien común; de consiguiente el pueblo ha de hacer su Constitución, ha de disponer que las leyes se dicten con madura deliberación poniendo precauciones para que estas mismas leyes sean fielmente ejecutadas, y aplicadas con imparcialidad, para que todos y cada uno de los que hayna formado el pacto puedan gozar de libertad, Igualdad, y Seguridad.

Bajo de éstos principios, los representantes del Pueblo Hondureño, penetrado del más vivo reconocimiento por la confianza que hemos merecido a nuestros comitentes, implorando el auxilio de Dios, y en plenos poderes para reformar en el todo, o en parte, la Constitución dada a cinco de Diciembre del año 25, a nombre del Pueblo, ordenamos, establecemos y sancionamos la siguiente:

CONSTITUCION DEL ESTADO DE HONDURAS

CAPITULO I

Del territorio y habitantes del Estado.

Art. 1º.- El Estado es libre, Soberano e Independiente de toda potencia o Gobierno extranjero, y no será jamás patrimonio de ninguna familia ni persona.

Art. 2º.- También es Soberano e Independiente en su gobierno y administración interior, con sólo las restricciones expresadas para todos los Estados en el literal sentido de los artículos de la Constitución Federal.

Art. 3º.- La soberanía reside en todo el Estado, y cada pueblo la ejerce cuando elige sus autoridades y las federales con arreglo con la ley; y los particulares, cuando cada uno pone en uso los derechos que se reserva en el Capítulo 4º. de esta Constitución y en los títulos 10 y 11 de la República.

Art. 4º.- Es uno de los federales de Centro América.

Art. 5º.- Su territorio comprende lo que corresponde y ha correspondido siempre al Obispado de Honduras.

Art. 6º.- Se divide en cuatro departamentos.- 1º Tegucigalpa, con las parroquias de Tatumbla, Ojojona, Cedros, Orica, Texígut, Yuscarán, Nacaome, Choluteca, Corpus, Danlí y Cantarranas.- 2º Departamento de Gracias, Quezailica, Llanos de Santa Rosa, Sensenti, Guarita, Gualcho Camasca, Intibucat, Cerquin, Ocotepeque, Santa Barbara, Cecilac y Petoa.- 3º Departamento de Olancho, Justicalpa, Silca, Manto, Olanchito y Trujillo.- 4º Departamento de Comayagua: Sagrario, Caridad, Siguatepeque, Cururú, Chinada, Lejamaní, Aguanqueterique, Goascorán, Santa Pedro, Quimistan, Omoa, Yojoa y Yoro. Por una ley particular, se señalará el lugar de Centro, en que han de residir las Autoridades Departamentales.

El Gobierno Supremo podrá alterar, de acuerdo con la Asambleable, el Político y de Hacienda de los Puertos de Omoa y Trujillo, según las circunstancias.

CAPITULO II

De la Religión

Art. 7º.- La religión del Estado es la Católica, Apostólica, Romana, con exclusión del ejercicio público de cualesquiera otra. Defenderla y sostenerla es un deber del Estado.

CAPITULO III

De las obligaciones de los hondureños.

Art. 8º.- Todos los habitantes del Estado quedan bajo la protección de esta Constitución, y, de consiguiente, deben serle fieles, obedecer las leyes que dimanen de ella, pues siempre serán iguales para todos, ya premien o castiguen.

Art. 9º.- Deben servir a la patria, desempeñando los destinos para que fuesen nombrados: deben defenderla con las armas y contribuir con proporción a los gastos del Estado y Federación.

Art. 10º.- Deben ser virtuosos y respetar las Autoridades porque son el órgano de la Ley.

CAPITULO IV

De los derechos que se reserva al Pueblo Hondureño.

Art. 11.- Todos los hondureños son libres, iguales ante la ley; se reservan el derecho de sostener estas prerrogativas, como también el - de procurarse su felicidad y seguridad con arreglo a esta Constitución.

Art. 12.- Ser ciudadanos los naturales y naturalizados que sean casados o mayores de 18 años y que tengan una propiedad o que ejerzan oficio de que subsistir, calificado en los términos que designe la ley.

Art. 13.- Se pierde la calidad de ciudadano o se suspenden los derechos de ciudadanía por las causas que señala la Constitución Federal: solo los ciudadanos en ejercicio de sus derechos pueden obtener los empleos del Estado.

Art. 14.- Los ciudadanos de los otros Estados tienen en esto expedito el ejercicio de ciudadanía, en cuanto pueden ser electos para los - destinos que no requieren vecindad en el Estado.

Art. 15.- Es uno de los más sagrados derechos del Pueblo Hondureño, la libertad de la palabra, la de la escritura y la de imprenta: la ley no puede privarselo, sin sujetarlo a censura. Le usará en la forma que la ley lo arregla.

Art. 16.- No reconoce otra distinción sino la que exige el bien general del Estado y las adquiridas por las virtudes, por grandes servicios prestados a la Patria, y por los talentos.

Art. 17.- La casa de cualesquiera habitante del Estado, es un asilo sagrado: será un crimen violarlo sin las formalidades y fuera de los casos que previenen la Constitución.

Art. 18.- Ninguno puede ser castigado, sino en virtud de una ley establecida y publicada, antes de conocerse el delito, y sin que sea legalmente aplicada.

Art. 19.- Ninguna autoridad puede privar de las medidas y recursos que la ley concede al reo para su defensa: tampoco puede aumentar o disminuir la pena que la misma ley señala.

Art. 20.- Ningún habitante de Honduras podrá ser sentenciado en juicio escrito, civil o criminal en 1ª. instancia, sin dictamen de letrado si alguna de las partes lo reclama, mientras se generalizan las luces - del derecho público, y se simplifica la legislación, de modo que esté - al alcance de todos.

Art. 21.- La vida, la reputación, la libertad y seguridad de todos - los habitantes del Estado son protegidos por esta Constitución. Ninguno puede ser privado de estos derechos, sino con las formalidades que esta - blezca la ley, con arreglo a los títulos 10 y 11 de la Constitución Fe- deral.

Art. 22.- Ningún pueblo podrá ser desarmado, sino en los casos que - previene la Constitución Federal.

Art. 23.- Todos los empleados en el Estado ejercen su oficio por de- legación del pueblo: son sus agentes y le quedan responsables, sino a - excepción de los D.D. y en los casos de que habla el artículo. 34.

Art. 24.- Todas las propiedades de los habitantes del Estado quedan garantizadas: ninguna autoridad puede tomarlas en empréstito forzoso en tiempo de paz para gastos comunes de presupuesto, sino en una grave ur- gencia de tiempo de guerra en favor del pueblo legalmente comprobada, y asegurando, ante todas las cosas, el ramo de donde debe volverse aque- lla propiedad.

Art. 25.- Atenta contra la soberanía del Pueblo, es injusta, y no es ley toda disposición que viole los derechos de los hondureños contenidos en este capítulo.

CAPITULO V

Del Gobierno.

Art. 26.- El Gobierno del Estado es republicano, representativo y po- pular: se divide para su ejercicio en tres poderes, Legislativo, Ejecu- tivo y Judicial.

Art. 27.- El Poder Legislativo reside en una Asamblea de Diputados - electos por el pueblo: El Ejecutivo en un Jefe Supremo elegido popular- mente y el Judicial en los Tribunales y Jueces nombrados por esta Cons- titución y las leyes.

CAPITULO VI

De las elecciones de los Supremos Poderes del Estado.

Art. 28.- Las elecciones de los Supremos Poderes del Estado se harán directamente por el Pueblo: una ley particular arreglará el modo de prac- ticarlas y la regulación que debe hacerse, en su caso, de los votos en - cada Departamento

EXCMO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITuyente, DE 2 DE JULIO DE 1.823,
DECLARANDO LEGITIMAMENTE CONSTITUIDA Y DIVIDIENDO LOS PODERES.
Los Representantes de las Provincias Unidas de Centroamérica,
en consecuencia de la solemnidad que hemos prometido en la
del corriente, confirmando y sancionando el presente e imprimiendo

EXCMO No 1A

Art. 29.- La elección de las Autoridades Federales se hará en los términos que previene la Constitución y la Asamblea, con los datos necesarios dividirá la población del Estado en juntas populares, en distritos y departamentos que reúnan el número de almas que pide la Constitución para su representación.

Art. 30.- La base para la representación del Estado es el mismo total de sus habitantes, naturales y naturalizados. Se elegirá un Representante por cada quince mil almas y aumentándose la población de modo que exceda el número de Diputados al de veinte y uno las Asambleas primarias harán las reformas que crean necesarias.

CAPITULO VII

Del Poder Legislativo.

Art. 31.- La Asamblea del Estado se compone por ahora, según su población, de once Diputados los cuales serán electos en las Cabeceras y por los mismos pueblos que se ha hecho en las Asambleas anteriores.

Art. 32.- Para cada uno de los Diputados propietarios se nombrará un suplente para los casos de muerte, enfermedad u otro impedimento legal, a juicio de la Asamblea. No podrá en ningún caso el suplente y el propietario representar a un mismo tiempo.

Art. 33.- No podrá ser Diputado ningún empleado del nombramiento del Gobierno Federal y del Estado por el lugar en que ejerce su destino y durante las sesiones ningún Diputado podrá recibir empleo alguno de ninguna clase, sino los de rigurosa escala o de elección popular.

Art. 34.- Los Diputados son inviolables por sus opiniones emitidas de palabra o por escrito en el ejercicio de su cargo: no podrán ser reconvenidos por ellas en ningún tiempo, ni por autoridad alguna, a excepción cuando sufraguen a una ley o decreto que ataque directamente algún artículo de esta Constitución o de la República.

Art. 35.- Durante las sesiones y un mes después no podrán ser reconvenidos ni ejecutados por deudas.

Art. 36.- La Asamblea se renovará por mitad cada año y los mismos Representantes, una vez sin intervalo sino lo rehusare el electo.

Art. 37.- Las sesiones serán principio el día 2 de Enero, a cuyo efecto los Diputados deberán hallarse reunidos en el lugar en que se celebre el día 24 de Diciembre para las juntas preparatorias, previas a las sesiones.

Art. 38.- La A. O. continuará reunida por noventa sesiones: los últimos quince días de esta reunión se invertirán, solamente en examinar la planta de Secretaría y mejorar, si es posible, en arreglo y hacer un cuerpo de leyes, órdenes y decretos que hubiese emitido y certificado en este tiempo que se ha publicado y mandado ejecutar; y en el caso contrario, proceder con arreglo a la Constitución antes de disolverse. -Habrá también una Comisión permanente con las facultades y en la forma que designe la ley.

Art. 39.- Se reunirá la Asamblea después de haberse puesto en receso, siempre que el Consejo la convoque, para uno o más asuntos urgentes del Estado, no pudiéndose tratar de otros en esta reunión.

Art. 40.- La residencia de la Asamblea será en Comayagua, Capital del Estado, pudiéndola variar cuando los estime conveniente, con mayoría absoluta de votos.

Art. 41.- Para que haya Asamblea se necesita de las dos terceras partes de sus Diputados; y siendo por ahora el número de once son necesarios ocho pero los podrán compeler a los demás a reuniones en el tiempo designado para las Legislaturas ordinarias y para las extraordinarias y para las extraordinarias que hayan que celebrarse cuando convoque el Consejo.

CAPITULO VIII

De las Atribuciones de la Asamblea.

Art. 42.- Son atribuciones de la Asamblea:

1º. Dictar las leyes del Estado en consonancia con las de la Federal en la parte que tenga tendencia con ellas, con arreglo a la misma Constitución e interpretar las que diere.

2º. Formar el Código Civil y Criminal su reglamento interior y el de los otros poderes.

3º. Aprobar los Estatutos de otras Corporaciones.

4º. Dar ordenanzas a las milicias cívicas y activas conciliándolas con las del ejército permanente de la Federación.

5º. Acordar con el Congreso Federal la fuerza de línea que debe tener el Estado.

6º. Decretar en tiempo de guerra, el aumento de la fuerza que conforme al cupo, le señale el Congreso Federal.

7º. Formar la estadística del Estado.

8º. Decretar la contribución e impuestos para los gastos del Estado y para el cupo, conforme al actual presupuesto y los sucesivos.

9º. Aprobar el presupuesto de gastos que se presente cada año y los que hayan hecho en el próximo pasado.

10. Aumentar o disminuir las contribuciones con proporción a las necesidades del Estado.

11. Reclamar las leyes federales que perjudiquen al Estado o no conforme a su soberanía e independencia.

12. Erigir los establecimientos, Corporaciones y Tribunales inferiores para el mejor orden de justicia, economía e instrucción pública.

13. Conmutar, en caso que resulte bien al Estado, las penas de ley o perdonar los delitos que esten dentro de sus facultades.

14. Detallar los sueldos de los funcionarios públicos, aumentándolos o disminuyéndolos según la riqueza del Estado.

15. Aprobar los tratados que el Jefe Supremo, previamente autorizado, celebre con los otros de la Federación.

16. Sentenciar en los casos que previene el Art. 194 Título 3º. de la Constitución de la República.
17. Contraer deudas sobre el crédito del Estado con los demás de - la República o con particulares.
18. Dar reglamento para el comercio interior del Estado.
19. Admitir por las dos terceras partes de votos, las renunciaciones que por causas graves hagan de sus oficios los Diputados de la Asamblea, - el Jefe y Vicejefe del Estado, los Consejeros y Ministros de la Corte Suprema de Justicia y las de los Senadores antes de pasarse.
20. Autorizar al Gobierno extraordinariamente cuando lo exijan impe-
riosamente las circunstancias.

CAPITULO IX

De la Formación y Sanción de la Ley

Art. 43.- Para la formación de las leyes se observará todo lo pre-
venido en los Artículos 71, 72, 73, 75, y 76 de la Sección 1ª. título
7º. de la Constitución Federal.

Art. 44.- La derogación de las leyes vigentes se hará por los mis-
mos términos y las nuevas que se establezcan y del mismo modo las le-
yes antiguas que se hallen vigentes.

Art. 45.- Aprobado un proyecto de ley por la Asamblea pasará al -
Consejo Directivo para la sanción y dada a toda ella, la pasará al Je-
fe Supremo del Estado para la publicación y circulación.

Art. 46.- En caso de que el Consejo niegue la sanción se volverá
el proyecto entre diez días a la Asamblea, informando los fundamentos
que tenga para la negativa; y examinada esta por la Asamblea si las
dos terceras partes de ella la desaprobasen, se tendrá por sancionada
la ley devolviéndola al Consejo.

Art. 47.- La forma que usará para dar la sanción será - Pase al
Jefe Supremo del Estado. Cuando la niegue: Vuelva a la Asamblea; y
siendo dada la sanción por la Asamblea. Por Sancionada, pase al Jefe
Supremo del Estado.

CAPITULO X

Del Consejo Representativo

Art. 48.- Habrá un consejo compuesto de un Representante por cada
Departamento elegido directamente por sus respectivos pueblos.

Art. 49.- Para ser Consejero se necesitan las mismas condicio-
nes y circunstancias que para Diputado, excepto la edad que debe ser
de 25 años.

Art. 50.- Cada Departamento elegirá un suplente que reunirá las mis-
mas cualidades del propietario; para los casos de muerte, e imposibili-
dad declarada por el Consejo.

Art. 51.- El Consejo se renovará en el tiempo y modo que se renue
ba la Asamblea.

Art. 52.- El Consejo celebrará diariamente sus sesiones cuando la Asamblea esté reunida y dos veces cada semana en el resto del año o cuando extraordinariamente sea convocado por el Jefe Supremo del Estado.

Art. 53.- Son atribuciones del Consejo.

1. Sancionar las leyes de la Asamblea del Estado con arreglo a los artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 86 del Título 5º. de la - Constitución Federal.

2. Dictaminar sobre la derogación de la ley, en los mismos términos que debe negar la sanción, oyendo en ambos casos al Jefe Supremo del Estado.

3. Resolver las dudas que ocurran en receso de la Asamblea para la elección de las leyes y demás resoluciones del Cuerpo Legislativo, y su determinación será ejecutada.

4. Aconsejar al Jefe Supremo en los casos que sea consultado.

5. Proponer en terna al Jefe Supremo, Comandante General, Intendente General de Hacienda Pública y los Jefes Intendentes de departamentos.

6. Velar sobre la conducta de los funcionarios nombrados en este artículo, declarando en su caso cuando hay lugar a la formación de cau
sa.

7. Nombrar Presidente de su seno cuando estuviese impedido el designado por la Constitución.

8. Nombrar Secretario también en su seno.

9. Convocar a la Asamblea en los casos extraordinarios, expresando el asunto o asuntos para que es llamado.

10. Nombrar en sus primeras sesiones el Tribunal que establece el Art. 70.

11. Velar sobre la observancia de la Constitución y leyes del Estado y dar cuenta a la Legislatura de las infracciones que haya notado o de que esté informado.

CAPITULO XI

Del Poder Ejecutivo.

Art. 54.- El Poder Ejecutivo reside en un Jefe Supremo nombrado por los pueblos: al tiempo de esta elección se nombrará un Vice Jefe en los mismos términos para que le subague o supla en ausencia, enfermedad, muerte o suspensión.

Art. 55.- El Jefe Supremo y Vice Jefe lo serán por 4 años y podrán ser reelectos una sola vez, si quisiesen admitir.

Art. 56.- El Vice-Jefe presidirá el Consejo sin voto y solo lo ten
drá para decidir en caso de empate.

Art. 57.- No asistirá al Consejo cuando haya de nombrarse el Tribu
nal que ha de juzgar a los primeros funcionarios del Estado.

Art. 58.- Son atribuciones del Jefe Supremo:

1. Publicar la ley y hacer se publique en el Estado dentro del término de treinta días y en el de su residencia dentro de ocho. La retención de éste acto se hace responsable.

2. Cuidar de la ejecución de la ley, del orden público y del exacto cumplimiento de los funcionarios en sus respectivos cargos, sin que por ésta inspección pueda ingerirse directa o indirectamente en el examen de las causas pendientes ni disponer en manera alguna de las personas de los reos criminales.

3. Nombrar los primeros Magistrados del Estado, a propuesta del Consejo y los subalternos a igual propuesta de sus inmediatos Jefes.

4. Disponer de la fuerza armada del Estado y usar de ella para su defensa en caso de invasión repentina.

5. Pedir auxilio en el mismo caso a los demás Estados; y suministrarlo previo acuerdo de la Asamblea, quien dará conocimiento al Congreso Federal.

6. Formar reglamentos para el fácil cumplimiento y ejecución de las leyes.

7. Nombrar inmediatamente los empleos en los casos de suspensión, enfermedad o ausencia de los propietarios, y los agraciados deberán tener las mismas circunstancias y cualidad que exigen para los propietarios, sin que los interinos puedan servir mas de tres meses sin fianza.

8. Convocar al Consejo en casos extraordinarios cuando necesita consultarlo.

9. El Gobierno debe consultar al Consejo los asuntos diplomáticos -- que vaya a usar de las armas contra algun pueblo del Estado y en la atribución señalada en el número 6. Cuando el Gobierno se conforme con la opinión del Consejo en estos casos expresados cesa su responsabilidad y en caso contrario y en cualesquiera otros asuntos que pida dictamen es propio solo del Gobierno la responsabilidad que resulte.

Art. 59.- El Jefe Supremo dará el pase a los títulos de prelación y seglares, dignidades y beneficios en propiedad, y podrá negarlos con causa justa comprobada: intervendrá con su enlatación de derechos parroquiales que se formarán por el Prelado Eclesiástico previa la de la Asamblea.

Const. de Guat. Art. 60.- El Jefe Supremo tendrá y nombrará un Ministro General para el Despacho de los negocios, el que será sustituido en los casos de suspensión, enfermedad o ausencia por el Oficial 1º del mismo Ministerio.

Art. 61.- Estará a cargo del Ministro:

1. Formar la planta de la Secretaría que el Jefe Supremo presentará con su informe a la Asamblea.

2. Autorizará las órdenes, decretos y despachos del Jefe Supremo y comunicarlos a los primeros funcionarios del Estado.

3. Establecer las relaciones y comunicaciones que determine el Jefe Supremo con los Estados de la República.

4. El Ministro será responsable con las penas a que de lugar el proceso, si autorizare ordenes contra la ley o comunicación dada por el Gobierno.

Art. 61.- El Jefe Supremo podrá suspender el Ministro General por un mes; sin necesidad de formación de causa y de ponerlo con prueba justificada.

cativa de ineptitud o desobediencia, con acuerdo en vista de ellas, de las dos terceras partes del Consejo.

CAPITULO XII

Del Poder Judicial.

Art. 62.- Es independiente en sus atribuciones, ni la Asamblea, ni el Consejo, ni el Poder Ejecutivo, podrán en ningún caso ejercer las funciones judiciales, ni evacuándose causas pendientes, ni ninguna autoridad abrir juicio fenecido. A él exclusivamente pertenece la aplicación de las leyes, en las causas civiles y criminales y hacer que se ejecute lo sentenciado.

Art. 63.- La Corte Superior de Justicia es el tribunal de última instancia: se compondrá por ahora de cuatro Ministros y un Fiscal que deberá forzosamente ser letrado, y el Presidente será nombrado de su seno. Serán elegidos uno por cada Departamento e igualmente los suplentes, y el Fiscal será nombrado por el primer Departamento que señala la Constitución. Su renovación por nombramiento del segundo y así sucesivamente.

Se renovarán por mitad cada dos años y podrán siempre ser reelectos quedando libres para admitir.- La duración del Fiscal será también de dos años.

Art.- Para ser individuo de la Corte Suprema se requiere ser -- ciudadano en ejercicio de sus derechos; tener veinte y cinco años de edad, siete de residencia en la República, del estado Seglar y tener instrucción en el derecho público para lo que deberá ser aprobado del modo que designe la ley, pero esta última cualidad no se exigirá sino es hasta pasados dos años; y los que sean electos deberán tener un capital de quinientos pesos producible y pasados los dos años el que no sea aprobado en el derecho publico no podrá ser electo para individuo de este Tribunal.

Art.- 67.- Una Ley arreglará la cantidad de las demandas civiles y la pena en las criminales en que deben ser concederle los tres recursos y tales sentencias deben ser ejecutorias.

Art. 68.- Son Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia.

1. Conocer de los recursos de nulidad y de los de fuerza con arreglo a las leyes.

2. Juzgar a los primeros funcionarios del Estado después que la -- Asamblea o el Consejo hayan declarado que hay lugar a la formación de causa.

3. Conocer de las causas de residencia de los empleados públicos -- con arreglo a la ley que sobre esta materia se dicte.

4. Examinar y publicar las listas de las causas civiles y criminales pendientes de ella misma y en los juzgados inferiores.

Art. 69.- La Corte Superior de Justicia, unos o algunos de sus individuos y los jueces son responsables de las leyes que arreglan los procesos en lo civil y criminal.- La Corte Suprema decidirá las competencias que se susciten entre los juzgados inferiores.

Art. 70.- Se formará para preveer en apelación, las causas seguidas a los primeros funcionarios del Estado, un Tribunal compuesto de tres individuos nombrados por el Consejo entre los Suplentes del mismo y de la Asamblea que no hayan funcionado.

Art. 71.- Este Tribunal juzgará de las acusaciones contra los individuos de la Corte Superior de Justicia y en apelación conocerá otro Tribunal que nombre la Asamblea entre los que tuvieren votos para la misma Corte.- (Aquí el artículo 56 de la Constitución antigua.)

CAPITULO XIII

De la Administración de justicia en lo civil.

Art. 7.- Para ser Juez de Primera Instancia se requiere ser mayor de 25 años, tener las mismas condiciones que para ser Ministro de la Corte Suprema de Justicia y su elección se hará popularmente en cada Sección.

Art. 7.- La duración de los Jueces de Primera Instancia será de dos años, pudiendo siempre ser reelectos, siendo libres en admitir, y removidos en el caso que se les pruebe morosidad culpable en el despacho, venalidad o injusticia notoria.

Art. 7.- En los pueblos en particular se administrará justicia -- por el Alcalde o Alcaldes, bajo los límites y términos que la ley señale y siempre tendrán el derecho de ocurrir a los Jueces de 1ª. Instancia en caso de sentirse agraviada alguna de las partes.

Art. 7.- A ninguno se le prohíbe comprometerse en árbitros para terminar sus diferencias: el compromiso será una ley que hará ejecutoria la sentencia de los árbitros, que no será apelable, si las partes no se reservasen este derecho.

Art. 7.- Los Alcaldes de los pueblos ejercen en ellos oficios de conciliadores en las demandas civiles y sobre injurias que deban entablarse en juicio escrito. Sin que haya precedido un juicio conciliatorio, no se podrá entablar pleito alguno.

CAPITULO XIV

De lo Criminal.

Art. 79.- Ninguno podrá ser preso sino es por delito que merzca -- pena mas que correccional y en ningun caso sin previo mandamiento por escrito de Juez competente.

Art. 80.- Intimado el auto de prisión debe ser cumplido y por su desobediencia incurrirá en la pena que señala la ley.

Art. 81.- Cuando sea la resistencia con arma de cualesquiera especie y se temiere la fuga se usará de la fuerza para asegurar la persona.

Art. 82.- Todo delincuente en el acto de cometer el delito, puede ser arrestado o detenido por cualesquiera persona y entregado al Juez más no podrán los particulares usar de fuerza que ponga en peligro la vida de los ejecutores o del delincuente.

Art. 83.- No se admitirán acusaciones de ninguna clase sin que se firme o conste con formal diligencia quien es el acusador. Este será responsable en caso de salir falso.- Las denuncias secretas y delaciones también serán firmadas o constará el nombre del delator y éste quedará solamente sujeto a la responsabilidad con arreglo a la ley. (Aquí el Art) Toda autoridad, Corporación o empleado que por el orden de información acuse algún delito, quedará sujeto a la prueba, y a la responsabilidad que las mismas leyes detallan.

Art. 84.- En ningún caso si por delito alguno habrá confiscación de bienes, y solo podrán embargarse cuando haya responsabilidad pecuniaria en la cantidad que la cubra.

Art. 85.- Los infractores de los títulos 10 y 11 de la Constitución Federal se sujetarán a la pena que la ley prescriba.

CAPITULO XV

Del Gobierno Interior de cada Departamento.

Art. 86.- Habrá en cada Departamento un Jefe Político Intendente a cuyo cargo estará el Gobierno Político y de Hacienda: por una ley se arreglará.....sus atribuciones. Deberá, para posesionar se de dar fianza de tres mil pesos. Las Asambleas futuras podrán alterar esta cantidad según pidan los fondos.

Art. 87.- Para poder ser Jefe Intendente se requiere la edad de veinte y cinco años, ser de probidad e instrucción suficiente y vecino, por lo menos cinco años en el Estado y no ser deudor a la hacienda pública.

Art. 88.- (Borrado).

m Art. 89.- El ramo gubernativo de los pueblos será a cargo del Alcalde.....que la ley arregla.

Art. 90.- El Jefe Político Intendente desempeñará iguales atribuciones en el distrito de la parroquia en que reside.

Art. 91.- En caso de imposibilidad del Jefe Intendente y mientras nombra el Gobierno Supremo Interino o propietario que debe sustituirlo, hará sus veces el primer alcalde que ha salido el año anterior del pueblo donde deberá rendir el Jefe Intendente: en su defecto el 2º, y así sucesivamente.

Art. 92.- La duración de los Jefes Intendentes será la de cuatro años, pudiendo continuar y ser promovidos a otro destino, justificando que sea su solvencia y buen desempeño.

CAPITULO XVI

Del Gobierno Interior y de Policía de cada pueblo.

Art. 93.- En todas las Cabeceras de Parroquia habrá Municipalidad.- También habrá en los pueblos que tengan quinientas almas reunidas en población la Municipalidad será electa popularmente: el número de sus individuos lo designará la ley particular como también sus atribuciones.

Art. 94.- Los pueblos que no reunan quinientas almas, podrán tener Municipalidad si su localidad o circunstancias lo exigen, a juicio del Gobierno.

Art. 95.- Los Caseríos dispersos, los valles y reducciones serán gobernadas por Alcaldes Auxiliares nombrados por la Municipalidad más inmediata: sus atribuciones serán también designadas por la ley que también dispondrá el modo de reducirse a poblados.

Art. 96.- Cada Municipalidad formará, bajo su responsabilidad, matrícula de los ciudadanos de su comprensión que reunan las circunstancias y las cualidades que previene el Art. 24 del título 2º. de la -- Constitución Federal.

Art. 97.- Se formará cada año con presencia de esta matrícula una relación de los ciudadanos que se hallen en el ejercicio de sus derechos y que no esten comprometidos en lo que previene el Art. 2º. del mismo título.

Art. 98.- Esta relación se tendrá presente para recibir las votaciones en toda elección.

CAPITULO XVII

De la Hacienda Pública y Administración en General.

Art. 99.- Habrá un Intendente General con su tesorero y un Contador que darán las fianzas que la ley señale estarán Subordinados a todos los empleados de hacienda y sus obligaciones serán designadas por la ley. Su duración será la de cuatro años, pudiendo continuar en vista de su exacto cumplimiento y adelantamiento en la Hacienda Pública.

Art. 100.- La Hacienda Pública del Estado consiste en las tierras validas y en el producto de las contribuciones que decreta la Asamblea ya sean directas o indirectas.- Las primeras serán con proporción a la facultad de los contribuyentes y sin excepción ni privilegio alguno.

Art. 101.- La cuenta general de la Tesorería sobre contribuciones y rentas y su inversión, se imprimirá cada año y se mandará circular a todos los pueblos del Estado, y del mismo modo se verificará con las respectivas cuentas de ingresos y egresos de caudales de cada Departamento.

CAPITULO XVIII

De la responsabilidad de los funcionarios del Estado.

Art. 102.- Todos los funcionarios del Estado antes de posesionarse en un empleo ofrecerán bajo su palabra como cuidadores y hombres de bien, defender y sostener esta Constitución y la Federal. La ley arreglará la formula y solemnidad de esta promesa.

Art. 103.- Debe declararse que ha lugar a la formación de causa -- contra los Diputados, Consejeros, Jefes Supremo y Ministros de la Corte Superior de Justicia y demás funcionarios públicos por traición a la Patria, venalidad, falta grave en el desempeño de sus funciones y delitos comunes que merezcan pena más que correccional.

Art. 104.- Cuando los Diputados dicten una ley, orden o Decreto que ataquen directamente algún artículo expresado de esta Constitución o la Federal son traidores de la Patria, y les declarará responsabilidad la Asamblea subsecuente llamando a los suplentes de la mitad que queda y al ver la causa no intervenga mas de los que cooperaron a la infracción.

Art. 105.- El Jefe Supremo al recibir una ley contra la Constitución aún estando sancionada, deberá protestarla y volverla tres veces al Cuerpo Legislativo sin tocar la autoridad de cualquier condición -- que aun quedarán responsables cada una personalmente en todo tiempo -- en cumplir leyes, ordenes o decretos que directamente algún artículo de esta Constitución o la Federal.

Art. 106.- Declarando que ha lugar a formación de causa sea el Consejo, Corte de Justicia, Jefe o Jefe Supremo y Secretarios del Despacho, dan responsabilidades de su destino y depuestos siempre que sean plenamente justificadas sus labores conforme a la ley e inhabilitando para todo cargo público, y a las demás penas que hay lugar.

Art. 107.- Todo Hondureño puede representar a la Asamblea, al Consejo o Jefe Supremo; y Jueces de Primera Instancia para reclamar la observancia de esta Constitución.

CAPITULO XIX

De la observancia de la Constitución y leyes y reforma de la misma.

Art. 108.- Las Superiores Autoridades del Estado continuarán reduciéndose al número que en esta se establece, esta reducción se hará -- por suerte y sus renovaciones contando el tiempo corrido se harán con arreglo a esta Constitución. Las autoridades subalternas no quedan -- comprendidas en este artículo.

Art. 109.- La Asamblea en sus primeras sesiones tomarán en consideración los informes que debe remitirle el Consejo sobre infracción de Constitución y tesis, las reclamaciones de particulares sobre el mismo asunto; y las reclamaciones que haya hecho el Jefe Supremo en este objeto.

Art. 110.- Todas las leyes que últimamente aquí han regido continuarán en su vigor y fuerza, sino son las que se oponen a la Constitución de la República y a la administración soberana, e Independencia del Estado.

Art. 111.- No podrá sufrir alteración esta Constitución, sino hasta pasados cuatro años y si fuese reformada la Federal, lo será esta solamente en aquella parte que tenga inmediata relación.

Art. 112.- El Proyecto de reforma, o adición; se presentará por es

crito formado a lo menos por tres Diputados; y se leerá por dos veces con el intervalo de ocho días.

Art. 113.- Admitida la discusión pasará a una comisión, cuyo dictamen presentará pasado doce días.

Art. 114.- La reforma ó adición será aprobada por las dos terceras partes de los Diputados presentes en cuyo caso se convocará a una Asamblea Constituyente para que con plenos poderes de los pueblos puedan conocer la reforma que se solicita la cual debe expresarse en el Decreto de convocatoria.

Nociones generales de los derechos del hombre y de los -- ciudadanos.

Los derechos del hombre en sociedad son la libertad, la igualdad, la seguridad y propiedad.

El derecho de libertad es, el de pensar, hablar, escribir y hacer todo aquello que no ofende los derechos de otro.

El de igualdad consiste, en que la ley sea una para todos ya consigne o premie. El de seguridad resulta del concurso de todos a defender y sostener los derechos de cada uno.

El de propiedad en el derecho de gozar y de disponer libremente de sus bienes y disfrutar de su trabajo y de su industria. Estos derechos se conservan con la exta observancia de las leyes.

Todos los derechos del hombre y del ciudadano se derivan de estos principios: no hacer a otro lo que no quieras que te hagan, y hacer a todos los demás, todo el bien que uno quiera recibirles.

Ninguno es buen ciudadano, si no es buen hijo, buen padre, buen hermano, buen esposo y fiel amigo.

Ninguno es hombre de bien, si religiosamente no observa las leyes: el que las viola, abiertamente se declara en guerra con sus compatriotas.

Los Pueblos, al dar un voto para los empleados que han de elegir, deben mirar recaigan en un sujeto y hombre de bien dignos del nombramiento de ciudadano. Solo de la Comisión. Comayagua, Noviembre 28 de 1.831

J. TRINIDAD REYES
D.P.

JUAQN. RIVERA
D.G.

JOSE CALISTO DE VALENZ.º

JUAN LINDO

CONSTITUCION DE 1839

NOSOTROS, LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO DE HONDURAS, REUNIDOS EN ASAMBLEA CONSTITUYENTE, COMPETENTEMENTE AUTORIZADOS PARA FORMAR EL PACTO SOCIAL DE LOS HONDUREÑOS, INVOCANDO EL AUXILIO DE DIOS AUTOR Y SUPREMO LEGISLADOR DE LAS SOCIEDADES, DESEANDO FIJAR DE UNA MANERA ESTABLE LA FELICIDAD Y PROSPERIDAD DE NUESTROS COMITENTES, ASEGURAR LOS DERECHOS QUE SE HAN RESERVADO Y ESTABLECER LAS OBLIGACIONES QUE HAN CONTRAIDO; DECRETAMOS Y SANCIONAMOS LA SIGUIENTE

CONSTITUCION POLITICA

DEL ESTADO DE HONDURAS

SECCION I

Del Estado de Honduras, de sus Derechos y Obligaciones.

Art. 1.- El Estado de Honduras lo componen todos sus habitantes; es libre e independiente: su soberanía reside esencialmente en todo él; y por lo mismo le pertenece exclusivamente el derecho de establecer sin sujeción alguna, sus leyes fundamentales.

Art. 2.- Será uno de los federados de Centro-América, cuando -- acuerde con los otros Estados el pacto que los deban unir.

Art. 3.- Está obligado a conservar y proteger la libertad civil, la propiedad y demás derechos legítimos de todos y de cada uno de los habitantes, con leyes sabias y necesarias.

SECCION II

Del territorio del Estado

Art. 4.- El Estado de Honduras comprende el territorio que en tiempo del Gobierno Español se ha conocido con el nombre de provincia, circunscripto por los límites siguientes: por el Oeste con el Estado de Guatemala; por el Sur, Sudoeste y Oeste con el del Salvador; por el Sur con la ensenada de Conchagua en el mar Pacífico: por el Este, Sudeste y Sur con el Estado de Nicaragua: por el Este, Nordeste y Norte con el Oceano Atlantico: y las Islas adyacentes a sus -- costas en ambos mares. Cuando el comodamente se pueda, se demarcarán de un modo preciso los límites que los separan de los demás Estados.

Art. 5.- Este territorio se dividirá en Departamentos: las Leyes señalarán el número de estos, y harán las subdivisiones convenientes para su buena administración, subsistiendo entre tantos como es -- tan ahora.

SECCION III

De los Hondureños, de sus Deberes y Derechos.

Art. 6.- Son hondureños todos los nacidos y avecindados en el territorio del Estado, y los extranjeros con carta de naturaleza.

Art. 7.- El amor de la patria es el primer deber de los hondureños; lo es desigualmente contribuir, con proporción de su deber, al pago de los gastos de su administración: defenderla con las armas cuando sean llamados por la Ley; ser fieles a la Constitución; obedecer las Leyes y respetar las autoridades, que son sus órganos.

Art. 8.- Los derechos imprescriptibles de los hondureños son:

1. La libertad civil, por la que pueden ejecutar todo aquello que no esté prohibido por una Ley preexistente.
2. La igualdad ante la Ley.
3. La seguridad individual.
4. La propiedad, de la que podrán hacer el uso que mejor les convenga, con tal que no sea contra lo dispuesto por la ley.
5. Tributar a Dios culto según su conciencia.
6. Exigir de la sociedad que les garantice estos mismos derechos del modo más conveniente que les asegure el libre uso de ellos.

SECCION IV

De la Ciudadanía.

Art. 9.- Son Ciudadanos todos aquellos hondureños mayores de diez y ocho años que tengan renta, oficio o modo de vivir conocido; pero no tendrán voto pasivo, sino con arreglo a las Leyes; y los extranjeros naturalizados, con las mismas cualidades.

Art. 10.- Solo los Ciudadanos en ejercicio pueden obtener empleos en el Estado.

Art. 11.- La calidad de ciudadano se pierde:

1. Por admitir naturaleza en país extranjero.
2. Por admitir empleo, renta o distintivo en otro gobierno, excepto los de Centro-América; y
3. Por sentencia de pena aflictiva, si no se obtuviese rehabilitación.

Art. 12.- El ejercicio de la ciudadanía se suspende:

1. Por incapacidad física o moral.
2. Por estado de deudor fraudulento judicialmente declarado.
3. Por el de sirviente doméstico cerca de la persona.
4. Por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido.
5. Por hallarse procesado criminalmente, y decretado auto de prisión.
6. Por conducta notoriamente viciada.

SECCION V

Del Gobierno del Estado, y de la Religión.

Art. 13.- El Gobierno de Honduras es Republicano, Representativo popular.

Art. 14.- Como no puede existir garantía social sin la división e independencia de los Poderes se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Art. 15.- El Legislativo reside en una Cámara de Representantes: el Ejecutivo en un Presidente; y el Judicial en la Corte Superior de Justicia; y en los Tribunales inferiores que se establezcan.

Art. 16.- La religión del Estado es la Católica Apostólica y Romana. El ejercicio público de esta y de las demás que vengan a establecerse en el país, será protegido por el Gobierno.

SECCION VI

Del Poder Legislativo.

Art. 17.- La Cámara de Representantes se compondrá de un individuo por cada veinte mil almas; y mientras se forma con datos positivos la Estadística, nombrará un representante cada Departamento de los que - actualmente están conocidos.

Art. 18.- Para los casos de muerte, enfermedad u otro impedimento legal del propietario, se elegirán dos suplentes con la denominación de primero y segundo que fungirán por su orden.

Art. 19.- No podrán el propietario y suplente representar al mismo tiempo.

Art. 20.- Para ser representante se requiere: tener veinte y cinco años cumplidos, haber sido siete años Ciudadano, y no estar en actual ejercicio de empleo de nombramiento del Gobierno.

Art. 21.- Ningún Representante podrá recibir empleo del Gobierno, sino después de seis meses de haber pasado el periodo de su representación, a no ser de rigurosa escala.

Art. 22.- La Cámara será renovada por mitad cada dos años; la suerte decidirá los que deban salir en la primera Legislación, debiendo ser los más antiguos en las siguientes. Podrán ser reelegidos una sola vez los mismos Representantes, quedando a su arbitrio la admisión de la última.

Art. 23.- La Cámara abrirá sus sesiones el 24 de Diciembre en juntas preparatorias, excepto la primera que se reunirá después de promulgada esta Constitución.

Art. 24.- La Cámara estará reunida cincuenta días hábiles; no podrá continuar por más tiempo sus sesiones, ni volverse a reunir cuando se hubiese disuelto; sino por acuerdo del Gobierno, en cuyo caso solo se ocupará de la causa que motiva su convocatoria. La primera Cámara Legislativa es la que únicamente no podrá disolverse hasta no haber dado las leyes reglamentarias que deben emanar de esta Constitución.

Art. 25.- La Cámara no podrá legislar con menos de siete representantes.

Art. 26.- Son atribuciones de la Cámara.

1. Dictar e interpretar las leyes.
2. Decretar reglamentos para los demás Poderes y Corporaciones, o aprobar los que deban hacerse por ellas.
3. Acordar la fuerza armada que debe mantener el Estado.
4. Decretar contribuciones o impuestos para los gastos del Estado, con porporción a la riqueza pública.
5. Aprobar el presupuesto de gastos que presente anualmente el Gobierno.
6. Conmutar las penas, e indultar los delincuentes, siempre que resulte utilidad pública; que la pena corporal no sea conmutada en pecuniaria; que la gracia sea general, y concedida con las formalidades prescriptivas para toda disposición legislativa.
7. Detallar los sueldos de los funcionarios públicos.
8. Admitir las renunciaciones que, por causas graves, hagan de sus oficios los Representantes, El Presidente, y Magistrados de la Corte, y las que hagan con arreglo a la ley los Ministros del despacho.
9. Dar facultades al Ejecutivo detalladas en casos extraordinarios; pero jamás contra ninguno de los artículos de esta constitución; y
10. Declarar que ha lugar a formación de causa a los Representantes, Presidente, Magistrados de la Corte y Ministros del despacho.

SECCION VII

De la formación de la Ley, y de su Sanción.

Art. 27.- Solo por medio de los Representantes se puede proponer a la Cámara proyecto de ley, haciendolo por escrito y exponiendo su necesidad y utilidad.

Art. 28.- Leído el proyecto y admitido a discusión por la Cámara, se remitirá testimonio íntegro certificado por los Secretarios a la Corte Superior de Justicia, quien tomará en consideración el proyecto con el único objeto de declarar si es necesaria la ley, lo que verificará dentro de tres días, y devolverá con esta fórmula: "Es necesaria: vuelva a la Cámara de Representantes". "Es innecesaria; vuelva a la Cámara de Representantes". Y en uno y otro caso se expresará el número de votos.

Art. 29.- Con el propio objeto se pasará otro testimonio igual a los Ministros del despacho, y lo devolverán en el término, y con la fórmula prescrita en el artículo anterior.

Art. 30.- Devuelto el proyecto, se le dará segunda lectura en la Cámara, y se procederá en el acto a la votación de si es necesaria la ley resultando empate (contando con los votos que ha tenido en la Corte y Ministerio) se pasará al Presidente del Estado para que decida; en el caso de que por mayoría de votos, contados del modo expresado se decide se que es necesaria, se pasará a la comisión respectiva, para que esponga su utilidad y modo de reglamentarla.

Art. 31.- Puesto a discusión el dictamen de la comisión, y decidido por la Cámara estar suficientemente discutido, se procederá a la votación; si lo aprobase, se emitirá por la ley; y si le deshace, no podrá proponerse hasta el año siguiente. Estas mismas formalidades se requieren para la derogatoria de una ley vigente.

Art. 32.- Es regla general, que para toda decisión de la Cámara, se requiere las dos terceras partes de sus votos.

Art. 33.- Del proyecto de ley aprobado se sacarán dos tantos, autorizados por el Presidente y Secretarios y se remitirán al Ejecutivo.

Art. 34.- Todas las resoluciones de la Cámara, dictadas en uso de las atribuciones que le dá esta Constitución, necesitan para ser válidas, de ser sancionadas, exceptuándose únicamente las que fueren:

1. Sobre su régimen interior, y lugar de sus sesiones.
2. Sobre calificación de elecciones y renuncia de los elegidos.
3. Sobre declaratoria de haber lugar a formación de causa contra los funcionarios de que habla la fracción 10 del art. 26.
4. Sobre interpretaciones de ley; y
5. Sobre los nombramientos que haga lugar con arreglo a esta Constitución.

Art. 35.- El Presidente dará sanción dentro de ocho días naturales, devolviendo uno de los originales, firmado de su mano con esta formula Sancionada: Ejecútese. Y no verificandolo en el término designado será - tendrá por sancionada.

Art. 36.- Si no mereciese la sanción lo devolverá en el mismo término, y con la fórmula siguiente, firmada de su mano: Vuelva a la Cámara de Representantes con el informe conveniente".

Art. 37.- La Cámara lo tomará en consideración al día siguiente de haberse leído el informe, y si las tres cuartas partes lo rectificasen, se expresará al pie del decreto en esta forma: "Vuelva al Ejecutivo" - quien usará de esta: "Por sancionada -Ejecútese".

Art. 38.- Si el proyecto no fuese ratificado, no podrá volverse a proponer sino hasta pasado un año.

SECCION VIII

Del Poder Ejecutivo.

Art. 39.- El Poder ejecutivo reside en un Presidente electo directamente por el pueblo.

Art. 40.- La Cámara publicará su elección, y al mismo tiempo, entre los que tuvieren mayor número de votos elegirá tres suplentes, para que uno de ellos, en caso de impedimento del Presidente, pueda desempeñar - sus funciones.

Art. 41.- Cuando llegue el caso de impedimento del Presidente, la Cámara sorteará entre los tres suplentes, el que deba hacer sus veces: si el resultado sorteado resultase impedido, se reiterará este acto entre los dos restantes, y si este segundo lo estuviese también, ejercerá el último el Poder Ejecutivo.

Art. 42.- Si la Cámara estuviese en receso, los tres Ministros con asistencia de las corporaciones y empleados que existiesen en el lugar verificarán estos sorteos en actos públicos.

Art. 43.- Mientras se presenta el designado por la suerte para suplir la falta del Presidente, desempeñarán aquellas funciones los tres Ministros del despacho reunidos, y sus providencias serán autorizadas por sus respectivos Jefes de Sección. El interinato de los Ministros no podrá ser por más de noventa días.

Art. 44.- Igualmente desempeñarán los Ministros el Poder Ejecutivo por impedimento accidental del Presidente, que no pase de un mes.

Art. 45.- Si la Cámara estuviese reunida en los casos de los dos artículos anteriores, pondrán la sanción a los decretos que esta emita en los mismos términos y con la propia fórmula que designan los artículos 35, 36 y 37.

Art. 46.- El Presidente durará dos años; podrá ser reelecto una sola vez; más su admisión será voluntaria en este último caso.

Art. 47.- Para ser Presidente se requiere; ser Centro-Americano de origen; tener treinta años cumplidos; haber tenido el ejercicio de Ciudadano en los siete años inmediatos a su elección; ser del Estado se--glar; y hallarse en actual ejercicio de sus derechos.

Art. 48.- Son atribuciones del Presidente.

1. Sancionar la ley con dictamen de los Ministros.
2. Hacer que se publique la ley en el preciso término de tres días en el lugar de su residencia y en el de dos meses en todo el Estado, - bajo su responsabilidad a quienes toque.
3. Cuidar de la ejecución de la ley, del orden publico, y del exacto cumplimiento de los funcionarios en sus respectivos cargos, sin que por esta inspección pueda ingerirse directa ni indirectamente en el examen de las causas civiles pendientes, ni disponer en manera alguna de la persona de los reos por causa criminal.
4. Nombrar los Jefes Intendentes que fuesen necesarios, los Jefes militares y de Hacienda, los subalternos de todos estos a propuesta en terna de sus respectivos Jefes, y los Jueces de Primera Instancia a propuesta de la Corte.
- 5.- Nombrar los interinos de estos empleos, en los casos de suspensión, enfermedad o ausencia de los propietarios, los que deben tener las mismas cualidades de estos, y el interinato no podrá durar más de tres meses en los destinos que se exija fianza, y seis en los que no se requiera esta circunstancia.

6. Disponer de la fuerza armada del Estado.

7. Conceder, negar o pedir auxilio a los Estados unidos a este, previo acuerdo de la Cámara, y usar de las mismas facultades en su receso, con la precisa condición de convocarla bajo su más estrecha responsabilidad dentro de un mes, para su aprobación o desaprobación.

8. Formar reglamentos para el fácil cumplimiento y ejecución de las leyes; y

9. Convocar a la Cámara en casos extraordinarios.

Art. 49.- El Presidente debe consultar con sus tres Ministros reunidos:

1. Para sancionar la ley.
2. Para usar de las armas contra algún pueblo del Estado.
3. Para conceder, negar o pedir auxilio.

4. Para cualquier gasto extraordinario.
5. Para decretar empréstitos, o contribuciones, si fuese autorizado a este efecto. Conformándose el Presidente con la opinión de los Ministros en los casos expresados, cesa su responsabilidad, en donde deba haberla, y toda recae en ellos.
- Art. 50.- El Presidente usará del derecho de exclusión en los títulos de prelacías y demás beneficios eclesiásticos.
- Art. 51.- El Presidente propondrá, y la Cámara nombrará tres Ministros.
 1. De relación.
 2. De guerra, que desempeñará la Comandancia General de armas.
 3. De Hacienda que reunirá la Intendencia general.

Si la Cámara no se conformase con los propuestos, el Presidente hará que se exijan para Presidente.

Art. 52.- Para ser Ministro se requieren las mismas cualidades que se exigen para Presidente.

Art. 53.- En los casos de suspensión, enfermedad o ausencia de alguno de los Ministros, serán sustituidos por el Jefe de su respectiva sección, sólo para autorizar los negocios respectivos; más esta sustitución sólo durará hasta la próxima reunión de la Cámara. En caso de faltar los tres Ministros se convocará extraordinariamente la Cámara para que prevea su nombramiento.

Art. 54.- Son atribuciones de los Ministros:

1. Formar la planta de su respectivo despacho.
2. Autorizar las órdenes y decretos del Presidente y comunicarlos a los subalternos bajo su responsabilidad.
3. Aconsejar al Presidente en los casos de que habla el artículo 49; y
4. Presentar a los ocho días de haber abierto la Cámara sus sesiones, una memoria que comprenda con claridad el estado actual de los ramos que les son encargados, acompañando un estado que lo manifieste a primera vista.

Art. 55.- Toda ley o decreto se publicará en esta forma: "El Presidente en quien reside el Poder Ejecutivo del Estado de Honduras.- Por cuanto: la Cámara de Representantes ha decretado, y constitucionalmente se ha sancionado lo que sigue (aquí el decreto) Por tanto: ejecútese, lo tendrá entendido el Ministro del despacho de.....y dispondrá lo necesario a su cumplimiento."

Art. 56.- Cuando los Ministros estuvieren encargados del Gobierno, - la publicarán bajo la siguiente: El Consejo de Ministros en ejercicio - del Supremo Poder Ejecutivo del Estado de Honduras.- Por cuanto: la Cámara de Representantes ha decretado y Constitucionalmente se ha sancionado, &.

SECCION IX

Del Poder Judicial.

Art. 57.- El Poder Judicial es independiente en sus atribuciones; ni

la Cámara de Representantes, ni el Poder Ejecutivo podrán en ningún caso, ejercer las funciones judiciales; ni ninguna autoridad abrir juicios fenecidos: a él sólo pertenece la aplicación de la ley en las causas civiles y criminales.

Art. 58.- La Corte Superior de Justicia se compondrá de siete Magistrados nombrándose un propietario y un suplente en cada departamento directamente por los pueblos, y la misma Corte nombrará a su Presidente y Fiscal. El número de siete Magistrados no podrá disminuirse cualquiera que sea la división que se haga del territorio del Estado.

Art. 59.- Para ser individuo de la Corte se requiere: ser mayor de treinta años, si no es que sean letrados en quienes bastaría la de veinte y cinco, y haber sido siete años Ciudadano en el Estado; servirán su encargo todo el tiempo que dure su buen desempeño, o por renuncia voluntaria que hagan pasados dos años.

Art. 60.- Una ley arreglará la cantidad en las demandas, y la pena en las criminales en que deban admitirse juicio escrito, y concederse los tres recursos.

Art. 61.- La Corte se dividirá en tres salas, dos de apelaciones y una para lo civil, y otra para lo criminal, y la tercera de súplica.

Art. 62.- Son atribuciones de la Corte:

1. Conocer de los recursos de nulidad, y de los de fuerza con arreglo a las leyes.
2. Declarado que sea por la Cámara que ha lugar a la formación de causa, juzgar a los Diputados, presidente, Magistrados y Ministros del despacho por las faltas que cometan en el desempeño de su empleo.
3. Examinar las listas de las causas civiles y criminales que deben remitirle los Juzgados inferiores; y
4. Decidir las competencias, que se susciten entre los subalternos.

Art. 63.- Para juzgar los altos funcionarios que expresa el artículo anterior, se elegirá por suerte entre los seis Magistrados de la Corte, uno que forme la actuación y sentencia en primera Instancia: dos en su caso, electos del mismo modo, para oír el recurso de apelación: y los tres restantes para el de súplica, si fuese necesario. Una ley particular arreglará el modo de juzgar a los subalternos.

Art. 64.- Los Magistrados de la Corte declarados con lugar a formación de causa, serán juzgados por un tribunal compuesto de los seis Diputados suplentes más cercanos que no hubiesen fungido en la Cámara, electos del modo que se previene en el artículo anterior.

Art. 65.- En los delitos comunes de los Representantes, Presidente, Magistrados o Ministros del despacho, el individuo contra quien se declare haber lugar a formación de causa, por el mismo hecho quedará suspenso y sujeto a los Tribunales comunes.

Art. 66.- Todos los ciudadanos y habitantes del Estado, sin distinción alguna, estarán sometidos al mismo orden de procedimientos, y de juicios que determinen las leyes.

Art. 67.- Unos mismos Jueces no pueden serlo en dos diversas instancias.

SECCION X

De la Administración de Justicia en lo Civil.

Art. 68.- Habrá en cada Departamento dos Jueces de primera Instancia; uno conocerá de las causas y materias civiles, y otro de las criminales. Una ley particular arreglará sus atribuciones.

Art. 69.- En caso de que la Cámara lo estime necesario podrán nombrarse otros Jueces tanto de lo civil como de lo criminal, o reunir los conocimientos de ambos en uno sólo.

Art. 70.- Los Jueces de primera Instancia serán nombrados por el Presidente, a propuesta de la Corte, la que no podrá proponer menos de tres individuos.

Art. 71.- Estos Jueces deben tener las mismas cualidades que se requieren para ser Magistrados; no podrán ser removidos sin causa justificada; su duración será mientras continúe su buen desempeño, o que pasados dos años hagan dimisión voluntaria de su destino.

Art. 72.- En los pueblos en particular se administra la justicia -- por sus respectivos Alcaldes, bajo los límites y términos que la ley señala.

Art. 73.- Los Alcaldes ejercen en sus pueblos el oficio de conciliadores; ningún juicio civil, o sobre injurias, podrá entablarse por escrito sin hacer constar que se ha intentado antes el medio de conciliación.

Art. 74.- La facultad de nombrar árbitros en cualquier estado del pleito es inherente a toda persona; la sentencia que los árbitros dieren, es inapelable, si las partes comprometidas no se reservan este de recho.

SECCION XI

De la Administración de Justicia en lo Criminal.

Art. 75.- Ninguno podrá ser preso, sino en virtud de orden escrita por autoridad competente para darla.

Art. 76.- No podrá librarse sin que se proceda justificación de que se ha cometido un delito que merzca pena más que correccional, y sin que resulte al menos por el dicho de un testigo quién es el delincuente.

Art. 77.- Pueden ser detenidos.

1. El delincuente cuya fuga se tema con fundamento.

2. El que sea encontrado en el acto de delinquir, y en este caso to dos pueden aprehenderle para llevarle al Juez.

Art. 78.- La detención de que habla el artículo anterior no podrá durar más de cuarenta y ocho horas, y durante este término deberá la autoridad que la haya ordenado practicar lo prevenido en el artículo 76 y librar la orden de prisión, o poner en libertad al detenido.

Art. 79.- Todo reo debe ser interrogado dentro de cuarenta y ocho horas, y el Juez está obligado a decretar la libertad o permanencia - en la prisión, dentro de las veinte y cuatro horas siguientes, según el merito de lo actuado.

Art. 80.- Dentro de estas veinte y cuatro horas se manifestará al reo la causa de su prisión y el nombre de su acusador; quien quedará responsable a la prueba; no se exigirá juramento al reo en ninguna - causa criminal.

Art. 81.- Las personas aprehendidas por la autoridad, no podrán - ser llevadas a otro lugar de prisión, detención o arresto, que a los que están legal y públicamente destinados al efecto.

Art. 82.- Todo el que no estando autorizado por la ley espidiere, firmare, ejecutare o hiciere ejecutar la prisión, detención o arresto a alguna persona; todo el que en caso de prisión, detención o arresto autorizado por la ley, condujere, recibiere o retuviere al reo en lugar que no sea de los señalados público y legalmente; y todo Alcalde que - contraviniera a las disposiciones precedentes, es reo de detención arbitraria.

Art. 83.- Cuando alguno no estuviere incomunicado por orden del Juez transcripta en el registro del Alcalde, no podrá éste impedir su comunicación con persona alguna.

Art. 84.- No podrá ser llevado ni detenido en la cárcel el que diere fianza en los casos en que la ley expresamente no lo prohiba.

Art. 85.- El arresto por pena correccional no podrá pasar de dos meses.

Art. 86.- Por ningún delito, cualesquiera que sean sus circunstan--cias, se impondrá pena de confiscación de bienes.

Art. 87.- No podrá imponerse pena de muerte, sino en los delitos -- que atenten directamente y con fuerza armada contra el orden público, y en el de asesinato y homicidio premeditado o seguro.

Art. 88.- En ninguna causa criminal se exigirán derechos de Juzgado.

Art. 89.- La Cámara dispondrá que haya visitas de cárceles para toda clase de presos, detenidos o arrestados.

Art. 90.- Toda falta de observancia de las leyes que arreglen el proceso en lo civil y criminal, hace responsable personalmente a los Jueces que la cometieren.

SECCION XII

Del Gobierno Político de los Departamentos.

Art. 91.- En cada Departamento habrá un Jefe Político e Intendente de hacienda, nombrado por el Presidente. La ley determinará sus atribuciones, las cualidades que debe poseer, su duración y calidad de las fianzas que debe dar.

SECCION XIII

De las Diputaciones Departamentales.

Art. 92.- En cada Departamento habrá una Diputación para promover su prosperidad, fomentando la agricultura, industria y comercio, y es tender de todos los modos posibles la ilustración y enseñanza pública. Una ley reglamentará su formación y desarrollará sus atribuciones.

SECCION XIV

Del Gobierno interior político de cada pueblo.

Art. 93.- Habrá Municipalidad en todas las cabeceras de Parroquia, y en todos los pueblos que tengan quinientas almas reunidas o cien ca sas.

Art. 94.- El número de individuos de que debe componerse cada Muni cipalidad, sus cualidades, duración y atribuciones, se designarán por una ley. Su elección será directa, y el cargo municipal concejil.

Art. 95.- El ramo gubernativo de los pueblos será a cargo de los - Alcaldes constituciones y auxiliares del modo que lo arregle la ley. La tranquilidad pública y la seguridad de las personas y bienes de los habitantes de su territorio quedan a su cuidado, y bajo su responsabi- lidad.

SECCION XV

De las Elecciones.

Art. 96.- Las elecciones de los Supremos Poderes del Estado, y de todos los empleados de elección popular, serán directas. Una ley cons- titucional arreglará el modo de practicarlas, su regulación y escrutinio.

Art. 97.- El primer Domingo de Agosto se comenzarán en todo el Esta do las elecciones de todas las autoridades de elección popular, que dé ban servir el año entrante.

SECCION XVI

De la Hacienda Pública.

Art. 98.- La Hacienda Pública del Estado se formará; del valor de las tierras valdías; del de las maderas, fincas y acciones que le co-

rresponden; y del producido de las contribuciones que establezca la Cámara de Representantes.

Art. 99.- Habrá un Tribunal Superior de cuentas, cuyos individuos serán nombrados por el Gobierno, y se reglamentarán sus atribuciones por una ley especial.

Art. 100.- Habrá una Administración general de hacienda compuesta, - por lo menos, de un Contador y un Tesorero. Una ley arreglará sus atribuciones.

Art. 101.- Habrá una Tesorería en cada Departamento, en donde se depositará el fondo que la ley señale para el pago de sus respectivos Diputados y Magistrado, y del Juez del crimen que debe haber en él; y el sobrante se invertirá en los usos a que lo destine la ley que ha de arreglarlas.

SECCION XVII

De la Responsabilidad de los Funcionarios Públicos.

Art. 102.- Todos los funcionarios públicos antes de tomar posesión - de sus empleos, jurarán cumplir fielmente, sostener y defender esta Constitución, y las leyes que emanen de ella.

Art. 103.- Todos los empleados públicos son estrictamente responsables de los abusos que cometan en sus destinos, y por dejar de cumplir lo que por la ley deban practicar.

Art. 104.- La responsabilidad de que trata el artículo anterior podrá reclamarse contra los funcionarios que estuviesen en actual ejercicio de sus empleos, y cuatro meses hábiles después de haber cesado en ellos.

Art. 105.- Todos los empleados del Estado están sujetos a que se les forme causa por traición a la patria, o por haberse arrogado facultades que la ley no les da.

Art. 106.- Todo acto o acuerdo de las Municipalidades que no esté comprendido en las facultades que la ley les concede, es nulo, y sus autores responsables, con arreglo a la misma ley.

Art. 107.- Los Representantes son inviolables y libres en sus opiniones, y se hacen responsables solamente cuando dieren ley, orden o decreto que ataque directamente algún artículo expreso de esta Constitución.

Art. 108.- La Cámara subsecuente de la que hubiese emitido la ley, orden o decreto anti-constitucional, llamando a los suplentes de la mitad que queda, para que al ver la causa no intervenga ninguno de los que concurrieron a la infracción, conocerá de ella.

SECCION XVIII

De las Garantías.

Art. 109.- Ninguna casa puede ser registrada, sino por mandato escrito de autoridad competente, dado en virtud de dos deposiciones formales

que presten motivo al allanamiento, el cual deberá efectuarse de día. También podrá registrarse a toda hora por un agente de la autoridad pública: 1 En persecución actual de un delincuente. 2 Por un desorden escandaloso que exija pronto remedio. 3 Por reclamación hecha del interior de la casa. Mas hecho el registro se comprobará con dos deposiciones, que se hizo por alguno de los motivos indicados.

Art. 110.- Sólo en los delitos de traición se pueden ocupar los papeles de los habitantes del Estado, y únicamente podrá practicarse su examen, cuando sea indispensable para la averiguación de la verdad y a presencia del interesado; devolviéndole en el acto cuantos no tengan relación con lo que se indaga.

Art. 111.- La correspondencia epistolar es inviolable: la interceptada no hará fé en juicio ni fuera de él. Los administradores de correos o cualquiera otro individuo o autoridad que la viole, y el Juez que la admita en juicio, quedan personalmente responsables a los daños y perjuicios que ocasionen por la infracción de esta garantía, que no admite otra excepción que la del artículo anterior.

Art. 112.- La policía de seguridad no podrá ser confiada, sino a las autoridades civiles, en la forma que la ley determine.

Art. 113.- Nadie, en ningún caso podrá ser declarado delincuente - por el Poder Legislativo o Ejecutivo, ni condenado a sufrir pena alguna; sino en virtud de sentencia pronunciada por Tribunal competente, en la forma y previos todos los requisitos establecidos por la ley.

Art. 114.- La propiedad no podrá ser tomada si no es para objeto de utilidad pública pagándola por lo que el propietario la estime.

Art. 115.- Todo Ciudadano o habitante que ejerza en el país cualquier genero de industria, está obligado a contribuir en justa proporción a sus facultades, para sostener la Administración Pública.

Art. 116.- No podrá imponerse ninguna contribución que no sea por la Legislatura o facultad por ella delegada al efecto; pero nunca sin una justa proporción a las facultades de cada uno, y menos haciendo - pesar el gravamen sobre determinadas personas.

Art. 117.- No se podrá coartar en ningún caso ni por pretesto alguno, la libertad del pensamiento, la de la palabra, la de la escritura ni la de la imprenta.

Art. 118.- Tampoco se podrá suspender a los Ciudadanos el derecho de petición de palabra o por escrito.

Art. 119.- Toda ley ex post-facto o retroactiva es esencialmente - injusta, y por tanto ningún Juez en ningún caso podrá hacer aplicación de una ley a un hecho que ha tenido lugar antes de sus publicaciones.

Art. 120.- La proscrpcción es una ley inhumana, y por tanto ni el Poder Legislativo, ni el Ejecutivo podrán excluir de la protección de la ley, ni expatriar perpetua ni temporalmente a ningún habitante del Estado.

Art. 121.- La pena debe surtir todo su efecto en el delincuente que la ha merecido, y jamás podrá estender sus efectos a ninguna otra persona.

Art. 122.- Toda persona puede transitar libremente por el Estado, entrar y salir de él en tiempo de paz, sin necesidad de permiso ni pasaporte; y las que sean libres de responsabilidad podrán emigrar cuando quieran a país extranjero.

Art. 123.- No podrá la Cámara ni las demás autoridades:

- 1.- Dar título de nobleza ni consentir sean admitidos por ciudadanos de Honduras los que otras naciones pudieran concederles.
2. Permitir el uso del tormento, y los apremios; imponer confiscaciones de bienes, azotes y penas crueles.
3. Conceder por tiempo ilimitado privilegios exclusivos a compañías de comercio o corporaciones industriales.

Art. 124.- No podrá la Cámara ni las demás autoridades, sino en el caso de tumulto, rebelión a ataque con fuerza armada:

1. Desarmar a ninguna población, ni despojar a persona alguna de cualquier clase de armas que tenga en su casa, o de las que lleve lícitamente.
2. Impedir las reuniones populares que tengan por objeto un placer honesto, o discurrir sobre política y examinar la conducta pública de los funcionarios.
3. Disponer las formalidades sagradas de la ley para allanar la casa de algun Ciudadano o habitante, reducirlo a prisión o detenerlo.

SECCION XIX

Del modo en que se han de hacer las reformas a esta Constitución.

Art. 125.- No podrá reformarse, ni adicionarse ninguno de los artículos de la presente Constitución, si no es después de pasados cuatro años.

Art. 126.- El proyecto de reformas se presentará por escrito, firmado por cuatro Representantes, el cual se leerá por dos veces en la Cámara con el intervalo de ocho días.

Art. 127.- Admitido a discusión pasará a una comisión, y sufrirá los trámites establecidos por el reglamento.

Art. 128.- Adoptado el proyecto de reformas que se propone, por las dos terceras partes, se convocará a una Asamblea Constituyente para que las verifique.

Art. 129.- Queda reformada la Constitución del Estado de 11 de Diciembre de 1.825 y vigentes las leyes que no tengan oposición con la presente.

Dada en Comayagua a once de Enero de mil ochocientos treinta y nueve.

JUAN LINDO
D. por Gracias, Presidente.

DIONISIO DE HERRERA,
D. por Nacaome, Vice-Presidente.

MARIANO CASTEJON,
D. por Santa Bárbara.

JOSE MARIA ARRIAGA,

JOSE MARIA ARRIAGA
D. por Santa Bárbara.

J. SANTIAGO BUEZO,
D. Por Olancho.

ENCARNACION NIETO,
D. por Gracias.

FRANCISCO X. GÜELL,
D. por la Ciudad de Nacaome.

JACOBO ROSA,
D. por Tegucigalpa.

JOAQUIN RODRIGUEZ,
D. por Trujillo.

LUCAS RIOS,
D. Suplente por Yoro.

MANUEL EMIGDIO VASQUEZ,
D. por Tegucigalpa.

MONICO BUEZO,
D. por Yoro.

ZENON BUSTILLO,
D. por Olancho.

LIBERATO MONCADA,
D. por Cantarranas.

MARIANO GARRIGO,
D. por Comayagua.

FRANCISCO AGUILAR,
D. por Comayagua, Secretario.

JUAN IGNACIO VEGA,
D. por Cantarranas, Secretario.

Comayagua Enero 11 de 1.839.- Ejecútese.- Firmado de mi mano y nombre: sellado con las armas del Estado; y refrendado por el infrascrito Jefe de Sección encargado del despacho general.

JUAN FRANCISCO DE MOLINA

LEON ALVARADO

CONSTITUCION DE 1.848

EN EL NOMBRE DEL SER ETERNO, AUTOR OMNIPOTENTE Y LEGISLADOR SUPREMO DEL UNIVERSO.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL PUEBLO DE HONDURAS, REUNIDA CON EL IMPORTANTE OBJETO DE PROMOVER Y GARANTIR SU BIENESTAR Y BUENA ADMINISTRACIÓN ASEGURANDO EN SOLIDOS PRINCIPIOS SUS SAGRADOS DERECHOS, Y CONSULTANDO PARA ELLO LAS BUENAS LECCIONES QUE SUMINISTRA LA EXPERIENCIA; HA VENIDO A DECRETAR Y SANCIONAR LA SIGUIENTE.

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE HONDURAS

CAPITULO I

Del Estado, de sus Derechos y Obligaciones.-

Art. 1.- El Estado de Honduras la componen todos sus habitantes, es libre e independiente, su soberanía existe esencialmente en todo él, y por lo mismo le pertenece exclusivamente el derecho de establecer sus leyes -- fundamentales.

Art. 2.- Es uno de los Confederados de Centro-América en virtud de la aceptación que libremente ha hecho del pacto de Nacaome.

Art. 3.- Estará obligado a conservar y garantizar con leyes sabias y justas: la libertad política y civil, la igualdad, la propiedad y los demás -- derechos legítimos de todos y cada uno de sus habitantes.

CAPITULO II

Del Territorio.

Art. 4.- El Estado comprende todo el territorio que durante la dominación española se conoció con el nombre de provincia, circunscrito en los límites siguientes: por el Este, Sudeste y Sur con el Estado de Nicaragua: -- por el Este, Nordeste y Norte, con el Océano Atlantico: por el Oeste, con Guatemala: por el Sur Sudeste y Oeste, con El Salvador: por el Sur, con la ensenada de Conchagua, en el Pacifico; y las islas adyacentes a sus costas en ambos mares. Cuando se pueda se marcarán de un modo positivo los límites que lo separan de los demás Estados.

Art. 5.- La división del territorio del Estado se hará por una ley general, con los datos necesarios; mientras esto se verifica, permanecerán los departamentos como estaban el año 1.839.

CAPITULO III

De los Hondureños y Ciudadanos.

Art. 6.- Son Hondureños- todos los nacidos en el territorio del Estado- los hijos de los otros de la República, avencindados en el de Honduras- los extranjeros naturalizados- y los hijos de Hondureños nacidos en país extranjero con comisión del Gobierno, u ocupados en especulaciones científicas, artistas, literarios o mercantiles o desterrados temporalmente.

Art. 7.- Son ciudadanos- todos los Hondureños mayores de 21 años, - que sean padres de familia, y tengan la propiedad que designa la ley, o que sin ella sepan leer y escribir- y los Licenciados en cualquiera de las facultades mayores.

Art. 8.- Solamente los ciudadanos en ejercicio de sus derechos podrán obtener empleos en el Estado.

Art. 9.- Desde el año mil ochocientos sesenta en adelante, ningun Hondureño será Ciudadano, si no sabe leer, escribir y contar.

Art. 10.- Los extranjeros se naturalizan -por adquirir bienes raíces en el Estado, del valor que establezca la ley, y con vecindario de cuatro años -por contraer matrimonio con Hondureña y vecindario de dos años- y por adquirir del cuerpo Legislativo carta de naturaleza.

Art. 11.- Todo el que fuese nacido en las Repúblicas de América, y viniese a radicarse en Honduras, se tendrá por naturalizado desde el momento en que manifieste su designo ante la respectiva autoridad local.

Art. 12.- Los extranjeros residentes en cualquier punto de Honduras son obligaciones al pago de todos los impuestos ordinarios y extraordinarios, y al desempeño de los deberes que soporten los naturales; teniendo en su caso expeditos los mismos derechos que éstos para ocurrir a las autoridades, y ser oídos en justicia; debiéndoseles manifestar por las autoridades de los pueblos del Estado a donde primero toquen, este cargo y obligación.

Art. 13.- Se suspenden los derechos de Ciudadano -por proceso criminal en que se haya proveído auto motivado de prisión -por delito que según la ley merzca pena mas que correccional -por ser deudor quebrado, o fraudulento legalmente declarado, o dedudor a las rentas públicas, y judicialmente requerido de pago -por conducta notoriamente viciada -por incapacidad moral legalmente calificada -y por ser sirviente doméstico cerca de la persona.

Art. 14.- La calidad de Ciudadano se pierde -por admitir carta de naturaleza en país extranjero -por admitir empleo renta o distintivo de otro Gobierno, excepto los de Centro-América -y por sentencia de pena aflictiva, si no se obtuviese rehabilitación.

CAPITULO IV

Del Gobierno y de la Religión.

Art. 15.- El Gobierno del Estado, cuyo único objeto es el bienestar de sus habitantes, será republicano, popular, representativo; y se ejercerá por tres poderes distintos. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El primero residirá en el Cuerpo Representativo: el segundo en un Presidente; y el tercero en la Corte de Justicia y Juzgados inferiores.

Art. 16.- La religión del Estado será la Cristiana. Católica, Apostólica Romana, con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra. Sus altos poderes la protegerán con leyes sabias, pero ni estos ni autoridad alguna tendrán intervención ninguna en el ejercicio privado de las otras que se establezcan en el país, si éstas no tendiesen a deprimir la dominante y el orden público.

CAPITULO V

De las Elecciones.

Art. 17.- Se dividirá el territorio del Estado en distritos electorales que constarán de quince mil almas; y elegirán un Diputado -- propietario y un suplente; pero entre tanto se reunan los datos estadísticos para formar aquella división, se legirán dos Diputados propietarios y un suplente por cada uno de los departamentos de Gracias, Comayagua, Tegucigalpa y Olancho; y un propietario por los de Santa Bárbara, Cholueca y Yoro.

Art. 18.- Por cada uno de los departamentos que hoy existen, o que en adelante se formaren se elegirá un Senador propietario y un suplente.

Art. 19.- Las elecciones serán directas y la ley reglamentará la manera de hacerlas, dividiendo los distritos y departamentos en cantones, teniendo voto los inscriptos únicamente. Pero por ahora se harán las elecciones lo mismo que actualmente se practican en los departamentos.

CAPITULO VI

De la Organización del Poder Legislativo.

Art. 20.- El Poder Legislativo del Estado, se ejercerá por dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores, elegidos en los términos que se ha dicho. Serán independientes entre sí, y se reunirán sin necesidad de convocatoria, del 19 al 15 de Enero de cada año; sus sesiones ordinarias no pasarán de cuarenta; y podrá tenerlas extraordinarias cuando sea convocado por el Ejecutivo, en cuyo caso sólo se ocupará de la causa o causas que motiven su reunión. Un número menor de Representantes en cada una de ellas tendrá facultad para tomar inme-

diatamente todas las medidas que convengan para hacer concurrir a los demás hasta conseguir su plenitud; y la primera Legislatura no se disolverá hasta que haya dado todas las leyes que deben emanar de esta Constitución.

Art. 21.- Las dos terceras partes de los miembros de ambas cámaras será bastante para deliberar; pero en este caso, para toda resolución legislativa será necesario el voto de los dos tercios de los presentes en la de Diputados y de tres por lo menos en la del Senado.

Entre tanto se hace la división de que hable el art. 17 y continúe el número de Diputados que en él se prefija, serán bastantes para deliberar ocho Diputados y cinco Senadores, debiendo ocurrir en tal caso para toda resolución: el voto de seis Diputados y tres Senadores.

Art. 22.- Abrirán y cerrarán sus sesiones a un mismo tiempo: ninguna de ellas podrá suspenderlas ni prorrogarlas mas de tres días sin -- anunciar de la otra, ni trasladarse a otro lugar sin convenio de ambas.

Art. 23.- La Cámara de Diputados se renovará cada año por mitad, sin que puedan ser reelegidos. En la de Senadores se renovarán por suerte a los dos años, tres de sus miembros, y a los cuatro restantes; y en lo -- sucesivo por el orden de su antigüedad.

Art. 24.- Para ser electo Diputado se requiere ser mayor de veinticinco años de edad --natural, o vecino del departamento en que se haga la elección --estar en ejercicio de los derechos de Ciudadano --ser dueño de una propiedad libre, al menos de quinientos pesos, o ejercer profesión, oficio, arte, o industria que produzca igual suma al año.

Art. 25.- Para ser Senador se requiere ser mayor de treinta años -- --natural o vecino del departamento --y ser dueño de un capital libre que no baje de mil pesos, o ser Licenciado en cualquiera de las facultades mayores.

Art. 26.- Los Presidentes del Estado que después de concluido el período o períodos de que su administración hayan obtenido la declaratoria que expresa el artículo 41, serán individuos honorarios del Senado.

CAPITULO VII

De las facultades comunes a las dos Cámaras.

Art. 27.- Corresponde a cada una de ellas, sin intervención de otra: 1 Calificar la elección de sus miembros respectivos, y aprobar o no sus credenciales: 2 Llamar a los suplentes, en caso de muerte o imposibilidad de concurrir los propietarios: 3 Admitir las renunciaciones que unos y -- otras hagan por causas legalmente comprobadas: 4 Formar su reglamento -- interior, y exigir la responsabilidad a sus miembros, por acusación del Consejo o de los Ciudadanos, estableciendo el orden con que deben ser -- juzgados, tanto por faltas graves en el ejercicio de sus funciones, como en el caso del siguiente artículo.

Art. 28.- Ningún Diputado ni Senador será en tiempo alguno responsable por sus opiniones, sean expresadas de palabra o por escrito, ni podrá ser juzgado civil ni criminalmente, desde el día de su elección hasta quince días después de entrar en receso el Cuerpo Legislativo, sino por su respectiva Cámara, en cuanto a la formación e instrucción de la causa, para destituirlo y entregarlo, en consecuencia de ella, al juez correspondiente, cuando el hecho sea de aquellos que merecen pena mas que correccional; pero cualquiera autoridad de crimen podrá aprehenderlo por tales delitos durante aquel período, e instruirle la sumaria correspondiente, dando cuenta con ella a la Cámara que corresponda, para los fines expresados.

CAPITULO VIII

De las Atribuciones del Poder Legislativo.

Art. 29.- Corresponde al Poder Legislativo:

1. Erigir jurisdicciones y en ellas tribunales para que a nombre - de Honduras conozcan, juzguen, sentencien sobre toda clase de crímenes delitos y faltas, delitos, acciones y negocios de cualquier naturaleza que sean, en lo civil y criminal, entre Ciudadanos, estantes y habitantes del mismo Estado.

2.- Interpretar la ley, decretar las funciones y jurisdicciones de los diferentes funcionarios, y decretar los códigos civil, criminal y de procedimientos, para toda clase de personas y delincuentes.

3. Nombrar en Asamblea -general los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y vigilar por que se administre cumplidamente.

4. Levantar contribuciones e impuestos sobre todos los habitantes y toda clase de bienes y rentas, con la debida proporción: pedir préstamos y facilitarlos a los otros Estados: fijar y decretar anualmente la tropa de servicio activo y los gastos de la hacienda pública, y arreglar su manejo e inversión: tomar cuenta de ella al Poder Ejecutivo; y calificar y reconocer la deuda común, designando los fondos para su - amortización.

5. Crear y organizar el ejército y milicias del Estado, y decretar en caso de peligro la subvención de guerra con proporción a los haberes de cada individuo, y sin excepción de privilegio alguno.

6. Dirigir la educación pública, decretando bases y principios adecuados al mas fácil progreso de las ciencias y artes útiles, y proteger la libertad política de la imprenta.

7. Conceder premios honoríficos y gratificaciones compatibles con - el sistema de Gobierno establecido, por servicios relevantes a la patria y señalar, aumentar o disminuir los sueldos a los funcionarios y empleados.

8. Decretar todos los demás estatutos, ordenanzas e instrucciones - que juzgue necesarias y provechosas al sostenimiento de las garantías constitucionales, mantenimiento del Gobierno, y al interés y bienestar de los Ciudadanos y habitantes de Honduras.

9. Arreglar los pesos y medidas, abrir los grandes caminos y canales, decretar las armas y pabellon de Honduras, y determinar la ley, peso, tipo, y denominación de la moneda.

10. Decretar la guerra y hacer la paz, con presencia de los informes y preliminares que le comunique el Ejecutivo, y ratificar los -- tratados y negociaciones que el mismo Ejecutivo haya ajustado.

11. Conceder indultos y amnistias generales.

12. Admitir en Asambleas generales las renunciaciones que por causas graves hagan de sus oficios el Presidente y Vice-Presidente del Estado, los Magistrados de la Corte Suprema y Consejeros de Estado.

13. Decretar en Asamblea general que ha lugar a la formación de -- causa contra el Presidente y Vice-Presidente, Magistrados de la Corte, Ministros del despacho y Consejeros, por acusaciones fundadas -- que les hagan los Ciudadanos, o el Consejo.

14. En ningún caso ni con pretexto alguno, podrá la Asamblea general conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo, ni ampliar las que lleva detalladas en esta Constitución.

CAPITULO IX

De la Formación de las Leyes y de su Sanción.

Art. 30.- Sólo en la Cámara de Diputados puede tener origen los -- proyectos de ley, y proponerse por los Representantes, los Senadores, y los Ministros del despacho, a nombre del Ejecutivo; pero estos no podrán presentarlos sobre contribuciones, o impuestos de ninguna clase.

Art. 31.- Todo proyecto de ley después de discutido y aprobado por la Cámara de Diputados se pasará a la del Senado para que lo discuta y apruebe, si lo hallare conveniente; si lo aprobare se pasará al Ejecutivo, quien no teniendo objeciones que hacer le dará su sanción, y lo hará cumplir como ley.

Art. 32.- Si la Cámara de Senadores, al examinar el proyecto lo enmendare y modificare, volverá a la de Diputados, para que con las enmiendas y adiciones hechas, lo discuta de nuevo: y si lo aprobare con ellas, pasará otra vez al Senado y éste lo dirigirá al Ejecutivo, para que obre según queda dispuesto en el artículo anterior.

Art. 33.- Cuando el Ejecutivo encontrare inconveniente para sancionar los proyectos de ley, los devolverá al Senado, dentro de diez días, para que éste en el acto lo remita a la Cámara de Diputados, puntualizando las razones en que funde su opinión para la negativa; y si dentro del término expresado no los objetare, se tendrán por sancionados y los publicará como leyes. En el caso de devolución la Cámara de Diputados podrá reconsiderar y ratificar el proyecto con los dos tercios de votos con los presentes, y lo pasará al Senado para que lo apruebe de nuevo, si le pareciere; en este caso lo dirigirá al Ejecutivo, quien lo tendrá por ley, y la publicará y ejecutará.

Art. 34.- Un proyecto de ley desechado y no ratificado, no se podrá presentar otra vez en las mismas sesiones, sino hasta en las del año -- siguiente, Cuando se ratifique, la votación será nominal y deberá constar en el acta del día.

Art. 35.- Todo proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados se extenderá por triplicado, se publicará en ella, y firmados los -- ejemplares por su Presidente y Secretario pasará al Senado. Aprobán-- dolo este, lo firmará así mismo su Presidente y Secretario y lo diri-- girá al Ejecutivo, con ésta fórmula: Al Poder Ejecutivo. Si los re-- probase los devolverá usando otra: Vuelva a la Cámara de Diputados, cuya fórmula constará en sólo uno de los ejemplares. La que ésta Cá-- mara empleará para dirigir al Senado los proyectos, será: Pase al Se-- nado.

Art. 36.- Recibido por el Ejecutivo un proyecto de ley, si no le encontrare objeciones que hacer, firmará los tres ejemplares, devol-- verá dos al Senado para que uno quede en su archivo y pase el otro a la Cámara de Diputados, y que se conserve en el suyo: el otro se cus-- todia en el Ministerio y se publicará como ley.

Art. 37.- La promulgación de la ley se hará en ésta forma. Por -- cuanto la Cámara de Diputados decretó y la de Senadores aprobó lo si-- guiente: (Aquí el texto). Por tanto: Ejecútese.

CAPITULO X

Del Poder Ejecutivo y de los Ministros del Despacho.

Art. 38.- El Poder Ejecutivo se ejercerá por un Presidente del Es-- tado, que se nombrará directamente por los Ciudadanos de Honduras; -- pero cuando no resulte electo por Mayoría absoluta de votos, las Ca-- maras reunidas en Asamblea general lo elegirán entre los dos o más -- que hayan obtenido mayor número de sufragios; y si una sola persona obtuviese esta mayoría, se elegirá entre ellos y la que le siga en el inmediato número de votos.

Art. 39.- Para Presidente se requiere --ser mayor de treinta y dos años del estado seglar --natural de la Confederación de Centro-América --con vecindario de cinco años en Honduras --estar en ejercicio de los derechos de Ciudadano --ser hondureño de un capital que no baje de cin-- co mil pesos, en bienes raíces y semomientes, y tener buena conducta.

Art. 40.- Para suplir las faltas del Presidente, la Asamblea gene-- ral elegirá un Vice-Presidente, entre los que después de aquel tuvie-- ron mayor número de sufragios; y por si no ocurriese a tiempo, ejerce-- rá entre tanto el Ejecutivo el Senador más inmediato.

Art. 41.- La duración del Presidente y Vice-Presidente será de cua-- tro años y podrán ser reelegidos una sólo vez, sin el intervalo de -- igual tiempo, si lo fueren popularmente; más para ello es preciso que la Asamblea general los declare previamente, buenos servidores, del -- Estado, luego que se reuna en la época que haya de hacerse, o declara-- se la elección. Esta circunstancia será también necesaria para que -- puedan servir dichos oficios, los que antes hubiesen ejercido el Eje-- cutivo del Estado.

Art. 42.- El período para la duración del Presidente y Vice-Presi-- dente comenzará y fenecerá el 1º de Febrero, sin poder funjir un día más.

Art. 43.- Para ser Ministro del despacho se requiere ser mayor de veinte y cinco años de edad -estar en el ejercicio de los derechos - de Ciudadano -tener luces -buena conducta -ser vecino del Estado -poseer un capital que no baje de mil pesos.

Art. 44.- El Presidente nombrará uno, o dos Ministros cuando lo juzgue oportuno, y fijará los departamentos que a cada uno correspondan, pudiendo suspenderlos por causas justificadas y dar cuenta a la inmediata Asamblea para que declare si ha lugar a formación de causa, en cuyo caso podrá nombrar un interino.

Art. 45.- Todas las órdenes del Ejecutivo se expedirán por medio del Ministro; las que de otra suerte se expediesen no deben ser obedecidas ni cumplidas. Las personas que los sirvan serán responsables - por las que autoricen y despachen contra la Constitución o leyes.

CAPITULO XI

De las Atribuciones del Poder Ejecutivo.

Art. 46.- Tiene por principal deber y atribución el Ejecutivo:

1. Conservar la paz y tranquilidad interior del Estado, con arreglo a las leyes.

2. Publicarlas, y hacerlas ejecutar, y cumplir.

3. Proponer a la Cámara de Diputados, por medio del Ministro, los proyectos de ley que crea útiles y convenientes al bienestar de los Hondureños, con la restricción del artículo 30.

4. Promover todos los empleos civiles, políticos, militares, judiciales y de hacienda, y dos demás que dispongan las leyes.

5. Convocar extraordinariamente el Cuerpo Legislativo, oyendo al Consejo, cuando el Estado se halle amenazado de invasión, o que el orden público se altere considerablemente; y en cualquier otro caso imprevisto que sean necesaria su reunión para precaver o conservar la independencia e integridad del territorio, o bien sus derechos internacionales, debiendo en tal caso llamar a los Suplentes de los Diputados y Senadores que hayan fallecido durante el receso.

6. En el caso de la fracción anterior y en el de peste o hambre, si no hubiese tiempo para convocar y reunir al Poder Legislativo podrá decretar empréstitos o contribuciones generales, en justa proporción a los haberes de cada ciudadano, pero nunca en personas determinadas, - previo acuerdo del Consejo, dando cuenta exacta del uso que hubiese hecho de esta facultad.

7. Señalar el lugar de la reunión del Cuerpo Legislativo, cuando el designado por él estuviese en epidémica, o se encuentre amenazado de algún otro peligro inminente en que no pueda deliberarse con libertad y seguridad.

8. Presentar a la Asamblea general, por medio del Ministro a los cinco días de abiertas las sesiones ordinarias, un detalle circunstanciado del estado de todos los ramos de la administración pública; con los proyectos que juzgue oportunos para su conservación, reforma o mejoras; y una cuenta exacta del año económico vencido, con el presupuesto de los gastos del venidero y medios para cubrirlos; y si dentro del término expresado no presentare esta cuenta y presupuesto, quedará por el mismo hecho suspenso de sus funciones el Ministro general, o de hacienda si lo hubiere.

9. Hacer guerra y celebrar tratos de paz, y cualesquiera otras nego

ciaciones, sometiéndolas a la ratificación del Cuerpo Legislativo.

10. Dirigir y disponer de la fuerza armada para hacer cumplir las leyes y mantener el orden público; desempeñar la comandancia general y mandar en persona el ejército, con aprobación del Cuerpo Legislativo, en cuyo caso recaerá el Ejecutivo en el Vice-Presidente.

11. Levantar la fuerza necesaria a más de la decretada por la ley, para repeler invasiones, o contener insurrecciones, dando cuenta al Poder Legislativo en su próxima reunión.

12. Conmutar las penas.

13. Separar libremente a los Comandantes de armas.

14. Trasladar a todos los funcionarios y empleados de su nombramiento y suspenderlos temporalmente sin goce alguno de sueldo, hasta por seis meses, por ineptitud, desobediencia, faltas graves en el ejercicio de sus funciones, o malversación, oyendo al Consejo. Se exceptúan en el uso de esta facultad a los jueces de primera instancia. A estos y a aquellos podrá admitirles sus renunciaciones.

15. Conceder retiros y licencias a los empleados y funcionarios, - en los casos prevenidos por la ley.

16. Dar a las Cámaras los informes que le pidan; y siendo sobre asuntos de reserva lo expondrá así para que le dispensen su manifestación, o se la exijan si lo creyeren conveniente; pero no estará obligado a manifestar los planes de guerra ni las negociaciones de alta política, sino en el caso de que los informes sean necesarios para exigirle la responsabilidad, en el cual no podrá rehusarlos por ningún motivo, ni reservarse los documentos después de ser acusado ante la Asamblea general.

17. Expedir reglamentos y ordenanzas para facilitar y asegurar la ejecución de las leyes, la buena administración de las rentas públicas, y su legal inversión.

18. Celebrar contratos de colonización sujetándolas a la aprobación del Cuerpo Legislativo, sin cuyo requisito no podrán tener efecto.

19. Cuando llegue a su noticia que alguna autoridad subalterna ha traspasado la órbita de sus atribuciones infringiendo alguna ley, - mandará suspenderla e instruir la correspondiente averiguación; y resultando efectivo lo depondrá inmediatamente y de no hacerlo, el mismo Ejecutivo llevará la responsabilidad.

20. Inspeccionar con arreglo a las leyes y estatutos que rijan, los establecimientos públicos de ciencias y artes, las cárceles y presidios, los objetos de policía y orden; y formar la estadística.

CAPITULO XII

Del Consejo de Estado.

Art. 47.- El Consejo se compondrá; de un Senador, electo por la Asamblea general: de un Magistrado de la Corte, nombrado por la sección en que se encuentre el Gobierno del Ministro o Ministros del despacho: del Director de la hacienda pública: del primer Contador mayor; y de aquellos funcionarios beneméritos por su ilustración o servicios, que no pasando de dos, podrá nombrar la Asamblea general.

Art. 48.- El Consejo, con aprobación del Ejecutivo, podrá así mismo nombrar Consejeros honorarios a los empleados o Ciudadanos de merecimiento y distinguirlos por su honradez, luces y servicios.

Art. 49.- Corresponde al Consejo:

1. Darlo al Ejecutivo acerca de las dudas que ofrezca la ejecución de las leyes: en su sanción, cuando quiera oír su dictámen: para usar de la fuerza armada: para conceder, negar, o pedirá auxilio: para - cualquier gasto extraordinario: para decretar empréstitos o contribuciones; y en los demás casos en que tenga a bien oírlo.

2. Recibir las acusaciones que hagan los Ciudadanos a los individuos de los Altos Poderes, y dar cuenta con ellas a la Asamblea general en su próxima reunión ordinaria. El Consejo los acusará también en todos los casos en que su conducta sea notoriamente contraria al bien de la sociedad, y por traición, venalidad, cohecho o soborno, falta grave en el ejercicio de sus funciones, y por delitos comunes que merezcan penas que correccionales. Estos y los anteriores producen acción popular.

3. Declarar, oyendo al Ejecutivo, cuando ha lugar a la formación de causa contra el segundo Contador mayor, Ministros de la Dirección general y Aduanas, Jefes Políticos, Intendentes, Comandantes seccionarios, de puertos y fronteras, Generales y Coroneles, por delitos cometidos - en el ejercicio de sus funciones, debiendo ser juzgados por ellos y por los demás que cometan, por los tribunales comunes.

Art. 50.- Las acusaciones contra el Consejo por los casos expresados en el párrafo 2º del artículo anterior, se podrán presentar por los Ciudadanos al Ejecutivo para que las pase al Poder Legislativo en su próxima reunión ordinaria, o las dirigirán a éste directamente.

Formar su reglamento interior, y someterlo a la aprobación de la Asamblea general.

CAPITULO XIII

Del Poder Judicial.

Art. 51.- El Poder Judicial es independiente en sus atribuciones: a él sólo pertenece la aplicación de la ley en las causas civiles y criminales: residirá esencialmente en una Corte Suprema de Justicia, dividida en dos secciones y compuesta cada una de tres Magistrados propietarios y dos Suplentes, que elegirá la Asamblea general, estableciéndose una en la capital del Estado y la otra en la Ciudad de Tegucigalpa. Los individuos que se nombren para tal destino serán Abogados de crédito y honradez, mayores de veinticinco años, o personas de treinta arriba dueños de un capital libre que no baje de mil pesos, y dotados de mas que medianos conocimientos en jurisprudencia -padres de familia -Ciudadanos en el ejercicio de sus derechos -y vecinos del Estado. Serán inamovibles durante su buena conducta; pero si hacieren dimisión, podrá admitirseles a los dos años de haber tomado posesión.

Art. 52.- Cada Sección de Corte Suprema de Justicia será Tribunal - de Segunda instancia en la demarcación territorial que le haga la ley, y de tercera en los Juicios que haya conocido la otra apelación.

Art. 53.- Las atribuciones de las Secciones las determinan las leyes, ya sea respecto de aquellos asuntos en que hayan de conocer en segunda y tercera instancia, o ya como Corte plena.

Art. 54.- Propondrán al Ejecutivo para nombramiento de jueces de primera instancia, y velarán su descanso para que se administre pronta y cumplida justicia en sus respectivas demarcaciones, dirimiendo las competencias que se susciten entre cualesquiera Tribunales y Juzgados.

Art. 55.- Darán el pase a los documentos públicos y reconocerán los actos judiciales verificados en los otros Estados, de cualquier importancia y naturaleza que fueren, siempre que estuviesen conformes a las leyes de aquel de donde procedieren.

Art. 56.- Podrán suspender, durante el receso del Cuerpo Legislativo, a los miembros de su Tribunal, y a los Jueces de primera instancia y Asesores, en todo tiempo cuando éstos y aquellos se hagan culpables de faltas graves en el ejercicio de sus funciones oficiales; sin goce alguno de sueldo, y previa información sumaria del hecho.

CAPITULO XIV

De los Jueces Inferiores.

Art. 57.- La ley establecerá Jueces de primera instancia para conocer en lo civil y criminal, demarcará las jurisdicciones de cada uno, y la compensación proporcionada a su trabajo.

Art. 58.- Para ser Juez de primera instancia se requiere: ser Ciudadano en el ejercicio de sus derechos -mayores de 25 años -Letrado o tener conocimiento de jurisprudencia, poseer un capital que no baje de quinientos pesos -ser padre de familia y de notoria honradez.

Para emitir sus fallos consultarán a los Asesores que deben crearse. La ley determinará sus atribuciones. Unos y otros serán inmovilizados durante su buena conducta, y podrán renunciar a los dos años de haber tomado posesión.

CAPITULO XV

De la Administración de Justicia en lo Criminal.

Art. 59.- Ninguno podrá ser preso, sino en virtud de orden escrita -por autoridad competente para darla.

Art. 60.- No podrá librarse de esta orden sin que proceda justificación de que se ha cometido un delito que merezca pena mas que correccional, y sin que resulte al menos por el dicho de un testigo quien es el delincuente.

Art. 61.- Pueden ser detenidos: el delincuente cuya fuga se tema con fundamento; y el que sea encontrado en el acto de delinquir: en cuyo caso todos pueden aprehenderle para ser llevado al Juez.

Art. 62.- La detención de que habla el artículo anterior no podrá durar mas que cuarenta y ocho horas, y durante este término deberá la autoridad que la haya ordenado practicar lo prevenido en el artículo 59, y

librar la orden de prisión o poner en libertad al detenido.

Art. 63.- Todo reo debe ser interrogado dentro de 48 horas, y el Juez estará obligado a decretar su libertad, o permanencia en la prisión dentro de las veinticuatro horas siguientes, según el mérito de lo actuado.

Art. 64.- Dentro de éstas veinticuatro horas se manifestará al reo la causa de su prisión, y el nombre de su acusador, quien estará obligado a aprobar su querella.

Art. 65.- Las personas aprehendidas por la autoridad no podrán ser llevadas a otro lugar de prisión, detención o arresto que a los que estén legal y públicamente destinados al efecto.

Art. 66.- Todo el que no estando autorizado por la Ley expidiere, firmare, ejecutare, o hiciere ejecutar la prisión, detención o arresto de alguna persona: todo el que en caso de prisión, detención o arresto, autorizado por la Ley, condujere, recibiere o detuviere al reo en lugar que no sea de los señalados pública y legalmente, y todo alcalde que contraviniera a las disposiciones presentes de este capítulo, es reo de detención arbitraria.

Art. 67.- Cuando alguno no estuviere incomunicado por orden del Juez, transcrita en el registro del alcalde, no podrá este impedir su comunicación con las personas.

Art. 68.- No podrá ser llevado ni detenido en la cárcel el que diere fianza en los casos en que la Ley no lo prohíba.

Art. 69.- El arresto, prisión, o reclusión por pena correccional, no podrá pasar de treinta días, ni de veinticinco pesos de multa.

Art. 70.- No podrá imponerse la pena de muerte en caso alguno, por grave, criminal y atroz que merezca, excepto a los que mandan infligirla a una o más personas; sin que para excepcionarse pueda ser alegada la aprobación del hecho, cualquiera que sea la autoridad que la hubiese dado, ni alegar el lapso del tiempo por largo que fuere.

Art. 71.- El Cuerpo Legislativo dispondrá que haya visitas de cárceles para toda clase de presos, detenidos y arrestados.

Art. 72.- Toda falta de observancia de las leyes que arreglen el proceso criminal, así como en lo civil, hace responsable personalmente a los jueces que la cometieron. Por un mismo delito no podrá haber dos juicios.

Art. 73.- Las personas deben ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad del delito: su verdadero objeto es, corregir y no esterminar a los hombres. Por tanto: todo apremio o tortura que no sean necesarias para mantener en seguridad a las personas, es atroz y cruel, y no debe consentirse.

Art. 74.- Ningún individuo podrá ser llevado a dar testimonio en materias criminales contra sí mismo, ni contra parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo en afinidad; y todo proceso criminal tendrá el reo, derecho de producir cuantas pruebas le sean favorables de ser careado con los testigos, cuando lo pida; y de hacer la defensa por sí mismo, o por medio de su Abogado o defensor.

Art. 75.- Ningún juicio civil o sobre injurias podrá establecerse sin hacer constar que se ha intentado antes el medio de conciliación.

CAPITULO XVI

De la Responsabilidad, y Modo de proceder en las de las Supremas Autoridades.-

Art. 76.- Todo funcionario o empleado, al posesionarse de su destino, prestará juramento de ser fiel al Estado, de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y atenerse a su texto cualesquiera que sean - las órdenes o resoluciones que las contraríen; y por sus infracciones serán responsables con su persona y sus bienes, hasta que transcurra un tiempo igual al que sirvieron.

Art. 77.- Siempre que el Consejo, por mayoría de votos, y cumpliendo su primera tribución, acuse alguno de los individuos de los Altos Poderes, o dirija a la Asamblea general las acusaciones que los Ciudadanos les hagan, o que éstos les pongan directamente, se verificarán en la Asamblea por cinco de sus miembros, electos por la suerte: pero el pronunciamiento se hará colectivamente, debiendo concurrir los tercios de vo-tos de los presentes para que haya sentencia. Del propio modo se juzgarán a los Consejeros cuando sean acusados por los Ciudadanos. Los Diputados y Senadores lo serán por su propia Cámara, en los mismos términos con la diferencia de que harán la instrucción de la causa, en la de los primeros, dos Diputados, y en la de los Senadores, el que se nombre por ella.

Art. 78.- Las sentencias de la Asamblea general, y las de la Cámara, se limitarán a deponer al acusado y a declararle incapaz de obtener - otros honoríficos, lucrativos o de confianza, por cierto tiempo o perpetuidad; más si la causa diere mérito, quedará sujeto el culpado a los - resultados de un procedimiento ordinario ante los Tribunales comunes.

Art. 79.- Desde que se declare en la Asamblea general que se ha por admitida la acusación, el acusado queda desde este acto suspenso del - ejercicio de sus funciones oficiales, y por ningún motivo podrá permanecer mas en su puesto sin hacerse responsable del crimen de usurpación y ningún individuo podrá obedecerle.

Art. 80.- Los decretos, autos y sentencias, pronunciadas por la Asamblea general o las Cámaras, deben ser cumplidas y ejecutadas sin necesidad de confirmación ni sanción alguna.

CAPITULO XVII

Del Tesoro Público.

Art. 81.- Formarán el Tesoro Público del Estado: todos sus bienes - muebles, raíces y créditos activos; todos los impuestos, contribuciones, tallas y tasas que paguen los Hondureños, o en adelante pagaren, por - sus personas, industria, bienes o comercio; y todos los derechos que satisface el comercio con arreglo a las leyes.

Art. 82.- Al principio de las sesiones se publicará anualmente una - cuenta de los ingresos y egresos del tesoro público; y el Ejecutivo ordenará la publicación periódica de un estado de ingresos y egresos de todas las rentas.

Art. 83.- Habrá en Honduras un Director general de la hacienda pública, y en los Departamentos Intendentes: los últimos solo gozarán de un tanto por ciento; y a ellos y al Director les demarcará la ley sus funciones y calidades, y establecerá los demás empleados que administren, glosen y lleven la cuenta y razón.

CAPITULO XVIII

Del Gobierno Político de los Departamentos y del Régimen Municipal.

Art. 84.- En cada uno de ellos habrá un Jefe político nombrado por el Ejecutivo -Serán de reconocida honradez e instrucción -dueños de un capital libre que no baje de quinientos pesos -vecinos del departamento respectivo -mayores de veinticinco años de edad.

Art. 85.- Las Jefaturas y las Intendencias no podrán servirse por una misma persona y sólo en tiempo de guerra agregará a las primeras mando militar, cuando así lo juzgue oportuno el Ejecutivo.

Art. 86.- Los Jefes Políticos serán los órganos de comunicación entre el Ejecutivo y las autoridades de los pueblos, y los primeros agentes del Gobierno en la ejecución de las leyes y seguridad interior y exterior de cada departamento, más no se mezclarán en lo judicial. Durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos. La ley designará sus funciones y la manera de ejercerlas.

Art. 87.- Habrá Municipalidades en todas las cabeceras de parroquias y los demás pueblos que contengan quinientas almas reunidas o en su demarcación. Los Alcaldes deben precisamente saber leer y escribir. Una ley particular complementará el sistema municipal.

Art. 88.- Los pueblos que no pueden ser gobernados por Alcaldes Municipales por falta de Ciudadanos capaces, según el artículo anterior, o de población, tendrán Alcaldes ordinarios, sin jurisdicción, que en los asuntos políticos se entiendan directamente con el Jefe departamental, y en los de justicia con el Juez de primera Instancia.

CAPITULO XIX

De la Manera en que debe reformarse esta Constitución.

Art. 89.- Ninguno de sus artículos podrá reformarse ni adicionarse antes de que pasen seis años. Pero si los actos decretados por la dieta de Nacaome se aprobasen por los Estados de Nicaragua y el Salvador y que en consecuencia reunida que sea la Asamblea nacional constituyente decreta la Constitución que haya de regir a la Confederación, la Legislatura ordinaria convocará una Asamblea constituyente para que la acepte, y modifique a la vez la presente Constitución en la parte que únicamente llegue a oponer a aquella.

Art. 90.- Transcurrido el dicho término se procederá a su reforma parcial o adición, si la cuarta parte de los miembros de la Asamblea general lo propusiere y ésta lo acordase con los dos tercios de votos de los electos, aprobación del senado y sanción del Ejecutivo. Y entonces

si la opinión pública exigiere una reforma total, propuesta y aceptada que sea en la propia manera, se convocará una Asamblea Constituyente - para que la decreta.

Art. 91.- Las reformas parciales sobre garantías jamás podrán acordarse si no es para ampliar las existentes. La división de los poderes tampoco podrá alterarse.

CAPITULO XX

Declaración de los Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo y de los Hondureños en Particular.-

Art. 92.- La soberanía es inajenable e imprescriptible y limitada a lo honesto, útil y conveniente a la sociedad: ninguna fracción de pueblos o de individuos podrá atribuírsela, y su ejercicio está circunscrito originariamente a practicar las elecciones conforme a la ley.

Art. 93.- Todo poder político emana del pueblo: los funcionarios públicos con sus Delegados y agentes, y no tienen otras facultades que las que expresamente les da la ley. Por ella ordenan y gobiernan: por ella se les debe obediencia y respeto; conforme a ella deben dar cuenta de sus operaciones.

Art. 94.- Todos los habitantes del Estado tienen derechos incontestables, para conservar su vida y su libertad: para adquirir, poseer y disponer de sus bienes; y para procurar su felicidad sin daño de tercero: están obligados, a obedecer las leyes, respetar las autoridades establecidas, contribuir en proporción de sus haberes, para los gastos públicos, y servir y defender la patria con las armas, aún a costa de su vida, cuando sean llamados por la ley.

Art. 95.- Sólo por los medios constitucionales se asciende al Poder Supremo: si alguno lo usurpare por medio de la fuerza o de la sedición popular, es reo del crimen de usurpación: todo lo que obrare será nulo, y las cosas volverán al estado que tenían antes, luego que se establezca el orden constitucional.

Art. 96.- Es nula toda resolución, decreto, orden, acuerdo o sentencia de los Poderes constitucionales en que interviniera coacción ocasionada por la fuerza pública o por el pueblo en tumulto.

Art. 97.- Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir clase alguna de auxilio, sino por medio de las autoridades civiles y con orden formal de éstas.

Art. 98.- La fuerza armada es esencialmente obediente, no puede deliberar, ni ningún individuo de ella, en servicio activo, podrá ser -- electo Diputado, Senador ni Presidente.

Art. 99.- Todo Ciudadano y habitante puede libremente expresar, escribir y publicar su pensamiento, sin previa censura, y con sola la obligación de responder por el abuso de ésta libertad, ante el Tribunal que establecerá la ley. Pueden igualmente los Hondureños reunirse pacíficamente y en buen orden para tratar cuestiones de interés público, o para dirigir peticiones a las autoridades constituidas; más los autores de éstas reuniones responderán personalmente de cualquier desorden que se cometa.

Art. 100.- Las acciones privadas que no ofendan directamente el órden público, ni producen perjuicio de tercero, están fuera de la competencia de la ley.

Art. 101.- Ningún Hondureño puede ser inquietado, molestado, ni perseguido por sus opiniones, de cualesquiera naturaleza que sean, con tal que por un acto directo y positivo no perturbe el orden o infrinja la ley.

Art. 102.- Las leyes, órdenes, providencias o sentencias retroactivas, proscriptivas, confiscatorias, condenatorias sin juicio que hacen transcendental la infamia son injustas, opresivas y nulas. Las autoridades o individuos que cometan semejantes violaciones, responderán en todo tiempo, con sus personas y bienes, a la reparación del daño inferido.

Art. 103.- Todo Hondureño tiene derecho a estar al abrigo de inquisiciones, pesquisas y apremios, en su persona, en su casa, en sus papeles, familias y propiedades. La ley clasificará la manera de visitar lugares sospechosos, registrar casas para comprobar delitos y aprehender delincuentes para someterlos a juicio; y ningún individuo será juzgado en otra jurisdicción de aquellas en que se cometa el delito.

Art. 104.- En ningún caso ni circunstancias serán juzgados los Hondureños por Tribunales y Juzgados militares, ni sometidos a las penas y castigos prescritos por las ordenanzas del ejército a excepción de la marina y la milicia en servicio activo.

Art. 105.- Solamente los Tribunales establecidos con anterioridad por la ley juzgarán y conocerán en las causas civiles y criminales de los Hondureños: si lo hicieren el Cuerpo Legislativo, fuera de los casos que se dejan señalados, o el Poder Ejecutivo, o el Consejo, tomándose facultades que no les competen, o declarando delincuente o castigando a un individuo que debe ser juzgado por sus Jueces naturales, se declara que tales Poderes atacan la presente Carta, y que por su infracción responderá en todo tiempo con sus personas y bienes.

Art. 106.- Las causas de cualquier genero que sean se fenecerán dentro del territorio de Honduras: no podrán correr más de tres instancias y ningún habitante podrá sustraerse, por motivo alguno, del conocimiento de la autoridad que la ley señala.

Art. 107.- Todo Ciudadano o habitante libre de responsabilidad, puede emigrar donde le parezca y volver cuando le convenga.

Art. 108.- La correspondencia epistolar es inviolable; la interceptada no hará fé en juicio ni fuera de él. Los Administradores de correos o cualquier otro individuo u autoridad que la viole, y el juez que la admita en juicio, queda personalmente responsable por la infracción de ésta garantía.

Art. 109.- La policía de seguridad no podrá ser confiada si no a las autoridades civiles, en la forma que la ley establezca.

Art. 110.- La facultad de nombrar árbitros en cualquier estado de los pleitos civiles, es inherente a toda persona, y la sentencia que pronunciaren será inapelable si las partes comprometidas no se reservan expresamente éste derecho.

Art. 111.- Unos mismos jueces no pueden serlo en dos diversas instancias; avocar causas pendientes, para conocer de ellas, ni abrir juicios fenecidos.

Art. 112.- La propiedad de cualquier calidad que sea, no podrá ser ocupada si no es por causa de interés público, legalmente comprobada, y previamente indemnizado su valor a justa tasación.

Art. 113.- Ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, ni ningún Tribunal ni autoridad podrá restringir, alterar, o violar ninguna de las garantías enunciadas: cualquier Poder o autoridad que las infrinja, será responsable individualmente al perjuicio inferido en los mismos términos del artículo 102. y reputado como usurpador.

Art. 114.- Queda derogada la Constitución del Estado de once de Enero de mil ochocientos treinta y nueve, y vigentes las leyes que no tengan oposición con la presente.

Dada en Comayagua a cuatro de Febrero de mil ochocientos cuarenta y ocho.

J. Francisco Zelaya,
D.P.

José de Zelaya,
Diputado por Gracias.

Hipólito Casiano Flores,
D. V. P.

Pedro P. Chevez,
D. Por Comayagua,

Joaquin Meza,
Diputado por Comayagua,

Cornelio Lazo,
D. por Olancho.

Carlos Herrera,
Representante por Olancho.

Saturnino Bogran,
D. por Santa Barbara.

Bernardo Inestroza,
D. S. por Choluteca.

Tomás Soto,
D. por el Departamento
de Tegucigalpa.

J. Lopez
D. por Choluteca.

Francisco Gomez,
D. por el Departamento de
Comayagua.

F. Xatruch,
D. S. por Choluteca.

Francisco Medina,
D. por Olancho, Srio.

Anacleto Madrid,
D. por Gracias.

Manuel Leiva,
D. por el D. de Gracias, Srio.

José Gregorio García,
D. por Santa Barbara.

Ejecútese: Lo tendrá entendido el Ministro del despacho de -
Relaciones, y dispondrá se imprima, publique y circule.

Dado en la Ciudad de Comayagua, en la casa del Gobierno, y -
refrendado por el infrascrito Ministro de Relaciones, a 5 de Febrero -
de 1.845.

Juan Lindo,
Santos Guardiola.

CONSTITUCION DE 1.865

EN EL NOMBRE DE DIOS Y EN EJERCICIO DE LA SOBERANIA NACIONAL.-
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL PUEBLO HONDUREÑO, INSTALADA CON EL OBJE-
TO DE REFORMAR LA CARTA FUNDAMENTAL DE 4 DE FEBRERO DE 1.848, DECRETA
Y SANCIONA LA SIGUIENTE.

CONSTITUCION POLITICA

CAPITULO I

De la República y su Soberanía.

Art. 1.- El pueblo hondureño se constituye en República.

Art. 2.- La República de Honduras es soberana, libre e independien-
te; y por lo mismo le pertenece el derecho exclusivo de gobernarse a si
misma y establecer sus leyes fundamentales.

Art. 3.- La soberanía reside en la universalidad de los ciudadanos
hondureños. La ejercerán directamente en el acto de sufragar conforme
a las leyes; y en todo lo demás, por medio de los Poderes que establece
la presente Carta.

Es inalienable e imprescriptible.

Ningún individuo, ninguna fracción del pueblo puede atribuirse
se su ejercicio.

Art. 4.- Todo Poder Político emana del pueblo. Los funcionarios pú-
blicos son sus delegados y agentes, y no tienen otras facultades que -
las que expresamente les da la ley. Por ella ordenan, juzgan y gobier-
nan; por ella se les debe obediencia y respeto; y conforme a ella de-
ben dar cuenta de sus operaciones.

CAPITULO II

Del Territorio.

Art. 5.- La República comprende todo el territorio que durante la -
dominación española se conoció con el nombre de Provincia, circunscrito
en los límites siguientes: por el Este, Sudeste y Sur con la Repú-
blica de Nicaragua; por el Este, Nordeste y Norte con el Océano Atlán-

tico; por el Oeste con Guatemala; por el Sur, Sudeste, y Oeste con - El Salvador; y por el Sur con la ensenada de Conchagua en el Pacífico; y las islas adyacentes a sus costas en ambos mares.

Una ley demarcará especialmente los límites del territorio de la República.

Art. 6.- La división del territorio de la República se hará por - una ley general, con los datos necesarios; mientras esto se verifica permanecerán los departamentos como están actualmente.

CAPITULO III

Del Gobierno y de la Religión.

Art. 7.- El Gobierno de la República es popular, representativo; - y se ejercerá por tres Poderes distintos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Art. 8.- La Religión de la República es la Cristiana, Católica, - Apostólica, Romana, con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra. El Gobierno la protege; pero ni éste ni autoridad alguna tendrán intervención en el ejercicio privado de las otras que se establezcan en el país, si estas no tienden a deprimir la dominante y a alterar - el orden público.

CAPITULO IV

De los Hondureños, sus Derechos y Obligaciones.

Art. 9.- Son Hondureños:

1. Todas las personas nacidas en el territorio de la República.
2. Los hijos de padres y madres hondureños nacidos en país extranjero, con comisión del Gobierno, o ausentes temporalmente.
3. Los Centro Americanos que hayan ganado vecindario en cualquier pueblo de la República; y
4. Los extranjeros naturalizados.

Art. 10.- Los extranjeros se naturalizan:

1. Por obtener del Cuerpo Legislativo carta de naturaleza.
2. Por adquirir bienes raíces en el país con valor de dos mil pesos.
3. Por contraer matrimonio con hondureña y vecindario de un año; y
4. Por el simple vecindario de dos años.

Art. 11.- Son derechos de los Hondureños:

1. La libertad.
2. La igualdad ante la ley.
3. La seguridad individual; y
4. La propiedad.

Art. 12.- Los hondureños son obligados:

1. A ser fieles a la Constitución, a obedecer las leyes y respetar las autoridades establecidas.
2. A contribuir en proporción de sus haberes para los gastos públicos; y
3. A defender la patria con las armas, cuando sean llamados por la ley.

CAPITULO V

De la Ciudadanía.

Art. 13.- Son Ciudadanos todos los hondureños, mayores de veinte años que tengan oficio, o propiedad que les asegure un modo de vivir-honesto y decentemente.

También son ciudadanos, los mayores de dieciocho años que con las cualidades expresadas tengan grado literario, o sean casados.

Ninguno de los contenidos en éste artículo tendrá voto pasivo, sino con arreglo a las leyes.

Los extranjeros no están obligados a admitir la ciudadanía.

Art. 14.- Sólo los Ciudadanos en ejercicio pueden obtener empleos en la República.

Art. 15.- Pierden la calidad de Ciudadanos:

1. Los sentenciados por delitos que merezcan pena más que correccional, hasta obtener rehabilitación.
2. Los que admitan empleos de otros Gobiernos sin licencia del Congreso, con excepción de los de Centro-América; y
3. Los que se naturalicen en país extranjero.

Art. 16.- Se suspenden los derechos de ciudadano:

1. Por hallarse procesado criminalmente y tener decretado auto de prisión.
2. Por ser deudor fraudulento declarado, o deudor a las rentas públicas, requerido judicialmente de pago.
3. Por conducta conocida y viciada, o vagancia calificada.
4. Por enajenación mental, legalmente declarada; y
- 5.-Por ser sirviente doméstico cerca de la persona.

CAPITULO VI

De las Elecciones.

Art. 17.- Se dividirá el territorio de la República en distritos electorales, que constarán de diez mil almas; y elegirán un Diputado propietario y su suplente. Pero entre tanto se reúnen los datos estadísticos para formar aquella división, se elegirán tres Diputados propietarios y dos suplentes por cada uno de los departamentos de Comayagua, Tegucigalpa, Gracias y Olancho y dos suplentes por cada uno de los de Santa Bárbara, Yoro y Choluteca.

Art. 18.- Las elecciones serán directas y la ley reglamentará la -

manera de hacerlas, dividiendo los departamentos y distritos en cantones, y disponiendo se formen registros de cada canton, teniendo voto los inscritos únicamente.

Por ahora se harán las elecciones en la forma prevenida por la ley.

CAPITULO VII

De la Organización del Poder Legislativo.

Art. 19.- El Poder Legislativo de la República se ejercerá por un Congreso de Diputados elegidos en los términos que se ha dicho.

Se reunirán cada dos años sin necesidad de convocatoria del 1 al 15 de Enero. Sus sesiones durarán sesenta días, pudiendo cerrarse antes, de acuerdo con el Ejecutivo. También las tendrán extraordinarias cuando sean convocadas por este; en cuyo caso sólo se ocuparán de las causas que motiven su reunión.

Un número menor de representantes tiene facultad para tomar inmediatamente las medidas convenientes para hacer concurrir a los de mas, hasta conseguir su plenitud. La primera Legislatura no se disolverá sino cuando haya emitido las siguientes leyes:

1. La de elecciones.
2. De hacienda.
3. De justicia.
4. De Gobernadores Políticos y Municipalidades; y
5. La que establezca las condiciones bajo las cuales debe admitir la República la inmigración extranjera.

Art. 20.- El Congreso puede instalarse y deliberar con las dos terceras partes de los miembros electos. Para que haya resolución basta la mayoría absoluta de votos.

Art. 21.- El Congreso se reunirá en la Capital de la República; pero él ya instalado, podrá decretar su traslación a otro punto por causas graves que él mismo calificará.

Art. 22.- Las credenciales de los Representantes durarán cuatro -- años, pudiendo ser reelectos una sola vez; pero a los dos años del -- mismo período, se renovará la mitad de los miembros del Congreso, designando por sorteo, que hará el mismo, al cerrar sus sesiones, La renovación sucesiva se hará por el orden de antigüedad.

Art. 23.- Para ser electo Representante se requiere ser mayor de treinta años, natural o vecino del departamento en que se hace la elección y ser dueño de un capital libre y conocido que no baje de mil pesos, O licenciado en cualquiera de las facultades mayores.

CAPITULO VIII

De las Atribuciones del Poder Legislativo.

Art. 24.- Corresponde al Poder Legislativo:

1. Calificar la elección de sus miembros y aprobar o no sus credenciales.

2. Llamar a los suplentes en caso de muerte o imposibilidad de concurrir los propietarios.
 3. Admitir las renunciaciones que unos y otros hagan por causas legalmente comprobadas.
 4. Formar su reglamento interior.
 - 5.-Decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
 6. Crear jurisdicciones y establecer en ellas Tribunales y Jueces - para que a nombre de Honduras conozcan, juzguen y sentencien en toda - clase de asuntos civiles y criminales que ocurran en la República.
 7. Señalar las atribuciones de los diferentes funcionarios públicos.
 8. Decretar reglamentos para el régimen interior de los demás Poderes.
 9. Decretar tasas e impuestos en proporción a la riqueza pública.
 10. Acordar empréstitos forzosos en circunstancias extraordinarias, consultando el haber de cada uno de sus habitantes.
 11. Crear el ejército y milicias de la República.
 12. Determinar la fuerza permanente.
 13. Declarar la guerra y hacer la paz, con presencia de los datos - que le comunique el Ejecutivo; y ratificar los tratados y negociaciones que él mismo haya ajustado, si mereciesen su aprobación.
 14. Procurar el desarrollo de la instrucción pública, decretando estatutos y métodos adecuados.
 15. Crear y suprimir empleos, y asignar, aumentar o disminuir sus - sueldos.
 16. Conceder premios honoríficos y gratificaciones compatibles con el sistema de Gobierno establecido, por servicios relevantes a la patria.
 17. Arreglar los pesos y medidas -Promover las vías de comunicación -Decretar las armas y pabellón de la República; -y determinar la ley, - peso y tipo de la moneda.
 18. Conceder indultos y amnistías.
 19. Nombrar los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, y conferir los grados de Brigadier arriba, inclusive.
 20. Declarar que ha lugar a formación de causa contra los individuos de los Supremos Poderes, Ministros del despacho y Agentes diplomáticos de la República.
 21. Admitir las renunciaciones que por causas graves hagan de sus oficios los mismos empleados, y la dimisión de Brigadier arriba, inclusive; y
 22. Fijar y decretar bienalmente los gastos de la administración en todos los ramos de hacienda pública, arreglando su manejo e inversión; tomar cuenta de ella al Poder Ejecutivo; y calificar y reconocer la deuda nacional e interior, designando fondos para su amortización.
- Art. 25.- No podrá el Poder Legislativo, salvo en los casos que ésta Constitución determina, conceder facultades extraordinarias al Ejecutivo, ni ampliar las que en ella lleva detalladas.
- Art. 26.- El Poder Legislativo, puede delegar en el Ejecutivo las facultades siguientes:
1. Legislar sobre los ramos de policía, hacienda, guerra y marina.
 2. Aprobar o decretar estatutos y ordenanzas de las corporaciones o establecimientos que deban tenerlos, y los proyectos sobre creación de fondos que le presentaren.
 3. Arreglar el sistema de pesos y medidas. Promover las vías de comunicación ordinarias; y
 4. Decretar los Códigos Civil, penal, de procedimientos, de comercio

y minería -De éstas facultades sólo podrá hacer uso en receso del poder Legislativo; y con el voto ilustrativo de una comisión de personas competentes, que el Congreso o el mismo Ejecutivo elegirá. -Dadas éstas leyes, cesa la Delegación.

Art. 27.- El Congreso se ocupará de preferencia de los asuntos que comprenda la memoria del Gobierno.

Art. 28.- Cuando el Congreso hubiere de tratar de los intereses de la Iglesia, o de cosas que se relacionen con ellos, podrá convocar al Prelado Diocesano, para que por sí o por medio de un delegado, concurre a la sesión si lo tuviere a bien, con voto ilustrativo.

CAPITULO IX

Del Poder Ejecutivo.

Art. 29.- El Poder Ejecutivo se ejercerá por un ciudadano que llevará el título de Presidente de la República, nombrado directamente por el pueblo hondureño; pero cuando no resulte lecto por mayoría de votos absoluta, el Congreso lo elegirá entre los tres ciudadanos que hayan obtenido mayor numero de sufragios.

Art. 30.- Cuando el Presidente tuviese a bien depositar su autoridad por alguna causa, lo hara en uno de los tres Diputados que designará el Congreso para este objeto: y en caso de muerte, remoción, renuncia o impedimento de aquel funcionario, los Ministros del despacho asumirán el Ejecutivo, debiendo proceder inmediatamente a designar en sorteo público, el Diputado que entre los designados deba ejercer el Gobierno. Para este caso serán convocados los funcionarios públicos de mayor categoría que se hallaren en el lugar donde se practique. En falta de los Ministros del despacho, recaerá el Poder en el Diputado que entre los designados se hallare a menor distancia de aquellos, y estando a igual, recaerá en el primer designado, sucediendo los demás por el orden de su nombramiento.

Art. 31.- Para ser Presidente se requiere ser padre de familia -mayor de treinta años, del estado seglar -natural de Centro-América, con vecindario de cinco años en Honduras -de notoria honradez, e instrucción -ser dueño de un capital en bienes raíces que no baje de cinco mil pesos, libre de todo gravamen y ubicado en el territorio de la República -y no haber hecho la guerra a esta en calidad de caudillo simplemente, o en la de jefe militar, desde la emisión de ésta Carta en adelante.

Art. 32.- Antes de proceder al Congreso o declarar o a hacer esta elección, se informará y calificará en sesión secreta si los candidatos reúnen las condiciones del artículo anterior, y desechando a los que no las tengan, procederá en sesión pública a declarar o verificar la elección, la cual se hará por cédulas que recogerán en una urna.

Art. 33.- El período presidencial será de cuatro años, sin lugar a reelección sucesiva -Comienza el 1 de Febrero del año de la renovación.

Art. 34.- El Presidente de la República es Comandante en Jefe del Ejército y armada.

CAPITULO X

Atribuciones del Poder Ejecutivo.

Art. 35.- Corresponde al Poder Ejecutivo:

1. ~~Mantener~~ ilesa la soberanía e independencia de la República y - la integridad de su territorio.
2. Conservar la paz y tranquilidad interior, conforme a las leyes.
3. Publicarlas y hacerlas ejecutar, y usar del voto del modo establecido.
4. Proponer al Congreso por medio del Ministerio, los proyectos de ley que crea convenientes, con las restricciones del artículo 45.
5. Presentar al Congreso por el mismo órgano, a los cinco días de abiertas las sesiones ordinarias un informe circunstanciado de todos los ramos de la administración pública, con los proyectos que juzgue oportunos para su conservación o mejoras; y una cuenta exacta del bienio vencido, con el presupuesto de gastos del venidero y medios para llenarlo. Y si dentro del término expresado los Ministros no cumplen esta obligación, quedarán por el mismo hecho destituidos de sus funciones. El presupuesto no excederá al producto de las rentas ordinarias.
6. Publicar anualmente un estado de los ingresos y egresos de las - rentas públicas.
7. Dar al Congreso los informes que le pida, pudiendo retener los documentos de los asuntos que demanden reserva, a menos que sean para exigirle la responsabilidad. Durante la guerra no es obligado a exhibir los planes de campaña.
8. Hacer efectiva la concurrencia de los Representantes en la época en que debe aparecer el Congreso; y convocar a éste para sesiones extraordinarias cuando lo estime conveniente; llamando, mientras se reunen las Juntas preparatorias, a los suplentes de los propietarios que hayan fallecido.
9. Proponer amnistías al Congreso, cuando el bien público lo exija; y concederlas por sí en receso de aquel.
- 10.-Levantar toda la demás fuerza necesaria sobre la decretada por la ley, para repeler invasiones o contener rebeliones; pudiendo en éste único caso, si los recursos ordinarios no bastasen, proveerse de - los que necesite por un empréstito general, de cuya inversión dara -- cuenta al Congreso en su próxima reunión.
11. Expedir reglamentos y órdenes para la ejecución de las leyes.
12. Nombrar y remover a los Ministros el despacho y a los demás empleados de su libre nombramiento, admitir sus renunciaciones, y conceder - retiro a los jefes y oficiales del ejercito y marina, con arreglo a - las leyes;
13. Nombrar a los Jaeces de primera Instancia del fuero común a propuesta en terna de la Corte de Justicia; y admitir sus renunciaciones. No - podrá en ningún caso devolver la terna presentada.
14. Nombrar a-sí mismo los demás empleados, cuya provisión no esté reservada a otra autoridad.
15. Cuidar que los Magistrados y Jueces asistan puntualmente a sus despachos, para que los asuntos no sufran retraso, pudiendo compenarlos en caso necesario.

16. Habilitar puertos y establecer aduanas marítimas y terrestres y dar reglas para nacionalizar y matricular buques.

17. Hacer la guerra y celebrar tratados de paz, concordatos y cualquiera otras negociaciones, sometiendo a la rectificación del -- Cuerpo Legislativo.

18. Dirigir y disponer de la fuerza armada, y mandar el ejército en persona si lo tuviese a bien; encargando en este caso el Ejecutivo a quien corresponda.

19. Conmutar las penas cuando el Tribunal superior que pronuncie la sentencia que causa ejecutoria contra el reo, recomiende la conmuta, expresándolo así en la propia sentencia, y por alguno de los motivos que la ley señale.

20. Vigilar sobre la exactitud de la moneda y computar el valor de la extranjera cuya circulación se permita.

21. Nombrar Ministros diplomáticos, Agentes y Cónsules cerca de los demás Gobiernos; y admitir los nombrados por éstos.

22. Rehabilitar, durante el receso del Congreso, al que haya perdido los derechos de ciudadano.

23. Ejercer el derecho de patronato conforme al concordato celebrado con la Santa Sede.

24. Poner el pase, si lo tuviese a bien, a los títulos en que se confiera dignidad eclesiástica; y a los nombramientos de Vicarios, Curas y Coadjutores, sin cuyo requisito los agraciados no pueden entrar en posesión. Conceder igualmente a las letras pontificias y disposiciones conciliares, y retenerlas. De esta formalidad solo quedan exceptuadas las que sean sobre dispensas para ordenes o matrimonios y las expédidas por la penitenciaria.

25. Todos los objetos de la policía de orden; los establecimientos públicos de beneficencia, de ciencias, letras y artes; las cárceles y presidios, están bajo su dirección y suprema inspección, conforme a sus leyes y estatutos lo mismo que la formación de censos y estadisticas; y

26. Promover y proteger el desarrollo de la industria agrícola, fabril y comercial.

CAPITULO XI

De los Ministros del despacho.

Art. 36.- El Poder Ejecutivo determinará el número de los Ministros y sus respectivos departamentos, no pudiendo aquellos ser menos de dos.

Art. 37.- Para ser Ministro se requiere ser natural de Centroamérica y vecino de la República -del estado seglar -tener treinta años de edad, notorias luces y buena conducta y poseer un capital libre que no baje de mil pesos.

Art. 38.- Las providencias del Poder Ejecutivo deben expedirse por el Ministerio respectivo; de otro modo no serán obedecidas.

Art. 39.- Los Ministros serán responsables solidariamente con el Presidente, de las providencias que firmen contra la Constitución y las leyes; salvo en el caso que protesten.

CAPITULO XII

Del Poder Judicial.

Art. 40.- El Poder Judicial lo ejerce una Corte dividida en dos Secciones, y los demás tribunales que se establezcan.

Art. 41.- Las Secciones residirán una en esta ciudad y otra en la de Tegucigalpa. La ley demarcará su respectiva comprensión jurisdiccional.

Art. 42.- Cada Sección se compondrá por lo menos de tres Magistrados propietarios y dos suplentes.

Art. 43.- Para ser Magistrado se requiere se Abogado de la República - de crédito y honradez - mayor de veinticinco años - y padre de familia; - o no Letrado de treinta años arriba - con más que medianos conocimientos de jurisprudencia, - dueño de un capital libre que no baje de mil pesos - y tener las demás cualidades requeridas para los Letrados. Serán inamovibles durante su buena conducta; pero si hicieren división, se les admitirá a los dos años de haber tomado posesión.

Cuando todos o algunos de los Magistrados estuviesen legalmente impedidos para conocer de un asunto, nombrarán colegas que desempeñen - sus funciones, quienes reunirán las cualidades que se exigen para Magistrados. La ley reglamentará el modo de hacer estos nombramientos.

CAPITULO XIII

De las Atribuciones de la Corte.

Art. 44.- Corresponde a cada Sección:

1. Formar el reglamento para su régimen interior.
2. Conocer en segunda instancia de las causas civiles y criminales, en los casos y forma que la ley determinen; y en última, de las súplicas y demás recursos legales:
3. Dirimir las competencias de los Tribunales y Jueces de su jurisdicción, de cualquier fuero que sean.
4. Decidir las promovidas a los Tribunales y Jueces de su Jurisdicción por la otra Sección, Sus Tribunales o Jueces. La ley determinará el modo de resolver las que ocurran entre ambas Secciones.
5. Suspender, durante el receso del Congreso, a los Magistrados por - faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
6. Conocer de las causas de responsabilidad de los Jueces de Primera - Instancia de su respectiva jurisdicción; pudiendo suspenderlos y destituirlos con conocimiento de causa y conforme a la ley.
7. Conocer de los recursos de fuerza y de los demás que le atribuya la ley.
8. Hacer el recibimiento de Abogados; suspenderlos por causas graves, y aún retirarles sus títulos por conducta notoriamente viciada, cohecho o fraude, con conocimiento de causa.
9. Visitar por medio de un Magistrado los pueblos de su jurisdicción, para corregir los abusos que se noten en la administración de justicia. Las facultades del Magistrado, la duración de la visita y demás circunstancias conducentes al objeto, serán determinadas por la ley.
10. Vigilar sobre la conducta de los Jueces inferiores, cuidando que ad

ministren pronta y cumplida justicia; y

11. Manifestar al Congreso la inconveniencia de las leyes, o las dificultades para su aplicación, indicando las reformas de que sean susceptibles. La ley determinará las demás atribuciones del Poder Judicial.

CAPITULO XIV

De la Formación, Sanción y Publicación de la Ley.

Art. 45.- La iniciativa de la ley es exclusivamente reservada a los Diputados, al Presidente por medio de los Ministros, y a la Corte de Justicia; más el Ejecutivo no podrá hacerla sobre impuestos ni contribuciones de ninguna clase.

Art. 46.- Todo proyecto de ley después de discutido y aprobado por el Congreso, se pasará al Ejecutivo, el que no teniendo objeciones -- que hacerle, le dará su sanción y lo hará publicar como ley.

Art. 47.- Cuando el Ejecutivo encontrare inconvenientes para sancionar los proyectos de ley que se le pasen, podrá devolverlos dentro de diez días al Congreso, puntualizando las razones en que funde su opinión para la negativa; y si dentro del término expresado no los objetase, se tendrán por sancionados y los publicará como leyes.

En el caso de devolucción, el Congreso podrá reconsiderar y -- ratificar el proyecto con los dos tercios de votos, pasándolo al Ejecutivo, quien lo tendrá por ley que ejecutará y publicará.

Cuando el Congreso emita una ley en los últimos diez días de sus sesiones, y el Ejecutivo encuentre dificultades para su sanción, es obligado inmediatamente a dar aviso al Congreso para que permanezca reunido hasta que se cumpla el término expresado; y no haciéndolo se -- tendrá por sancionada la ley.

Art. 48.- Cuando un proyecto de ley fuese desechado y no ratificado, no podrá proponerse en las mismas sesiones sino hasta en las de la Legislatura siguiente. En la devolucción que haga el ejecutivo de los proyectos de ley, las votaciones del Congreso para ratificarlos serán nominales y deberán constar en el acta del día.

Art. 49.- Todo proyecto de ley aprobado por el Congreso se extenderá por duplicado, se publicará en él; y formados dos ejemplares por su Presidente y Secretarios, se pasará al Ejecutivo con ésta fórmula: "Al Poder Ejecutivo". Si este no lo aprobare, lo devolverá al Congreso con ésta fórmula: "Vuelva al Soberano Congreso".

Art. 50.- Recibido por el Ejecutivo un proyecto de ley, si no le encontrase objeciones que hacer, firmará los dos ejemplares, devolviendo uno al Congreso; y reservándose otro en su archivo, lo publicará como -- ley en el término de diez días.

Art. 51.- La publicación de la ley se hará en esta fórmula: "El Presidente de la República de Honduras a sus habitantes --Sabed: Que el Soberano Congreso ha decretado o acordado lo siguiente: (Aquí el texto y formas). Por tanto: Ejecútese.

CAPITULO XV

De los Jueces de Primera Instancia.

Art. 52.- La ley establecerá Jueces de primera Instancia para que conozcan en lo civil y criminal; demarcará las jurisdicciones de cada uno, y la compensación proporcionada a su trabajo.

Art. 53.- Para ser Juez de Primera Instancia se requiere ser abogado de la República, de crédito y honradez -mayor de veinticinco -- años -y padre de familia; -o no letrado de treinta años arriba -con más que medianos conocimientos de jurisprudencia, -dueño de un capital libre que no baje de mil pesos -y tener las demás cualidades requeridas para los letrados.

Art. 54.- Los Jueces de Primera Instancia fallarán sin consulta, a no ser que la pida alguna de las partes -Su duración será de dos años, pudiendo ser reelectos sin interrupción; pero en este caso será voluntaria la aceptación del destino.

CAPITULO XVI

Del Gobierno Político de los Departamentos y del régimen Municipal.

Art. 55.- En cada Departamento habrá un Gobernador propietario y un suplente, nombrado por el Ejecutivo. Serán de conocida honradez e instrucción -dueños de un capital libre que no baje de mil pesos -vecino del departamento respectivo -y mayores de veinticinco años.

Art. 56.- Las Comandancias departamentales podrán ser servidas -- por los Gobernadores, a juicio del Ejecutivo; más los Comandantes no podrán servir las Gobernaciones políticas.

Art. 57.- Los Gobernadores políticos durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos sin interrupción, si ellos admitieren la ley designará sus atribuciones y la manera de ejercerlas.

Art. 58.- El Gobierno interior de los pueblos es a cargo de Municipalidades ecetas popularmente en el tiempo y número de individuos que la ley señale.

Art. 59.- Habrá Jueces de Paz que conocerán en los negocios de menor cuantía, delitos y faltas livianas. La ley determinará su nombramiento, cualidades y atribuciones.

CAPITULO XVII

Del Tesoro Público.

Art. 60.- Forman el Tesoro público todos los bienes, muebles, raíces y créditos activos de la República; todos los impuestos, contribuciones, tallas y tasas que pagan los hondureños o en adelante pagan por su persona, industria o bienes; y todos los derechos que satisface el comercio con arreglo a las leyes.

Art. 61.- Habrá un Tesoro general de la República, y en los departamentos Intendentes. La ley demarcará sus funciones y cualidades, y establecerá los demás empleados que administren, lleven y glosen la cuenta y razón.

Art. 62.- La jurisdicción de hacienda será privativa de sus empleados, y demás jueces especiales que se establezcan. La ley demarcará su extensión y el modo de ejercerla.

CAPITULO XVIII

De la Fuerza Pública.

Art. 63.- La Fuerza Pública se compone de la milicia nacional y - del ejército de tierra y mar. Es instituída para defender el Estado contra los enemigos exteriores, y para el mantenimiento del orden y la ejecución de las leyes.

Art. 64.- La organización de la milicia nacional y del ejército se regulará por la ley.

Art. 65.- La fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar. Empleada para mantener el orden en el territorio, no habrá sino por el requerimiento de las autoridades constituidas, según las reglas determinadas por la ley. Ningún militar en actual servicio, podrá ser electo Presidente ni Diputado.

Art. 66.- Queda establecido el fuero de guerra para los oficiales generales, y para cualquier otro militar que pertenezca a cuerpo organizado.

Art. 67.- La Comandancia general, que es a cargo del Ejecutivo, se ejercerá por conducto del Ministerio de la Guerra.

CAPITULO XIX

De la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Art. 68.- Todo funcionario o empleado al posesionarse de su destino, prestará juramento de ser fiel a la República, de cumplir y hacer cumplir las leyes y atenerse a su texto, cualesquiera que sean las ordenes o resoluciones que las contraríen; y por sus infracciones serán responsables con sus personas y sus bienes, hasta que transcurra un tiempo igual al que sirvieron.

Art. 69.- No podrá juzgarse a los individuos de los Supremos Poderes Secretarios del despacho y agentes diplomáticos de la República, por delitos oficiales, sin que proceda declaratoria de haber lugar a formarles causa; más por los delitos comunes, quedan sin restricción alguna sujetos a los Tribunales a cuyo fuero pertenezcan.

Art. 70.- El Presidente de la República podrá ser juzgado por traición, venalidad y usurpación del Poder; por atentar contra las garantías, impedir las elecciones o violentarlas; por impedir la reunión del Poder Legislativo; y por los demás delitos oficiales que cometa. Pero no podrá acusarsele, si ser sometido a juicio sino hasta después de terminado su período.

Tampoco podrá ser aprobada su conducta oficial, mientras esté en ejercicio del Poder.

Art. 71.- La instrucción de la causa contra los individuos de los altos Poderes, Ministros del despacho y agentes diplomáticos de la República, se verificará en el Congreso por tres de sus miembros, electos por la suerte; y el pronunciamiento se hará colectivamente, debiendo concurrir los dos tercios de los presentes para que haya sentencia. Esta se contraerá a deponer del destino al acusado y declararle incapaz de obtener otros honoríficos, lucrativos o de confianza, a cierto tiempo o a perpetuidad; más si la causa diere mérito, quedará sujeto el culpado a los resultados de un procedimiento ordinario ante los Tribunales comunes.

Art. 72.- Desde que se declare en el Congreso, que se da por admitida la acusación, el acusado queda desde este acto suspenso del ejercicio de sus funciones oficiales; y por ningún motivo podrá permanecer más en su puesto, sin hacerse responsable del crimen de usurpación, y ningún individuo deberá obedecerle.

Art. 73.- Los decretos, autos y sentencias pronunciadas por el Congreso deben ser cumplidas y ejecutadas sin necesidad de confirmación ni sanción, alguna.

Art. 74.- Las opiniones de los diputados en lo relativo a su destino pueden ser interpretadas criminalmente en ningún tiempo, ni con motivo alguno; ni ellos pueden ser demandados o ejecutados por deudas desde el llamamiento a sesiones, hasta quince días después de concluidas.

Art. 75.- Para declarar por mayoría de votos cuando ha lugar a formación de causa contra el Tesoro general, Contadores mayores, Administradores de aduanas, Intendentes, Comandantes departamentales de puertos y fronteras y Gobernadores Políticos por delitos oficiales, se organizará un Tribunal compuesto del Presidente de la respectiva Sección judicial y dos diputados electos por la suerte, entre los tres que componen la Representación de los departamentos de Comayagua o Tegucigalpa. El Tribunal de justicia respectivo, hará el sorteo en Corte plena. Hecha la declaratoria con audiencia del acusado, este quedará suspenso y será juzgado por los Tribunales comunes.

Art. 76.- Los empleados que sirvan su destino en la demarcación jurisdiccional de la Sección Suprema de justicia de Tegucigalpa, sufrirán allí el juicio de responsabilidad; los demás en esta ciudad. La acusación se presentará ante el Tribunal de la Sección respectiva, quien inmediatamente procederá al sorteo antes establecido.

CAPITULO XX

Garantías individuales.

Art. 77.- La República reconoce el derecho de Habeas Corpus. La ley determinará la manera de poner en práctica este derecho.

Art. 78.- El presunto delincuente puede ser detenido por cualquier autoridad, que tenga facultad de arrestar; y el infraganti, por cualquier persona para el efecto de presentarlo al juez.

Art. 79.- La detención para inquirir no pasará de seis días; durante éste término deberá la autoridad practicar la justificación del caso; y según su mérito librar por escrito la orden de prisión, o poner en libertad al detenido.

Art. 80.- No podrá librarse aquella sin que preceda justificación de haberse cometido un delito que merzca pena mas que correccional y sin que resulte, al menor por semiplena prueba, quien sea el delincuente. Sin embargo, es permitida la prisión o arresto por pena o -- apremio, en los casos y por el término que la ley disponga.

Art. 81.- Ninguno podrá ser preso ni detenido sino en los lugares públicos designados a este efecto. Los ciudadanos y las mujeres pueden serlo en otros conforme a su voluntad determinandolo la ley.

Art. 82.- El arresto, prisión o reclusión, por pena correccional, no podrá pasar de treinta días, ni de veinticinco pesos de multa.

Art. 83.- Cuando alguno no estuviese incomunicado por orden del Juez, transcrita en el registro del Alcalde, no podrá este impedir su comunicación con las personas. Después de la confesión no puede prohibirse aquélla, y el juicio es público.

Art. 84.- aún con auto de prisión decretado, ninguno puede ser llevado a la cárcel, ni detenido en ella, si presentase fianza cuando al respectivo delito sea aplicable pena pecuniaria.

Art. 85.- Ningún ciudadano o habitante podrá ser obligado a declarar en materias criminales contra sí mismo, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Art. 86.- Las personas deben ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad del delito. El apremio o tortura que no sea necesaria para mantener en seguridad a las personas, es atroz y no debe consentirse.

Art. 87.- La pena de muerte queda abolida en materia política; y solamente se establece por los delitos de asesinato, homicidio premeditado y seguro, asalto o incendio si se siguiese muerte, y por parricidio en los casos que determine la ley. Los militares en servicio quedan sujetos a las penas de las ordenanzas del ejército.

Art. 88.- Todos los habitantes de la República tienen derechos incontestables para conservar su vida y libertad; para adquirir, poseer y disponer de sus bienes; y para procurar su felicidad sin daño de tercero.

Art. 89.- Ningún habitante puede ser inquietado, molestado ni perseguido por sus opiniones, de cualquier naturaleza que sean, con tal que por un acto directo y positivo no perturbe el orden o infrinja la ley.

Art. 90.- Las acciones privadas que no ofendan directamente el orden público, ni produzcan daño de tercero, están fuera de la competencia de la ley.

Art. 91.- La casa de todo habitante es un asilo que solo puede allanar la autoridad en los casos siguientes:

1. En persecución actual de un delincuente:
2. Persiguiendo al reo a quien se haya proveído auto de prisión; y
3. Cuando por reclamo de interior de ella o por desorden escandaloso se exija su allanamiento. También puede ser allanada aquélla en que se halle refugido un delincuente, o se oculten efectos hurtados, prohibidos o estancados; precediendo al menos semiplena prueba de estos hechos.

La ley determinará la forma y casos en que pueda allanarse por trasgresiones de policía.

Art. 92.- Solamente los Tribunales establecidos con anterioridad por la ley, juzgarán y conocerán en las causas civiles y criminales de los hondureños; si lo hicieren, el Cuerpo Legislativo y tomando-se facultades que no lo competen, o declarando delincuente, o castigando a un individuo que debe ser juzgado por sus Jueces naturales, se declara que tales Poderes atacan la presente Carta, y que por su infracción responderán con sus personas y bienes.

Art. 93.- Todo habitante libre de responsabilidad puede emigrar a donde le parezca y volver cuando le convenga.

Art. 94.- La propiedad de cualquier calidad que sea, no podrá ser ocupada, sino es por causa de interés público, legalmente comprobada, y previamente indemnizado su valor a justa tasación.

Art. 95.- La correspondencia epistolar es inviolable. La sustraída de las estafetas o de cualquier otro lugar, no hace fé contra ninguno.

Art. 96.- Todo habitante puede libremente expresar su pensamiento por la prensa sin previa censura, haciéndose solamente responsable por el abuso que haga de éste derecho; pero no se podrán publicar escritos injuriosos contra determinadas personas, sin que se suscriban por el autor y se publique su nombre. La ley determina la manera de calificar las injurias de esta especie.

Art. 97.- Las leyes, órdenes, providencias o sentencias retroactivas, proscriptas, confiscatorias, condenatorias sin juicio y que hacen transcendental la infamia, son injustas, opresivas y nulas. Las autoridades que cometan semejantes violaciones responderán con sus personas y bienes a la reparación del daño inferido.

Art. 98.- Ni el Poder Legislativo, ni el Ejecutivo, ni ningún Tribunal o autoridad podrá restringir, alterar o violar ninguna de las garantías enunciadas; y cualquier Poder que las infrinja, será responsable individualmente al perjuicio inferido, en los mismos términos del artículo anterior.

CAPITULO XXI

Disposiciones generales.

Art. 99.- Sólo por los medios constitucionales se asciende al Poder Supremo. Si alguno le usurpare por medio de la fuerza o de la sedición popular, es reo del crimen de usurpación: todo lo que obra-re será nulo y las cosas volverán al estado que tenían antes, luego que se establezca el orden constitucional.

Art. 100.- La ley, bien sea que proteja, o bien que castigue, será igual para todos, y recompensará a cada uno en proporción a sus méritos. No podrá ser relajada, o dispensada en favor de ningún individuo, corporación o pueblo; salvo el caso de indulto o amnistías.

Art. 101.- Todo ciudadano puede ser admitido a los cargos públicos civiles, políticos y militares, sin otra diferencia que sus talentos y virtudes.

Art. 102.- Es nula toda resolución, decreto, orden, acuerdo o sen-
tencia de los Poderes constitucionales en que interviniese coacción -
ocasionada por la fuerza pública, o por el pueblo en tumulto.

Art. 103.- Las causas de cualquier género que sean, se fenecerán -
dentro del territorio de Honduras; no podrán correr más que tres ins-
tancias; y ningún habitante podrá sustraerse por motivo alguno, del -
conocimiento de la autoridad que la ley señala.

Art. 104.- Ningún Juez puede serlo en dos diversas instancias; avo-
car causas pendientes para conocer de ellas, ni abrir juicios fenedi-
dos.

Art. 105.- No podrán ser Representantes al Congreso los Ministros
del despacho; y recayendo la elección en otro empleado de nombramien-
to del Ejecutivo, vocará en su destino.

Art. 106.- La policía de seguridad solo podrá ser confiada a las -
autoridades civiles, en la forma que la ley establezca.

Art. 107.- Todos los hondureños pueden reunirse pacíficamente y en
buen orden para tratar cuestiones de interés público, o dirigir peticio-
nes a las autoridades constituidas; más los autores de estas reuniones,
responderán personalmente de cualquier desorden que se cometa.

Art. 108.- El regimen judicial y gobierno inteior o local de las Is-
las de la Bahía en el Atlantico, y las del Golfo de Fonseca en el Paci-
fico, pueden ser distintos de los adoptados en esta Constitución para
los demás pueblos de la República. Lo mismo se establece repecto a las
tribus aún no civilizadas de las costas del Norte.

Art. 109.- No es necesaria la confirmación o sanción del Poder Eje-
cutivo en los actos o resoluciones legislativas siguientes: en las -
que tengan por objeto las elecciones que el Congreso haya de hacer, y
las renunciias que deba oír; en los acuerdos para trasladar su residen-
cia de un punto a otro; en los presupuestos generales de gastos que -
vote; y en los reglamentos que emita para su régimen interior.

CAPITULO XXII

De las Reformas de la Constitución.

Art. 110.- La reforma parcial o absoluta de esta Constitución sólo
podrá acordarse por los dos tercios de votos de los Representantes elec-
tos al Congreso. Esta resolución se publicará por la prensa, y volve-
rá a tomarse en consideración en la próxima Legislatura. Si esta la ra-
tifica, se convocará una Asamblea Constituyente para que decrete las re-
formas. Pero no se propondrán ellas, sinó es hasta pasados ocho años -
después de promulgada esta Constitución.

Art. 111.- La presente Constitución no obsta para que concorra Hondu-
ras a la formación de un Gobierno nacional con las otras Secciones de
Centro-América; o a la de un pacto federativo, si aquel no pudiese te-
ner efecto. La adopción del nuevo régimen o pacto que se celebre, será
ratificada con dos tercios de votos de los Diputados al Congreso; y es-
te hecho se tendrá como reformada ésta Constitución, sin embargo de lo
establecido en éste capítulo.

Art. 112.- Queda abolida la carta fundamental de 4 de febrero de 1.848, y vigentes las leyes que rigen actualmente en la República, en lo que no se opongan a la presente Constitución.

Dada en la ciudad de Comayagua, a los veintiocho días del mes de septiembre del año del Señor de mil ochocientos sesenta y cinco XLIV de la Independencia.

FLORENCIO ESTRADA,
Presidente, Diputado por el departamento de Comayagua.

ANACLETO MADRID,
Vice-Presidente, Diputado por el departamento de Gracias.

GUILLERMO BUSTILLO,
Diputado por el departamento de Olancho.

CARLOS MEMBREÑO,
Diputado por el departamento de Tegucigalpa.

PONCIANO LEIVA,
Diputado por el departamento de Santa Bárbara.

FRANCISCO MEDINA,
Diputado por el departamento de Olancho.

JOSE MARIA ROJAS,
Diputado por el departamento de Choluteca.

JUAN VILARDEBÓ,
Diputado por el departamento de Olancho.

JOAQUIN MEJIA,
Diputado por el departamento de Gracias.

MANUEL COLINDRES,
Diputado por el departamento de Choluteca.

ROSENDO AGÜERO,
Diputado por el departamento de Tegucigalpa.

NORBERTO MARTINEZ,
Diputado por el departamento de Yoro.

JULIAN HERNANDEZ,
Diputado por el departamento de Gracias.

MARIANO ALVAREZ,
Diputado por el departamento de Yoro.

CELEO ARIAS,
Diputado por el departamento de Comayagua.

TEODORO AGUILUZ,
Diputado por el departamento de Comayagua.

BERNARDO INESTROZA.
Diputado por el departamento de Tegucigalpa.

LUCIO ALVARADO,
Diputado por el departamento de Gracias.

MIGUEL BUSTILLOS,
Diputado por el departamento de Yoro.

JESUS ESPINOS,
Diputado por el departamento de Choluteca.

JERONIMO SELAYA,
Diputado por el departamento de Santa Bárbara.

SATURNINO BOGRAN,
Diputado por el departamento de Santa Bárbara.

SANTIAGO ARRIOLA,
Secretario, Diputado por el departamento de Comayagua.

VALENTIN DURON,
Secretario, Diputado por el departamento de Tegucigalpa.

Por tanto: Promúlguese, imprímase y cúmplase.

Dado en Comayagua, en la Casa de Gobierno a 29 de septiembre de 1.865.

JOSE MARIA MEDINA

CRESCENCIO GOMEZ.
El Ministro de Hacienda y Guerra.

FRANCISCO CRUZ.
El Ministro de Relaciones.

CONSTITUCION POLITICA DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS DE 23
DE DICIEMBRE DE 1.873.

EN EL NOMBRE DE DIOS Y EN EJERCICIO DE LA SOBERANIA NACIONAL LA ASAM-
BLEA CONSTITUYENTE DEL PUEBLO HONDUREÑO, INSTALADA CON EL OBJETO DE -
EMITIR LA CARTA FUNDAMENTAL DE LA REPUBLICA, DECRETA Y SANCIONA LA SI
GUIENTE

C O N S T I T U C I O N P O L I T I C A

CAPITULO I

De la República y su soberanía.

Art. 1.- El pueblo hondureño se constituye en República, soberana, libre e independiente; y por lo mismo, le pertenece el derecho exclusivo de gobernarse y establecer sus leyes.

Art. 2.- La soberanía reside en la universidad de los ciudadanos - hondureños. La ejercerán directamente en el acto de sufragar conforme a las leyes; y en todo lo demás, por medio de los poderes que establece la presente Carta. Es inalienable e imprescriptible.

Ningún individuo, ninguna fracción del pueblo, puede atribuirse su ejercicio.

Art. 3.- Todo poder político emana del pueblo. Los funcionarios públicos son sus delegados y agentes; y no tienen otras facultades que - las que expresamente les da la ley. Por ella ordenan, juzgan y gobiernan: por ella se les debe obediencia y respeto; y conforme a ella deben dar cuenta de sus operaciones.

CAPITULO II

Del Territorio.

Art. 4.- La República comprende todo el territorio que, durante la dominación española, se conoció con el nombre de provincia, circunscrito en los límites siguientes: por el Este, Sudeste y Sur con la República de Nicaragua: por el Este, Nordeste y Norte con el Océano Atlántico: por el Oeste por Guatemala: por el Sur, Sudeste y Oeste con El Salvador ; y por el Sur con la ensenada de Conchagua en el Pacífico y las islas adyacentes a sus costas en ambos mares.

Una ley demarcará especialmente los límites del territorio de la República.

Art. 5.- La división del territorio de la República se hará por una ley general con los datos necesarios mientras esto se verifica, permanecerán los departamentos de Comayagua, Tegucigalpa, Olancho, Yoro, Santa Bárbara, Copán, Gracias, La Victoria, Choluteca, La Mosquitia e Islas de la Bahía, como están actualmente, quedando el de La Paz asumido en el de Comayagua.

CAPITULO III

Del Gobierno y de la Religión.

Art. 6.- El gobierno de la República es popular representativo, y se ejercerá por tres poderes distintos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Art. 7.- La Religión de la República es la cristiana católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra. El Gobierno la protege; pero ni éste, ni autoridad alguna tendrán intervencción en el ejercicio privado de otras que se establezcan en el país, si éstas no tienden a deprimir la dominante y alterar el órden público. El Congreso ordinario podrá permitir el ejercicio público, de otros cultos, cuando la conveniente social lo demande.

CAPITULO IV

De los Hondureños, sus Derechos y Obligaciones.

Art. 8.- Son Hondureños:

1. Todas las personas nacidas en el territorio de la República.
2. Los hijos de padres y madres hondureños nacidas en el país extranjero, con comisión del gobierno o ausentes temporalmente.
3. Los Centro Americanos que hayan ganado vecindario de un año, en - cualquier pueblo de la República o que manifiesten ante el respectivo - municipio de su designio de ser considerados como tales.
4. Los extranjeros naturalizados.

Art. 9.- Los extranjeros se naturalizan:

1. Por obtener del cuerpo Legislativo carta de naturaleza.
2. Por adquirir bienes raíces en el país, con valor de mil pesos, y vecindario de un año.
3. Por contraer matrimonio con hondureña o vecindario de un año.
4. Por abrir en el país un establecimiento de comercio al por menor y vecindario de un año.
5. Por simple vecindario de dos años.

Art. 10.- Son derechos de los hondureños:

1. La libertad individual, que no tiene más límites que la libertad de otro individuo, es decir, la facultad de hacer u omitir todo aquello de ejecución u omisión no resulte daño a otro individuo ni a la comunidad.
2. La igualdad ante la ley.
3. La seguridad individual.
4. La propiedad.

Art. 11.- Los hondureños y los extranjeros naturalizados, son obligados:

1. A ser fieles a la Constitución, a obedecer las leyes y respetar las autoridades establecidas.
2. A contribuir en proporción de sus haberes para los gastos públicos
3. A defender la patria con las armas, cuando sean llamados por la ley

Art. 12.- En ningún caso, ni bajo ningún concepto, los extranjeros - podrán considerarse de mejor condición de los naturales hondureños y naturalizados; y no teniendo como extranjeros, derecho a tomar parte en - las cuestiones políticas del país, su intervención en ellas, contrariado el órden público, los hace indignos de la hóspitalidad que la nación les brinda, y podrán ser expedidos por el gobierno del territorio de la República, previa comprobación de la intervención aludida.

El gobierno procurará armonizar los tratados con las naciones extranjeras con la presente carta fundamental.

CAPITULO V

De la Ciudadanía.

Art. 13.- Son ciudadanos todos los hondureños mayores de veinte - años que tengan oficio y propiedad que les asegure un modo de vivir - honesta y decentemente.

También son ciudadanos los mayores de diez y ocho años, que con las cualidades expresadas, tengan grado literario o sean casados.

Los extranjeros naturalizados deben ser considerados como - ciudadanos, reuniendo las cualidades que quedan establecidas.

Ninguno de los contenidos en éste artículo tendrán voto pasivo, sino con arreglo a las leyes.

Art. 14.- Sólo los ciudadanos en ejercicio pueden obtener empleos en la República; pero pierden la cualidad de ciudadanos:

1. Los sentenciados por delitos que merzcan pena más que correccional, hasta obtener rehabilitación.
2. Los que admitan empleos de otros gobiernos, sin licencia del -- Congreso, con excepción de los de Centro América; y
3. Los que se naturalizan en país extranjero.

Art. 15.- Se suspenden los derechos de ciudadanos:

1. Por hallarse procesado criminalmente y tener decretado auto de prisión.
2. Por ser deudor fraudulento decretado o deudor a las rentas públicas, requerido judicialmente de pago.
3. Por conducta conocidamente viciada a vagancia calificada.
4. Por enajenación mental legalmente declarada ; y
5. Por ser sirviente doméstico cerca de la persona.

CAPITULO VI

De las Elecciones.

Art. 16.- Se dividirá el territorio de la República en distritos - electorales que constarán de diez mil almas; y elegirán un diputado propietario y un suplente. Pero entre tanto se reúnen los datos estadísticos para formar aquella división, sufragarán por tres diputados propietarios y dos suplentes los departamentos de Comayagua, Tegucigalpa y Olancho; por dos propietarios y un suplente por cada uno de los de Yoro, Santa Bárbara, Copán, Gracias, La Victoria y Choluteca, y por un propietario y un suplente por cada uno de los de la Mosquitia y las Islas de la Bahía.

Art. 17.- Las elecciones serán directas y la ley reglamentará la manera de hacerlas, dividiendo los departamentos y distritos en cantones, disponiendo se formen registros de cada catón, teniendo voto los inscritos únicamente.

Por ahora se harán las elecciones en la forma prevenida por la ley.

CAPITULO VII

De la Organización del Poder Legislativo.

Art. 18.- El Poder Legislativo de la República se ejercerá por un Congreso de diputados electos en los términos que se ha dicho. Se reunirán cada dos años sin necesidad de convocatoria, del primero al quince de Marzo. Sus sesiones durarán cuarenta días, pudiendo cerrarlas - antes, de acuerdo con el Ejecutivo. También las tendrá extraordinarias cuando sea convocado por el Ejecutivo, en cuyo caso sólo se ocupará de las causas que motiven su reunión.

Art. 19.- Un número menor de representantes tiene facultad para tomar inmediatamente las medidas convenientes para hacer concurrir a -- los demás, hasta conseguir su plenitud; pudiendo llamar a los suplentes en caso de muerte o imposibilidad de concurrir los propietarios.

Art. 20.- El Congreso puede instalarse y deliberar con las dos terceras partes de los miembros electos.

Para que halla resolución basta la mayoría absoluta de votos.

Art. 21.- El Congreso se reunirá en la capital de la República, pero él, ya instalado, podrá decretar su traslación a otro punto, por causas graves que él mismo calificará.

Art. 22.- Las credenciales de los representantes durarán cuatro años pudiendo ser reelectos una vez, pero a los dos años del primer período se renovará la mitad de los miembros del Congreso designados por sorteo que hará él mismo al cerrar las sesiones.

Art. 23.- Para ser Diputados se requiere: ser mayor de treinta años -natural o vecino del departamento en que se hace la elección -padres de familias -ciudadanos en ejercicio de sus derechos -de notoria honradez e instrucción y ser dueño de un capital libre y conocido que no baje de mil pesos, o Licenciado en cualquiera de las facultades mayores. La Mosquitia e Islas de la Bahía podrán sufragar en los ciudadanos vecinos de cualquier departamento de la República que reúnan las demás -cualidades expresadas; y en caso de recaer en un sólo individuo, hará sus veces el respectivo suplente.

CAPITULO VIII

De las atribuciones del Poder Legislativo.

Art. 24.- Corresponde al Poder Legislativo.

1. Calificar la elección de sus miembros y aprobar o no sus credenciales.
2. Admitir las renunciaciones que hagan por causas legitimamente comprobadas.
3. Formar su reglamento interior.
4. Decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
5. Crear jurisdicciones y establecer en ellas tribunales y jueces, para que a nombre de Honduras conozcan, juzguen y sentencien en toda clase de asuntos civiles y criminales, que ocurran en la República.
6. Señalar las atribuciones de los diferentes funcionarios públicos.
7. Decretar reglamentos para el régimen interior de los demás poderes y corporaciones.

8. Decretar tasas e impuestos en proporción a la riqueza pública.
9. Acordar empréstitos forzosos en circunstancias extraordinarias, consultando el haber de cada uno de sus habitantes.
10. Crear el ejército y milicias de la República.
11. Determinar la fuerza permanente.
12. Declarar la guerra y hacer la paz, con presencia de los datos que le comunique el Ejecutivo, y ratificar los tratados y negociaciones que él mismo haya ajustado si mereciesen su aprobación.
13. Procurar el desarrollo de la instrucción pública, decretando estatutos y métodos adecuados.
14. Crear y suprimir empleos, y asignar, aumentar o disminuir sueldos.
15. Conceder premios honoríficos y gratificaciones compatibles con el sistema de gobierno establecido, por servicios relevantes a la patria o por inventos en las ciencias o artes.
16. Arreglar los pesos y medidas -Promover las vías de comunicación -decretar las armas y pabellón de la República -y determinar la ley, peso y tipo de moneda.
17. Conceder indultos y amnistías:
18. Nombrar los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, y conferir los grados de Brigadier arriba inclusive.
19. Declarar que ha lugar a formación de causa contra los individuos de los Supremos Poderes, Ministros del despacho y Agentes Diplomáticos de la República.
20. Admitir las renunciaciones que hagan por causas graves de sus mismos oficios, los mismos empleados, y la dimisión de los grados de Brigadier arriba inclusive; y
21. Fijar y decretar bienalmente los gastos de la administración en todos los ramos de la hacienda pública, arreglando su manejo e inversión: tomar cuenta de ella al Poder Ejecutivo; y calificar y reconocer la deuda nacional e interior, designando fondos para su amortización.

La primera Legislatura no se disolverá sino cuando haya emitido las siguientes leyes:

1. La de elecciones.
2. La de hacienda.
3. La de Justicia.
4. La de gobernadores políticos y municipales.

Art. 25.- El Congreso, para casos de guerra exterior o interior, podrá conferir al Ejecutivo las facultades extraordinarias que su prudencia juzgue indispensable para la pacificación, procurando arminizarlas con los principios del derecho público e internacional. Pero de ninguna manera autorizarlo para atacar la independencia y ejercicio de los demás poderes, para detenciones indefinidas, ni para proscribir ni confiscar.

Art. 26.- El Poder Legislativo puede delegar en el Ejecutivo las facultades siguientes:

1. Legislar sobre los ramos de policía, hacienda, guerra y marina.
2. Aprobar o decretar estatutos y ordenanzas de las corporaciones o establecimientos que deben tenerlas, y los proyectos sobre creación de fondos que le presentasen.
3. Arreglar el sistema de pesos y medidas.

4. Promover los códigos civil, criminal, de procedimientos de comercio y minería. De éstas facultades sólo podrá hacer uso en receso del Poder Legislativo y con el voto ilustrativo de una comisión de las personas competentes que el Congreso o el mismo Ejecutivo elegirá.

Con la aparición del Congreso, cesarán la delegación y las facultades extraordinarias; debiendo dar cuenta del uso que hubiese hecho de ellas.

Art. 27.- El Poder Legislativo no podrá conceder al Ejecutivo más facultades extraordinarias; ni ~~ampliar las que quedan~~ detalladas.

Art. 28.- El Congreso se ocupará de preferencia de los asuntos que comprenda la memoria del Ejecutivo.

Art. 29.- Cuando el Congreso hubiere de tratar de los intereses de la iglesia, o de cosas que se relacionen con ellos, podrá convocar al Prelado Diocesano para que por sí, o por medio de un delegado, concurre a la sesión, si la tuviese a bien, con voto ilustrativo.

CAPITULO IX

Del Poder Ejecutivo.

Art. 30.- El Poder Ejecutivo se ejercerá por un ciudadano que llevará el título de "Presidente de la República", nombrado directamente por el pueblo hondureño; pero cuando resulte electo por mayoría absoluta de votos, el Congreso elegirá entre los tres ciudadanos que hayan obtenido mayor número de sufragios.

Art. 31.- Cuando el Presidente tuviese a bien depositar su autoridad por alguna causa, lo hará en uno de los tres Diputados que designará el Congreso para este objeto; y en caso de muerte, remoción, renuncia o impedimento de aquel funcionario, los Ministros del despacho asumirán el Ejecutivo, debiendo proceder inmediatamente a designar en sorteo público el Diputado que entre los designados debe ejercer el gobierno. Para este caso serán convocados los funcionarios públicos de esta categoría mayor que se hallaren en el lugar donde se practique. En falta de los Ministros del despacho recaerá el poder en el Diputado que entre los designados se hallere a menor distancia de aquellos; y estado a -- igual, recaerá en el primer designado, sucediendo los demás por el orden de su nombramiento.

Art. 32.- Para ser Presidente se requiere: ser padre de familia -mayor de treinta años -del estado seglar -natural de Centro América, con vecindario de cinco años en Honduras -de notoria honradez e instrucción y ser dueño de un capital en bienes raíces que no baje de cinco mil pesos, libre de todo gravamen y ubicado en el territorio de la República.

Art. 33.- Antes de proceder el Congreso a declarar o hacer esta elección, se informará y calificará en sesión secreta si los candidatos reúnen las condiciones del artículo anterior; y desechando los que no las tengan, procederá en sesión pública a declarar o verificar la elección -la cual se hará por dédulas que se recojan en una urna.

Art. 34.- El período presidencial será de cuatro años sin poderse prorrogar un día más por ninguna causa ni pretexto. Comenzará el día primero de Abril del año, de la renovación.

Art. 35.- El Presidente de la República no podrá ser reelecto para el período inmediato siguiente, en ningún caso, ni por ningún pretexto, y si prevaleciendo de aclamaciones o actas populares o de cualquier otro medio, se conservase en el poder, se tendrá por el mismo hecho como usurpador; y tanto el ejército, como las autoridades de cualquier género y jerarquía que sea, y los pueblos, no obedecerán mas que al designado por la ley, so pena de incurrir en el delito de traición contra la patria.

Art. 36.- El Presidente de la República es Comandante en Jefe del ejército y armada.

CAPITULO X

Atribuciones del Poder Ejecutivo.

Art. 37.- Corresponde al Poder Ejecutivo:

1. Mantener ilesa la soberanía e independencia de la República y la integridad de su territorio.
2. Conservar la paz y tranquilidad interior conforme a las leyes.
3. Publicarlas y hacerlas ejecutar y usar del veto del modo establecido.
4. Proponer al Congreso por medio del Ministerio los proyectos de ley que crea conveniente, con las restricciones del artículo 47.
5. Presentar al Congreso por el mismo órgano, a los cinco días de abiertas las sesiones ordinarias un informe circunstanciado de todos los ramos de la administración pública, con los proyectos que juzgue oportunos para su conservación o mejora; y una cuenta exacta del bien vencido, con el presupuesto de gastos del venidero y medios para llenarlo.

Y si dentro del término expresado, los Ministros no cumplen esta obligación, quedarán por el mismo hecho destituidos de sus empleos. El presupuesto no excederá al producto de las rentas ordinarias.

6. Publicar anualmente un estado de ingresos y egresos de las rentas públicas.

7. Dar al Congreso los informes que le pida, pudiendo retener los documentos de los asuntos que demandan reserva, a menos que sea para exigirle la responsabilidad. Durante la guerra, no es obligado a exhibir los planes de campaña.

8. Hacer efectiva la concurrencia de los representantes en la época en que debe aparecer el Congreso; y convocar a éste para sesiones extraordinarias, cuando lo estime conveniente, llamando, mientras se reúnan las juntas preparatorias, a los suplentes de los propietarios que hallan fallecido.

9. Proponer amnistías al Congreso cuando el bien público lo exija; y conocerlas por sí en el receso de aquel.

10. Levantar toda la demás fuerza necesaria sobre la decretada por la ley, para retener invasiones o contener rebeliones; pudiendo en éste único caso, si lo recursos ordinarios no bastasen, Proveerse de los - que necesite por un empréstito general, de cuya inversión dará cuenta al Congreso en su próxima reunión.

11. Expedir reglamentos y órdenes para la ejecución de las leyes.

12. Nombrar y remover los Ministros del despacho, y a los demás empleados de su libre nombramiento, admitir sus renunciaciones y conceder retiro a los jefes y oficiales del ejercito y marina, con arreglo a las leyes.

13. Nombrar los jueces de primera instancia del fuero común a propuesta en terna de la Corte de Justicia y admitir sus renunciaciones. No podrá en ningún caso devolver la terna presentada.

14. Nombrar así mismo los demás empleados cuya provisión no esté reservada a otra autoridad.

15. Cuidar que los Magistrados y Jueces asistan puntualmente a sus despachos, para que los asuntos no sufran retraso pudiendo componerlos en caso necesario y a excitación de la Corte respectiva.

16. Habilitar puertos y establecer aduanas marítimas y terrestres y dar reglas para nacionalizar y matricular buques.

17. Hacer la guerra y celebrar un tratado de paz y concordatos en armonía con la presente constitución y cualesquiera otras negociaciones, sometiénolo todo a la ratificación del cuerpo Legislativo.

18. Dirigir y disponer de la fuerza armada y mandar el ejército en persona, si lo tubiese a bien, encargando en este caso el Ejecutivo a quien corresponde;

19. Conmutar las penas cuando el Tribunal superior que pronuncia la sentencia que causa ejecutoria contra el reo, recomienda la conmuta, expresándolo así en la propia sentencia, y por alguno de los motivos que la ley señale.

20. Vigilar sobre la exactitud de la moneda, computar el valor de la extranjera cuya circulación se permita.

21. Nombrar Ministros Diplomáticos, Agentes Consulares, cerca de los gobiernos, y admitir los nombrados por estos, pudiendo retirarles el exequatur conforme al derecho de gentes.

22. Rehabilitar durante el receso del Congreso, al que haya perdido los derechos de Ciudadano.

23. Ejercer el derecho de patronato conforme a los concordatos con la Santa Sede.

24. Poner el pase si lo tubiese a bien, a los títulos en que se confiera dignidad eclesiástica, y a los nombramientos de Vicarios, Curas, Coadjutores, sin cuyo requisito los agraciados no pueden entrar en posesión: concederlo igualmente a las letras pontificias y disposiciones conciliares, o retenerlas. De esta formalidad sólo quedan exceptuados los que sean sobre dispensas para órdenes o matrimonios, y las expedidas por las penitenciarias.

25. Todos los objetos de policía y de orden: los establecimientos públicos de beneficencia, de ciencias, letras y artes; las cárceles y presidios, están bajo su dirección y suprema inspección, conforme a sus leyes y estatutos, lo mismo que la formación de censos y estadísticas; y

26. Promover y proteger el desarrollo de la industria agrícola, fabril y comercial.

CAPITULO XI

De los Ministros del Despacho.

- rt. 38.- El Poder Ejecutivo determinará el número de Ministros y respectivos departamentos, no pudiendo aquellos ser menos de dos.
- rt. 39.- Para ser Ministro se requiere: Ser natural de Centro-América -- vecindario de dos años -- tener treinta años de edad -- notorias luces y buena conducta -- y poseer un capital libre que no baje de mil pesos.
- rt. 40.- Las providencias del Poder Ejecutivo deben expedirse por el Ministro respectivo: de otro modo no serán obedecidas.
- rt. 41.- Los Ministros serán responsables, solidariamente con el Presidente las providencias que firmen contra la Constitución y las leyes.

CAPITULO XII

Del Poder Judicial.

- rt. 42.- El Poder Judicial lo ejerce una Corte dividida en dos secciones y demás tribunales que se establezcan.
- rt. 43.- Las Cortes residirán, una en esta ciudad y la otra en Tegucigalpa. La ley demarcará su respectiva comprensión jurisdiccional.
- rt. 44.- Cada Corte se compondrá por lo menos de tres Magistrados propios y dos suplentes; pero en las causas contra los eclesiásticos, el tribunal organizará en armonía con los concordatos.
- rt. 45.- Para ser Magistrado se requiere: ser Abogado de la República -- de crédito y honradez -- mayor de veinticinco años y padre de familia; o no -- de treinta años arriba con más que medianos conocimientos en jurisprudencia -- dueño de un capital libre que no baje de mil pesos -- y tener las demás calidades requeridas para los Letrados. Serán inamovibles durante su buena conducta; pero si hicieren dimisión se les admitirá a los dos años de haber -- o posesión.

Quando todos o algunos de los Magistrados estuviesen legalmente imposibilitados para conocer de un asunto, nombrarán colegas que desempeñen sus funciones quienes reunirán las cualidades que se exigen para Magistrados.

La Ley reglamentará el modo de hacer éstos nombramientos.

CAPITULO XIII

De las Atribuciones de la Corte.

- rt. 46.- Corresponde a cada sección:
- Formar el reglamento para su régimen interior.
 - Conocer en segunda instancia de las causas civiles y criminales, en los procedimientos y formas que la ley determina; y en última, de las súplicas y demás recursos legales.

3. Dirimir las competencias de los Tribunales y Jueces de su jurisdicción, de cualquier fuero que sean.

4. Decidir las promovidas a los Tribunales y Jueces de su Jurisdicción, por la otra sección, sus Tribunales y Jueces.

La ley determinará el modo de resolver las que ocurran entre ambas secciones.

5. Suspender durante el receso del Congreso, a los Magistrados por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

6. Conocer de las causas de responsabilidad de los Jueces de primera instancia de su respectiva jurisdicción, pudiendo suspenderlos y destruirlos con conocimiento de causa conforme a la ley.

7. Conocer de los recursos de fuerza y de los demás que le atribuya la ley.

8. Hacer el recibimiento de Abogados, suspenderlos por causas graves y aún retirarles sus títulos por conducta notoriamente viciada, vñalidad, cohecho, y fraude con conocimiento de causas.

9. Visitar por medio de un Magistrado los pueblos de su jurisdicción, para corregir los abusos que se noten en la administración de justicia. Las facultades del Magistrado, la duración de la visita y demás circunstancias conducentes al objeto serán determinadas por la ley.

10. Vigilar sobre la conducta de los jueces inferiores, cuidando que administren pronta y cumplida justicia.

11. Vigilar para que los reos confinados cumplan debidamente su condena, dirigiéndose al Ejecutivo cuando los Comandantes de presidio sean remisos en la observancia de sus deberes; y

12. Manifestar al Congreso la inconveniencia de las leyes, o las dificultades para su aplicación, indicando las reformas de que sean susceptibles. La ley determinará las demás atribuciones del Poder Judicial.

CAPITULO XIV

De la Formación, Sanción y Publicación de la Ley.

Art. 47.- La iniciativa de la ley es exclusivamente reservada a los diputados, al Presidente por medio de los Ministros y a la Corte de Justicia; más el Ejecutivo no podrá hacerla sobre impuestos ni contribuciones de ninguna clase.

Art. 48.- Todo proyecto de ley, después de discutido y aprobado por el Congreso, se pasará al Ejecutivo, el que no teniendo objeciones que hacerle, le dará su sanción y lo hará publicar como ley.

Art. 49.- Cuando el Ejecutivo encuentre inconvenientes para sancionar los proyectos de ley que se le pasan, podrá devolvérlos dentro de diez días al Congreso, puntualizando las razones en que funda su opinión para la negativa; y si dentro del término expresado no los objetase se tendrán por sancionados y los hará publicar como ley.

En caso de devolucción, el Congreso podrá considerar y ratificar el proyecto, con los dos tercios, pasando al Ejecutivo, quien lo tendrá como ley que ejecutará y publicará.

Cuando el Congreso emita en los últimos diez días de sus sesiones y el Ejecutivo encuentre dificultades para su sanción, es obligado a dar aviso inmediatamente al Congreso para que permanezca reunido hasta que se cumpla el término expresado; y no dándolo se tendrá por sancionada la ley.

Art. 50.- Cuando un proyecto de ley fuese desachado y no ratificado no podrá proponerse en las mismas sesiones sino hasta en las de la Legislatura siguiente.

En la devolucción que haga el Ejecutivo de los proyectos de ley, las votaciones del Congreso, para ratificarlos serán nominales y deberán constar en las actas del día.

Art. 51.- Todo proyecto de ley aprobado por el Congreso, se extenderá por duplicado, se publicará en él, y firmados dos ejemplares, por su Presidente y Secretarios se pasará al Ejecutivo con esta fórmula: "Al Poder Ejecutivo" :Si éste no lo aprobase, lo devolverá al Congreso con esta fórmula: "Vuelva al Soberano Congreso".

Art. 52.- Recibido por el Ejecutivo un proyecto de ley, si no le encontrase objeciones que hacer firmará los dos ejemplares, devolviendo uno al Congreso, y reservándose otro en su archivo, lo publicará como ley en el término de diez días.

Art. 53.- La publicación de la ley se hará en esta fórmula: "El Presidente de la República de Honduras a sus habitantes -Sabed: que el Soberano Congreso ha decretado o acordado la siguiente: (Aquí el texto: y firmas) por tanto: Ejecútese".

CAPITULO XV

De los Jueces de Primera Instancia.

Art. 54.- La ley establecerá jueces de primera instancia para que conozcan en lo civil y criminal, demarcará la jurisdicción de cada uno y la compensación proporcionada a su trabajo.

Art. 55.- Para ser juez de primera instancia se requiere: ser Abogado de la República, de crédito y honradez -mayor de veinticinco años y padre de familia; o no Letrado, de treinta años arriba con mas que medianos conocimientos en jurisprudencia -dueño de un capital libre - que no baje de mil pesos -tener las demás cualidades requeridas para los Letrados.

Art. 56.- Los jueces de primera instancia fallarán sin consulta, a no ser que la pida alguna de las partes. Su duración será de dos años, pudiendo ser reelectos sin interrupción; pero en este caso será voluntaria la aceptación del destino.

CAPITULO XVI

Del Gobierno Político de los Departamentos y del Régimen Municipal.

Art. 57.- En cada departamento habrá un Gobernador propietario y un suplente, nombrados por el Ejecutivo. Serán de reconocida honradez e instrucción -dueños de un capital libre y conocido que no baje de mil pesos; o Letrado, Licenciado en cualquiera de las facultades mayores -vecinos del departamento respectivo, o naturales de la República y mayores de treinta años.

Art. 58.- Las Comandancias departamentales, sólo en tiempo de guerra podrán ser servidas por los Gobernadores, a juicio del Ejecutivo; más los Comandantes no podrán asumir las gobernaciones políticas.

Art. 59.- Los Gobernadores políticos durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos sin interrupción, si ellos admitiesen. La ley demarcará sus funciones y manera de ejercerlas.

Art. 60.- El gobierno interior de los pueblos es a cargo de las Municipalidades, electas popularmente en el tiempo y número de individuos que la ley señale.

Art. 61.- Habrá jueces de paz que conocerán de los asuntos de menor cuantía, delitos y faltas livianas. La ley determinará su nombramiento, cualidades y atribuciones.

CAPITULO XVII

Del Tesoro Público.

Art. 62.- Formarán el tesoro público todos los bienes, muebles, raíces y créditos activos de la República: todos los impuestos, contribuciones, tallas y tasas que paguen los hondureños o en adelante pagaren por sus personas, industrias o bienes: todos los derechos que satisfacen el comercio con arreglo a las leyes.

Art. 63.- Habrá un Tesoro general de la República, y en los departamentos Intendentes, pudiendo suprimirse este empleo en la Capital y anversarse a la Tesorería general a juicio del Ejecutivo.

La ley demarcará sus funciones y cualidades, y establecerá los demás empleados que administren, lleven y glosen la cuenta y razón.

Art. 64.- La jurisdicción de hacienda será privada de sus empleados y demás jueces especiales que se establezcan. La ley demarcará su extensión y el modo de ejercerla.

CAPITULO XVIII

De la Fuerza Pública.

Art. 65.- La fuerza pública se compone de la milicia nacional y del ejército de tierra y mar. Es instituída para defender al Estado contra los enemigos exteriores, y para el mantenimiento del orden y ejecución de las leyes.

Art. 66.- La organización de la milicia nacional y del ejército, se regulará por la ley.

Art. 67.- La fuerza pública es esencialmente obediente. Ningun cuerpo armado puede deliberar. Empleada para mantener el orden en el interior, no obrará sino por el requerimiento las autoridades constituídas, según las reglas determinadas por la ley.

Art. 68.- Se establece el fuero de guerra para los jefes de Coronel efectivo arriba inclusive; y para todos los militares en actual servicio o que pertenezcan a cuerpo organizado. En los delitos de policía y en los otros casos que la ley determine, quedansujetos al fuero común.

Art. 69.- La Comandancia general, que es a cargo del Presidente de la República, se desempeñará por conducto del Ministro de la guerra, pudiendo en tiempos anormales ejercerse directamente.

CAPITULO XIX

De las Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.

Art. 70.- Todo funcionario o empleado, al tomar posesión de su destino, prestará juramento de ser fiel a la República, de cumplir y hacer cumplir las leyes y atenerse a su texto, cualesquiera que sean las órdenes o resoluciones que las contraríen; y sus infracciones serán responsables con sus personas y sus bienes, durante ocho años desde la comisión del delito, respecto a la acción criminal; más por la civil quedan sujetos al tiempo de la prescripción ordinaria.

Art. 71.- No podrán juzgarse a los individuos de Los Supremos Poderes, Secretario del Despacho y Agentes diplomáticos de la República, por delitos oficiales, sin que preceda declaratoria de haber lugar a formarles causa; mas por los delitos comunes, quedan sin restricción alguna, sujetos a los Tribunales a cuyo fuero pertenezcan.

Art. 72.- El Presidente de la República podrá ser juzgado por traición, venalidad, y usurpación del Poder; por atentar contra las garantías y impedir las elecciones o violentarlas; por impedir la reunión del Poder Legislativo, y por los demás delitos oficiales que cometan. Pero no podrá acusársele ni ser sometido a juicio sino hasta después de terminado su periodo.

Tampoco podrá ser aprobada su conducta oficial, mientras esté en ejercicio del Poder.

Art. 73.- La instrucción de la causa contra los individuos de los Altos Poderes, Ministros del despacho y Agentes Diplomáticos de la República, se verificará en el Congreso por tres de sus miembros, electos por la suerte y el pronunciamiento se hará colectivamente, debiendo concurrir los dos tercios de los presentes para que haya sentencia. Esta se contraerá a deponer del destino al acusado y declararle incapaz de obtener otros honoríficos, lucrativos o de confianza, por cierto tiempo; mas si la causa diere mérito para un juicio criminal escrito, quedará sujeto el culpable, a los resultados de un procedimiento ordinario, ante los tribunales comunes.

Art. 74.- Desde que se declare en el Congreso que se ha por admitida la acusación y en el acusado queda desde este acto suspenso del ejercicio de sus funciones; y por ningún motivo podrá permanecer más en su puesto sin hacerse responsable del crimen de usurpación, y ningún individuo deberá obedecerle.

Art. 75.- Los decretos, autos y sentencias pronunciadas por el Congreso, deben ser cumplidas y ejecutadas sin necesidad de confirmación ni sanción alguna.

Art. 76.- Las opiniones de los diputados en lo relativo a su destino, no pueden ser interpretadas criminalmente en ningún tiempo ni con motivo alguno; ni ellos pueden ser demandados o ejecutados por deudas, desde el llamamiento a sesiones, hasta quince días después de concluidas.

Art. 77.- Para declarar por mayoría de votos cuando ha lugar a formación de causa contra el Tesoro general, Contadores Mayores, Administradores de Aduanas, Intendentes, Comandantes expedicionarios, departamentales, de puertos y fronteras y Gobernadores políticos por delitos oficiales, se organizará un tribunal compuesto del Presidente de la respectiva sección judicial y dos diputados electos por la suerte, entre los tres que componen la representación de los departamentos de Comayagua y Tegucigalpa. El Tribunal de justicia respectivo hará el sorteo en corte plena. Hecha la declaratoria, con informe del acusado, este quedará suspenso y será juzgado por los tribunales a cuyo fuero pertenezca.

La ley determinará la autoridad que debe juzgar a dichos comandantes.

Art. 78.- Los empleados que sirven su destino en la demarcación jurisdiccional de la Sección Suprema de Tegucigalpa, sufrirán allí el juicio de responsabilidad.

La acusación se presentará ante el tribunal de la sección respectiva, quien inmediatamente procederá en sorteo antes establecido.

CAPITULO XX

Garantías Individuales.

Art. 79.- La República reconoce el derecho de "Habeas Corpus". La ley determinará la manera de ponerlo en práctica.

Art. 80.- El presunto delincuente puede ser detenido por cualquiera autoridad que tenga facultad de arrestar; y el infraganti por cualquiera persona, para el efecto de presentarlo al juez.

Art. 81.- La detención para inquirir no pasará de seis días: durante este término deberá la autoridad practicar la justificación del caso, y según su mérito, librar por escrito la orden de prisión, o poner en libertad al detenido.

Art. 82.- No podrá librarse aquella sin que preceda justificación de haberse cometido un delito que merezca pena más que correccional y sin que resulte, al menos por semi plena prueba, quien sea el delincuente. Sin embargo es permitida la prisión o arresto, por pena o apremio en los casos y por el término que la ley disponga.

Art. 83.- Ninguno podrá ser preso ni detenido, sino en los lugares públicos designados al efecto.- Los ciudadanos y las mujeres pueden serlo en otros conforme a su voluntad determinándolo la ley.

Art. 84.- El arresto, prisión o reclusión, por pena correccional no podrá pasar de treinta días, ni veinticinco pesos de multa.

Art. 85.- Cuando alguno no estuviese incomunicado por orden del juez transcrita en el registro del Alcalde, no podrá este impedir su comunicación con las personas.- Después de la confesión no puede prohibirse - aquella y el juicio es público.

Art. 86.- Aun con auto de prisión, decretado ninguno puede ser llevado a la cárcel ni detenido en ella; si presentase fianza cuando al respectivo delito sea aplicable pena pecuniaria.

Art. 87.- Ningún ciudadano o habitante podrá ser obligado a declarar en materia criminal, contra si mismo, ni contra sus parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, según la computación civil.

Art. 88.- Las penas deben ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad del delito; y ninguna corporal pasará de diez años. El apremio o tortura que no sea necesario para mantener en seguridad a las personas, es atroz y no debe consentirse.

Art. 89.- Siendo la inviolabilidad de la vida humana una de las garantías individuales, la pena de muerte queda abolida en materia política; y solamente se establece por los delitos de asesinato, homicidio premeditado y seguro, asalto o incendio, si se requiere muerte, y por el paricidio en los casos que determina la ley.- Los militares en servicio quedan sujetos a las penas de las ordenanzas del Ejército.

Art. 90.- Ningún habitante puede ser molestado, inquietado ni perseguido por sus opiniones, de cualquier naturaleza que sean, con tal que por algun acto directo y positivo no perturbe el orden o infrinja la ley.

Art. 91.- Las acciones privadas que no ofendan directamente el orden público, ni produzcan daños de tercero están fuera de la competencia de la ley.

Art. 92.- La casa de todo habitante es un asilo que sólo puede allanar la autoridad en los casos siguientes y en los demás que determine la ley.

1. En persecución actual de un delincuente.
2. Persiguiendo al reo a quien se haya proveído auto de prisión; y
3. Cuando por reclamo del interior de ella, o por desorden escandaloso se exija su allanamiento.

También puede ser allanada Aquella en que se halle refugiado un delincuente, o se oculten objetos hurtados, prohibidos o estancados, procediendo al menos semi-plena prueba de los hechos.

Art. 93.- Solamente los tribunales establecidos con anterioridad por la ley, juzgarán y conocerán en las causas civiles y criminales de los hondureños. Si lo hiciere el Cuerpo Legislativo, fuera de los casos que se dejan señalados, o el Poder Ejecutivo, tomándose facultades que no le competen o declarando delincuente o castigando a un individuo que debe ser juzgado por sus jueces naturales, se declara que tales poderes atacan la presente Carta, que por su infracción, responderán con sus personas y bienes.

Art. 94.- Todo habitante, libre de responsabilidad, puede emigrar a donde le parezca y volver cuando le convenga; pero en caso de guerra, - aún los extranjeros lo verificarán con pasaporte, mediante el decreto - gubernativo al efecto.

Art. 95.- La propiedad de cualquier, no podrá ser ocupada sino por - causas de intereses públicos, legalmente comprobada y previamente indem-
nizado su valor y justa tasación.

Art. 96.- La correspondencia epistolar es inviolable.

La sustraída de las estafetas o de otro lugar, no hace fé con-
tra ninguno.

Art. 97.- Todo habitante puede libremente expresar su pensamiento - por la prensa, sin previa censura, haciendose solamente responsable por el abuso que haga de este derecho: pero no se podrán publicar escritos injuriosos contra determinadas personas, sin que se suscriban por el au-
tor y se publiquen por su nombre. La ley determinará la manera de cali-
ficar las injurias de ésta especie.

Art. 98.- Las leyes, órdenes, providencias o sentencias retroactivas, proscriptivas, confiscatorias, condenatorias, sin juicio y que hacen - transcendental la infamia son injustas, opresivas y nulas. Las autorida-
des, que cometan semejantes violaciones responderán con sus personas y bienes a la reparación del daño inferido.

Art. 99.- Ni el Poder Legislativo, ni el Ejecutivo, ni ningún tribu-
nal o autoridad, podrá restringir, alterar o violar ninguna de las ga-
rantías consignadas en esta Carta; y cualquier poder que la infrinja, será responsable individualmente al perjuicio inferido en los mismos -
términos del artículo anterior.

CAPITULO XXI

Disposiciones Generales.

Art. 100.- Sólo por los medios constitucionales se asciende al Poder Supremo. Si alguno lo usurpase por medio de la fuerza o de la sedición popular, es reo del crimen de usurpación. Todo lo que obrare será nulo, y las cosas volverán al estado que tenían antes, luego que se establezca el orden constitucional.

Art. 101.- Llegado el tiempo en que deben practicarse las elecciones populares de Presidente de la República, mientras ellas duren, este fun-
cionario depositará el mando en uno de los designados por el Congreso, quedando reducida la fuerza nacional a las guarniciones ordinarias.

Art. 102.- La ley, bien sea que proteja, o bien castigue será igual para todos, y recompensará a cada uno en proporción a sus méritos. No - podrá ser relajada o dispensada en favor de ningún individuo, corpora-
ción o pueblo, salvo el caso de indultos o amnistías.

Art. 103.- Todo ciudadano puede ser admitido a los cargos públicos, civiles, políticos y militares sin más diferencia que sus talentos y -
virtudes, llenando las condiciones establecidas.

Art. 104.- Es nula toda resolución, decreto, orden, acuerdo o sentencia de los poderes constitucionales, en que interviene coacción -- ocasionada por la fuerza pública o por el pueblo en tumulto.

Art. 105.- Ningún juez puede serlo en dos diversas instancias, evocar causas pendientes para conocer de ella, ni abrir juicios fenecidos.

Art. 106.- Ningún militar en actual servicio podrá ser electo Presidente ni Diputado. Tampoco podrán ser Representantes al Congreso de Ministros del despacho; recayendo la elección en otro empleado de libre nombramiento del Ejecutivo, vacará en su destino; y mientras sea representante, no podrá obtener ningún empleo de gobierno.

Art. 107.- La policía de seguridad sólo podrá ser confiada a las - autoridades civiles, en la forma que la ley establezca.

Art. 108.- La República no reconoce dentro de su territorio ningún individuo con derecho a sustraerse a la acción de las leyes y del juicio de los tribunales que ellas establezcan; y las causas no podrán - correr más que tres instancias.

Art. 109.- Todos los hondureños pueden reunirse pacíficamente y en buen orden para tratar de cuestiones de interés público, o dirigir peticiones a las autoridades constituidas; más los autores de estas reuniones responderán personalmente de cualquier desorden que se cometa.

Art. 110.- El período de los representantes al Congreso comenzará el 1º de Marzo; y el Presidente de la República desde el 1º de Abril, como queda establecido, sin que para ello obste que por algún inconveniente legítimo no pueda funcionar todo el tiempo ordinario.

Art. 111.- No es necesaria la confirmación o sanción del Poder Ejecutivo en los actos o resoluciones legislativas siguientes: en las que tengan por objeto las elecciones que el Congreso haya de hacer y las - renuncias que debe oír; en los acuerdos para trasladar su residencia - de un punto a otro; en los presupuestos generales de gastos que vote; y en los reglamentos que emita para su regimen interior.

Art. 112.- El régimen judicial y gobierno interior o local de las - Islas de la Bahía en el Atlántico, y las del golfo de Fonseca en el pacífico, pueden ser distintos de los adoptados en esta Constitución para los demás pueblos de la República. Lo mismo se establece respecto de las tribus aún civilizadas de la costa Norte.

CAPITULO XXII

De las Reformas de la Constitución.

Art. 113.- La reforma parcial o absoluta de ésta Constitución sólo podrá acordarse por los dos tercios de votos de los Representantes al Congreso. Esta resolución se publicará por la prensa y volverá a tomarse en consideración en la próxima Legislatura ordinaria.

Si ésta la ratifica, se convocará una Asamblea Constituyente para que decrete las reformas. Pero no se propondrán aquellas sino hasta pasados ocho años después de promulgada ésta.

Art. 114.- La presente Constitución no obsta para que concorra Hondu

ras a la formación de su gobierno nacional con las otras Secciones de Centro-América, o a la de un pacto federativo si aquel no pudiese tener efecto. La adopción de un nuevo régimen o pacto que se celebre, será ratificado con dos tercios de votos de los Diputados al Congreso y por este hecho, se tendrá como reformada esta Carta, sin embargo de lo establecido en el artículo anterior.

Art. 115.- Queda derogada la Constitución política de 28 de septiembre de 1.865, y vigentes provisionalmente las leyes que rigen actualmente en la República, en lo que no se oponga a la presente Carta.

Dada en Comayagua, a veintitrés días del mes de Diciembre del año del Señor de mil ochocientos setenta y tres, LII de la independencia.

RAMON MIDENCE,
Diputado Presidente por el departamento de Tegucigalpa.

J. MIGUEL BUSTILLO,
Diputado propietario por el Departamento de Olancho.

GUILLERMO BUSTILLOS,
Diputado VicePresidente por el Departamento de Gracias.

MIGUEL BUSTILLOS,
Diputado por Yoro.

MIGUEL DEL CID,
Diputado por el Departamento de Gracias.

PEDRO RIVERA BUSTILLO,
Diputado propietario por el departamento de Comayagua.

MARTIN UCLES,
Diputado pro el Departamento de Tegucigalpa.

FAUSTINO DAVILA,
Diputado suplente por Tegucigalpa.

JESUS MARIA RODRIGUEZ,
Diputado propietario por el Departamento de Copán.

TEODORO FUNES,
Diputado propietario por el Departamento de Santa Barbara.

MIGUEL CUBAS,
Diputado por el Departamento de Yoro.

SANTIAGO MEZA,
Diputado propietario por el Departamento de Olancho.

TRINIDAD HERNANDEZ,
Diputado por el Departamento de Comayagua.

MANUEL SEBASTIAN LOPEZ,
Diputado por el Departamento de Santa Bárbara.

FRANCISCO LOPEZ,
Diputado por el Departamento de Comayagua.

JUAN BUSTILLO,
Diputado por el Departamento de Mosquitía.

MANUEL RECARTE,
Diputado por el Departamento de Santa Bárbara.

APOLINARIO FLORES,
Diputado por el Departamento de Comayagua.

TORIBIO ZELAYA,
Diputado por el Departamento de Olacho.

FRANCISCO CERNA,
Diputado por el Departamento de Mosquitia.

FRANCISCO FIALLOS,
Diputado por el Departamento de Copán.

JUAN ORDOÑEZ,
Diputado por el Departamento de Olancho.

TIBURCIO HERNANDEZ,
Secretario, Diputado por el Departamento de Yoro.

MAXIMO GALVEZ,
Secretario, Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.

Por tanto: Promúlguese, imprímase y cúmplase.

Dado en Comayagua, en la casa de Gobierno a 25 de Diciembre
de 1.873.

CELEO ARIAS.

El Ministro accidental de Gobernación y
Hacienda
Jeremías Cisneros.

El Ministro de Guerra y Relaciones Exteriores,
MARIANO RUBIO.

Los Diputados que compusieron la comisión para formar el proyecto de ésta Constitución fueron los siguientes:

Licenciado Don Máximo Gálvez, Licenciado Don Martín Uclés, Licenciado Don Teodoro Funes, Licenciado Don Santiago Cerna, Presbítero Don Miguel Bustillos y Don Tiburcio Hernández.

C O N S T I T U C I O N D E 1.880

PARTE PRIMERA

Declaraciones, principios, derechos y garantías fundamentales.

CAPITULO PRIMERO

Declaraciones y principios.

Art. 1.- Honduras se considera como una Sección disgregada de la República de Centro-América. En consecuencia, reconoce como su principal deber y su más urgente necesidad, volver a la unión con las demás Secciones de la República disuelta. Para alcanzar este capital objeto, no obsta la presente Constitución, que puede ser reformada o abolida por el Congreso, para ratificar los pactos, tratados y convenciones que tiendan a dar, o tengan por resultado la reconstrucción nacional de Centro-América.

Art. 2.- La Nación hondureña es República soberana, libre e independiente.

Art. 3.- Todo poder público emana del pueblo. Los funcionarios del Estado son delegados, y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Por ella legislan, administran y juzgan y conforme a ella deben dar cuenta de sus funciones.

Art. 4.- El Gobierno de la República es democrático, representativo alternativo y responsable; y se ejercerá por tres departamentos distintos; Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Art. 5.- Los límites de la República y su división territorial serán objeto de una ley.

CAPITULO SEGUNDO

Derecho público Hondureño.

Art. 6.- La Constitución garantiza a todos los habitantes de la República, sean hondureños o extranjeros, la inviolabilidad de la vida humana, la seguridad individual, la libertad, la igualdad y la propiedad.

SEGURIDAD INDIVIDUAL.

Art. 7.-1. La República reconoce la garantía del Habeas Corpus.

2. No es legal la orden de arresto que no emane de autoridad competente. La detención para inquirir no pasará de seis días, y el Juez de Instrucción está obligado a dentro de este término, decretar la libertad o prisión del indicado.

3. El delincuente infraganti puede ser aprehendido por cualquier persona para el efecto de entregarlo inmediatamente a la autoridad que tenga facultad de arrestar.

4. Aun con auto de prisión ninguno puede ser llevado a la cárcel, ni detenido en ella, si presentare fianza, cuando por el delito no deba aplicarse pena aflictiva.

5. Nadie puede ser condenado, sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho que motiva el proceso.

6. Ninguno puede ser juzgado por comisiones especiales, ni sustraído de los Jueces designados por la ley antes del hecho que origina la causa.

7. Nadie puede ser obligado en materia criminal a declarar contra sí mismo, ni contra sus parientes en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

8. El derecho de defensa es inviolable.

9. El tormento es abolido para siempre. Las prisiones que no sean absolutamente necesarias para la seguridad de los procesos, no deben emplearse.

10. La incomunicación de los detenidos o presos no podrá tener lugar sino por orden escrita del Juez de la causa, por un breve término y por motivos calificados. Ninguno podrá ser preso ni detenido sino en los lugares públicos designados al efecto.

11. El domicilio es inviolable. Son inviolables la correspondencia epistolar y telegráfica, los papeles privados y los libros de comercio.

12. Ningún habitante puede ser inquietado ni perseguido por sus opiniones de cualquier naturaleza que sean, con tal que por un acto directo y positivo, no perturbe el orden o infrinja la ley.

13. Las leyes, ordenes, providencias o sentencias retroactivas, prescriptivas, condenatorias sin juicio e infamantes, son injustas, opresivas y nulas. Las autoridades que cometan tales violaciones serán responsables con sus personas y bienes por el daño inferido; y

14. La policía de seguridad sólo podrá ser confiada a las autoridades civiles.

LIBERTAD.

Art. 8.- El esclavo que pise el territorio hondureño queda libre. El tráfico de esclavos es un crimen.

Art. 9.- Todos tienen libertad.

1. De publicar sus ideas por la imprenta, sin previa censura.

2. De disponer de sus propiedades, sin restricción alguna, por venta, donación, testamento o cualquiera otro título legal.

3. De profesar cualquier culto. El estado no contribuirá al sostenimiento de ningún culto. Los cultos se sostendrán con lo que voluntariamente contribuyan los particulares. El Estado ejercerá el derecho de su prema inspección sobre los cultos, conforme a la ley y a los reglamentos de policía relativos a su ejercicio exterior.

4. De ejercer su profesión, oficio o industria.
5. De asociarse y reunirse pacíficamente y sin armas. Se prohíbe el establecimiento de toda clase de asociaciones monásticas.
6. De ejercitar el derecho de petición.
7. De enseñar.
8. De transitar por el territorio de la República, de permanecer en el, y de salir sin pasaporte; y
9. De ejercer la navegación y el comercio.

IGUALDAD

Art. 10.- Ante la ley no hay fueros ni privilegios personales.

2. Todos los hondureños podrán desempeñar cargos públicos, sin requerirse más condición que la de su idoneidad. Los Ministros de las diversas sociedades religiosas no podrán ejercer cargos públicos.

3. La igualdad es la base de los impuestos; y

4. La ley civil no reconoce diferencia entre nacionales y extranjeros.

PROPIEDAD

Art. 11.- La propiedad es inviolable. Nadie puede ser privado de ella, sino en virtud de ley o sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley o sentencia fundada en ley, y no se verificará sin previa indemnización.

2. Sólo el Congreso impone contribuciones.

3. Ningun servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley.

4. La confiscación se declara abolida para siempre.

5. Todo autor o inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra o descubrimiento; y

6. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones.

Art. 12.- Las leyes reglan el uso de estas garantías de derecho público; pero no podrá darse ley que, con ocasión de reglamentar u organizar su ejercicio, las disminuya, restrinja o adultere en su esencia.

CAPITULO TERCERO

Derecho público deferido a los extranjeros.

Art. 13.- Ningún extranjero es más privilegiado que otro. Todos gozan de los derechos civiles del hondureño. En consecuencia, pueden comprar, vender, locar, ejercer industrias y profesiones; poseer toda clase de propiedades, y disponer de ellas en la forma prescrita por la ley; entrar en el país y salir de él con dichas propiedades; frecuentar con sus buques los puertos de la República, y navegar en sus mares y ríos. Están libres de contribución extraordinarias; se les garantiza entera libertad de conciencia, y pueden construir templos y cementerios en cualquier lugar de la República. Sus contratos matrimoniales no pueden ser invalidos por no estar de conformidad con los religiosos de cualquiera creencia si estuviesen legalmente celebrados.

2. No están obligados a admitir la naturalización.
 3. Pueden optar a los destinos públicos según las condiciones de la ley, que en ningún caso los excluirá por el sólo motivo de su origen; y
 4. Obtienen naturalización residiendo un año continuo en el país la obtienen sin este requisito los colonos; los que se establecen en lugares habitados por indígenas o en tierras despobladas; los que emprenden y realizan importantes trabajos de utilidad general; los que introducen valiosas fortunas al país, y los que se recomiendan por invenciones o aplicaciones de grande utilidad para la República.
- Art. 14.- Los extranjeros desde su llegada al territorio de la República, están obligados a respetar las autoridades y observar las leyes. También están obligados a la observancia de las disposiciones y reglamentos de policía, y a pagar los impuestos locales y las contribuciones establecidas por razón de comercio, industria, profesión, propiedad o posesión de bienes, y las que por el mismo motivo se establezcan en adelante, bien sea aumentando o disminuyendo las anteriores.
- Art. 15.- Las leyes y tratados reglan el uso de estas garantías, sin poder disminuirlas ni alterarlas.

CAPITULO CUARTO

Garantías de Orden y de Progreso.

Art. 16.- El servicio militar es obligatorio. Todo hondureño de diez y ocho a treinta años es soldado del Ejército activo, y de treinta y cinco a cuarenta es soldado de la reserva. Se exceptúan por diez años -- los hondureños naturalizados. La organización del Ejército será reglada por la ley.

Art. 17.- Se establece el fuero militar; la extensión de éste será -- determinada por el Código respectivo.

Art. 18.- La fuerza pública es esencialmente obediente; ningún cuerpo armado puede deliberar.

Art. 19.- Toda persona o reunión de personas que asuma el título de representación del pueblo, se arrogue sus derechos, o represente en su nombre, comete sedición.

Art. 20.- Toda autoridad usurpada es ilegal; sus actos son nulos. -- Toda decisión acordada por intimación directa o indirecta de un cuerpo armado, o de una reunión de pueblo es nula de derecho y no tendrá efectos legales.

Art. 21.- Declarada la República, o un lugar de la República en estado de sitio, queda suspenso el imperio de la Constitución en la localidad a que se refiera la declaración de estado de sitio.

Art. 22.- Ni los hondureños ni los extranjeros podrán, en ningún caso, reclamar al Estado indemnización alguna por daños o perjuicios que a sus personas o bienes causaren las facciones.

Art. 23.- El Presidente de la República, los Magistrados de la Corte Suprema, los Secretarios de Estado y los Agentes Diplomáticos pueden -- ser acusados ante el Congreso, por los delitos de traición, concusión, dilapidación y violación de la Constitución de las leyes. El juicio político, o de responsabilidad, se limita a deponer de su empleo al acusado, y entregarlo a los tribunales comunes.

Art. 24.- El Estado tiene el primordial deber de fomentar y proteger la instrucción pública en sus diversos ramos: la instrucción primaria --

es obligatoria, laica y gratuita. Será también laica la instrucción media y superior. Ningun Ministro de una sociedad religiosa podrá dirigir establecimientos de enseñanza sostenidos por el Estado.

Art. 25.- El Estado proveerá todo lo conducente al bienestar y adelanto del país, fomentando el progreso de la agricultura, de la industria y del comercio; de la construcción, de la colonización de tierras desiertas, y de la construcción de caminos y ferrocarriles de plantamiento de nuevas industrias y del establecimiento de instituciones de crédito; de la importación de capitales extranjeros, y de la explotación y canalización de los ríos y lagos, por medio de leyes protectoras de estos fines, y de concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo.

Art. 26.- La navegación de los ríos es libre para todas las banderas.

Art. 27.- La presente Constitución puede reformarse. La necesidad de reformarla será declarada por el Congreso ordinario; pero sólo se efectuará la reforma por una Asamblea Nacional Constituyente, convocada al efecto. Es ineficaz la proposición de reforma que no esté apoyada por las dos terceras partes del Congreso. Se exceptúa de estos requisitos el caso previsto en el artículo 1º.

Art. 28.- Todo empleado o funcionario de la República, al tomar posesión de su destino, hará la promesa siguiente: "Prometo que cumpliré y haré cumplir la Constitución y las leyes, atendiéndome a su texto cualesquiera que sean las órdenes que las contraríen y la autoridad de que emanan".

CAPITULO QUINTO

De la Nacionalidad, de la Ciudadanía y de las Elecciones.

Art. 29.- Son hondureños las personas que nacen en el territorio de la República, y las que se naturalizan en el país conforme a la ley.

Art. 30.- Son hondureños por nacimiento:

1. Todas las personas que hayan nacido o nacieren en el territorio de la República. La nacionalidad de los hijos de extranjeros nacidos en territorio hondureño, y la de los hijos de hondureños nacidos en territorio extranjero, será determinada por los tratados. Cuando no haya tratados, los hijos nacidos en Honduras, de padres extranjeros domiciliados en el país, son hondureños; y

2. Se consideran como hondureños naturales los hijos de las otras Repúblicas de Centro-América, por el hecho de hallarse en cualquier punto del territorio de Honduras, a no ser que ante la autoridad correspondiente manifiesten el propósito de conservar su nacionalidad.

Art. 31.- Son hondureños por naturalización:

1. Los hispano-americanos domiciliados en la República, si no se reservan su nacionalidad.

2. Los extranjeros que se hallen en los casos del inciso 4º., artículo 13, siempre que se inscriban en el registro civil o cívico en la forma determinada por la ley; y

3. Los que obtengan carta de naturalización de la autoridad que designe la ley.

Art. 32.- Son ciudadanos:

1. Todos los hondureños naturales mayores de veintiun años, que tengan profesión, oficio, renta o propiedad que les aseguren la subsistencia, y

2. Los hondureños naturales o naturalizados, mayores de diez y ocho años, que sepan leer y escribir o sean casados.

Art. 33.- Se suspenden los derechos de ciudadanía:

1. Por hallarse procesado criminalmente y tener decretado auto de prisión.
2. Por conducta notiramente viciada o por vagancia legalmente declarada.
3. Por enegenación mental judicialmente declarada; y
4. Por sentencia de inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos.

Art. 34.- Pierden sus derechos de ciudadanía los hondureños que admiten empleos de otro Gobierno sin licencia del Congreso o del Ejecutivo. De esta regla se exceptúan los hondureños que admiten empleos de los Gobiernos de Centro-América, salvo el caso en que den servicio o acepten despachos militares sin previa licencia del Poder Ejecutivo.

Art. 35.- El voto activo es irrenunciable y obligatorio, y corresponde a los ciudadanos en ejercicio de sus derechos. El sufragio es público y directo. Las elecciones practicarán en la forma que prescribe la ley.

Art. 36.- Sólo los ciudadanos en ejercicio de sus derechos pueden obtener voto pasivo con arreglo a la ley.

PARTE SEGUNDA

Departamento del Gobierno.

CAPITULO SEXTO

Del Departamento Legislativo.

Sección Primera.- De su Organización.

Art. 37.- El Poder legislativo se ejerce por un Congreso de Diputados que se reunirá de derecho en la Capital de la República, cada dos años, del 1º al 15 de enero, sin necesidad de convocatorias. Sus sesiones durarán hasta sesenta días prorrogables pudiendo cerrarlas antes de acuerdo con el Ejecutivo. También las tendrá extraordinarias, cuando sea convocado por éste, en cuyo caso, sólo se ocuparán de los asuntos que motiven su reunión.

Art. 38.- Un número de Diputados, que no baje de cinco, tiene facultad para tomar las medidas convenientes a fin de hacer concurrir a los demás hasta obtener su instalación. El Congreso puede instalarse y deliberar con las dos terceras partes de los Diputados electos y para que haya resolución basta por regla general la mayoría absoluta de votos.

Art. 39.- Los Diputados serán elegidos por cuatros años, y pueden ser reelectos indefinidamente. A los dos años del primer período se renovarán por mitad, por sorteo que hará el Congreso al cerrar sus sesiones. La renovación sucesiva se hará por el orden de antigüedad.

Art. 40.- Para ser electo Diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, y haber cumplido veinticinco años de edad.

Art. 41.- No pueden ser Diputados:

1. Los Secretarios de Estado.
2. Los militares en servicio; y
3. Los Gobernadores Políticos y Administradores de Rentas, por el departamento o distrito electoral en que ejerzan sus funciones.

Art. 42.- El Diputado es inviolable. En ningún tiempo será responsable por las ideas que de palabra o por escrito, exponga en desempeño de su mandato de legislador.

Art. 43.- Para elegir Diputados al Congreso, se dividirá el territorio de la República en distritos electorales que constarán de diez mil habitantes. Cada distrito elegirá un Diputado propietario y un suplente. Pero entre tanto se hace la división, cada departamento elegirá tres Diputados propietarios y dos suplentes. Los departamentos de las Islas de la Bahía y la Mosquitia elegirán, cada uno, un Diputado propietario y un suplente.

Sección Segunda.- Atribuciones del Congreso.

Art. 44.- Corresponden al Congreso las atribuciones siguientes:

En el Departamento de lo Interior.

1. Calificar la elección de sus miembros y aprobar o no sus credenciales.
2. Llamar a los suplentes en caso de muerte o legítimo impedimento de los propietarios.
3. Admitir las renunciaciones que unos y otros presenten por causas legalmente comprobadas.
4. Formar su reglamento de régimen interior.
5. Decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
6. Crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, - decretar y conceder amnistías o indultos generales o particulares, cuando la conveniencia pública lo exija, o el solicitante tenga a su favor - servicios relevantes prestados a la Nación.
7. Elegir los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y admitir o no sus renunciaciones,
8. Disponer todo lo concerniente a la seguridad y defensa de la República, y a su adelanto y prosperidad.
9. Reglar el comercio interior.
10. Declarar la elección de Presidente de la República legalmente practicada; hacerla en el caso del artículo 62; y admitir o no la renuncia del Presidente; y
11. Declarar con lugar a formación de causa al Presidente de la República, a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los Secretarios de Estado y a los agentes diplomáticos.

En el Departamento de Hacienda.

- Art. 46.-1. Aprobar o improbar la cuenta de gastos públicos.
2. Fijar bienalmente el presupuesto de esos gastos.
 3. Imponer o suprimir contribuciones.

4. Contraer deudas nacionales, reglar el pago de las existentes, y - decretar empréstitos.
5. Habilitar puertos mayores, crear y suprimir aduanas; y
6. Decretar el peso, ley y tipo de la moneda nacional.

En el Departamento de la Guerra.

Art. 47.- Aprobar o improbar las declaraciones de estado de sitio hechas durante su receso.

2. Fijar bienalmente el número de fuerzas de mar y tierra que ha de mantenerse en pie.

3. Aprobar o improbar la declaración de guerra que haya hecho el Poder Ejecutivo.

4. Permitir la salida de tropas nacionales fuera de la República, y conceder el tránsito o permanencia de tropas extranjeras en el territorio, guardando en todo caso las leyes de neutralidad; y

5. Declarar en estado de sitio la República, o una parte de la República, en los casos de agresión extraña, de conmoción interior, o de hallarse emenazada la tranquilidad pública.

Art. 48.- El Congreso puede delegar en el Ejecutivo facultades para legislar en los ramos de Policía, Hacienda, Guerra, Marina, Instrucción Pública y Fomento.

Sección Tercera.- De la Formación, Sanción y Promulgación de la Ley.

Art. 49.- Las leyes pueden ser iniciadas por cualquiera de sus miembros del Congreso, por el Presidente de la República, y por la Corte Suprema de Justicia en materias de su competencia. Los diputados presentarán los proyectos de ley por medio de una proposición escrita, el Presidente por un mensaje, y la Corte Suprema de Justicia por medio de una exposición.

Art. 50.- Ningún proyecto de ley, salvo el caso de urgencia calificada por el Congreso, será definitivamente votado sino después de tres deliberaciones. Toda proposición, que tenga por objeto declarar la urgencia de una ley, debe ir precedida de una exposición de los motivos en que ella se funda.

Art. 51.- Todo proyecto de ley después de discutido y aprobado por el Congreso se pasará al Ejecutivo, quien, no teniendo objeciones que hacerle le dará su sanción y lo hará promulgar como ley.

Art. 52.- Cuando el Ejecutivo encontrare inconvenientes para sancionar un proyecto de ley, lo devolverá al Congreso dentro de diez días; - puntualizando las razones en que funde su desacuerdo. Si dentro del término expresado no lo objetare, se tendrá por sancionado y lo promulgará como ley. En el caso de devolución el Congreso considerará el proyecto y si fuere ratificado con los dos tercios de votos, volverá a pasarlo al Ejecutivo, quien lo tendrá por ley.

Art. 53.- Cuando el Congreso vote un proyecto de ley al terminar sus sesiones, y el Ejecutivo encuentre dificultades para su sanción, está obligado a dar inmediatamente aviso al Congreso, para que permanezca reunido hasta diez días contados desde la fecha del proyecto, y no haciéndolo, éste se tendrá por sancionado.

Art. 54.- Cuando un proyecto de ley fuese desechado o no ratificado, no podrá proponerse en las mismas sesiones, sino hasta en la Legislatura siguiente.

Art. 55.- Cuando el Ejecutivo devuelva al Congreso un proyecto de ley, las votaciones para ratificarlo serán nominales, y deberán constar en el acta del día.

Art. 56.- No es necesaria la sanción del Ejecutivo en los actos o resoluciones siguientes:

1. En las elecciones que el Congreso haga o declare, y en las renunciaciones que admita o deseche.
2. En las declaraciones que haga sobre lugar a formación de causa; y
3. En los reglamentos que emita para su régimen interior.

Art. 57.- Todo proyecto de ley aprobado por el Congreso, se extenderá por duplicado, y se pasará al Ejecutivo con ésta fórmula: "Al Poder Ejecutivo". Si éste no lo aprobare, lo devolverá al Congreso con ésta fórmula: "Vuelva al Congreso Nacional".

Art. 58.- Recibido por el Ejecutivo un proyecto de ley, si no le hiciera objeciones, lo sancionará, devolviéndolo un ejemplar al Congreso y reservando otro para promulgarlo como ley, en el término de diez días.

Art. 59.- La promulgación de la ley se hará con ésta fórmula: "El Presidente de la República de Honduras, a sus habitantes, Sabed: que el Congreso Nacional ha ordenado lo siguiente: (Aquí el texto y firmas). Por tanto, Ejecútese".

CAPITULO SEPTIMO

Del departamento Ejecutivo.

Sección Primera.- De su Organización.

Art. 60.- El Poder Ejecutivo se ejerce por un ciudadano que se denomina Presidente de la República.

Art. 61.- El Presidente de la República debe ser hondureño natural, ciudadano en ejercicio de sus derechos y mayor de treinta años.

Art. 62.- El Presidente de la República es elegido popularmente y declarada su elección por el Congreso, según queda prescrito. Pero cuando hecho el escrutinio de votos no resultare electo por mayoría absoluta, el Congreso procede a elegirlo entre los tres candidatos que hayan obtenido mayor número de sufragios. En éste caso la votación será pública y nominal, y la elección debe quedar concluida en una sola sesión.

Art. 63.- El período constitucional en que el Presidente ejerce su cargo dura cuatro años, y podrá ser reelecto para el período siguiente. Para ser elegido por tercera vez, deberá mediar, entre ésta y la segunda elección el espacio de cuatro años. El período presidencial comienza el primero de Febrero del año de la renovación.

Art. 64.- El Presidente de la República tiene para el despacho de los negocios uno o más Secretarios de Estado, y les designa sus respectivos departamentos.

Art. 65.- Para ser Secretario de Estado se requiere ser mayor de veinticinco años, y ciudadano en ejercicio de sus derechos.

Art. 66.- El Secretario de Estado refrenda los actos del Presidente de la República, sin cuyo requisito carecen de legalidad; pero no ejerce autoridad por sí sólo; es responsable de los actos que legalice, y solidariamente de los que acuerda con sus colegas, salvo el caso en que proteste.

Art. 67.- Los Secretarios de Estado presentarán al Congreso, al comenzar sus sesiones ordinarias, informes detallados y comprobados sobre los actos del Ejecutivo, en cada uno de los respectivos ramos de la administración pública. Estos informes servirán de base al Congreso para que juzgue de la conducta del Ejecutivo en todo aquello que por la Constitución le corresponda aprobarla o improbarla.

Art. 68.- Los Secretarios de Estado presentarán bienalmente al Congreso el presupuesto de gastos de sus departamentos respectivos; y la cuenta de la inversión dada a los fondos votados en bienio precedente.

Art. 69.- Pueden los Secretarios de Estado concurrir a las sesiones del Congreso, y tomar partes en sus debates, pero no votar. Tienen el deber de responder a las interpelaciones que les dirija cualquier Diputado sobre los asuntos de la competencia del Congreso, salvo los de Guerra y de Relaciones exteriores, cuando el Presidente de la República juzgue necesaria la reserva.

Art. 70.- Cuando el Presidente de la República mandare personalmente la fuerza armada, o cuando por enfermedad, ausencia del territorio, u otro grave motivo no pudiese ejercer su cargo, le subrogará a su elección, el Consejo de Secretarios de Estado o uno de los Secretarios de Estado, mientras subsista la causa de impedimento. En los casos de muerte del Presidente, aceptación de su renuncia u otra clase de imposibilidad absoluta que no pudiese cesar antes de cumplirse el tiempo que falta para completar los cuatro años de su período constitucional, el Secretario de la Guerra subrogará al Presidente de la República, debiendo, en el perentorio término de diez días convocar a los pueblos por medio de un decreto para que elijan presidente conforme a lo prevenido en la Constitución. El Presidente electo, por el expresado motivo, durará cuatro años en el desempeño de su cargo.

Sección Segunda.- De las Atribuciones del Poder Ejecutivo.

Art. 71.- El Presidente de la República es el Jefe Supremo de la Nación; tiene a su cargo la administración general del país y sus atribuciones son las siguientes:

En el Departamento de lo Interior.

Art. 72.- 1. Ejecuta y hace cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes conducentes a éste objeto, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.

2. Nombra los Magistrados de las Cortes de Apelaciones, a propuesta de la Corte Suprema de Justicia, y a los Jueces de Letras, en la forma que prescriba la ley.

3. Admite en receso del Congreso, las renunciaciones de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y en este caso, nombra interinamente los Magistrados que deban de sustituirlos. Igual nombramiento hará en los casos de muerte o impedimento absoluto de los individuos de la Corte Suprema de Justicia.

4. Nombra los empleados del departamento Ejecutivo, conforme a la ley.

5. Vigila sobre la pronta y cumplida administración de justicia y sobre la conducta ministerial de los empleados del ramo.

6. Remueve y destituye a los empleados de su libre nombramiento.

7. Concede, en receso del Congreso, amnistías e indultos generales o particulares, cuando la conveniencia pública lo exija, o el solicitante tenga a su favor servicios relevantes prestados a la Nación.

8. Conmuta las penas cuando el Tribunal Superior que pronuncia la sentencia que causa ejecutoria contra el reo, recomiende la conmutación, expresando así en la misma sentencia, y por alguno de los motivos que la ley señala.

9. Concede a sus empleados licencia, jubilaciones, retiros y goce de montepíos, conforme a las leyes.

10. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, y lo convoca a extraordinarias cuando grave interés nacional lo requiera; y

11. Da cuenta en un mensaje al Congreso, al abrir sus sesiones ordinarias, del estado general de la administración pública y del uso que haya hecho de las facultades que se le hubiesen delegado.

En el Departamento de Relaciones Exteriores.

Art. 73.- 1. Concluye y firma tratados de paz, de comercio, de navegación de alianza, de neutralidad, y las demás negociaciones, requeridas para el mantenimiento y cultivo de las buenas relaciones internacionales; y

2. Nombra los Egentes diplomáticos y consulares de la República, recibe los Ministros y admite los Cónsules de las naciones extranjeras.

En el Departamento de Hacienda.

Art. 74.- 1. Hace recaudar y administra las rentas de la República, y decreta su inversión con arreglo a la ley; y

2. Decreta, en los casos de invasión o rebelión, si los recursos del Erario no basten, una contribución extraordinaria general, de cuya inversión dará cuenta al Congreso en sus próximas sesiones.

En el Departamento de la Guerra.

Art. 75.- 1. El Presidente es el Comandante General y General en Jefe de las fuerzas de mar y tierra de la República.

2. Provee todos los empleos militares. Por sí sólo confiere grados hasta el de Coronel efectivo; confiere los de General de Brigada y de División con acuerdo del Congreso; y sin éste requisito podrá conferirlos en el campo de batalla.

3. Dispone de las fuerzas militares, y le corresponde su organización y distribución, según las necesidades del Estado.

4. Declarar la guerra, en receso del Congreso, y concede patentes de corso y cartas de represalia; y

5. Declara, en receso del Congreso a la República, o a una parte de la República en estado de sitio, en los casos de agresión extraña de conmoción interior o si estuviere amenazada la tranquilidad del país.

CAPITULO OCTAVO

Del Departamento judicial.

Art. 76.- El Poder Judicial de la República se ejerce por una Corte Suprema de Justicia, compuesta de cinco Magistrados, y por los Tribunales superiores e inferiores que la ley establezca.

Art. 77.- Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años y abogado de la República.

Art. 78.- La facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los Tribunales de justicia. Ni el Congreso, ni el Presidente de la República pueden, en ningún caso, ejercer funciones judiciales, ni avocarse causas pendientes.

Ningún poder público podrá revivir procesos fenecidos.

Art. 79.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ejercerán su empleo durante cuatro años, prorrogables de derecho hasta el nombramiento de sus sucesores.

Art. 80.- La ley regla la organización y distribución de los Tribunales.

Art. 81.- La administración de justicia será gratuita en la República.

PARTE TERCERA

Del Gobierno Municipal.

CAPITULO NOVENO

Del Municipio y de las Municipalidades.

Art. 82.- Podrán constituir municipios las poblaciones que tengan por lo menos, quinientos habitantes.

Art. 83.- El Municipio es autónomo, y será representado por Municipalidades electas directamente por el pueblo. El número, condiciones y atribuciones de los municipios, se determinarán por una ley especial.

Art. 84.- Las atribuciones de las Municipalidades se limitan al - Gobierno local de sus correspondientes demarcaciones administrativas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 85.- Mientras se establece el régimen penitenciario, podrá - imponerse la pena de muerte en los casos que designe la ley; y

Artículo final.- La presente Constitución comenzará a regir el 1º de Diciembre del corriente año.

Dada en la ciudad de Tegucigalpa, a 1º de Noviembre del año de 1.880, sexagesimo de la independencia de Centro-América.

MANUEL GAMERO

Presidente, Diputado por el Departamento de El Paraíso.

JOSE MANUEL ZELAYA.

Vice presidente, Diputado por el Departamento de Olancho.

ROSENDO AGÜERO,

Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.

FAUSTINO DAVILA,

Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.

JOSE ESTEFAN LAZO,

Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.

CELEO ARIAS,

Diputado por el Departamento de Comayagua.

LUCAS CALDERON,

Diputado por el Departamento de Comayagua.

RAFAEL ALVARADO;

Diputado por el Departamento de la Paz,

FRANCISCO CRUZ,

Diputado por el Departamento de la Paz,

FRANCISCO FIALLOS,

Diputado por el Departamento de Gracias.

RAFAEL VILLAMIL,

Diputado por el Departamento de Gracias.

TRINIDAD FERRARI,

Diputado por el Departamento de Gracias.

VICTORIANO CASTELLANOS,

Diputado por el Departamento de Copán.

CONSTANTINO CUIRST,

Diputado por el Departamento de Copán.

SALVADOR DIAZ,

Diputado por el Departamento de Copán.

MANUEL SEBASTIAN LOPEZ,

Diputado por el Departamento de Santa Bárbara.

JESUS MANUEL GONZALEZ,

Diputado po el Departamento de Santa Bárbara.

TRANQUILINO BONILLA,

Diputado por el Departamento de Yoro.

CARLOS ALBERTO UCLES,
Diputado por el Departamento de Yoro.

ADOLFO ZUNIGA,
Diputado por el Departamento de Olancho.

CORNELIO MONCADA,
Diputado por el Departamento de Olancho.

CRESCENCIO GOMEZ,
Diputado por el Departamento de El Paraiso.

BRUNO ARRIAGA,
Diputado por el Departamento de El Paraiso.

PONCIANO PLANAS,
Diputado por el Departamento de Choluteca.

MIGUEL AUGUSTO LARDIZABAL,
Diputado por el Departamento de Choluteca.

ABEL CUBERO,
Diputado por el Departamento de Choluteca,

JOHN DACUS MC. LEAN,
Diputado por las Islas de la Bahía.

SALOMON ORDOÑEZ,
Diputado por el Departamento de la Mosquitia.

LUIS BOGRAN,
Secretario, Diputado por el Departamento de Yoro.

JERONIMO ZELAYA,
Secretario, Diputado por el Departamento de Santa Bárbara.

Casa de Gobierno, Tegucigalpa, 1º de Noviembre de 1.880.

Promúlguese.

Marco Aurelio Soto.

El Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, Instrucción Pública y Guerra.

Ramón Rosa.

El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación, -
Justicia y Fomento.

Enrique Gutierrez.

El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público.

Abelardo Zelaya.

C O N S T I T U C I O N D E 1.894

NOSOTROS, LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO HONDUREÑO, REUNIDOS PARA DAR LEY FUNDAMENTAL DE LA NACION, DECRETAMOS Y SANCIONAMOS LA SI GUIENTE.

C O N S T I T U C I O N P O L I T I C A

TITULO I

De la Nación.

Art. 1.- Honduras es un estado disgregado de la República de Centro-América. En consecuencia, reconoce como una necesidad primordial volver a la unión con las demás secciones de la República disuelta. A este efecto, queda facultado el Poder Legislativo para ratificar definitivamente los tratados que tiendan a realizarla con uno o más Estados de la antigua Federación.

Art. 2.- Honduras es Nación libre, soberana e independiente.

Art. 3.- La soberanía nacional reside esencialmente en la universalidad de los hondureños.

Art. 4.- Todo poder público emana del pueblo. Los funcionarios del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo.

TITULO II

De los hondureños.

Art. 6.- Los hondureños son naturales o naturalizados.

Art. 7.- Son naturales:

1. Los nacidos en Honduras de padres hondureños.

2. Los hijos nacidos en Honduras de extranjeros domiciliados, y los hijos de padre o madre hondureños nacidos en el extranjero, que opten -- por la nacionalidad hondureña.

Los tratados pueden modificar las disposiciones de éste último número, con tal que haya reciprocidad.

Art. 8.- Se consideran como naturales los hijos de las otras Repúblicas de Centro-América que manifiesten ante la primera autoridad política departamental, su deseo de ser hondureños.

Art. 9.- Son naturalizados:

1. Los hispano americanos que tengan un año de residencia en el país, y que manifiesten el deseo de naturalizarse en él ante la autoridad respectiva.

2. Los demás extranjeros que tengan dos años de residencia en el país, y que manifiesten el deseo de naturalizarse en él ante la autoridad referida.

3. Los que opten carta de naturaleza acordada por la autoridad que designe la ley.

TITULO III

De los extranjeros.

Art. 10.- La República de Honduras es esilo sagrado para toda persona que se refugie en su territorio:

Art. 11.- Los extranjeros están obligados, desde su llegada al territorio de la República, a respetar las autoridades y a observar las leyes.

Art. 12.- Los extranjeros gozan en Honduras de todos los derechos civiles de los hondureños.

Art. 13.- Pueden adquirir toda clase de bienes en el país; pero quedaran sujetos, en cuanto a estos bienes, a todas las cargas ordinarias, y a las extraordinarias de carácter general, a que estén obligados los hondureños.

Art. 14.- No podrán hacer reclamaciones, ni exigir indemnización alguna del Estado, sino en los casos y en la forma que pudieran hacerlo los hondureños.

Art. 15.- Los extranjeros no podrán ocurrir a la vía diplomática, sino en los casos de denegación de justicia. Para este efecto no se entiende por denegación de justicia que un fallo ejecutorio no sea favorable al reclamante. Si contraviniendo esta disposición, no terminaren amistosamente las reclamaciones, y se causaren perjuicios al país, perderán el derecho de habitar en él.

Art. 16.- La extradición sólo podrá otorgarse en virtud de ley o de tratados, po delitos comunes graves; nunca por delitos políticos, aunque por consecuencia de éstos resulte un delito común.

Art. 17.- Las leyes podrán establecer la forma y casos en que puede negarse al extranjero la entrada al territorio de la Nación, u ordenarse su expulsión por considerarlo pernicioso.

Art. 18.- Las leyes y tratados reglamentarán el uso de estas garantías, sin poder disminuirlas ni alterarlas.

Art. 19.- Las disposiciones de este Titulo no modifican los tratados existentes entre Honduras y otras naciones.

TITULO IV

De los Ciudadanos.

Art. 20.- Son ciudadanos todos los hondureños mayores de veintiún años, y los mayores de diez y ocho que sean casados o sepan leer y escribir.

Art. 21.- Son derechos del ciudadano: ejercer el sufragio, optar a los cargos públicos y tener y portar armas; todo con arreglo a la ley.

Art. 22.- Se suspenden los derechos del ciudadano:

1. Po auto de prisión o declaratoria de haber lugar a formación de causa.

2. Por vagancia legalmente declarada.

3. Por enagenación mental, judicialmente declarada.

4. Por sentencia de inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos, durante el término de la condena.

5. Por estar declarado deudor fraudulento, mientras no obtenga rehabilitación judicial.

6. Por sentencia que imponga pena más que correccional.

7. Por admitir empleo de naciones extranjeras, sin licencia de la autoridad respectiva. Las Repúblicas de Centro-América no se consideran como naciones extranjeras

Art. 23.- El voto activo es irrenunciable y obligatorio para los ciudadanos.

Art. 24.- El sufragio será directo y secreto. Las elecciones se verificarán en la forma prescrita por la ley, y ésta dará la representación correspondiente a las monorías.

Art. 25.- Sólo los ciudadanos mayores de veintiún años, que se hallen en el ejercicio de sus derechos, son elegibles.

TITULO V

De los derechos y garantías.

Art. 26.- La Constitución garantiza a todos los habitantes de Honduras, sean nacionales o extranjeros, la inviolabilidad de la vida humana, la seguridad individual, la libertad, la igualdad y la propiedad.

Inviolabilidad de la vida humana

Art. 27.- La pena de muerte queda absolutamente abolida en Honduras.

Seguridad Individual.

Art. 28.- La Constitución reconoce la garantía del Hábeas Corpus. En consecuencia, toda persona ilegalmente detenida, o cualquiera otra en su nombre, tiene derecho para recurrir al Tribunal, verbalmente o por escrito, pidiendo la exhibición de la persona.

Art. 29.- Toda persona tiene derecho para requerir amparo contra cualquier atentado o arbitrariedad de que sea víctima, y para hacer efectivo el ejercicio de todas las garantías que ésta Constitución establece, cuando sea indebidamente coartada en el goce de ellas, por leyes o actos de cualquiera autoridad, agente o funcionario público.

Art. 30.- La orden de arresto que no emane de autoridad competente, o que se haya dictado sin las formalidades legales, es atentoria.

Art. 31.- La detención para inquirir no podrá pasar de seis días.

Art. 32.- La incomunicación del detenido no podrá pasar de veinticuatro horas.

Art. 33.- No podrá proveerse auto de prisión, sin que preceda plena prueba de hallarse cometido un hecho punible con pena más que correccional, y sin que resulte, al menos por presunción grave, quien sea su autor

Art. 34.- Es permitida la prisión o arresto, por pena o apremio, en los casos y por el término que disponga la ley. El apremio no podrá exceder de treinta días.

Art. 35.- El delincuente infraganti puede ser aprehendido por cualquiera persona, para el efecto de entregarlo inmediatamente a la autoridad que tenga facultad de arrestar.

Art. 36.- Ninguno puede ser preso o detenido sino en los lugares que determine la ley.

Art. 37.- Aun con auto de prisión, ninguno puede ser llevado a la cárcel, ni detenido en ella, si presentare fianza suficiente, cuando por el delito no deba aplicarse pena que pase de tres años.

Art. 38.- Ninguno puede ser juzgado por comisiones especiales, ni - por otros Jueces que los designados por la ley.

Art. 39.- Se prohíbe la prisión, por deudas, excepto cuando hubiere dolo.

Art. 40.- El derecho de defensa es inviolable.

Art. 41.- Nadie puede ser obligado en materia criminal a declarar contra si mismo, ni contra su conyuge y parientes dentro de cuarto grado - de consanguinidad o segundo de afinidad.

Art. 42.- Ninguno puede ser inquietado ni perseguido por sus opiniones. Las acciones privadas que no alteren la moral o el orden público, o que no causen daño a tercero, estarán siempre fuera de la acción de la ley.

Art. 43.- Se prohíbe absolutamente la fustigación o aplicación de palos, y toda especie de tormentos. Se prohíben también las prisiones innecesarias y todo rigor indebido.

Art. 44.- La habitación de todo individuo es un asilo sagrado, que no podrá allanarse sino por la autoridad, en los casos siguientes:

1. Para extraer un criminal sorprendido infraganti.
2. Por cometerse delito en el interior de la habitación, por desorden escandaloso que exija pronto remedia, o por reclamación del interior de la casa.
3. En caso de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro análogo.
4. Para libertar a una persona secuestrada ilegalmente.
5. Para extraer objetos perseguidos en virtud de un proceso, precediendo semiplena prueba por lo menos de la existencia de dichos objetos, o para ejecutar una disposición judicial legalmente decretada.
6. Para aprender a un reo, a quien se haya proveído auto de prisión o detención, precediendo al menos semiplena prueba de que se oculta en la casa que debe allanarse.

En los dos últimos casos, no se podrá verificar el allanamiento sino con orden escrita de autoridad competente.

Art. 45.- Siempre que el domicilio que haya de allanarse no sea el del reo a quien se persigue, la autoridad o sus agentes solicitarán previamente el permiso del morador.

Art. 46.- El allanamiento del domicilio, en los casos en que se requiere orden escrita, no se puede verificar desde las siete de la noche hasta las seis de la mañana.

Art. 47.- Son inviolables la correspondencia epistolar y telegráfica los papeles privados y los libros de comercio. En ningún caso el Poder Ejecutivo ni sus agentes podrán sustraer, abrir ni detener la correspondencia epistolar o telegráfica. La sustraída de las estafetas o de cualquier otro lugar no hace fe contra ninguno.

Art. 48.- La correspondencia particular, papeles y libros privados, sólo podrán ocuparse en virtud de auto de Juez competente, en los asuntos criminales y civiles que la ley determine; debiendo registrarse a presencia del poseedor, o en su defecto de dos testigos, y devolverse los que no tengan relación con lo que se indaga.

Art. 49.- Se prohíbe dar leyes particulares proscriptivas, confiscatorias o que establezcan penas infamantes o perpetuas. La duración de las penas no podrá exceder de quince años.

Art. 50.- Las leyes no pueden tener efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley sea favorable al delincuente.

Art. 51.- La policía de seguridad sólo podrá ser confiada a las autoridades civiles.

Art. 52.- No se impondrá ninguna pena más que correccional, sin que preceda declaración del Jurado sobre la responsabilidad del presunto de lincuente.

Libertad

Art. 53.- El esclavo que pise el territorio hondureño queda libre. El tráfico de esclavos es un crimen.

Art. 54.- Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin más límite que el trazado por la moral y el orden público.

Art. 55.- No podrá someterse el estado civil de las personas a una creencia religiosa determinada.

Art. 56.- La emisión del pensamiento por la palabra hablada o escrita, es libre, y la ley no podrá restringirla. Tampoco podrá impedir la circulación de los impresos nacionales y extranjeros. Los delitos cometidos por medio de la prensa, serán previamente calificados por un jurado.

Art. 57.- Se garantiza la libre enseñanza. La que se costee con fondos públicos será laica, y la primaria será además gratuita, obligatoria y subvencionada por el Estado. La ley reglamentará la enseñanza sin restringir su libertad, ni la independencia de los profesores.

Art. 58.- Se garantiza la libertad de reunión sin armas, y la de asociación para cualquier objeto lícito. Se prohíbe el establecimiento de toda clase de asociaciones monásticas.

Art. 59.- Toda industria es libre. Sólo podrán estancarse en provecho de la Nación, el aguardiente, la pólvora, el salitre y el tabaco.

Art. 60.- Los monopolios, privilegios y concesiones sólo podrán establecerse, por tiempo limitado para fomentar la introducción o perfeccionamiento de nuevas industrias la colonización o inmigración, las instituciones de crédito y la apertura de vías de comunicación.

Art. 61.- Todo individuo es libre, para disponer de sus propiedades, conforme al derecho civil, por venta, donación, testamento o cualquiera otro título legal.

Art. 62.- Son prohibidas las vinculaciones, y toda institución en favor de establecimientos religiosos.

Art. 63.- Toda persona o reunión de personas, tiene derecho de dirigir sus peticiones a las autoridades legalmente establecidas, de que se resuelvan y se le hagan saber la resolución correspondiente.

Art. 64.- Todos tienen libertad para entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de la Nación, sin pasaporte.

Igualdad

Art. 65.- Ante la ley no hay fueros ni privilegios personales. Los ministros de las diversas sociedades religiosas no podrán ejercer cargos públicos.

Art. 66.- La proporcionalidad será la base de las contribuciones directas.

Propiedad.

Art. 67.- Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. La expropiación, por causa de necesidad y utilidad pública, debe ser calificada por la ley o por sentencia fundada en ley, y no se verificará sin previa indemnización. En caso de guerra no es indispensable que la indemnización sea previa.

Art. 68.- Todo autor o inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra o descubrimiento, por el tiempo que determine la ley.

Art. 69.- El derecho de reivindicar los bienes confiscados prescribe en cincuenta años.

Art. 70.- Sólo el Congreso impone contribuciones nacionales.

Art. 71.- Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley, o de sentencia fundada en ley.

Disposiciones Generales.

Art. 72.- La enumeración de derechos y garantías que hace esta Constitución, no excluye otros derechos y garantías no enumerados, pero que na cen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

Art. 73.- Las leyes que reglamenten el ejercicio de éstas garantías, serán ineficaces en cuanto las disminuyan, restrinjan o adulteren.

Art. 74.- En el caso de guerra exterior, podrá decretarse el estado de sitio de toda la República o parte de ella. El estado de sitio durará to do el tiempo que exijan las circunstancias que lo motiven; pero no podrá pasar de sesenta días sin nueva declaratoria y jamás podrá alterar las ga rantías consignadas en los artículos 27, 43 y 49.

También podrá decretarse el estado de sitio en los casos de con moción interior, circunscribiéndose al lugar o territorio donde exista la perturbación del orden; pudiendo ex tenderse si así lo exige la seguridad de la República.

Art. 75.- En casos de epidemia, podrán dictarse disposiciones sanitarias que contraríen o restrinjan las garantías contenidas en los artículos 44, 47 en lo relativo a detención de la correspondencia, 58, 64 y 71.

TITULO VI

De la forma de Gobierno.

Art. 76.- El Gobierno de Honduras es republicano, democrático y representativo. Se ejerce por tres Poderes independientes; Legislativo, Ejecu-

tivo y Judicial.

Art. 77.- Ninguno de los Poderes constituidos podrá ejecutar actos en que altere la forma de Gobierno establecida, o se menoscabe la integridad del territorio o la soberanía nacional.

TITULO VII

Del Poder Legislativo.

Art. 78.- El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso de Diputados, que se reunirá en la capital de la República el 1º. de enero de cada año, sin necesidad de convocatoria.

Art. 79.- Sus sesiones durarán sesenta días, prorrogables hasta por cuarenta más, cuando lo exijan asuntos de interés actual.

Art. 80.- El Congreso tendrá también sesiones extraordinarias cuando sea convocado por el Ejecutivo, y en ese caso sólo tratará de los asuntos expresados en el decreto de convocatoria.

Art. 81.- Instalado el Congreso en la capital podrá acordar trasladarse a otra población.

Art. 82.- El 21 de diciembre de cada año se reunirán los Diputados en juntas preparatorias, y con la concurrencia de cinco, por lo menos, organizarán el Directorio, a fin de dictar las providencias necesarias para la instalación del Congreso.

Art. 83.- Dos terceras partes de los miembros de que se compone el Congreso, serán suficientes para celebrar sesiones.

Art. 84.- Un número de cinco Diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso para cualquier lugar de la República cuando el Ejecutivo haya impedido sus sesiones o lo haya disuelto.

Art. 85.- Los Diputados serán electos por cuatro años, y pueden ser reelectos indefinidamente. Cada dos años se renovarán por mitad. La primera renovación se hará por sorteo, y las sucesivas por orden de antigüedad.

Art. 86.- No pueden ser electos Diputados:

1. Los Secretarios y Subsecretarios de Estado.
2. Los empleados del Poder Ejecutivo que ejerzan jurisdicción general o departamental.
3. Los Militares en servicio.
4. Los contratistas de obras o servicios públicos que se costeen con fondos del Estado, y los que por tales contratos tengan reclamaciones de interés propio.
5. Los deudores morosos a la Hacienda pública, y los que tengan pendientes cuentas por administración de fondos de la misma.
6. Los parientes del Presidente de la República, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Art. 87.- Los Diputados, desde el día de su elección, gozarán de las

siguientes prerrogativas:

1. Inmunidad personal para no ser acusados ni juzgados, si el Congreso no los declara previamente con lugar a formación de causa.
 2. No ser demandados civilmente desde treinta días antes, hasta -- quince días después de las sesiones ordinarias o extraordinarias del Congreso salvo el caso de reconvención.
 3. No ser llamados al servicio militar sin su consentimiento, desde la elección hasta terminar su período.
 4. No ser extrañados en la República ni confinados, durante el período para que han sido electos.
 5. No ser responsables por sus opiniones o iniciativas parlamentarias
- Art. 88.- Los Diputados no están obligados a aceptar empleos del Ejecutivo. Si voluntariamente aceptaren alguno de los comprendidos en el artículo 86, dejan por el mismo hecho de ser Diputados, y se repondrá - su elección.
- Art. 89.- La elección de Diputado al Congreso se hará bajo la base de un Diputado propietario y un suplente, por cada diez mil habitantes. Si hubiere fracciones, su representación será determinada por la ley.

TITULO VIII

De las atribuciones de Poder Legislativo.

- Art. 90.- Corresponde al Congreso las atribuciones siguientes:
1. Abrir y cerrar sus sesiones, calificar la elección de sus miembros con vista de las credenciales, y recibirles la promesa de ley.
 2. Llamar la atención a los respectivos suplentes, en caso de falta absoluta o de legitimo impedimento de los propietarios, y mandar reponer las vacantes que ocurran.
 3. Admitir las renunciaciones de sus miembros, por causas legales debidamente comprobadas.
 4. Formar su reglamento interior.
 5. Decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
 6. Crear y suprimir empleos, establecer pensiones, y decretar honores.
 7. Conceder indultos y amnistías, y conmutar las penas.
 8. Disponer todo lo conveniente a la seguridad y defensa de la República.
 9. Hacer el escrutinio de votos para Presidente y Vice-Presidente de la República y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y declarar electos a los ciudadanos que hubieren obtenido mayoría absoluta.
 - 10.-En caso de no haber mayoría absoluta, hacer la elección de Presidente, Vicepresidente y Magistrados, entre los ciudadanos que hubieren obtenido para cada cargo mayor número de sufragios populares.

11. Cuando concurren en un mismo individuo diversas elecciones, será determinada la preferencia en el orden siguiente: 1 Presidente: 2 Vicepresidente: 3 Diputado: 4 Magistrado. La elección de propietario prefiere a la suplente.

12. Recibir la promesa constitucional a los funcionarios que elija o declare electos, y admitirles o no sus renunciaciones.

13. Designar anualmente tres ciudadanos para ejercer por el orden - de su elección el Poder Ejecutivo, previstos por la Constitución.

14. Declarar con lugar a formación de causa de Presidente, al Vicepresidente, a los Diputados, Magistrados de la Corte Suprema, Secretarios de Estados y Agentes Diplomáticos, durante sus funciones.

15. Cambiar la residencia de los Supremos Poderes por causas graves.

16. Decretar premios y conceder privilegios temporales a los autores o inventores; y a los que hayan introducido o perfeccionado industrias - nuevas de utilidad general.

17. Decretar subsidios para promover nuevas industrias o mejorar las existentes.

18. Acordar subvenciones para objetos de utilidad pública.

19. Conceder o negar permiso a los hondureños para aceptar empleos - de otra nación.

20. Aprobar o improbar la conducta del Ejecutivo.

21. Aprobar, modificar o improbar las contrataciones celebradas por el Ejecutivo, en los casos del artículo 60, o cuando hayan de prolongar sus efectos al siguiente período presidencial.

22. Aprobar, modificar o improbar los tratados celebrados con las demás naciones.

23. Reglamentar el comercio marítimo y terrestre.

24. Aprobar o improbar las cuentas de los gastos públicos.

25. Fijar anualmente el Presupuesto de gastos, tomando por base los ingresos probables.

26.- Imponer contribuciones.

27. Reglamentar el pago de la deuda nacional.

28. Decretar la enajenación de los bienes nacionales., o su aplicación a usos públicos.

29. Decretar empréstitos.

30. Habilitar puertos, crear y suprimir aduanas.

31. Decretar el peso, ley y tipo de la moneda nacional.

32. Declarar la guerra y hacer la paz.

33. Fijar en cada reunión ordinaria el número de fuerzas del ejército permanente.

34. Permitir o negar el tránsito de tropas de otro país, por el territorio de la República.

35. Declarar en estado de sitio la República o parte de ella, conforme a la ley.

36. Conferir los grados de General de Brigada y de División, a iniciativa del Ejecutivo.

37. Conceder cartas de naturalización a los extranjeros.

38. Nombrar los miembros del Tribunal de Cuentas y el Fiscal General de Hacienda.

Art. 91.- El Poder Legislativo no podrá suplir o declarar el estado civil de las personas, ni conceder títulos académicos y literarios.

Art. 92.- Las facultades del Poder Legislativo son indelegables, excepto las que se refieren a dar posesión a los altos funcionarios.

TITULO IX

De la formación, sanción y promulgación de la ley.

Art. 93.- Tienen exclusivamente la iniciativa de ley, los Diputados, el Presidente de la República por medio de los Secretarios de Estado, y la Corte Suprema de Justicia en asuntos de su competencia.

Art. 94.- Ningún proyecto de ley será definitivamente votado, sino - después de tres deliberaciones efectuadas en distintos días, salvo el - caso de urgencia calificada por dos tercios de votos. Toda proposición que tenga por objeto declarar la urgencia de una ley, debe ir precedida de una exposición de los motivos en que aquella se funda.

Art. 95.- Todo proyecto de ley, una vez aprobado por el Congreso, se pasará al Ejecutivo, a más tardar dentro de tres días de haber sido votado, a fin de que le de su sanción y lo haga promulgar como ley.

Art. 96.- La promulgación de la ley, se hará con esta fórmula: Por - tanto: Ejecútese.

Art. 97.- Si el Poder Ejecutivo encontrare inconvenientes para sancionar el proyecto de ley, lo devolverá al Congreso dentro de diez días, - con esta fórmula: Vuelva al Congreso; exponiendo las razones en que funde su desacuerdo. Si en el término expresado no lo objetare, se tendrá por sancionado y lo promulgará como ley. Cuando el Ejecutivo devolviese el proyecto, el Congreso lo sujetará a una nueva deliberación; y si fue re ratificado con dos tercios de votos, lo pasará de nuevo al Ejecutivo con esta fórmula: Ratificado constitucionalmente; y aquello lo publicará sin tardanza.

Art. 98.- Cuando el Congreso vote un proyecto de ley al terminar sus sesiones, y el Ejecutivo crea inconveniente sancionarlo, está obligado a dar aviso inmediatamente al Congreso, para que permanezca reunido hasta diez días, contados desde la fecha en que aquel recibió el proyecto; y no haciéndolo, se tendrá la ley por sancionada.

Art. 99.- No es necesaria la sanción del Ejecutivo en los actos o - resoluciones siguientes:

1. En las elecciones que el Congreso haga o declare, o en las renunciaciones que admita o deseche.
2. En las declaraciones de haber lugar a formación de causa.
3. En la ley de Presupuesto.
4. En los decretos que se refieren a la conducta del Ejecutivo.
5. En los reglamentos que expida para su régimen interior.
6. En los acuerdos para trasladar su residencia a otro lugar temporalmente, y para suspender o prorrogar sus sesiones.
7. En los tratados o contratos que impruebe el Congreso.

Art. 100.- Siempre que un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenidas en los Códigos de la República, no podrá discutirse sin oír la opinión de aquel Tribunal. La Corte emitirá su informe en el término que el Congreso le señale. Esta disposición no comprende las leyes del orden político, económico y administrativo.

TITULO X

Del Poder Ejecutivo.

Art. 101.- El Poder Ejecutivo se ejerce por un ciudadano que se denomina Presidente de la República; en su defecto, por un Vicepresidente y a falta de este, por uno de los Designados, según su orden.

Art. 102.- El Presidente, el Vicepresidente y los Designados deben ser ciudadanos en ejercicio de sus derechos, mayores de veinticinco años y naturales de Honduras.

Art. 103.- El Presidente, el Vicepresidente de la República, serán electos popular y directamente, y su elección será declarada por el Congreso, como queda prescrito.

Art. 104.- El período presidencial será de cuatro años y comenzará el 1º de febrero.

El ciudadano que hubiere ejercido la Presidencia en propiedad, no podrá ser reelecto ni electo Vicepresidente para el siguiente período. Tampoco podrán ser electos Presidentes o Vicepresidentes sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Art. 105.- No podrá ser electo Presidente el ciudadano que hubiere ejercido la Presidencia constitucional en los últimos seis meses del período, ni sus parientes dentro de los grados expresados en el artículo anterior.

Art. 106.- En caso de falta absoluta del Presidente de la República, el Poder Ejecutivo quedará a cargo del Vicepresidente; y en defecto de éste, el Designado que corresponda por el orden de su elección. El designado concluirá el período presidencial, si la falta ocurriese dentro del último año; y si acaeciere antes de transcurrir los tres primeros años, deberá procederse, un mes después de la vacante, a nueva elección presidencial. En caso de impedimento temporal, ejercerá las funciones del Presidente el Vicepresidente, y los designados por su orden.

Art. 107.- Mientras recibe la Presidencia el llamado por la ley, ejercerá el Poder Ejecutivo el Consejo de Ministros; y éste llamará inmediatamente al nuevo funcionario para darle posesión, si no estuviese reuniendo el Congreso.

TITULO XI

De los deberes y atribuciones del Poder Ejecutivo.

Art. 108.- El Presidente de la República tiene la administración del país. Son sus atribuciones:

1. Ejercer el mando en Jefe de las fuerzas de tierra y mar.
2. Defender la independencia, el honor de la Nación y la integridad de su territorio.
3. Ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo al efecto los decretos y órdenes conducentes, sin alterar el espíritu de aquellas.
4. Nombrar los Secretarios y Subsecretarios de Estado, y los demás empleados del Departamento Ejecutivo, conforme a la ley.
5. Conservar la paz y seguridad interior de la República, y repeler todo ataque y agresión exterior.
6. Dar a los funcionarios del Poder Judicial los auxilios y fuerzas que necesiten para hacer efectivas sus providencias.
7. Remover a los empleados de su libre nombramiento.
8. Velar porque todos los empleados de la República cumplan los deberes que la ley les impone, sin intervenir en el ejercicio de sus funciones.
9. Conceder, en receso del Congreso, amnistías, cuando lo exija la conveniencia pública.
10. Conmutar las penas en receso del Congreso, de conformidad con la ley.
11. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, o proponerle la prorroga de las ordinarias.
12. Declarar la guerra y hacer la paz, y permitir o negar el tránsito de tropas de otro país, por el territorio de la República, cuando las circunstancias no permitan la reunión del Congreso para que lo resuelva.
13. Presentar por medio de los respectivos Secretarios de Estado, dentro de los primeros ocho días de la instalación del Congreso, un informe o memoria circunstanciada de todos los ramos de la administración.
14. Celebrar tratados y cualesquiera otras negociaciones diplomáticas, sometiénolos a la ratificación del Congreso en las próximas sesiones.
15. Dirigir las relaciones exteriores, nombrar los Agentes diplomáticos y consulares de la República, recibir los Ministros y admitir los Cónsules de las naciones extranjeras.
16. Hacer que se recauden las rentas del Estado, y reglamentar su inversión, con arreglo a la ley.
17. Decretar, en los casos de invasión o rebelión, si los recursos del Estado fueren insuficientes, un empréstito general proporcional, voluntario o forzoso, de cuya inversión dará cuenta al Congreso en sus próximas sesiones.
18. Conferir grados militares desde Subteniente hasta Coronel, y los de General de Brigada y de División en el campo de batalla, a los militares que tengan una conducta distinguida; sometiénolo los de General a la aprobación del Congreso en sus próximas sesiones.
19. Disponer de las fuerzas militares, organizarlas y distribuírlas de conformidad con la ley, según las necesidades de la República.
20. Conceder patentes de corso y cartas de represalia.
21. Declarar en estado de sitio la República o parte de ella, en receso del Congreso, de conformidad con la ley; debiendo dar cuenta al Congreso en su primera reunión, del uso que hubiere hecho de ésta facultad.

22. Conceder cartas de naturalización conforme a la ley.
 23. Conceder o negar permiso a los hondureños, en receso del Congreso, para admitir empleos de otra nación.
 24. Dirigir y fomentar la instrucción pública y difundir la enseñanza popular.
 25. Sancionar las leyes, usar del veto en los casos que corresponde, y promulgar sin demora aquellas disposiciones legislativas que no necesiten de la sanción del Ejecutivo.
 26. Mandar reponer las vacantes de Diputados y Magistrados de la Corte Suprema en receso del Congreso, de conformidad con la ley, a más tardar un mes después de haber ocurrido.
 27. Nombrar interinamente, en receso del Congreso, los miembros del Tribunal de Cuentas y el Fiscal de Hacienda.
 28. Publicar mensualmente el estado de ingresos y egresos de las rentas públicas.
 29. Vigilar sobre la exactitud legal de la moneda, y cuidar de la uniformidad de pesos y medidas.
 30. Ejercer la suprema dirección de la policía de seguridad.
- Art. 109.- Las providencias del Poder Ejecutivo que no se expidan por el Ministerio correspondiente, no deben cumplirse. El Presidente y los Ministros serán responsables solidariamente, por las disposiciones que dicten en contravención a la Constitución y las leyes.
- Art. 110.- Siempre que el Presidente de la República juzgue conveniente ponerse al frente del ejército, encargará del Poder Ejecutivo; al ciudadano que debe sustituirlo constitucionalmente; y quedará investido sólo del carácter de General en Jefe, y con las atribuciones de Comandante General.

TITULO XII

De los Secretarios de Estado.

- Art. 111.- Habrá de tres a seis Secretarios de Estado, y el Ejecutivo distribuirá entre ellos el despacho de los negocios.
- Art. 112.- Los Secretarios de Estado deben ser hondureños, naturales o naturalizados, y mayores de veintiún años.
- Art. 113.- No pueden ser Secretarios de Estado los contratistas de obras o servicios públicos por cuenta de la Nación; los que por tales contrataciones tengan reclamaciones de interés propio; los deudores de la Hacienda Pública, y los que tengan cuentas pendientes a favor de la misma, por administración de fondos.
- Art. 114.- Los Secretarios de Estado pueden asistir, sin voto, a las deliberaciones del Congreso; y deberán concurrir siempre que se les llame, y contestar las interpelaciones que les haga cualquier Diputado, referentes a asuntos de la Administración; exceptuando los de los ramos de Guerra y Relaciones Exteriores, cuando juzguen necesaria la reserva, a menos que el Congreso les ordene contestar.
- Art. 115.- Los Subsecretarios de Estado deben tener las mismas condiciones que los Secretarios y sustituirán a éstos por ministerio de la ley.

TITULO XIII

Del Poder Judicial.

Art. 116.- El Poder Judicial de la República se ejercerá por una Corte Suprema de Justicia, compuesta de cinco Magistrados, que residirán en la capital, y por los Tribunales y Jueces inferiores que la ley establece.

Art. 117.- Para ser Magistrado se requiere ser abogado y mayor de veinticinco años.

Art. 118.- Los Magistrados de la Corte Suprema serán electos popularmente, y podrán ser reelectos.

Art. 119.- Se elegirán igualmente tres Magistrados suplentes, que sustituirán a los propietarios y que deberán reunir las mismas condiciones - que éstos. Si la falta fuere absoluta, el Poder Ejecutivo convocará a elecciones para reponer al propietario; y la elección será declarada por la - Corte Suprema.

Art. 120.- La Corte Suprema de Justicia nombrará los Magistrados de las Cortes de Apelaciones, Los Jueces inferiores departamentales y seccionales, y los Oficiales del Ministerio Público, de conformidad con la ley. - Los Jueces de Paz serán electos popularmente en el respectivo término municipal.

Art. 121.- No podrán ser Magistrados ni Jueces en un mismo tribunal las personas ligadas por parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Si resultaren electos dos o más parientes en dichos grados, se preferirá al que hubiere obtenido mayor número de votos; y en caso de igualdad, al abogado más antiguo. La elección de los demás se repondrá.

Art. 122.- El Período de los Magistrados, Jueces departamentales o seccionales y Oficiales del Ministerio Público, será de cuatro años, y tomarán posesión el 1º. de febrero.

Art. 123.- La Corte Suprema admitirá o no las renunciaciones de los funcionarios de su nombramiento, y concederá licencia tanto a éstos como a sus propios miembros.

Los Jueces departamentales y seccionales admitirán o no las renunciaciones y concederán licencia a los Jueces de Paz.

Art. 124.- La ley reglamentará la organización y atribuciones de los - Tribunales de Justicia.

Art. 125.- La facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado pertenece a las Cortes y demás Tribunales de Justicia. A ellos corresponde la aplicación - de las leyes en casos concretos que legalmente se sometan a su conocimiento, y negarles cumplimiento cuando sean contrarias a la Constitución.

Art. 126.- Se establece el Jurado de calificación en donde hubiere Jueces departamentales o seccionales, para toda clase de delitos que deban - juzgarse en juicio escrito, La ley reglamentará esta institución.

Art. 127.- La Corte Suprema de Justicia, además de las atribuciones que la ley le confiere, ejercerá las siguientes:

1. Hacer su reglamento interior.
2. Conocer de los delitos oficiales y comunes de los altos funcionarios, cuando el Congreso los haya declarado con lugar a formación de causa.
3. Autorizar a los abogados y notarios, recibidos, dentro o fuera de la República, para el ejercicio de su profesión, salvo lo estipulado en los -

tratados, y suspenderlos con arreglo a la ley.

4. Declarar que ha lugar a formación de causa contra los miembros del Tribunal de Cuentas, Fiscal General de Hacienda, y contra los principales empleados nacionales y departamentales que la ley determine, por los delitos que cometan.

5. Conocer de las causas de presas, de extradición y demás que deban juzgarse con arreglo al Derecho Internacional.

Art. 128.- Podrá también establecerse directamente ante la Corte Suprema de Justicia, el recurso de inconstitucionalidad de una ley que se refiera a asuntos no ventilables ante los Tribunales, por toda persona que al serle aplicada en un caso concreto, sea perjudicada en sus legítimos derechos. La ley reglamentará el uso de este recurso.

Art. 129.- La administración de justicia es gratuita en la República.

Art. 130.- Los miembros de los Tribunales de Justicia durante su período, no podrán ejercer ningún otro empleo que lleve anexa jurisdicción.

Art. 131.- Los Tribunales de Justicia podrán requerir el auxilio de la fuerza armada para el cumplimiento de sus resoluciones, y si les fuere negado o no la hubiere disponible, podrán exigirlo de los ciudadanos. El funcionario que indebidamente se negare a dar auxilio, incurrirá en responsabilidad.

Art. 132.- Ninguna persona que tenga la libre administración de sus bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento.

Art. 133.- Un mismo Juez no puede serlo en diversas instancias en una misma causa.

Art. 134.- Ningún poder ni autoridad puede avocarse causas pendientes, ni abrir juicios fenecidos.

TITULO XIV

Del Presupuesto.

Art. 135.- El presupuesto será votado por el Congreso, en vista del proyecto que presente el Poder Ejecutivo.

Art. 136.- El proyecto de Presupuesto será presentado por el respectivo Ministro, dentro de los quince días subsiguientes a la instalación del Congreso.

Art. 137.- Todo gasto que se haga fuera de la ley es ilegal, y serán responsables solidariamente por la cantidad gastada, el Presidente, el Ministro respectivo, los miembros del Tribunal de Cuentas, y los empleados que en él intervinieren, si faltaren a sus respectivos deberes.

Art. 138.- El Presupuesto de gastos ordinarios de la Administración pública, no podrá exceder de los ingresos probables, calculados por el Congreso Nacional.

TITULO XV

Del Tesoro Público.

Art. 139.- Formar el Tesoro Público de la Nación:

1. Todos sus bienes, muebles o raíces.
2. Todos sus créditos activos.
3. El producto de sus derechos, impuestos y contribuciones.

Art. 140.- El Poder Ejecutivo no podrá celebrar contratos de importancia que comprometan al Tesoro Nacional, sin previa publicación de la propuesta en el periódico oficial, y licitación pública. Exceptuándose las que tengan por objeto proveer a las necesidades de la guerra y a las que por su naturaleza no puedan celebrarse si no es con persona determinada.

Art. 141.- Para fiscalizar la administración del Tesoro Nacional, habrá una Contaduría Mayor o Tribunal Superior de Cuentas, cuyas atribuciones serán: examinar, aprobar o improbar las cuentas de los que administran fondos públicos, y devolver al Ejecutivo las órdenes que no estuvieren arregladas a la ley para los efectos que ésta determine.

Art. 142.- Los miembros de este Tribunal, deberán ser mayores de veintiun años, y no ser acreedores ni deudores de la Hacienda Pública ni tener cuentas pendientes con ella. Su número, organización y atribuciones serán determinadas por la ley.

Art. 143.- Habrá un Fiscal General para que represente los intereses de la Hacienda Pública. Sus atribuciones se determinarán por la ley.

TITULO XVI

Del Ejército.

Art. 144.- La fuerza pública está instituída para asegurar los derechos de la Nación, el cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden público.

Art. 145.- Ningún cuerpo armado puede deliberar. La obediencia militar será arreglada a la ley y ordenanzas militares.

Art. 146.- El servicio militar es obligatorio. Todo hondureño de veintiuno a treinta años es soldado del ejército activo, y de treinta a cuarenta años, de la reserva. La ley hará la organización de las milicias, y establecerá las causas de la exención del servicio.

Los militares que tengan grado en el ejército, tienen derecho después de cumplir los cuarenta años, a renunciar sus despachos y quedar separados del servicio.

Art. 147.- Se establece el fuero de guerra para los delitos militares.

TITULO XVII

Del Gobierno Departamental.

Art. 148.- Para la administración pública se divide el territorio de la Nación, en departamentos, cuyo número y límites fijará la ley. En cada uno de ellos habrá los funcionarios que la misma ley determina.

Art. 149.- En el Gobierno departamental un mismo individuo no podrá ejercer a la vez funciones políticas, militares y de hacienda, sino es interinamente y por un término que no exceda de tres meses.

TITULO XVIII

Del Gobierno Municipal.

Art. 150.- El Municipio es autónomo y será representado por Municipalidades electas directamente por el pueblo.

La ley reglamentará la organización y atribuciones de las Municipalidades. El número de los municipales será proporcional a la población. Las atribuciones de las municipalidades será puramente económicas y administrativas.

Art. 151.- Las Municipalidades decretarán conforme a la ley, las contribuciones locales, y administrarán los fondos y bienes de la comunidad en provecho de la misma, rindiendo cuenta de su administración ante el Tribunal, que establezca la ley. Deberán publicar anualmente un informe deta-
llado de los ingresos y egresos de sus fondos.

Art. 152.- Las Municipalidades nombrarán libremente los empleados de dependencia y los agentes de policía que costeen de sus propios fondos.

Art. 153.- En el ejercicio de sus funciones privativas, serán absolutamente independientes de otros Poderes, sin contrariar en ningún caso las leyes generales del país; y serán responsables por los abusos que cometan, colectiva o individualmente, ante los Tribunales de Justicia.

Art. 154.- Las Municipalidades tienen la facultad de conmutar conforme la ley, penas impuestas por faltas.

Las Municipalidades también tienen derecho de emitir acuerdos sobre policía, Higiene, e Instrucción Pública, sin contrariar la Constitución y las leyes generales.

Art. 155.- Ningún miembro de las Municipalidades podrá ser obligado a aceptar otro nombramiento, ni ser llamado al servicio militar.

TITULO XIX

De las responsabilidades de los empleados públicos.

Art. 156.- Todo empleado o funcionario público, al tomar posesión de su cargo, hará la siguiente promesa: "Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes".

Art. 157.- Todo funcionario público es responsable por sus actos.

Art. 158.- El Presidente de la República, los Diputados, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Secretarios de Estado y los Ministros Diplomáticos, responderán ante el Congreso por los delitos que cometen en el ejercicio de sus funciones. El Congreso previos los trámites de determine su reglamento, declarará si ha lugar a la formación de causa contra ellos, para el efecto de poner al reo a disposición del Tribunal competente. Igual declaratoria será necesaria para proceder contra el Presidente de la República, los Secretarios de Estado y los Magistrados de la Corte Suprema, por delitos comunes.

Art. 159.- No obstante la aprobación que de el Congreso a la conducta del Ejecutivo, el Presidente y los Secretarios de Estado podrán ser acusados por delitos oficiales. Esta acción prescribirá hasta cinco años después de haber cesado en sus funciones, permaneciendo en el país.

Art. 160.- Los empleados públicos que violaren cualquiera de los derechos y garantías consignadas en ésta Constitución, serán responsables cívil y criminalmente. Pueden ser acusados sin necesidad de fianza de calumnia. No pueden obtener indulto ni conmuta en el período constitucional, - ni en el siguiente. Los delitos y penas en que incurran no prescribirán - sino después de dichos períodos.

Art. 161.- Cuando un funcionario público a quien se hubiere declarado con lugar a formación de causa, fuere absuelto volverá al ejercicio de - sus funciones.

TITULO XX

De las leyes Constitutivas.

Art. 162.- Son leyes Constitutivas: la de Imprenta, la de Estado de - Sitio, la de Amparo y la de Elecciones.

TITULO XXI

De las reformas a la Constitución y leyes Constitutivas.

Art. 163.- La reforma de ésta Constitución sólo podrá acordarse por - dos tercios de votos de los Representantes al Congreso, en sesiones ordi narias, determinando el artículo o artículos que necesiten reformarse, o si la reforma ha de ser absoluta.

Decretada la Reforma, el Congreso convocará una Asamblea Cons- tituyente para que lo verifique; debiéndolo insertarse en el decreto de con vocatoria, el que contenga las reformas propuestas.

Art. 164.- La Asamblea Constituyente será electa en la misma forma que el Congreso, y tendrá el mismo número de Representantes, con las mismas inmunidades.

Art. 165.- En ningún caso podrá decretarse la reforma de los artícu- los constitucionales que prohíben la reelección del Presidente o del que lo sustituye, y que establecen la duración del período presidencial, para que produzca sus efectos en el período en curso o en el siguiente.

Art. 166.- Las leyes constitutivas podrán ser reformadas del mismo mo do que la Constitución, o por dos Congresos ordinarios, con dos tercios de votos.

Art. 167.- La Asamblea Nacional Constituyente confía el deposito de esta Constitución y de los derechos que ella consagra, al patriotismo de todos los hondureños.

Art. Final.- La presente Constitución empezará a regir el 1º. de enero de 1.895; quedando derogada en esa fecha la emitida el 1º. de noviembre de 1.880.

Dada en Tegucigalpa, en el Salón de Sesiones, a 14 de octubre de 1.894, LXXIV de la Independencia.

CARLOS ALBERTO UCLES,
Diputado por el departamento de Valle, Presidente.

JOAQUIN SANSON,
Diputado por el departamento de Valle, Vice-Presidente.

SANTOS SOTO,
Diputado por el departamento de Valle.

CESAR LAGOS,
Diputado por el departamento de Yoro.

MARIANO VASQUEZ.
Diputado por el departamento de Copán.

TEODORO FUNES,
Diputado por el departamento de Intibucán.
GONZALO MEJIA NOLASCO,
Diputado por el Departamento de Santa Bárbara.

PEDRO H. BONILLA,
Diputado por el departamento de Comoyagua,

ROSENDO GOMEZ,
Diputado por el departamento de Santa Bárbara.

RAMON M. NOLASCO.
Diputado por el departamento de Intibucá.

NICOLAS OCHOA VELASQUEZ
Diputado por el departamento de La Paz.

JULIAN BAIRES,
Diputado por el departamento de Comayagua.

MIGUEL A. RUIZ.
Diputado por el departamento de la paz.

MARCOS FIGUEROA,
Diputado por el departamento de Gracias.

ANTONIO S. MADARIAGA,
Diputado por el departamento de Cortés.

J. TOMAS IDIAQUEZ,
Diputado por el departamento de El Paraíso.

HIPOLITO MONCADA,
Diputado por el departamento de Colón.

CONSTANTINO FIALTOS,
Diputado por el departamento de Colón.

J. SANTOS DEL VALLE.
Diputado por el departamento de Gracias.

DIONISIO GUTIERREZ,
Diputado por el departamento del Paraíso.

CARLOS BULNES,
Diputado por el departamento de Colón.

DOMINGO ZAMBRANO,
Diputado por el departamento de Choluteca.

JULIO CESAR DURON,
Diputado por el departamento de El Paraíso.

FRANCISCO LEIVA,
Diputado por el departamento de Cortés.

TERENCIO SIERRA,
Diputado por el departamento de Tegucigalpa.

JOSE MARIA OCHOA V.,
Diputado por el departamento de La Paz.

ANTONIO MIDENCE,
Diputado por el departamento de Choluteca.

R. MEZA,
Diputado por el departamento de Comayagua.

SAMUEL GOMEZ E.,
Diputado por el departamento de Yoro.

JESUS B. GUILLEN,
Diputado por el departamento de Choluteca.

PERFECTO ALDANA,
Diputado por el departamento de Copán

L. IRIAS,
Diputado por el departamento de Las Islas.

CARLOS TORRES,
Diputado por el departamento de Yoro.

MAXIMILIANO HERNANDEZ,
Diputado por el departamento de Gracias.

FRANCISCO ARGUETA VARGAS,
Diputado por el departamento de Olancho.

ANGEL UGARTE,
Diputado por el departamento de Tegucigalpa.

F. CALIX H.,
Diputado por el departamento de Olancho.

JUAN E. PAREDES,
Diputado por el departamento de Santa Bárbara, Secretario.

R. MALDONADO,
Diputado por el departamento de Intibucá, Secretario.

GREGORIO REYES,
Diputado por el departamento de Olancho, Vicesecretario.

MIGUEL O. BUSTILLO,
Diputado por el departamento de Tegucigalpa, Vicesecretario.

Palacio Nacional: Tegucigalpa, 14 de octubre de 1.894.

Cumplase.

POLICARPO BONILLA.

El Secretario de Estado en el Despacho de la Gobernación.

JUAN A. ARIAS.

El Secretario de Estado en el Despacho de la Guerra.

MANUEL BONILLA.

El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito público

MIGUEL R. DAVILA.

El Secretario de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores, Fomento, Justicia e Instrucción Pública.

CESAR BONILLA.

CONSTITUCION DE 1.906

DECRETO NUMERO 60

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

Decreta la siguiente

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.-

TITULO I

Artículo 1º.- Honduras es un Estado disgregado de la Federación de Centro-América. En consecuencia reconoce como su principal deber y su más ingente necesidad volver a la Unión con los demás Estados de la República disuelta. Para alcanzar este capital objeto no basta la presente Constitución, que puede ser reformada o abolida por el Congreso para ratificar los Pactos, Tratados y Convenciones que tiendan a dar o tengan por resultado la reconstrucción nacional de Centro-América.

Art. 2.- Honduras es Nación libre, soberana e independiente.

Art. 3.- La soberanía reside esencialmente en la Nación, y el ejercicio de ella en sus representantes.

Art. 4.- Todo Poder Público emana del pueblo. Los funcionarios del Poder del Estado son sus delegados, y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Por ella legislan, administran y juzgan y conforme a ella deben dar cuenta de sus funciones.

Art. 5.- Los límites de Honduras y su división territorial serán determinadas por la ley.

TITULO II

De los hondureños.

Art. 6.- Los hondureños son naturales o naturalizados.

Art. 7.- Son naturales:

1. Todas las personas que hayan nacido o nacieron en el territorio de la República.

La nacionalidad de los hijos de extranjeros nacidos en territorio de lo hondureño y la de los hijos de hondureños nacidos en territorio extranjero, será determinada por Tratados.

Cuando no haya Tratados, los hijos nacidos en Honduras de padres extranjeros domiciliados en el país, son hondureños; y

2. Se considerarán como hondureños naturales los hijos de las otras Repúblicas de Centro-América, por el hecho de hallarse en cualquier punto del territorio de Honduras, a no ser que ante la autoridad correspondiente manifiesten el propósito de conservar su nacionalidad.

Art. 8.- Son naturalizados:

1. Los hispano-américanos que tengan un año de residencia en el país y que manifiesten el deseo de naturalizarse en él ante la autoridad respectiva;

2. Los demás extranjeros que tengan dos años de residencia en el país y que manifiesten su deseo de naturalizarse en él ante la autoridad correspondiente; y

3. Los que obtengan carta de naturalización acordada por la autoridad que designe la ley.

TITULO III

De los Extranjeros.

Art. 9.- La República de Honduras es un asilo sagrado para toda persona que se refugie en su territorio.

Art. 10.- Los extranjeros están obligados desde su llegada al territorio de la República a respetar las autoridades y observar las leyes.

Art. 11.- Los extranjeros gozan en Honduras de todos los derechos civiles de los hondureños.

Art. 12.- Pueden adquirir toda clase de bienes en el país; pero quedarán sujetos, en cuanto a estos bienes, a todas las cargas ordinarias y a las extraordinarias de caracter general a que estén obligados los hondureños.

Art. 13.- Los extranjeros domiciliados en Honduras pueden desempeñar cargos municipales y de simple administración.

Art. 14.- No podrán hacer reclamaciones ni exigir indemnización alguna al Estado sino en los casos y en la forma que pudieran hacerlo los hondureños.

Art. 15.- Los extranjeros no podrán ocurrir a la vía diplomática sino en los casos de manifiesta denegación de justicia, retardo anormal o violación evidente de los principios del Derecho Internacional. Para este efecto no se entienden por denegación de justicia, que un fallo ejecutivo no sea favorable al reclamante. Si contraviniendo esta disposición no terminaren amistosamente las reclamaciones y se causare perjuicios al país perderán el derecho de habitar en él.

Art. 16.- La extradición sólo podrá otorgarse en virtud de ley o de Tratados por delitos comunes graves, nunca por delitos políticos, aunque por consecuencia de éstos resulte un delito común.

Art. 17.- Las leyes podrán establecer la forma y casos en que pueda negarse al extranjero la entrada al territorio de la Nación u ordenarse su expulsión por considerarlo pernicioso.

Art. 18.- Las leyes y Tratados reglamentarán el uso de éstas garantías sin poder disminuirlas ni alterarlas.

Art. 19.- Las disposiciones de éste título no modifican los tratados existentes entre Honduras y otras naciones.

TITULO IV

De los Ciudadanos.

Art. 20.- Son ciudadanos todos los hondureños mayores de veintiún años, y los mayores de diez y ocho que sean casados o sepan leer y escribir.

Art. 21.- Se suspenden los derechos del ciudadano:

1. Por auto de prisión o declaratoria de haber lugar a formación de causa;
2. Por vagancia legalmente declarada.
3. Por enegación mental judicialmente declarada; y
4. Por sentencia de inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el término de la condena.

Art. 22.- Pierden la cualidad de ciudadanos:

1. Los que admitan empleos de naciones extranjeras sin licencia de la autoridad respectiva. Las Repúblicas de Centro-América no se consideran como naciones extranjeras;
2. Los que naturalicen en países extranjeros. Ningún hondureño, aun cuando admita nacionalidad extranjera podrá eximirse de los deberes que le imponen la Constitución y las leyes, en tanto que tenga su domicilio en la República.

Art. 23.- El voto activo es inerrenunciable y obligatorio para los ciudadanos, El sufragio es público y directo. Las elecciones se practicarán en la forma que prescribe la ley.

Art. 24.- Sólo los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos pueden obtener voto pasivo con arreglo a la ley.

TITULO V

Derechos y Garantías.

Art. 25.- La Constitución garantiza a todos los habitantes de Honduras, sean nacionales o extranjeros, la inviolabilidad de la vida humana, la seguridad individual, la libertad, la igualdad y la propiedad.

Inviolabilidad de la vida humana.

Art. 26.- La pena de muerte queda abolida en Honduras, y mientras se establece el sistema penitenciario sólo podrá aplicarse, en los casos - que determine la ley, al parricida, al asesino, a los autores de delitos militares de carácter grave y a los de piratería.

Seguridad individual.

Art. 27.- La Constitución reconoce la garantía del Hábeas Corpus. En consecuencia toda persona ilegalmente detenida o cualquiera otra en su nombre, tiene derecho para recurrir al Tribunal, verbalmente o por escrito, pidiéndole la exhibición de la persona.

Art. 28.- Toda persona tiene derecho para pedir amparo contra cualquier atentado o arbitrariedad de que sea víctima para hacer efectivo - el ejercicio de todas las garantías que ésta Constitución establece, -- cuando sea indebidamente coartado en el goce de ellas, por leyes o actos de cualquiera autoridad, agente o funcionario público.

Art. 29.- La orden de arresto que no emane de autoridad competente, o que se haya dictado sin las formalidades legales, es atentatoria.

Art. 30.- La detención para inquirir no podrá pasar de seis días.

31.- La incomunicación del detenido no podrá pasar de tres días.

Art. 32.- No podrá proveerse auto de prisión sin que preceda plena prueba de haberse cometido un crimen o simple delito que merezca pena de privación de la libertad, y sin que resulte indicio racional de quien sea su autor.

Art. 33.- Es permitida la prisión o arresto por pena o apremio, en los casos y por el término que disponga la ley. El apremio no podrá exceder de treinta días.

Se prohíbe la prisión por deudas.

Art. 34.- El delincuente infraganti puede ser aprehendido por cualquier persona para el efecto de entregarlo inmediatamente a la autoridad que tenga facultad de arrestar.

Art. 35.- Ninguno puede ser preso o detenido sino en los lugares que determine la ley.

Se prohíbe absolutamente toda clase de tormentos, las prisiones innecesarias y todo rigor indebido. La fustigación o aplicación de palos es un crimen.

Art. 36.- Aun con auto de prisión ninguno puede ser llevado a la cárcel ni detenido en ella, si presentase fianza suficiente, cuando por el delito no deba aplicarse pena que pase de tres años.

Art. 37.- Ninguno puede ser juzgado por comisiones especiales, ni por otros jueces que los designados por la ley.

Art. 38.- El derecho de defensa es inviolable.

Art. 39.- Nadie puede ser obligado en materia criminal, a declarar contra él mismo ni contra su cónyuge y parientes del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

40.- Ninguno puede ser inquietado ni perseguido por sus opiniones. Las acciones privadas que no alteren la moral o el orden público, o que no causen daño a tercero, estarán siempre fuera de la acción de la ley.

Art. 41.- El domicilio es inviolable. No podrá allanarse sino en los casos y formas que la ley determine.

Art. 42.- Son inviolable la correspondencia epistolar y telegráfica, los papeles privados y los libros de comercio. En ningún caso el poder Ejecutivo, ni sus agentes podrán sustraer, abrir, ni detener la correspondencia epistolar o telegráfica. La sustraída de las estafetas o de cualquier otro lugar no hace fé contra ninguno.

La correspondencia particular, papeles y libros provados, solo podrá ocuparse en virtud de auto de Juez competente, en asuntos criminales y civiles que la ley determine.

Art. 43.- Se prohíbe dar leyes proscriptivas, confiscatorias o que establezcan penas infamantes o perpetuas. La duración de las penas no podrá exceder de doce años, y de veinte las acumuladas por varios delitos.

Art. 44.- Las leyes no pueden tener efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley sea favorable al delincuente.

Art. 45.- La policía de seguridad sólo podrá ser confiada a las autoridades civiles.

Libertad.

Art. 46.- Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin más límites que el trazado por la moral y el orden público.

Art. 47.- Los actos constitutivos del estado civil de las personas son de exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil, en los términos prevenidos por la ley.

Art. 48.- La emisión del pensamiento por la palabra hablada o escrita, es libre, salvo en los casos en que ataque a la moral, la honra, se provoque algún delito o se perturbe el orden social.

Art. 49.- Se garantiza la libre enseñanza.

Las que se costeen con fondos públicos será laica, y la primaria será además gratuita, obligatoria y subvencionada por el Estado. La ley reglamentará la enseñanza, sin restringir su libertad, ni la independencia de los profesores.

Art. 50.- Se garantiza la libertad de reunión sin armas, y la de asociación para cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República pueden hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos de la Nación. Se prohíbe el establecimiento de toda clase de asociaciones monásticas.

Art. 51.- Todo hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo útil y honesto, para aprovecharse de sus productos. No se impedirá el ejercicio de estos derechos, sino por sentencia judicial, cuando ataque los de tercero o por resolución gubernativa cuando ofenda los de sociedad.

Art. 52.- No habrá monopolios ni estancos. Sólo podrán estancarse en provecho del Estado el aguardiente y las sustancias fermentadas, la pólvora, dinamita y demás sustancias explosivas, el slitre y el tabaco. La acuñación de moneda, el correo, el telégrafo y el teléfono, corresponden al Estado.

Los monopolios, privilegios y concesiones en favor de los particulares, sólo podrán establecerse por tiempo limitado, para fomentar la introducción o perfeccionamiento de la industria, la colonización, la emigración, las instituciones de crédito y la apertura de vías de comunicación.

Art. 53.- Todo individuo es libre para disponer de sus propiedades conforme al Derecho Civil.

Art. 54.- Son prohibidas las vinculaciones y toda institución en favor de establecimientos religiosos.

Art. 55.- Toda persona o reunión de personas tienen derecho de dirigir sus peticiones a las autoridades legalmente establecidas, de que se resuelvan y se les haga saber la resolución correspondiente; pero en materia política sólo pueden ejercerlo los ciudadanos de la República.

Art. 56.- Todos tienen libertad para entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de la Nación, sin pasaporte.

Igualdad.

Art. 57.- Ante la ley no hay fueros ni privilegios personales, pero los Ministros de las diversas sociedades no podrán ejercer cargos públicos.

Art. 58.- La proporcionalidad será la base de las contribuciones directas.

Propiedad.

Art. 59.- Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de necesidad o utilidad pública debe ser calificada por la ley o por sentencia fundada en ley, no se verificará sin previa indemnización. En caso de guerra no es indispensable que la indemnización sea previa.

Art. 60.- Todo autor o inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra o descubrimiento, por el tiempo que determina la ley.

Art. 61.- El derecho de reivindicar los bienes confiscados prescribe en cincuenta años.

Art. 62.- Sólo el Congreso impone contribuciones nacionales.

Art. 63.- Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley.

TITULO VI

De la forma de Gobierno.

Art. 64.- El Gobierno de Honduras es República, democrático y representativo. Se ejerce por tres poderes independientes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Art. 65.- Ninguno de los Poderes constituidos podrá ejecutar actos en que se altere la forma de Gobierno establecido o se menoscabe la integridad del territorio o la soberanía nacional.

TITULO VII

Del Poder Legislativo.

Art. 66.- El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso de Diputados, que se reunirá de derecho en la capital, cada dos años, del primero al quince de enero, sin necesidad de convocatoria. Sus sesiones durarán hasta noventa días, pudiendo cerrarlas antes o prorrogarlas de acuerdo con el Ejecutivo. También las tendrá extraordinarias cuando sea convocado por éste, en cuyo caso sólo, se ocupará de los asuntos que motiven su reunión.

Art. 67.- Un número de Diputados que no baje de cinco tiene facultad para tomar las medidas convenientes a fin de hacer concurrir a los demás hasta obtener sus insfalación.

El Congreso puede instalarse y deliberar con las dos terceras partes de los Diputados electos y para que haya resolución, basta por regla general, la mayoría absoluta de votos.

Art. 68.- Los Diputados serán elegidos por cuatro años y puede ser reelectos indefinidamente. A los dos años del primer período se renovarán por mitad, por sorteo que hará el Congreso al cerrar sus sesiones.

La renovación sucesiva se hará por orden de antigüedad.

Art. 69.- Para ser Diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio - de sus derechos, haber cumplido veinticinco años de edad y ser natural o vecino del departamento que verifique la elección.

Art. 70.- No pueden ser Diputaodos:

1. Los Secretarios y Subsecretarios de Estado.
2. Los militares en servicio; y
3. Los Gobernadores, Políticos y Administradores de Rentas, por el - departamento o distrito electoral en que ejerzan sus funciones.

Art. 71.- El Diputado es inviolable. En ningún tiempo será responsable por las ideas que, de palabra o por escrito, exponga en el desempeño de su mandato.

Art. 72.- La elección de Diputado al Congreso, se hará sobre la base de un Diputado propietario y un suplente por cada diez mil habitantes. - Si hubiere fracciones su representación será determinada por la ley.

TITULO VIII

De las atribuciones del Poder Legislativo.

Art. 73.- Corresponde al Congreso las atribuciones siguientes:

1. Abrir y cerrar sus sesiones, calificar la elección de sus miembros con vista de las credenciales, y recibirles la promesa de ley;
2. Llamar a los respectivos suplentes, en caso de falta absoluta o - de legitimo impedimento de los propietarios, y mandar reponer las vacantes que ocurran.
3. Admitir la renuncia de sus miembros por causas legales debidamente comprobadas;
4. Formar su reglamento interior;
5. Decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes;
6. Crear y suprimir empleos, establecer pensiones y decretar honores;
7. Conceder amnistías cuando la conveniencia pública lo exija;
8. Indultar y conmutar las penas por motivo de justicia o equidad.
9. Elegir los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y admitirles o no sus renuncias;
10. Disponer todo lo conveniente a la seguridad y defensa de la Republica;
11. Hacer el escrutinio de votos para Presidente de la República, y declarar electo al ciudadano que hubiere obtenido mayoría absoluta.
- 12.-En caso de no haber mayoría absoluta, hacer la elección de Presidente entre los tres ciudadanos que hubieren obtenido mayor número de sufragios populares.
13. Recibir la promesa constitucional a los funcionarios que elija o declares electos, y admitirles o no sus renuncias;

14. Declarar con lugar a formación de causa al Presidente, a los Diputados, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Secretarios de Estado y Agentes Diplomáticos, durante sus funciones;
 15. Cambiar las residencias de los Supremos Poderes por causas graves;
 16. Decretar premios y conceder privilegios temporales a los autores o inventores y a los que hayan introducido o perfeccionado industrias de utilidad general;
 17. Acordar subvenciones para objetos de utilidad pública;
 18. Conceder o negar permiso a los hondureños para aceptar empleos de otra nación.
 19. Aprobar o improbar la conducta del Ejecutivo.
 20. Aprobar, modificar o improbar las contrataciones celebradas las condiciones otorgadas por el Poder Ejecutivo para los fines indicados en el artículo 140 o cuando hayan de prolongar sus efectos al siguiente período presidencial;
 21. Aprobar, modificar o improbar los tratados celebrados con las naciones;
 22. Reglamentar el comercio marítimo y terrestre;
 23. Aprobar o improbar las cuentas de los gastos públicos.
 24. Fijar bienalmente el presupuesto de Gastos, tomando por base los ingresos probables;
 25. Imponer o suprimir contribuciones.
 26. Contraer deudas nacionales, reglar el pago de las existencias y decretar empréstitos;
 27. Decretar la enagenación de los bienes nacionales o su aplicación a usos públicos.
 28. Habilitar puertos, crear y suprimir aduanas;
 29. Decretar el peso, ley y tipo de la moneda nacional;
 30. Decretar la guerra y hacer la paz;
 31. Fijar en cada reunión ordinaria el número de fuerzas del Ejército permanente;
 32. Permitir o negar el tránsito de tropas de otro país por el territorio de la República;
 33. Declarar en estado de sitio la República, o parte de ella, conforme a la ley;
 34. Conferir los grados de General de Brigada y de División, a iniciativa del Ejecutivo;
 35. Conceder cartas de naturalización a los extranjeros;
 36. Nombrar los miembros del Tribunal de Cuentas; y
 37. Llamar a los Secretarios de Estado para pedirles los informes que estime convenientes, sobre asuntos de la competencia del Congreso, y con indicación del objeto del llamamiento.
- Art. 74.- El Poder Legislativo no podrá suplir o declarar el estado civil de las personas, ni conceder títulos académicos y literarios.
- Art. 75.- El Congreso podrá delegar en el Ejecutivo la facultad de legislar, determinándole las leyes que perentoriamente exija la necesidad o la conveniencia pública.

TITULO IX

De la formación, sanción y promulgación de la ley.

Art. 76.- Tienen exclusivamente la iniciativa de la ley, los Diputa

dos, el Presidente de la República, por medio de los Secretarios de Estado, y la Corte Suprema de Justicia en asuntos de sus competencias.

Art. 77.- Ningún proyecto de ley será definitivamente votado, sino después de tres deliberaciones efectuadas en distintos días, salvo el caso de urgencia calificada por los dos tercios de votos. Toda proposición que tenga por objeto declarar la urgencia de una ley, debe ir precedida de una exposición de los motivos en que aquella se funde.

Art. 78.- Todo proyecto de ley, una vez aprobada por el Congreso, se pasará al Ejecutivo, a más tardar dentro de tres días de haber sido votado, a fin de que se le dé su sanción y lo haga promulgar como ley.

Art. 79.- La promulgación de la ley se hará con esta fórmula: "Por tanto: ejecútese".

Art. 80.- Si el poder ejecutivo encontrare inconveniente para sancionar el proyecto de ley, lo devolverá al Congreso exponiendo las razones en que funde su desacuerdo. Si en el término expresado no lo objetare, se tendrá por sancionado y se promulgará como ley. Cuando el Ejecutivo devolviera el proyecto, el Congreso lo sujetará a una nueva deliberación; y si fuera ratificado con dos tercios de votos, lo pasará de nuevo al Ejecutivo, con esta fórmula: "Ratificado constitucionalmente", y aquel lo publicará sin tardanza.

Art. 81.- Cuando el Congreso vote un proyecto de ley al terminar sus sesiones, y el Ejecutivo crea conveniente sancionarle, está obligado a dar aviso inmediatamente al Congreso, para que permanezca reunido hasta diez días, contados desde la fecha en que aquel recibió el proyecto; y no haciéndolo, se tendrá la ley por sancionada.

Art. 82.- No es necesaria la sanción del Ejecutivo en los actos o resoluciones siguientes:

1. En las elecciones que el Congreso haga o declare, y en las renunciaciones que admita a desecho.
2. En las declaratorias de haber lugar a formación de causa;
3. En la ley de Presupuesto;
4. En los decretos que se refieren a la conducta del Ejecutivo;
5. En los reglamentos que expida para su régimen interior;
6. En los acuerdos para trasladar su residencia a otro lugar temporalmente y para suspender sus sesiones; y
7. En los Tratados, contratos y concesiones que impruebe el Congreso.

Art. 83.- Siempre que un proyecto de ley que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema, tenga por objeto reformar o derogar las disposiciones contenidas en los Códigos de la República u otra cualquiera relativa a la Administración de Justicia, no podrá discutirse sin oír la opinión de aquel Tribunal.

La Corte emitirá su informe en el término que el Congreso le señale.

TITULO X

Del Poder Ejecutivo.

Art. 84.- El Poder Ejecutivo se ejerce por un ciudadano que se denomina Presidente de la República.

Art. 85.- El Presidente de la República debe ser hondureño natural, ciudadano en ejercicio de sus derechos y mayor de treinta años.

Art. 86.- El Presidente de la República será electo popular y directamente y su elección será declarada o hecha por el Congreso, como que da prescrito.

Art. 87.- El período Presidencial será de cuatro años y comenzará - el primero de febrero. El ciudadano que hubiere ejercido la Presiden-- cia en propiedad, no podrá ser reelecto para el siguiente período.

Art. 88.- En caso de impedimento temporal del Presidente de la Repú blica, éste depositará el Poder en el Consejo de Secretarios de Estado o en cualquiera de ellos a su elección.

Si la falta es absoluta, el Poder Ejecutivo quedará a cargo del Consejo de Secretarios de Estado, quien inmediatamente convocará a elecciones de Presidente, las que se practicarán a más tardar un mes des pués de ocurrida la vacante. También convocará el Congreso a sesiones extraordinarias para que se reúna un mes después de practicadas las -- elecciones, el Presidente electo tomará posesión de su cargo dentro de un mes de declarada o verificada su elección; en este caso el período Presidencial comenzará desde la fecha en que tome posesión.

Art. 89.- El Presidente de la República tiene para el despacho de los negocios, de tres a seis Secretarios, a quienes designará sus res- pectivos Departamentos.

Art. 90.- Para ser Secretario de Estado se requiere ser mayor de - veinte y cinco años, hondureños natural y ciudadano en ejercicio de - sus derechos.

Art. 91.- El Secretario de Estado refrenda los actos del Presiden- te de la República, sin cuyo requisito carecen de validez; no ejerce autoridad por sí sólo, y es responsable solidariamente de los actos - que legalice y de los que acuerde con sus colegas, salvo el caso que proteste.

Art. 92.- Los Secretarios de Estado presentarán al Congreso, en - los primeros quince días de sus sesiones ordinarias, informes detalla dos y comprobados sobre los actos del Ejecutivo, en cada uno de los - respectivos ramos de la Administración Pública. Estos informes servirán de base al Congreso para que juzgue la conducta del Ejecutivo en todo aquello que por la Constitución le corresponda aprobar o improbar.

Art. 93.- Los Secretarios de Estado tienen el deber de dar los in- formes que les pida el Congreso en el caso del número 37 del artículo 73, exceptuando los de los Ramos de Guerra y de Relaciones Exteriores, cuando el Presidente de la República, juzgue necesaria la reserva, pue den también concurrir a las sesiones del Congreso y tomar parte en las deliberaciones, sin voto.

Art. 94.- Ningún Secretario de Estado puede ser candidato a la Pre sidencia de la República, mientras esté en ejercicio de sus funciones.

Art. 95.- Los Subsecretarios de Estado deben tener las mismas con- diciones que los Secretarios.

Cuando por falta de Ministro sea autorizado el Subsecretario del Despacho para refrendar las disposiciones del Poder Ejecutivo, se rá responsable de los actos que refrende de la misma manera que los Ministros.

TITULO XI

De las atribuciones del Poder Ejecutivo.

Art. 96.- El Presidente de la República tiene la Administración General del país.

Son sus atribuciones:

1. Ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo al efecto los decretos y órdenes conducentes sin alterar el espíritu de aquéllas;
2. Admitir en receso del Congreso, las renunciaciones de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y en este caso nombrar interinamente los Magistrados que deben sustituirlos. Igual nombramiento hará en los casos de muerte o impedimento absoluto de los individuos de la Corte Suprema de Justicia;
3. Nombrar los empleados del Departamento Ejecutivo conforme a la ley;
4. Velar porque todos los empleados de la República cumplan los deberes que la ley les impone, respetando la independencia de sus funciones.
5. Remover a los empleados de su libre nombramiento;
6. Conceder amnistías, indultos y conmutar las penas como el Congreso en receso de éste;
7. Conceder a sus empleados licencias, jubilaciones, retiros y goces de montepíos, conforme a las leyes;
8. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés general lo requiera;
9. Dar cuenta en un Mensaje al Congreso, al abrir sus sesiones extraordinarias del estado general de la Administración Pública y del uso que haya hecho de las facultades que le hubieren delegado;
10. Dar a los funcionarios del Poder Judicial los auxilios y fuerzas que necesiten para hacer efectivas sus providencias;
11. Conceder carta de naturalización en receso del Congreso;
12. Conceder o negar permiso a los hondureños, en receso del Congreso, para admitir empleos de otra nación;
13. Sancionar las leyes, usar del voto en los casos que corresponde promulgar sin demora aquellas disposiciones legislativas que no necesitan sanción del Ejecutivo;
14. Mandar reponer las vacantes de los Diputados, en receso del Congreso, de conformidad con la ley; y a más tardar un mes después de haber ocurrido.
15. Nombrar en receso del Congreso, los miembros del Tribunal de Cuentas;
16. Vigilar sobre la exactitud legal de la moneda y cuidar de la uniformidad de pesos y medidas;
17. Ejercer la suprema dirección de la policía de seguridad;
18. Conferir grados militares desde Subteniente hasta Coronel, y los de General de Brigada y de División en el campo de batalla, a los militares que tengan una conducta distinguida;
19. Disponer de las fuerzas militares organizadas y distribuir las de conformidad con la ley, según las necesidades de la República;

20. Declarar la guerra y hacer la paz, permitir o negar el tránsito de tropas de otro país por el territorio de la República, cuando las - circunstancias no permitan la reunión del Congreso para que lo resuelva;

21. Declarar en estado de sitio la República o parte de ella en receso del Congreso, de conformidad con la ley, debiendo dar cuenta al Con-greso en primera reunión, del uso que hubiere hecho de esta facultad.

22. Defender la independencia, el honor de la Nación y la integridad de su territorio.

23. Conservar la paz y seguridad interior de la República y repeler todo ataque o agresión exterior;

24. Conceder patentes de corso y cartas de represalia.

25. Celebrar tratados y cualesquiera otras negociaciones diplomáticas sometiénolos a la ratificación del Congreso en las próximas sesiones;

26. Dirigir las relaciones exteriores, nombrar los Agentes Diplomáticos y Consulares de la República, recibir los Ministros y admitir a los Cónsules de las naciones extranjeras;

27. Hacer que se recauden las rentas del Estado y reglamentar su in-versión, con arreglo a la ley;

28. Decretar en los casos de invasión o rebelión, si los recursos del Estado fueren insuficientes, un empréstito general y proporcional, voluntario y forzoso, de cuya inversión dará cuenta al Congreso en sus próxi-mas sesiones;

29. Publicar mensualmente el estado de ingresos y egresos de las ren-tas públicas; y

Dar reglamentos para nacionalizar y matricular buques.

Art. 97.- El Presidente es Comandante General y General en Jefe de - las fuerzas de mar y tierra de la República.

Art. 98.- Siempre que un Presidente de la República juzgue conveniente ponerse al frente del Ejército, encargará del Poder Ejecutivo a los Se-cretarios de Estado quien debe sustituirlo constitucionalmente; y queda rá investido sólo del carácter de General en Jefe y con las atribuciones de Comandante General.

TITULO XII

Del Poder Judicial.

Art. 99.- El Poder Judicial de la República se ejercerá por una Corte Suprema de Justicia, que residirá en la capital, y por los Tribunales y - Jueces inferiores que la ley establezca.

Art. 100.- La Corte Suprema de Justicia se compondrá de cinco Magistrados electos por el Congreso, debiendo ser ciudadanos en ejercicio de sus derechos. Abogados de la República y mayores de treinta años.

Se elegirán igualmente por el Congreso tres Magistrados suplentes que sustituirán a los propietarios, que deberán reunir las mismas - condiciones que éstos.

Art. 101.- La Corte Suprema de Justicia nombrará a los Magistrados de las Cortes de Apelaciones, los Jueces inferiores departamentales y seccionales, y los oficiales del Ministerio público de conformidad con la ley. Los Jueces de paz serán electos popularmente en el término municipal respectivo.

Art. 102.- No podrán ser Magistrados ni Jueces en un mismo Tribunal las personas ligadas por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Si fueren nombrados dos o más parientes en dicho grado, se preferirá al que hubiere sido nombrado primero, y en caso de igualdad al abogado más antiguo.

Art. 103.- El período de los Magistrados, Jueces departamentales o seccionales y oficiales del Ministerio público, será de seis años prorrogables de derecho hasta el nombramiento de sus sucesores, y tomarán posesión el primero de Febrero.

Art. 104.- La Corte Suprema admitirá o no las renunciaciones de los funcionarios de su nombramiento y concederá licencia tanto a éstos como a sus propios miembros.

Los Jueces departamentales o seccionales admitirán o no las renunciaciones y concederán licencia a los Jueces de Paz:

Art. 105.- La ley reglamentará la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia.

Art. 106.- La facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado pertenece a las Cortes y demás Tribunales de Justicia. A ellos corresponde la aplicación de las leyes en los casos concretos que legalmente se sometan a su conocimiento y negarles cumplimiento cuando sean contrarios a la Constitución.

Art. 107.- La Corte Suprema de Justicia, además de las atribuciones que la ley le confiere, ejercerá las siguientes:

1. Hacer su Reglamento interior;
2. Conocer de los delitos oficiales y comunes de los Altos Funcionarios, cuando el Congreso los haya declarado con lugar a formación de Causa;
3. Autorizar a los Abogados y Notarios recibidos dentro y fuera de la República el ejercicio de su profesión, salvo lo estipulado en los Tratados, y suspenderles con arreglo a la ley;
4. Declarar que ha lugar a formación de causa contra los miembros del Tribunal de Cuentas, Fiscal General de la República y contra los principales empleados nacionales, departamentales y seccionales que la ley determine, por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones;
5. Conocer de las causas de presas de extradición y demás que deban juzgarse con arreglo al Derecho Internacional; y
6. Suspender disciplinariamente y destituir a los funcionarios de su nombramiento por mala conducta o por faltas graves en el ejercicio de sus funciones, mediante información sumaria y audiencia del funcionario a quien se le trate de suspender o destituir.

Art. 108.- La administración de Justicia es gratuita en la República.

Art. 109.- Los miembros de los Tribunales de Justicia durante su período, no podrán ejercer ningún otro empleo que lleve anexa jurisdicción.

Art. 110.- Un mismo Juez no puede serlo en diversas instancias de una misma causa.

Art. 111.- Los Tribunales de Justicia no podrán requerir el auxilio de la fuerza armada para el cumplimiento de sus resoluciones.

Art. 112.- Ningún poder o autoridad puede avocarse causas pendientes, ni abrir juicios fenecidos.

TITULO XIII

Del Ejército.

Art. 113.- La fuerza pública está instituída para asegurar los derechos de la Nación, el cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden público.

Art. 114.- El servicio militar es obligatorio. Todo hondureño de veinticinco a treinta años es soldado del Ejército activo, y de treinta a cuarenta años, de la reserva. La ley hará la organización de las milicias.

Los militares que tengan grado en el ejército, tienen derecho, después de cumplir cuarenta años, a renunciar sus despachos y quedar separados del servicio.

Art. 115.- Se establece el fuero de guerra para los delitos militares.

Art. 116.- La fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar.

TITULO XIV

Del Presupuesto.

Art. 117.- El presupuesto será votado por el Congreso, en vista del proyecto que presente el Ejecutivo.

Art. 118.- El Proyecto del Presupuesto será presentado por el respectivo Secretario de Estado, dentro de los quince días subsiguientes a la instalación del Congreso.

Art. 119.- Todo gasto que se haga fuera del Presupuesto es ilegal, y serán responsables solidariamente por la cantidad gastada, el Presidente, Secretario de Estado respectivo, los miembros del Tribunal de Cuentas y los empleados que en él intervinieren, si faltaren a sus deberes.

Art. 120.- El Presupuesto de gastos ordinario de la Administración Pública no podrá exceder de los ingresos probables.

TITULO XV

Del Tesoro Público.

Art. 121.- Forman el Tesoro Público de la Nación:

1. Todos sus bienes, muebles y raíces;
2. Todos sus créditos activos;
3. El Producto de los derechos, impuestos y contribuciones nacionales.

Art. 122.- El Poder Ejecutivo no podrá celebrar contratas ni otorgar concesiones de importancia que comprometan el Tesoro Nacional, sin previa publicación de la propuesta en el periódico oficial, y licitación pública. Exceptuándose los que tengan por objeto proveer a las necesidades de la guerra, y que por su naturaleza no puedan celebrarse si no es con una persona determinada.

Art. 123.- Para fiscalizar la administración del Tesoro Nacional, habrá un Tribunal Superior de Cuentas, cuyas atribuciones principales serán: examinar, aprobar o improbar las cuentas de los que administren fondos públicos, y dar curso o devolver al Ejecutivo las órdenes sobre derogaciones, conforme a la ley.

Art. 124.- Los miembros de este Tribunal deberán ser mayores de veinticinco años y no ser acreedores ni deudores de la Hacienda Pública, ni tener cuentas pendientes con ella. Su número, organización y atribuciones, serán determinadas por la ley.

Art. 125.- Habrá un Fiscal General, de nombramiento del Ejecutivo, que represente los intereses de la Hacienda Pública. Sus atribuciones se determinarán por la ley.

TITULO XVI

Del Gobierno Departamental.

Art. 126.- Para la Administración Pública se divide el territorio de la Nación en departamentos, cuyo número y límites fijará la ley. En cada uno de ellos habrá los funcionarios que la misma ley determine.

Art. 127.- En el Gobierno Departamental, un mismo individuo no podrá ejercer a la vez funciones políticas, militares y de la hacienda, sino es interinamente, y por un término que no exceda de tres meses.

Art. 128.- El régimen político, judicial y militar y económico del territorio de la Mosquita, podrá ser distinto del adoptado para los demás pueblos de la República.

Art. 129.- El municipio es autónomo y será representado por Municipalidades electas por el pueblo.

La ley reglamentará la organización y atribuciones de las Municipalidades. El número de los municipales será proporcional a la población. Las atribuciones de las Municipalidades serán puramente económicas y administrativas.

Art. 130.- Las Municipalidades decretarán, conforme a la ley, las contribuciones locales, y administrarán los fondos y bienes de la comunidad en provecho de la misma, rindiendo cuentas de su administración ante el Tribunal que establezca la ley. Deberán publicar anualmente un informe detallado de los ingresos y egresos de sus fondos.

Art. 131.- Las Municipalidades nombrarán libremente los empleados - de su dependencia, y los agentes de Policía que costeen con sus propios fondos.

Art. 132.- En el ejercicio de sus funciones privativas, serán independientes de los otros Poderes, sin contrariar en ningún caso las leyes generales del país; serán responsables de los abusos que cometan, colectiva o individualmente, ante las autoridades que designe la ley.

Art. 133.- Las Municipalidades tienen la facultad de conmutar, conforme a la ley, penas por faltas.

Las Municipalidades también tienen derecho de emitir acuerdos sobre Policía, Higiene e Instrucción Pública, sin contrariar la Constitución y las leyes generales.

Art. 134.- Ningún miembro de las Municipalidades podrá ser obligado a aceptar otro nombramiento, ni ser llamado al servicio militar.

TITULO XVII

Disposiciones Complementarias.

Art. 135.- La enumeración de derechos y garantías que hace esta Constitución, no excluye otros derechos y garantías no enumerados pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

Art. 136.- Las leyes reglan el uso de estas garantías, pero no podrá darle ley que, con ocasión de reglamentar u organizar su ejercicio las disminuya, restrinja o altere.

Art. 137.- Toda persona o reunión de personas que asuma el título de representación del pueblo, se arrogue sus derechos o represente en su nombre, comete sedición.

Art. 138.- Toda autoridad usurpada es ilegal y la usurpación constituye un crimen. Sus actos son nulos. Toda decisión acordada por intimación directa o indirecta de un cuerpo armado o de una reunión del pueblo es nula de derecho y no tendrá efectos legales.

Art. 139.- El Presidente de la República, los Diputados, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Secretarios de Estado y los Ministros Diplomáticos, responderán ante el Congreso por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones. El Congreso, previos los trámites que determine su reglamento, declarará si ha lugar a formación de causa contra ellos, para el efecto de ponerlos a disposición del Tribunal competente. Igual declaratoria para proceder contra el Presidente de la República, los Secretarios de Estado y los Magistrados de la Corte Suprema por delitos comunes.

Art. 140.- El Estado proveerá todo lo conveniente al bienestar y adelanto del país, fomentando la Instrucción Pública en sus diversos ramos, el progreso de la agricultura, de la industria y del comercio, de la inmigración, de la colonización de tierras desiertas y de la construcción de caminos y ferrocarriles, del planteamiento de nuevas industrias y del establecimiento de instituciones de crédito, de la importación de capitales extranjeros y de la explotación y canalización de los ríos y lagos,

por medio de leyes protectoras de estos fines y de concesiones temporales, de privilegios y de recompensas de estímulo.

Art. 141.- La navegación de los ríos es libre para todas las banderas.

Art. 142.- Ni los hondureños ni los extranjeros podrán, en ningún caso, reclamar al Estado indemnización alguna por daños o perjuicios que a sus personas o bienes causaren las facciones.

Art. 143.- En casos de invasión, perturbación interior de la paz pública o cualesquiera otros que pongan a la sociedad en peligro o conflicto podrá decretarse el Estado de Sitio en toda la República o parte de ella. El Estado de Sitio durará todo el tiempo que exijan las circunstancias que lo motivan, pero no podrá pasar de sesenta días sin nueva declaratoria, ni alterar las garantías consignadas en los artículos 26, 36, 35, 43 y 44.

En caso de epidemia, podrán dictarse disposiciones sanitarias que contraríen o restrinjan las garantías contenidas en los artículos 41, 42 en lo relativo a la detención de correspondencia, 50, 56, y 63.

Art. 144.- La presente Constitución puede reformarse. La necesidad de reforma será declarada por el Congreso ordinario; pero sólo se efectuará la reforma por una Asamblea Nacional Constituyente, convocada al efecto. Es ineficaz la proposición de reforma que no esté apoyada por dos terceras partes del Congreso. Se exceptúan de estos requisitos el caso previsto en el artículo 1º.

Art. 145.- Todo empleado o funcionario de la República, al tomar posesión de su destino, hará la promesa siguiente: "Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes".

Disposición transitoria.

Art. 146.- Por ésta vez y para el primer período constitucional, la presente Asamblea hará la elección de Presidente de la República y de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; debiéndoles la promesa de ley.

Art. final.- La presente Constitución comenzará a regir cuando se decreten las leyes secundarias en armonía con ellas; quedando derogada desde esta fecha la del 14 de Octubre de 1.894.

Dada en Tegucigalpa en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, a los dos días de septiembre de mil novecientos cuatro.

F. DAVILA,
Presidente.

Diputado por el Departamento de Santa Bárbara.

JOSE MANUEL ZELAYA,
Vicepresidente.

Diputado por el Departamento de Olancho.

RAFAEL ALVARADO,
Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.

FRANCISCO ESCOBAR,
Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.

MANUEL VILLAR,
Diputado por el departamento de Tegucigalpa.

JERONIMO J. REINA,
Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.

SANTOS SOTO,
Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.

BASILIO CHACON,
Diputado por el Departamento de Copán.

R. DIAZ,
Diputado por el Departamento de Copán.

T. MIRALDA,
Diputado por el Departamento de Olancho.

JUAN ORDÓÑEZ,
Diputado por el Departamento de Olancho.

JOSE M. SANTOS,
Diputado por el Departamento de Gracias.

FAUSTINO MOLINA,
Diputado por el Departamento de Choluteca.

ALFONSO GUILLEN,
Diputado por el Departamento de Choluteca.

JORGE MOLINA,
Diputado por el Departamento de Choluteca,

VICENTE IDIAQUEZ,
Diputado por el Departamento de El Paraiso.

EMILIO MAZIER,
Diputado por el Departamento de El Paraiso.

JOSE INDALECIO LOPEZ,
Diputado por el Departamento de El Paraiso.

SERVANDO MUÑOS,
Diputado por el Departamento de Santa Bárbara.

AUGUSTO C. CEOLLO,
Diputado por el Departamento de La Paz.

PEDRO A. MEDAL,
Diputado por el Departamento de Comayagua.

J. DANIEL BOQUIN,
Diputado por el Departamento de Comayagua.

R. ALVARADO GUERRERO,
Diputado por el Departamento de Intibucá.

ANTONIO LOPEZ,
Diputado por el Departamento de Intibucá.

JUAN RAMON GIRON E.
Diputado por el Departamento de Valle.

ALEJANDRO SOSA,
Diputado por el Departamento de Valle.

ANGEL V. MATUTE,
Diputado por el Departamento de Yoro.

PILAR MARTINEZ,
Diputado por el Departamento de Yoro.

F. GERARDO DILLET,
Diputado por el Departamento de Colón.

BENJAMIN S. ESCOBAR,
Diputado por el Departamento de Colón.

FRANCISCO LEIVA,
Diputado por el Departamento de Cortés.

F. GUERRERO,
Diputado por el Departamento de Atlántida,

F. A. MATUTE,
Diputado por el Departamento de la Bahía.

J. BUSTILLO RIVERA,
Secretario.
Diputado por el Departamento de la Paz.

AUDATO MUÑOZ
Secretario.
Diputado por el Departamento de Gracias.

Palacio Legislativo:- Tegucigalpa, 15 de septiembre de 1904

Por tanto: Ejecútese.

MANUEL BONILLA

El Secretario de Estado en el Despacho de la Gobernación.
Salomon Ordoñez.

El Secretario de Estado en el Despacho de la Guerra, y encargado
de los de Instrucción Pública y Justicia.

Sotelo Barahona.

El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público,
encargado del de Fomento y Obras Públicas.

Saturnino Medal.

El Secreatrio de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores
Iano Vasquez

CONSTITUCION DE 1.924

TITULO I

De la Nación.

Art. 1.- Honduras es un Estado disgregado de la República de Centro-América. En consecuencia, reconoce como una necesidad primordial volver a la unión con las demás secciones de la República disuelta. A este efecto, queda facultado el Poder Legislativo para ratificar definitivamente los tratados que tiendan a realizarla con uno o más Estados de la Antigua Federación.

Art. 2.- Honduras es nación libre, soberana e independiente. Honduras considera como un atentado a su soberanía la intromisión de un Gobierno extraño en sus asuntos interiores.

Art. 3.- La soberanía nacional reside esencialmente en la universalidad de los hondureños.

Art. 4.- Todo Poder Público emana del pueblo. Los funcionarios del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo.

Art. 5.- Los límites de Honduras y su división territorial serán determinados por la ley.

TITULO II

De los hondureños.

Art. 6.- Los hondureños son naturales o naturalizados.

Art. 7.- Son naturales:

1. Los nacidos en Honduras de padres hondureños.

2. Los hijos nacidos en Honduras de extranjeros domiciliados y los hijos de padre o madre hondureños, nacidos en el extranjero, que opten por la nacionalidad hondureña. La declaratoria de opción deberá hacerse dentro de un año, después de llegar a la mayoría de edad. Los tratados pueden modificar las disposiciones de este número.

3. Los nacidos en Honduras de extranjeros también nacidos en el país. Ningún hondureño nacido en el territorio de la Nación, podrá tener otra nacionalidad distinta de la de Honduras, mientras resida en el país.

Art. 8.- Se consideran como naturales los hijos de las otras Repúblicas de Centro-América domiciliados en el país, salvo que ante la primera autoridad política departamental, manifiesten el deseo de conservar su nacionalidad. También se consideran como hondureños naturales los centroamericanos de origen que manifiesten su deseo de ser hondureños.

Art. 9.- Son naturalizados:

1. Los españoles latinoamericanos que tengan un año de residencia en el país y que manifiesten su deseo de naturalizarse en él ante la autoridad respectiva.

2. Los demás extranjeros que tengan dos años de residencia en el país y que manifiesten su deseo de naturalizarse en él ante la autoridad referida.

3. Los que obtengan carta de naturaleza acordada por la autoridad que designe la ley.

TITULO III

De los extranjeros.

Art. 10.- La República de Honduras es asilo sagrado para toda persona que se refugie en su territorio, salvo las excepciones determinadas por la ley.

Art. 11.- Los extranjeros están obligados, desde su llegada al territorio de la República, a respetar las autoridades y a observar las leyes.

Art. 12.- Los extranjeros gozan en Honduras de todos los derechos civiles de los hondureños.

Art. 13.- Pueden adquirir toda clase de bienes en el país conforme a la ley; y quedarán sujetos a todas las cargas ordinarias y a las extraordinarias de carácter general, a que estén obligados los hondureños.

Art. 14.- No podrán hacer reclamaciones, ni exigir indemnización alguna del Estado, sino en los casos y en la forma en que pudieran hacerlos los hondureños.

Tampoco podrán desempeñar cargos o empleos con jurisdicción general, seccional o departamental, inclusive los de los distintos cultos establecidos en el país, bajo pena de expulsión; pero si podrán desempeñar empleos en la enseñanza y en las artes, y en cualquier otro ramo que no sea de los comprendidos en la prohibición.

Art. 15.- Los extranjeros no podrán ocurrir a la vía diplomática, - sino en los casos de denegación de justicia. Para este efecto, no se entiende por denegación de justicia que un fallo ejecutoriado no sea favorable al reclamante. Si contraviniendo esta disposición, no terminaren amistosamente las reclamaciones, y se causaren perjuicios al país, perderán el derecho de habitar en él.

Art. 16.- La extradición solo podrá otorgarse en virtud de ley o de tratados, por delitos comunes graves; nunca por delitos políticos, aunque por consecuencia de éstos resulte un delito común.

Art. 17.- Las leyes establecerán la forma y casos en que puede negarse al extranjero la entrada al territorio de la Nación, u ordenarse su expulsión por considerarlo pernicioso.

Art. 18.- Las leyes y tratados reglamentarán el uso de estas garantías, sin poder alterarlas.

Art. 19.- Las disposiciones de este título no modifican los tratados existentes entre Honduras y otras naciones.

TITULO IV

De los ciudadanos.

Art. 20.- Son ciudadanos todos los hondureños mayores de veintiún años, y los mayores de diez y ocho años que sean casados o sepan leer y escribir.

Art. 21.- Son derechos del ciudadano: ejercer el sufragio, tener y portar armas y optar a los cargos públicos, todo con arreglo a la ley.

Los militares que se hallen prestando servicio activo en el Ejército o en la Policía, no podrán ser electores, pero si elegibles en los casos no prohibidos por la ley.

Art. 22.- La calidad de ciudadanos se suspende, se pierde y se restablece con arreglo a las siguientes prescripciones:

Se Suspende:

1. Por auto de prisión formal, o declaratoria de reo, o de haber lugar a formación de causa.
2. Por sentencia firme que prive de los derechos políticos.
3. Por interdicción judicial, por estar declarado deudor fraudulento o por tener conducta notoriamente viciosa.
4. Por vagancia legalmente declarada.

Se Pierde:

1. Por aceptar, sin el permiso debido, condecoraciones de países extranjeros, salvo que éstas distinciones tengan por objeto premiar obras filantrópicas, científicas, literarias o artísticas.
2. Por desempeñar, sin la licencia debida, empleo de nación extranjera, del ramo militar o de carácter político.

Se Restablece el Ejercicio de la Ciudadanía:

1. Por sobreseimiento.
2. Por sentencia absolutaria.
3. Por cumplimiento de la pena.
4. Por amnistía.
5. Por rehabilitación de conformidad con la ley.
6. Por renunciar ante la autoridad competente la nacionalidad extranjera adquirida.

Art. 23.- El voto activo es irrenunciable y obligatoria para los ciudadanos.

Art. 24.- El sufragio será directo y secreto. Las elecciones se verificarán en la forma prescrita por la ley, y ésta dará la representación correspondiente a las minorías.

Art. 25.- Sólo los ciudadanos mayores de veintiún años, que se hallen en el ejercicio de sus derechos, son elegibles.

TITULO V

De los derechos y garantías.

Art. 26.- La Constitución garantiza a todos los habitantes de Honduras, sean nacionales o extranjeros, la inviolabilidad de la vida humana, la seguridad individual, la libertad, la igualdad ante la ley y la propiedad.

Inviolabilidad de la vida Humana.

Art. 27.- La pena de muerte queda absolutamente abolida en Honduras.

Seguridad Individual.

Art. 28.- La Constitución reconoce la garantía del Hábeas Corpus.- En consecuencia, toda persona ilegalmente detenida, o cualquiera otra en su nombre, tiene derecho para recurrir al Tribunal, verbalmente o por escrito, pidiendo la exhibición de la persona.

Art. 29.- Toda persona tiene derecho para requerir amparo contra cualquier atentado o arbitrariedad de que sea víctima, y para hacer efectivo el ejercicio de todas las garantías que ésta Constitución establece, cuando sea indebidamente coartada en el goce de ellas, por leyes o actos de cualquier autoridad, agente o funcionario público.

Art. 30.- La orden de arresto que no emane de autoridad competente o que se haya dictado sin las formalidades legales, es atentatoria.

Art. 31.- La detención para inquirir no podrá pasar de seis días.

Art. 32.- La incomunicación de un detenido no podrá pasar de cuarenta y ocho horas.

Art. 33.- No podrá proveerse auto de prisión sin que preceda plena prueba de haberse cometido un crimen o simple delito que merezca pena de privación de la libertad, y sin que resulte indicio racional de quien sea su autor. En la misma forma se hará la declaratoria de reo. Se prohíbe la prisión por deudas, excepto cuando hubiere dolo.

Art. 34.- Es permitida la prisión o arresto, por pena o apremio, en los casos y por el término que disponga la ley. El apremio no podrá exceder de treinta días.

Art. 35.- El delincuente infraganti puede ser aprehendido por cualquier persona, para el efecto de entregarlo a la autoridad que tenga facultad de arrestar.

Art. 36.- Ninguno puede ser preso o detenido, sino en los lugares que determine la ley. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para maltratar, y si sólo para asegurar a los procesados y penados.

Art. 37.- Aun con auto de prisión, ninguno puede ser llevado a la cárcel, ni detenido en ella, si presentare fianza suficiente, cuando por el delito no deba aplicarse pena que pase de tres años.

Art. 38.- Ninguno puede ser juzgado por comisiones especiales, ni por otros jueces que los designados por la ley.

Art. 39.- El derecho de defensa es inviolable.

t. 40.- Nadie puede ser obligado, en materia criminal a declarar contra mismo ni contra su cónyuge y parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Art. 41.- Ninguno puede ser inquietado ni perseguido por sus opiniones. Las acciones privadas que no alteren el orden público, o que no causen daño a tercero, estarán fuera siempre de la acción de la ley.

Art. 42.- Se prohíbe absolutamente la fustigación, la aplicación de palizas y toda especie de tormentos. Se prohíben también las prisiones innecesarias y todo rigor indebido.

Art. 43.- La habitación de todo individuo en un asilo sagrado, que no podrá allanarse sino por la autoridad, en los casos siguientes.

1. Para extraer un criminal sorprendido infraganti.
2. Por cometerse delito en el interior de la habitación, por desorden -candaloso que exija pronto remedio, o por reclamación del interior de la casa.
3. En caso de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro caso análogo; y para verificar cualquier visita o inspección de carácter puramente sanitario con arreglo a la ley.
4. Para libertar una persona secuestrada ilegalmente.
5. Para extraer objetos perseguidos en virtud de un proceso, precediendo semiplena prueba por lo menos, de la existencia de dichos objetos; y para ejecutar una disposición judicial legalmente decretada.
6. Para aprehender a un reo a quien se haya proveído auto de prisión o detención, precediendo al menos semiplena prueba de que se oculta en la casa que debe allanarse.

En los dos últimos casos no se podrá verificar el allanamiento -o con orden escrita de autoridad competente.

Art. 44.- Siempre que el domicilio que haya de allanarse no sea el del ofendido o a quien se persigue, la autoridad o sus agentes solicitarán previamente el permiso del morador.

Art. 45.- El allanamiento del domicilio no se puede verificar desde las once de la noche hasta las seis de la mañana, sin permiso del jefe de la casa.

Art. 46.- Son inviolables la correspondencia epistolar y telegráfica, -los papeles privados y los libros de comercio. En ningún caso el Poder Ejecutivo ni sus agentes podrán sustraer, abrir ni detener la correspondencia epistolar o telegráfica. La sustraída de las estafetas o de cualquier otro modo no hace fe contra ninguno.

Art. 47.- La correspondencia particular, papeles y libros privados, sólo podrán ocuparse en virtud de auto de juez competente, en los asuntos criminales y civiles que la ley determine, debiendo registrarse a presencia del acusador, o en su defecto, de dos testigos, y devolverse los que no tengan relación con lo que se indaga.

Art. 48.- Se prohíbe dar leyes o disposiciones proscriptivas, confiscatorias o que ordenen penas infamantes o perpetuas. La duración de las penas -no podrá exceder de doce años, y de veinte las acumuladas por varios delitos.

Art. 49.- Las leyes no pueden tener efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando sean favorables al delincuente o procesado.

Art. 50.- La policía de seguridad sólo podrá ser confiada a las autoridades civiles.

Art. 51.- Las leyes fijarán el orden y las formas del proceso en materia civil y criminal.

Libertad.

Art. 52.- El esclavo que pise el territorio hondureño queda libre. El tráfico de esclavos es un crimen.

Art. 53.- Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones que no contraríen las leyes del país. La Iglesia está separada del Estado, el cual no podrá dar subvenciones, en caso alguno, para ningún culto.

Art. 54.- No podrá someterse el estado civil de las personas a -- una creencia religiosa determinada.

Art. 55.- Toda persona podrá libremente y sin sujeción a censura previa, emitir su pensamiento, de palabra o por escrito, por medio de la imprenta o por cualquier otro procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades que impongan las leyes cuando por alguno de aquellos medios se atente contra la honra de las personas, el orden social o la tranquilidad pública.

En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta y sus accesorios como instrumento de delito.

Art. 56.- Se garantiza la libre enseñanza. La que se costee con fondos públicos, será laica, y la primaria y la de Artes y Oficios será, además gratuita, obligatoria y subvenida por el Estado. La ley reglamentará la enseñanza sin restringir su libertad, ni la independencia de los profesores.

Art. 57.- Se garantiza la libertad de reunión sin armas, y la de asociación para cualquier objeto lícito. Se prohíbe el establecimiento de toda clase de asociaciones monásticas y conventuales. La entrada al país de los individuos pertenecientes a estas asociaciones será reglamentada por la ley.

Art. 58.- Toda industria es libre. Sólo podrán estancarse en provecho de la Nación, el aguardiente, la pólvora y el salitre. La ley reglamentará el trabajo, el ejercicio de las profesiones y el de las industrias.

Art. 59.- Los monopolios y privilegios sólo podrán establecerse -- hasta por diez años improrrogables; las concesiones para fomentar la instrucción, introducción o perfeccionamiento de nuevas industrias, -- la colonización o inmigración, la apertura de vías de comunicación y las instituciones de crédito, hasta por noventa años, también improrrogables. En ningún caso se dispensará el pago de los impuestos municipales.

Vencido el término de una concesión relativa a empresas de colonización o inmigración, o a las de apertura de vías de comunicación, pasará la empresa, con todos sus accesorios, al dominio del Estado, sin retribución alguna.

Art. 60.- Toda persona puede adquirir propiedades y disponer de ellas por cualquier título, con las limitaciones establecidas por la ley.

Art. 61.- Son prohibidas las vinculaciones, y toda institución en favor de establecimientos religiosos.

Art. 62.- Toda persona o reunión de personas, tiene derecho de dirigir sus peticiones a las autoridades legalmente establecidas, de que se resuelvan y se les haga saber la resolución correspondiente.

No se exigirá el uso de papel sellado en las peticiones -- que se dirijan al Poder Legislativo, o al Poder Ejecutivo y a las autoridades administrativas, excepto en las concesiones y contrataciones del Estado, y los títulos que se emitan como consecuencia de las mismas.

Art. 63.- Toda persona podrá entrar en el territorio de la República, salir de él, viajar dentro de sus límites y mudar de residencia sin necesidad de pasaporte u otro requisito semejante, salvo lo que se disponga en las leyes sobre la inmigración, salubridad y las facultades atribuidas a las autoridades en caso de responsabilidad civil o criminal.

Igualdad.

Art. 64.- Todos los hondureños son iguales ante la ley. La República no reconoce fueros ni privilegios personales.

En la provisión de los cargos públicos se atenderá a la idoneidad del nombrado y a las demás condiciones que señale la ley para servirlos.

Se prohíbe la acumulación de cargos o empleos remunerados, -- aun con carácter de interinos, excepto los de enseñanza.

Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos.

Art. 65.- La proporcionalidad será la base de las contribuciones directas.

Propiedad.

Art. 66.- Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. La expropiación de inmuebles por causas de necesidad y utilidad pública, debe ser calificada por la ley o por sentencia fundada en ley, y no se verificará sin previa indemnización.

Art. 67.- El derecho de propiedad no perjudicará el derecho eminente del Estado dentro de sus límites territoriales, ni podrá sobreponerse a los derechos que tengan las instituciones nacionales o las obras de carácter nacional.

Art. 68.- Todo autor o inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra o descubrimiento, por el tiempo que determine la ley.

Art. 69.- El derecho de reivindicar los bienes confiscados prescribe en cincuenta años.

Art. 70.- Sólo el Congreso impone contribuciones nacionales.

Art. 71.- Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley, o de sentencia fundada en ley.

Art. 72.- Ninguna persona que tenga la libre administración de sus bienes puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento.

Suspensión de garantías Constitucionales.

Art. 73.- Las garantías establecidas en los Artículos 28, 30, 31, 37, 43, 45, 46, 47, 57, parte primera, 63, 66, y 71, podrán suspenderse en toda la República o parte de ella, temporalmente y cuando lo exija la seguridad del Estado en caso de invasión del territorio, de grave perturbación del orden que amenace la paz pública, de epidemia o de otra calamidad. El territorio en que fuesen suspendidas las garantías expresadas, se regirá, durante la suspensión, por la ley de Estado de Sitio; pero ni en dicha ley ni en otra alguna podrá disponerse la suspensión de más garantías que las ya mencionadas.

Tampoco podrán hacerse durante la suspensión, declaraciones de nuevos delitos, ni imponerse otras penas que las establecidas en las leyes vigentes al decretarse la suspensión.

Art. 74.- Queda prohibido al Poder Ejecutivo, aun en el período de suspensión de garantías, el extrañamiento o la deportación de los ciudadanos, confinarlos a más de ciento veinte kilómetros de su domicilio, detenerlos más de diez días sin hacer entrega de ellos a la autoridad judicial, o repetir la detención durante el tiempo de la misma suspensión de garantías. Los detenidos no podrán serlo sino en lugares distintos de los establecimientos destinados a los reponsables de delitos comunes.

Art. 75.- La suspensión de garantías de que se trata en el artículo 73, sólo podrá decretarse por el Congreso, o cuando éste no estuviere reunido, por el Poder Ejecutivo. Pero éste no podrá decretar la suspensión más de una vez durante el período comprendido entre dos legislaturas, ni por tiempo indefinido, ni mayor de treinta días, sin convocar al Congreso en el mismo decreto de suspensión. En todo caso debe darle cuenta de los actos ejecutados durante la suspensión de garantías.

Si el Ejecutivo violare cualquiera de las disposiciones comprendidas en esta sección, el perjudicado o cualquier persona en su nombre podrá recurrir de amparo.

Disposiciones Generales.

Art. 76.- La enumeración de garantías y derechos que hace esta Constitución, no excluye los no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de Gobierno.

Art. 77.- Las leyes que reglamenten el ejercicio de tales garantías y derechos, serán ineficaces en cuanto los disminuyan, restrinjan o adulteren.

TITULO VI

De la forma de Gobierno.

Art. 78.- El Gobierno de Honduras es republicano, democrático y representativo. Se ejerce por tres poderes independientes: Legislativo - Ejecutivo y Judicial.

Art. 79.- Ninguno de los poderes constituidos podrá ejecutar actos en que se altere la forma de gobierno establecida, o se menoscabe la integridad del territorio o la soberanía nacional.

TITULO VII

Del Poder Legislativo.

Art. 80.- El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso de Diputados, que se reunirá en la Capital de la República el 1º de enero de cada año, sin necesidad de convocatoria.

Los Diputados deben ser ciudadanos en ejercicio de sus derechos, mayores de veinticinco años y naturales o vecinos del departamento en que se haga la elección. No es preciso que ésta última condición concorra en los Diputados por las minorías.

Art. 81.- Las sesiones del Congreso durarán sesenta días prorrogables hasta por cuarenta más, cuando lo exijan asuntos de interés actual.

Art. 82.- El Congreso tendrá también sesiones extraordinarias cuando sea convocado por el Ejecutivo, o por la Comisión Permanente, y en casos sólo tratará de los asuntos expresados en el decreto de convocatoria.

Art. 83.- Instalado el Congreso en la Capital, podrá acordar trasladarse a otra población.

Art. 84.- El 21 de Diciembre de cada año se reunirán los Diputados en juntas preparatorias, y con la concurrencia de cinco, por lo menos, se organizará el Directorio, a fin de dictar las providencias necesarias para la instalación del Congreso.

Art. 85.- Dos terceras partes de los miembros de que se compone el Congreso serán suficientes para celebrar sesiones.

Art. 86.- Un número de cinco Diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso para cualquier lugar de la República, cuando el Ejecutivo haya impedido su instalación o sus sesiones, o lo haya disuelto.

Art. 87.- Los Diputados serán electos por cuatro años y pueden ser reelectos indefinidamente. Cada dos años se renovarán por mitad. La primera renovación se hará por sorteo, y las sucesivas, por orden de antigüedad. En caso de falta absoluta de un Diputado, terminará su período el suplente llamado por el Congreso.

Art. 88.- No pueden ser Diputados:

1. Los Secretarios y Subsecretarios de Estado.
2. Los empleados del Poder Ejecutivo, excepto los de enseñanza.
3. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, los Jueces de Letras y Registradores de la Propiedad y los Oficiales del Ministerio Público.
4. Los Miembros del Tribunal Superior de Cuentas y el Fiscal General de Hacienda.
5. Los Agentes Diplomáticos y Consulares.
6. Los militares en servicio.
7. Los contratistas de obras o servicios públicos que se costeen con fondos nacionales, y los que por tales contratas tengan reclamaciones contra el Estado.
8. Los deudores morosos a la Hacienda Pública y los que tengan cuentas pendientes por administración de fondos de la misma.
9. Los parientes del Presidente de la República y de los Secretarios de Estado, dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad.

Las prohibiciones a que se refieren los números 3º y 4º de este artículo corresponden solamente a los funcionarios electos o nombrados con carácter de propietarios; pero los respectivos suplentes o interinos en ejercicio de funciones, no podrán ejercer, al mismo tiempo, las de Diputado.

Art. 89.- Los Diputados, desde el día de su elección gozarán de las siguientes prerrogativas:

1. Inmunidad personal para no ser detenidos, acusados ni juzgados, aun en Estado de Sitio, si el Congreso o la Comisión Permanente no los declara previamente con lugar a formación de causa.
2. No ser demandados civilmente desde quince días antes, hasta quince días después de las sesiones ordinarias o extraordinarias del Congreso, salvo el caso de reconvección.
3. No ser llamados al servicio militar sin su consentimiento, desde el día de su elección hasta terminar su período.
4. No ser extrañados de la República, ni confinados durante el período para que han sido electos.
5. No ser responsables, en ningún tiempo, por sus opiniones o iniciativas parlamentarias.

Art. 90.- Los Diputados no están obligados a aceptar empleos públicos. Si voluntariamente aceptaren alguno de los comprendidos en el artículo 88, dejan por el mismo hecho de ser Diputados.

Art. 91.- La elección de Diputados al Congreso se hará sobre la base de un Diputado propietario y un suplente por cada quince mil habitantes. Si hubiere fracciones, se elegirá un Diputado más por cada fracción que exceda de la mitad de la base.

TITULO VIII

De las atribuciones del Poder Legislativo.

Art. 92.- Corresponden al Congreso, las atribuciones siguientes.

1. Abrir y cerrar sus sesiones, y prorrogarlas cuando lo estime conveniente; calificar la elección de sus miembros, con vista de las credenciales, y recibirles la promesa de ley.
2. Llamar a los respectivos suplentes, en caso de falta absoluta o de legítimo impedimento de los propietarios, y mandar reponer las vacantes que surran.
3. Admitir las renunciaciones de sus miembros, por causas legales debidamente comprobadas.
4. Formar su reglamento interior y el de la Comisión Permanente.
5. Decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
6. Crear y suprimir empleos, establecer pensiones y decretar honores.
7. Conceder amnistías por delitos políticos. Fuera de éste caso, el Congreso no podrá dictar resoluciones por vía de gracia.
8. Disponer todo lo conveniente a la seguridad y defensa de la República.
9. Hacer el escrutinio de votos para Presidente y Vicepresidente de la República y declarar electos a los ciudadanos que hubieren obtenido mayoría absoluta.
10. En caso de no haber mayoría absoluta, hacer la elección de Presidente y Vicepresidente entre los dos ciudadanos que hubieren obtenido para cada cargo mayor número de sufragios populares. Y si el Congreso no hiciera la declaratoria o la elección de Presidente y Vicepresidente de la República dentro de veinte días contados desde su instalación, la hará la Corte Suprema de Justicia dentro de los diez días anteriores a la fecha señalada para tomar posesión de esos cargos; quedando facultada dicha Corte, en éste caso, para recibir la promesa de ley a los electos.
11. Cuando concurren en un mismo individuo diversas elecciones, será terminada la preferencia en el orden siguiente: 1º, Presidente, 2º: Vicepresidente, 3º: Diputado. La elección de propietario prefiere a la de suplente.
12. Recibir la promesa constitucional a los funcionarios que elija o declare electos y admitirles o no sus renunciaciones, inclusive a los que declare electos la Corte Suprema de Justicia, en el caso del número 10 de éste artículo.
13. Declarar con lugar a formación de causa al Presidente, al Vicepresidente, los Diputados, Magistrados de la Corte Suprema, Secretarios de Estado y Agente Diplomáticos, durante sus funciones.
14. Cambiar la residencia de los Supremos Poderes, por causas graves.
15. Decretar premios y conceder privilegios temporales a los autores o inventores, y a los que hayan introducido o perfeccionado industrias nuevas de utilidad general.
16. Decretar subsidios para promover nuevas industrias o mejorar las existentes.
17. Acordar subvenciones para objetos de utilidad pública.
18. Conceder o negar permiso a los hondureños para aceptar empleos u honores de otra nación.
19. Aprobar o improbar la conducta del Ejecutivo.
20. Aprobar, modificar o improbar las contrataciones celebradas por el Ejecutivo, en los casos del artículo 59, o cuando hayan de prolongarse sus efectos al siguiente período presidencial.
21. Aprobar, modificar o improbar los tratados celebrados con las demás naciones.
22. Reglamentar el comercio marítimo y terrestre.

23. Aprobar o improbar las cuentas de los gastos públicos, cuando - se sobrepasen las partidas fijadas en el Presupuesto General de Gastos
 24. Fijar anualmente el Presupuesto de gastos, tomando por base los ingresos probables, pudiendo prorrogarlo para el año siguiente.
 25. Imponer contribuciones.
 26. Reglamentar el pago de la deuda nacional.
 27. Decretar la enagenación de los bienes nacionales o su aplicación a usos públicos.
 28. Decretar empréstitos.
 29. Habilitar puertos, crear y suprimir aduanas.
 30. Decretar el peso, ley y tipo de la moneda nacional; y el patron de pesas y medidas.
 31. Declarar la guerra y hacer la paz.
 32. Fijar en cada reunión ordinaria el número de fuerzas del ejército permanente.
 33. Permitir o negar el transito de tropas de otro país, por el territorio de la República.
 34. Declarar en estado de sitio la República, o parte de ella conforme a la ley.
 35. Conferir los Grados de Mayor a General de División, a iniciativa del Ejecutivo.
 36. Elegir para el período constitucional cinco Magistrados propietarios y tres suplentes, de la Corte Suprema de Justicia. En caso de -- falta absoluta de alguno de ellos, elegir al que deba terminar su período.
 37. Elegir los miembros del Tribunal Superior de Cuentas y Fiscal - General de Hacienda., nombrar los funcionarios a que se refiere el artículo 151, y aprobar o improbar los nombramientos de Agentes Diplomáticos; y Consulares, con goce de sueldo.
 38. Dar votos de censura a los Secretarios de Estado.
- Art. 93.- El Poder Legislativo no podrá suplir o declarar el estado civil de las personas, ni conceder títulos profesionales. Los estudios y formalidades que para la obtención de dichos títulos requieran las - leyes de Instrucción Pública, no podrán dispensarse, salvo reforma de carácter general de aquellas leyes.
- Art. 94.- Las facultades del Poder Legislativo son indelegables, ex cepto las que se refieren a dar posesión a los altos funcionarios.

TITULO IX

De la Comisión Permanente.

Art. 95.- El Congreso antes de cerrar sus sesiones, elegirá entre - sus miembros cinco diputados propietarios y cinco suplentes para que - formen la Comisión Permanente, debiendo ésta, en su primera sesión, -- elegir su Presidente y Secretario.

Art. 96.- Son atribuciones de la Comisión Permanente, en receso del Congreso:

1. Declarar si hay o no lugar a formación de causa contra el Presidente, el Vicepresidente, los Diputados, Magistrados de la Corte Suprema, Secretarios de Estado y Agentes Diplomáticos, durante sus funciones.

2. Recibir la promesa constitucional a los funcionarios obligados a prestarla ante el Congreso.

3. Emitir dictamen y llenar los otros trámites en los negocios -- que hubieren quedado pendientes, para que puedan ser considerados.

4. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, a excitativa del Ejecutivo o cuando la exigencia del caso lo requiera.

5. Preparar, para someter a la consideración del Congreso, los proyectos de ley que a su juicio demanden las necesidades del país.

6. Recibir del Ejecutivo los decretos emitidos en los últimos -- diez días de sesiones del Congreso, con sanción o sin ella.

7. Recibir las denuncias de violaciones de la Constitución.

8. Mantener bajo su custodia y responsabilidad, el archivo de la Secretaría del Congreso.

9. Publicar una edición de todos los decretos y resoluciones emitidos por el Congreso en sus anteriores sesiones, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del mismo.

10. Presentar al Congreso un informe detallado de sus trabajos durante el año.

11. Elegir interinamente los miembros del Tribunal de Cuentas, Fiscal General de Hacienda, Tesoreros de Caminos, de Beneficencia de Instrucción Pública, de Sanidad, y cualesquiera otros que manejen fondos especiales, de carácter nacional, y aprobar o improbar, también -- interinamente, los nombramientos de Agentes Diplomáticos; y Consulares con goce de sueldo.

12. Llamar a integrar a otros diputados, por falta de los miembros de la Comisión.

13. Conceder o negar permiso a los hondureños para aceptar empleos y honores de otra nación.

Art. 97.- La Comisión Permanente se reunirá y actuará de conformidad con su reglamento interior.

TITULO X

De la formación, sanción y promulgación de la ley.

Art. 98.- Tienen exclusivamente la iniciativa de la ley, los Diputados, el Presidente de la República, por medio de los Secretarios de Estado, y la Corte Suprema de Justicia en asuntos de su competencia.

Cuando el Congreso estime necesaria la emisión de una ley, podrá nombrar una comisión de su seno para que elabore el proyecto correspondiente.

Art. 99.- Ningún proyecto de ley será definitivamente votado, sino después de tres deliberaciones, efectuadas en distintos días, salvo el caso de urgencia calificada por dos tercios de votos. Toda proposición que tenga por objeto declarar la urgencia de una ley, debe ir precedida de una exposición de los motivos en que aquélla se funda.

Art. 100.- Todo proyecto de ley, una vez aprobado por el Congreso, se pasará al Ejecutivo, a más tardar dentro de tres días de haber sido votado, a fin de que le de su sanción y lo haga promulgar como ley.

Art. 101.- La sanción de la ley se hará con esta fórmula: POR TANTO: Ejecútese.

Art. 102.- Si el Poder Ejecutivo encontrare inconvenientes para sancionar el proyecto de ley, lo devolverá al Congreso dentro de diez días, con ésta fórmula: VUELVA AL CONGRESO; exponiendo las razones en que se funde su desacuerdo. Si en el término expresado no lo objetare, se tendrá por sancionado y se promulgará como ley. Cuando el Ejecutivo devolviera el proyecto, el Congreso lo sujetará a una nueva deliberación; y si fuere ratificado con dos tercios de votos, lo pasará de nuevo al Ejecutivo, con ésta fórmula: RATIFICADO CONSTITUCIONALMENTE; y aquél lo publicará sin tardanza.

En el caso de que el proyecto de ley fuere objetado por inconstitucional, no podrá someterse a nueva deliberación, sin oír previamente, el dictamen de la Corte Suprema de Justicia. La Corte emitirá su Informe en el término de que el Congreso le señale.

Art. 103.- Cuando el Congreso vote un proyecto de ley al terminar sus sesiones, y el Ejecutivo crea inconveniente sancionarlo, está obligado a dar aviso inmediatamente al Congreso, para que permanezca reunido hasta diez días, contados desde la fecha en que aquel recibió el proyecto; y no haciéndolo comunicará su resolución a la Comisión Permanente.

Art. 104.- No podrá el Ejecutivo poner el veto en los actos y resoluciones siguientes:

1. En las elecciones que el Congreso haga o declare, o en las renunciaciones que admita o deseche.
2. En las declaraciones de haber o no lugar a formación de causa.
3. En la Ley de Presupuesto.
4. En los derechos que se refieran a la conducta del Ejecutivo.
5. En los reglamentos que expida para su régimen interior y el de la Comisión Permanente.
6. En los acuerdos para trasladar su residencia a otro lugar temporalmente y para suspender o prorrogar sesiones.
7. En los tratados o contratos que impruebe el Congreso.

En estos casos el Ejecutivo promulgará la ley con ésta fórmula: POR TANTO: Publíquese.

Art. 105.- Siempre que un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenidas en los Códigos de la República, no podrá discutirse sin oír la opinión de aquel Tribunal. La Corte emitirá su informe en el término que el Congreso le señale. Esta disposición no comprende las leyes del orden político, económico y administrativo.

Art. 106.- Ningún proyecto de ley desechado totalmente podrá discutirse de nuevo en la misma Legislatura.

TITULO XI

Del Poder Ejecutivo.

Art. 107.- El Poder Ejecutivo se ejerce por un ciudadano que se denomina Presidente; en su defecto, por un Vicepresidente; a falta de éste, por el ciudadano que desempeñe la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia; y en defecto de éste, por el ciudadano que desempeñe la Presidencia del Congreso o haya desempeñado este cargo en la última Legislatura.

Art. 108.- Para ser electo Presidente o Vicepresidente de la República, se necesita ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, no menor de treinta años ni mayor de sesenta y cinco y hondureño por nacimiento. En los casos en que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, o el Presidente del Poder Legislativo llegaren a desempeñar la Presidencia de la República, no tendrá aplicación el precepto relativo a la edad.

Art. 109.- El Presidente y el Vicepresidente de la República, serán electos popularmente y directamente, y su elección será declarada o hecho por el Congreso, o por la Corte Suprema de Justicia, como queda prescrito.

Art. 110.- El período presidencial será de cuatro años y comenzará el 1º de febrero.

El ciudadano que hubiere ejercido la Presidencia, en propiedad o interinamente, en el curso de un período, no podrá ser electo Presidente ni Vicepresidente para el siguiente período. Tampoco podrán ser electos Presidente o Vicepresidente sus parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad.

Art. 111.- En caso de impedimento temporal del Presidente lo sustituirá en sus funciones el Vicepresidente; y en su defecto los ciudadanos que manda el artículo 107. Si la falta del Presidente fuere absoluta, el Vicepresidente ejercerá el Poder Ejecutivo por el tiempo que faltare del período; pero si faltare también absolutamente el Vicepresidente, quien lo sustituya por la ley convocará a elecciones un mes después para un período constitucional.

Art. 112.- Mientras recibe la Presidencia el llamado por la ley, ejercerá el Poder Ejecutivo el Consejo de Ministros; y éste llamará inmediatamente al nuevo funcionario para darle posesión, si no estuviere reunido el Congreso.

TITULO XII

De los deberes y atribuciones del Poder Ejecutivo.

Art. 113.- El Presidente de la República tiene la administración general del país. Son sus atribuciones:

1. Presentar en la instalación de cada Congreso ordinario una relación general de los actos de su administración.
2. Ejercer el mando en jefe de las fuerzas de tierra y mar.
3. Defender la independencia, el honor de la Nación y la integridad de su territorio.
4. Ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo al efecto los decretos y órdenes conducentes, sin alterar el espíritu de aquéllas.
5. Nombrar los Secretarios y Subsecretarios de Estado, y los demás empleados del Departamento Ejecutivo, conforme a la ley.
6. Conservar la paz y seguridad interior de la República, y repeler todo ataque y agresión exterior.
7. Dar a los funcionarios del Poder Judicial los auxilios y fuerzas que necesiten para hacer efectivas sus providencias.
8. Remover los empleados de su libre nombramiento.
9. Velar por que todos los empleados de la República cumplan sus deberes que la ley les impone, sin intervenir en el ejercicio de sus funciones.
10. Conceder indultos y conmutar penas conforme a la ley, con el dictamen favorable de la Corte Suprema de Justicia.
11. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, por medio de la Comisión Permanente, o proporcionarle la prorroga de las ordinarias.
12. Declarar la guerra y hacer la paz, y permitir o negar el tránsito de las tropas de otros países, por el territorio de la República, cuando las circunstancias no permitan la reunión del Congreso para que lo resuelva.
13. Presentar por medio de los respectivos Secretarios de Estado, dentro de los primeros ocho días de la instalación del Congreso, un informe o memoria circunstancial de todos los ramos de la administración.
14. Celebrar tratados y cualesquiera otras negociaciones diplomáticas, sometiénolos a la ratificación del Congreso en las próximas sesiones.
15. Dirigir las relaciones exteriores, nombrar los Agentes Diplomáticos y Consulares de la República, recibir los Ministros y admitir los Consulares de las naciones extranjeras.

El nombramiento de los Agentes Diplomáticos, y el de los Consulares con goce de sueldo, se someterá a la aprobación del Congreso, o de la Comisión Permanente, en su caso.

16. Hacer que se recauden las Rentas del Estado y reglamentar su inversión, con arreglo a la ley.
17. Decretar, en los casos de invasión o rebelión, si los recursos del Estado fueren insuficientes, un empréstito general y proporcional de cuya inversión dará cuenta al Congreso en sus próximas sesiones.
18. Conferir grados militares desde Subteniente hasta Capitan.
19. Disponer de las fuerzas militares, organizarlas y distribuirlas de conformidad con la ley, según las necesidades de la República.
20. Declarar en Estado de Sitio la República, o parte de ella, en receso del Congreso, de conformidad con la ley.
21. Conceder cartas de naturalización conforme a la ley.

22. Contruír anualmente, por lo menos, veinte kilómetros del proyecto de Ferrocarril Interoceánico.

23. Dirigir y fomentar la instrucción pública y difundir la enseñanza popular.

24. Dancionar las leyes, usar del veto en los casos en que corresponda y promulgar sin demora aquéllas disposiciones legislativas que no necesiten de la sanción del Ejecutivo.

25. Mandar reponer las vacantes de diputados, en receso del Congreso, de conformidad con la ley, a más tardar un mes después de haber ocurrido.

26. Conocer de las renunciaciones de nacionalidad extranjera adquirida por hondureños.

27. Publicar mensualmente el estado de ingresos y egresos de las rentas públicas.

28. Vigilar sobre la exactitud legal de la moneda; y cuidar de la uniformidad de pesas y medidas, lo mismo que prohibir la emisión y circulación de cupones.

29. Ejercer la suprema dirección de la policía de seguridad.

Art. 114.- Las providencias del Poder Ejecutivo que no se expidan por el Ministerio correspondiente, no deben cumplirse. El Presidente y los Ministros serán responsables por las disposiciones que dicten en contravención a la Constitución y las leyes.

Art. 115.- El Vicepresidente de la República gozará de las mismas prerrogativas de los Diputados.

TITULO XIII

De los Secretarios de Estado.

Art. 116.- Para la administración de los negocios públicos habrá de cuatro a siete Secretarías de Estado, entre las cuales se distribuirán los ramos de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Guerra, Marina, Gobernación y Justicia, Instrucción Pública, Fomento, Trabajo, y Sanidad, Agricultura y los demás que se consideren necesarios.

Art. 117.- Los Secretarios de Estado deben ser hondureños por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y ser mayores de veinticinco años.

Art. 118.- No pueden ser Secretarios de Estado, los parientes del Presidente o Vicepresidente de la República dentro de cuarto grado de consanguinidad o afinidad; los que hubieren administrado o recaudado fondos públicos, mientras no tengan el finiquito de solvencia de sus cuentas; los contratistas de obras o servicios públicos por cuenta de la Nación, los que por tales contratos tengan reclamaciones pendientes; y los deudores a la Hacienda Pública.

Art. 119.- Los Secretarios de Estado pueden asistir, sin voto, a las deliberaciones del Congreso. Cuando a iniciativa de un Diputado, la Directiva del Congreso los llame, deberán concurrir a contestar las interpelaciones que se les hagan sobre asuntos referentes a la Administración, exceptuando los de los ramos de Guerra y Relaciones Exteriores, si juzgan necesaria la reserva.

Art. 120.- Cuando el Congreso diere un voto de censura contra el Ministerio o contra alguno de los Secretarios de Estado, el Secretario o Secretarios objeto de la censura cesarán en sus respectivos cargos, y el Presidente de la República deberá reponerlos inmediatamente.

Art. 121.- Los Subsecretarios de Estado deben tener las mismas condiciones que los Secretarios y sustituirán a éstos por ministerio de la ley.

TITULO XIV

Del Poder Judicial.

Art. 122.- El Poder Judicial de la República se ejerce por una Corte Suprema de Justicia, compuesta de cinco Magistrados, que residirán en la capital, y por los Tribunales y Jueces inferiores que la ley determine.

Art. 123.- Para ser Magistrado se requiere ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, Abogado y mayor de treinta años.

Art. 124.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, serán electos por el Congreso, entre los Abogados que hayan desempeñado -- Cortes de Apelaciones durante un año, por lo menos.

Art. 125.- No pueden ser electos Magistrados los que tengan cualquiera de las inhabilidades establecidas para ser Secretario de Estado.

Art. 126.- La Corte Suprema de Justicia nombrará, trasladará y con justa causa removerá los Magistrados de las Cortes de Apelaciones, los Jueces departamentales y seccionales y los Oficiales del Ministerio Público, de conformidad con la ley. Los Magistrados de las Cortes de Apelaciones, serán nombrados entre los Abogados que hayan servido del cargo de Juez de Letras, durante un año, por lo menos.

Art. 127.- Los Jueces de paz serán nombrados por los Jueces de Letras departamentales o seccionales, a propuesta de terna de la respectiva Municipalidad.

Art. 128.- No pueden ser Magistrados ni Jueces en un mismo Tribunal las personas ligadas por parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Art. 129.- El período de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia será de cuatro años, y tomarán posesión el 1º de febrero.

Art. 130.- La Corte Suprema de Justicia admitirá o no las renunciaciones de los funcionarios de su nombramiento, y concederá licencia tanto a éstos como a sus propios miembros.

Los jueces departamentales o seccionales admitirán o no las renunciaciones y concederán licencia a los Jueces de Paz.

Art. 131.- La ley reglamentará la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia.

Art. 132.- La facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado pertenece a

las Cortes y demás Tribunales de Justicia. A ellos corresponde la aplicación de las leyes en casos concretos que legalmente se sometan a su conocimiento, y negarles cumplimiento cuando sean contrarias a la Constitución.

Art. 133.- La Corte Suprema de Justicia será presidida por uno de los Magistrados propietarios.

Las funciones del Presidente durarán un año, contado desde el 1º de febrero, turnándose los Magistrados por orden de antigüedad en el servicio del Tribunal, A falta de ésta, se estará a la antigüedad del título.

Los Magistrados tendrán el rango y procedencia correspondiente a su antigüedad en el servicio del Tribunal.

Siempre que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia pase a desempeñar el Poder Ejecutivo, se repondrá, por mientras ejerza el cargo de Presidente de la República, conforme al Reglamento interior de dicho Tribunal.

Art. 134.- La Corte Suprema de Justicia, además de las atribuciones que la ley le confiere, ejercerá las siguientes:

1. Hacer su reglamento interior.
2. Conocer de los delitos oficiales y comunes de los altos funcionarios cuando el Congreso, o la Comisión Permanente, los haya declarado con lugar a formación de causa.
3. Autorizar a los Abogados y Notarios, recibidos dentro o fuera de la República, para el ejercicio de su profesión y suspenderlos, todo con arreglo a la ley.
4. Declarar que ha lugar a formación de causa contra los miembros del Tribunal de Cuentas, Fiscal General de Hacienda, y contra los principales empleados nacionales y departamentales que la ley determine, por los delitos que cometan.
5. Conocer de las causas de presa, de extradición y demás que deban juzgarse con arreglo al Derecho Internacional.

Art. 135.- Podrá también establecerse directamente ante la Corte Suprema de Justicia, el recurso de inconstitucionalidad de una ley - que se refiera a asuntos no ventilables ante Tribunales, por toda persona que al serle aplicada en un caso concreto, sea perjudicada en sus legítimos derechos. La ley reglamentará el uso de este recurso.

Art. 136.- La administración de justicia es gratuita en la República.

Art. 137.- Los Tribunales de Justicia podrán requerir el auxilio de la fuerza armada para el cumplimiento de sus resoluciones, y si les fuere negado o no la hubiera disponible, podrán exigirlo a los ciudadanos. El que indebidamente se negare a dar auxilio incurrirá en responsabilidad.

Art. 138.- Un mismo Juez no puede serlo en diversas instancias en una misma causa.

Art. 139.- Ningún poder ni autoridad puede avocarse causas pendientes, ni abrir juicios fenecidos, salvo lo que dispone el artículo siguiente.

Art. 140.- Las causas juzgadas en materia criminal, común o militar pueden ser revisadas en toda época en favor de los condenados, a pedido de éstos, de cualquier otra persona, del Ministerio Público, o de oficio. La ley reglamentará los casos y la forma de la revisión.

Art. 141.- Los Magistrados, Jueces y Oficiales del Ministerio Público, no podrán pasar a ser obligados a prestar servicio militar ni a concurrir a ejercicios o prácticas militares.

Art. 142.- Se establece una Tesorería Especial para el pago de los sueldos correspondientes a los empleados de la administración de justicia y los gastos del mismo Ramo. Una ley determinará los ingresos de dicha Tesorería.

TITULO XV

Del Presupuesto.

Art. 143.- El Presupuesto será votado por el Congreso, con vista del proyecto que presente el Poder Ejecutivo.

Art. 144.- El proyecto de Presupuesto será presentado por el respectivo Ministro, dentro de los quince días subsiguientes a la instalación del Congreso.

Art. 145.- Todo gasto que se haga fuera de presupuesto, es ilegal. Una vez improbadado por el Congreso, se deducirá la responsabilidad civil o criminal a quien corresponda.

Art. 146.- El Presupuesto de Gastos ordinarios de la Administración Pública no podrá exceder de los ingresos probables calculados por el Congreso Nacional.

TITULO XVI

Del Tesoro Público.

Art. 147.- Forman el Tesoro Público de la Nación:

1. Todos los bienes, muebles o raíces.
2. Todos sus créditos activos.
3. El producto de los derechos, impuestos y contribuciones.

Art. 148.- Para crear el patrimonio agrícola, el Estado dará en propiedad lotes de terreno a familias de hondureños naturales o naturalizados.

La ley reglamentará las condiciones de adquisición y las obligaciones del donatario.

Art. 149.- El Poder Ejecutivo no podrá celebrar contratas de importancia que comprometan el Tesoro Nacional, sin previa publicación de la propuesta en el periódico oficial, y licitación Pública. Exceptuase las que tengan por objeto proveer a las necesidades de la guerra y las que por su naturaleza no puedan celebrarse sino con persona determinada.

Art. 150.- Para fiscalizar la administración del Tesoro Nacional, habrá un Tribunal Superior de Cuentas, cuyas atribuciones serán: examinar, aprobar o improbar las cuentas de los que administren fondos públicos, y devolver al Ejecutivo las ordenes que no estuvieren arregladas a la ley, para los efectos que ella determine.

Art. 151.- Los Tesoreros de Justicia, de Caminos, de Beneficencia, de Instrucción Pública, de Sanidad y cualesquiera otros que manejen fondos especiales de carácter nacional, serán de nombramiento del -- Congreso.

Ningún Tesorero Especial podrá atender órdenes de pago por gastos que no correspondan al ramo. El empleado o funcionario que -- distraiga los fondos de las Tesorerías Especiales en asuntos distintos de aquellos para que han sido creados, responderán personalmente por las sumas distraídas.

Art. 152.- Los miembros del Tribunal Superior de Cuentas deberán ser mayores de veinticinco años, tener el título de Abogado o Perito Mercantil, no ser acreedores ni deudores a la Hacienda Pública, ni -- tener cuentas pendientes con ella. Su número, organización y atribuciones, serán determinadas por la ley.

Art. 153.- Habrá un Fiscal General para que represente los intereses de la Hacienda Pública y sus atribuciones se determinarán por la ley.

Los miembros del Tribunal de Cuentas y Fiscal General de Hacienda tendrán las inhabilidades establecidas para los Diputados.

TITULO XVII

Del Ejército.

Art. 154.- La fuerza pública está instituída para asegurar los -- derechos de la Nación, el cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden público.

Art. 155.- Ningún cuerpo armado puede deliberar. La obediencia -- militar será arreglada a la ley y ordenanzas militares.

Art. 156.- El servicio militar es obligatorio. Todos los hondureños de veintiuno a treinta años forman el Ejército activo, y de más de treinta a cuarenta, la reserva. La ley hará la organización de -- las milicias y de la Guardia Nacional que comprenderá los individuos de cuarenta a cincuenta años, y establecerá las causas de exención -- del servicio.

Art. 157.- Los militares que tengan grado de Ejército, tienen de -- recho después de cumplir cuarenta años, a renunciar sus despachos -- y quedar separados del servicio.

Art. 158.- Los grados militares sólo se adquieren por riguroso -- ascenso. Los militares no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino de la manera determinada por la ley.

Art. 159.- Se establece el fuero de guerra, para los delitos militares.

Art. 160.- Se crea el Estado Mayor del Ejército. Una ley determinará su organización y atribuciones.

También se establecerán escuelas militares para la enseñanza e instrucción de las diferentes armas del Ejército.

TITULO XVIII

Del Gobierno Departamental y Municipal.

Art. 161.- Para la Administración Pública se divide el territorio de la Nación, en departamentos cuyo número y límites fijará la ley.

Art. 162.- El Municipio es autónomo y será representado por Municipalidades electas directamente por el pueblo.

La ley reglamentará la organización y atribuciones de las - Municipalidades. El número de los municipales será proporcional a la - población. Las atribuciones de las Municipalidades serán puramente -- económicas y administrativas.

Art. 163.- Las Municipalidades decretarán conforme a la ley, las - contribuciones locales, y administrarán los fondos y bienes de la comunidad en provecho de la misma, rindiendo cuenta de su administración ante el Tribunal que establezca la ley. Deberán publicar mensualmente un informe detallado de los ingresos y egresos de sus fondos.

Art. 164.- Las municipalidades nombrarán libremente los empleados de su dependencia, y los agentes de policía que costeen con sus propios fondos.

Art. 165.- En el ejercicio de sus funciones privativas, serán absolutamente independientes de los otros poderes, sin contrariar en ningún - caso las leyes generales, del país; y serán responsables por los abusos que cometan, colectiva o individualmente, ante los Tribunales de Justicia.

Art. 166.- Las Municipalidades al cumplir con la Constitución y las leyes generales sobre administración, policía, higiene, sanidad e instrucción pública, deben coadyuvar eficazmente a la labor de las autoridades de dichos ramos, pudiendo emitir acuerdos sin contrariar aquellas leyes. También tienen facultad de conmutar penas por faltas, conforme a la ley.

Art. 167.- Ningún miembro de las Municipalidades podrá ser obligado a aceptar otro nombramiento, ni ser llamado al servicio militar. Es - prohibido a los miembros de una Corporación municipal, el desempeño de empleos municipales remunerados.

TITULO XIX

De la responsabilidad de los empleados públicos.

Art. 168.- Todo funcionario público, al tomar posesión de su destino hará la promesa siguiente: "PROMETO SER FIEL A LA REPUBLICA, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCION Y LAS LEYES".

Art. 169.- Todo empleado o funcionario público es responsable por - sus actos.

Art. 170.- El Presidente de la República, el Vicepresidente, los Diputados, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Secretarios de Estado y los Ministros Diplomáticos, responderán ante el Congreso por los delitos que cometan mientras subsista su carácter oficial. El Congreso, o la Comisión Permanente, en su caso, previos los trámites que determine su reglamento, declarará si ha lugar o no a formación de causa contra ellos para el efecto de poner al reo a disposición del Tribunal competente.

Art. 171.- No obstante la aprobación que de el Congreso a la conducta del Ejecutivo, el Presidente y los Secretarios de Estado podrán ser acusados por delitos oficiales. El término de prescripción para estas acciones empezará a correr cinco años después de haber cesado en sus funciones el culpable.

Art. 172.- Los empleados y funcionarios públicos que violaren cualquiera de los derechos y garantías consignados en esta Constitución, serán responsables civil y criminalmente. Pueden ser acusados sin necesidad de fianza de calumnia. No pueden obtener indulto ni conmuta en el período constitucional ni en el siguiente. La prescripción de los delitos y penas en que incurran, no comenzará sino después de dichos períodos.

Art. 173.- Cuando un funcionario público, a quien se hubiere declarado con lugar a formación de causa, fuere absuelto, volverá al ejercicio de sus funciones.

TITULO XX

Cooperación Social y Trabajo.

Art. 174.- El Estado reglamentará el ahorro obligatorio en los establecimientos de enseñanza, talleres y oficinas públicas, de carácter civil o militar; y protegerá la creación de toda clase de centros de ahorro.

Art. 175.- Se establecerá un Centro Técnico denominado INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES, con las atribuciones y deberes siguientes:

1. Armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo.
2. Promover y estimular la fundación de sociedades cooperativas de producción, ahorro, consumo y crédito, construcción de casas baratas e higiénicas, así como el establecimiento de seguros contra accidentes y sobre la vida, y creación de asilos para indigentes.
3. Las demás que, como las de sanidad y otras que sean compatibles con los fines de este Título, se establezcan en una ley especial.

Art. 176.- La jornada máxima obligatoria de trabajo asalariado será de ocho horas diarias. Por cada seis días de trabajo habrá uno de descanso. Una ley sobre accidentes del trabajo establecerá las responsabilidades del patrono y las condiciones en que se harán efectivas.

Art. 177.- El trabajo de las mujeres, y el de los hombres menores de catorce años, merece protección especial. Una ley deberá reglamentarlos.

TITULO XXI

De las Leyes Constitutivas.

Art. 178.- Son Leyes Constitutivas: la de Imprenta, la de Estado de Sitio, la de Amparo, la de Elecciones y la Agraria.

TITULO XXII

De las reformas a la Constitución y Leyes Constitutivas.

Art. 179.- Uno o algunos de los artículos de ésta Constitución, y de las Leyes Constitutivas podrán reformarse o suprimirse por un Congreso en sesiones ordinarias, por dos tercios de votos, debiendo ratificarse el respectivo decreto por la siguiente Legislatura, también en sesiones ordinarias, y por dos tercios de votos, para que la reforma o supresión entre en vigor.

Art. 180.- La reforma que se haga de los artículos constitucionales que prohíben la reelección del Presidente o del que lo sustituya, e el que fija los límites de la edad para ser electos, y el que establece la duración del período presidencial, no producirá sus efectos en el período en curso ni en el siguiente.

Art. 181.- Todas las leyes, decretos, reglamentos, órdenes y demás disposiciones que estuvieren en vigor al promulgarse esta Constitución continuarán observándose en cuanto no se opongan a ella, y mientras no fueren legalmente derogadas o modificadas.

Art. 182.- La Presente Constitución empezará a regir el tres de octubre del presente año, quedando derogada en esa fecha la emitida el catorce de octubre de mil ochocientos noventa y cuatro.

Dada en Tegucigalpa, en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, a los diez días del mes de septiembre de mil novecientos veinticuatro.

R. ALCERRO C.,

Presidente

RUBEN ANDINO AGUILAR

Vicepresidente.

**MARTIN M. AGUERO. ROMULO ALVARADO ROMERO. D. BUSTAMANTE ROSALES.-
ANTONIO C. BUSTILLO.- V. CALLEJAS.- RAMIRO CARVAJAL.- GUSTAVO A. CASTAÑE-
DAS.- GONZALO CORDOBA.- RAUL R. CUEVA.- ANDRES FELIPE DIAZ.- BENJAMIN M.
GUZMAN.- MEDARDO GALEANO TREJO.- ELEUTERIO GALEANO T.- JUAN MANUEL GALVEZ
C.B. GONZALEZ.- MARIANO P. GUEVARA.- LUIS F. LARDIZABAL.- NAZARIO PINEDA
II.- PROSPERO PADILLA ROMERO.- SIMON REYES J.- PEDRO RIVAS.- CAMILO R. -
EINA.- J.M.SARMIENTO.- ALVARO SUAZO.- JUAN E. SUAZO.- PIO SUAREZ.- DR. J.
TABORA.- CARLOS TORRES.- MANUEL VALLADARES NUÑEZ.- J.M. VELASQUEZ.- ANTO-
NIO VIDAL M.- F.R. ZUÑIGA.- M.G. ZUÑIGA.**

ANTONIO BERMUDEZ M.,

Secretario 1º.

J.M. ALBIR

Secretario 2º.

RAFAEL DIAZ CHAVEZ,

Prosecretario 1º.

FRANCISCO RUBI

Prosecretario 2º.

Al Poder Ejecutivo.

POR TANTO: Publíquese.

Tegucigalpa. 10 de septiembre de 1.924

VICENTE TOSTA.

El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, por la ley.

FELIPE CALIX.

**El Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores,
SALVADOR AGUIRRE**

**El Secretario de Estado en el Despacho de Guerra y Marina, por la ley.
ANDRES LEIVA.**

**El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público.
SILVERIO LAINEZ**

El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, Obras Públicas y Agricultura,

JOSE B. HENRIQUEZ

El Secretario de Estado en el Despacho de Instrucción Pública,
F.A. SMITH

CONSTITUCION DE 1.936

DECRETO NUMERO 3

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DECRETA Y SANCIONA LA SIGUIENTE

CONSTITUCION POLITICA

TITULO I

CAPITULO UNICO

De la Nacion.

Artículo 1º.- Honduras es nación libre, soberana e independiente.

La intromisión de un gobierno extraño en sus asuntos interiores es un atentado a su soberanía.

Art. 2º.- La soberanía nacional reside en la universalidad de los hondureños, quienes delegan su ejercicio en los poderes que esta Constitución establece.

Art. 3º.- Todo poder público emana del pueblo.

Los funcionarios del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley.

Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo.

Art. 4º.- Los límites de Honduras y su división territorial serán determinados por la ley.

Art. 5º.- Ninguna autoridad puede celebrar pactos, tratados o convenios que comprometan la soberanía e independencia de la República.

En cualquier tiempo podrá deducirse la responsabilidad consiguiente a quienes lo hayan celebrado o hayan contribuido a su ejecución.

TITULO II

De la Nacionalidad y la Soberanía

CAPITULO I

De los hondureños.

Art. 6º.- Los hondureños son naturales o naturalizados.

Art. 7º.- Son naturales:

1º. Los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los hijos

de los distintos cultos establecidos en el país, bajo pena de expulsión; pero si podrán desempeñar empleos en la enseñanza y en las artes, y en cualquier otro ramo que no sea de los comprendidos en la prohibición.

Art. 19.- Los extranjer^{os} no podrán ocurrir a la vía diplomática sino en los casos de denegación de justicia. Para este efecto, no se entiende por denegación de justicia que un fallo ejecutivo no sea favorable al reclamante.

Si contraviniendo esta disposición, no terminaren amistosamente las reclamaciones y se causaren perjuicios al país, perderán el derecho de habitar en él.

Art. 20.- La extradición sólo podrá otorgarse en virtud de ley o de tratados, por delitos comunes graves; nunca por delitos políticos, aunque por consecuencia de éstos resulte un delito común.

Art. 21.- Las leyes establecerán la forma y casos en que puede negarse al extranjero la entrada al territorio nacional u ordenarse su expulsión por considerarlo pernicioso.

Art. 22. Las leyes y tratados reglamentaran el uso de estas garantías, sin poder alterarlas.

Art. 23. Las disposiciones de este Capítulo no modifican los tratados existentes entre Honduras y otras naciones.

CAPITULO III

De los ciudadanos

Art. 24.- Son ciudadanos:

1º. Todos los hondureños varones mayores de veintid^{os} años.

2º. Todos los hondureños varones mayores de dieciocho años que sean casados.

3º. Todos los hondureños varones mayores de dieciocho años que sepan leer y escribir.

Art. 25.- Son derechos del ciudadano: ejercer el sufragio y optar a los cargos públicos, conforme a la ley.

Los individuos de alta en el Ejército o en la Policía no podrán ejercer el sufragio; pero si serán elegibles en los casos no prohibidos por la ley.

Art. 26.- La calidad de ciudadano se suspende, se pierde y se restablece conforme las siguientes prescripciones:

Se suspende:

1º. Por auto de prisión o declaratorio de reo o de haber lugar a formación de causa.

2º. Por sentencia firme que prive de los derechos políticos.

3º. Por interdicción civil, por estar declarado seductor fraudulento o por vagancia legalmente declarada.

Se pierde:

1º. Por aceptar, sin el permiso debido, condecoraciones que impliquen obediencia o sumisión al gobierno que las otorgue.

2º. Por desempeñar en el país, sin la licencia debida, empleo de nación extranjera, del ramo militar o de carácter político.

3º Por ayudar en contra de la nación a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquiera reclamación diplomática o ante un tribunal internacional.

Se restablece:

1º Por sobreseimiento confirmado

2º Por sentencia firme absolutoria

3º Por cumplimiento de la pena

4º Por amnistía o por indulto.

5º Por rehabilitación de conformidad con la ley.

Art. 27.- El voto activo es una función pública obligatoria e irrenunciable.

Art. 28.- El sufragio se ejercerá de modo directo y secreto.

Las elecciones se verificarán en la forma y condiciones prescritas por la ley.

Art. 29.- Sólo los ciudadanos mayores de veintidós años, que se hallen en el ejercicio de sus derechos, son elegibles; salvo las excepciones establecidas por la ley.

TITULO III

De los Derechos y Garantías.

Art. 30.- La Constitución garantiza a todos los habitantes de Honduras sean nacionales o extranjeros, la inviolabilidad de la vida humana, la seguridad individual, la libertad, la igualdad ante la ley y la propiedad.

CAPITULO I

De la inviolabilidad de la vida humana.

Art. 31.- La pena de muerte queda abolida en Honduras; pero mientras se establece el sistema penitenciario, se aplicará en los casos determinados por la ley, solamente a los autores de parricidio, asesinato y - - traición cuando ésta se cometa en servicio y en campaña.

Las sentencias que recaigan en las causas instruidas por esos - - crímenes se consultarán con las Cortes de Apelaciones y el fallo de estas, se enviará en revisión a la Corte Suprema de Justicia, si se tratare de delitos comunes y a la Comandancia General de la República, si la causa fuere del orden militar.

Tanto la Corte Suprema de Justicia como la Comandancia General de la República fallarán con sólo la vista de los autos.

CAPITULO II

De la seguridad individual.

Art. 32.- La Constitución reconoce la garantía del habeas corpus. En consecuencia, toda persona ilegalmente detenida, o cualquiera otra en su

nombre, tiene el derecho para recurrir al tribunal respectivo, verbalmente o por escrito, pidiendo la exhibición de la persona detenida.

Art. 33.- Todo persona tiene derecho para requerir amparo contra cualquier atentado o arbitrariedad de que sea víctima, y para hacer efectivo el ejercicio de todas las garantías que esta Constitución establece, - cuando sea indebidamente coartada en el goce de ellas por leyes o actos de cualquier autoridad, agente o funcionario público.

Art. 34.- La orden de detención que no emanede autoridad competente, o que se haya dictado sin las formalidades legales, es atentoria.

Art. 35.- La detención para inquirir no podrá pasar de seis días.

Art. 36.- La incomunicación de un detenido no excederá de cuarenta y ocho horas.

Art. 37.- No podrá proveerse auto de prisión sin que precede plena - prueba de haberse cometido un crimen o simple delito que merezca pena de privación de la libertad, y sin que resulte indicio racional de quien sea su autor. En la misma forma se hará la declaratoria de reo.

Art. 38.- Se prohíbe la prisión por deudas, excepto cuando hubiere dolo.

Art. 39.- Es permitida la prisión o arresto, por pena o apremio, en los casos y por el termino que disponga la ley. El apremio no podrá exceder de treinta días.

Art. 40.- El delincuente in fraganti puede ser aprehendido por cualquier persona para el efecto de entregarlo a la autoridad competente.

Art. 41.- Nadie puede ser preso o detenido sino en los lugares que determine la ley. Las cárceles sólo servirán para asegurar a los procesados y penados.

Art. 42.- Aun con auto de prisión, nadie puede ser llevado a la cárcel ni detenido en ella, sin presentarse fianza suficiente, cuando por el delito no deba aplicarse pena que pase de tres años.

Art. 43.- Ninguna persona puede ser juzgada por comisiones especiales, ni por otro jueces que los designados por la ley.

Art. 44.- El derecho de defensa es inviolable.

Art. 45.- Nadie puede ser obligado, en materia criminal, a declarar con sí mismo, ni contra su conyuge, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Art. 46.- Ninguna persona puede ser inquietada ni perseguida por sus opiniones. Las acciones privadas que no alteren el orden público, o que no causen daño a tercero, estarán siempre fuera de la acción de la ley.

Art. 47.- Se prohíbe absolutamente la fustigación, la aplicación de palos y toda especie de tormentos. Se prohíben también las prisiones innecesarias y todo rigor indebido.

Art. 48.- La habitación de toda persona es un asilo sagrado que no podrá allanarse sino por la autoridad, en los casos siguientes:

1º. Para extraer un criminal sorprendido in fraganti.

2º Por cometerse delito en el interior de la habitación, por desorden escandaloso que exija pronto remedio, o por reclamación del interior de la casa.

3º. En caso de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro análogo; y para verificar cualquier visita o inspección de carácter puramente sanitario.

4º. Para libertar una persona secuestrada ilegalmente.

5º Para extraer objetos perseguidos en virtud de un proceso, precediendo semiplena prueba, por lo menos, de la existencia de dichos objetos; y para ejecutar una disposición judicial legalmente decretada.

6º. Para aprehender un reo a quien se haya proveído auto de prisión o

detención, precediendo, al menos, semiplena prueba de que se oculta en la casa que deba allanarse.

En los dos últimos casos no podrá verificarse el allanamiento sino con orden escrita de autoridad competente.

Art. 49.- Siempre que el domicilio que haya de allanarse no sea el del reo a quien se persigue, la autoridad o sus agentes solicitarán previamente el permiso del morador.

Art. 50.- El allanamiento del domicilio no puede verificarse desde las siete de la noche hasta las seis de la mañana, sin permiso del jefe de la casa.

Art. 51.- Son inviolables la correspondencia espistolar y telegráfica y los papeles privados, sin perjuicio de lo que sobre el particular disponga la Ley de Estado de Sitio.

Ni el Poder Ejecutivo ni sus agentes, podrán sustraer, abrir, ni detener dicha correspondencia. La sustraída de las estafetas o de cualquier otro lugar no hará fe en juicio.

Art. 52.- La correspondencia particular, papeles y libros privados sólo podrán ocuparse por auto de juez competente, en los asuntos civiles y criminales que la ley determine, debiendo registrarse en presencia del poseedor o, en su defecto, de dos testigos; y devolverse los que no tengan relación con lo que se indaga.

Art. 53.- Se prohíbe dar leyes o disposiciones proscriptivas, confisatorias, o que ordenen penas infamantes o perpetuas.

La duración de las penas no podrá exceder de doce años, y de veinte las acumuladas por varios delitos.

Art. 54.- Ninguna ley tiene efecto retroactivo, excepto en material penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado.

Art. 55.- La policía de seguridad sólo podrá ser confiada a las autoridades civiles.

Art. 56.- Las leyes fijarán el orden y las formas del proceso en materia civil y criminal.

CAPITULO III

De la libertad.

Art. 57.- La Iglesia está separada del Estado.

Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones que no se opongan a las leyes del país.

Se prohíbe dar subvenciones para cultos o enseñanza religiosa.

Art. 58.- Ningún acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas.

Art. 59.- Toda persona podrá libremente, sin censura previa, emitir sus opiniones de palabra o por escrito por medio de la prensa o por cualquier otro procedimiento, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que cometa en ejercicio de esta libertad, en la forma y casos determinados por la ley.

En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta ni sus accesorios como instrumentos de delito.

Art. 60.- Se garantiza la libertad de enseñar. La enseñanza sostenida con fondos públicos será laica, y la primaria será, además, gratuita, obligatoria, costeadas por los municipios y subvenida por el Estado.

Art. 61.- Se garantiza la libertad de reunión sin armas y la de asociación para cualquier objeto lícito.

Se prohíbe el establecimiento de toda clase de asociaciones monásticas. La entrada al país de los individuos pertenecientes a estas asociaciones será reglamentada por la ley.

Art. 62.- La industria y el comercio son libres; pero podrán estancarse en provecho del Estado, el alcohol, el aguardiente, el salitre, la polvora, las armas de fuego, las municiones de guerra y los explosivos usados en el arte militar.

El tráfico de estupefacientes o drogas heroicas será reglamentado por la ley y por los convenios internacionales.

Art. 63.- No habrá monopolios en favor de particulares.

Podrán otorgarse privilegios por un término que no exceda de diez años. En las concesiones para fomentar la introducción o perfeccionamiento de nuevas industrias, la inmigración, las instituciones de crédito y en las de apertura de vías de comunicación o empresas de colonización, el término será hasta por noventa años, improrrogables.

En los casos arriba enumerados sólo podrán dispensarse los derechos e impuestos establecidos; pero de ningún modo y en ningún caso se dispensarán, en las concesiones y tratados, las cargas públicas por establecer.

El Estado no podrá, en las concesiones que otorgue ni en los tratados que celebre, dispensar el pago de las cargas municipales.

Vencido el término de una concesión relativa a colonización, inmigración o apertura de vías de comunicación, pasará la empresa con todos sus accesorios y en pleno funcionamiento, al dominio del Estado, sin retribución alguna.

Art. 64.- Toda persona puede adquirir propiedades y disponer de ellas por cualquier título, con las limitaciones establecidas por la ley.

Art. 65.- Son prohibidas las vinculaciones y toda institución en favor de establecimientos religiosos.

Art. 66.- Toda persona, o reunión de personas, tiene derecho a dirigir sus peticiones a las autoridades legalmente establecidas, de que se le resuelvan y se le haga saber la resolución correspondiente.

Art. 67.- Toda persona podrá entrar en el territorio de la República, salir de él, viajar dentro de sus límites y mudar de residencia, de conformidad con las leyes.

Art. 68.- Los habitantes de la República tienen derecho de tener y portar armas, con arreglo a la ley.

CAPITULO IV

De la igualdad.

Art. 69.- Todos los hondureños son iguales ante la ley.

La República no reconoce fueros ni privilegios personales.

Art. 70.- Se prohíbe la acumulación de cargos o empleos remunerados, aun con caracter de interinos, excepto los de enseñanza y los de Cirujanos Militares; éstos podrán desempeñar empleo de sanidad.

Art. 71.- Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos.

Art. 72.- La proporcionalidad será la base de las contribuciones directas.

CAPITULO V

De la propiedad.

Art. 73.- Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley.

Art. 74.- La expropiación de inmuebles por causa de necesidad o utilidad pública, debe ser calificada por la ley o por sentencia fundada en ley, y no se cerificará sin previa indemnización.

Art. 75.- El derecho de propiedad no perjudicará el derecho eminente del Estado dentro de sus límites territoriales, ni podrá sobreponerse a los derechos que tengan las instituciones nacionales o las obras de caracter nacional.

Art. 76.- Todo inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra o descubrimiento, por el término que determine la ley.

Art. 77.- El derecho de reivindicar los bienes confiscados es imprescriptible.

Art. 78.- Sólo el Congreso impone contribuciones y demás cargas públicas.

Art. 79.- Todo servicio que no deba prestarse gratuitamente en virtud de ley o de sentencia fundada en ley debe ser remunerado.

Art. 80.- Ninguna persona que tenga la libre administración de sus bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento.

CAPITULO VI

Otras garantías.

Art. 81.- La enumeración de derechos y garantías que hace esta Constitución no excluye los no enumerados que nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

Art. 82.- Las leyes que reglamenten el ejercicio de tales garantías y derechos serán nulas en cuanto los disminuyan, restrinjan o adulteren,

CAPITULO VII

De la suspensión de garantías.

Art. 83.- Las garantías establecidas en los artículos 32, 34, 35, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 69, 61 párrafo primero, 67, 73 y 79, podrán suspenderse en toda la República o parte de ella, temporalmente y cuando lo exija la seguridad del Estado en caso de invasión del terri-

torio, de grave perturbación del orden que amenace la paz pública, de epidemia o de otra calamidad.

El territorio en que fuesen suspendidas las garantías expresadas, se regirá, durante la suspensión, por la Ley de Estado de Sitio; pero ni en dicha ley ni en otra alguna podrá disponerse la suspensión de otras garantías que las ya mencionadas.

Tampoco podrá hacerse, durante la suspensión, declaraciones de nuevos delitos ni imponerse otras penas que las establecidas en las leyes vigentes al decretarse la suspensión.

Art. 84.- La suspensión de garantías sólo podrá decretarse por el Congreso, o cuando éste no estuviere reunido, por el Poder Ejecutivo; pero éste no podrá decretar la suspensión por más de sesenta días, salvo nueva declaratoria. En todo caso debe dar cuenta al Congreso de los actos ejecutados durante la suspensión de garantías.

Art. 85.- Si el Ejecutivo violare cualquiera de las disposiciones contenidas en este Capítulo, el perjudicado o cualquiera persona en su nombre, podrá recurrir de amparo.

TITULO IV

DE LA FORMA DE GOBIERNO

CAPITULO UNICO

Art. 86.- El Gobierno de Honduras es republicano, democrático y representativo. Se ejerce por tres poderes independientes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Art. 87.- Ninguno de los poderes constituidos podrá ejercer actos en que se altere la forma de gobierno establecida, o se menoscabe la integridad del territorio o la soberanía nacional.

Art. 88.- Las disposiciones de esta Constitución no obstan para los tratados que puedan celebrarse con una o más secciones de la Antigua República de Centro América con el fin de volver a la unión.

TITULO V

DEL PODER LEGISLATIVO

CAPITULO I.

De su organización.

Art. 89.- El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso de Diputados. Este se reunirá en la capital de la República, ordinariamente, el cinco de diciembre de cada año sin necesidad de convocatoria.

Los Diputados deben ser ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, mayores de veinticinco años, hondureños por nacimiento y naturales o vecinos del departamento por el cual fueren electos.

Art. 90.- Las sesiones del Congreso Nacional durarán sesenta días, prorrogables hasta cuarenta, cuando lo exijan asuntos de interés actual.

Art. 91.- El Congreso tendrá también sesiones extraordinarias cuando así lo acuerde por dos tercios de votos de sus miembros, o cuando sea convocado por el Poder Ejecutivo.

En estos casos sólo tratará de los asuntos que motivaron el respectivo decreto.

Art. 92.- Instalado el Congreso en la capital, podrá acordar trasladarse a otra población.

Art. 93.- El primero de diciembre de cada año se reunirán los Diputados en juntas preparatorias, y con la concurrencia de cinco, por lo menos, se organizará el directorio a fin de dictar las providencias necesarias para la instalación del Congreso.

Art. 94.- Dos terceras partes de los miembros de que se compone el Congreso, serán suficientes para celebrar sesiones.

Art. 95.- Un número de cinco Diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso, para cualquier lugar de la República, cuando el Ejecutivo haya impedido su instalación o sus sesiones, o lo haya disuelto.

Art. 96.- Los Diputados serán elegidos por un periodo de seis años, - que se contarán desde el día en que las Juntas Departamentales declaren o hagan su elección; y podrán ser reelectos.

En caso de falta absoluta de un Diputado terminará su periodo el suplente llamado por el Congreso.

Art. 97.- No pueden ser Diputados:

1º. Los Secretarios y Subsecretarios de Estado.

2º. Los empleados del Poder Ejecutivo, excepto los de enseñanza.

3º. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, los Jueces de Letras, los Registradores de la Propiedad y los Oficiales del Ministerio Público.

4º. Los miembros del Tribunal Superior de Cuentas y el Fiscal General de Hacienda.

5º. Los Agentes Diplomáticos y Consulares.

6º. Los militares en servicio.

7º. Los contratistas de aguardiente y los de obras o servicios públicos que se costeen con fondos nacionales, y los que por tales contratos tengan reclamaciones contra el Estado.

8º. Los deudores morosos a la Hacienda Pública y los que tengan cuentas pendientes por la administración de fondos de la misma.

9º. Los parientes del Presidente de la República y de los Secretarios de Estado dentro del cuarto grado de consaguinidad o de afinidad.

Art. 98.- Los Diputados, desde el día de su elección, gozarán de las siguientes prerrogativas:

1º. Inmunidad personal para no ser detenidos, acusados ni juzgados - aun en Estado de Sitio, si el Congreso no los declara previamente con lugar a formación de causa.

2º. No ser demandados civilmente desde quince días antes hasta quince días después de las sesiones ordinarias o extraordinarias del Congreso, salvo el caso de reconvención.

3º. No ser llamados al servicio militar, sin su consentimiento.

4º. No ser extrañados de la República, ni confinados durante el periodo para el cual han sido electos.

5º. No ser responsables en ningún tiempo por sus opiniones o iniciativas parlamentarias.

Art. 99.- Los Diputados no están obligados a aceptar empleos públi-

cos. Si voluntariamente aceptaren alguno de los comprendidos en el artículo 97 dejan, por el mismo hecho, de ser Diputados.

Art. 100.- La elección de Diputados al Congreso se hará sobre la base de un Diputado propietario y un suplente por cada veinticinco mil habitantes. Si hubiere fracciones, se elegirá un Diputado más por cada fracción que exceda de la mitad de la base.

Sin embargo, los departamentos que tuvieran una población menor elegirán un Diputado propietario y un suplente.

CAPITULO II

De las atribuciones del Congreso.

Art. 101.- Corresponden al Congreso las atribuciones siguientes:

- 1º. Abrir, suspender y cerrar sus sesiones.
- 2º. Convocar las sesiones extraordinarias cuando lo estime conveniente.
- 3º. Calificar la elección de sus miembros con vista de las credenciales y recibirles la promesa de ley.
- 4º. Llamar a los respectivos suplentes, en caso de falta absoluta o de legítimo impedimento de los propietarios; y mandar reponer las vacantes que ocurran.
- 5º. Admitir la renuncia de sus miembros por causas legales debidamente comprobadas.
- 6º. Formar su Reglamento Interior.
- 7º. Convocar a elecciones de Autoridades Supremas.
- 8º. Hacer el escrutinio de votos para Presidente y Vicepresidente de la República y declarar electos a los ciudadanos que hubieren obtenido mayoría absoluta.
- 9º. En caso de no haber mayoría absoluta, hacer la elección de Presidente y Vicepresidente entre los dos ciudadanos que hubieren obtenido para cada cargo mayor número de sufragios populares. Y si el Congreso no hiciere la declaratoria o la elección de Presidente o Vicepresidente dentro de veinte días contados desde su instalación, la hará la Corte Suprema de Justicia dentro de los siete días anteriores a la fecha señalada para tomar posesión de esos cargos, quedando facultada dicha Corte, en este caso, para recibir la promesa de ley, a los electos.

Cuando concurren en un mismo ciudadano diversas elecciones, será determinada la preferencia en el orden siguiente: 1º Presidente. - - 2º. Vicepresidente. 3º. Diputado. La elección de propietario se preferirá a la de suplente.

10. Elegir para el periodo constitucional cinco Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia y tres Magistrados suplentes. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, elegir al que deba terminar su periodo.

11. Elegir al Contador Mayor y Contadores de Glosa, propietarios y suplentes, del Tribunal Superior de Cuentas, al Fiscal General de Hacienda y al Tesorero de Justicia.

12. Recibir la promesa constitucional a los funcionarios que elija o declare electos, y admitirles o no sus renunciaciones, inclusive a los que declare electos la Corte Suprema de Justicia en el caso del número 9 de este artículo.

13. Cambiar la residencia de los Supremos Poderes por causas graves.

14. Declarar con lugar a formación de causa al Presidente y Vicepresidente y de la República, a los Diputados, a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los Secretarios de Estado y a los Agentes Diplomáticos durante sus funciones.

15. Conceder amnistía por delitos políticos.

Fuera de este caso, el Congreso no podrá dictar resoluciones por vía de gracia.

16. Decretar premios y conceder privilegios temporales a los autores o inventores y a los que hayan introducido nuevas industrias o perfeccionado las existentes de utilidad general.

17. Conceder o negar permiso a los hondureños para aceptar en el país empleos o condecoraciones de otra nación.

18. Aprobar, modificar o improbar las contrataciones celebradas por el Ejecutivo, en los casos del artículo 63, o cuando hayan de prolongarse sus efectos al siguiente periodo presidencial.

19. Aprobar o improbar la conducta del Poder Ejecutivo.

20. Declarar en Estado de Sitio la República o parte de ella, conforme a la ley.

21. Conferir los grados de Mayor a General de División a iniciativa del Poder Ejecutivo.

22. Permitir o negar el tránsito por la República de tropas de otro país.

23. Declarar la guerra y hacer la paz.

24. Disponer de todo lo conveniente a la seguridad y defensa de la República.

25. Aprobar o improbar los tratados celebrados con las demás naciones.

26. Fijar en cada reunión ordinaria el número de fuerzas del Ejército permanente.

27. Aprobar o improbar las cuentas de los gastos públicos, cuando se sobrepasen las partidas fijadas en el Presupuesto General de Gastos.

28. Crear y suprimir empleos y decretar honores y pensiones por relevantes servicios prestados a la Patria.

29. Acordar subvenciones para objetos de utilidad pública; y decretar subsidios para promover nuevas industrias o mejorar las existentes.

30. Fijar anualmente el Presupuesto General de Gastos, tomando por base los ingresos probables pudiendo prorrogarlo para el año siguiente.

31. Decretar el peso, ley y tipo de la moneda nacional y el patrón de pesas y medidas.

32. Ejercer el control supremo de las rentas públicas.

33. Imponer contribuciones y otras cargas públicas.

34. Reglamentar el pago de la deuda nacional.

35. Decretar empréstitos.

36. Aprobar o improbar la enajenación de los bienes nacionales o su aplicación a usos públicos.

37. Reglamentar el comercio marítimo, terrestre y aéreo.

38. Habilitar puertos y crear y suprimir aduanas.

39. Decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

40. Dar leyes para el control de los cambios internacionales y esta
bilización del sistema monetario.

41. Establecer los emblemas nacionales.

42. Las demás que le confiera la ley.

Art. 102.- El Poder Legislativo no podrá suplir o declarar el estado civil de las personas, ni conceder títulos profesionales. Los estudios y formalidades que para la obtención de dichos títulos requieran las leyes de Instrucción Pública no podrán dispensarse, salvo reforma de carácter general de aquellas leyes.

Art. 103.- Las facultades del Poder Legislativo son indelegables, - excepte las que se refieren a dar posesión a los altos funcionarios.

CAPITULO III

De la formación, sanción y promulgación de la ley.

Art. 104.- Tienen exclusivamente la iniciativa de la ley los Diputados, el Presidente de la República, por medio de los Secretarios de Estado y la Corte Suprema de Justicia en asuntos de su competencia.

Cuando el Congreso estime necesaria la emisión de una ley, podrá nombrar una comisión de su seno para elaborar el proyecto correspondiente.

Art. 105.- Ningún proyecto de ley será definitivamente votado sino después de tres deliberaciones efectuadas en distintos días, salvo caso de urgencia calificado por dos tercios de votos.

Art. 106.- Todo proyecto de ley al aprobarse por el Congreso se pasará al Poder Ejecutivo a más tardar dentro de tres días de haber sido votado a fin de que le dé su sanción y lo haga promulgar como ley.

Art. 107.- La sanción de la ley se hará con esta formula: "Por tanto: Ejecutese".

Art. 108.- Si el Poder Ejecutivo encontrare inconvenientes para sancionar el proyecto de ley, lo devolverá al Congreso, dentro de diez días, con esta formula: "Vuelva al Congreso", exponiendo las razones en que funda su desacuerdo. Si en el termino expresado no lo objetare, se tendrá como sancionado y lo promulgará como ley.

Cuando el Ejecutivo devolviera el proyecto, el Congreso lo someterá a nueva deliberación; y si fuere ratificado por dos tercios de votos, lo pasará de nuevo al Poder Ejecutivo, con esta formula: "Ratificado constitucionalmente", y aquel lo publicará sin tardanza.

Si el veto se fundare en que el proyecto de ley es inconstitucional, no podrá someterse a una nueva deliberación sin oír previamente el dictamen de la Corte Suprema de Justicia. Esta emitirá su informe en el término que el Congreso lo señale.

Art. 109.- Cuando el Congreso vote un proyecto de ley al terminar sus sesiones y el Ejecutivo crea inconveniente sancionarlo, está obligado a darle aviso inmediatamente para que permanezca reunido hasta diez días, contados desde la fecha en que aquel recibió el proyecto, y

no haciendolo, deberá ratificarlo en los ocho primeros días de las sesiones del Congreso siguiente.

Art. 110.- No será necesaria la sanción ni el Ejecutivo podrá poner el veto en los actos y resoluciones siguientes:

1º. En las elecciones que el Congreso haga o declare, o en las renunciaciones que admita o deseche.

2º. En las declaraciones de haber o no lugar a formación de causa.

3º. En la Ley de Presupuesto.

4º. En los decretos que se refieran a la conducta del Poder Ejecutivo.

5º. En los reglamentos que se refieran a la conducta del Poder Ejecutivo.

6º. En los reglamentos que expida para su régimen interior.

6º. En los acuerdos para trasladar su residencia a otro lugar, temporalmente, y para suspender sus sesiones, o para convocar a sesiones extraordinarias.

7º. En los tratados o contratos que impone el Congreso.

En estos casos el Ejecutivo promulgará la ley con esta fórmula: "Por tanto, Publíquese".

Art. 111.- Siempre que un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenidas en los Códigos de la República, no podrá discutirse sin oír la opinión de aquel Tribunal. La Corte emitirá su informe en el término que el Congreso lo señale.

Esta disposición no comprende las leyes del orden político, económico y administrativo.

Art. 112.- Ningun proyecto de ley desechado, total o parcialmente, - podrá discutirse de nueva en la misma legislatura.

Art. 113.- La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de transcurridos veinte días de terminada su publicación en el periódico oficial "La Gaceta".

Podrá sin embargo, restringirse o ampliarse en la ley misma el plazo de que habla este artículo y de ordenarse en casos especiales otra forma de promulgación.

TITULO VI

DEL PODER EJECUTIVO

CAPITULO I

De su organización.

Art. 114.- El Poder Ejecutivo se ejerce por un ciudadano que se denomina Presidente de la República; en su defecto por un Vicepresi-

dente; en defecto de éste por el ciudadano que desempeñe la Presidencia del Congreso Nacional o haya desempeñado este cargo en la última legislatura ordinaria; y, a falta de éste último, por el ciudadano Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 115.- Para ser electo Presidente o Vicepresidente de la República se necesita ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de treinta años y hondureño por nacimiento.

Art. 116.- El Presidente y el Vicepresidente de la República serán electos popular y directamente, y su elección será declarada o hecha por el Congreso o por la Corte Suprema de Justicia, como queda prescrito.

Art. 117.- El periodo presidencial será de seis años y empezará el primero de enero.

Art. 118.- No podrán ser electos Presidente y Vicepresidente de la República para el periodo siguiente:

1º. El ciudadano que hubiere ejercido la presidencia en propiedad o interinamente, en el curso de un periodo.

2º. Los Secretarios de Estado que ejercieren o hubieren ejercido su cargo seis meses antes de la practica de las elecciones.

3º. Los parientes del Presidente y Vicepresidente de la República, dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad.

Art. 119.- En caso de impedimento temporal del Presidente de la República lo sustituirá en sus funciones el Vicepresidente; y en su defecto, los ciudadanos que expresa el artículo 114.

Si la falta del Presidente fuere absoluta, el Vicepresidente ejercerá el Poder Ejecutivo por el tiempo que falta del periodo; pero si también faltare de modo absoluto el Vicepresidente, quien lo sustituya por la ley, convocará a elecciones, un mes después para un periodo constitucional que empezará el primero de enero siguiente a la convocatoria.

Art. 120.- Mientras recibe la Presidencia el llamado por la ley, - ejercerá el Poder Ejecutivo el Consejo de Ministros; y éste llamará inmediatamente al nuevo funcionario para darle posesión si no estuviere reunido el Congreso.

CAPITULO II

De las atribuciones del Poder Ejecutivo.

Art. 121.- El Presidente de la República tiene la administración general del país.

Son sus atribuciones:

1º. Presentar en la instalación de cada Congreso ordinario una relación general de los actos de su administración.

2º. Presentar, por medio de los respectivos Secretarios de Estado, dentro de los ocho primeros días de la instalación del Congreso, un informe o memoria circunstanciada de todos los ramos de la Administración.

3º. Sancionar las leyes, usar del veto en los casos en que corresponda y promulgar sin demora aquellas disposiciones legislativas que no necesiten de la sanción del Ejecutivo.

4ª. Ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo al efecto los decretos y órdenes conducentes, sin alterar el espíritu de aquellas.

5ª. Velar porque todos los empleados de la República cumplan los deberes que la ley impone, sin intervenir en el ejercicio de sus funciones.

6ª. Nombrar los Secretarios y Subsecretarios de Estado, Tesoreros Especiales y demás empleados del Departamento Ejecutivo, conforme a la ley.

7ª. Remover los empleados de su libre nombramiento.

8ª. Mantener ilesos la independencia, el honor de la Nación y la integridad de su territorio.

9ª. Conservar la paz y seguridad interior de la República y repeler todo ataque o agresión exterior.

10. Declarar la guerra y hacer la paz; y permitir o negar el tránsito por la República de tropas terrestres, navales o aéreas de otro país, en receso del Congreso.

11. Ejercer el mando en jefe de las fuerzas de tierra, mar y aire.

12. Disponer de las fuerzas militares, organizarlas y distribuir las de conformidad con la ley, según las necesidades de la República.

13. Conceder patentes de corso y cartas de represalia.

14. Conferir grados militares desde Subteniente hasta Capitán.

15. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias.

16. Mandar a reponer las vacantes de Diputados, en receso del Congreso, de conformidad con la ley, a más tardar un mes después de haber ocurrido.

17. Dar a los funcionarios del Poder Judicial los auxilios y fuerzas que necesiten para hacer efectivas sus providencias.

18. Celebrar tratados y cualesquiera otras negociaciones diplomáticas, sometiéndolos a la ratificación del Congreso en las próximas sesiones.

19. Dirigir las relaciones exteriores. nombrar los Agentes Diplomáticos y Consulares de la República, recibir los Ministros y admitir los Cónsules de las naciones extranjeras.

Los Agentes Diplomáticos y los Consulares con goce de sueldo deberán ser hondureños por nacimiento, ciudadanos en ejercicio de sus derechos y tener la preparación necesaria para desempeñar el cargo.

20. Hacer que se recauden las rentas del Estado y reglamentar su inversión, con arreglo a la ley.

21. Decretar, en los casos de invasión o de guerra interior, si los recursos del Estado fueren insuficientes, un empréstito general y proporcional, de cuya inversión dará cuenta al Congreso en sus próximas sesiones.

22. Declarar en Estado de Sitio la República, o parte de ella, en receso del Congreso, de conformidad con la ley.

23. Conceder cartas de naturalización, conforme a la ley.

24. Organizar, dirigir y fomentar la instrucción pública y difundir la enseñanza popular.

25. Publicar mensualmente el estado de ingresos y egresos de las rentas públicas.

26. Nombrar, cuando lo crea conveniente, comisiones técnicas en asuntos de importancia o de trascendencia para el Estado.

27. Vigilar sobre la exactitud de la moneda nacional, prohibir la emisión y circulación de cupones y cuidar de la uniformidad de pesas y medidas.

28. Ejercer la suprema dirección de la Policía de Seguridad.

29. Conceder indultos y conmutar las penas conforme a la ley.

Art. 122.- Las providencias del Poder Ejecutivo que no se expidan por la Secretaría de Estado correspondiente, no den cumplirse.

El Presidente de la República y los Secretarios de Estado serán responsables por las disposiciones que dicten en contravención a la Constitución y las leyes.

Art. 123.- El Vicepresidente de la República gozará de las mismas prerrogativas que los Diputados.

CAPITULO III

De los Secretarios de Estado.

Art. 124.- Para la administración general del país, habrá de cuatro a siete Secretarías de Estado, entre las cuales se distribuirán los ramos de las Relaciones Exteriores, Hacienda, Crédito Público, - Guerra, Marina, Aviación, Gobernación, Justicia, Beneficiencia, Sanidad, Educación Pública, Fomento, Trabajo, Agricultura y Comercio.

Art. 125.- Los Secretarios de Estado deben ser hondureños por nacimiento, mayores de veinticinco años y ciudadanos en ejercicio de sus derechos.

Art. 126.- No pueden ser Secretarios de Estado:

1º. Los parientes del Presidente y Vicepresidente de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad.

2º. Los que hubieren administrado o recaudado valores públicos, - mientras que no tengan el finiquito de olvencia de sus cuentas.

3º. Los contratistas de aguardiente y los de obras y servicios públicos por cuenta de la Nación; y los que por tales contratas tengan reclamaciones pendientes.

4º. Los deudores a la Hacienda Pública.

Art. 127.- Los Secretarios de Estado pueden asistir sin voto a las deliberaciones del Congreso.

A iniciativa de un Diputado, la Directiva del Congreso debe llamarlos, y aquellos concurrir a contestar las interpelaciones - que se les haga sobre asuntos referentes a la administración; excepto los de los ramos de Guerra y Relaciones Exteriores, si juzgan necesaria la reserva.

Art. 128.- Los Subsecretarios de Estado deben tener las mismas - condiciones que los Secretarios, y sustituirán a éstos por ministerio de la ley.

TITULO VII

Del Poder Judicial.

CAPITULO I

De su organización.

Art. 129.- El Poder Judicial de la República se jerce por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones u por los Jueces Inferiores que la ley establezca.

La Corte Suprema residirá en la capital de la República y estará compuesta por cinco Magistrados propietarios. Tendrá, además, tres suplentes.

Art. 130.- Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, hondureño por na cimiento, abogado y mayor de treinta años.

Art. 131.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por el Congreso Nacional.

Art. 132.- No pueden ser electos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia los que tengan cualquiera de las inhabilidades estableci das para los Secretarios de Estado.

Art. 133.- Los Magistrados de las Cortes de Apelaciones serán nom brados de entre los abogados que hayan cumplido veinticinco años de edad.

Art. 134.- Los Jueces de Paz serán nombrados por los Jueces de Le tras, Departamentales o Seccionales.

Art. 135.- No pueden ser Magistrados ni Jueces en un mismo Tribu nal las personas ligadas de parentesco, dentro del cuarto grado de - consanguinidad o segundo de afinidad.

Art. 136.- El periodo de los Magistrados de la Corte Suprema de - Justicia será de seis años y tomarán posesión el primero de enero.

Art. 137.- La administración de Justicia es gratuita en la Repú blica.

Art. 138.- Un mismo Juez no puede serlo en diversas instancias en una misma causa.

Tampoco podrán ser Jueces en una misma causa los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Art. 139.- Los Magistrados, Jueces y Oficiales del Ministerio Pú blico no podrán ser obligados a prestar servicio militar, ni a concu rrir a ejercicios o prácticas militares.

Art. 140.- Los Tribunales de Justicia podrán requerir el auxilio de la fuerza armada para el cumplimiento de sus resoluciones y si les fuere negado o no la hubiere disponible, lo exigirán de los ciudada nos. El que indebidamente se negare a dar auxilio incurrirá en res ponsabilidad.

Art. 141.- Es facultad privativa de las Cortes y demás Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado. A ellos corresponde la - plicación de las leyes en caso concretos que legalmente se sometan a su conocimiento, y negarles cumplimiento cuando sean contrarias a la Constitución.

Art. 142.- La ley reglamentará la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia.

Art. 143.- La Corte Suprema de Justicia será presidida por uno de los Magistrados Propietarios.

Las funciones del Presidente durarán un año, contado desde el primero de enero, turnándose los Magistrados por orden de antigüedad en el servicio del Tribunal. A falta de ésta, se estará a la antigüedad del título.

Los Magistrados tendrán el rango y precedencia correspondientes a su antigüedad en el servicio del Tribunal.

Cuando el Presidente de la Corte Suprema de Justicia pase a desempeñar la Presidencia de la República, se repondrá en el primer cargo conforme al Reglamento Interior de dicho Tribunal.

CAPITULO II

De las atribuciones de la Corte Suprema.

Art. 144.- La Corte Suprema de Justicia, además de las atribuciones que la ley le confiere, ejercerá las siguientes:

- 1ª. Hacer su Reglamento Interior.
- 2ª. Conocer de los delitos oficiales y comunes de los altos funcionarios, cuando el Congreso los haya declarado con lugar a formación de causa.
- 3ª. Autorizar a los abogados y notarios, recibidos dentro o fuera de la República, para el ejercicio de su profesión, y suspenderlos; todo con arreglo a la ley.
- 4ª. Declarar que ha lugar o no a formación de causa contra los miembros del Tribunal Superior de Cuentas, contra el Fiscal General de Hacienda y contra los principales empleados nacionales o departamentales que la ley determine.
- 5ª. Conocer de las causas de presas, de extradición y de las demás que deban juzgarse con arreglo al Derecho Internacional.
- 6ª. Conocer en casación de las sentencias dictadas en segunda instancia.
- 7ª. Nombrar los Magistrados de las Cortes de Apelaciones, los Jueces Departamentales y Seccionales y los Oficiales del Ministerio Público, de conformidad con la ley.
- 8ª. Publicar "La Gaceta Judicial".

Los gastos de esta publicación se tomarán de los fondos de Justicia.

9ª. Admitir o no la renuncia de los funcionarios de su nombramiento, y conocer licencia tanto a éstos como a sus propios miembros.

Los Jueces Departamentales o Seccionales admitirán o no las renunciaciones, y concederán licencia a los Jueces de Paz.

CAPITULO III

De la inconstitucionalidad y revisión.

Art. 145.- Podrá establecerse, directamente ante la Corte Suprema de Justicia, el recurso de inconstitucionalidad de una ley que se refiera a asuntos no ventilables ante los Tribunales, por toda persona que al serle aplicada en un caso concreto sea perjudicada en sus derechos.

La ley reglamentará el uso de este recurso.

Art. 146.- Ningún poder ni autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo lo que dispone el artículo siguiente.

Art. 147.- Las causas juzgadas en materia penal pueden ser revisadas en toda época en favor de los condenados, a pedimento de éstos, de cualquiera otra persona, del Ministerio Público o de oficio.

La ley reglamentará los casos y la forma de la revisión.

CAPITULO IV

De la Tesorería de Justicia.

Art. 148.- Se establece una Tesorería Especial de Justicia para el pago de los sueldos correspondientes a los empleados de la administración de Justicia y de los gastos del mismo ramo.

Una ley determinará los ingresos de dicha Tesorería.

TITULO VIII

De la Hacienda Nacional.

CAPITULO I

De los bienes nacionales.

Art. 149.- Forman el Tesoro Público de la Nación:

1º. Todos sus bienes, muebles y raíces.

2º. Todos sus créditos activos.

3º. El producto de los derechos, impuestos, contribuciones y demás cargas públicas.

Art. 150.- El Estado tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada de la tierra y de las aguas, ya sea de nacionales o de extranjeros, las modalidades que dicte el interés general - por causa de necesidad o utilidad pública, previa indemnización.

Art. 151.- Para crear el patrimonio agrícola, el Estado dará en -

propiedad lotes de terreno a familias de hondureños naturales o naturalizados.

La ley reglamentará las condiciones de adquisición y las obligaciones del donatario.

Art. 152.- Corresponde al Estado el dominio directo e imprescriptible de las riquezas naturales que se encuentren en el subsuelo.

Su explotación y beneficio serán determinados en las leyes respectivas.

Art. 153.- Corresponde al Estado el dominio pleno, inalienable e imprescriptible de las aguas de los mares territoriales en una extensión de doce kilómetros contados desde la más baja marea; y el dominio, también pleno, inalienable e imprescriptible de sus playas, y de sus lagos, lagunas, esteros, ríos y riachuelos de corrientes congstantes. Exceptúanse las vertientes que nacen y mueren dentro de la propiedad particular.

Art. 154.- El uso de las aguas a que se refiere el artículo anterior corresponde a los habitantes de la Nación; pero el Gobierno podrá celebrar contratas relativas al uso de ellas, sin establecer derechos exclusivos y sin perjuicio de las ordenanzas generales o locales que sobre la materia se promulgen.

Art. 155.- Se prohíbe la enajenación del dominio pleno, excepto para los lotes de familia, de los terrenos del Estado que a continuación se expresan:

1º. Los de las zonas limitrofes a los Estados vecinos y los situados en el litoral de ambos mares, en una extensión de cuarenta kiló-metros hacia el interior del país.

2º. Los de los ejidos de pueblos y aldeas.

3º. Los de las islas, cayos, arrecifes, escolladeros, peñones, -sirtes y bancos de arena.

4º. Los terrenos medidos y titulados a las tribus indígenas extinguidas y los que hubieren pertenecido a aldeas y municipios que ya no existen.

Art. 156.- Los bienes fiscales son imprescriptibles.

Art. 157.- Constituyen el tesoro cultural de la Nación:

1º. Toda la riqueza artística e histórica existente en el país, la cual estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación; en cuyos casos deberá adquirirla para el mismo.

2º. Las ruinas de las antiguas poblaciones y los objetos arqueologicos, los cuales son inalienables e imprescriptibles.

3º. Los lugares notables por su belleza natural o por su valor artístico o histórico.

El Estado organizará un registro de dicho tesoro cultural, asegurará su custodia y establecerá las respectivas responsabilidades penales.

CAPITULO II

Del Presupuesto.

Art. 158.- El Presupuesto será fijado por el Congreso con vista del proyecto que presente el Poder Ejecutivo; pudiendo prorrogarlo para el año siguiente.

Art. 159.- El cálculo de los ingresos probables no excederá del promedio de ellos durante los cinco años anteriores, más un tanto por - ciento no mayor de cinco, salvo el caso de creación de nuevas rentas.

Art. 160.- El proyecto de Presupuesto será presentado por el Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda dentro de los ocho días siguientes a la instalación del Congreso.

Art. 161.- Todo gasto que se haga fuera del Presupuesto es ilegal. Y al ser improbadado por el Congreso, se deducirá la responsabilidad, civil y criminal a quien corresponda.

Art. 162.- Una Ley Orgánica reglamentará la formación, ejecución y liquidación del Presupuesto.

Art. 163.- Créase la Tesorería General de la República y la Especial de Caminos, con los ingresos que determine la ley.

CAPITULO III

De la fiscalización.

Art. 164.- Para fiscalizar la administración del Tesoro Nacional, - habrá un Tribunal Superior de Cuentas, cuyas atribuciones serán:

1ª. Examinar, aprobar o improbar las cuentas de los que administran fondos públicos.

2ª. Devolver al Ejecutivo las órdenes que no estuvieren arregladas a la ley, para los efectos que ella determine.

Art. 165.- Los miembros del Tribunal Superior de Cuentas deberán ser mayores de veinticinco años, tener el título de Abogado o Perito Mercantil, no ser acreedores ni deudores de la Hacienda Pública, no tener cuentas pendientes con ella y no ser contratistas ni concesionarios. Su número, organización y atribuciones serán determinados por la ley - que regula su funcionamiento.

Art. 166.- El Poder Ejecutivo, para celebrar contratos de importancia que comprometan a la Hacienda Nacional, deberá publicar previamente la propuesta en el periodico oficial "La Gaceta"; y, en el caso de no presentarse quien mejore la propuesta, podrá celebrar la contrata.

Siempre que se trate de obras o servicios públicos importantes deberá someterse a licitación el respectivo contrato.

Exceptúanse los casos que tengan por objeto proveer a las necesidades de la guerra y los contratos que por su naturaleza no puedan celebrarse sino con persona determinada.

Art. 167.- Habrá un Fiscal General de Hacienda propietario y un suplente para representar los intereses de la Hacienda Pública, cuyas atribuciones serán determinadas por la ley.

Los miembros del Tribunal Superior de Cuentas y el Fiscal General de Hacienda tendrán las inhabilidades establecidas para los Diputados.

Art. 168.- El período de los miembros del Tribunal Superior de Cuentas y del Fiscal General de Hacienda será de seis años y comenzará el primero de año.

TITULO IX

Del Ejército.

Capítulo Unico.

Art. 169.- El Ejército es una institución destinada a la defensa nacional y al mantenimiento de la paz y el orden público.

Art. 170.- La fuerza pública es esencialmente obediente.

Ningún cuerpo armado puede deliberar ni ejercer el derecho de petición.

La obediencia militar será arreglada a la ley a las ordenanzas militares.

Art. 171.- El servicio militar es obligatorio. Todos los hondureños de diez y ocho a treinta y dos años forman el Ejército activo; de más de treinta y dos a cuarenta y cinco, la reserva.

Una ley especial hará la organización de las milicias y de la Guardia Nacional que comprenderá a los individuos de cuarenta y cinco a cincuenta y cinco años y establecerá las causas de exención del servicio.

En caso de guerra internacional son soldados todos los hondureños hábiles para portar arma.

Art. 172.- Los grados militares sólo se adquieren por riguroso ascenso. Los militares no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones sino de la manera determinada por la ley.

Art. 173.- Los militares que tengan grado en el Ejército tienen derecho, después de cumplir cuarenta y cinco años, a renunciar sus despachos y quedar separados del servicio.

Art. 174.- Se establece el fuero de guerra para los delitos militares.

Art. 175.- Se crea el Estado Mayor del Ejército. Una ley determinará su organización y atribuciones. También se establecerán escuelas militares para la enseñanza de las diferentes armas del Ejército.

TITULO X
DEL REGIMEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

CAPITULO I

Del Gobierno Departamental.

Art. 176.- Para la administración pública, se divide el territorio de la Nación en departamentos, cuya creación y límites decretará el - Congreso Nacional. En cada departamento habrá los funcionarios que la ley determine.

Art. 177.- Los funcionarios departamentales serán hondureños, mayores de veinticinco años y ciudadanos en ejercicio de sus derechos.

Art. 178.- El régimen político, militar, judicial y económico del territorio de La Mosquitia podrá ser distinto del adoptado para el resto de la República, según lo reglamente el Poder Ejecutivo.

CAPITULO II

De la administración municipal.

Art. 179.- Para la administración de los departamentos, éstos se - dividen en municipios autónomos, representados por Municipalidades - electas por el pueblo.

Art. 180.- La ley reglamentará la organización y atribuciones de - las Municipalidades. Estas atribuciones serán puramente económicas y administrativas.

Art. 181.- En el ejercicio de sus funciones privativas serán absolutamente independientes de los otros Poderes, sin contrariar en ningún caso las leyes generales del país; y serán responsables por los - abusos que cometan colectiva o individualmente, ante los Tribunales - de Justicia.

Art. 182.- Las Municipalidades nombrarán libremente los empleados de su dependencia y los agentes de policía que costeen con sus propios fondos.

Art. 183.- Ni los Municipales ni el Tesorero podrán desempeñar cargo alguno municipal en los períodos siguientes mientras no haya recaído finiquito de solvencia en las cuentas en que hayan intervenido.

Art. 184.- Ningún miembro de las Municipalidades podrá ser obligado a aceptar otro nombramiento ni ser llamado al servicio militar, - salvo el caso de la guerra internacional. Es prohibido a los miembros de la Corporación Municipal el desempeño de empleos municipales remunerados.

TITULO XI

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

Capitulo Unico.

Art. 185.- Todo funcionario público, al tomar posesión de su destino, hará la promesa siguiente: Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

Art. 186.- Todo empleado o funcionario público es reponsable por sus actos.

Art. 187.- El Congreso, con vista de la información judicial instruida y de conformidad con los trámites que determine su Reglamento, declarará si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente y Vicepresidente de la República, los Diputados, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Secretarios de Estado y los Agentes Diplomáticos, por los delitos comunes u oficiales que cometan mientras subsista su caracter oficial, para elefecto de ponerlos, en su caso, a disposición del Tribunal competente.

Art. 188.- No obstante la aprobación que el Congreso dé a la conducta del Ejecutivo, el Presidente de la República y los Secretarios de Estado podrán ser acusados por delitos oficiales.

El término de prescripción para estas acciones empezará a correr cinco años después de haber cesado en sus funciones el acusado.

Art.- 189.- Los empleados y funcionarios públicos que violaren cualquiera de los derechos y garratías consignados en esta Constitución serán responsables criminal y civilmente; y no podrán obtener indulto ni conmuta en el período en curso ni en el siguiente.

La prescripción de los delitos y penas en que incurran no comenzará sino después de dichos períodos.

Art. 190.- Cuando fuere absuelto un funcionario público a quien se hubiere declarado con lugar a formación de causa, volverá al ejercicio de sus funciones.

TITULO XII

DEL TRABAJO Y DE LA FAMILIA

Capítulo Unico.

Art. 191.- La jornada máxima obligatoria asalariada será de ocho horas diarias. Por cada seis días de trabajo habrá uno de descanso.

Una ley sobre accidentes del trabajo establecerá las responsabilidades del patronato y las condiciones que se harán efectivas.

Art. 192.- Se prohíben las labores insalubres o peligrosas y el trabajo nocturno industrial para las mujeres y los menores de diez y seis

años. Dichas personas no deberán trabajar en los establecimientos comerciales después de las seis de la tarde.

Art. 193.- El trabajo de los menores de doce años no podrá ser objeto de contrato, y el de los mayores de esa edad y menores de diez y seis años, tendrá como jornada máxima la de seis horas por día.

Art. 194.- El salario deberá ser pagado exclusivamente en moneda efectiva de curso legal en la República.

Art. 195.- Las grandes empresas industriales están obligadas a establecer hospitales en el lugar de sus actividades para atender a los accidentes o enfermedades de sus operarios.

Art. 196.- Es deber del Estado velar por la salubridad pública y el bienestar higiénico de la Nación.

Art. 197.- La familia, como fundamento de la sociedad, estará bajo la protección del Estado.

En consecuencia, proveerá a la organización de su patrimonio, al amparo efectivo de la maternidad y a la protección de los menores.

Art. 198.- El Estado impartirá y estimulará la enseñanza adecuada para que los habitantes de la República puedan adquirir instrucción agrícola, industrial, de artes y oficios.

TITULO XIII

DE LAS LEYES CONSTITUCIONALES.

Capítulo Unico.

Art. 199.- Son Leyes Constitutivas: la de Imprenta, la Agraria, la de Elecciones, la de Amparo y la de Estado de Sitio.

TITULO XIV

DE LAS REFORMAS Y OBSERVANCIA DE LA CONSTITUCION Y LEYES CONSTITUTIVAS.

CAPITULO I

De la reforma.

Art. 200.- La Constitución y las Leyes Constitutivas podrán reformarse parcialmente por un Congreso en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de sus miembros, debiendo ratificarse el respectivo decreto por la siguiente legislatura ordinaria, también por dos tercios de votos de sus miembros para que la reforma entre en vigor.

La reforma de los artículos 117, 118 y 200 o de uno o mas de estos tres y la reforma total de la Constitución y Leyes Constitutivas sólo podrá hacerse por una Asamblea Constituyente, convocada al efecto por el Congreso Nacional.

CAPITULO II

De la observancia.

Art. 201.- Todas las leyes, decretos, reglamentos, órdenes y demás disposiciones que estuvieren en vigor al promulgarse esta Constitución, continuarán observándose en cuanto no se opongan a ella y mientras no fueren legalmente derogadas o modificadas.

Art. 202.- La Presidencia y Vicepresidencia Constitucional de la República ejercidas, respectivamente, por los ciudadanos Doctor y General don Tiburcio Carías Andino e Ingeniero y General don Abraham Williams Calderón, terminarán el primero de enero de mil novecientos cuarenta y tres; y, con tal fin, quedarán en suspenso hasta aquella fecha los efectos de los artículos 116, 117 y 118 de esta Constitución.

Art. 203.- Al clausurar sus sesiones la actual Asamblea Nacional Constituyente quedará convertida en Congreso Legislativo ordinario, y los Diputados que integres éste terminarán su período el cuatro de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos; quedando en suspenso hasta esta fecha los efectos de los artículos 96, párrafo 1º y 100 de esta Constitución.

Art. 204.- Esta Constitución Política empezará a regir el quince de abril del año en curso, quedando derogada en esa fecha la emitida de diez de septiembre de mil novecientos veinticinco.

Dado en Tegucigalpa, en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, a los veintiocho días del mes de marzo de mil novecientos treinta y seis.

ANTO. C. RIVERA, Presidente, Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.- TIMOTEO CHIRINOS Z., Vicepresidente, Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.- CARLOS IZAGUIRRE, Diputado por el Departamento de El Paraíso.- MARTIN M. AGUERO, Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.- MARIANO JIMENEZ T., Diputado por el Departamento de Santa Barbara.- JESUS AGUILAR PAZ, Diputado por el Departamento de Santa Barbara.- Y. LANDA BLANCO, Diputado por el Departamento de Cortés.- A.J. ALVARADO, Diputado por el Departamento de Copán.- J. HECTOR LEIVA, Diputado por el Departamento de Valle.- R. ALVARADO ROMERO, Diputado por el Departamento de Valle.- GREGORIO A. LOBO, Diputado por el Departamento de Olancho. PEDRO AMAYA R., Diputado por el Departamento de Santa Barbara.- MANUEL LUNA C., Diputado por el Departamento de Copán.- RAFAEL AYALA, Diputado por el Departamento de Intibucá.- MIGUEL M. LAINEZ, Diputado por el Departamento de El Paraíso.- CARLOS CONRADO BONILLA, Diputado por el Departamento de Cortés.- JESUS B. MEMBREÑO, Diputado por el Departamento de Gracias.- G. BOQUIN B., Diputado por el Departamento de Comayagua.- EMIGDIO MENA, Diputado por el Departamento de Santa Bárbara.- ANTO C. BUSTILLO, Diputado por el Departamento de Comayagua.- LIBERATO MENDOZA, Diputado por el Departamento de Choluteca.- VICENTE CACERES, Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.- JUAN V. MONCADA, Diputado por el Departamento de Colón.- E. CARCAMO M.,

Diputado por el Departamento de Cholutuca.- JUAN C. MONDRAGON, Diputado por el Departamento de Choluteca.- EARL C. COOPER, Diputado por el Departamento de Islas de la Bahía.- HORACIO MOYA POSAS, Diputado por el Departamento de Atlántida.- G. ELVIR, Diputado por el Departamento de El Paraíso.- R. MUÑOZ CABAÑAS, Diputado por el Departamento de Gracias.- M. FUNES A., Diputado por el Departamento de Olancho.- PLUTARCO MUÑOZ P. Diputado por el Departamento de Yoro.- PASTOR GOMEZ h., Diputado por el Departamento de Valle.- FEDERICO ORDÓÑEZ P., Diputado por el Departamento de Colón.- ALEJANDRO CASTRO, Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.- L. A. OSORIO, Diputado por el Departamento de Choluteca.- LEOPOLDO HERNANDEZ, Diputado por el Departamento de Gracias.- SALOMON PAREDES G., Diputado por el Departamento de Cortés.- FELIX PEDRO PINEL PEÑA, Diputado por el Departamento de Choluteca.- J. INOCENTE TRIMINIO, Diputado por el Departamento de El Paraíso.- M. RAMIREZ, Diputado por el Departamento de Yoro.- PEDRO F. TRIMINIO, Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.- MARCO H. RAUDALES, Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.- J.C. VALENZUELA, Diputado por el Departamento de Comayagua.- JESUS RODEZNO, Diputado por el Departamento de Ocotepeque.- ELEAZAR F. VARGAS, Diputado por el Departamento de Olancho.- M. ROMERO L., Diputado por el Departamento de Cortés.- LORENZO J. VASQUEZ, Diputado por el Departamento de La Paz.- HUMBERTO CHEVEZ PADILLA, Diputado por el Departamento de la Paz.- RODOLFO Z. VELASQUEZ, Diputado por el Departamento de Intibucá.- ALFREDO TABORA S., Diputado por el Departamento de Copán.- MIGUEL VILLELA VIDAL, Diputado por el Departamento de Ocotepeque.- SABINO TINOCO, Diputado por el Departamento de Yoro.- MONICO ZELAYA, Diputado por el Departamento de Atlántida.- JOSE ANTONIO TORRES, Diputado por el Departamento de la Paz.- FERNANDO ZEPEDA D., Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.- G. CANTARERO P., Secretario 1º, Diputado por el Departamento de Intibucá.- M.A. BATRES, Secretario 2º, Diputado por el Departamento de Gracias.- RAUL R. CUEVA, Prosecretario 1º., Diputado por el Departamento de Copán.- ANDRES FELIPE DIAZ, Prosecretario 2º., Diputado por el Departamento de Olancho.

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto: Publíquese.

Tegucigalpa, 28 de marzo de 1.936

TIBURCIO CARIAS A.

El Secretario de Estado en los Despachos de
Gobernación, Justicia, Sanidad y
Beneficiencia.

ABRAHAM WILLIAMS.

El Secretario de Estado en el Despacho de
Relaciones Exteriores.

ANTONIO BERMUDEZ M.

El Secretario de Estado en los Despachos de
Guerra, Marina y Aviación.

JUAN MANUEL GALVEZ.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público, por la
ley,

ARMANDO FLORES FIALLOS

El Secretario de Estado en el Despacho de
Instrucción Pública.

JESUS M. RODRIGUEZ h.

El Secretario de Estado en los Despachos
de Fomento, Agricultura y Trabajo.
SALVADOR AGUIRRE.

C O N S T I T U C I O N DE 1.957

Decreto Número 21

Preámbulo.

Nosotros, Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de la soberanía que el pueblo nos ha delegado, invocando el nombre de Dios y con nuestra fe puesta en el destino democrático de Honduras, decretamos y sancionamos la siguiente.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

TITULO I

El Estado y su forma de Gobierno.

Capítulo Unico.

Artículo 1º.- Honduras es un Estado soberano e independiente, constituido como República democrática, para asegurar el goce de la libertad, la justicia, el bienestar social y económico y la superación individual y colectiva de sus habitantes.

Art. 2º.- La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o a través del poder público creado por su voluntad libremente expresada.

Art. 3º.- El gobierno, a través del sistema democrático, republicano y representativo, se ejerce por tres poderes complementarios e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Art. 4º.- La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La violación de esta norma da derecho a la insurrección popular.

Art. 5º.- Los funcionarios son depositarios de la utoridad del Estado, y al jurar el fiel cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obligan a ejercerla en función de servicio público. La función de servicio compromete la responsabilidad directa del servidor público - por acción y omisión.

La acción para hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios del Estado, por actos u omisiones punibles, es pública e imprescriptible.

Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo.

Art. 6º.- El territorio de Honduras está comprendido entre los Océanos Atlántico y Pacífico y las Repúblicas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Son sus límites con la República de Guatemala, los establecidos por la sentencia arbitral emitida en Washington, Estados Unidos de América, el veintitres de enero de mil novecientos treinta y tres; con la República de Nicaragua, los establecidos por la Comisión Mixta de Límites hondureños-nicaragüense, en los años de mil novecientos y mil novecientos uno, según descripción de la primera sección de la línea divisoria, que figura en el acta segunda de doce de junio de mil novecientos, y en las posteriores, hasta el Portillo de Teotecacinte, y de este lugar hasta el Océano Atlántico, conforme al Laudo Arbitral pronunciado por su Majestad el Rey de España, el veintitres de diciembre de mil novecientos seis. Con la República de El Salvador, la línea se determinará por arreglo o por arbitraje, con vista de la documentación en que apoya su derecho, sometiéndose los tratados respectivos a la ratificación del Poder Legislativo.

Pertenecen a Honduras:

1º. Los territorios situados en tierra firme dentro de sus límites territoriales y las islas y cabos en el Golfo de Fonseca, cuyos derechos están respaldados con títulos expedidos durante el Régimen colonial Español.

2º. Las Islas de la Bahía, las Islas del Cisne (Swan Islands), Santanilla o Santillana, Viciosas, Misteriosas y los cayos: Gorda, Vivorillos, Cajones, Falso, Gracias a Dios, Los Bajos, Pichones, Palo de Campeche y los demás situados en el Atlántico que histórica y jurídicamente le pertenecen.

3º. También pertenecen al Estado de Honduras y están sujetos a su jurisdicción y control: el subsuelo, el espacio aéreo, la estratosfera, el mar territorial, y el lecho y el subsuelo de la plata forma submarina, zócalo continental e insular y otras aéreas submarinas adyacentes a su territorio fuera de la zona del mar territorial y hasta una profundidad de las aguas suprayacentes, más allá de este límite, permita la explotación de los recursos naturales del lecho y del subsuelo.

En los casos a que se refieren los tres párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, y sólo podrán hacerse concesiones por el Gobierno de la República a los particulares o sociedades civiles o mercantiles constituidas o incorporadas -

conforme a las leyes hondureñas, con la condición de que se establezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se trata y se cumpla con los requisitos que prevengan las leyes. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, - una ley especial determinará la forma en que podrá llevarse a cabo la explotación de esos productos, y de otros similares.

4º. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, el Estado se reserva el derecho de establecer la demarcación de las zonas de control y protección de las riquezas nacionales en los mares continentales e insulares que queden bajo control de Gobierno de Honduras, y de modificar dicha demarcación de acuerdo con las circunstancias sobrevinientes por razón de los nuevos descubrimientos, estudios e intereses nacionales - que fueren advertidos en lo futuro.

5º. La presente declaración de **soberanía** no desconoce legítimos derechos similares de otros Estados sobre la base de reciprocidad, ni afecta a los derechos de libre navegación de todas las naciones, conforme - al Derecho Internacional.

Art. 7º.- Ninguna autoridad puede celebrar pactos, tratados o convenciones u otorgar concesiones que comprometan la soberanía e independencia de la República. Quien lo haga será juzgado por traición a la Patria. En cualquier tiempo podrá deducirse la responsabilidad consiguiente a - quienes los hayan celebrado o contribuido a su ejecución.

Art. 8º.- Los estados extranjeros sólo podrán adquirir en el territorio de la República, sobre bases de reciprocidad, los inmuebles necesarios para sede de sus representaciones diplomáticas, sin perjuicio de - lo que establezcan los convenios internacionales.

Art. 9º.- Cualquier tratado o convención que celebre el Poder Ejecutivo referente al territorio nacional o a la organización política del país, requerirá la aprobación del Congreso Nacional, por votación no menor de tres cuartas partes de sus miembros.

Art. 10.- Honduras es un Estado disgregado de la República de Centro América. En consecuencia, reconoce como una necesidad primordial volver a la unión con uno o más Estados de la antigua Federación. A este efecto, queda facultado el Poder Legislativo para ratificar los tratados - que tienden a realizarla parcial o totalmente, siempre que se propongan de manera justa y democrática.

Art. 11.- Honduras hace suyos los principios y prácticas del Derecho Internacional que propendan a la solidaridad humana, al respeto de la - soberanía de los pueblos y al afianzamiento de la paz y la democracia - universales.

Art. 12.- Dentro de la política de solidaridad continental, Honduras proclama como ineludible la validez y ejecución de las sentencias arbitrales.

Art. 13.- Son símbolos nacionales: la Bandera, el Escudo y el Himno. La ley regulará el uso.

Art. 14.- El idioma oficial de la República es el español.

TITULO II

Nacionalidad y Ciudadanía.

CAPITULO I

De los hondureños.

Art. 15.- La nacionalidad es el vínculo espiritual y material que unifica a los hondureños por lazos de tradición, intereses y aspiraciones comunes.

Art. 16.- La nacionalidad hondureña se adquiere por nacimiento y por naturalización.

Art. 17.- Son hondureños por nacimiento:

1º. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres, a excepción de los hijos de los agentes diplomáticos y de extranjeros transeúntes.

2º. Los hijos de padre o madre hondureños nacidos en el extranjero.

3º. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves de guerra hondureña, y los nacidos en naves mercantes, cuando éstas se encuentren en aguas territoriales de Honduras; y

4º. El infante de padres ignorados encontrado en el territorio de Honduras.

Art. 18.- Se consideran como hondureños naturales, los originarios de las otras Repúblicas de CentroAmérica, que después de un año de residencia en el país, manifiesten por escrito ante la autoridad competente, el deseo de ser hondureños y llenen los requisitos legales, - siempre que exista reciprocidad en el país de origen y hasta donde ésta se extienda.

Art. 19.- Son hondureños por naturalización:

1º. Los españoles y los originarios de países americanos que tengan un año de residencia en la República.

2º. Los demás extranjeros que hayan residido en el país más de dos años consecutivos. En ambos casos, el solicitante debe renunciar previamente a su nacionalidad y manifestar su deseo de adoptar la nacionalidad hondureña ante la autoridad competente.

3º. Los que obtengan carta de naturalización decretada por el Congreso Nacional; y

4º. Los inmigrantes que formando parte de grupos seleccionados traídos por el Gobierno para fines agrícolas o industriales, después de un año de residencia en el país, llenen los requisitos de ley.

Art. 20.- Ningún hondureño naturalizado podrá desempeñar en su país de origen, funciones oficiales en representación de Honduras.

Art. 21. Ningún hondureño por nacimiento tendrá nacionalidad distinta de la hondureña, mientras resida en el territorio de la República.

Art. 22.- Ni el matrimonio, ni su disolución, afectan la nacionalidad de los conyuges o de sus hijos.

Art. 23.- La nacionalidad hondureña se pierde:

1º. Por naturalización voluntaria en país extranjero; y

2º. Por cancelación de la carta de naturalización.

Art. 24.- Todo hondureño está obligado a defender la patria, respetar las autoridades y contribuir al sostenimiento y engrandecimiento moral de la nación.

CAPITULO II

De los extranjeros.

Art. 25 .- Los extranjeros están obligados desde su ingreso al territorio de la República a respetar las autoridades y a cumplir las leyes.

Art. 26.- Los extranjeros gozan en Honduras de todos los derechos civiles de los hondureños, con las restricciones que, por razones calificadas de orden público, seguridad o interés nacional, establezcan las leyes.

Quedan sujetos a todas las cargas ordinarias y extraordinarias de caracter general a que estén obligados los hondureños.

Art. 27.- No podrán hacer reclamaciones, ni exigir indemnización alguna del Estado, sino en la forma y en los casos en que pudieran hacerlo los hondureños.

Los extrnjeros no podrán ocurrir a la vía diplomática sino en los casos de denegación de justicia. Para este efecto no se entenderá - por denegación de justicia que un fallo no sea favorable al reclamante. Los que contravinieren esta disposición perderán el derecho de habitar en el país.

Art. 28.- Los extranjeros sólo podrán desempeñar empleos en la enseñanza de las ciencias y de las artes, excepto de los de caracter directivo, y prestar al Estado servicios técnicos o de asesoramiento, cuando no haya hondureños que puedan desempeñar esos empleos o prestar estos servicios.

Art. 29.- La extradición sólo podrá otorgarse en virtud de ley o de tratados, por delitos comunes y nunca por delitos políticos, aunque por consecuencia de éstos resulte un delito común.

Art. 30.- Las leyes establecerán la forma y casos en que puede negarse al extranjero la entrada al territorio nacional.

El Poder Ejecutivo tiene la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, de conformidad con la ley, a todo extranjero cuya permanencia juzgue incoveniente.

Art. 31.- Los extranjeros tienen los mismo derechos y deberes individuales y sociales que los hondureños, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establezcan.

Art. 32.- No podrán desarrollar actividades políticas de caracter nacional ni internacional, bajo pena de ser sancionados de conformidad con la ley.

Art. 33.- Los extranjeros estarán sujetos a una ley especial.

CAPITULO III

De los ciudadanos.

Art. 34.- La ciudadanía es la condición jurídica que confiere derechos e impone deberes de orden político y de carácter patriótico a los hondureños.

Art. 35.- Son ciudadanos todos los hondureños, varones y mujeres, - mayores de dieciocho años.

Art. 36.- Son derechos del ciudadano: elegir y ser electo; asociarse para constituir partidos políticos, de acuerdo con la ley; ingresar o renunciar a los ya constituidos; optar a los cargos públicos, según sus capacidades, y los demás que reconocen las leyes de acuerdo con el ejercicio funcional de la democracia.

Los individuos de alta en el Ejército o en la Policía no podrán ejercer el sufragio, pero si serán elegibles en los casos no prohibidos por la ley.

Art. 37.- Son deberes del ciudadano: cumplir y velar por que se cumpla la Constitución de la República y servir al Estado de conformidad con las leyes.

Art. 38.- La calidad de ciudadano se suspende, se pierde y se restablece conforme a las siguientes prescripciones:

Se suspende:

1º. Por auto de prisión, declaratoria de reo, o de haber lugar a - formación de causa.

2º. Por sentencia firme que prive de los derechos políticos.

3º. Por interdicción civil, por estar declarado deudor fraudulento o por vagancia legalmente declarada; y

4º. Por negarse a desempeñar, sin justa causa, un cargo de elección popular. En este caso, la suspensión durará todo el tiempo que debiera desempeñarse el cargo rehusado.

Se pierde:

1º. Por prestar servicios, en tiempo de guerra, a enemigos de Honduras o de sus aliados.

2º. Por ayudar a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional, en contra de la Nación.

3º. Por desempeñar en el país sin la licencia debida, empleo de nación extranjera del ramo militar o de carácter político.

4º. Por aceptar, sin el permiso debido, condecoraciones que impliquen obediencia o sumisión al Gobierno que las otorgue.

5º. Por coartar la libertad de sufragio, adulterar documentos electorales o emplear medios fraudulentos para burlar la voluntad popular;

y 6º. Por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección - del Presidente de la República.

Se restablece:

- 1º. Por sobressimientamiento confirmado.
- 2º. Por sentencia firme absolutoria.
- 3º. Por cumplimiento de la pena.
- 4º. Por amnistía o por indulto; y
- 5º. Por rehabilitación de conformidad con la ley.

TITULO III

CAPITULO I

El sufragio y los partidos políticos.

Art. 39.- El sufragio es una función cívica primordial. Su ejercicio para los ciudadanos es irrenunciable como derecho e ineludible como obligación.

Art. 40.- El voto será directo, igualitario y secreto.

Art. 41.- Los partidos políticos son asociaciones constituidas conforme a la ley, por ciudadanos hondureños en pleno ejercicio de sus derechos cívicos, para fines electorales y de orientación política.

Art. 42.- Los partidos políticos legalmente organizados e inscritos, tienen carácter de instituciones de derecho público, cuya existencia y libre funcionamiento garantiza esta Constitución.

Art. 43.- Los partidos políticos deberán normar su organización, funcionamiento y actividad, de acuerdo con los principios democráticos y republicanos que inspiran esta Constitución.

Art. 44.- Los ciudadanos hondureños tienen derecho a fundar partidos políticos de conformidad con lo que establecen esta Constitución y la Ley Electoral.

Art. 45.- La Ley Electoral fijará el número necesario de afiliados, para la organización e inscripción de los partidos políticos.

Art. 46.- Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite al ciudadano participar en la vida política de la Nación.

Art. 47.- Se prohíbe la formación o funcionamiento de partidos políticos que proclamen o practiquen doctrinas contrarias al espíritu democrático del pueblo hondureño, o que por sus programas ideológicos o vinculaciones internacionales atenten contra la soberanía del Estado. En estos casos el Congreso Nacional resolverá previo informe del Consejo Nacional de Elecciones.

No quedan incluidas en esta prohibición las organizaciones que proclamen la unión centroamericana o las doctrinas panamericanas o de solidaridad continental.

CAPITULO II

Función electoral.

Art. 48.- Para todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales habrá un Consejo Nacional de Elecciones, cuya organización y atribuciones serán establecidas por la Ley Electoral.

Art. 49.- El Consejo Nacional de Elecciones tendrá jurisdicción en toda la República, será absolutamente independiente y se comunicará directamente con los Poderes Públicos.

Art. 50.- Sin perjuicio de las demás atribuciones que determine la Ley Electoral, el Consejo Nacional de Elecciones tendrá las siguientes:

- a) Dirigir y vigilar la elaboración del Censo Nacional Electoral.
- b) Registrar a los partidos políticos y a los candidatos que reúnan los requisitos establecidos por la ley.
- c) Convocar a elecciones de autoridades supremas y municipales.
- d) Mandar que se repongan las vacantes que ocurran en el Poder Legislativo.
- e) Organizar, dirigir y supervisar el proceso electoral.
- f) Proponer al Poder Ejecutivo el Presupuesto de Gastos de los organismos electorales.
- g) Recibir los expedientes relativos a los escrutinios; declarar la elección de los ciudadanos ungidos por medio del sufragio y extenderles sus credenciales.
- h) Conocer es única instancia de la nulidad de las elecciones.
- i) Oír y resolver quejas y consultas electorales; y
- j) Hacer el nombramiento de los miembros que integren los organismos electorales departamentales, y vigilar que los que formen los organismos locales, reúnan las condiciones y tengan las prerrogativas que manda la Ley Electoral.

Art. 51.- El Consejo Nacional de Elecciones será nombrado por acuerdo del Poder Ejecutivo; durará seis años en el ejercicio de sus funciones; y sus miembros tendrán las mismas condiciones, inmunidades e inhabilidades de los Diputados.

El Consejo Nacional de Elecciones se integrará en la forma siguiente:

- a) Un propietario y un suplente designado por cada uno de los partidos políticos debidamente inscritos.
- b) Un propietario y un suplente designado por las asociaciones de comerciantes, industriales, agricultores y ganaderos.

La Ley Electoral reglamentará la forma en que estas asociaciones harán la designación a que se refiere este inciso; y

- c) Un propietario y un suplente, propuestos separadamente por las asociaciones profesionales. Federación de Asociaciones Femeninas Hondureñas, Federación de Estudiantes Universitarios, Federación Hondureña

de Maestros y Sindicatos de Trabajadores.

Cada una de las agrupaciones indicadas en este incio, propondrá un propietario y un suplente al Poder Ejecutivo, y éste seleccionará entre los propuestos, el propietario y el suplente que deberán integrar el Consejo Nacional de Elecciones.

Art. 52.- La Ley Electoral determinará la forma de integración y funcionamiento de los demás organismos electorales.

Art. 53.- El Censo Nacional Electoral es permanente e inalterable; la inscripción de los ciudadanos comenzará el dos de enero de cada año y se cerrará el treinta de abril siguiente.

Las modificaciones ocurridas por muerte, cambio de vecindad y suspensión o pérdida de la ciudadanía, se verificarán en el tiempo y con las modalidades que determine la Ley Electoral.

Art. 54.- Para la declaratoria de elección de Diputados al Congreso Nacional o a la Asamblea Nacional Constituyente, se adopta el sistema de representación proporcional, a base de cocientes y residuos electorales. Para la declaratoria de elección de miembros de las Corporaciones Municipales se adopta el sistema de simple mayoría.

Art. 55.- La acción penal por los delitos electorales establecidos por la ley, es pública, y prescribe en seis años.

Art. 56.- Conocerá de los delitos y faltas electorales la justicia ordinaria, conforme al derecho común, sin distinción de fueros.

TITULO IV

Derechos y Garantías Individuales.

Capítulo Unico.

Art. 57.- La dignidad del ser humano es inviolable, todos los hombres son iguales ante la ley. Los habitantes de la República de Honduras tienen derecho a ser protegidos, sin discriminación alguna, en el goce de su vida, seguridad, honor, libertad, trabajo y propiedad.

Art. 58.- Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.

Art. 59.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidas como negación de otros derechos no especificados que nacen de la soberanía nacional, de la forma republicana y democrática de gobierno y de la dignidad del hombre.

Art. 60.- Las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de los derechos y garantías reconocidas en esta Constitución, serán nulas si los disminuyen, restringen o tergiversan.

Art. 61.- El derecho a la vida es inviolable. La pena de muerte queda abolida en Honduras.

Art. 62.- Ninguna persona será sometida a torturas, penas infamantes o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Se prohíbe todo rigor que no se limite a la detención del delincuente o procesado. Las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social. Se procurará en ellas la readaptación social del delincuente.

Art. 63.- La declaración obtenida por medio de la violencia es nula e induce responsabilidad contra el funcionario que la haya ejecutado.

Art. 64.- Toda persona acusada de delito tiene derecho a que no se prejuzgue su responsabilidad.

Art. 65.- Ninguna persona será objeto de ingerencias en su vida privada, en su familia, en su domicilio o en su correspondencia.

No se interceptará la comunicación telefónica. No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, hogares, papeles y efectos, contra registros, incautaciones y allanamientos arbitrarios.

Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y éstos, únicamente cuando exista proceso del que resulte indicio racional que amerite el registro u ocupación de las cosas y la detención de las personas.

Art. 66.- La correspondencia particular, papeles y libros privados son inviolables, y sólo podrán ocuparse o revisarse por borales y criminales que la ley determine, debiendo registrarse en presencia del poseedor o, a falta de éste, de su mandatario o de dos testigos, devolviéndose los que no tengan relación con lo que se indaga. Los que fueren susstraídos no harán fe en juicio.

Art. 67.- Toda persona tiene derecho para requerir amparo contra cualquier atentado o arbitrariedad de que sea víctima, y para hacer efectivo el ejercicio de todas las garantías que esta Constitución establece, cuando sea indebidamente coartada en el goce de ellas, por leyes o actos de cualquier autoridad, agente o funcionario público.

Art. 68.- La Constitución reconoce la garantía del Habeas Corpus. Toda persona ilegalmente detenida, presa o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual, o que sufre vejámenes, aún cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, o cualquiera otra en su nombre, sin necesidad de poder, tiene el derecho de pedir ante el tribunal respectivo, verbalmente, por telégrafo o por escrito, su inmediata exhibición, ya sea para que se le restituya su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeta. Si el tribunal decretare la libertad de la persona, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar.

Cuando así se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido, sin previo aviso ni notificación a las partes.

La garantía del Habeas Corpus será concedida libre de costas. La exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere presenta-

do dicho recurso es ineludible. La autoridad que ordenare y los agentes que ejecutaren el ocultamiento del detenido, o que en cualquier otra forma burlaren esta garantía, incurrirán en el delito de detención ilegal.

Art. 69.- La orden de detención que no emane de autoridad competente o que se haya dictado sin las formalidades legales, es atentoria.

La detención para inquirir no podrá pasar de seis días. La incomunicación de un detenido no excederá de veinticuatro horas. La contravención a estos preceptos producirá responsabilidad penal, sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley.

Art. 70.- No podrá proveerse auto de prisión sin que preceda plena prueba de haberse cometido un crimen o simple delito que merezca pena de privación de la libertad y sin que resulte indicio racional de quien sea su autor.

En la misma forma se hará la declaración de reo.

Art. 71.- Nadie será obligado a incriminarse su propia declaración en material penal y de policía, ni a declarar contra su cónyuge, ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. El silencio del procesado no podrá tenerse en cuenta ni considerarse en perjuicio suyo.

Art.- 72.- Nadie podrá ser encarcelado por deudas.

Art. 73.- Nadie puede ser juzgado otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos.

Art. 74.- Nadie puede ser llevado a la cárcel, aún con auto de prisión, ni detenido en ella, si presentare fianza suficiente, cuando por el delito no deba aplicarse pena que pase de tres años.

Art. 75.- Nadie puede ser penado sin juicio previo que se funde en ley anterior al hecho del proceso, ni ser hecho preso o detenido sino en los lugares que determine la ley.

Art. 76.- La "orden superior" dictada sin las formalidades legales es atentoria.

Incurrir en responsabilidad criminal que determinará la ley, tanto el funcionario que la dicte como el subalterno que la ejecute.

Art. 77.- El delincuente infraganti puede ser aprehendido por cualquier persona y en cualquier lugar para entrarlo a la autoridad competente.

Art. 78.- El derecho de defensa es inviolable. Nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio, mediante procedimiento que le asegure las garantías necesarias para su defensa.

Ninguna persona puede ser juzgada por comisiones especiales, ni por otros jueces que los designados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército.

Cuando en un delito o falta de orden militar estuviese complicado un paisano o militar de baja, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

cualquier otra indole, siempre que se propugne el imperio de la democracia en la República.

Art. 86.- Honduras reconoce el derecho de asilo en caso de persecución que no sea motivada por delito común, conforme a los convenios internacionales de que es signataria.

Art. 87.- La expulsión de hondureños del territorio nacional es atentatoria. La contravención a este precepto constituye delito, y en cualquier tiempo podrá deducirse responsabilidad penal y civil al funcionario - que viole esta garantía. El legislador especificará este delito y la pena que les corresponda.

Art. 88.- Toda persona tiene derecho a circular libremente, a elegir su residencia en el territorio nacional. A ninguna persona se le podrá obligar a cambiar su residencia, salvo por mandato judicial basado en la ley.

Todo hondureño tiene derecho a obtener pasaporte, a salir del país y regresar a él sin restricción alguna.

Art. 89.- Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos humanos.

Art. 90.- Los habitantes de la República pueden tener y portar arma con arreglo a la ley.

Art. 91.- Se prohíbe la usura. Es de orden público la ley que señale límite máximo al interés del dinero. La misma ley determinará las penas que deban aplicarse a los contraventores.

Art. 92.- Ninguna ley tiene efecto retroactivo, excepte en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado.

Art. 93.- Todo servicio que no deba prestarse gratuitamente, en virtud de ley o de sentencia fundada en ley, debe ser remunerado.

Art. 94.- Sólo un Congreso ordinario impone contribuciones y demás cargas públicas.

Art. 95.- Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos de elección popular.

Art. 96.- Nadie está obligado al pago de cargas o impuestos que no hayan sido legalmente decretadas.

Art. 97.- La policía es una institución del Estado de carácter puramente civil, encargada de velar por la conservación del orden público, proteger a las personas y a la propiedad y ejecutar las resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones legales de las autoridades y funcionarios públicos.

El Poder Ejecutivo podrá someter la policía civil a un régimen militar cuando sea preciso mantener el orden público y se haga necesaria la defensa de las instituciones democráticas.

Art. 98.- La acción para perseguir las infracciones de los derechos y garantías establecidos en este Capítulo es pública, sin caución ni formalidad de ninguna especie y por simple denuncia.

TITULO V
GARANTIAS SOCIALES

CAPITULO I

LA FAMILIA

Art. 99.- La familia, el matrimonio y la maternidad están bajo la protección del Estado. Se garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges.

Art. 100.- Sólo es válido el matrimonio autorizado por funcionario competente para formalizarlo.

Art. 101.- Se reconoce el matrimonio de hecho entre las personas legalmente capacitadas para contraerlo. La ley señalará las condiciones para que surta los efectos del matrimonio civil.

Art. 102.- Las clasificaciones sobre la naturaleza de la filiación, quedan abolidas. No se consignará declaración alguna diferenciación los nacimientos, ni sobre el estado civil de los padres en las actas de inscripción de aquéllos, ni el ningún documento, atestado o certificación referente a la filiación. En consecuencia, no se reconocen desigualdades entre los hijos, teniendo todos los mismos derechos y deberes.

Art. 103.- Se reconoce el derecho de adopción. Una ley especial regulará esta institución.

Art. 104.- Se autoriza la investigación de la paternidad. La ley determinará el procedimiento.

Art. 105.- Los padres defamilia pobres con cinco o más hijos menores, recibirán especial protección del Estado. En iguales circunstancias de idoneidad, gozarán de preferencia para el desempeño de cargos públicos.

Art. 106.- Los padres están obligados a alimentar, asistir y educar a sus hijos. El Estado velará por el cumplimiento de estos deberes.

Art. 107.- Corresponde al Estado velar por la salud física, mental y moral de la infancia, creando los institutos y dependencias necesarias y adecuados.

Las leyes de protección a la infancia son de orden público, y los establecimientos oficiales destinados a dicho fin tienen de carácter de Centro de Asistencia Social creados por iniciativa privada.

Art. 108.- Los menores deficientes físicos o mentales, los huérfanos, los ancianos, los abandonados, los delincuentes o predelincuentes estarán sometidos a una legislación especial de vigilancia, rehabilitación y protección. No se permitirá el ingreso de un menor de diez y ocho años a una cárcel o presidio.

Art. 109.- El patrimonio familiar será objeto de una legislación protectora especial.

Art. 110.- Se reconoce el divorcio como causa de disolución de vínculo matrimonial.

CAPITULO II

Del trabajo y previsión social.

Art. 111.- Toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el desempleo.

Art. 112.- Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Serán nulas las disposiciones que contravengan o restrinjan las garantías siguientes:

1ª. La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y cuatro a la semana, equivalentes a cuarenta y ocho de trabajo en cuanto al salario. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias será remunerado en la forma que determine la ley. Estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción, muy calificados, que la ley señale.

El trabajador gozará de un día de descanso, preferentemente el domingo, por cada seis de trabajo.

2ª. A trabajo igual debe corresponder salario igual, sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales.

3ª. El salario deberá pagarse con moneda de curso legal.

4ª. El valor del salario, el de las indemnizaciones y prestaciones sociales, constituyen un crédito privilegiado en casos de quiebra o concurso del empleador.

5ª. Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo fijado periódicamente con intervención del Estado y de los trabajadores y empleadores, suficiente para cubrir las necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región y de cada labor, al costo de la vida, a la aptitud relativa de los trabajadores y a los sistemas de remuneración de las empresas.

Igualmente se señalará un salario mínimo profesional en aquellas actividades en que el mismo no estuviere regulado por un contrato o convención colectiva.

El salario mínimo estará exento de embargo, compensación y descuento, salvo lo dispuesto por la ley atendiendo a obligaciones familiares y sindicales del trabajador.

6ª. El patrono estará obligado a observar, en la instalación de sus establecimientos, los preceptos legales sobre higiene y salubridad, a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte para la salud y la vida de los trabajadores la mayor garantía compatible con la naturaleza de la negociación, bajo las penas que al efecto establezcan las leyes.

Se establecerá una protección especial para la mujer y el menor de dieciocho años.

7º. Los menores de catorce años y los que habiendo cumplido esa edad, sigan sometidos a la enseñanza en virtud de la legislación nacional no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo. Las autoridades en cargadas de vigilar el trabajo de estos menores podrán autorizar su ocupación cuando lo consideren indispensable para la subsistencia de los mismos, o de sus padres o hermanos, y siempre que ello no impida cumplir con el mínimo de instrucción obligatoria.

Para menores de dieciséis años, la jornada de trabajo, que deberá ser diurna, no podrá exceder de seis horas y de treinta y seis semanas, en cualquier clase de trabajo.

8º. El trabajador tendrá derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuya extensión y oportunidad serán reguladas por la ley. En caso de despido injustificado el patrono pagará en efectivo, a más de las indemnizaciones que la ley señale, la parte de vacaciones correspondientes al período trabajado.

9º. Los trabajadores tendrán derecho a descanso remunerado en los días feriados que señale la ley; ésta determinará la clase de labores en que no regirá esta disposición; pero en estos casos, los trabajadores tendrán derecho a remuneración extraordinaria.

10. La mujer tiene derecho al descanso antes y después del parto, sin pérdida de su trabajo ni del salario. En el período de lactancia tendrá derecho a descanso extraordinario por día para amamantar a sus hijos.

No podrá despedirse del trabajo a la mujer grávida, salvo causas justificadas que señalare taxativamente la ley.

11. Los patronos están obligados a indemnizar al trabajador por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, de conformidad con la ley.

12. Se reconoce el derecho de huelga y de paro. La ley reglamentará su ejercicio y podrá someterlo a restricciones especiales en los servicios públicos que determine.

13. Los trabajadores y los patronos tienen derecho a asociarse libremente para los fines exclusivos de su actividad económico-social, fundando sindicatos o asociaciones profesionales. La ley regulará este derecho.

14. El Estado tutela los contratos colectivos e individuales entre patronos y trabajadores.

Art. 113.- La ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto, el trabajador tendrá derecho a la remuneración debida durante la suspensión del trabajo y la indemnización, o a que se le reintegre el trabajo, a su elección.

Art. 114.- Se reconoce al trabajador a domicilio una situación jurídica analoga a la de los demás trabajadores, habida consideración a las pecu-

liaridades de su labor.

Art. 115.- Los trabajadores domesticos serán amparados por la legislación social. A quienes presten servicios de caracter doméstico en empresas industriales, comerciales, sociales y demás equiparables, serán considerados como trabajadores manuales y tendrán los derechos reconocidos a éstos.

Art. 116.- La ley regulará en contrato de los trabajadores ferrocarrileros, mineros, de la Marina Mercante y de la Aeronautica, habida cuenta de sus modalidades particulares.

Art. 117.- Los trabajadores intelectuales independientes y el resultado de su actividad, deberán ser objeto de una legislación protectora.

Art. 118.- El trabajador tiene derecho a la independencia de su conciencia moral, cívica y política. La ley le garantiza contra toda ingerencia del patrono a este respecto.

Art. 119.- Las leyes laborales estarán inspiradas en la armonía del capital y del trabajo, como factores de producción.

El Estado debe tutelar los derechos de los trabajadores y a l mismo tiempo proteger el capital y la empresa privada.

Art. 120.- En igualdad de condiciones los trabajadores hondureños tendrán la preferencia sobre los extranjeros. La ley fijará el porcentaje de trabajadores hondureños para las empresas o patronos, el que, en ningún caso, será inferior al noventa por ciento, salvo las excepciones que determine. El Poder Ejecutivo podrá modificar dicho porcentaje cuando los requerimientos de la agricultura o la conveniencia nacional así lo demanden, y establecer, en condiciones de reciprocidad, excepciones para los trabajadores centroamericanos.

Art. 121.- Con el fin de hacer efectivas las garantías y leyes laborales, el Estado vigilará e inspeccionará las empresas.

Art. 122.- Se establece la jurisdicción del trabajo, a la cual quedan sometidas todas las controversias que originen las relaciones entre el capital y el trabajo. La ley establecerá las normas correspondientes a dicha jurisdicción y los organismos que hayan de ponerlas en práctica.

Art. 123.- El Estado tiene la obligación de promover la conciliación y el arbitraje para la solución pacífica de los conflictos de trabajo.

Art. 124.- El Estado promoverá la preparación técnica de los trabajadores y la elevación de su nivel cultural y económico.

El deber de las empresas industriales, en las esferas de su especialidad, crear escuelas destinadas a promover la educación obrera entre los hijos de sus operarios o asociados. La ley regulará esta materia.

Art. 125.- El Estado fomentará la construcción de viviendas y de colonias para los trabajadores, y velará porque llenen condiciones de salubridad. Con este fin tiene facultades para inspeccionar las viviendas construidas por las empresas y para dictar las medidas necesarias de conformidad con los reglamentos generales de sanidad.

Art. 126.- La ley determinará las empresas y patronos que por el número de sus trabajadores o la importancia de su capital, estarán obligados a proporcionar a los obreros habitaciones adecuadas, escuelas, enfermerías y demás servicios y atenciones propicias al bienestar físico y moral del trabajador y de su familia.

Art. 127.- Toda persona tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo. Los servicios de seguro social serán prestados y administrados por entidades autónomas y cubrirán los casos de enfermedad, maternidad, subsidios de familia, vejez, orfandad, paro forzoso, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y todas las demás contingencias que afecten la capacidad de trabajar y consumir. La ley promoverá el establecimiento de tales servicios, a medida que las necesidades sociales lo exijan.

El Estado creará instituciones de asistencia y de previsión social.

Art. 128.- La ley regulará los alcances, extensión y funcionamiento del régimen de seguridad social. El Estado, patronos y trabajadores están obligados a contribuir al financiamiento y a facilitar el mejoramiento y expansión del seguro social.

Art. 129.- Se considera de utilidad pública la emisión de la Ley de Seguro Social.

Art. 130.- La ley regulará la formación de empresas cooperativas, ya sean comerciales, agrícolas, industriales, de consumo o de cualquier índole, sin que se eluda o adultere el régimen del trabajo establecido en esta Constitución.

Art. 131.- El Estado protegerá al campesino, y a este fin legislará, entre otras materias, sobre el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos, créditos agrícolas, indemnizaciones por pérdida de cosechas, cooperativas de producción y consumo, cajas de previsión, escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación agropecuarias, obras para riego y vías rurales de comunicación.

Art. 132.- Los derechos consignados en este Capítulo son irrenunciables. Serán nulas las estipulaciones que los restrinjan u supriman.

Art. 133.- Los derechos y garantías enuncias en este Capítulo, no excluyen los que emanen de los principios de justicia social aceptados por nuestro país en convenciones internacionales.

Art. 134.- Es de utilidad pública la emisión del Código de Trabajo que regulará las relaciones entre el capital y el trabajo, colocándolas sobre una base de justicia social, de modo que se garantice al trabajador las condiciones necesarias para una vida normal, y al capital una compensación equitativa de su inversión.

CAPITULO III

Cultura.

Art. 135.- La educación es función esencial del Estado, para la conservación, el fomento y difusión de la cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza.

Art. 136.- El Estado está obligado a desarrollar la educación fundamental del pueblo, creando al efecto los organismos técnicos necesarios, dependientes directamente del Ministerio de Educación Pública.

Art. 137.- El Estado sostendrá e incrementará la organización de establecimientos de enseñanza pre-escolar, primaria y media, comprendiendo las escuelas prevocacionales, vocacionales y artísticas. Además, impulsará el desarrollo de la educación extraescolar por medio de bibliotecas, centros culturales y otras formas de difusión de la cultura.

Art. 138.- La dirección técnica de la educación corresponde al Estado. La enseñanza impartida oficialmente es gratuita y laica, y la primaria será además, obligatoria y costada por el Estado.

Art. 139.- La formación de maestros de educación es función preferente del Estado.

Art. 140.- El maestro tiene derecho a los goces y privilegios que fije la ley. Principalmente a un sueldo que, atendiendo su importante misión, lo dignifique, social, económica y culturalmente.

Art. 141.- La ley determinará el correspondiente Escalafón del Magisterio, que garantice su estabilidad, su ascenso y su eficiencia.

Art. 142.- La enseñanza privada está sujeta a la inspección y reglamentación aprobada por el Estado.

Art. 143.- Para ejercer la docencia se requiere acreditar capacidad en la forma que la ley disponga.

Art. 144.- En los centros docentes, públicos o privados, la enseñanza de la Constitución, Educación Cívica, Historia y Geografía Nacionales, estará a cargo de profesores hondureños por nacimiento.

Se garantiza la libertad de cátedra.

Art. 145.- La enseñanza de la moral, como asignatura independiente, será obligatoria en todos los centros docentes, primarios y secundarios, públicos y privados del país.

Art. 146.- La Universidad Nacional es una institución autónoma, con personalidad jurídica. Goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la enseñanza superior y educación profesional; contribuirá a la investigación científica, a la difusión general de la cultura y cooperará al estudio de los problemas nacionales.

La ley y sus estatutos fijarán su organización, funcionamiento y sus atribuciones.

Sólo tendrán validez, oficialmente, los títulos de carácter académico otorgados y reconocidos por la Universidad Nacional Autónoma.

La Universidad Nacional Autónoma es la única facultada para resolver sobre la incorporación de profesionales egresados de universidades extranjeras.

Serán reconocidos, además, los títulos que no tengan carácter universitario y cuyo otorgamiento corresponda al Estado.

Sólo las personas que ostenten título válido podrán ejercer actividades profesionales.

Art. 147.- El Estado contribuirá el sostenimiento, desarrollo y engrandecimiento de la Universidad Nacional Autónoma, como rectora de la

cultura, con una asignación privativa anual de 1 dos por ciento del Presupuesto de Ingresos netos de la Nación, excluidos los prestamos. La Universidad está exonerada de toda clase de impuestos y contribuciones.

Art. 148.- El Estado proveerá becas para estudios profesionales, de artes y de industrias populares, y para el perfeccionamiento o especialización de postgraduados que por vocación, capacidad u otros meritos se hagan acreedores a esta protección. La ley reglamentará esta materia.

Art. 149.- El Estado fomentará y contribuirá al sostenimiento de escuelas para ciegos, sordomudos y tetardados mentales.

Art. 150.- El Estado contribuirá al sostenimiento de escolares pobres de solemnidad, de acuerdo con una ley especial.

Art. 151.- Se establece la colegiación profesional obligatoria. La ley reglamentará su organización y funcionamiento.

Art. 152.- Los tesoros arqueológicos, artísticos e históricos están bajo la vigilancia y protección del Estado. Se prohíbe su exportación, y podrá impedirse su enajenación o transformación cuando así lo exigiere el interés patrio.

Art. 153.- Las artes e industrias populares son elementos de la cultura nacional y gozarán de especial protección, a fin de conservar su autenticidad artística y mejorar su producción u distribución.

CAPITULO IV

Propiedad.

Art. 154.- Es estado reconoce, fomenta y garantiza la propiedad privada.

Art. 155.- Nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de ley o sentencia fundada en ley.

Art. 156.- La expropiación de bienes por causa de necesidad o utilidad pública, debe ser calificada por la ley o por sentencia fundada en ley, y no se verificará sin previa indemnización.

En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa; sin embargo, el pago correspondiente se hará, a mas tardar, dos años después de concluido el Estado de emergencia.

Art. 157.- Se reconoce la función social de la propiedad privada. Las limitaciones que establezca la ley, tendrán por base motivos de necesidad pública o interés social.

Art. 158.- El derecho de propiedad no perjudicará el derecho eminente del Estado dentro de sus límites territoriales, ni podrá sobreponerse a los derechos que tengan las instituciones nacionales o las obras de carácter nacional.

Art. 159.- Los terrenos del Estado, ejidales, comunales o de propiedad privada situadas en las zonas limítrofes a los Estados vecinos; los situados en el litoral de ambos mares, en una extensión de cuarenta kilómetros hacia el interior del país, y los de las islas, cayos, arrecifes, escolladeros, peñones, sirtes y bancos de arena, sólo podrán ser adquiridos en dominio pleno o menos pleno, por hondureños de nacimiento,

por sociedades integradas en su totalidad por socios hondureños, y por los Bancos del Estado, bajo pena de nulidad del respectivo acto o contrato.

Se prohíbe a los Registradores de la Propiedad la inscripción de documentos que contraríen esta disposición.

Se exceptúan los bienes urbanos.

Art. 160.- Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará - temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención o marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.

Art. 161.- El derecho de reivindicar los bienes confiscados es - imprescriptible.

Art. 162.- Ninguna persona que tenga la libre administración de sus bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento.

TITULO VI

CAPITULO UNICO

De la suspensión de garantías.

Art. 163.- Las garantías establecidas en los Artículos 66, 68, 69, 74, 76, 82, 85, 88 y 90 de esta Constitución, podrán suspenderse temporalmente en toda la República o parte de ella, cuando así lo exija la seguridad del Estado, en caso de grave peligro por causa de perturbación interior o guerra exterior; por trastorno del orden público que amenace la paz y tranquilidad de la República, por epidemia o por cualquier otra calamidad.

Art. 164.- El Congreso Nacional podrá decretar la suspensión de garantías individuales señaladas en el Artículo anterior, hasta por sesenta días.

Art. 165.- Cuando no estuviere reunido el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo podrá suspender las garantías a que se refiere el Artículo 163 hasta por treinta días. En este caso deberá dar cuenta al Congreso Nacional en la próxima legislatura, de los motivos que dieron lugar a las suspensión de dichas garantías y de los actos ejecutados durante dicho período.

Art. 166.- El territorio en que se suspendan las garantías se registrará durante la suspensión, por la Ley de Estado de Sitio; pero ni en esta ley, ni en ninguna otra, podrá disponerse la suspensión de otras garantías que las enumeradas en el Artículo 163.

Art. 167.- Durante el período de estado de sitio, ningún hondureño ni periodista activo de la prensa hablada o escrita, será objeto de - extrañamiento, ni sufrirá persecución alguna por sus opiniones.

Art. 168.- En caso de guerra internacional podrá establecerse la censura de la correspondencia.

Art. 169.- Los delitos cometidos durante el período de suspensión de garantías contra la estructura de las instituciones y la seguridad del Estado, serán juzgados por los tribunales respectivos.

Art. 170.- Queda prohibido al Poder Ejecutivo la detención de persona alguna por más de diez días durante el término de estado de sitio, sin ponerla a la orden del tribunal correspondiente.

Art. 171.- Tampoco podrán hacerse, durante la suspensión de garantías, declaraciones de nuevos delitos ni imponerse otras penas que las establecidas en las leyes vigentes al decretarse la suspensión.

Art. 172.- Si el Ejecutivo violare cualesquiera de las disposiciones contenidas en este Capítulo, el perjudicado o cualquiera otra persona, en su nombre, podrá recurrir de amparo.

TITULO VII

PODERES DEL GOBIERNO

PODER LEGISLATIVO

CAPITULO I

Su organización.

Art. 173.- El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso de Diputados que serán elegidos por sufragio directo. El Congreso Nacional se reunirá en la capital de la República ordinariamente el veintiuno de noviembre de cada año, sin necesidad de convocatoria.

Los Diputados deben ser ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, mayores de veinticinco años, hondureños por nacimiento o nacidos en el extranjero de hondureños por nacimiento que conserven su nacionalidad, debiendo ser originarios o vecinos del departamento por el cual fueren electos.

Art. 174.- Las sesiones del Congreso Nacional durarán cien días laborables, prorrogables hasta cincuenta más, cuando lo exijan asuntos de interés nacional; el Congreso decretará la prórroga por iniciativa de uno o más de sus miembros o a excitativa del Poder Ejecutivo.

Art. 175.- El Congreso tendrá también sesiones extraordinarias cuando así lo acuerde la mitad mas uno de sus miembros, o cuando sea convocado por el Ejecutivo.

En estos casos sólo tratará de los asuntos que motivaron el respectivo decreto de convocatoria.

Art. 176.- El diecisiete de noviembre de cada año se reunirán los Diputados en juntas preparatorias y con la concurrencia de cinco, por lo menos, se organizará el Directorio, a fin de dictar las providencias necesarias para la instalación del Congreso.

Art. 177.- La mitad mas uno de los miembros de que se compone el Congreso será suficiente para su instalación y para celebrar sesiones.

Art. 178.- Ni el mismo Congreso ni ninguna otra autoridad del Estado podrán impedir la instalación del Congreso o decretar su disolución.

La contravención a este precepto constituye delito.

Art. 179.- Un número de cinco Diputados podrán convocar extraordinariamente al Congreso para cualquier lugar de la República, cuando el Ejecutivo haya impedido su instalación o la celebración de sus sesiones.

Art. 180.- Los Diputados serán electos por un periodo de seis años, contados desde el día en que el Consejo Nacional de Elecciones declare su elección, de conformidad con lo prescrito en la respectiva ley, y no podrán ser reelectos. En caso de falta absoluta de un Diputado terminará su periodo el suplente llamado por el Congreso.

Art. 181.- Los Diputados tienen obligación de reunirse en Asambleas en las fechas fijadas por esta Constitución, y asistir a todas las sesiones del Congreso, salvo incapacidad de orden mayor debidamente comprobada.

Art. 182.- Los Diputados incorporados o los que tengan credencial extendida por el Consejo Nacional de Elecciones, que dejaren de asistir a las sesiones sin causa justificada y rompieren el quórum, serán expulsados del Congreso, y perderán por un periodo de diez años el derecho de optar a los cargos públicos.

El Reglamento Interior regulará este precepto.

Art. 183.- Los Diputados no podrán abstenerse de votara ni votar en blanco.

Art. 184.- No pueden ser elegidos Diputados:

1º. El Presidente de la República.

2º. Los Secretarios y Subsecretarios de Estado.

3º. Los funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, excepto aquellos que desempeñen empleos de carácter puramente docente.

4º. Los funcionarios y empleados del Poder Judicial.

5º. El Contralor General de la República, el Sub-Contralor y demás miembros de la Contraloría.

6º. El Procurador General de la República.

7º. Los militares en servicio activo.

8º. Los individuos de alta en la Policía Nacional.

9º. Los miembros del Consejo Nacional de Elecciones.

10. Los Agentes Diplomáticos y Consulares.

11. Los miembros del Directorio del Banco Central y de la Junta Directiva del Banco Nacional de Fomento y los directivos de las demás instituciones autónomas.

12. Los parientes del Presidente de la República y de los Secretarios de Estado, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

13. Los que tengan pendientes contratos por concesiones con el Estado para explotación de riquezas nacionales o de empresas de servicios públicos, así como los representantes o apoderados de aquellos, o de compañías extranjeras que se hallen en los mismos casos; y

14. Los deudores morosos de la Hacienda Pública y los que tengan cuentas pendientes por la administración de fondos nacionales.

Art. 185.- Los Diputados gozarán desde el día en que se les declare electos, de las siguientes prerrogativas:

1ª. De inmunidad personal para no ser detenidos, acusados ni juzgados aun en estado de sitio, si el Congreso no los declara previamente con lugar a formación de causa.

2ª. No ser llamados al servicio militar sin su consentimiento.

3ª. No ser responsables por sus opiniones o iniciativas parlamentarias en ningún tiempo; y

4ª. No ser demandados civilmente desde quince días antes hasta quince días después de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso, salvo el caso de reconvención.

Art. 186.- La elección de Diputados al Congreso Nacional se hará sobre la base de un Diputado propietario y un suplente por cada treinta mil habitantes o fracción que exceda de quince mil. En aquellos departamentos que tuvieren población menor de treinta mil habitantes, se elegirá un Diputado suplente. En Congreso con vista del aumento de la población podrá modificar la base para la elección de los Diputados.

Art. 187.- Los Diputados en ejercicio no podrán obtener cargos públicos remunerados durante el tiempo para el que han sido elegidos, excepto los de enseñanza y los relacionados con los servicios profesionales de asistencia social. Podrán, asimismo, desempeñar los cargos de Secretario y Subsecretario de Estado o Representante Diplomático. En estos últimos casos se reincorporarán al Congreso al cesar en sus funciones.

Los Diputados suplentes pueden desempeñar empleos o cargos públicos, locales o departamentales, sin que su aceptación y ejercicio produzca la pérdida de su calidad de tales.

CAPITULO II

De las atribuciones del Congreso.

Art. 188.- Corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes:

1ª. Abrir, suspender y cerrar sus sesiones.

2ª. Convocar a sesiones extraordinarias a iniciativa de uno o mas de sus miembros o a excitativa del Poder Ejecutivo.

3ª. Incorporar a sus miembros con vista de las credenciales y recibirles la promesa constitucional.

4ª. Llamar a l-s respectivos suplentes, en caso de falta absoluta o de legitimo impedimento de los propietarios.

5ª. Admitir la renuncia de sus miembros por causas legales debidamente comprobadas.

6ª. Emitir su Reglamento Interior.

7ª. Hacer el escrutinio de votos y declarar la elección de Presidente, Designados a la Presidencia y Diputados al Congreso Nacional, cuando el Consejo Nacional de Elecciones no lo hubiere hecho. Cuando concurran en un mismo ciudadano diversas elecciones, será determinada la -

preferencia en el orden siguiente:

- 1º. Presidente de la República; y
 - 2º. Diputado al Congreso Nacional. La elección de propietario se preferirá a la de suplente.
 - 8º. Elegir para el periodo constitucional que comienza el veintiuno de diciembre, cinco Magistrados Propietarios de la Corte Suprema de Justicia y tres Magistrados Suplentes. En casos de falta absoluta de alguno de ellos, elegir al que deba terminar su periodo.
 - 9º. Elegir al Contralor, Sub-Contralor, Procurador y Sub-Procurador General de la República.
 10. Recibir la promesa constitucional al Presidente de la República y Designados a la Presidencia declarados electos, ya los demás funcionarios que elija, y admitirles o no admitirles su renuncia.
 11. Conceder permiso al Presidente de la República cuando se ausente del país por más de treinta días.
 12. Cambiar la residencia de los Poderes del Estado por causas graves.
 13. Declarar si ha lugar o no ha lugar a formación de causa contra el Presidente y Designados a la Presidencia, Diputados, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Miembros del Consejo Nacional de Elecciones, Secretarios de Estado y Agentes Diplomáticos durante sus funciones.
 14. Conceder amnistía por delitos políticos y delitos comunes conexos con los políticos.
- Fuera de este caso el Congreso no podrá dictar resoluciones por vía de gracia.
15. Decretar premios y conceder privilegios temporales a los autores o inventores y a los que hayan intriducido nuevas industrias o perfeccionado las existentes de utilidad general.
 16. Conceder o negar permiso a los hondureños para aceptar condecoraciones o empleos de otro Estado.
 17. Aprobar o improbar los contratos que lleven involucrados exenciones, privilegios y concesiones fiscales, o cualquier otro contrato que haya de producir sus efectos en el siguiente periodo presidencial.
 18. Aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo.
 19. Declarar la suspensión de garantías, de conformidad con lo prescrito en esta Constitución, y ratificar, modificar o improbar la que dictare el Poder Ejecutivo, de acuerdo con la ley.
 20. Conferir los grados de Mayor a General de División a iniciativa del Poder Ejecutivo y del Jefe de las Fuerzas Armadas.
 21. Permitir o negar el transito por la República, de tropas de otro país.
 22. Declarar la guerra y hacer la paz.
 23. Aprobar o improbar los tratados y convenciones que el Ejecutivo haya celebrado. Pero en los tratados sobre intercambio comercial celebrados con otros países siguiendo el sistema de listas de artículos, podrá el Ejecutivo cuando así le conviniera a los intereses de la nación, poner en práctica las modificaciones a tales listas por el mero

canje de notas de cancillería, cuando así se hubiere convenido en el tratado respectivo.

24. Hacer la elección del Jefe de las Fuerzas Armadas.

25. Resolver las diferencias que resulten entre el Presidente de la República y el Jefe de las Fuerzas Armadas.

26. Fijar el número de fuerzas del Ejército Permanente.

27. Crear y suprimir empleos y decretar honores y pensiones por relevantes servicios prestados a la Patria.

28. Fijar anualmente el Presupuesto General de Egresos e Ingresos, tomando como base el proyecto que remita el Poder Ejecutivo, y resolver sobre su modificación a instancia del mismo.

29. Decretar el peso, ley y tipo de la moneda nacional y el patrón de pesas y medidas

30. Establecer impuestos, contribuciones y otras cargas públicas.

31. Decretar empréstitos.

32. Establecer mediante una ley los casos en que procede el otorgamiento de subsidios o subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo económico.

33. Aprobar o improbar finalmente las cuentas de los gastos públicos, tomando por base los informes que rinde la Contraloría General de la República y las reservas que presenta a tal respecto al Poder Ejecutivo.

34. Reglamentar el pago de la deuda nacional, a iniciativa del Poder Ejecutivo.

35. Ejercer el control supremo de las rentas públicas.

36. Aprobar o improbar la enajenación de los bienes nacionales o su aplicación a usos públicos.

37. Habilitar puertos y crear y suprimir aduanas.

38. Crear puertos libre a iniciativa del Poder Ejecutivo.

39. Reglamentar el comercio marítimo, terrestre y aéreo.

40. Reglamentar, Decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

41. Establecer los emblemas nacionales; y

42. La demás que expresamente le confiera la ley.

Art. 189.- El Poder Legislativo no podrá suplir o declarar el estado civil de las personas, conceder títulos profesionales no honoris causa.

Los estudios y formalidades que para la obtención de dichos títulos requieren las leyes correspondientes, no podrán dispensarse, salvo reforma de carácter general de las mismas.

Art. 190.- Las facultades del Poder Legislativo son indelegables, -- excepto las que se refieren a dar posesión a los altos funcionarios del Estado.

CAPITULO III

De la Comisión Permanente.

Art. 191.- El Congreso Nacional, por medio de su Directorio, antes de carrar sus sesiones, nombrará entre sus miembros siete propietarios y siete suplentes para que formen la Comisión Permanente, debiendo ésta en su primera sesión, elegir su Presidente y Secretario.

Art. 192.- Son atribuciones de la Comisión Permanente, en receso del Congreso:

- 1ª. Emitir su Reglamento Interior.
- 2ª. Emitir dictamen y llenar los otros tramites en los negocios que hubieren quedado pendientes, para que puedan ser considerados en la proxima legislatura.
- 3ª. Preparar, para someter ala consideración del Congreso, - los proyectos de reformas a las leyes secundarias del país, y los - otros proyectos de leyes que a su juicio demanden las necesidades del mismo.
- 4ª. Recibir del Poder Ejecutivo los decretos emitidos en los últimos diez días de sesiones del Congreso, con sanción o sin ella.
- 5ª. Recibir las denuncias de violaciones a esta Constitución.
- 6ª. Mantener bajo su custodia y responsabilidad, el Archivo del Congreso.
- 7ª. Publicar una edición de todos los decretos y resoluciones emitidos por el Congreso en sus anteriores sesiones, dentro de los tres meses iguientes a la clausura del mismo.
- 8ª. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, a excitativa del Poder Ejecutivo, o cuando lo exigencia del caso lo requiera.
- 9ª. Presentar al Congreso un informe detallado de sus trabajos durante el año.
10. Elegir interinamente al Contralor, Sub-Contralor, Procurador y Sub-Procurador Generales de la República.
11. LLamar a integrar a otros Diputados, por falta de los - miembros de la Comisión.
12. Conocer en receso del Congreso las diferencias que surgen entre el Presidente y el Jefe de las Fuerzas Armadas; y
13. Conceder permiso al Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional por mas de treinta días, cuando el Congreso no estuviere reunido.

PODER EJECUTIVO

CAPITULO IV

Organización.-

Art. 193.- El Poder Ejecutivo se ejercerá por un ciudadano que se denominará Presidente de la República, y en su defecto por uno de los Designados.

Art. 194.- El Presidente de la República y los Designados a la Presidencia serán electos conjunta y directamente por el pueblo, por simple mayoría de votos. La lección será declarada por el Consejo Nacional de Elecciones, y en su defecto por el Congreso Nacional.

Art. 195.- El período presidencial será de seis años y empezará el veintiuno de diciembre.

Art. 196.-El ciudadano que haya desempeñado a cualquier título la Presidencia de la República, no podrá ser Presidente o Designado en el período presidencial siguiente.

Art. 197.- El funcionario que viole el Artículo anterior o que se proponga reformarlo, y los que apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados para el ejercicio de toda función pública.

Art. 198.- Para ser Presidente de la República y Designado a la Presidencia, se requiere:

- 1º. Ser hondureño por nacimiento.
- 2º. Ser mayor de treinta años.
- 3º. Estar en el goce de los derechos de ciudadanos; y
- 4º. Ser del estado seglar.

Art. 199.- No puede ser electo Presidente de la República para el período siguiente:

- 1º. El ciudadano que hubiere ejercido la Presidencia en propiedad o interinamente, en el curso de un período.
- 2º. Los Secretarios de Estado que ejercieren o hubieren ejercido su cargo dentro de los seis meses anteriores a la práctica de las elecciones.
- 3º. Los miembros del Consejo Nacional de Elecciones, así como los representantes o apoderados de concesiones del Estado o de empresas que exploten servicios públicos; y
- 4º. Los parientes del Presidente y Designados que hubieren ejercido la Presidencia en el período inmediatamente anterior, dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad.

Art. 200.- El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional por más de treinta días, sin permiso del Congreso Nacional o de su Comisión Permanente.

Art. 201.- Si la falta del Presidente fuere absoluta, el Designado sorteado por el Congreso Nacional ejercerá el Poder Ejecutivo por el tiempo que falte del período constitucional. A falta de éste, lo sustituirá otro de los Designados en la misma forma que preceptua este Artículo.

Pero si también faltaren de modo absoluto los tres Designados, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Consejo de Ministros, el que deberá convocar a elecciones presidenciales dentro de los quin ce siguientes, las cuales se practicarán dentro de un plazo no menor de dos meses ni mayor de cuatro, contado desde la fecha de su convocatoria. Efectuada al elección, el Consejo Nacional de Elecciones, o en su defecto el Congreso Nacional, hará dentro de veinte días la declaratoria correspondiente, y el ciudadano electo tomará inmediata mente posesión del cargo, computan dose su periodo presidencial desde el veintiuno de diciembre siguiente.

En sus ausencias temporales el Presidente podrá llamar a cual quiera de los Designados para lo sustituya, a su elección. Si la ausencia fuere menor de treinta días, podrá encargarse del Poder Ejecutivo el Consejo de Ministros.

Art. 202.- Si al comenzar un período constitucional no se presentare el Presidente electo, por mientras éste se presenta, ejercerá el Poder Ejecutivo el Designado a la Presidencia favorecido en el sorteo practicado por el Congreso Nacional.

Art. 203.- Si la elección de Presidente y Designados no estuviere hecha y delcarada antes del veintiuno de diciembre, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Consejo de Ministros, que procederá en la forma prevenida en el párrafo segundo del Artículo 201 de esta Constitución.

Art. 204.- La promesa de ley de los sustitutos del Presidente de la República será presta da ante el Presidente del Congreso ^{Nacional}, si estuviere reunido, y en su defecto, ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

CAPITULO V

Atribuciones del Poder Ejecutivo.

Art. 205.- El Presidente de la República tiene la administración general del país.

Son sus atribuciones:

- 1ª. Dirigir la política del Estado y representarlo.
- 2ª. Mantener ~~ellos~~ la independencia, el honor de la República y la integridad e inviolabilidad del territorio nacional.
- 3ª. Mantener la paz y seguridad interior de la República y repeler todo ataque o agresión exterior.
- 4ª. Restringir el ejercicio de las garantías, de acuerdo con el Consejo de Ministros, con sujeción a lo establecido en esta Constitución.
- 5ª. Dar a los funcionarios del Poder Judicial, los auxilios y fuerzas que necesiten para hacer efectivas sus resoluciones.

6º. Ejercer el mando en Jefe de las Fuerzas Armadas en concepto de Comandante General.

7º. Velar, en general, por la conducta oficial de los funcionarios y empleados públicos, para seguridad y prestigio del Gobierno y del Estado.

8º. Declarar la guerra y hacer la paz en receso del Congreso, - el cual será convocado inmediatamente.

9º. Permitir o negar, en receso del Congreso, el tránsito por la República de tropas terrestres, navales o aéreas de otro país.

10. Ejercer la suprema dirección de la Policía de Seguridad.

11. Organizar, dirigir y fomentar la educación pública; combatir el analfabetismo y procurar la difusión y perfeccionamiento de la instrucción agrícola, industrial y técnica en general.

12. Hacer que se recauden las rentas del Estado, y reglamentar su inversión con arreglo a la ley.

13. Autorizar las operaciones crediticias que hagan necesarias las fluctuaciones estacionales en los ingresos y egresos.

14. Publicar trimestralmente el estado de egresos e ingresos de las rentas públicas.

15. Autorizar, en Consejo de Ministros, las operaciones crediticias a largo plazo, que el Estado celebre para financiar proyectos de desarrollo.

16. Dictar todas las medidas y disposiciones que, dentro de la órbita legal, estén a su alcance para promover un amplio desarrollo de la agricultura, como base de la riqueza de la Nación.

17. Ejercer la vigilancia y control de las instituciones bancarias y demás establecimientos de crédito, conforme a la ley.

18. Presentar anualmente al Congreso, dentro de los ocho días siguientes a su instalación, por medio de la Secretaría de Estado respectiva, el proyecto de Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la Administración Pública.

19. Contratar empréstitos y someterlos a la consideración del Congreso para su aprobación, modificación o improbación.

20. Fomentar la inmigración con fines agrícolas, industriales y culturales, conforme a la ley.

21. Disponer de las fuerzas militares, organizarlas y distribuir las de conformidad con la ley.

22. Conferir grados militares desde Subteniente hasta Capitán, - inclusive.

23. Velar porque el Ejército sea apolítico, esencialmente profesional, obediente y no deliberante.

24. Dirigir las relaciones exteriores. Nombrar los Representantes Diplomáticos y funcionarios consulares de la República, que deberán ser hondureños por nacimiento.

25. Recibir a los agentes diplomáticos y expedir y retirar el - exequátur a los consules de naciones extranjeras.

26. Celebrar tratados sometiendo a la ratificación del Congreso, y verificar sin tardanza el canje o el depósito del instrumento de ratificación, sin perjuicio de lo que sobre plazo y forma para celebrar el canje o el depósito, se acordare en el respectivo tratado.

27. Celebrar cualquiera otra clase de convenios de orden económico y cultural.

28. Presentar en la instalación del Congreso ordinario una relación general de los actos de su administración y de los planes para el siguiente ejercicio fiscal.

29. Organizar, orientar y realizar planes de fomento e integración económica, dirigidos al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo hondureño.

30. Presentar por medio de los respectivos Secretarios de Estado, dentro de los quince primeros días de la instalación del Congreso, - en sus sesiones ordinarias, un informe o memoria circunstanciada de cada uno de los Ramos de la Administración Pública.

31. Someter al Congreso el decreto que expida sobre suspensión de garantías, como lo prescribe el Artículo 165 de esta Constitución.

32. Participar en la formación de las leyes, presentando proyectos al Congreso por medio de los Secretarios de Estado.

33. Sancionar las leyes que emita el Congreso, con esta expresión: "Por Tanto, Ejecutese". Usar el veto en los casos que corresponda, y promulgar las disposiciones legislativas que no necesiten sanción del Ejecutivo, con la siguiente expresión: "Por Tanto, publíquese".

34. Conceder y cancelar cartas de naturalización, conforme a la ley.

35. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, expidiendo los reglamentos y ordenes conducentes, sin alterar el espíritu de aquéllas.

36. Mantener la salubridad pública y mejorar las condiciones higiénicas del país y de los habitantes, con la amplitud y la eficacia que la necesidad demande.

37. Conferir condecoraciones de conformidad con la ley.

38. Crear y suprimir servicios públicos.

39. Conceder pensiones y gratificaciones de acuerdo con la ley.

40. Indultar y conmutar las penas conforme a la ley.

41. Nombrar y remover a los Secretarios y Subsecretarios de Estado y a los demás funcionarios y empleados, cuya designación no esté - atribuida a otras autoridades.

42. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias por medio de la Comisión Permanente o proponerle la prorroga de las ordinarias; y

43. Las demás que le confiere la Constitución y las leyes.

CAPITULO VI

Secretarios de Estado.

Art. 206.- Para la administración general del país habrá, por lo menos, nueve Ministros o Secretarías de Estado, entre las cuales se distribuirán los Ramos de Gobernación, Justicia, Relaciones Exteriores, Economía, Hacienda, Defensa Nacional, Salud Pública, Asistencia Social, Educación Pública, Comunicaciones y Obras Públicas, Trabajo y Previsión Social, Recursos Naturales, Seguridad Pública y los demás que de acuerdo con la ley se consideren necesarios.

Art. 207.- Los decretos, reglamentos, acuerdos, ordenes y providencias del Presidente de la República, deberán ser autorizados por los Secretarios de Estado en sus respectivos ramos o por los Subsecretarios, en su caso. Sin estos requisitos no tendrán fuerza legal. Los Secretarios de Estado y los Subsecretarios, serán solidariamente responsables con el Presidente de la República, de los actos que autoricen. De las resoluciones tomadas en Consejo de Ministros, serán responsables los Ministros presentes, a menos que hubieren razonado su voto en contra.

Art. 208.- Para ser Secretario de Estado se requieren las mismas calidades que para ser Presidente de la República.

Art. 209.- No pueden ser Secretarios de Estado:

1a. Los parientes del Presidente de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

2a. Los que hubieren administrado o recaudado valores públicos, mientras no tengan el finiquito de solvencia de sus cuentas.

3a. Los contratistas de obras, servicios o empresas públicas, - que se costeen con fondos del Estado o del Municipio, sus fiadores y los que de resultas de tales obras o servicios tengan reclamaciones pendientes de interes propio. Así como de los representantes o apoderados de concesionarios del Estado o de empresas que exploten servicios públicos; y

4a. Los deudores a la Hacienda Pública o Municipal.

Art. 210.- Los Secretarios de Estado pueden asistir sin voto a las deliberaciones del Congreso.

A iniciativa de un Diputado, el Congreso puede llamarlos, y aquellos deben concurrir a contestar las interpelaciones que se les hagan sobre asuntos referentes a la administración; salvo los relacionados con actividades diplomáticas o militares, en que se juzgare necesaria la reserva.

Art. 211. El Presidente de la República convoca y preside el Consejo de Ministros. Todas las resoluciones del Consejo se tomarán por mayoría, y, en caso de empate, el Presidente tendrá doble voto. El Consejo se reunirá por iniciativa del Presidente, para tomar resolución en todos los asuntos que juzgue de importancia nacional y para conocer de los casos que señale la ley.

Art. 212.- Los Secretarios de Estado deben presentar anualmente al Congreso, dentro de los quince primeros días de su instalación, un informe de los trabajos realizados en sus respectivos Despachos. El Secretario de Estado en el Despacho de Economía y Hacienda presentará, además el proyecto de Presupuesto Feneral de Egresos e Ingresos de la Administración Pública.

Art. 213.- Los Subsecretarios de Estado deben tener las mismas condiciones de los Secretarios, y sustituirán a éstos por ministerio de la ley.

PODER JUDICIAL

CAPITULO VII

Organización.

Art. 214.- El Poder Judicial de la República se jerce por un a Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones y por los Juzgados que la ley establezca.

La Corte Suprema de Justicia residirá en la capital de la República, y estará integrada por cinco Magistrados Propietarios y por tres suplentes.

Art. 215.- Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requiere: ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, hondureño por nacimiento, Abogado de los tribunales de la República, mayor de treinta años, del estado seglar y haber desempeñado los cargos de Juez de Letras o Magistrado de las Cortes de Apelaciones durante un año, por lo menos, o ejercido la profesión por cinco años.

Art. 216.- Para ser Magistrado de las Cortes de Apelaciones, se requiere: ser ciudadano en el jercicio de sus derechos, hondureño, Abogado, mayor de treinta años, del estado seglar y haber desempeñado el cargo de Juez de Letras durante un año, por lo menos, o ejercido la profesión por cinco años.

Art. 217.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán eletos por el Congreso Nacional.

Art. 218.- No pueden ser elegidos o nombrados Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones, los que tengan cualquiera de las inhabilidades establecidas para los Secretarios de Estado, y los parientes entre sí, comprendidos dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad.

Art. 219.- En ningun juicio habrá más de dos instancias, y el Magistrado o Juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas, no podrá conocer en la otra, ni en casación, en el mismo asunto, sin uncurrir en responsabilidad.

Tampoco podrán ser Jueces en una misma causa los parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad.

Art. 220.- La calidad de Magistrado o de Juez de Letras es incompatible con el ejercicio de la abogacia y con la de funcionario o empleado de los otros Poderes, excepto la de profesor de enseñanza y la de diplomático en misión transitoria.

Art. 221.- El periodo de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia será de seis años, y tomarán posesión de sus cargos el veintiuno de diciembre.

Art. 222.- Los Jueces de Paz serán nombrados por los Jueces de Letras.

Art. 223.- La administración de Justicia es gratuita.

Art. 224.- Los Magistrados, Jueces y Oficiales del Ministerio Público no podrán ser obligados a prestar servicio militar, ni a concurrir a ejercicios o prácticas militares.

Art. 225.- Los Tribunales de Justicia podrán requerir el auxilio de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de sus resoluciones, y si les fuere negado o no la hubiere disponible, lo exigirán de los ciudadanos. El que injustificadamente se negare a dar auxilio incurrirá en responsabilidad.

Art. 226.- Es facultad privativa de las Cortes y demás Tribunales de Justicia juzgar y ejecutar lo juzgado. A ellos corresponde la aplicación de las leyes en casos concretos que legalmente se sometan a su conocimiento.

Art. 227.- La ley reglamentará la organización y atribuciones de los tribunales, de los juzgados y oficiales del Ministerio Público.

Art. 228.- La Corte Suprema de Justicia será presidida por uno de los Magistrados Propietarios.

Las funciones del Presidente durarán un año contado desde el veintiuno de diciembre, turnándose los Magistrados en el orden de su elección.

Art. 229.- Los cargos del Poder Judicial serán remunerados sin excepción.

Art. 230.- Los Magistrados y Jueces no podrán ser separados de sus funciones sino en los casos de delito, en cuya averiguación hubiere recaído auto de prisión o declaratoria de reo, por mala conducta o por incumplimiento en las obligaciones de su cargo. Estas circunstancias serán calificadas por la Corte Suprema de Justicia mediante la información sumaria y audiencia del interesado. Los traslados de los Jueces y Magistrados de las Cortes de Apelaciones serán regulados por la ley.

Art. 321.- Para cooperar en la administración de justicia habrá una policía judicial, que dependerá directamente de los funcionarios del tamo.

Una ley especial regulará su organización y funcionamiento.

CAPITULO VIII

Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 232.- La Corte Suprema de Justicia, además de las atribuciones - que la ley le confiere, ejercerá las siguientes:

1º. Hacer su Reglamento Interior.

2º. Conocer de los delitos oficiales y comunes de los altos funcionarios de la República, cuando el Congreso Nacional los haya declarado con lugar a formación de causa.

3º. Autorizar a los abogados y notarios para el ejercicio de su profesión; suspenderlos y rehabilitarlos de conformidad con la ley.

4º. Declarar que ha o no lugar a formación de causa contra los - funcionarios y empleados que la ley determine.

5ª. Conocer de las causas de presas, de extradición y de las demás que deben juzgarse conforme al Derecho Internacional.

6ª. Conocer de los recursos de casación conforme a la ley.

7ª. Conocer de los recursos de amparo y revisión con arreglo a la ley.

8ª. Nombrar los Magistrados de las Cortes de Apelaciones, los Jueces de Letras, los del Trabajo, los Registradores de la Propiedad y los Oficiales del Ministerio Público.

9ª. Publicar la "Gaceta Judicial".

10. Admitir o no admitir la renuncia de los funcionarios de su nombramiento, y conceder licencias tanto a éstos como a sus propios miembros.

11. Declarar la inconstitucionalidad de las leyes, en la forma y casos previstos en esta Constitución; y

12. Formar el proyecto de presupuesto del Poder Judicial y remitirlo en su oportunidad a quien corresponda para su inclusión en el Presupuesto General de Egresos e Ingresos.

CAPITULO IX

Pagaduría de los Fondos de Justicia.

Art. 233.- La Pagaduría Especial de Justicia atenderá el pago de los sueldos correspondientes a los funcionarios y empleados de la Administración de Justicia, y los gastos del mismo ramo.

Art. 234.- A efecto de cumplir lo preceptuado en el artículo anterior, la Tesorería General de la República acreditará, por trimestres anticipados, los fondos necesarios para hacer los pagos del ramo.

Art. 235.- La Pagaduría Especial de Justicia estará bajo la dependencia inmediata de la Corte Suprema, a quien le corresponda el nombramiento del Pagador.

Dicho pagador deberá caucionar su responsabilidad de conformidad con la ley.

TITULO VIII

CAPITULO UNICO.

Inconstitucionalidad y Revisión.

Art. 236.- Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, de acuerdo con lo que establecen los artículos siguientes.

Art. 237.- A la Corte Suprema de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia, y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas.

Art. 238.- La declaración de inconstitucionalidad de una ley y la inaplicabilidad de las disposiciones afectadas por aquella, podrán solicitarse por todo el que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo:

1º. Por vía de acción, que deberá entablar ante la Corte Suprema de Justicia.

2º. Por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial; y

3º. El juez o tribunal que conociere en cualquier procedimiento judicial también podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley, su inaplicabilidad, antes de dictar resolución. En caso este y en el previsto por el numeral anterior, se suspenderán los procedimientos, elevándose las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia.

Art. 239.- El fallo de la Corte Suprema de Justicia se referirá exclusivamente al caso concreto, y sólo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado.

Art. 240.- Ningun poder ni autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo lo que dispone el artículo siguiente.

Art. 241.- Las causas juzgadas en materia penal pueden ser revisadas en toda época en favor de los condenados apedimento de éstos, de cualquiera otra persona, del Ministerio Público o de oficio.

Este recurso se interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia. La ley reglamentará los casos y la forma de revisión.

TITULO IX

CAPITULO UNICO.

De la formación, sanción y promulgación de la ley.

Art. 242.- Tienen exclusivamente la iniciativa de ley, los Diputados, el Presidente de la República, por medio de los Secretarios de Estado, y la Corte Suprema de Justicia en asuntos de su competencia.

Cuando el Congreso estime necesaria la emisión de una ley, podrá nombrar una comisión de su seno para celebrar el proyecto correspondiente.

Art. 243.- Ningun proyecto de ley será definitivamente votado, sino después de tres deliberaciones efectuadas en distintos días, salvo caso de urgencia calificado por la mitad mas uno de votos.

Art. 244.- Todo proyecto de ley al aprobarse por el Congreso, se pasará al Poder Ejecutivo a más tardar dentro de tres días de haber sido votado, a fin de que éste le dé su sanción y lo haga promulgar como ley.

Art. 245.- La sanción de la ley se hará con esta fórmula: "Por Tanto, Ejecutese".

Art. 246.- Si el Poder Ejecutivo encontrare inconvenientes para sancionar el proyecto de ley, lo devolverá al Congreso dentro de diez días, con esta fórmula: "Vuelva al Congreso", exponiendo las razones en que funda su desacuerdo. Si en el término expreado no lo objetare, se tendrá como sancionado y lo promulgará como ley.

Cuando el Ejecutivo devolviera el proyecto, el Congreso lo so-

meterá a nueva deliberación; y si fuere ratificado por dos tercios de votos, lo pasará de nuevo al Poder Ejecutivo, con esta fórmula: "Ratificado constitucionalmente" y aquel lo publicará sin tardanza.

Si el veto se fundare en que el proyecto de ley es inconstitucional, no podrá someterse a nueva deliberación sin oír previamente el dictamen de la Corte Suprema de Justicia. Esta emitirá su informe en el término que el Congreso le señale.

Art. 247.- Cuando el Congreso vote un proyecto de ley al terminar sus sesiones y el Ejecutivo crea inconveniente sancionarlo, está obligado a darle aviso inmediatamente para que permanezca reunido hasta diez días, contados desde la fecha en que el Congreso recibió el proyecto, y no haciéndolo, deberá verificarlo en los ocho primeros días de las sesiones del Congreso siguiente.

Art. 248.- No será necesaria la sanción ni el Poder Ejecutivo podrá poner el veto en los actos y resoluciones siguientes:

- 1º. En las elecciones que el Congreso haga o declare, o en las renunciaciones que admita o deseche.
- 2º. En las declaraciones de haber o no haber lugar a formación de causa.
- 3º. En los decretos que se refieran a la conducta del Poder Ejecutivo.
- 4º. En los reglamentos que expida para su régimen interior.
- 5º. En los acuerdos para trasladar su residencia a otro lugar, temporalmente, y para suspender sus sesiones o para convocar a sesiones extraordinarias.
- 6º. De la Ley de Presupuesto; y
- 7º. En los tratados o contrato que imprueba el Congreso.

En estos casos el Ejecutivo promulgará la ley con esta fórmula: "Por tanto, Publíquese".

Art. 249.- Siempre que un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, tenga por objeto reformar o derogar cualesquiera de las disposiciones contenidas en los Códigos de la República, no podrá discutirse sin oír la opinión de aquel tribunal. La Corte emitirá su informe en el término que el Congreso le señale.

Esta disposición no comprende las leyes de orden político, económico y administrativo.

Art. 250.- Ningun proyecto de ley desechado total o parcialmente, podrá discutirse de nuevo en la misma legislatura.

Art. 251.- La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido veinte días de terminada su publicación en el periódico oficial "La Gaceta".

Podrá, sin embargo, restringirse o ampliarse en la ley misma el plazo de que habla este Artículo, y ordenarse en casos especiales otra forma de promulgación.

TITULO X

CAPITULO I

Economía.

Art. 252.- El sistema economico de Honduras debe inspirarse en principios de eficiencia en la producción y de justicia social en la distribución del ingreso nacional, y se basa en el reconocimiento y la coexistencia armonica de los factores e instituciones siguientes:

a) La empresa y la propiedad privada, y la empresa y la propiedad estatal y municipal.

b) El productor, el consumidor y el trabajador individual, y las asociaciones de productores, las sociedades de consumidores y los sindicatos de trabajadores; y

c) Las demás asociaciones reconocidas por la ley.

La ley determinará la forma y requisitos de constitución de dichas asociaciones.

Art. 253.- El trabajo y el capital, como factores de la producción, gozan de la protección del Estado.

Las cooperativas se declaran de conveniencia y utilidad social.

Art. 254.- El Estado atenderá a la defensa y conservación de los recursos naturales, y reglamentará el uso, goce y aprovechamiento de ellos de acuerdo con el interes social.

Art. 255.- El Estado reconoce y garantiza las libertades de consumo, ahorro e inversión, ocupación, iniciativa, comercio, contratación y empresa.

La enunciación de estas libertades no excluye el reconocimiento de cualesquiera otras que emanen de los principios democrático-liberales que informan esta Constitución.

Art. 256.- El Estado, por razones de orden público y de interés social, podrá reservarse el ejercicio de determinadas industrias básicas, explotaciones y servicios de interés público, y dictar leyes y medidas economicas, fiscales y de seguridad pública, para encauzar, estimular y suplir la iniciativa privada, con fundamento en una racional y sistemática planeación economica.

Art. 257.- La intervención del Estado en la economía tendrá por base el interés público, y por límite los derechos y libertades fundamentales reconocidas por la Constitución.

Art. 258.- El objetivo principal del Estado es el fomento de la actividad economica será el de contribuir a promover un creciente y ordenado nivel de producción, empleo e ingreso, distribuido equitativamente este último entre los factores que contribuyen a su formación, en condiciones de razonable estabilidad monetaria, con el objeto de proporcionar a toda la población una existencia digna y decorosa.

Art. 259.- El Estado ordenará sus relaciones económicas externas sobre las bases de la cooperación internacional, la integración económica centroamericana y el respeto de los tratados y convenios que suscriba, en lo que no se oponga al interés nacional.

Art. 260.- El capital privado extranjero estará sujeto a las mismas obligaciones y limitaciones que la ley establezca para el capital nacional, y gozará de los mismos derechos y privilegios.

La ley podrá, sin embargo, conceder un tratamiento preferencial o reservar determinados campos de inversión al capital hondureño o centroamericano, en atención al interés nacional.

Art. 261.- La dirección y coordinación de la política económica general del Estado corresponde al Poder Ejecutivo, con el auxilio de un organismo superior de planeación económica y de los demás organismos - técnicos y competentes.

Las Secretarías de Estado y los organismos autónomos y semi-autónomos ajustarán sus programas y proyectos a la política económica general del Estado, a fin de asegurar un mínimo de unidad y consistencia entre los objetivos generales u los objetivos parciales.

Leyes especiales establecerán lo concerniente a la creación y funciones de los organismos a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

Art. 262.- El derecho de emisión monetaria corresponderá exclusivamente al Estado, que lo ejercerá por medio del Banco Central de Honduras, institución autónoma de servicio público, que se regirá por su ley organiza y sus reglamentos.

El régimen bancario, monetario y crediticio será determinado por la ley.

El Banco Central tendrá a su cargo la formulación y desarrollo de la política monetaria, crediticia y cambiaria del país.

Art. 263.- En la política agraria el Estado fomentará primordialmente el desarrollo de la propiedad rural y de tipo familiar que constituya una unidad económica de producción, y el establecimiento de servicios de crédito y educación agrícola, favoreciendo de preferencia a las familias de hondureños.

La dimensión de las unidades de producción se determinará regionalmente de acuerdo con la explotación agrícola, ganadera o mixta, que el Estado estime conveniente fomentar en la zona, en las condiciones técnicas y económicas correspondientes.

La ley determinará las condiciones de adquisición y las obligaciones del adjudicatario.

Art. 264.- La ley podrá establecer restricciones, modalidades o prohibiciones especiales para la adquisición, transferencia y uso y disfrute de la propiedad estatal y municipal, por razones de orden público, - de interés social o de conveniencia nacional.

Art. 265.- El Estado no concederá ni autorizará monopolios en favor de los particulares. No se consideran como tales los privilegios temporales que se concedan a los inventores, descubridores o autores, en concepto de derechos de propiedad científica, literaria, artística o comercial, patentes de invención o marcas de fábrica.

Las empresas que por la naturaleza de sus actividades constituyen monopolios de hecho, se someterán a la legislación especial.

Art. 266.- La ley determinará el régimen jurídico al que se sujetará la explotación y aprovechamiento de los bosques, yacimientos de petróleo, sustancias orgánicas e inorgánicas y demás riquezas naturales que se encuentren en el subsuelo y en la plataforma submarina.

CAPITULO II

Regimen financiero.

Art. 267.- Las cargas fiscales, estatales y municipales, deben inspirarse en principios de uniformidad y equidad y tendrán por base la capacidad tributaria del contribuyente.

Art. 268.- El sistema impositivo municipal deberá armonizarse con el sistema impositivo estatal.

Hacienda Pública.

Art. 269.- Forman la Hacienda Pública:

- a) Todos los bienes muebles e inmuebles del Estado.
- b) Todos sus créditos y activos; y
- c) Sus disponibilidades liquidas.

Art. 270.- Son obligaciones financieras del Estado:

- a) Las deudas contraídas para gastos corrientes o de inversión pública originadas en la ejecución del Presupuesto; y
- b) Las demás deudas reconocidas legalmente por el Estado.

Art. 271.- La administración de los fondos públicos corresponde al Poder Ejecutivo.

Para la percepción, custodia y erogación de dichos fondos habrá un servicio especial de Tesorería. El Poder Ejecutivo, sin embargo, podrá delegar en el Banco Central las funciones de recaudador y depositario.

Presupuesto.

Art. 272.- Son recursos financieros del Estado:

- a) Los ingresos que perciba por causa de impuestos, tasas, contribuciones, regalías, donaciones o de cualquier otro título.

b) Los ingresos provenientes de las empresas estatales; y

c) Los ingresos extraordinarios que probengan del crédito público y de otro concepto.

Art. 273.- Todos los egresos e ingresos fiscales del gobierno y sus dependencias costarán en el Presupuesto General, que se votará anualmente.

Los egresos e ingresos de las municipalidades, Distrito Central y Entidades autonomas se regirán por leyes especiales.

Art. 274.- Todos los ingresos fiscales ordinarios constituirán un sólo fondo. No podrá crearse ingreso ordinario alguno destinado a un fin específico.

No obstante, la ley podrá aceptar ingresos al servicio de la deuda pública, y disponer que el producto de determinados impuestos y contribuciones generales sea dividido entre la Hacienda Nacional y la de los municipios, en proporciones o cantidades previamente señaladas.

La ley podrá, asimismo, autorizar a determinadas empresas estatales o mixtas para que perciban, administren o inviertan recursos financieros provenientes de ejercicio de las actividades económicas que les corresponde.

Art. 275.- El cálculo de los ingresos fiscales no podrá exceder del monto que resulte de una estimación técnica de los ingresos corrientes probables, de los ingresos extraordinarios y del superavir financiero del ejercicio inmediato anterior para el cual se vota el Presupuesto.

Art. 276.- No podrá hacerse ningun compromiso o pago fuera de las asignaciones votadas en el Presupuesto. Cualquier cantidad exigida, invertida o pagada del Presupuesto y sin aprobación legal, hará civil y criminalmente responsable al funcionario que ordene la exacción o gasto indebido; también lo será el ejecutor sino prueba su inculpabilidad.

Art. 277.- El Poder Ejecutivo, bajo su responsabilidad y siem pre que el Congreso Nacional no estuviere reunido, podrá contraer empréstitos, variar el destino de una partida autorizada o abrir créditos adicionales para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en caso de guerra, conmoción interna o calamidad pública, o para tener atención a los compromisos internacionales; de todo lo cual dará cuenta pormenorizada al Congreso Nacional en sus próximas sesiones.

Art. 278.- El Presupuesto será votado por el poder Legislativo con vista del proyecto que presente el Poder Ejecutivo.

Art. 279.- El proyecto de Presupuesto será presentado por el Poder Ejecutivo dentro de los quince días siguientes a la instalación del Congreso Nacional.

Art. 280.- La Ley Orgánica del Presupuesto establecerá todo lo concerniente a la formación, votación, ejecución y liquidación del Presupuesto.

Quando al cierre de un ejercicio fiscal no se hubiera votado el Presupuesto para el nuevo ejercicio, continuara en vigencia el correspondiente al periodo anterior.

Art. 281.- Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley.

Exceptuándose los contratos que tengan por objeto proveer a las necesidades ocasionadas por un estado bélico y los que por su naturaleza no puedan celebrarse sino con persona determinada.

Art. 282.- Habrá una Proveduría General de la República.

La ley determinará los requisitos de su organización, atribuciones y funciones.

Art. 283.- Créase una Oficina de Administración de Bienes Nacionales que tendrá a su cargo el control y vigilancia de la propiedad estatal, mueble o inmueble. La ley determinará su organización y atribuciones.

CAPITULO III

Fiscalización.

Art. 284.- La fiscalización preventiva de la ejecución del Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la República, estará a cargo del Poder Ejecutivo, que deberá especialmente:

1º. Verificar la recaudación y vigilar la custodia, el compromiso y la erogación de fondos públicos; y,

2º. Aprobar todo egreso de fondos públicos de acuerdo con el Presupuesto.

La ley establecerá los procedimientos y alcance de esta fiscalización.

Art. 285.- La fiscalización preventiva de los organismos autónomos, del Distrito Central y de las municipalidades, se ejercerá de acuerdo con lo que determinen las leyes respectivas.

Art. 286.- Para la fiscalización a posteriori de la Hacienda Pública habrá un organismo auxiliar del Poder Legislativo, denominado Contraloría General de la República, que se regirá por su ley orgánica y tendrá independencia funcional y administrativa. Sus atribuciones serán:

1º. Verificar la administración de los fondos y bienes públicos y glodar las cuentas de los funcionarios y empleados que los manejen;

2º. Fiscalizar la gestión financiera de las dependencias de la administración pública, instituciones autónomas, semiautónomas, los establecimientos gubernamentales, el Distrito Central, las Municipalidades y las entidades que se costeen con fondos del erario nacional o

que reciban subvención o subsidio del mismo;

3ª. Examinar la contabilidad del Estado y las cuentas que sobre la gestión de la Hacienda Pública rinda el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, e informar a éste del resultado de su examen; y

4ª. Ejercer las demás funciones que la ley orgánica le señale.

Art. 287.- La fiscalización a posteriori del Banco Central de Honduras, en lo relacionado con el manejo de fondos del Estado, estará a cargo de la Contraloría General de la República, que rendirá informes sobre tal fiscalización al Congreso Nacional.

La fiscalización a posteriori de los demás institutos de crédito que reciban fondos del Estado, en cuanto a la aplicación de tales fondos en operaciones o negocios estrictamente bancarios, se ejercerá por la Superintendencia de Bancos, y en los demás cargos por la Contraloría General de la República.

Art. 288.- La Contraloría deberá rendir al Congreso, dentro de los primeros cuarenta días de finalizado el año económico, un informe, exponiendo la labor realizada durante dicho año, con exposición de opiniones y sugerencias que considere necesarias para lograr mayor eficiencia en el manejo de los fondos y bienes públicos.

Este informe, del cual simultaneamente se enviará copia al Presidente de la República, deberá ser publicado por la Contraloría en forma detallada o en resumen, exceptuando lo relacionado con secretos militares u otros aspectos que pudieran afectar la seguridad nacional.

Art. 289.- La Contraloría General de la República estará a cargo de un Contralor General y de un Sub-Contralor elegidos por el Congreso Nacional, quienes tendrán las mismas inhabilidades y gozarán de iguales prerrogativas que los Diputados.

Art. 290.- Para ser Contralor y Sub-Contralor se requiere: ser hondureño por nacimiento, mayor de veinticinco años, ciudadano en ejercicio de sus derechos, de reconocida honradez y competencia, poseer el título de Abogado o Licenciado en Economía o Administración Pública o Perito Mercantil y Contador Público.

Art. 291.- Las funciones del Contralor y Sub-Contralor General se extenderán hasta un año después de vencido el período que corresponda a los Poderes del Estado. No podrán ser reelectos para el período siguiente.

Art. 292.- La organización y atribuciones de la Contraloría General de la República serán determinadas por la ley que regule su funcionamiento que se seguirá para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto.

Art. 293.- El Contralor y Sub-Contralor serán responsables ante el Congreso Nacional de los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones, y solamente podrán ser removidos por éste, cuando se les comprobare la comisión de irregularidades graves o delitos.

CAPITULO IV

Procuraduría General de la República.

Art. 294.- Para representar los intereses del Estado, crease la Procuraduría General de la República, cuya organización y atribuciones serán determinadas por la ley.

Art. 295.- Habrá un Procurador General y un Sub-Procurador, que serán electos por el Congreso Nacional por un período de sesé años, y no podrán ser reelectos para el período siguiente.

Art. 296.- Para ser Procurador General de la República y Sub-Procurador se requiere: ser hondureño por nacimiento, mayor de veinticinco años ciudadano en el ejercicio de sus derechos, de reconocida honradez y competencia y poseer el título de Abogado.

Art. 297.- El Procurador General de la República tendrá las mismas prerrogativas e inhabilidades establecidas por esta Constitución para los Diputados.

Art. 298.- Las acciones civiles y criminales que resulten de las intervenciones fiscalizadoras de la Contraloría General de la República, serán ejercitadas por el Procurador General, con excepción de las correspondientes al Distrito Central y las municipalidades, que quedarán a cargo de los funcionarios que las leyes respectivas indiquen.

CAPITULO V

Instituciones Autonomas.

Art. 299.- Para la mayor eficiencia en la administración de los intereses nacionales, para garantizar sin fines de lucro la satisfacción de las necesidades colectivas de servicio público, y, en general para lograr la mayor efectividad de la administración, se reconocen los organismos autonomos con criterio de descentralización de la administración pública.

Los organismos autonomos forman parte del engranaje general de la administración, y el grado de autonomía de cada uno se determinará en la ley de su creación, según la naturaleza y propósitos de sus respectivas funciones.

Art. 300.- Las instituciones autonomas del Estado gozan de independencia en materia de gobierno y administración, y sus directores responderán por su gestión.

Art. 301.- Las instituciones autonomas existentes y las que se crean, se regirán por sus leyes y reglamentos.

Art. 302.- Para la discusión y aprobación de leyes que afecten a una institución autónoma, el Congreso Nacional oirá previamente la opinión de aquélla.

Art. 303.- Para la creación de nuevos organismos autonomos, el Congreso Nacional resolverá por los dos tercios de votos de sus miembros.

Art. 304.- Los organismos autónomos estarán obligados a presentar al Gobierno, por medio de la Secretaría de Estado respectiva, los resultados líquidos de la actividad financiera de su ejercicio económico anterior.

Art. 305.- Los resultados líquidos de la actividad financiera a que se refiere el artículo anterior, se incorporarán en la liquidación final del Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la Nación, con excepción de los del Banco Central de Honduras.

TITULO XI

CAPITULO UNICO

Servicio Civil.

Art. 306.- Se establece el régimen del Servicio Civil, con el fin de regular las relaciones de trabajo entre los servidores públicos y el Estado; someter la administración de personal a métodos científicos basados en el sistema de méritos; lograr la eficiencia en la función pública, proteger a sus servicios y crear la carrera administrativa.

Art. 307.- Créase la Dirección General del Servicio Civil, a cargo de un Director y adscrita a la Presidencia de la República, sin dependencia de ningún Ministerio en particular. Un Consejo integrado por tres miembros, de nombramiento del Poder Ejecutivo, regirá sus funciones de acuerdo con la ley.

Transitorio.

Art. 308.- El Poder Ejecutivo deberá someter un proyecto de Ley de Servicio Civil, de acuerdo con los artículos 306 y 307, a la consideración del primer Congreso Nacional ordinario.

El régimen del Servicio Civil será implantado gradualmente al entrar en vigencia la mencionada ley.

TITULO XII

CAPITULO UNICO.

Responsabilidad.

Art. 309.- Todo funcionario público al tomar posesión de su cargo hará la promesa siguiente: "Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes".

Art. 310.- Los funcionarios y empleados públicos son responsables de sus actos.

Art. 311.- No obstante la aprobación que el Congreso dé a la conducta del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República y los Ministros de Estado podrán ser acusados por delitos oficiales.

El término de prescripción para esas acciones empezará a correr cinco años después de haber cesado en sus funciones el acusado.

Art. 312.- Los funcionarios y empleados públicos que violaren cualesquiera de los derechos y garantías consignados en esta Constitución, serán responsables civil y criminalmente; no podrán obtener indulto ni conmuta en el período en curso ni en el siguiente.

Art. 313.- Los funcionarios y empleados públicos no podrán prevalerse de sus cargos para enriquecerse sin causa.

Art. 314.- Se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos y molumentos que haya percibido legalmente y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa.

Para determinar dicho aumento, el capital y los ingresos del funcionario o empleado, el de su conyuge y el de sus hijos se considerarán en conjunto.

La declaración de bienes de los funcionarios y empleados se hará de conformidad con la ley.

Cuando fuere absuelto un funcionario público a quien se hubiere separado de su cargo o a quien se hubiere declarado con lugar a formación de causa, volverá al ejercicio de sus funciones.

TITULO XIII

CAPITULO UNICO.

De las Fuerzas Armadas.

Art. 315.- Las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de caracter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se instituye para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, para mantener la paz, el orden público y el imperio de esta Constitución; valando sobre todo porque no se violen los principios de libre sufragio y de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.

Art. 316.- Estarán sujetas a las disposiciones de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y a las demás leyes y reglamentos que regulen su funcionamiento. Cooperarán con el Poder Ejecutivo en las labores de alfabetización, educación, agricultura, conservación de recursos naturales, vialidad, comunicaciones, colonización y actividades de emergencia siempre que el servicio no sufra menoscabo. Se establece el fuero de guerra para los delitos militares.

Art. 317.- El servicio militar es obligatorio para todos los ciudadanos y será regulado por una ley especial.

En caso de guerra internacional, estarán obligados al servicio militar todos los hondureños hábiles, sin discriminación alguna.

Art. 318.- Las Fuerzas Armadas estarán bajo el mando directo del Jefe de las Fuerzas Armadas; por su intermedio ejercerá el Presidente de la República la función constitucional que le corresponda respecto al instituto armado. Las funciones meramente administrativas estarán a cargo de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa.

Art. 319.- Las ordenes que imparta el Presidente de la República a las Fuerzas Armadas, por intermedio del Jefe de las mismas, deberán ser acatadas. Cuando surja alguna diferencia, deberá ser sometida a la consideración del Congreso, el que decidirá por mayoría de votos. Esta resolución será definitiva y deberá ser acatada.

Art. 320.- El Jefe de las Fuerzas Armadas deberá ser un Oficial Superior, hondureño por nacimiento, y será designado por el Congreso Nacional de una terna propuesta por el Consejo Superior de la Defensa Nacional. Durará en sus funciones seis años, y sólo podrá ser removido de su cargo por el Congreso Nacional cuando hubiere sido declarado con lugar a formación de causa por dos tercios de votos de sus miembros, y en los demás casos previstos por la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.

No podrá ser nombrado Jefe de las Fuerzas Armadas ningún pariente del Presidente de la República o de sus sustitutos legales, dentro de del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Art. 321.- El Jefe de las Fuerzas Armadas, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso Nacional el siguiente solemne juramento: "A mi nombre y a nombre de las Fuerzas Armadas de Honduras, solemnemente juro que jamás nos convertiremos en instrumentos de opresión; que aunque provinieren de nuestros superiores jerárquicos, no acataremos ordenes que violen la letra, el espíritu de la Constitución; que defenderemos la soberanía nacional y la integridad de nuestro territorio; que respetaremos los derechos y libertades del pueblo; que mantendremos la apoliticidad y dignidad profesional de las Fuerzas Armadas; y que defendemos la efectividad del libre sufragio ciudadano y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República".

Art. 322.- En caso de ausencia temporal del Jefe de las Fuerzas Armadas, desempeñará sus funciones el Secretario de la Defensa. En caso de ausencia o falta definitiva, el Consejo Superior de la Defensa Nacional propondrá, dentro de los quince días siguientes, la terna de candidatos para que el Congreso Nacional nombre a quien ha de llenar la vacante por el resto del periodo para el que aquél hubiere sido designado.

Art. 323.- El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas es un organismo de la Jefatura de las mismas y tendrá las funciones que la ley indique.

Art. 324.- El Consejo Superior de Defensa Nacional será un órgano de consulta en todos los asuntos relacionados con las Fuerzas Armadas, y actuará como tribunal superior de las mismas, en los asuntos que se sometan a su conocimiento y decisión.

Art. 325.- El Consejo Superior de la Defensa Nacional estará integra-

do por el Jefe de las Fuerzas Armadas, el Secretario de la Defensa, el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, los Jefes de Zonas Militares, los Comandantes de Cuerpos Militares de la Capital y los demás que la ley constitutiva establezca.

Tendrá su asiento en la ciudad Capital, y podrá ser convocado por el Presidente de la República, por el Jefe de las Fuerzas Armadas, por el Secretario de la Defensa y por cualquier miembro de las Fuerzas Armadas de acuerdo con la ley.

Art. 326.- Los nombramientos de jefes, comandantes y demás nombramientos militares, los hará el Jefe de las Fuerzas Armadas por medio de la Secretaría de la Defensa. Los de orden administrativo, los del Estado Mayor Presidencial y Guardia Presidencial los hará el Presidente de la República, por medio de la misma Secretaría.

Art. 327.- El territorio de la República se dividirá en Zonas Militares para la mayor eficiencia del servicio.

Cada zona estará bajo el mando de un oficial superior nombrado por el Jefe de las Fuerzas Armadas, y funcionará de acuerdo con las disposiciones de la ley respectiva.

Art. 328.- Los grados militares sólo se adquieren por riguroso ascenso y deberán otorgarse atendiendo al tiempo de servicio, capacitación y servicios especiales prestados a la patria.

Los militares no podrán ser privados de sus grados, honores y pensiones en otra forma que en la fijada por la ley. Los ascensos desde Subteniente hasta Capitán, inclusive, serán otorgados por el Presidente de la República a propuesta del Jefe de las Fuerzas Armadas. Los ascensos desde Mayor hasta General inclusive, serán otorgados por el Congreso Nacional a propuesta conjunta del Presidente de la República y el Jefe de las Fuerzas Armadas.

Es requisito previo para todo ascenso, la declaración de aptitud hecha por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Art. 329.- Créase la Escuela Militar de Honduras; en ella se educarán los Caballeros Cadetes, aspirantes a Oficiales de las Fuerzas Armadas. La Secretaría de la Defensa tendrá a su cargo la organización de dicha escuela y cubrirá los gastos que impenda su funcionamiento.

La Jefatura de las Fuerzas Armadas organizará y supervisará centros especiales de capacitación en las diferentes armas y servicios.

Art. 330.- La administración de los fondos asignados al Ramo de Defensa, estará a cargo de la Pagaduría de las Fuerzas Armadas.

Art. 331.- En caso de guerra, declaratoria de estado de sitio o emergencia nacional, todo cuerpo armado que funcione normalmente bajo otra dependencia quedará bajo el mando directo de la Jefatura de las Fuerzas Armadas por mientras dura la guerra, el estado de sitio o la emergencia.

TITULO XIV**DEL REGIMEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL.****CAPITULO I****Del Regimen Departamental.**

Art. 332.- Para la administración pública, se divide el territorio nacional en departamentos, cuya creación y límites decretará el Congreso Nacional.

Art. 333.- Los funcionarios departamentales serán hondureños por nacimiento, mayores de veinticinco años y ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Los empleados serán mayores de diez y ocho años y tendrán las demás calidades para los funcionarios.

CAPITULO II**Del Regimen Municipal.**

Art. 334.- Para su administración, los departamentos se dividen en municipios autonomos, representados por municipalidades electas por el pueblo, en la forma que la ley disponga.

Como base de su autonomia economica, crease el Banco Municipal Autonomo, cuya organización y funciones serán determinadas por la ley.

El Distrito Central, formado por los Municipios de Tegucigalpa y de Comayagua, se regirá por su ley especial.

Art. 335.- La ley reglamentará la organización y atribuciones de las municipalidades. Estas atribuciones serán unicamente economicas y administrativas.

Art. 336.- En el ejercicio de sus funciones privativas, las municipalidades serán absolutamente independientes de los otros poderes, sin contrariar en ningun caso las leyes generales del país; y serán responsables por los abusos que cometan individual o colectivamente, ante los tribunales de Justicia.

Art. 337.- Las municipalidades nombrarán libremente a los empleados de su dependencia y los agentes de la policía que costeen con sus propios fondos.

Art. 338.- Los miembros de una municipalidad no podrán desempeñar en la misma, cargo alguna municipal en el periodo siguiente.

TITULO XV**CAPITULO I****De la reforma.**

Art. 339.- La reforma de esta Constitución podrá decretarse parcial-

mente por el Congreso Nacional en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto el artículo o artículos que hayan de reformarse, debiendo ratificarse por la siguiente legislatura ordinaria, por igual número de votos, para que entre en vigencia.

En ningún caso la reforma de los Artículos 42, 195, 196, 199 y del presente, podrá realizarse por el procedimiento anterior.

CAPITULO II

Inviolabilidad de la Constitución.

Art. 340.- Esta Constitución no perderá su eficacia y vigor aun cuando por alguna rebelión o golpe de estado por no haberse reunido el Congreso en la fecha señalada en la misma, o por cualquier otra causa se interrumpa su observancia.

En tales casos, el Poder que siga funcionando legalmente, Legislativo, Ejecutivo o Judicial, tienen la obligación de dictar sin dilación las medidas necesarias para el debido cumplimiento de las disposiciones infringidas.

TITULO XVI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Art. 341.- Todas las leyes, decretos, reglamentos, ordenes y demás disposiciones que estuvieren en vigor al promulgarse esta Constitución, continuarán observándose en cuanto no se opongan a ella, mientras no fueren legalmente derogadas o modificadas.

Art. 342.- Para el periodo de 1957-1963, serán Presidente Constitucional de la República y Designados ala Presidencia los ciudadanos elegidos por esta Asamblea Nacional Constituyente.

Art. 343.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador y Sub-Procurador Generales de la República, el Jefe de las Fuerzas Armadas, el Contralor y Sub-Contrlor Generales de la República, elegidos por esta Asamblea, ejercerán sus funciones constitucionalmente, durante el mismo periodo a que se refiere el artículo anterior, con excepción del Contralor y Sub-Contralor Generales, que terminaran su periodo de acuerdo con la disposicion constitucional respectiva.

Art. 344.- Promulgada y jurada esta Constitución, en sesión pública y solemne, y recibida la promesa de ley a los funcionarios a que se refieren los dos artículos anteriores, la Asamblea Nacional Constituyente clausurará sus sesiones, convirtiendose en Congreso Nacional ordinario, para el periodo constitucional que se iniciará el 21 de diciembre del presente año.

ARTICULO FINAL.

Art. 345.- La presente Constitución entrará en vigor el veintiuno de diciembre del presente año, quedando derogada en esa fecha la emitida el veintiocho de marzo de mil novecientos treinta y seis.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en Tegucigalpa, Capital de la República de Honduras, a los diecinueve días del mes de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete.

Presidente: Modesto Rodas Alvarado h.

Vicepresidente: Héctor Orlando Gómez.

Secretario: Miguel Alfonso Cubero.

Secretario: Carlos Manuel Arita.

Prosecretario: Oscar Mejía Arellano.

Prosecretario: Miguel Rafael Muños.

Por el Departamento de Atlántida:

Jaime Gutierrez Galán

Carmen Melendez de Calix

Por el Departamento de Colón:

José Alfredo Castillo Melhado.

Por el Departamento de Comayagua:

Santos Cantero Suazo.

Natividad de Jesus Chinchilla.

Marcial Ponce Ochoa.

Por el Departamento de Copán:

Julio Cesar Garrigó.

Ramon Medina Cueva.

Federico Leiva Larios.

Ricardo Pineda Tabora.

Por el Departamento de Cortés:

Carmen Griffin de Lefevbre.

Ildefonso Orellana Bueso.

Eugenio Matute Canizales.

Salvador Ramos Alvarado.

Hector Armando Celaya.

Por el Departamento de Choluteca:

José Maria Herrera

Arturo Morales Chavez

Edas G. Maradiaga.

Joaquin Salinas C.

Por el Departamento de El Paraiso:

Federico Gonzales C.

Mario Armando Idiaquez.

Raul Sevilla Gamero.

Por el Departamento de Francisco Morazan:

Miguel Galindo Cerrato.
Oscar A. Flores Midence.
Erlinda Landa Blanco de Bonilla.
Humberto Diaz B.
Ezequiel Escoto Manzano.
Horacio Moya Posas.
Abraham Williams C.

Por el Departamento de Gracias A Dios.
Fausto Echeverria Haylock

Por el Departamento de Intibucá:
Ismael Martinez Argueta.

Por el Departamento de Islas de la Bahía.
Lenmuel Mac Nab.

Por el Departamento de La Paz:
Gilberto Caceres Molina.
Roberto Suazo Cordova.

Por el Departamento de Lempira:
Ernesto H. Aguilar Nuñez.
Pedro Pineda Madrid.
Leopoldo Hernandez.
Santos Sorto Paz.

Por el Departamento de Ocotepeque.
Manuel Aviles Pinto.

Por el Departamento de Olancho:
Vicente Garcia Rivera.
José Profirio Lobo López.

Por el Departamento de Santa Barbara:
Modesto P. Batres.
Joaquin Medina Alvarado.
Macias Castellanos R.
Jeronimo Suazo Alcerro.

Por el Departamento de Valle.
Juan Blas Aguilar.
Julio Cesar Vijil.
Abraham Zuñiga R.

Por el Departamento de Yore:
Francisco Lozano España.
Trinidad Danilo Paredes.
Fabio Murillo Diaz.
Sixto Quezada Soto

Al Poder Ejecutivo.
Por Tanto: Publíquese.

Tegucigalpa , D.C., 19 de diciembre de 1.957

Hector Caracciolo.

Oswaldo López A.

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia,

Raul Flores Gomez

El Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores.

Alejandro Alfaro Arriaga.

El Secretario de Estado en el Despacho de Defensa,
Oswaldo López A.

El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Pública,
Hernan Corrales P.

El Secretario de Estado en los Despachos de Economía y Hacienda,
Gabriel A. Mejia.

El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento,
Ruben Clare Vega.

El Secretario de Estado en el Despacho de Sanidad y Beneficiencia,
Roberto Lazarus.

El Secretario de Estado en el Despacho de Trabajo y Previsión Social,
Rogelio Martinez Augustinus.

El Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales,
Andres Alvarado Puerto.

PREAMBULO

Nosotros, Representantes del Pueblo Soberano de Honduras, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, interpretando con fidelidad las justas aspiraciones nacionales e invocando la protección de Dios, decretamos y sancionamos - la siguiente:

TITULO I

CAPITULO UNICO

EL ESTADO Y SU FORMA DE GOBIERNO

Artículo 1.- Honduras es un Estado soberano e independiente, constituido como República democrática, para asegurar el goce de la libertad, la justicia, el bienestar social y económico y la superación individual y colectiva de sus habitantes.

Artículo 2.- La Soberanía reside originalmente en el pueblo y de éste dimanar todos los Poderes públicos, los que serán ejercitados por el Estado.

Artículo 3.- Los funcionarios del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley.

Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo, y acarrea responsabilidad.

Artículo 4.- El Gobierno es republicano, democrático y representativo: se ejerce por los Poderes complementarios e independientes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial y se fundamenta en el principio de la integración nacional.

La integración implica la participación de todos los sectores políticos, económicos y sociales en la administración pú

blica, principio este que las autoridades deben respetar, a fin de asegurar y fortalecer la nacionalidad hondureña y hacer viable el progreso de Honduras, basado en la estabilidad política y la conciliación nacional.

Artículo 5.- El territorio de Honduras está comprendido entre - los Océanos Atlántico y Pacífico y las Repúblicas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Sus límites con la República de Guatemala, son los establecidos por la sentencia arbitral emitida en Washington, Estados Unidos de América, el veintitrés de enero de mil novecientos treinta y tres; con la República de Nicaragua, - los establecidos por la Comisión Mixta de límites hondureña-nicaragüense, en los años de mil novecientos y mil novecientos uno, según descripción de la primera sección de la línea divisoria, - que figura en el acta segunda de doce de junio de mil novecientos y en las posteriores, hasta el Portillo de Teotecacinte, y - de este lugar hasta el Océano Atlántico, conforme al Laudo Arbitral dictado por su Majestad el Rey de España, el veintitrés de diciembre de mil novecientos seis, cuya validez fué declarada - por la Corte Internacional de Justicia, en sentencia de diez y ocho de noviembre de mil novecientos sesenta. Con la República de El Salvador, la línea fronteriza se determinará por arreglo directo de las Partes o por cualquiera de los procedimientos - establecidos en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas,

"Pacto de Bogotá", y en el Derecho Internacional, que sea más - apropiado a la solución definitiva del problema limítrofe, si viendo de base la documentación colonial existente hasta el - - quince de septiembre de mil ochocientos veintiuno, y la poste-- rior relacionada con la remedia de los terrenos fronterizos, - que aclara los linderos de los terrenos a que se refieren los - títulos coloniales.

PERTENECEN A HONDURAS

1º- Los territorios situados en tierra firme dentro de sus lími tes territoriales y las islas, islotes y cayos en el Golfo de - Fonseca, cuya posesión está respaldada con títulos expedidos du rante el Régimen Colonial Español.

2º- Las Islas de la Bahía, las Islas del Cisne (Swan-Islands) - llamadas también Santanilla o Santillana, Viciosas, Misteriosas y los Cayos: Gorda, Vivorillos, Cajones, Becerro, Cocorocuma, - Caratasca, Falso, Gracias a Dios, Los Bajos, Pichones, Palo de Campeche y los demás situados en el Atlántico que histórica, -- geográfica y jurídicamente le corresponden.

3º- También pertenecen al Estado de Honduras y están sujetos a su jurisdicción y control, el subsuelo, el espacio aéreo, el -- mar territorial en una extensión de doce millas náuticas y el - lecho y el subsuelo de la plataforma submarina, zócalo continen

tal e insular, y otras áreas submarinas adyacentes a su territorio fuera de la zona del mar territorial y hasta una profundidad de doscientos metros o hasta donde la profundidad de las -- aguas suprayacentes, más allá de este límite, permita la explotación de los recursos naturales del lecho y del subsuelo.

En los casos a que se refieren los tres párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y sólo podrán otorgarse concesiones por el Gobierno de la República a los particulares o sociedades civiles o mercantiles constituidas o incorporadas conforme a las leyes hondureñas, -- con la condición de que se establezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se trata y se cumpla con los requisitos que prevengan las leyes. Tratándose del petróleo y de otros hidrocarburos, una ley especial determinará la forma en que podrá llevarse a cabo la explotación de esos productos y de otros similares.

42- Como consecuencia de las declaraciones anteriores, el Estado se reserva el derecho de establecer la demarcación de las zonas de control y protección de los recursos naturales en los mares continentales e insulares que quedan bajo control del Gobierno de Honduras, y de modificar dicha demarcación de acuerdo con las circunstancias sobrevinientes por razón de los nuevos descubrimientos, estudios e intereses nacionales que fueren ad-

vertidos en el futuro; y,

5º- La presente declaración de soberanía no desconoce legítimos derechos similares de otros Estados sobre la base de reciprocidad, ni afecta a los derechos de libre navegación de todas las naciones, conforme al Derecho Internacional.

Artículo 6.- Ninguna autoridad puede celebrar pactos, tratados o convenciones u otorgar concesiones que lesionen la soberanía e independencia de la República. Quien lo haga será juzgado por traición a la Patria. En cualquier tiempo podrá deducirse la responsabilidad consiguiente a quienes los hayan celebrado o contribuido a su ejecución.

Artículo 7.- Cualquier tratado o convención que celebre el Poder Ejecutivo referente al territorio nacional o a la organización política del país requerirá la aprobación del Congreso Nacional, por votación no menor de tres cuartas partes de sus miembros.

Artículo 8.- Los estados extranjeros sólo podrán adquirir en el territorio de la República, sobre bases de reciprocidad, los inmuebles necesarios para sede de sus representaciones diplomáticas, sin perjuicio de lo que establezcan los convenios internacionales.

Artículo 9.- Honduras es un Estado disgregado de la República Federal de Centro-América. En consecuencia, reconoce cómo una necesidad primordial volver a la unión con uno o más Estados de la - antigua Federación. A éste efecto, queda facultado el Poder Le--gislativo para ratificar los tratados que tiendan a realizarla - parcial o totalmente, siempre que se propongan de manera justa y democrática.

Artículo 10.- Honduras hace suyos los principios y prácticas del Derecho Internacional que propendan a la solidaridad humana, al respeto de la soberanía de los pueblos y al afianzamiento de la paz y la democracia universales.

Artículo 11.- La Bandera de Honduras es un simbolo nacional. -- Constará de tres franjas iguales y horizontales, la superior y la inferior, de color azul turquesa y la del centro blanca. Lle--vará en medio cinco estrellas de cinco angulos salientes del -- mismo color azul, formando con cuatro de ellas un cuadrilongo - paralelo a las franjas, en el centro del cual estará colocada - la restante. El ancho del conjunto de las tres franjas deberá - ser contenido dos veces en la longitud.

El Escudo es un simbolo nacional. Está compuesto de - un triangulo equilatero, en cuya base hay un volcan entre dos - castillos, sobre los cuales está un arco iris y debajo de éste,

tras el volcan, se levanta un sol esparciendo luz. El triangulo está colocado sobre un terreno que se figura bañado por ámbos mares. En torno de él hay un óvalo que contiene en letras doradas la leyenda: "REPUBLICA DE HONDURAS, LIBRE SOBERANA E INDEPENDIENTE.- 15 DE SEPTIEMBRE DE 1.821". En la parte superior -- del óvalo, aparece una aljaba llena de flechas de la que penden cuernos de la abundancia unidos por un lazo, y descansando todo sobre una cordillera de montañas, en las que descuellan tres árboles de roble a la derecha y tres pinos a la izquierda, y en -- distribución conveniente: dos bocaminas, una barra, un barreno, una cuña, una almádana y un martillo.

El Himno es un símbolo nacional, conceptuado en tal -- caracter, por Decreto N° 42, de trece de noviembre de mil novecientos quince.

Artículo 12.- El idioma oficial de la República es el español.

Artículo 13.- Toda la riqueza artística, histórica y arqueológica del país, constituye el tesoro cultural de la Nación; estará -- bajo la salvaguardia del Estado, y la ley establecerá lo que -- estime oportuno para su defensa y conservación.

TITULO II

NACIONALIDAD Y CIUDADANIA

Capitulo I

DE LOS HONDUREÑOS

Artículo 14.- La nacionalidad hondureña se adquiere por nacimiento y naturalización.

Artículo 15.- Son hondureños por nacimiento:

1º- Los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los hijos de los agentes diplomáticos;

2º- Los hijos de padre o madre hondureños nacidos en el extranjero;

3º- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves de guerra hondureñas, y los nacidos en naves mercantes, cuando éstas se encuentren en aguas territoriales de Honduras; y,

4º- El infante de padres ignorados encontrado en el territorio de Honduras.

Artículo 16.- Se consideran como hondureños naturales, los originarios de los otros Estados que formaron parte de la República - Federal de Centro América, que después de un año de residencia -

en el país, manifiesten por escrito ante la autoridad competente, el deseo de ser hondureños y que llenen los requisitos legales, siempre que exista reciprocidad en el país de origen y hasta donde ésta se extienda.

Artículo 17.- Son hondureños por naturalización:

1º- Los españoles por nacimiento y los originarios - de países americanos que tengan un año de residencia en la República;

2º- Los demás extranjeros que hayan residido en el - país más de dos años consecutivos. En ámbos casos el solicitante debe renunciar previamente a su nacionalidad y manifestar - su deseo de adoptar la nacionalidad hondureña ante la autoridad competente. Las condiciones señaladas podrán modificarse a base de convenio o reciprocidad;

3º- Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturalización;

4º- La persona extranjera, casada con hondureño, que optare por la nacionalidad hondureña, o si conforme a la ley - de su país, le correspondiere la nacionalidad del conyuge; y,

5º- Los inmigrantes que formando parte de grupos seleccionados traídos por el Gobierno para fines agrícolas o industriales, después de un año de residencia en el país, llenen los requisitos de ley.

Artículo 18.- Ningún hondureño por nacimiento tendrá nacionalidad distinta de la hondureña, mientras resida en el territorio de la República.

Artículo 19.- Ningún hondureño naturalizado podrá desempeñar en su país de origen, funciones oficiales en representación de Honduras.

Artículo 20.- Ni el matrimonio, ni su disolución, afectan la nacionalidad de los cónyuges o de sus hijos.

Artículo 21.- La nacionalidad hondureña se pierde:

1º- Por naturalización voluntaria en país extranjero;

y,

2º- Por cancelación de la carta de naturalización.

Artículo 22.- La nacionalidad hondureña por nacimiento se recupera cuando el que la hubiere perdido se domicilia en el territorio de la República y declara su voluntad de recuperarla, o cuando permanece en el país por un período no menor de dos años.

Artículo 23.- Todo hondureño está obligado a defender a la Patria, respetar a las autoridades y contribuir al sostenimiento y engrandecimiento moral y material de la nación.

Capítulo II

DE LOS EXTRANJEROS

Artículo 24.- Los extranjeros están obligados desde su ingreso al territorio de la República a respetar a las autoridades y - cumplir las leyes.

Artículo 25.- Los extranjeros gozan en Honduras de todos los derechos civiles de los hondureños, con las restricciones que por razones calificadas de orden público, seguridad o interés nacional, establezcan las leyes.

Quedarán sujetos a todos las cargas ordinarias y extraordinarias de caracter general a que estén obligados los - hondureños.

Artículo 26.- Los extranjeros no podrán hacer reclamaciones, ni exigir indemnización alguna del Estado, sino en la forma y en - los casos en que pudieran hacerlo los hondureños.

No podrán ocurrir a la vía diplomática, sino en los casos de denegación de justicia. Para este efecto no se entenderá por denegación de justicia que un fallo no sea favorable - al reclamante. Los que contravinieren esta disposición perderán el derecho de habitar en el país.

Artículo 27.- Los extranjeros sólo podrán desempeñar empleos en la enseñanza de las ciencias y de las artes, excepto los de carácter directivo, y prestar al Estado servicios técnicos o de - asesoramiento, cuando no haya hondureños que puedan desempeñar esos empleos o prestar estos servicios.

Artículo 28.- La extradición sólo podrá otorgarse en virtud de ley o de tratados, por delitos comunes y nunca por delitos polí ticos, aunque por consecuencia de éstos resulte un delito común.

Artículo 29.- Las leyes establecerán la forma y casos en que pue de negarse al extranjero la entrada al territorio nacional.

El Poder Ejecutivo tiene la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, de conformidad con la ley, a to do extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.

Artículo 30.- Los extranjeros tienen los mismos derechos y deberes individuales y sociales que los hondureños, con las excepcio nes y limitaciones que esta Constitución y las leyes establezcan.

Artículo 31.- No podrán desarrollar actividades políticas de carácter nacional ni internacional, bajo pena de ser sancionados - de conformidad con la ley.

Artículo 32.- Los extranjeros estarán sujetos a una ley especial.

Capítulo III

DE LOS CIUDADANOS

Artículo 33.- Son ciudadanos todos los hondureños, hombres y mu jeres, mayores de dieciocho años.

Artículo 34.- Son derechos del ciudadano:

- 1º- Ejercer el sufragio; y,
- 2º- Optar a los cargos públicos.

Todos los hondureños, sin distinción de sexos, son ad misibles a los cargos públicos, salvo las incompatibilidades que las leyes señalan y las limitaciones que esta Constitución esta blece. Los ciudadanos de alta en el Ejército, en Cuerpos de Segu ridad y Cuerpos Armados, no podrán ejercer el sufragio, pero si serán elegibles en los casos no prohibidos por la ley.

Artículo 35.- Son obligaciones del ciudadano además de otras se ñaladas en esta Constitución:

- a) Inscribirse en el Registro Electoral;
- b) Votar en las elecciones populares;
- c) Desempeñar, salvo excusa o renuncia con causa jus- tificada, los cargos de elección popular y los concejiles; y,
- d) Prestar Servicio Militar y los demás que exija el Estado.

La ley reglamentará estas obligaciones y determinará las penas por su infracción.

Artículo 36.- La calidad de ciudadano se suspende, se pierde, y se restablece, conforme a las siguientes prescripciones:

Se Suspende:

- 1º- Po auto de prisión o declaratoria de reo;
- 2º- Por declaratoria de haber lugar a formación de cau
sa;
- 3º- Por sentencia condenatoria firme, dictada por cau
sa de delito; y,
- 4º- Por interdicción judicial.

Se Pierde:

- 1º- Por obtener la ciudadanía de otro Estado, a menos que entre éste y Honduras, existan tratados que permitan la doble nacionalidad.
- 2º- Por prestar servicios en tiempo de guerra, a enemigos de Honduras o de sus aliados;
- 3º- Por desempeñar en el país, sin licencia del Congre
so Nacional, empleo de nación extranjera, del ramo militar o de carácter político;
- 4º- Por prestar ayuda en contra del Estado, a un extran
jero o a un gobierno extranjero, en cualquier reclamación diplo
mática o ante un tribunal internacional;

5²- Por residir los hondureños naturalizados dos años consecutivos fuera del territorio de la República, sin autorización previa de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores.

6²- Por revocatoria de la carta de naturalización; y,

7²- Por acuerdo gubernativo en los casos expresados en los incisos 3 y 5 del párrafo precedente. En ninguno de los casos comprendidos en los incisos 2, 4 y 6, del párrafo citado, podrá pronunciarse el Poder Ejecutivo, sino el Congreso Nacional, mediante expediente circunstanciado que se forme para el caso.

Se Restablece:

1²- Por sobreseimiento confirmado;

2²- Por sentencia firme absolutoria;

3²- Por cumplimiento de la pena cuando no es necesaria la rehabilitación;

4²- Por amnistía;

5²- Por rehabilitación en caso de indulto, mediante acuerdo gubernativo; y,

6²- Por la residencia en el territorio de la República durante dos años consecutivos, contados desde la fecha de su ingreso al país.

Capítulo IV

PARTIDOS POLITICOS

Artículo 37.- Los partidos políticos legalmente inscritos tienen carácter de instituciones de Derecho Público, cuya existencia y libre funcionamiento garantiza esta Constitución. No podrán sin embargo, formarse partidos políticos de raza, sexo o clase.

Artículo 38.- Los ciudadanos hondureños, tienen derecho a fundar partidos políticos, de conformidad con los requisitos establecidos en esta Constitución y en la Ley Electoral.

Artículo 39.- No se permitirá la formación, inscripción y funcionamiento de partidos políticos que proclamen o practiquen -doctrinas contrarias al espíritu democrático del pueblo hondureño, o que actúen de acuerdo o en subordinación a una organización internacional o extranjera, cuyos programas ideológicos atenten contra la soberanía del Estado. No quedan comprendidas en esta prohibición, las organizaciones que propugnen por la -unión centroamericana o por las doctrinas panamericanas o de -solidaridad continental.

Capítulo V

EL SUFRAGIO Y LA FUNCION ELECTORAL

Artículo 40.- El sufragio es un derecho y una función pública. Su ejercicio será obligatorio, dentro de los límites y condiciones que establezca la ley.

Artículo 41.- El voto será directo y secreto.

Artículo 42.- Se declara punible todo acto por el cual se prohiba o limite al ciudadano participar en la vida política de la - Nación.

Artículo 43.- Para todo lo relacionado con los actos y procedi- mientos electorales habrá un Consejo Nacional de Elecciones.

Artículo 44.- El Consejo Nacional de Elecciones tendrá jurisdicción en toda la República, será absolutamente independiente y - se comunicará directamente con los Poderes Públicos.

Artículo 45.- Sin perjuicio de las demás atribuciones que deter^umine la Ley Electoral, el Consejo Nacional de Elecciones tendrá las siguientes:

a) Dirigir y vigilar la elaboración del Censo Nacional Electoral;

b) Registrar a los partidos políticos y a las candida

tos que reúnan los requisitos establecidos por la ley;

c) Convocar a Elecciones de Autoridades Supremas y Municipales;

d) Mandar que se repongan las vacantes que ocurran en el Poder Legislativo;

e) Organizar, dirigir y supervisar el proceso electoral;

f) Proponer al Poder Ejecutivo el presupuesto de gastos de los organismos electorales;

g) Recibir los expedientes relativos a los escrutinios; declarar la elección de los ciudadanos favorecidos por medio del sufragio y extenderles sus credenciales.

h) Conocer en única instancia de la nulidad de elecciones;

i) Oír y resolver quejas y consultas electorales; y,

j) Hacer el nombramiento de los miembros que integren los organismos electorales de parlamentales y vigilar que quienes formen los organismos locales, reúnan las condiciones y tengan las prerrogativas que manda la Ley Electoral.

Artículo 46.- El Consejo Nacional de Elecciones será nombrado por acuerdo del Poder Ejecutivo; durará seis años en el ejercicio de sus funciones; y sus miembros tendrán las mismas condiciones, inmunidades e inhabilidades de los Diputados.

El Consejo Nacional de Elecciones se integrará por:

a) Un propietario y un suplente designado por cada

uno de los partidos políticos, debidamente inscritos;

b) Un propietario y un suplente designado por las asociaciones de comerciantes, industriales, agricultores y ganaderos.

La Ley Electoral reglamentará la forma en que estas asociaciones harán la designación a que se refiere este inciso; y,

c) Un propietario y un suplente, propuestos separadamente por la Federación de Asociaciones Femeninas Hondureñas, - Federación de Estudiantes Universitarios, Colegios Profesionales y Federaciones de Sindicatos.

Cada una de las agrupaciones indicadas en este inciso, proponrán un propietario y un suplente al Poder Ejecutivo, y éste seleccionará entre los propuestos el propietario y el suplente que deberá integrar el Consejo Nacional de Elecciones.

Artículo 47.- Para la declaración de elecciones de Diputados a la Asamblea Nacional y para la declaratoria de elección de los miembros de las Corporaciones Municipales, se adopta el sistema de representación proporcional. La ley reglamentará este precepto.

Artículo 48.- La acción penal por los delitos electorales establecidos por la ley, es pública y prescribe en seis años.

Artículo 49.- Conocerá de los delitos y faltas electorales la -

justicia ordinaria, conforme al derecho común, sin distinción de fueros.

Artículo 50.- La Ley Electoral prescribirá todo lo concerniente a los Capítulos IV y V de este Título.

TITULO III

DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTIAS

Capítulo I

DECLARACIONES

Artículo 51.- La Constitución garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país el derecho a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la propiedad.

Artículo 52.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos no especificados, que nacen de la soberanía nacional, de la forma republicana y democrática de gobierno y de la dignidad del hombre.

Artículo 53.- No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de los derechos y garantías reconocidos en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.

Artículo 54.- Los funcionarios del Estado únicamente son depositarios de la autoridad, sujetos y jamás superiores a la ley, y -

siempre responsables por su conducta oficial.

La responsabilidad civil de los funcionarios y emplea
dos públicos por cualquier transgresión a la ley, cometida en el
desempeño de su cargo, podrá deducirse en todo tiempo mientras
no se haya consumado la prescripción, cuyo término será de diez
años.

El término de la prescripción de la acción penal se-
rá señalada en el código respectivo.

En ámbos casos, el término de la prescripción comenza
rá a correr desde que el funcionario o empleado público hubiere
cesado en el ejercicio del cargo durante el cual incurrió en res
ponsabilidad.

Artículo 55.- La acción para perseguir a los infractores de los
derechos y garantías consignados en este título es pública, sin
caución ni formalidad de ninguna especie y por simple denuncia.

Capítulo II

INVIOLABILIDAD DE LA VIDA HUMANA

Artículo 56.- Se garantiza la inviolabilidad de la vida, sin -
que por ninguna ley, ni por mandato de ninguna autoridad pueda
establecerse ni aplicarse la pena de muerte.

Capítulo III

SEGURIDAD INDIVIDUAL

Artículo 57.- La libertad personal es inviolable, y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente.

El derecho de defensa es inviolable.

Los habitantes de la República tienen libre acceso ante los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.

Artículo 58.- Esta Constitución reconoce el derecho de amparo y la garantía de exhibición personal o de Habeas Corpus. En consecuencia, toda persona agraviada, o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho:

1º- A interponer el recurso de Amparo:

a)- Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que la Constitución establece; y,

b)- Para que se declare en casos concretos que una ley o resolución o acto de autoridad no obliga al recurrente, por contravenir o restringir cualquiera de los derechos garantizados por la Constitución.

2º- A interponer el recurso de exhibición personal o de Habeas Corpus:

- a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad individual; y,
- b) Cuando en su prisión o detención legal, se apliquen al preso o recluso, tormentos, torturas, exacciones ilegales, vejámenes y toda coacción, restricción o molestia, innecesarias para su seguridad o para el orden de la prisión.

El recurso de exhibición personal podrá interponerse - sin sujeción a requisitos de ninguna clase y las autoridades están obligadas a darle inmediato trámite. Los tribunales no podrán dejar de admitir estos recursos sin incurrir en responsabilidad. Se limita lo anteriormente dispuesto, respecto a la libertad de los individuos cuya extradición se hubiere pedido conforme a los tratados o al Derecho Internacional.

La garantía de Habeas Corpus será concedida libre de - costas. La autoridad que ordenare y los agentes que ejecutaren el ocultamiento del detenido, o que en cualquier otra forma burlaren esta garantía, incurrirán en el delito de detención ilegal.

Artículo 59.- Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente, de acuerdo con la ley, y con las formalidades y garantías que ésta establezca.

Se reconoce el fuero de guerra para los delitos y faltas de orden militar, pero los Tribunales Militares en ningún caso podrán extender su jurisdicción sobre personas que no estén en servicio activo en el Ejército. Cuando en un delito o falta de orden militar estuviere complicado un civil o militar de baja, conocerá -- del caso la autoridad civil respectiva.

Artículo 60.- Toda persona acusada de delito tiene derecho a que no se prejuzgue su responsabilidad, considerándose como inocente mientras no se pruebe lo contrario.

Artículo 61.- No podrá proveerse auto de prisión, sin que preceda plena prueba de haber cometido un crimen o simple delito que merezca pena de privación de la libertad y sin que resulte indicio racional de quien sea su autor. En la misma forma se hará la declaratoria de reo.

Artículo 62.- Nadie podrá ser arrestado, detenido o preso sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley.

Artículo 63.- Ninguna persona podrá ser detenida por más de veinticuatro horas sin ser puesta a las órdenes de autoridad competente -- para su juzgamiento. La detención para inquirir no podrá pasar de seis días.

Artículo 64.- Aun con auto de prisión nadie puede ser llevado a la cárcel ni detenido en ella, si prestase fianza suficiente, - cuando por el delito no deba aplicarse pena que pase de tres años.

Artículo 65.- Ninguna persona puede ser presa o detenida sino en los lugares que determina la ley. Las cárceles son establecimientos de seguridad y defensa social. Se procurará en ellas la profilaxia del delito, la reeducación del recluso y su preparación para el trabajo.

Se prohíbe absolutamente la fustigación y toda clase - de tormentos. En consecuencia, quedan prohibidos los grilletes, las cadenas y todo rigor indebido. La contravención de estas disposiciones será penada por la ley.

Artículo 66.- Ninguna persona puede permanecer incomunicada por mas de veinticuatro horas. La contravención a este precepto será penada de conformidad con la ley.

Artículo 67.- Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por deudas u obligaciones que no provengan de delito.

Artículo 68.- Es permitida la prisión o arresto por pena o apremio en los casos y por el término que disponga la ley. El apremio no podrá exceder de treinta días.

Artículo 69.- Nadie puede ser obligado en asunto penal, correccional o de policía, a declarar contra si mismo o contra su conyuge ni contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a de--clarar. Toda declaración obtenida con infracción de este precepto será nula y los responsables incurrirán en las penas que fija la ley.

Artículo 70.- A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio y sin que le haya sido impuesta por sentencia ejecutoriada de Juez o autoridad competente, exceptuándose el apremio en casos de rebeldía y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como los casos de multa o arresto en materia de policía.

Artículo 71.- Ninguna persona podrá ser juzgada otra vez por -- los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuicia-- mientos.

Artículo 72.- El delincuente infraganti puede ser aprehendido por cualquier persona, para el único efecto de entregarlo a la autoridad.

Artículo 73.- Se prohíben las penas perpetuas, infamantes, proscriptivas y confiscatorias.

La duración de las penas no podrá exceder de veinte años, y de treinta años las acumuladas por varios delitos.

Artículo 74.- Ninguna ley tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o - procesado.

Artículo 75.- Ningún hondureño podrá ser expatriado.

Artículo 76.- La República de Honduras brinda y reconoce el derecho de asilo a los perseguidos políticos, siempre que los acogidos a él respeten la soberanía y las leyes nacionales.

El Estado no autorizará la extradición de reos por - delitos políticos y comunes conexos.

Cuando procediere, conforme a la ley, la expulsión - de un extranjero del territorio nacional, ésta no se verificará si se tratare de asilado político, hacia el territorio del Estado que pueda reclamarlo.

Artículo 77.- El domicilio o la habitación de toda persona es inviolable y no podrá allanarse sino por la autoridad en los casos siguientes:

1º- Para extraer un criminal sorprendido infraganti;

2º- Por haberse cometido un delito en el interior de la habitación, por desorden escandaloso que exija pronto reme--

dio, o por reclamación del interior de la casa;

3º- En casos urgentes, de incendio, terremotos, inundación, epidemia u otro peligro análogo;

4º- Para verificar cualquier visita o inspección de carácter puramente sanitario;

5º- Para libertar a una persona secuestrada; y,

6º- Para extraer objetos perseguidos en virtud de un proceso, precediendo semiplena prueba de que se ocultan en la casa que deba allanarse.

En los tres últimos casos no podrá verificarse el allanamiento sino con orden escrita de autoridad competente.

Siempre que el domicilio que haya de allanarse no sea el de la persona a quien se persigue, la autoridad o sus agentes solicitarán previamente permiso al que mora o habita la casa. El allanamiento del domicilio no puede verificarse de las siete de la noche a las seis de la mañana, sin incurrir en responsabilidad.

En caso de suspensión de esta garantía será requisito indispensable para penetrar en el domicilio de una persona, que lo haga la propia autoridad competente, mediante orden o resolución escrita de la que dejará copia auténtica al morador, a su familia, al vecino más próximo, según proceda.

Artículo 78.- Son inviolables la correspondencia en todas sus formas y los demás papeles particulares, que sólo podrán ser ocupados o examinados por disposición de autoridad judicial competente y con las formalidades que establezcan las leyes; se guardará siempre el secreto respecto de lo doméstico y privado, que no tenga relación con el juicio o proceso que se ventila.

Los libros y documentos de los comerciantes e industriales quedan sujetos, de conformidad con las leyes o sus reglamentos, a las funciones de inspección o fiscalización por parte de los funcionarios o autoridades correspondientes.

La correspondencia, documentos y libros a que se refiere este artículo, que sean violados o sustraídos de las estafetas o de cualquier otro lugar, no harán fe en juicio.

Artículo 79.- Los Cuerpos de Seguridad son instituciones del Estado, encargados de velar por la conservación del orden público, de proteger a las personas y propiedades y de ejecutar las resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones de las autoridades y funcionarios. Una ley especial regulará sus funciones.

Artículo 80.- Corresponde al Estado nombrar procuradores que defiendan a los pobres, y velen por las personas e intereses de los menores y demás incapaces, darán a ellos asistencia legal y

los representaran judicialmente en la defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales.

Artículo 81.- Ninguna persona puede ser inquietada o perseguida por sus opiniones. Las acciones privadas que no alteren el orden público o que no causen daño a terceros, estarán fuera de la acción de la ley.

Artículo 82.- Se prohíbe la usura. Es de orden público la ley - que señale límite máximo al interés del dinero. La misma ley determinará las penas que deban aplicarse a los contraventores.

Capítulo IV

LIBERTAD

Artículo 83.- Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos.

Los hondureños y los extranjeros residentes en el país, tienen derecho al reconocimiento de la dignidad inherente a su condición humana.

Artículo 84.- Todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro, y nadie estará obligado a hacer lo que no estuviere legalmente prescrito, ni impedido de ejecutar lo que la ley no prohíbe.

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Ningún servicio personal es exigible, ni deberá prestarse gratuitamente, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley.

Artículo 85.- Es libre la emisión del pensamiento valiéndose de cualquier medio de difusión, sin previa censura. Ante la ley es responsable el que abuse de este derecho.

Los talleres tipográficos, las estaciones radiodifusoras y de televisión y cualesquiera otros medios de emisión y di-

fusión, y sus maquinarias y enseres, no podrán ser decomisados ni confiscados, ni clausuradas o interrumpidas sus labores por razón de delito o falta en la emisión del pensamiento. Por estas últimas causas sólo serán responsables los autores del delito o falta.

Ninguna empresa de difusión del pensamiento hablado o escrito podrá recibir subvenciones de gobiernos o partidos políticos o extranjeros. La ley establecerá la sanción que corresponda por la violación de este precepto.

La dirección de los periódicos impresos, radiales o televisados y la orientación intelectual, política y administrativa de los mismos serán ejercidas exclusivamente por hondureños.

Artículo 86.- Se garantiza la libertad de enseñanza.

Artículo 87.- Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público.

Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo.

Artículo 88.- Se garantiza la libertad de asociación siempre que no sea contraria a la seguridad del Estado y a las buenas costumbres.

Artículo 89.- Toda persona tiene el derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial.

Artículo 90.- Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades, ya sea por motivos de interés particular o general, y el de obtener pronta respuesta.

Artículo 91.- Las reuniones de carácter político, y al aire libre, podrán ser sujetas a un régimen de permiso especial, con el único fin de garantizar el orden público.

Artículo 92.- Se garantiza la libertad de industria, comercio y -trabajo lícitos.

Artículo 93.- Toda persona tiene derecho a circular libremente en el territorio nacional, así como a salir, entrar y permanecer en él. A nadie puede obligarse a mudar de domicilio o residencia, sino por mandato de autoridad judicial, en los casos especiales y -- con los requisitos que la ley señala.

Artículo 94.- Nadie podrá tener o portar armas sin el permiso de la autoridad competente. La ley reglamentará esta disposición.

Capítulo V

IGUALDAD

Artículo 95.- En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley.

Se declara ilícita y punible toda discriminación por - motivo de sexo, raza y clase o cualquiera otra lesiva a la dignidad humana. La ley establecerá las sanciones en que incurran los infractores de este precepto.

Artículo 96.- Los impuestos y las cargas públicas sólo obligan - cuando han sido legalmente decretadas. Sólo un Congreso Nacional reunido en sesiones ordinarias impone contribuciones y demás cargas públicas.

Capítulo VI

PROPIEDAD

Artículo 97.- El Estado garantiza, fomenta y reconoce la existen
cia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concep
to de función social y sin más limitaciones que aquellas que por
motivos de necesidad o interés público establezca la ley.

Artículo 98.- Nadie puede ser privado de su propiedad sino en vir
tud de ley o de sentencia fundada en ley.

Artículo 99.- La expropiación de bienes por causa de necesidad o
utilidad pública debe ser calificada por la ley o por sentencia
fundada en ley, y no se verificará sin previa indemnización.

En caso de guerra o conmoción interior, no es indispen
sable que la indemnización sea previa; pero el pago correspondien
te se hará, a más tardar, dos años después de concluído el estado
de emergencia.

Artículo 100.- El derecho de propiedad no perjudicará el derecho
eminente del Estado. Tampoco podrá anteponerse a los derechos que
tengan las instituciones para obras de carácter nacional.

Para establecer el derecho de vía en la construcción de
caminos, ferrocarriles, canales de irrigación, líneas de transmi-

sión eléctrica y telegráfica y demás obras públicas de similar naturaleza, el Estado indemnizará a los propietarios expropiados únicamente en el valor de las mejoras, salvo casos especiales que señalará taxativamente la ley. Asimismo, las obras necesarias a la seguridad de las propiedades afectadas, se realizarán por cuenta - del Estado.

Artículo 101.- Los terrenos del Estado, ejidales, comunales, o de propiedad privada situados en las zonas limítrofes a los Estados vecinos; los situados en el litoral de ambos mares, en una extensión de cuarenta kilómetros, hacia el interior del país, y los de las - islas, cayos, arrecifes, escolladeros, peñones, sirtes y bancos de arena, sólo podrán ser adquiridos en dominio pleno o menos pleno, por hondureños de nacimiento, por sociedades integradas en su totalidad por socios hondureños, y por Bancos del Estado, bajo pena de nulidad del respectivo acto o contrato.

Se prohíbe a los Registradores de la Propiedad la inscripción de documentos que contraríen esta disposición.

Se exceptúan los bienes urbanos.

Artículo 102.- Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley.

Artículo 103.- El derecho de reivindicar los bienes confiscados es imprescriptible.

Artículo 104.- Ninguna persona que tenga la libre administración de sus bienes, puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles por transacción o arbitramento.

Artículo 105.- Se prohíbe la confiscación de bienes. La propiedad no puede ser limitada en forma alguna por causas de delito político.

Artículo 106.- Los impuestos nunca serán confiscatorios.

Capítulo VII

SUSPENSION DE GARANTIAS

Artículo 107.- Las garantías establecidas en los Artículos 58, N^o. 2; 62, 63, 64, 77, 78, 85, 88, 89, 93, y 98 podrán suspenderse en caso de invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, de epidemia o de cualquier otra calamidad general, por el Presidente de la República, de acuerdo con el Consejo de Ministros, por medio de un decreto que contendrá:

- 1^o- Los motivos que lo justifiquen;
- 2^o- La garantía o garantías que se restrinjan;
- 3^o- El territorio que afectará la restricción; y,
- 4^o- El tiempo que durará ésta. Además, se convocará en el mismo decreto al Congreso para que, dentro del plazo de treinta días, conozca de dicho decreto y lo ratifique, modifique o impruebe.

En caso de que estuviere reunido, conocerá inmediatamente del decreto. La restricción de garantías no podrá exceder de un plazo de cuarenta y cinco días por cada vez que se decreta. Si antes de que venza el plazo señalado para la restricción, hubieren desaparecido las causas que motivaron el decreto, se hará cesar en sus efectos, y en este caso todo ciudadano tiene el derecho para instar su revisión. Vencido el plazo de cuarenta y

cinco días, automáticamente quedan restablecidas las garantías, salvo que se hubiere dictado nuevo decreto de restricción.

La restricción de garantías decretadas, en modo alguno afectará el funcionamiento de los Organismos del Estado, cuyos miembros gozarán siempre de las inmunidades y prerrogativas que les conceda la ley.

Artículo 108.- El territorio en que fuesen suspendidas las garantías expresadas en el artículo anterior, se regirá durante la suspensión, por la Ley de Estado de Sitio; pero ni en dicha ley ni en otra alguna podrá disponerse la suspensión de otras garantías que las ya mencionadas.

Tampoco podrá hacerse, durante la suspensión, declaraciones de nuevos delitos ni imponerse otras penas que las establecidas en las leyes vigentes al decretarse la suspensión.

Si el Poder Ejecutivo violare cualquiera de las disposiciones comprendidas en este Título III, que no fueren de las comprendidas en el artículo precedente, el perjudicado o cualquiera en su nombre, podrá recurrir de amparo.

TITULO IV

GARANTIAS SOCIALES

Capítulo I

LA FAMILIA

Artículo 109.- La familia, el matrimonio y la maternidad están bajo la protección del Estado. Se garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges.

Artículo 110.- Sólo es válido el matrimonio celebrado ante funcionarios competentes y debidamente inscrito en el Registro Civil. Su formalización será reglamentada por la ley.

Artículo 111.- Se reconoce la unión de hecho entre las personas legalmente capacitadas para contraer matrimonio. La ley señalará las condiciones para que surta los efectos del matrimonio civil.

Artículo 112.- Las calificaciones sobre la naturaleza de la filiación, quedan abolidas. No se consignará declaración alguna diferenciando los nacimientos ni sobre el estado civil de los padres en las actas de inscripción de aquéllos, ni en ningún documento, atestado o certificación referente a la filiación.-

En consecuencia, no se reconocen desigualdades entre los hijos, teniendo todos los mismos derechos y deberes.

Artículo 113.- Las actas o documentos religiosos únicamente ser virán para establecer el estado civil de las personas, como - - pruebas de caracter supletorio debidamente justificado.

Artículo 114.- Se reconoce el derecho de adopción. Una ley espe cial regulará esta institución.

Artículo 115.- Se autoriza la investigación de la paternidad. - La ley determinará el procedimiento.

Artículo 116.- Los padres de familia pobres con cinco o más hijos menores, recibirán especial protección del Estado. En iguales circunstancias de idoneidad, gozarán de preferencia para el desempeño de cargos públicos.

Artículo 117.- Los padres están obligados a alimentar, asistir y educar a sus hijos. El Estado velará por el cumplimiento de - estos deberes.

Artículo 118.- Corresponde al Estado velar por la salud física, mental y moral de la infancia, creando los institutos y depen-- dencias necesarios y adecuados.

Las leyes de protección a la infancia son de orden pú

blico, y los establecimientos oficiales destinados a dicho fin tienen el caracter de centros de asistencia social.

El Estado está en la obligación de fomentar la formación de patronatos, juntas directivas y administradoras de centros asistenciales, beneficas o que promuevan el progreso y mejoramiento de las comunidades, creados por iniciativa privada. La ley regulará esta disposición.

Artículo 119.- Los menores deficientes fisica o mentalmente, - los huérfanos, los abandonados, los ancianos, los delincuentes o predelincuentes estarán sometidos a una legislación especial de vigilancia, rehabilitación y protección. No se permitirá el ingreso de un menor de dieciocho años a una cárcel o presidio.

Artículo 120.- El Estado proveerá a la crianza y educación de los menores cuyos padres o tutores esten económicamente incapacitados para hacerlo o que carezcan de parientes obligados a - proporcionárselas.

Artículo 121.- El patrimonio familiar será objeto de una legislación especial que la proteja y fomente.

Artículo 122.- Se reconoce el divorcio como medio de disolución del vínculo matrimonial.

Capítulo II

DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones -- equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección con-- tra el desempleo.

Artículo 124.- Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Serán nulas las disposiciones y convenciones que contravengan o restrijan las garantías -- siguientes:

x 1º- La jornada diurna ordinaria de trabajo no podrá -- exceder de ocho horas diarias y de cuarenta y cuatro a la semana. La jornada nocturna ordinaria de trabajo no podrá exceder -- de seis horas diarias y de treinta y seis a la semana. La jornada mixta ordinaria de trabajo no podrá exceder de siete horas -- diarias y de cuarenta y dos a la semana. Todas con pago equiva-- lente a cuarenta y ocho horas de salario. El trabajo en horas -- extraordinarias será remunerado en la forma que determine la -- ley. Estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excep-- ción, muy calificados, que la ley señale;

2º- No se podrá exigir al trabajador el desempeño de

labores que cubran más de doce horas en cada periodo de veinticuatro horas sucesivas, salvo los casos calificados por la ley;

3º- A trabajo igual debe corresponder salario igual, sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales;

4º- El salario deberá pagarse con moneda de curso legal;

5º- El valor del salario y el de la indemnizaciones y prestaciones sociales constituyen un crédito privilegiado en ca sos de quiebra o concurso del patrono;

6º- Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo fijado periódicamente con intervención del Estado y de los trabajadores y patronos, suficiente para cubrir las nece sidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región y de cada labor, al costo de la vida, a la aptitud relativa de los trabajadores y a los sistemas de remuneración de las empresas.

Igualmente se señalará un salario mínimo profesional en aquellas actividades en que el mismo no estuviere regulado por un contrato o convención colectivos.

El salario mínimo estará exento de embargo, compensa-

ción y descuento, salvo lo dispuesto por la ley atendiendo a obligaciones familiares y sindicales del trabajador;

7º- El patrono estará obligado a observar, en la - instalación de sus establecimientos, los preceptos legales - sobre higiene y salubridad, a adoptar las medidas de seguridad adecuadas en el uso de las máquinas, instrumentos y mate riales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, - que resulte para la salud y vida de los trabajadores, la ma- yor garantía compatible con la naturaleza de la negociación, bajo las penas que al efecto establezcan las leyes.

Bajo el mismo régimen de previsión, quedan sujetos los patronos de explotaciones agrícolas, por el uso de sus-- tancias tóxicas en sus plantaciones, para precaver las enfer- medades profesionales de los trabajadores.

Se establecerá una protección especial para la mu- jer y el menor de dieciséis años;

8º- Los menores de catorce años y los que habiendo cumplido esa edad, sigan sometidos a la enseñanza en virtud de la legislación nacional, no podrán ser ocupados en ningun- a clase de trabajo. Las autoridades encargadas de vigilar - el trabajo de estos menores podrán autorizar su ocupación, - cuando lo consideren indispensable para la subsistencia de -

los mismos, o de sus padres o hermanos, y siempre que ello no impida cumplir con el mínimo de instrucción obligatoria.

Para menores de dieciseis años la jornada de trabajo, que deberá ser diurna, no podrá exceder de seis horas y de treinta y seis semanales, en cualquier clase de trabajo;

9º- El trabajador tendrá derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuya extensión y oportunidad serán reguladas por la ley. En caso de despido injustificado el patrono pagará en efectivo, a más de las indemnizaciones que la ley señale, la parte de vacaciones correspondiente al periodo trabajado.

10º- Los trabajadores tendrán derecho a descanso remunerado en los días feriados que señale la ley; ésta determinará la clase de labores en que no regirá esta disposición; pero en estos casos, los trabajadores tendrán derecho a remuneración extraordinaria;

11º- La mujer tiene derecho al descanso antes y después del parto, sin pérdida de su trabajo ni del salario. En el periodo de lactancia tendrá derecho a descanso extraordinario, por día, para amamantar a sus hijos.

No podrá despedirse del trabajo a la mujer grávida, salvo causas justificadas que señale taxativamente la ley;

12º- Los patronos están obligados a indemnizar al trabajador por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesiona-

les, de conformidad con la ley;

13º- Se reconoce el derecho de huelga y de paro. La ley reglamentará su ejercicio y podrá someterlo a restricciones especiales en los servicios públicos que determine;

14º- Los trabajadores y los patronos tienen derecho a asociarse libremente para los fines exclusivos de su actividad económico-social, fundando sindicatos o asociaciones profesionales. La ley regulará este derecho; y,

15º- El Estado tutela los contratos colectivos e individuales entre patronos y trabajadores.

Artículo 125.- La ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto, y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá de recho a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas, o a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, a su elección.

Artículo 126.- Se reconoce al trabajador a domicilio una si- tuación jurídica análoga a la de los demás trabajadores, habi da consideración de las peculiaridades de su labor.

Artículo 127.- Los trabajadores domésticos serán amparados por la legislación social. Quienes presten servicios de caracter - doméstico en empresas industriales, comerciales, sociales y de más equiparables, serán considerados como trabajadores manua-- les y tendrán los derechos reconocidos de éstos.

Artículo 128.- La ley regulará el contrato de los trabajadores agrícolas, ganaderos y forestales, de transporte terrestre, de transporte aereo, petroleros, mineros, empleados de comercio y el de aquellos otros que se realicen dentro de modalidades par ticulares.

Artículo 129.- Los trabajadores intelectuales independientes y el resultado de su actividad, deberán ser objeto de una legis- lación protectora.

Artículo 130.- Se establece la jurisdicción del trabajo a la - cual quedan sometidas todas las controversias jurídicas que se originen de las relaciones entre el capital y el trabajo. Cré- anse las Cortes de Apelaciones y Juzgados del Trabajo. La ley reglamentará su organización y funcionamiento.

Artículo 131.- Las leyes laborales estarán inspiradas en la ar monía del capital y del trabajo, como factores de producción.

El Estado debe tutelar los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo proteger al capital y al empleador.

Artículo 132.- En igualdad de condiciones los trabajadores hondureños tendrán la preferencia sobre los extranjeros. La ley fijará el porcentaje de trabajadores hondureños para las empresas o patronos, el que, en ningún caso, será inferior al noventa por ciento, salvo las excepciones que determine. El Poder Ejecutivo podrá modificar dicho porcentaje cuando los requerimientos de la agricultura o la conveniencia nacional así lo demanden, y establecer, en condiciones de reciprocidad, excepciones para los trabajadores centroamericanos.

Artículo 133.- Con el fin de hacer efectivas las garantías y leyes laborales, el Estado vigilará e inspeccionará las empresas, imponiendo en su caso las sanciones que establezca la ley.

Artículo 134.- Se establece la jurisdicción del trabajo a la cual quedan sometidas las controversias jurídicas que originen las relaciones entre el capital y el trabajo. La ley establecerá las normas correspondientes a dicha jurisdicción y a los organismos que hayan de ponerlas en práctica.

Artículo 135.- El Estado tiene la obligación de promover la concialiación y el arbitraje para la solución pacífica de los conflictos de trabajo.

Artículo 136.- El Estado promoverá la preparación técnica de los trabajadores y la elevación de su nivel cultural y económico.

co.

Es deber de las empresas industriales, en las esferas de su especialidad, crear escuelas destinadas a promover la educación obrera entre los hijos de sus operarios y asociados. La ley regulará esta materia.

Artículo 137.- El Estado fomentará la construcción de viviendas y de colonias para los trabajadores, y velará porque llenen condiciones de salubridad. Con este fin tiene facultades para inspeccionar las viviendas construídas por las empresas y para dictar las medidas necesarias de conformidad con los reglamentos - generales de sanidad.

Artículo 138.- La ley determinará las empresas y patronos que por el número de sus trabajadores o la importancia de su capital, estarán obligados a proporcionar a los obreros habitaciones adecuadas, escuelas, enfermerías y demás servicios y atenciones propicios al bienestar físico y moral del trabajador y de su familia.

Artículo 139.- Toda persona tiene derecho a la seguridad de sus medios económicos de subsistencia en caso de incapacidad para trabajar u obtener trabajo retribuído. Los servicios de seguro social serán prestados y administrados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y cubrirá los casos de enfermedad, -

maternidad, subsidios de familia, vejez, orfandad, paro forzoso, accidente de trabajo y enfermedades profesionales, todas las demás contingencias que afecten la capacidad de trabajar y consumir. La ley promoverá el establecimiento de los servicios, a medida que las necesidades sociales lo exijan.

El Estado creará instituciones de asistencia y la previsión social.

Artículo 140.- La ley regulará los alcances, extensión y funcionamiento del régimen de seguridad social. El Estado, patronos y trabajadores están obligados a contribuir al financiamiento y a facilitar el mejoramiento y expansión del seguro social.

Artículo 141.- Se considera de utilidad pública la ampliación del régimen de seguridad social a los trabajadores de la ciudad y del campo.

Artículo 142.- La ley regulará la formación de empresas cooperativas, ya sean comerciales, agrícolas, industriales, de consumo o de cualquier índole, sin que se eluda o adultere el régimen del trabajo establecido en ésta Constitución.

Artículo 143.- El Estado protegerá al campesino, y a este fin legislará entre otras materias, sobre el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos, créditos, agrícolas,

indemnizaciones por pérdida de cosecha, cooperativas de producción y consumo, cajas de previsión, escuelas prácticas de - - agricultura y granjas de experimentación agropecuaria, obras - para riego y vías rurales de comunicación.

Artículo 144.- Los derechos consignados en este capítulo son - irrenunciables. Serán nulas las estipulaciones que los restrinjan o supriman.

Artículo 145.- Los derechos y garantías enumerados en este capítulo, no excluyen los que emanen de los principios de justicia social aceptados por nuestro país en convenciones internacionales.

Artículo 146.- La legislación laboral que regule las relaciones entre el capital y el trabajo, lo hará colocándolas sobre una base de justicia social, de modo que garanticen al trabajador las condiciones necesarias para una vida normal, y al capital una compensación equitativa de su inversión.

Capítulo III

CULTURA

Artículo 147.- La educación es función especial del Estado para la conservación, el fomento y difusión de la cultura, la -- cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza.

Artículo 148.- El Estado promoverá una política de planificación y coordinación para el desarrollo de las comunidades, para lo cual creará el organismo técnico correspondiente, adscripto al más alto nivel estatal.

Artículo 149.- El Estado sostendrá e incrementará la organización de establecimientos de enseñanza preescolar, primaria y -- media, comprendiendo las escuelas prevocacionales, vocaciona-- les y artísticas. Además, impulsará el desarrollo de la educación extraescolar por medio de bibliotecas, centros culturales y otras formas de difusión de la cultura.

Artículo 150.- La organización y dirección técnica de la educación corresponden al Estado. La enseñanza impartida oficialmente será gratuita, y la primaria será, además, obligatoria y to talmente costeada por el Estado.

Artículo 151.- La formación de maestros de educación es función preferente del Estado.

Artículo 152.- El maestro tiene derecho a goces y privilegios - especiales, principalmente a un sueldo que atendiendo a su importante misión lo dignifique, social, económica y culturalmente, y a una jubilación justa como recompensa de sus servicios - prestados a la Patria. La ley reglamentará estos derechos.

Los Maestros de Educación Primaria en servicio en las escuelas primarias estarán exentos de toda clase de impuestos - sobre los sueldos que devenguen y sobre las cantidades que perciban en concepto de jubilaciones.

Artículo 153.- La ley determinará el correspondiente Escalafón del Magisterio, que garantice su estabilidad, su ascenso y su eficiencia.

Artículo 154.- La enseñanza privada está sujeta a la supervisión y reglamentación aprobadas por el Estado.

Artículo 155.- Para ejercer la docencia se requiere acreditar - capacidad en la forma que la ley disponga.

Artículo 156.- En los centros docentes públicos o privados, la enseñanza de la Constitución, Educación Cívica, Historia y Geografía Nacionales, estará a cargo de profesionales hondureños -

por nacimiento.

Artículo 157.- La Universidad Nacional es una institución autónoma, con personalidad jurídica. Goza de exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la enseñanza superior y la educación profesional; contribuirá a la investigación científica, a la difusión general de la cultura y cooperará al estudio de -- los problemas nacionales.

La ley y sus estatutos fijarán su organización, funcionamiento y atribuciones.

El Estado podrá autorizar la fundación de universidades particulares, oyendo para tal efecto la opinión razonada -- de la Universidad Nacional Autónoma.

Sólo tendrán validez oficialmente los títulos de carácter académico otorgados y reconocidos por la Universidad Nacional Autónoma, y los otorgados por otras universidades creadas de conformidad con la ley.

Sólo las personas que ostenten título válido podrán ejercer actividades profesionales.

Artículo 158.- El Estado contribuirá al sostenimiento, desarrollo y engrandecimiento de la Universidad Nacional Autónoma, con una asignación privativa anual del tres por ciento del presu--

puesto de ingresos netos de la nación excluidos los préstamos y donaciones. La Universidad Nacional Autónoma está exonerada de toda clase de impuestos y contribuciones.

Artículo 159.- El Estado proveerá becas para estudios profesionales, de artes y de industrias populares, y para el perfeccionamiento o especialización de postgraduados que por vocación, capacidad u otros méritos se hagan acreedores a esta prote- -cción. La ley reglamentará esta materia.

Artículo 160.- El Estado fomentará el sostenimiento de escuelas para ciegos, sordomudos y retardados mentales y contribuirá para el logro de ese fin.

Artículo 161.- Los títulos que no tengan caracter universita-rio y cuyo otorgamiento corresponde al Estado, tendrán vali--dez legal.

Artículo 162.- El Estado contribuirá al sostenimiento de escolares de insuficientes recursos económicos, de acuerdo con --una ley especial.

Artículo 163.- Se establece la colegiación profesional obli-gatoria. La ley reglamentará su organización y funcionamiento.

Artículo 164.- Las artes é industrias populares son elementos de la cultura nacional y gozarán de especial protección, a --fin de conservar su autenticidad artística y mejorar su producción y distribución.

TITULO V

PODERES DEL ESTADO

PODER LEGISLATIVO

Capítulo I

SU ORGANIZACION

Artículo 165.- El Poder Legislativo se ejerce por un Congreso de Diputados que serán elegidos por sufragio directo. El Congreso Nacional se reunirá en la capital de la República ordinariamente el veintiséis de mayo de cada año, sin necesidad de convocatoria, fecha en la cual será su solemne instalación, y clausurará sus sesiones el veintiséis de octubre del mismo -- año.

Las sesiones podrán prorrogarse por el tiempo que - fuere necesario, conforme resolución del Congreso, a excitativa de un Diputado o del Poder Ejecutivo.

Artículo 166.- El Congreso Nacional tendrá también sesiones - extraordinarias cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus miembros o sea convocado por el Ejecutivo.

En estos casos sólo tratará de los asuntos que motiva

varon el respectivo decreto de convocatoria.

Artículo 167.- El veinte de mayo se reunirán los Diputados en juntas preparatorias y con la concurrencia de cinco, por lo menos, se organizará el Directorio Provisional.

Artículo 168.- El 22 de mayo se reunirán los Diputados para elegir el Directorio en propiedad.

El Presidente del Congreso Nacional durará en sus funciones por el periodo de seis años y siempre será el Presidente de la Comisión Permanente; el resto de la Directiva durará dos años en sus funciones. El Reglamento regulará su número y organización.

Artículo 169.- La mitad más uno de los miembros de que se compone el Congreso Nacional será suficiente para su instalación y para celebrar sesiones.

Artículo 170.- Ni el mismo Congreso Nacional ni otra autoridad del Estado, podrán impedir la instalación del Congreso o decretar su disolución.

La contravención de este precepto constituye delito.

Artículo 171.- Un número de cinco Diputados podrá convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para cualquier lugar de

la República, cuando el Ejecutivo, otra autoridad o fuerza mayor impidan su instalación o la celebración de sus sesiones.

Artículo 172.- Los Diputados serán electos por un periodo de seis años, contados desde el día en que se instale solemnemente el Congreso Nacional. En caso de falta absoluta de un Diputado terminará su periodo el suplente llamado por el Congreso Nacional.

Artículo 173.- Los Diputados tienen obligación de reunirse en Asamblea, en las fechas fijadas por esta Constitución, y asistir a todas las sesiones del Congreso Nacional, salvo incapacidad debidamente comprobada.

Artículo 174.- Los Diputados incorporados o los que tengan -- credencial extendida por el Consejo Nacional de Elecciones, - que dejaren de asistir a las sesiones sin causa justificada, - cesarán en sus funciones, y perderán por un periodo de diez - años el derecho de optar a los cargos públicos. El Reglamento Interior regulará este precepto.

Artículo 175.- Los Diputados no podrán abstenerse de votar, - ni votar en blanco.

Artículo 176.- No pueden ser elegidos Diputados:

1º- El Presidente de la República y los Designados

a la Presidencia de la República;

2º- Los Secretarios y Subsecretaría de Estado;

3º- Los militares en servicio activo y los miembros de los cuerpos de seguridad o de cualquier otro cuerpo armado y los demás funcionarios y empleados públicos;

4º- Los miembros de los organismos electorales;

5º- Los miembros del Consejo Nacional de Economía;

6º- Los agentes diplomáticos y consulares.

7º- Los presidentes, directores y gerentes de los Bancos del Estado y de las instalaciones gubernamentales autónomas;

8º- El cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del Presidente de la República, de los Secretarios y Subsecretarios de Estado, del Jefe de las Fuerzas Armadas, de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los miembros del Consejo Nacional de Elecciones;

9º- El cónyuge y los parientes de los Jefes de zonas militares, comandantes de unidades militares, delegados militares departamentales o seccionales, y delegados de los cuerpos de seguridad dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, - cuando fueren candidatos por el Departamento donde aquéllos ejercen su jurisdicción;

10- Los concesionarios del Estado para la explotación de riquezas naturales o contratistas de servicios y obras públicas que se costeen con fondos nacionales, y quienes por tales conceptos tengan cuentas pendientes con el Estado; y,

11- Los deudores morosos de la Hacienda Pública, como consecuencia de la administración de fondos nacionales.

Artículo 177.- Los Diputados gozarán desde el día en que se les declare electos, de las siguientes prerrogativas:

1º- De inmunidad personal para no ser detenidos, acusados ni juzgados aún en estado de sitio, si el Congreso Nacional no los declara previamente con lugar a formación de causa;

2º- No ser llamados al servicio militar sin su consentimiento;

3º- No ser responsables por sus opiniones o iniciativas parlamentarias en ningún tiempo; y,

4º- No ser demandados civilmente desde quince días antes hasta quince días después de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso Nacional, salvo el caso de reconvención.

Artículo 178.- La elección de Diputados al Congreso Nacional se hará sobre la base de un Diputado Propietario y un Suplente por cada treinta mil habitantes o fracción que exceda de quince mil. En aquellos departamentos que tuvieren población menor de treinta mil habitantes se elegirá un Diputado propietario y un Diputado suplente. El Congreso Nacional, con vista del aumento de la población, podrá modificar la base para la elección de los Diputados.

Artículo 179.- Los Diputados en ejercicio no podrán desempeñar

cargos públicos remunerados durante el tiempo por el que han sido elegidos, excepto los de carácter estrictamente docente y los relacionados con los servicios profesionales de asistencia social. Podrán, sin embargo, desempeñar voluntariamente los cargos de Secretario y Subsecretario de Estado o Representante Diplomático. En estos últimos casos se reincorporarán al Congreso Nacional al cesar en sus funciones.

Los Diputados Suplentes pueden desempeñar empleos o - cargos públicos, sin que su aceptación y ejercicio produzcan la pérdida de la calidad de tales.

Artículo 180.- Ningún Diputado podrá tener en arrendamiento, directa o indirectamente, bienes del Estado u obtener de éste contratos o concesiones de ninguna clase.

Capítulo II

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO

Artículo 181.- Corresponden al Congreso Nacional las atribuciones siguientes:

- 1º- Abrir, suspender y cerrar sus sesiones;
- 2º- Emitir su Reglamento Interior y aplicar las sanciones que en él se establezcan para quienes lo infrinjan;
- 3º- Convocar a sesiones extraordinarias a iniciativa de uno o más de sus miembros o a excitativa del Poder Ejecutivo;
- 4º- Decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes;
- 5º- Incorporar a sus miembros con vista de las credenciales y recibirles la promesa constitucional;
- 6º- Llamar a los Diputados suplentes, en caso de falta absoluta o de legítimo impedimento de los propietarios, o cuando éstos se rehusen a asistir;
- 7º- Admitir o no las renunciaciones que presenten los Diputados;
- 8º- Hacer concurrir a los Diputados ausentes, de acuerdo con el Reglamento Interior;
- 9º- Hacer el escrutinio de votos y declarar la elección de Presidente, Designados a la Presidencia y Diputados al Congreso Nacional, cuando el Consejo Nacional de Elecciones no lo hubiere hecho. Cuando concurren en un mismo ciudadano diversas elecciones,

será determinada la preferencia en el orden siguiente:

- a) Presidente de la República;
- b) Designados a la Presidencia de la República; y,
- c) Diputados al Congreso Nacional. La elección de propietario se preferirá a la de suplente.

10.- Elegir para el periodo constitucional que comienza el seis de junio, siete Magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia y cinco Magistrados suplentes;

11.- Hacer la elección del Jefe de las Fuerzas Armadas, Contralor y Subcontralor, Procurador y Subprocurador Generales de la República;

12.- Recibir la promesa constitucional al Presidente de la República y Designados a la Presidencia, declarados electos, y a los demás funcionarios que elija; concederles licencia y admitirles o no su renuncia, y llenar las vacantes en casos de falta absoluta de alguno de ellos;

13.- Conceder permiso al Presidente de la República para que pueda ausentarse del país por más de treinta días;

14.- Cambiar la residencia de los Poderes del Estado por causas graves;

15.- Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente o Designados a la Presidencia, Diputados, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Jefe de las Fuerzas Armadas, Miembros del Consejo Nacional de Elecciones, Secretarios y Subsecre-

tarios de Estado y Agentes Diplomáticos durante sus funciones;

16.- Conceder amnistia por delitos políticos y delitos comunes conexos con los políticos. Fuera de este caso, el Congreso Nacional no podrá dictar resoluciones por vía de gracia;

17.- Decretar premios y conceder privilegios temporales a los autores o inventores y a los que hayan introducido nuevas industrias o perfeccionado las existentes de utilidad general;

18.- Conceder o negar permiso a los hondureños para -- aceptar en el país cargos o condecoraciones de otro Estado;

19.- Aprobar o improbar los contratos que lleven involucrados exenciones, privilegios y concesiones fiscales, o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente periodo presidencial;

20.- Aprobar o improbar la conducta administrativa de los Poderes Ejecutivo y Judicial y del Consejo Nacional de Elecciones e Instituciones Autonomas;

21.- Declarar la suspensión de garantías, de conformidad con lo prescrito es esta Constitución, y ratificar, modificar o improbar la que dictare el Poder Ejecutivo, de acuerdo con la ley;

22.- Conferirlos grados de Mayor a General de División, a iniciativa conjunta del Presidente de la República y del Jefe - de las Fuerzas Armadas;

23.- Permitir o negar el transito por la República de

tropas de otro país;

24.- Autorizar al Poder Ejecutivo para ordenar la salida a otro país de tropas del Ejercito Nacional, para prestar servicios en territorio extrnajero, de conformidad con tratados y - convenciones internacionales;

25.- Declarar la guerra y hacer la paz;

26.- Aprobar o improbar los tratados y convenciones que el Ejecutivo haya celebrado. Pero en los tratados sobre intercambio comercial celebrados con otros países, siguiendo el sistema de listas de artículos, podrá el Ejecutivo, si conviniere a los intereses de la Nación poner en práctica las modificaciones a tales listas, por el mero canje de notas de cancillería, cuando -- así se hubiere estipulado en el tratado respectivo;

27.- Fijar el número de fuerzas del Ejercito Permanente;

28.- Crear y suprimir empleos y decretar honores y pensiones, por relevantes servicios prestados a la Patria;

29.- Aprobar anualmente el Presupuesto General de Egresos e Ingresos, tomando como base el proyecto que remita el Poder Ejecutivo, y resolver sobre su modificación;

30.- Decretar el peso, ley y tipo de la moneda nacional y el patron de pesas y medidas;

31.- Establecer impuestos, contribuciones y otras car--gas públicas;

32.- Decretar empréstitos;

33.- Establecer mediante una ley los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios o subvenciones con fines de -- utilidad pública o como instrumento de desarrollo económico;

34.- Aprobar o improbar finalmente las cuentas de los gastos públicos, tomando por base los informes que rinda la Contraloría General de la República y las reservas que al efecto -- presente el Poder Ejecutivo;

35.- Reglamentar el pago de la deuda nacional, a iniciativa del Poder Ejecutivo;

36.- Ejercer el control supremo de las rentas públicas;

37.- Aprobar o improbar la enajenación de los bienes -- nacionales o su aplicación a usos públicos;

38.- Habilitar puertos y crear y suprimir aduanas;

39.- Crear puertos libres e iniciativa del Poder Ejecutivo;

40.- Reglamentar el comercio marítimo, terrestre y aéreo; y,

41.- Las demás que expresamente le confiera la ley.

Artículo 182.- El Poder Legislativo no podrá suplir o declarar el estado civil de las personas.

Artículo 183.- Las facultades del Poder Legislativo son indelegables, excepto las que se refieren a dar posesión a los altos funcionarios del Estado.

Capítulo III

PAGADURIA ESPECIAL DEL PODER LEGISLATIVO

Artículo 184.- La Pagaduría Especial del Congreso Nacional atenderá el pago de los sueldos de los Diputados, gastos de representación y viáticos de los mismos cuando proceda; al pago de los funcionarios y empleados del Poder Legislativo y a todos los gastos del ramo.

A efecto de cumplir lo preceptuado en el parrafo anterior, la Tesorería General de la República acreditará, por trimestres anticipados, los fondos necesarios para efectuar los pagos del ramo.

Artículo 185.- La Pagaduría Especial del Congreso Nacional estará bajo la dependencia inmediata de la Directiva del Cuerpo Legislativo o de la Comisión Permanente, en su caso, a quienes corresponde el nombramiento del Pagador. Este deberá caucionar su responsabilidad de conformidad con la ley.

Artículo 186.- La Directiva elaborará el Presupuesto del Poder Legislativo y lo remitirá oportunamente a quien corresponda para su inclusión en el Presupuesto General de Egresos e Ingresos.

Capítulo IV

DE LA COMISION PERMANENTE

Artículo 187.- El Congreso Nacional , por medio de su Directorio, antes de cerrar sus sesiones, nombrará de entre sus miembros nueve propietarios y nueve suplentes para que formen la Comisión Permanente.

Artículo 188.- Son atribuciones de la Comisión Permanente, en receso del Congreso Nacional:

1º- Emitir su reglamento Interior;

2º- Emitir dictamen y llenar los otros tramites en los negocios que hubieren quedado pendientes, para que puedan ser considerados en la siguiente legislatura;

3º- Preparar, para someter a la consideración del Congreso Nacional, los proyectos de reformas, a las leyes secundarias - del país, y los otros proyectos de leyes, que a su juicio demanden las necesidades del mismo;

4º- Recibir el Poder Ejecutivo los decretos emitidos en los últimos diez días de sesiones del Congreso Nacional, con sancción o sin ella;

5º- Recibir las denuncias de violaciones a ésta Constitución;

6º.- Mantener bajo su custodia y responsabilidad el Archivo del Congreso Nacional;

7º.- Publicar una edición de todos los decretos y resoluciones emitidos por el Congreso Nacional en sus anteriores sesiones, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del mismo;

8º.- Convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordinarias a excitativa del Poder Ejecutivo, o cuando la exigencia del caso lo requiera;

9º.- Recibir del Poder Ejecutivo la documentación e información relativas a convenios económicos, operaciones crediticias o empréstitos que dicho Poder proyecte celebrar, autorizar o contratar, a efecto de informar circunstanciadamente al Congreso Nacional en sus sesiones próximas;

10.- Presentar al Congreso Nacional un informe detallado de sus trabajos durante el periodo de su gestión;

11.- Elegir interinamente al Contralor, Subcontralor, Procurador y Subprocurador Generales de la República;

12.- Llamar a integrar a otros Diputados por falta de los miembros de la Comisión;

13.- Conceder permiso al Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional por más de treinta días;

14.- Nombrar las comisiones especiales que juzgue necesarias; y,

15.- Cualquier otra que expresamente le confiera la

74-
753

ley.

Artículo 189.- La Comisión Permanente se reunirá y actuará de conformidad con su Reglamento Interior.

Capítulo V

PODER EJECUTIVO

Organización

Artículo 190.- El Poder Ejecutivo se ejercerá por un ciudadano que se denominará Presidente de la República, y en su defecto, por uno de los tres Designados electos.

Artículo 191.- El Presidente de la República y tres Designados a la Presidencia serán electos conjunta y directamente por el pueblo, por simple mayoría de votos. La elección será declarada por el Consejo Nacional de Elecciones, y en su defecto, por el Congreso Nacional.

Artículo 192.- El periodo presidencial será de seis años y empezará el seis de junio.

Artículo 193.- El ciudadano que haya desempeñado a cualquier título la Presidencia de la República por un periodo constitucional o por más de la mitad del mismo, no podrá ser nuevamente Presidente de la República ni desempeñar dicho cargo bajo ningún título.

Artículo 194.- El funcionario que viole el artículo anterior o que proponga reformarlo, y los que lo apoyen directamente, cesarán por ese mismo hecho en el desempeño de sus respectivos cargos y queda-

rán inhabilitados para el ejercicio de toda función pública por el término de diez años a partir de la fecha de la violación, o de su intento de reforma.

Artículo 195.- Para ser Presidente de la República o Designado a la Presidencia se requiere:

- 1º- Ser hondureño por nacimiento;
- 2º- Ser mayor de treinta años;
- 3º- Estar en el goce de los derechos ciudadanos; y,
- 4º- Ser del estado seglar.

Artículo 196.- Además de lo establecido en el artículo 193 no pueden ser electos Presidente de la República para el periodo siguiente:

1º- El ciudadano que por cualquier título hubiere ejercido o ejerciera la Presidencia de la República dentro de los doce meses anteriores a la práctica de las elecciones;

2º- El Presidente del Congreso Nacional, los Secretarios Subsecretarios de Estado, Jefe de las Fuerzas Armadas, los Miembros del Consejo Nacional de Elecciones y los funcionarios que ha bienso sido elegidos por el Congreso Nacional ejercieron o hubieren ejercido su cargo dentro de los doce meses anteriores a la -- práctica de las elecciones; y,

3º- El cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad del Presidente de la República, Jefe de las Fuerzas Armadas, miembros del Consejo Nacional

de Elecciones o el ciudadano que por cualquier título hubiere ejercido o ejerciera la Presidencia de la República dentro de los doce meses anteriores a la práctica de las elecciones.

Artículo 197.- El Presidente de la República o el que haga sus veces no podrá ausentarse del territorio nacional por más de treinta días, sin permiso del Congreso Nacional o de su Comisión Permanente, en su caso.

Artículo 198.- En caso de falta absoluta del Presidente de la República, lo sustituirá el Designado llamado por el Congreso Nacional.

Pero si también faltaren de modo absoluto los tres Designados, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Consejo de Ministros, el que deberá convocar a elecciones presidenciales dentro de los quince días siguientes, las cuales se practicarán dentro de un plazo no menor de dos meses ni mayor de cuatro, contado desde la fecha de su convocatoria. Efectuada la elección, el Consejo Nacional de Elecciones, hará dentro de veinte días la declaratoria correspondiente, y el ciudadano electo tomará inmediatamente posesión del cargo, computándose su periodo presidencial desde el seis de junio siguiente.

En sus ausencias temporales el Presidente podrá llamar a cualquiera de los Designados para que lo sustituya. Si la ausencia fuere menor de treinta días podrá encargar del Poder Ejecutivo al -

Consejo de Ministros.

Artículo 199.- Si la elección del Presidente y Designados no estuviere declarada antes del seis de junio, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Consejo de Ministris que procederá en la forma -- prevenida en el párrafo segundo del artículo anterior.

Artículo 200.- La promesa de ley del Presidente de la República o de los sustitutos de éste será prestada ante el Presidente del -- del Congreso Nacional, si estuviere reunido; y en su defecto, ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. En caso de no -- poder prestarla ante los funcionarios antes mencionados, podrán -- hacerlo ante cualquier Juez de Letras o de Paz de la República.

Capítulo VI

ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 201.- El Presidente de la República tiene a su cargo la Administración General del país.

Son sus atribuciones:

1º- Dirigir la política del Estado y representarlo;

2º- Mantener ilesos la independencia, el honor de la República y la integridad e inviolabilidad del territorio nacional;

3º- Preservar la paz y seguridad interior de la República y repeler todo ataque o agresión exterior;

4º- Restringir el ejercicio de las garantías, de acuerdo con el Consejo de Ministros, con sujeción a lo establecido en esta Constitución;

5º- Dar a los funcionarios del Poder Judicial los auxilios y fuerzas que necesiten para hacer efectivas sus resolucio--nes;

6º- Ejercer el mando en Jefe de las Fuerzas Armadas en concepto de Comandante General;

7º- Velar en general por la conducta oficial de los funcionarios y empleados públicos, para seguridad y prestigio del Gobierno y del Estado;

8º- Declarar la guerra y hacer la paz en receso del Con

greso Nacional, el cual será convocado inmediatamente;

9º- Permitir o negar, en receso del Congreso Nacional, el tránsito por la República de tropas terrestres, navales o aéreas de otro país;

10- Permitir, previa autorización del Congreso Nacional de la República o de la Comisión Permanente, la salida a otro país de tropas del Ejército Nacional para prestar servicios en territorio extranjero de conformidad con tratados y convenios internacionales;

11- Organizar, dirigir y fomentar la educación pública; combatir el analfabetismo y procurar la difusión y perfeccionamiento de la instrucción agrícola, industrial y técnica en general;

12- Hacer que se recauden las rentas del Estado y reglamentar su inversión, con arreglo a la ley;

13- Autorizar las operaciones crediticias que hagan necesarias las fluctuaciones estacionales en los ingresos y egresos;

14- Publicar trimestralmente el estado de egresos de las rentas públicas;

15- Autorizar, en Consejo de Ministros, las operaciones crediticias a largo plazo, que el Estado celebre para financiar proyectos de desarrollo;

16- Dictar todas las medidas y disposiciones que estén a su alcance para promover un amplio desarrollo de la agricultura, como base de la riqueza de la Nación;

17- Ejercer la vigilancia y control de las instituciones

bancarias y demás establecimientos del créditos, conforme a la ley;

18- Presentar anualmente al Congreso Nacional, dentro de los últimos quince días del mes de septiembre de cada año, - por medio de la Secretaria de Estado respectiva, el proyecto de Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la administración pública;

19- Contratar empréstitos y someterlos a la consideración del Congreso Nacional, para su aprobación, modificación o - improbación;

20- Fomentar la inmigración con fines agrícolas, industriales y culturales, conforme a la ley;

21- Disponer de las fuerzas militares, organizarlas y distribuirlas, de conformidad con la ley;

22- Conferir grados militares desde Subteniente hasta Capitan, inclusive;

23- Velar porque el Ejército sea apolítico, esencialmente profesional, obediente y no deliberante;

24- Dirigir las relaciones exteriores. Nombrar los Representantes Diplomáticos y Funcionarios Consulares de la República que deberán ser hondureños por nacimiento, a menos que se trate de cargo ad-Honorem o de representaciones conjuntas de Honduras y otros Estados Centroamericanos;

25- Recibir a los Agentes Diplomáticos y expedir y reti

rar el exequátur a los Consules de naciones extranjeras;

26.- Celebrar tratados sometiénolos a la ratificación del Congreso Nacional, y verificar el canje o el deposito del -- instrumento de ratificación;

27.- Celebrar cualquiera otra clase de convenios de orden económico y cultural;

28.- Presentar en la instalación del Congreso Nacional ordinario una relación general de los actos de su administración y de los planes para el siguiente ejercicio fiscal;

29.- Organizar, orientar y realizar planes de fomento e integración económica, dirigidos al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo hondureño;

30.- Presentar por medio de los respectivos Secretarios de Estado, dentro de los quince primeros días de la instalación - del Congreso Nacional, en sus sesiones ordinarias, un informe o - memoria circunstanciada de cada uno de los Ramos de la Administración pública;

31.- Someter al Congreso Nacional, el decreto que expi-da sobre suspensión de garantías, como lo prescribe el Artículo - 107 de ésta Constitución;

32.- Participar en la formación de las leyes, presentan do proyectos al Congreso Nacional, por medio de los Secretarios - de Estado;

33.- Sancionar las leyes que emita el Congreso Nacional,

con ésta expresión: "Por tanto, Ejecútese". Usar el veto en los ca sos que corresponda, y promulgar las disposiciones legislativas que no necesiten sanción del Ejecutivo, con la siguiente expresión: -- "Por Tanto, Publíquese";

34.- Conceder y cancelar carta de naturalización conforme a la ley;

35.- Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, expidiendo los reglamentos y ordenes conducentes, sin alterar el es piritu de aquellas;

36.- Mantener la salubridad pública y mejorar las condicio nes higienicas del país y de los habitantes con la ámplitud y efica cia que la necesidad demande;

37.- Conferir condecoraciones de conformidad con la ley;

38.- Crear y suprimir servicios públicos;

39.- Conceder pensiones y gratificaciones de acuerdo con la ley;

40.- Velar por la armonía entre el capital y el trabajo;

41.- Indultar y conmutar las penas, conforme a la ley;

42.- Nombrar y separar libremente a los Secretarios y Sub secretarios de Estado y a los demás funcionarios y empleados, cuyo nombramiento no esté atribuido a otras autoridades;

43.- Nombrar los Presidentes y Vicepresidentes de los: - Banco Central, Nacional de Fomento y Municipal Autónomo;

44.- Convocar al Congreso Nacional a sesiones extraordina

rias, por medio de la Comisión Permanente o proponerle la prorro
ga de las ordinarias; y,

45.- Las demás que le confieran la Constitución y las
leyes.

Capítulo VII

SECRETARIAS DE ESTADO

Artículo 202.- Para la administración general del país, habrá - por lo menos, diez Secretarías de Estado, entre las cuales se - distribuirán los Ramos de Gobernación y Justicia, Despacho Presidencial, Relaciones Exteriores, Economía, Hacienda, Defensa - Nacional y Seguridad Pública, Salud Pública, Asistencia Social, Educación Pública, Comunicaciones y Obras Públicas, Trabajo y - Previsión Social, Recursos Naturales y las demás que de acuerdo con la ley se consideren necesarias.

Artículo 203.- Los decretos, reglamentos, acuerdos y providencias del Presidente de la República, deberán ser autorizados por los Secretarios de Estado en sus respectivos ramos o por los subsecretarios, en su caso; requisito sin el cual no tendrán fuerza legal. Los Secretarios de Estado y los Subsecretarios, serán solidariamente responsables con el Presidente de la República por los actos que autoricen. De las resoluciones tomadas en Consejo de Ministros, serán responsables los Ministros, presentes a menos que hubieren razonado su voto en contra.

Artículo 204.- Para ser Secretario y Subsecretario de Estado se requieren las mismas calidades que para ser Presidente de la República.

Artículo 205.- No pueden ser Secretarios y Subsecretarios de Estado:

1º- Los parientes del Presidente de la República dentro - del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;

2º- Los contratistas de obras, servicios o empresas públicas, que se costeen con fondos del Estado o del Municipio, sus fia-dores y los que de resultas de tales obras o servicios tengan recla-maciones pendientes de interés propio, así como los representantes o apoderados de concesionarios del Estado o de empresas que explo-ten servicios públicos; y,

3º- Los deudores morosos de la Hacienda Pública o Municipal.

Artículo 206.- El Congreso Nacional puede llamar a los Secretarios de Estado y estos deben contestar las interpelaciones que se les - hagan sobre asuntos referentes a la Administración Pública, salvo las relacionadas con actividades diplomáticas o militares, que se juzgaren necesaria la reserva.

Artículo 207.- El Presidente de la República convoca y preside el Consejo de Ministros, y actuará como Secretario, el Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia. Todas las resoluciones - del Consejo se tomarán por mayoría, y, en caso de empate, el Presi-dente tendrá doble voto. El Consejo se reunirá por iniciativa del Presidente, para tomar resolución en todos los asuntos que juzgue

de importancia nacional y para conocer de los casos que señala la ley.

Artículo 208.- Los Secretarios de Estado deben presentar anualmente al Congreso Nacional, dentro de los quince primeros días de su instalación, un informe de los trabajos realizados en sus respectivos Despachos.

Artículo 209.- Los Subsecretarios de Estado deben tener las mismas condiciones que los Secretarios y sustituirán a estos por ministerio de la ley.

Capítulo VIII

PODER JUDICIAL.- ORGANIZACION

Artículo 210.- El Poder Judicial se ejerce por una Corte Suprema de Justicia, por las Cortes de Apelaciones y los Juzgados que la ley establezca.

La Corte Suprema de Justicia residirá en la capital de la República y estará integrada por siete Magistrados propietarios y por cinco suplentes.

Artículo 211.- Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requiere: ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, hondureño por nacimiento, Abogado de los Tribunales de la República, mayor de treinta años, del estado seglar y haber desempeñado los cargos de Juez de Letras o Magistrado de las Cortes de Apelaciones durante un año, por lo menos, o ejercido la profesión por cinco años.

Artículo 212.- Para ser Magistrado de las Cortes de Apelaciones se requiere: ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, hondureño, Abogado, mayor de treinta años, del estado seglar y haber desempeñado el cargo de Juez de Letras durante un año, por lo menos, o ejercido la profesión por cinco años.

Artículo 213.- No pueden ser elegidos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia:

1º- Los que tengan cualquiera de las inhabilidades pa
ra ser Secretarios de Estado; y,

2º- Los parientes entre sí en el cuarto grado de con-
sanguinidad o segundo de afinidad.

Artículo 214.- Lo dispuesto en el inciso primero del artículo -
anterior es aplicable al nombramiento de los Magistrados de las
Cortes de Apelaciones; y la prohibición contenida en el inciso
segundo cuando tales nombramientos se refieran a Magistrados de
una misma Corte de Apelaciones.

Artículo 215.- En ningún juicio habrá más de dos instancias y el
Magistrado, o Juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de -
ellas, no podrá conocer en la otra, ni en casación, en el mismo
asunto, sin incurrir en responsabilidad.

Tampoco podrán ser Jueces en una misma causa los parien
tes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afini
dad.

Artículo 216.- La calidad de Magistrado o de Juez de Letras en -
funciones es incompatible con el ejercicio de la Abogacía y con
la de funcionario o empleado de los otros Poderes, excepto la de
Profesor de Enseñanza y la de Diplomático en misión transitoria.

Artículo 217.- El Período de los Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia será de seis años.

Artículo 218.- Los Jueces de Paz serán nombrados por los Jueces de Letras.

Artículo 219.- La administración de justicia es gratuita.

Artículo 220.- Los Magistrados, Jueces y Oficiales del Ministerio Público no podrán ser obligados a prestar servicio militar, ni a concurrir a ejercicios o prácticas militares.

Artículo 221.- Los Tribunales de Justicia podrán requerir el auxilio de la Fuerza Pública para el cumplimiento de sus resoluciones, y si les fuere negado o no lo hubiere disponible, lo exigirán de los ciudadanos. El que injustificadamente se negare a dar auxilio incurrirá en responsabilidad.

Artículo 222.- Es facultad privativa de las Cortes y demás Tribunales de Justicia juzgar y ejecutar lo juzgado. A ellos corres--ponde la aplicación de las leyes en casos concretos que legalmente se someten a su conocimiento.

Artículo 223.- La ley reglamentará la organización y atribucio--nes de los Tribunales, Juzgados y del Ministerio Público.

Artículo 224.- La Corte Suprema de Justicia será presidida por - uno de los Magistrados Propietarios. Elegirá su Presidente en la primera sesión, por el período de seis años.

Artículo 225.- Los cargos del Poder Judicial serán remunerados sin excepción.

Artículo 226.- Los Magistrados y Jueces no podrán ser separados de sus funciones sino en los casos de delito, en cuya averiguación hubiere recaído auto de prisión o declaratoria de reo, por mala conducta o por incumplimiento de las obligaciones de su -- cargo. Estas circunstancias serán calificadas por la Corte Su-- prema de Justicia mediante información sumaria y audiencia del interesado. Los traslados de los Jueces y Magistrados de las -- Cortes de Apelaciones serán regulados por la ley.

Artículo 227.- La ley proveerá lo conducente para el establecimiento de la carrera judicial y para asegurar la idoneidad, estabilidad e independencia de los Jueces, y establecerá las normas relativas a la competencia, organización y funcionamiento de los Tribunales en cuanto no esté previsto en esta Constitución.

Artículo 228.- La ley determinará lo relativo a la inspección del funcionamiento de los Tribunales, a los medios de atender a sus -- necesidades funcionales y administrativas y a la organización de los servicios auxiliares de la Justicia; todo ello sin menoscabo de la autonomía e independencia de los Jueces.

Artículo 229.- Créase el Tribunal Contencioso-administrativo. La ley reglamentará su organización, funcionamiento y atribuciones.

CAPITULO IX

ATRIBUCIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 230.- La Corte Suprema de Justicia, además de las atribuciones que la Ley le confiere, ejercerá las siguientes:

1º- Hacer su reglamento interior;

2º- Conocer de los delitos oficiales y comunes de los altos funcionarios de la República, cuando el Congreso Nacional los haya declarado con lugar a formación de causa;

3º- Conferir el Título de Abogado y autorizar a quienes lo hayan obtenido para el ejercicio del Notariado;

4º- Declarar que ha o no lugar a formación de causa contra los funcionarios y empleados que la ley determine;

5º- Conocer de las causas de presas, de extradición y de las demás que deban juzgarse conforme al Derecho Internacional;

6º- Conocer de los recursos de casación conforme a la ley;

7º- Conocer de los recursos de amparo y revisión con arreglo a la ley;

8º- Nombrar los Magistrados de las Cortes de Apelaciones y Cortes de Apelaciones del Trabajo, los Jueces de Letras, los del Trabajo, los Registradores de la Propiedad, y los Oficiales del Ministerio Público;

9^o.- Publicar la Gaceta Judicial;

10.- Admitir o no admitir la renuncia de los funcionarios de su nombramiento, y conceder licencias tanto a éstos como a sus propios miembros;

11.- Declarar la inconstitucionalidad de las leyes, en la forma y casos previstos en esta Constitución; y,

12.- Formar el proyecto de presupuesto del Poder Judicial y remitirlo en su oportunidad a quien corresponda, para su inclusión en el Presupuesto General de Egresos e Ingresos.

Capítulo X

PAGADURIA DE LOS FONDOS DE JUSTICIA

Artículo 231.- La Pagaduría Especial de Justicia atenderá el pago de los sueldos correspondientes a los funcionarios y empleados de la Administración de Justicia y los gastos del mismo ramo.

Artículo 232.- A efecto de cumplir lo preceptuado en el artículo anterior, la Tesorería General de la República, acreditará por trimestres anticipados, los fondos necesarios para hacer los pagos del ramo.

Artículo 233.- La Pagaduría Especial de Justicia estará bajo la dependencia inmediata de la Corte Suprema, a quien le corresponde el nombramiento del Pagador.

Dicho Pagador deberá caucionar su responsabilidad de conformidad con la ley.

TITULO VI

INCONSTITUCIONALIDAD Y REVISION

Capítulo Unico

Artículo 234.- Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, de acuerdo con lo que es establecen los artículos siguientes.

Artículo 235.- A la Corte Suprema de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia, y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas.

Artículo 236.- La declaración de inconstitucionalidad de una ley y la inaplicabilidad de las disposiciones afectadas por aquélla, podrán solicitarse por todo el que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo:

1º- Por vía de acción, que deberá entablar ante la Corte Suprema de Justicia;

2º- Por vía de excepción que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial; y,

3º- También el Juez o Tribunal que conociere en cualquier procedimiento judicial, podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad,

antes de dictar resolución. En este caso y en el previsto por el numeral anterior, se suspenderán los procedimientos, elevándose las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 237.- El fallo de la Corte Suprema de Justicia se referirá exclusivamente al caso concreto, y sólo tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado.

Artículo 238.- Ningún poder ni autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo las causas juzgadas en materia penal y civil que pueden ser revisadas en toda época en favor de los condenados a pedimento de éstos, de cualquiera otra persona, del Ministerio Público o del oficio.

Este recurso se interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia. La ley reglamentará los casos y la forma de revisión

TITULO VII

Capítulo Unico

DE LA FORMACION, SANCION Y PROMULGACION DE LA LEY

Artículo 239.- Tienen exolusivamente la iniciativa de ley los - Diputados, el Presidente de la República por medio de los Secre tarios dé Estado y la Corte Suprema de Justicia en asuntos de - su competencia.

Cuando el Congreso estime necesaria la emisión de una ley, podrá nombrar una Comisión de su seno para elaborar el pro yecto correspondiente.

Artículo 240.- Ningún proyecto de ley será definitivamente vota do sino después de tres deliberaciones efectuadas en distintos días, salvo caso de urgencia calificado por la mitad más uno de votos.

Artículo 241.- Todo proyecto de ley, al aprobarse por el Congre so Nacional, se pasará al Poder Ejecutivo, a más tardar dentro de tres días de haber sido votado, a fin de que éste le dé su sanción en su caso y lo haga promulgar como ley.

Artículo 242.- La sanción de la ley se hará con esta fórmula: - "Por tanto, Ejecútese".

Artículo 243.- Si el Poder Ejecutivo encontrare inconveniente para sancionar el proyecto de ley, lo devolverá al Congreso Nacional, dentro de diez días, con esta fórmula: "Vuelva al Congreso", exponiéndolo las razones en que funda su desacuerdo. Si en el término expresado no lo objetare, se tendrá como sancionado y lo -- promulgará como ley.

Cuando el Ejecutivo devolviera el proyecto, el Congreso Nacional lo someterá a nueva deliberación; y si fuere ratificado por dos tercios de votos, lo pasará de nuevo al Poder Ejecutivo, con ésta fórmula: "Ratificado constitucionalmente", y éste lo publicará sin tardanza.

Si el veto se fundare en que el proyecto de ley es inconstitucional, no podrá someterse a una nueva deliberación sin oír previamente el dictamen de la Corte Suprema de Justicia. Esta emitirá su informe en el término que el Congreso Nacional le señale. (

Artículo 244.- Cuando el Congreso Nacional vote un proyecto de ley al terminar sus sesiones y el Ejecutivo crea inconveniente sancionarlo, está obligado a darle aviso inmediatamente para que permanezca reunido hasta diez días, contados desde la fecha en que aquél recibió el Proyecto y no haciéndolo, comunicará su resolución a la Comisión Permanente.

Artículo 245.- No será necesaria la sanción, ni el Poder Ejecutivo podrá poner el veto en los actos y resoluciones siguientes:

1º- En las elecciones que el Congreso Nacional haga o declare, o en las renunciaciones que admita o deseche;

2º- En las declaraciones de haber o no lugar a formación de causa;

3º- En los decretos que se refieran a la conducta del Poder Ejecutivo;

4º- En los reglamentos que expida para su régimen interior;

5º- En los acuerdos para trasladar su residencia a -- otro lugar temporalmente y para suspender sus sesiones o para -- convocar a sesiones extraordinarias;

6º- En la Ley de Presupuestos; y,

7º- En los tratados o contratos que impruebe a el Congreso Nacional:

En éstos casos el Ejecutivo promulgará la ley con ésta fórmula:

"Por tanto, Publíquese".

Artículo 246.- Siempre que un proyecto de Ley que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, tenga por objeto de rogar o reformar cualquiera de las disposiciones contenidas en -- los Códigos de la República, no podrá discutirse sin oír la opi

nión de aquél Tribunal. La Corte emitirá su informe en el término que el Congreso Nacional le señale.

Esta disposición no comprende las leyes de orden político económico y administrativo.

Artículo 247.- Ningún proyecto de ley desechado total o parcialmente, podrá discutirse de nuevo en la misma legislatura.

Artículo 248.- La ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido veinte días de terminada su publicación el período oficial "La Gaceta".

Podrá, sin embargo, restringirse o ampliarse en la misma ley el plazo de que habla este artículo y ordenarse, en casos especiales, otra forma de promulgación.

TITULO VIII

Capítulo I

ECONOMIA NACIONAL

Artículo 249.- El Estado, por medio de sus Poderes Legislativos y Ejecutivos, con el auxilio de un organismo superior de planificación económica y demás organismos técnicos competentes, formulará y ejecutará el desarrollo económico y social que tendrá por objetivos esenciales alcanzar el más alto nivel de vida y el mayor grado de justicia social para todos los hondureños.

Las Secretarías del Estado y los organismos autónomos y semiautónomos y demás dependencias públicas, ajustarán sus programas, proyectos y actividades a la política económica y social que determine el Estado.

Artículo 250.- El sistema económico de Honduras debe inspirarse en principios de eficiencia en la producción y de justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacionales, fundamentándose en la coexistencia armónica de los factores productivos de las instituciones económico-privativas que caracterizan el sistema de libre empresa, de los sindicatos de trabajadores, de las empresas públicas, privadas y de economía mixta, de la propiedad privada y municipal y de otras asociaciones e institu-

ciones economicas reconocidas por la ley.

Artículo 251.- El ejercicio de las actividades economicas corresponde primordialmente a los particulares. Pero el Estado, por razones de orden público e interés social, podrá reservarse el ejercicio de determinadas industrias básicas, explotaciones y servicios de interés público y dictar leyes y medidas económicas, fiscales y de seguridad pública, para encauzar, estimular, supervisar, orientar y suplir la iniciativa privada, toda vez que tal intervención signifique aumentar la riqueza nacional, corregir el deficiente funcionamiento de la economía, o asegurar los beneficios económicos para el mayor número de los habitantes del país.

La acción del Estado dentro de la economía se manifestará por medio de la aplicación de medidas de política economica de finidas y contenidas en leyes de la República.

Artículo 252.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Estado reconoce y garantiza las libertades de consumo, ahorro e inversión, ocupación, iniciativa, comercio, empresas y otras libertades que tiendan a reforzar el sistema de libre comercio y competencia dentro del territorio nacional. La ley determinará los requisitos y forma en que tales libertades serán garantizadas.

Artículo 253.- La intervención del Estado en la economía tendrá por base razones de orden público e interés social, y por límite los derechos y libertades reconocidos por ésta Constitución.

Artículo 254.- Se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la Nación. - El Estado reglamentará su uso, goce y aprovechamiento, de acuerdo - con el interés social.

La reforestación del país y la conservación de los bosques, se declaran de urgencia nacional y de interés colectivo.

Artículo 255.- La ley determinará el régimen jurídico a que se sujetará la explotación, conservación y aprovechamiento de los Recursos Naturales.

El Estado podrá otorgar permisos, concesiones y contratos para la explotación de los recursos naturales de los períodos que - la ley determine. Estas concesiones, contratos y permisos caducarán por infracción o resistencia al cumplimiento de cualquier ley de la República.

Artículo 256.- El Estado patrocinará la modernización de la tecnología en las actividades agropecuarias, y manufactureras. Para éste - fin establecerá franquicias, subsidios y exenciones de crédito y - otros incentivos.

La ley dispondrá que se tomen medidas para establecer centros para la enseñanza de la formación de obreros y de directores industrializados.

Artículo 257.- El Estado fomentará la colonización de familias, tanto nacionales como extranjeras, exclusivamente agrícolas que vengan a laborar la tierra ociosa para aumentar la producción nacional.

El factor humano para la colonización debe ser joven físicamente.

Con el fin anterior el Estado celebrará contratos para hacer llegar al país familias agrícolas. La ley reglamentará su ingreso.

Artículo 258.- La ley podrá conceder un tratamiento preferencial o reservar determinados campos de inversión al capital hondureño en atención al interés nacional.

La industria y el comercio en pequeña escala, constituyen un patrimonio de los hondureños y su protección será objeto de una ley.

Los hondureños naturales que se dediquen a esas actividades gozarán de los mismos derechos de la ley antes mencionada, siempre y cuando en sus respectivos países de origen exista reciprocidad.

Artículo 259.- El derecho de emisión monetaria corresponderá exclusivamente al Estado, que lo ejercerá por medio del Banco Central de Honduras, institución autónoma de servicio público, que se regirá por su ley orgánica y sus reglamentos.

El régimen bancario, monetario y crediticio será determinado por la ley.

El Estado, por medio del Banco Central, tendrá a su cargo la formulación y desarrollo de la política monetaria, crediticia y cambiaria del país.

Artículo 260.- El Estado ordenará sus relaciones económicas, externas sobre las bases de la cooperación internacional, la integración económica centroamericana y el respeto a los tratados y

convenios que suscriba, en lo que no se opongan al interés nacional.

Artículo 261.- En la política agraria el Estado fomentará primordialmente el desarrollo de la propiedad rural y de tipo familiar que constituya una unidad económica de producción y el establecimiento de servicios de crédito y educación agrícola, favoreciendo de preferencia a las familias de hondureños.

La ley determinará las condiciones de adquisición y -- las obligaciones del adjudicatario, así como la dimensión de las unidades de producción que el Estado estime conveniente fomentar en cada zona, de acuerdo con las condiciones técnicas y económicas correspondientes.

Artículo 262.- La ley podrá establecer restricciones, modalidades o prohibiciones especiales para la adquisición, transferencia, - uso y disfrute de la propiedad estatal y municipal, por razones de orden público, de interés social o de conveniencia nacional.

Artículo 263.- Se prohíben los monopolios en favor de personas individuales o jurídicas de carácter particular.

El Estado limitará el funcionamiento de empresas que absorban o tiendan a absorber en perjuicio de la economía nacional, la producción de una o más ramas agropecuarias e industriales, o de una misma actividad comercial o de servicio.

Una ley especial determinará lo relativo a esta materia.

Artículo 264.- No se consideran monopolios particulares los privilegios temporales que se concedan a los inventores, descubridores o autores en concepto de derecho de propiedad científica, literaria o comercial, patentes de invención o marcas de fábrica.

Capítulo II

SECCION I

REGIMEN FINANCIERO

Artículo 265.- Las cargas fiscales, estatales o municipales, deben inspirarse en principios de uniformidad y equidad y tendran por base la capacidad tributaria del contribuyente.

Artículo 266.- El sistema impositivo municipal deberá armonizarse con el sistema impositivo estatal.

SECCION II

HACIENDA PUBLICA

Artículo 267.- Forman la Hacienda Pública:

- a) Todos los bienes muebles e inmuebles del Estado.
- b) Todos sus creditos activos; y,
- c) Sus disponibilidades liquidas.

Artículo 268.- Son obligaciones financieras del Estado:

- a) Las deudas contraídas para gastos corrientes o de inversión pública originadas en la ejecución del presupuesto; y,
- b) Las demás deudas reconocidas legalmente por el Estado.

Artículo 269.- La administración de los fondos públicos corresponde al Poder Ejecutivo.

Para la perfección, custodia y erogación de dichos fondos habrá un servicio general de tesorería. El Poder Ejecutivo, sin embargo, podrá delegar en el Banco Central las funciones de recaudador y depositario.

SECCION III

PRESUPUESTO

Artículo 270.- Son recursos financieros del Estado:

- a) Los ingresos que perciba por causa de impuestos, ta sas, contribuciones, regalías, donaciones o por cualquier otro - título;
- b) Los ingresos provenientes de empresas estatales; y,
- c) Los ingresos extraordinarios que provengan del cré- dito público o de otro concepto.

Artículo 271.- Todos los ingresos fiscales ordinarios, constituirán un sólo fondo. No podrá crearse ingreso ordinario alguno destinado a un fin específico.

No obstante, la ley podrá afectar ingresos al servicio de la deuda pública y disponer que el producto de determinados i impuestos y contribuciones generales, sea dividido entre la Ha-- cienda Nacional y la de los municipios, en proporciones o cantidades previamente señaladas.

La ley podrá, así mismo autorizar a determinadas empre sas estatales o mixtas para que perciban, administren o inviertan recursos financieros provenientes del ejercicio de las activida- des económicas que les corresponden.

Artículo 272.- El cálculo de los ingresos fiscales no podrá exce- der del monto que resulte de una estimación técnica de los ingre- sos corrientes probables, de los ingresos extraordinarios y del - superávit financiero del ejercicio inmediato anterior; para el - cual se vota el Presupuesto.

Artículo 273.- No podrá hacerse ningún compromiso o pago fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto. Cualquiera cantidad - exigida, invertida o pagada fuera del presupuesto y sin aprobación legal, hará civil y criminalmente responsable al funcionario que - ordene la exacción o gasto indebido; también lo será el ejecutor sino prueba su inculpabilidad.

Artículo 274.- El Poder Ejecutivo, bajo su responsabilidad y siempre que el Congreso Nacional no estuviere reunido, podrá contratar empréstitos, variar el destino de una partida autorizada o abrir créditos adicionales, para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública o para atender compromisos internacionales, de todo lo cual dará cuenta pormenorizada al Congreso Nacional en sus próximas sesiones:

En la misma forma se procederá cuando se trate de obligaciones a cargo del Estado provenientes de sentencias definitivas firmes para el pago de prestaciones laborales, cuando no existiere partida o esta estuviere agotada.

Artículo 275.- El Presupuesto será votado por el Poder Legislativo con vista del proyecto que presente el Poder Ejecutivo.

Artículo 276.- La Ley Organica del Presupuesto establecerá todo lo concerniente a la formación, ejecución y liquidación del Presupuesto.

Cuando al cierre de un ejercicio fiscal no se hubiere - votado el presupuesto para el nuevo ejercicio, continuará en vigencia el correspondiente al período anterior.

Artículo 277.- Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las - instituciones autónomas; las compras que se hagan con fondos de éstas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediando licitación, de acuerdo - con la ley.

Se exceptúan los contratos que tengan por objeto proveer a las necesidades ocasionadas por un estado de emergencia, y los que por su naturaleza no puedan celebrarse sino con persona determinada.

Artículo 278.- Habrá una Proveduría General de la República.

La ley determinará los requisitos de su organización, atribuciones y funciones.

Artículo 279.- Una oficina de Administración de Bienes Nacionales tendrá a su cargo el control y vigilancia de la propiedad estatal, muebles o inmuebles. La ley determinará su organización y atribuciones.

Artículo 280.- El Presupuesto General de la República comprende - los egresos e ingresos del Gobierno Central.

Los presupuestos de las Municipalidades, Distrito Central Departamentales y Locales, así como de las Instituciones Autónomas se regirán, por sus leyes y sus reglamentos correspondientes.

Artículo 281.- El Presupuesto General de la República, deberá integrarse por programas en concordancia con los planes de desarrollo económico y social aprobados.

Artículo 282.- La unidad del Presupuesto de la Administración Central es obligatoria. Los presupuestos que comprende contendrán todos los ingresos que constituirán, en cada uno de ellos, un fondo común destinado a cubrir los egresos para el ejercicio que hubieren sido autorizados.

Artículo 283.- Las asignaciones autorizadas en los presupuestos no obligan a la realización de los gastos, sino en la medida - que lo exijan los programas para los cuales se hubieren destinado.

Artículo 284.- La ley establecerá la relación de control y administración entre el Organismo Ejecutivo y las entidades descentralizadas del Estado.

Artículo 285.- Cuando haya necesidad de hacer gastos imprescindibles y no exista asignación presupuestaria para los mismos o existiendo sea insuficiente, estando en receso el Congreso Nacional, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, por Decreto, podrá establecer la asignación correspondiente determinando el ingreso que la cubra.

Corresponde al Congreso Nacional de la República legalizar los ingresos y egresos a que se refiere el presente artículo.

Artículo 286.- La Ley Orgánica del Presupuesto General del Estado regulará:

1º- La preparación, aprobación, control, ejecución, - valuación, liquidación y el ejercicio anual de los presupuestos.

2º- La integración de los presupuestos por medio de - programas que expresen las metas de realización, separando la -

inversión pública y su financiamiento.

32- Las normas de la administración financiera.

42- El régimen de traslados y modificación de asignaciones presupuestarias.

52- El uso de economías, ingresos extraordinarios y superavit, así como la cancelación de los déficit presupuestarios.

62- Los fondos privativos de los establecimientos públicos; y,

72- Los principios técnicos y los medios necesarios para mantener el equilibrio, control y efectiva administración de los - ingresos y de los egresos.

Capítulo III

FISCALIZACION

Artículo 287.- La fiscalización preventiva de la ejecución del Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la República, estará a cargo del Poder Ejecutivo, que deberá especialmente:

1º- Verificar la recaudación y vigilar la custodia, el compromiso y la erogación de fondos públicos; y,

2º- Aprobar todo egreso de fondos públicos de acuerdo con el Presupuesto.

La ley establecerá los procedimientos y alcance de ésta fiscalización.

Artículo 288.- La fiscalización preventiva de los organismos autónomos, del Distrito Central y de las Municipalidades, se ejercerá de acuerdo con lo determinen las leyes respectivas.

Artículo 289.- Para la fiscalización a posteriori de la Hacienda Pública habrá un organismo auxiliar del Poder Legislativo, denominado Contraloría General de la República que se regirá por su ley orgánica y tendrá independencia, funcional y administrativa. Sus atribuciones serán:

1º- Verificar la administración de los fondos y bienes públicos y glosar las cuentas de los funcionarios y empleados que los manejen;

2º- Fiscalizar la gestión financiera de las dependencias de la Administración Pública, instituciones autónomas y semiautónomas, los establecimientos gubernamentales, el Distri

to Central, departamentales y locales, las municipalidades y las entidades que se costeen con fondos del erario nacional o que reciban subvención o subsidio del mismo;

3º- Examinar la contabilidad del Estado y las cuentas que sobre la gestión de la Hacienda Pública rinda el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional e informar a éste del resultado de su examen; y,

4º- Ejercer las demás funciones que su ley orgánica - le señale.

Artículo 290.- La fiscalización a posteriori del Banco Central de Honduras, estará a cargo de la Contraloría General de la República que rendirá informe sobre la fiscalización al Congreso Nacional.

La fiscalización a posteriori de los institutos de - crédito que reciban fondos del Estado, en cuanto a la aplicación de tales fondos en operaciones o negocios estrictamente bancarios, se ejercerá por la Superintendencia de Bancos, y en los demás casos por la Controlaría General de la República.

Artículo 291.- La Controlaría General deberá rendir al Congreso Nacional dentro de los primeros cuarenta días de finalizado el - año económico un informe exponiendo la labor realizada durante - dicho año, con exposiciones de apiniones y sugerencias que considere necesarias para lograr mayor eficiencia en el manejo de los fondos y bienes públicos.

Este informe del cual simultáneamente se enviará copia al Presidente de la República, deberá ser publicado por la Con-

traloria General de la República en forma detallada o en resumen, por todos los medios de divulgación existentes, exceptuando lo relacionado con secretos militares u otros aspectos que pudieran afectar la seguridad nacional.

Artículo 292.- La Contraloria General de la República estará a cargo de un Contralor General y en su defecto de un Subcontralor General, elegidos por el Congreso Nacional, quienes tendrán las mismas inhabilidades y gozarán de iguales prerrogativas que los Diputados.

Artículo 293.- Para ser Contralor y Subcontralor Generales de la República se requiere: ser hondureño por nacimiento, mayor de --veinticinco años, ciudadano en ejercicio de sus derechos, de reconocida honradez y competencia, poseer el título de Abogado o Licenciado en Economía o Perito Mercantil y Contador Público.

Artículo 294.- Las funciones del Contralor y Subcontralor Generales se extenderán hasta dos años después de vencido el período -- que corresponda a los Poderes del Estado. No podrán ser reelectos para el período siguiente.

Artículo 295.- La organización y atribuciones de la Contraloria General de la República serán determinadas por la ley que regule su funcionamiento, la cual dispondrá también el procedimiento -- que se seguirá para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto.

Artículo 296.- El Contralor y Subcontralor Generales de la República serán responsables ante el Congreso Nacional de los actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones y solamente podrán ser removidos por éste cuando se les comprobare la comisión de irregularidades graves o delitos.

Artículo 297.- El Poder Legislativo cuando lo crea conveniente, mandará practicar auditaje a la Contraloría General de la República, nombrando para tal efecto, una comisión de su seno para que lo ordene a través de una firma de auditores independientes contratados por el Congreso Nacional.

Capítulo IV

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Artículo 298.- La Procuraduría General de la República representará los intereses del Estado; su organización y atribuciones serán determinadas por la ley.

Artículo 299.- El Procurador y Subprocurador Generales de la República, serán electos por el Congreso Nacional por un período de seis años, y no podrán ser reelectos para el período siguiente.

Artículo 300.- Para ser Procurador y Subprocurador Generales de la República, se requiere: ser hondureño de nacimiento, mayor de veinticinco años, ciudadano en el ejercicio de sus derechos, de reconocida honradez y competencia y poseer el título de Abogado.

Artículo 301.- El Procurador y Subprocurador Generales de la República tendrán las mismas prerrogativas e inhabilidades establecidas por esta Constitución para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 302.- Las acciones civiles y criminales que resultaren de las intervenciones fiscalizadoras de la Contraloría General de la República, serán ejercitadas por la Procuraduría General de la República, con excepción de las correspondientes a los Distritos --

117-
796

Central, Departamentales y Locales y las Municipalidades, que quedarán a cargo de los funcionarios que las leyes respectivas indiquen.

Capítulo V

INSTITUCIONES AUTONOMAS

Artículo 303.- Para la mayor eficiencia en la administración pública de los intereses nacionales, para garantizar sin fines de lucro, la satisfacción de las necesidades colectivas de servicio público, y, en general, para lograr la mayor efectividad de la administración pública, se reconocen los organismos autónomos con criterio descentralizado.

Los organismos autónomos forman parte del engranaje general de la administración, y el grado de autonomía de cada uno se determinará en la ley de su creación, según la naturaleza y propósito de sus respectivas funciones.

Artículo 304.- Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia en materia de gobierno y administración, y sus directores responden por su gestión.

Artículo 305.- Las instituciones autónomas existentes y las que se crearen, se regirán por sus leyes y sus reglamentos.

Artículo 306.- Las relaciones laborales de los servidores de dichas instituciones serán reguladas por el régimen jurídico aplicable a los trabajadores en general. La modalidad, contenido y alcances de dicho régimen se normarán por las leyes y reglamentos que rigen a

las respectivas instituciones y por las demás leyes pertinentes que les sean aplicables.

Artículo 307.- Para la discusión y aprobación de leyes que afecten a una institución autónoma, el Congreso Nacional oirá previamente la opinión de aquélla.

Artículo 308.- Para la creación de nuevos organismos autónomos, el Congreso Nacional resolverá por los dos tercios de votos de sus miembros.

Artículo 309.- Los organismos autónomos, estarán obligados a presentar al Gobierno, por medio de la Secretaría de Estado respectiva, los resultados líquidos de la actividad financiera de su ejercicio económico anterior. Asimismo deberán presentar al Gobierno Central, por el conducto correspondiente, un informe detallado del resultado de su actuación durante el mismo período.

Artículo 310.- Los resultados líquidos de la actividad financiera a que se refiere el artículo anterior, se incorporarán en la liquidación final del Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la Nación, con excepción de los del Banco Central de Honduras.

TITULO IX

Capítulo Unico

SERVICIO CIVIL

Artículo 311.- Los funcionarios y empleados de la administración pública están al servicio del Estado. No podrán prevalerse de -- sus cargos para hacer política eleccionaria.

Artículo 312.- Se establece la carrera administrativa.

La ley regulará el servicio civil, y en especial, las condiciones de ingreso a la Administración Pública; las promociones y ascensos a base de mérito y aptitud; la garantía de permanencia; los trasaldos, suspensiones y garantías; los deberes de los servidores públicos y los recursos contra las resoluciones -- que los afecten.

No estarán comprendidos en la carrera administrativa -- los funcionarios o empleados que desempeñen cargos políticos o -- de confianza que la ley determine.

Artículo 313.- Las disposiciones de este capítulo son extensivas a los funcionarios y empleados municipales.

Artículo 314.- Ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o -- más empleos o cargos públicos remunerados, excepto los facultativos que presten servicio en los hospitales y los que ejerzan cargos docentes.

TITULO X

CAPITULO UNICO

RESPONSABILIDAD

Artículo 315.- Todo funcionario público al tomar posesión de su cargo, hará la promesa siguiente: "Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes".

Artículo 316.- No obstante la aprobación que el Congreso dé a la conducta del Poder Ejecutivo, el Presidente de la República y los Secretarios y Subsecretarios de Estado podrán ser acusados por delitos oficiales.

El término de prescripción para esas acciones empezará a correr cinco años después de haber cesado en sus funciones el acusado.

Artículo 317.- Los funcionarios y empleados públicos que violaren cualesquiera de los derechosy garantías consignados en esta Constitución, serán responsables civil y criminalmente; no podrán obtener indulto ni conmuta en el periodo en curso ni en el siguiente.

Artículo 318.- Se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en

que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que -- normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa.

Para determinar dicho aumento, el capital y los ingresos del funcionario o empleado, el de su cónyuge y el de sus hijos, se considerarán en conjunto.

La declaración de bienes de los funcionarios y empleados, se hará de conformidad con la ley.

Cuando fuere absuelto un funcionario público a quien se hubiere declarado con lugar a formación de causa, volverá al ejercicio de sus funciones.

TITULO XI
Capítulo Unico

De las Fuerzas Armadas

Artículo 319.- Las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de caracter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, para mantener la paz, el orden público y el imperio de esta Constitución; velando sobre todo porque no se violen los principios de libre sufragio y de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.

Artículo 320.- Estarán sujetas a las disposiciones de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y a las demás leyes y reglamentos que regulen su funcionamiento. Cooperarán con el Poder Ejecutivo - en las labores de alfabetización, educación, agricultura, conservación de recursos naturales, vialidad, comunicaciones, sanidad, colonización y actividades de emergencia, siempre que el servicio no sufra menoscabo. Se establece el fuero de guerra para los delitos militares.

Artículo 321.- El servicio militar es obligatorio para todos los ciudadanos y será regulado por una ley especial.

En caso de guerra internacional, estarán obligados al servicio militar todos los hondureños hábiles, sin discriminación alguna.

Artículo 322.- Las Fuerzas Armadas estarán bajo el mando directo del Jefe de las Fuerzas Armadas; por su intermedio ejercerá el Presidente de la República la función constitucional que le corresponda respecto al Instituto Armado. Las funciones únicamente administrativas estarán a cargo de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa.

Artículo 323.- Las ordenes que imparta el Presidente de la República a las Fuerzas Armadas, por intermedio del Jefe de las mismas, deberán ser acatadas.

Artículo 324.- El Jefe de las Fuerzas Armadas deberá ser un oficial general o superior, hondureño de nacimiento, y será electo por el Congreso Nacional de una terna propuesta por el Consejo Superior de la Defensa Nacional. Durará en sus funciones seis años, sólo podrá ser removido de su cargo por el Congreso Nacional cuando hubiere sido declarado con lugar a formación de causa por dos tercios de votos de sus miembros, y en los demás casos previsto por la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.

No podrá ser nombrado Jefe de las Fuerzas Armadas ningún pariente del Presidente de la República o de sus sustitutos legales, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Artículo 325.- El Jefe de las Fuerzas Armadas, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso Nacional la siguiente promesa: "A mi nombre, y a nombre de las Fuerzas Armadas de Hondu--ras, solemnemente prometo que jamás nos convertiremos en instru--mentos de opresión; que aunque provinieran de nuestros superio--res jerarquicos, no acataremos órdenes que violen la letra o el espíritu de la Constitución; que defenderemos la soberanía nacio--nal y la integridad de nuestro territorio; respetaremos los dere--chos y libertades del pueblo; mantendremos la apoliticidad y dig--nidad profesional de las Fuerzas Armadas, y defenderemos la efec--tividad del libre sufragio ciudadano y la alternabilidad en el -ejercicio de la Presidencia de la República."

Artículo 326.- En caso de ausencia temporal del Jefe de las Fuerzas Armadas, desempeñará sus funciones el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. En caso de ausencia o falta definitiva,- El Consejo Superior de la Defensa Nacional propondrá, dentro de los 15 días siguientes, la terna de candidatos para que el Con--greso Nacional elija a quien ha de llenar la vacante por el res--to del periodo para el cual aquel hubiere sido electo.

Mientras se produce la elección, llenará la vacante el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Artículo 327.- El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas es un orga--nismo de la Jefatura de las mismas y tendrá las funciones que la ley indique.

Artículo 328.- El Consejo Superior de la Defensa Nacional será un organo de consulta en todos los asuntos relacionados con las Fuerzas Armadas, y actuará como Tribunal Superior de las mismas, en -- los asuntos que se sometan a su conocimiento y decisión.

Artículo 329.- El Consejo Superior de la Defensa Nacional estará integrado por el Jefe de las Fuerzas Armadas, el Secretario de Estado de Defensa Nacional, el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, los Jefes de Zonas Militares, los Comandantes de los Cuerpos Especiales y por cualquier otro Oficial en servicio activo en los casos expresamente señalados por la Ley Constitutiva de las - Fuerzas Armadas.

Tendrá su asiento ordinario en la ciudad capital, pudien do reunirse en cualquier lugar de la República, cuando las circunstancias así lo requieran, y podrá ser convocado por el Presidente de la República, por el Jefe de las Fuerzas Armadas, por el Secretario de la Defensa Nacional y por cualquier Oficial en servicio activo, en los casos expresamente indicados en la Ley Constituti-va de las Fuerzas Armadas.

Artículo 330.- Los nombramientos de Jefes de Zona, Comandantes de Unidad y demás nombramientos militares, los hará el Jefe de las - Fuerzas Armadas por medio de la Secretaría de Defensa Nacional. - Los de orden administrativo, los del Estado Mayor Presidencial y Guardia Presidencial, los hará el Presidente de la República por medio de la misma Secretaría.

Artículo 331.- El territorio de la República se dividirá en Zonas Militares para la mayor eficiencia del servicio.

Cada Zona estará bajo el mando de un Jefe de Zona, y -- funcionará de acuerdo con las disposiciones de la ley respectiva.

Artículo 332.- Los **grados** militares solo se adquieren por riguroso ascenso y deberán otorgarse atendiendo al tiempo de servicio, capacitación de servicios especiales prestados a la Patria.

Los militares no podrán ser privados de sus grados, honores y pensiones en otra forma que en la fijada por la ley.

Los ascensos desde subteniente hasta Capitán, inclusive, serán otorgados por el Presidente de la República a propuesta del Jefe de las Fuerzas Armadas. Los ascensos desde Mayor hasta General de División inclusive, serán otorgados por el Congreso nacional a propuesta conjunta del Presidente de la República y el Jefe de las Fuerzas Armadas.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas emitirá dictamen en cada ascenso solicitado.

Artículo 333.- En la Escuela Militar de Honduras se educarán los Caballeros Cadetes aspirantes a Oficiales de las Fuerzas Armadas. La Secretaría de la Defensa tendrá a su cargo la organización de dicha Escuela y cubrirá los gastos que requiera su funcionamiento.

La Jefatura de las Fuerzas Armadas organizará y supervisará Centros Especiales de capacitación de las diferentes armas y servicios.

Artículo 334.- La administración de los fondos asignados al Ramo de Defensa, estará a cargo de la Pagaduría de las Fuerzas Ar madas.

Artículo 335.- Para la protección, bienestar y seguridad social de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, crease la Institución de Previsión Militar, la cual se organizará y funcionará - de acuerdo con la ley que se emita al efecto.

TITULO XII**DEL REGIMEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL****CAPITULO I****DEL REGIMEN DEPARTAMENTAL**

Artículo 336.— Para la Administración Pública se dividen el territorio nacional en Departamentos, cuya creación y límites decretará el Congreso Nacional.

Artículo 337.— Los funcionarios departamentales deberán ser hondureños por nacimiento, mayores de veinticinco años y ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Los empleados deberán ser mayores de dieciocho años y tendrán las demás calidades señaladas para los funcionarios.

CAPITULO II

DEL REGIMEN MUNICIPAL

Artículo 338.- Para la administración, los departamentos se dividen en municipios autónomos representados por municipalidades -- electas por el pueblo, en la forma que la ley disponga.

El Banco Municipal autónomo tendrá como función principal procurar la autonomía económica de las municipalidades.

El Distrito Central, formado por los municipios de Tegucigalpa y Comayagüela, se regirá por su ley especial.

Las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, conjuntamente constituyen la capital de la República.

Artículo 339.- La ley reglamentará la organización y atribuciones de las municipalidades. Estas atribuciones serán únicamente económicas y administrativas.

Artículo 340.- En el ejercicio de sus funciones privativas, las corporaciones municipales serán absolutamente independientes de los Poderes del Estado, sin contrariar en ningún caso las leyes generales del país; y serán responsables ante los Tribunales de Justicia por los abusos que cometan individual o colectivamente.

Artículo 341.- Las municipalidades nombrarán a los empleados de su dependencia que costeen con sus propios fondos.

TITULO XIII

CAPITULO UNICO

DE LA REFORMA

Artículo 342.- Las reformas a esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto el artículo o artículos que hayan de reformarse, debiéndose ratificarse por la siguiente Legislatura Ordinaria, por igual número de votos, para que entre en vigencia.

En ningún caso la reforma de los artículos 4, 192, 193, 196 y el presente, podrá realizarse por el procedimiento anterior.

TITULO XIV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 343.- Todas las leyes, decretos, reglamentos, ordenes y demás disposiciones que estuvieren en vigor al promulgarse esta Constitución, continuará observandose en cuanto no se opongan a ella, mientras no fueren legalmente derogados o modificados.

Artículo 344.- Para el periodo de 1.965 a 1.971, serán Presidente Constitucional de la República y Designados a la Presidencia, los ciudadanos elegidos por esta Asamblea Nacional Constituyente.

Artículo 345.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador y Subprocurador Generales de la República, el Jefe de las Fuerzas Armadas, Contralor y Subcontralor Generales de la República y demás funcionarios elegidos por esta Asamblea, ejerceran sus funciones constitucionalmente, durante el mismo periodo a que se refiere el artículo anterior, con excepción de Contralor y Subcontralor Generales, que terminarán su periodo de acuerdo con la disposición constitucional respectiva.

Artículo 346.- Promulgada y jurada esta Constitución, en sesión pública y solemne, y recibida la promesa de ley a los funcionarios a que se refieren los dos artículos que anteceden, la Asamblea Nacional Constituyente clausurará sus sesiones convirtiendose en Congreso Nacional Ordinario para el periodo constitucional de 1965 a 1.971, que se iniciará excepcionalmente el seis de junio del presente año, y clausurará el 19 de mayo de 1.971.

ARTICULO FINAL

Artículo 347.- La presente Constitución entrará en vigencia el seis de junio del presente año, quedando derogada en esta fecha la emitida el diecinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y siete.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en Tegucigalpa, capital de la República de Honduras, a los tres días - del mes de junio de mil novecientos sesenta y cinco.

MARIO RIVERA LOPEZ
Presidente

Diputado por el Departamento de Francisco Morazan.

VIRGILIO URMENETA RAMIREZ
Vicepresidente

Diputado por el Departamento de Yoro.

MANUEL LUNA MEJIA
Secretario

Diputado por el Departamento de Copán.

HOSTILIO LOBO CALIZ
Secretario

Diputado por el Departamento de Olancho

SAMUEL GARCIA Y GARCIA
Prosecretario

Diputado por el Departamento de Cortés.

LUIS MENDOZA FUGON
Pro-Secretario

Diputado por el Departamento de Valle.

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA:

Tulio Fernando Martinez Silva
Azis Salomón Richmawy
Celestino Canales Acosta

DEPARTAMENTO DE COLON:

Ramón Lobo Sosa

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA:

Manuel Pereira Calix

José Angel Ulloa D.

Amado Petit Hernández

DEPARTAMENTO DE CORTES:

Teodoro Rodriguez B.

Roberto Villela Ch.

Pedro Barahona Castillo

Pablo L. Nuila P.

Julio Galdámez Zepeda

Odilón Ayestas L.

DEPARTAMENTO DE COPAN:

Rodolfo E. Interiano

Arturo Rendón Pineda

Angel Augusto Morales V.

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA:

Jesús María Herrera Regalado

Carlos Humberto Rodríguez Williams

Oscar Jacabo Cárcamo Tercero

Adalberto Abadís Sánchez

Antonio Orteiz Sandoval

DEPARTAMENTO DE EL PARAISO:

J. Antonio Pérez Isaguirre Santiago Valladares Velásquez

Agusto Rodas Valle José Mateo Sierra Fonseca

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN:

René Sagastume Castillo Dora Agustina Henriquez Giron

Roberto Martinez Ordoñez Hector Orlando Gomez Sisneros

Antonio Vázquez de Elena J. Antonio Gomez Milla

Gerardo Fortin Pinel J. Antonio Molina Cisneros.

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS:

Duval Hoylock Kilton

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA:

Raúl Giron Ayala Gualberto Giron Palacios.

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA:

Supurgeon Miller Phillips.

DEPARTAMENTO DE LA PAZ:

José Humberto Hernandez Juarez Roberto Suazo Cordova.

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA:

Jacobo Hernandez Gómez José Iglesias Gurmán

Marco Tulio Rodriguez P. Gustavo Molina Serrano.

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE:

Miguel A Chinchilla Solis. Rafael Aguilar A.

DEPARTAMENTO DE OLANCHO:

Luis Alonzo Mazzoni Obando Alfonso Meza Galeno

Carlos miguel Muños y Muños.

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA:

Jorquin Mdina Alvarado Gustavo Madrid Flores

Arnoldo Rodriguez Valle. J. Efrain Bu Girón

Francisco Castellon C.

DEPARTAMENTO DE VALLE:

MAR GUERRA FLORES Enrique Rodriguez Zuniga.

DEPARTAMENTO DE YORO:

José Alvarado Montoya Rodriguez Andres Alvarado Puerto.

José Arnoldo Villatoro y Villatoro.

Al Poder Ejutivo;

Por lo tanto Publíquese.

Tgucigalpa D.C. 3 de junio de 1965.

Oswaldo Lopez A.

El Secretario de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores. Por la ley.

Carlos h. Reyes.

El Secretario de Estado en los Despachos de Defensa Nacional y Seguridad Pública.

Salomón Ciliézre Veles.

El Secretario de Estado en los Depachos de Educación.

Rafal Bardales B.

El Secretario de Estado en los Depachos de Economía y Hacienda.

Manuel Acosta Bonilla.

El Secretario de Estado en los Depachos de Comunicaciones y Obras Públicas. Por la ley.

Ernesto Crespo.

El Secretario de Estado en los Despachos de Sanidad pública y Asistencia Social.

J. Antonio Peraza.

El secretario de Estado en los Despachos de Trabajo
y Previsión Social.

Amado H. Nuñez

El Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales.

Julio C. Pineda.

INDICE

ACTA DE INDEPENDENCIA DE 1.821.	Pág. 355
DECRETO DE INDEPENDENCIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE 1 JULIO 1.823	" 359
DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE 1 DE OCTUBRE DE 1.823, RATIFICANDO EL DE 2 DE JULIO DE 1.823.	" 362
DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE de 2 DE JULIO de 1.823, DECLARANDOSE LEGITIMAMENTE CONSTITUERA Y DIVIDIENDO LOS PODERES.	" 364
DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE 21 AGOSTO de 1.823, ANULANDO LOS ACTOS DEL IMPERIO MEXICANO.	" 365
DECRETO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE 5 MAYO 1.824; MANDANDO REUNIR LAS PRIMERAS ASAMBLEAS DE LOS ESTADOS.	" 366
DECRETO DE 31 ENERO DE 1.824, DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, PARA QUE LOS HIJOS ILEGITIMOS PUEDA OBTENER EMPLEOS Y BENEFICIOS FERTILIAS PATRIOTICAS.	" 367 " 370
CONSTITUCION FEDERAL DE 1.824.	" 371
CONSTITUCION DE HONDURAS DE 1.825.	" 304
" " 1.831.	" 400

CONSTITUCION DE HONDURAS DE 1.839.**Pág. 418**

"	"	1.848.	"	438
"	"	1.865.	"	458
"	"	1.873.	"	487
"	"	1.880.	"	499
"	"	1.894.	"	524
"	"	1.906.	"	538
"	"	1.924.	"	621
"	"	1.957.	"	645
"	"	1.965.	"	685